GIULIANO PROCACCI

HISTORIA GENERAL DEL SIGLO XX

Crítica

GIULIANO PROCACCI

HISTORIA GENERAL DEL SIGLO XX

CRÍTICA
BARCELONA

Primera edición en Serie Mayor rústica: enero de 2005

Creative Commons

Título original: *Storia del XX secolo*

Traducción castellana de Guido M. Cappelli, con la colaboración de Laura Calvo

Diseño de la cubierta: Joan Batallé
Fotocomposición: Pacmer S. A.

© 2000, by Paravia Bruno Mondadori
© 2001, de la traducción castellana para España y América:
EDITORIAL CRÍTICA, S. L., Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
e-mail: editorial@ed-critica.es
http://www.ed-critica.es

ISBN: 84-8432-593-8
Depósito legal: B. 44.170-2004
Impreso en España
2005. - A & M Gràfic, S. L., Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Los contenidos de este libro pueden ser
reproducidos en todo o en parte, siempre
y cuando se cite la fuente y se haga con
fines académicos y no comerciales

Índice

PRIMERA PARTE
De la primera guerra mundial a la gran depresión

1. La primera guerra mundial 9
1.1. Sobre el problema de los orígenes 9
1.2. De la guerra relámpago a la guerra total 14
1.3. El punto de inflexión de 1917 16
1.4. Los tratados de paz 22

2. Estados Unidos en los años veinte 26

3. La Unión Soviética de Lenin a Stalin 42
3.1. La revolución de Octubre 42
3.2. El comunismo de guerra 46
3.3. Los primeros años de la NEP 50
3.4. El ascenso de Stalin 57

4. Inglaterra y la Commonwealth en los primeros años veinte . . . 64
4.1. Los problemas internacionales 64
4.2. Los problemas internos 69

5. La Europa continental en los primeros años veinte 74
5.1. Caracteres generales de la posguerra en Europa 74
5.2. La posguerra en la Europa central y oriental 78
5.3. El advenimiento del fascismo 81
5.4. La República de Weimar de 1919 a 1923 88

5.5. La Francia de la posguerra 93
5.6. De la crisis del Ruhr a la mejora de Locarno 97

6. Una efímera prosperidad 106
6.1. El caso inglés 106
6.2. El caso alemán 109
6.3. El caso italiano 112
6.4. El caso francés 117

7. El mundo islámico 122

8. El mundo indio 129

9. El área del Pacífico 134

10. América Latina en los años veinte 146

SEGUNDA PARTE
De la gran depresión a la segunda guerra mundial

11. La gran depresión 155
11.1. Los orígenes 155
11.2. La crisis en el centro 159
11.3. La gran depresión en la periferia 172
11.4. Las consecuencias de la depresión: un mundo más dividido 181

12. Los Estados Unidos e Inglaterra en los años treinta 190
12.1. Los Estados Unidos del *New Deal* 190
12.2. Inglaterra en los años treinta 200

13. La Alemania nazi 205

14. La URSS de Stalin y el estalinismo 216

15. El fracaso de la seguridad colectiva 228

16. Los frentes populares y la guerra civil española 235

17. La agresión japonesa a China y sus repercusiones internacionales 246

18. Hacia la guerra 252
18.1. De la *Anschluss* a Múnich 252
18.2. De Múnich a la guerra 258

19. La segunda guerra mundial 266
19.1. El primera año de guerra 266
19.2. De la guerra europea a la guerra mundial 269
19.3. Las estrategias de los dos bloques contrapuestos 272
19.4. El gran viraje 276
19.5. Las relaciones entre los Aliados y la cuestión del segundo frente 278
19.6. La Resistencia 281
19.7. De la campaña de Italia al final de la guerra en Europa 288
19.8. De Teherán a la victoria en Europa 292
19.9. El final de la guerra en el Pacífico 297

TERCERA PARTE
La era del bipolarismo y del desarrollo

20. El mundo después de la guerra 303
20.1. Desolación y esperanzas de posguerra 303
20.2. Norteamérica y el mundo 310
20.3. Los acuerdos de Bretton Woods 312
20.4. Las relaciones anglo-americanas en la inmediata posguerra . . . 315
20.5. La URSS y el mundo 316

21. La guerra fría 321
21.1. La cuestión de la bomba 321
21.2. Primeros síntomas europeos de la guerra fría 323
21.3. La doctrina Truman 325
21.4. El plan Marshall y la constitución del Cominform 328

22. Del bloqueo de Berlín a la guerra de Corea 333
22.1. El bloqueo de Berlín 333
22.2. El área del Pacífico en la posguerra 336
22.3. La nueva revisión de la política exterior norteamericana y el principio de la carrera armamentística 341
22.4. La guerra de Corea 343
22.5. Repercusiones internacionales de la guerra de Corea 347

23. Los altibajos de la «distensión» 352
23.1. Relevos en Washington y Moscú 352
23.2. La breve escampada de la distensión 354
23.3. El XX Congreso del PCUS y la desestalinización 356
23.4. Los países satélites y la insurrección de Hungría 360

24. Europa occidental y Japón en los años cincuenta 367
24.1. La reconstrucción en Europa occidental 367
24.2. El nacimiento de la CEE y el principio de la integración económica europea 370
24.3. Japón en los años cincuenta 373

25. Nuevos protagonistas y países emergentes 379
25.1. China y la India: convergencias y divergencias 379
25.2. La conferencia de Bandung 388
25.3. La guerra de Suez y la descolonización 393
25.4. América Latina en los años cincuenta 397

26. De la crisis de Berlín a la crisis de Cuba 406
26.1. El *Sputnik* y la nueva fase de la carrera armamentística 406
26.2. La crisis de Berlín 408
26.3. La «nueva frontera» de J. F. Kennedy 411
26.4. La crisis de Cuba 413

27. Europa occidental en los años sesenta 417
27.1. Los países vencidos 418
27.2. Los países vencedores 422
27.3. Los demás países de Europa occidental 428

28. Europa oriental en los años sesenta 430
28.1. El fracaso del experimento kruscheviano y la ruptura con China 430
28.2. Los países satélites de 1956 a la primavera de Praga 436

29. Los años de Vietnam 441
29.1. Los Estados Unidos de la *Great Society* 441
29.2. La guerra de Vietnam 444
29.3. La evolución de las relaciones interatlánticas en los años sesenta 447
29.4. El sesenta y ocho 452

30. Los países en vías de desarrollo en los años sesenta..... 455
30.1. La revolución cultural china 455
30.2. América Latina en los años sesenta..... 457
30.3. La crisis del movimiento de los no alineados y la aparición de las diferencias Norte-Sur 463
30.4. La edad del oro y del bipolarismo 469

CUARTA PARTE
Interdependencia y multipolarización

31. Estados Unidos, de la presidencia de Nixon a la presidencia de Carter 479
31.1. El final de los acuerdos de Bretton Woods 479
31.2. La presidencia de Nixon y la distensión 481
31.3. La presidencia de Carter 487

32. Los países del socialismo real 491
32.1. La Unión Soviética 491
32.2. Los países satélites 497

33. Europa occidental en los años setenta 503

34. El área del Pacífico en los años setenta 515

35. Los países del Sur en los años setenta 523
35.1. El subcontinente indio 524
35.2. Los países de Oriente Medio y el Magreb 527
35.3. Los países africanos..... 531
35.4. Los países de América Latina 532
35.5. El problema Norte-Sur 535

36. Estados Unidos y Europa occidental en los años ochenta y noventa: convergencias y divergencias 538
36.1. La presidencia de Reagan y la segunda guerra fría 538
36.2. La Comunidad Europea 545
36.3. La Inglaterra de Margaret Thatcher 547
36.4. La Europa continental 550

37. El fracaso de la *perestroika*..... 559
37.1. El ascenso del Gorbachov y la *perestroika* 559
37.2. Hacia el final de la segunda guerra fría 562

37.3. La crisis de la *perestroika* 566
37.4. La reunificación alemana 568
37.5. La disgregación de la URSS 570

38. El área del Pacífico en los años ochenta y noventa 577

39. Los países del Sur en los años ochenta y noventa 585
39.1. El subcontinente indio 585
39.2. Los países de Oriente Medio y del Magreb 587
39.3. El África subsahariana 591
39.4. América Latina 593
39.5. Algunas breves consideraciones en forma de epílogo 598

Indicaciones bibliográficas 603

Índice onomástico 617

Primera parte

De la primera guerra mundial a la gran depresión

1

La primera guerra mundial

I.I. SOBRE EL PROBLEMA DE LOS ORÍGENES

De sobra es conocido que el estallido de la primera guerra mundial marcó el final de un largo ciclo histórico, el transcurrido entre el Congreso de Viena y el atentado de Sarajevo. Exactamente un siglo, a lo largo del cual la que Karl Polanyi llamó la «paz de los cien años» había quedado asegurada por un sistema que tenía su centro en Europa y su periferia en las zonas de influencia y en las colonias de las distintas potencias europeas y que funcionaba según las reglas que él mismo se había fijado. En el plano político la regla era la del equilibrio entre las grandes potencias, del cual era guardiana y garante Inglaterra; en el plano económico, el principio de la autorregulación del mercado, del cual era expresión y garantía la convertibilidad de las monedas sobre la base del patrón oro; en el plano intelectual, el de la unidad de la comunidad científica y de la libre circulación de las ideas y de los descubrimientos. En Europa se viajaba sin pasaporte y se realizaban los pagos en metálico. El papel moneda no se hará corriente hasta la guerra. Todo ello no iba a sobrevivir al conflicto que estalló en Sarajevo y no hay duda, por lo tanto, de que el año de 1914 marca un punto de inflexión no sólo en la historia de Europa, sino del mundo contemporáneo, y representa un acontecimiento después del cual nada fue igual a lo que existía anteriormente. Son éstas las razones por las que he considerado que era preciso omitir la narración de los primeros quince años del siglo para comenzar con la primera guerra mundial.

Pero quiero aclarar que la decisión de iniciar mi exposición con aquel fatídico julio de 1914 no implica en absoluto que yo comparta la opinión, recientemente expresada, de que dicha guerra habría sido «desencadenada por un accidente» y que, por consiguiente, represente «uno de los eventos más

enigmáticos de la historia moderna» (Furet, 1995). Tampoco deseo apropiarme de la afortunada fórmula del «siglo breve». Más bien, quiero expresar mi convicción de que un análisis de los orígenes de la primera guerra mundial no puede limitarse a los primeros catorce años del siglo XX, que no representan más que los últimos coletazos del siglo XIX, o a una *belle époque* que probablemente fue tal únicamente en el recuerdo, en la añoranza o en el remordimiento de quienes la vivieron, sino que debe remontarse más atrás en el tiempo y ser más profundo. Debemos, pues, hacer mención de sus precedentes y de sus raíces. Me limitaré a algunas consideraciones sumarias.

La fórmula de la paz de los cien años también tiene su revés de la moneda. De hecho, si se amplía el punto de mira más allá de los confines europeos, el cuadro se hace menos tranquilizador. La guerra civil americana se saldó con seiscientos mil muertos, la revolución mexicana, con dos millones (Wolf, 1969, p. 66), y la guerra que, a mediados del siglo XIX, enfrentó a Argentina, Brasil y Uruguay, aliados y apoyados por Inglaterra, con Paraguay costó a este último la pérdida de las cuatro quintas partes de su población masculina, un auténtico genocidio. Y no hay estadística que pueda medir los abismos de atraso y de ignorancia, el número de violencias, de saqueos, de incestos, de infanticidios, que eran práctica habitual en esos «campos del Señor» donde vivía, hasta tiempos recientes, el ochenta por ciento de la humanidad. Incluso la civilizada Europa tuvo sus manchas: los «horrores búlgaros», el racismo, tal y como se manifestó, por ejemplo, en la campaña que, a principios de siglo, fue promovida a raíz de la rebelión de los *boxers* contra el «peligro amarillo», y a la que se sumó también el mismo emperador Guillermo II. Por no hablar del antisemitismo, que siempre ha existido en las entrañas de la vieja Europa, pero que se hizo más virulento durante la gran crisis agraria: en los años de Johann Strauss hijo y de la Secesión fue alcalde de Viena Karl Lüger, el fundador del Partido Cristiano Social, quien no sólo en sus manifestaciones propagandísticas, sino también en su quehacer como administrador, tuvo un talante claramente discriminatorio para con la comunidad judía. Pocos años después se celebraba en Francia el proceso Dreyfus. En otros lugares se tomaban medidas más expeditivas: en ciertos países de Europa oriental los pogromos eran episodios frecuentes.

Aquí se podría matizar que la intolerancia y la violencia siempre han existido, pero también es cierto que éstas no siempre han contribuido a alimentar un incendio tan extenso como el que prendió en Europa y en el mundo entre 1914 y 1918. Intentemos, pues, acercarnos más al problema específico de los orígenes de la primera guerra mundial. Sobre este argumento se han escrito miles de páginas y se han propuesto distintas interpretaciones. Hay quien ha llamado la atención sobre la carrera de rearme y sus automatismos, y en especial sobre el rearme naval en el que se vieron envueltas Alemania e Inglaterra; otros han insistido en la rivalidad ruso-aus-

tríaca en los Balcanes; otros, en la que enfrentó a las grandes potencias coloniales en el reparto del mundo en zonas de influencia; otros, en los factores internos que animaron a algunos gobiernos a considerar una guerra rápida y victoriosa como la única alternativa posible frente a una crisis interior inminente –es éste el caso particular de Austria-Hungría–; otros, finalmente, insisten en todas esas causas juntas.

Por lo demás, hay un amplio acuerdo en reducir al denominador común del término «imperialismo» el conjunto de contradicciones y de contrastes que minaban la estabilidad de Europa y del mundo prebélico. «La era del imperialismo» es un título repetido en varias obras de síntesis sobre los últimos decenios del siglo XIX y principios del XX. Se trata, sin embargo, de un término y de un concepto controvertidos y que admiten distintas interpretaciones. Para Hobson, quien fue el primero en intentar un análisis del fenómeno, el imperialismo correspondía a una forma degenerativa del capitalismo de la libre competencia y, como tal, podía ser frenado y eliminado; en cambio, para Lenin, quien le dedicó uno de sus escritos más famosos, redactado durante la primera guerra mundial, el imperialismo representaba una fase, la «suprema», del desarrollo capitalista, un fenómeno consustancial e inherente a la naturaleza misma del capitalismo: como tal, sólo podía ser suprimido mediante la superación de este último. Un corolario de semejante interpretación era que cualquier discusión sobre la responsabilidad de cada una de las potencias en el estallido del conflicto, cualquier *Schuldfrage*, era ociosa, en tanto que todas eran igualmente responsables. Para Schumpeter, por fin, quien escribió sobre el tema en 1919, el imperialismo no era un fenómeno nuevo, sino, al contrario, un «atavismo» que ahondaba sus raíces en un pasado feudal y militarista, cuando no en la naturaleza humana y en sus freudianas «pulsiones». Por consiguiente, los imperios centrales y su militarismo aparecían como los principales responsables de la guerra. A cada teoría del imperialismo correspondía, pues, un distinto diagnóstico de los orígenes y las causas de la guerra, y una distinta terapia para asegurar la paz. De cualquier forma que se le definiera, el imperialismo seguía siendo un enredo de contradicciones sin solucionar.

Pero no se puede decir que la conciencia de tales contradicciones haya calado profundamente en la opinión pública y menos aún que perturbara en exceso los sueños de la que iba a pasar a la historia como la «generación de 1914». Era convicción extendida que, en un mundo económicamente integrado como era el del siglo XX, la guerra era un instrumento ya anacrónico y obsoleto, y que un eventual conflicto entre pueblos civilizados hubiera representado un daño no sólo para los vencidos, sino también para los vencedores, para la común y mutua prosperidad de ambos. Hubiera sido –como rezaba el título de un afortunado libro del periodista americano Norman Angel– una «gran ilusión». Todo lo más se podía y se debía recurrir al uso

de la fuerza y de las armas para llevar la civilización al mundo no civilizado. Ésta era, por ejemplo, la opinión del presidente americano Theodore Roosevelt, aunque ello no obstó para que se le otorgase uno de los primeros premios Nobel de la Paz.

Por lo tanto, es comprensible que, cuando en julio de 1914, a raíz del atentado de Sarajevo y del ultimátum austríaco a Serbia, los acontecimientos se precipitaron y quedó claro que el conflicto era ya inevitable, a la opinión pública se la cogió por sorpresa, desprevenida. No se puede decir, sin embargo, que por ello resultara traumatizada. Porque era convicción generalizada que la guerra sería breve, como lo habían sido las libradas en territorio europeo a lo largo del siglo XIX: una *Blitzkrieg*. Los militares estaban convencidos de ello: el plan Schlieffen, que preveía la invasión de Bélgica, una rápida aniquilación de Francia y un sucesivo ataque resolutivo a Rusia, se basaba precisamente en este concepto. Estaban convencidos de ello los gobiernos, los exponentes políticos con pocas excepciones, entre ellas la del italiano Giolitti, para quien la guerra no duraría tres meses, pero tampoco tres años. Asimismo, estaba convencida de ello una parte no desdeñable de la opinión pública: la que recibió el anuncio de la guerra como el final de una cotidianidad aburrida y gris y como una revancha de sus propias frustraciones. Ése era quizá el estado de ánimo de las multitudes que en las calles de París y Berlín despedían a los soldados que iban al frente con manifestaciones de entusiasmo patriótico; o el de los dos millones y medio de jóvenes que en Inglaterra –un país donde el servicio militar obligatorio se introdujo sólo durante la guerra– corrieron a alistarse como voluntarios, como si de una competición deportiva se tratara. También en Italia –a pesar de que entró en guerra cuando el conflicto estaba ya estabilizado y la ilusión de la *Blitzkrieg* se había esfumado– se repitieron, en el «mayo luminoso» de 1915, las mismas escenas de entusiasmo que diez meses antes se habían visto en París y en Berlín. La exaltación patriótica del momento arrastró también a intelectuales de gran prestigio. El primer nombre que viene a la memoria es el de Thomas Mann, quien en sus *Consideraciones de un apolítico* interpretó la guerra en curso como un conflicto entre la solidez de la *Kultur* alemana y la volubilidad de la *civilisation* francesa. Incluso el joven Antonio Gramsci, por entonces estudiante y militante socialista en Turín, se decantó a favor de la intervención. Entre los convertidos al patriotismo se contaron también algunos premios Nobel de la Paz, como el italiano Ernesto Teodoro Moneta y el francés Paul Estournelles de Constant. Los demás, los que –como Filippo Tommaso Marinetti– consideraban la guerra como la «higiene del mundo», recibieron su estallido con entusiasmo, como una liberación, y algunos de ellos se apresuraron a alistarse. Por contra, los casos de abierta discrepancia, como el de Romain Rolland en Francia o de Bernard Shaw en Inglaterra, quedaron como episodios aislados.

Existían, desde luego, corrientes de opinión que habían convertido la lucha contra la guerra en una de las razones de su vida. En 1907, los partidos que formaban parte de la Internacional Socialista, reunidos en congreso en Stuttgart, habían votado una resolución, presentada por Lenin y Rosa Luxemburg, en la que se comprometían a reaccionar con el llamamiento a la huelga general en el caso de que, a pesar de todo, la guerra estallase. Sin embargo, la convicción dominante entre los socialistas europeos era que nunca se llegaría a tales extremos, y todavía pocos días antes del inicio de la conflagración, ellos se disponían a reunirse en Viena la última semana de agosto, para un congreso que tuvo que ser anulado a causa del atentado de Sarajevo. Cada partido socialista se vio, así, en la necesidad de tomar posición ante un hecho consumado e inesperado. El más fuerte de ellos, la socialdemocracia alemana, votó el día 4 de agosto los créditos de guerra exigidos por el gobierno, y lo mismo hicieron los socialistas austríacos. Esto proporcionó a los socialistas franceses la justificación o el pretexto para posicionarse del lado de su gobierno, a pesar de que acababan de librar una vigorosa lucha contra la prolongación a tres años del servicio militar y que en las elecciones de 1914 habían cosechado un importante éxito. La decisión se tomó pocos días después del asesinato de su líder más prestigioso, Jean Jaurès, a manos de un fanático chovinista. En agosto de 1914, dos representantes socialistas –Marcel Sembat y Jules Guesde– entraron a formar parte de un gabinete conocido con el nombre de Union Sacrée. En Inglaterra, el Partido Laborista también acordó, en mayo de 1915, que uno de sus más destacados líderes entrara en el gobierno de coalición presidido por lord Asquith y seguidamente, en diciembre de 1916, en el presidido por Lloyd George. Entre los demás partidos socialistas, los únicos que se pronunciaron contra la guerra fueron el puñado de bolcheviques rusos y los serbios. En cuanto al Partido Socialista Italiano, adoptó una fórmula no exenta de ambigüedades: ni adherirse ni sabotear. El compromiso de Stuttgart, pues, reafirmado en el congreso de Basilea de 1912, no fue respetado. No por ello es admisible hablar de «fracaso» y menos aún de «traición» por parte de la Segunda Internacional: además del factor sorpresa y de la falta de preparación, es necesario tener en cuenta el hecho de que en los sectores de la opinión pública y en las clases sociales que constituían la base de la fuerza electoral de los partidos socialistas –especialmente los trabajadores organizados en sindicatos– el reflejo patriótico prevaleció sobre el internacionalista, mientras, por contra, dichos partidos estaban escasamente presentes y arraigados en el mundo campesino, que sería la reserva de donde los ejércitos, especialmente el ruso y el italiano, iban a obtener la gran mayoría de sus reclutas. En cambio, aquellos partidos, como los de tendencia católica, que estaban más arraigados en el mundo rural adoptaron una posición de espera o de apoyo. El *Zentrum* alemán se adhirió a la tregua reclamada por el gobierno (*Bürgerfriede*) y en Ita-

lia el dirigente católico Filippo Meda entró a formar parte del gobierno Boselli, en 1916. El clero católico, por su parte, quedó profundamente dividido, pero en su conjunto mantuvo una postura discreta, a la espera de una señal de los superiores. Esta señal se produjo en agosto de 1917, cuando el nuevo papa, Benedicto XV, dirigió a los jefes de las potencias beligerantes una carta, levantando su voz para condenar la «inútil masacre» que se estaba consumando. Pero ya era demasiado tarde.

1.2. DE LA GUERRA RELÁMPAGO A LA GUERRA TOTAL

El atentado de Sarajevo, donde encontraron la muerte el heredero al trono austro-húngaro, el archiduque Francisco Fernando, y su esposa Sofía, tuvo lugar el 28 de junio de 1914. El 23 de julio, con el consentimiento de Alemania y del Kaiser, Austria lanzó a Serbia un ultimátum y, a pesar de haber aceptado ésta buena parte de sus peticiones, el 28 de julio le declaró la guerra. El 30 de julio, Rusia, tradicional protectora de Serbia, ordenaba la movilización general, y al día siguiente lo hicieron Alemania y Austria-Hungría. El 1 de agosto Rusia declaraba la guerra a los imperios centrales y el 3 de agosto Alemania declaraba a su vez la guerra a Francia y daba comienzo a las hostilidades invadiendo Bélgica y violando su neutralidad, contemplada en el plan Schlieffen. Finalmente, el 4 de agosto, también Inglaterra –cuya diplomacia había tratado hasta el final de alejar el conflicto– entraba en guerra al lado de Francia y Rusia. Se iniciaba así la primera guerra mundial.

Como vamos a comprobar –y como, por otra parte, es sabido– la guerra real resultó muy distinta de la guerra imaginada o imaginaria. El espejismo de una guerra breve no duró mucho. En un primer momento, cuando las divisiones alemanas, después de llevar a cabo la ocupación de Bélgica, penetraron en profundidad en territorio francés, pareció que las previsiones de una *Blitzkrieg* eran confirmadas por los hechos. Pero cuando, en septiembre de 1914, la ofensiva alemana hacia París fue detenida a orillas del río Marne y, casi al mismo tiempo, la de los rusos hacia Prusia fue bloqueada en Tannenberg y junto a los lagos de Masuria por las tropas al mando del general Von Hindenburg, empezó a propagarse la idea de que la guerra iba a durar mucho tiempo. Con el paso de los meses se hacía cada vez más evidente que la que había empezado como guerra de movimiento iba convirtiéndose en una guerra de posición, en una agotadora guerra de trinchera, en una matanza sin precedentes. Es cierto que, a lo largo de los cuatro años que duraría la guerra, hubo, por una parte y por otra, nuevas ofensivas y nuevos éxitos parciales. Así, los rusos lograron, en un primer momento, penetrar en Galitzia, pero a finales de 1916 se vieron obligados a retirarse,

mientras que, en octubre de 1917, los austríacos consiguieron romper las líneas italianas en Caporetto, llegando hasta el río Piave. Pero hubo también ofensivas fallidas, como las reiteradas tentativas alemanas de eliminar la plaza fuerte de Verdún, o la inglesa de adueñarse de los Estrechos, reprimida en Galípolis en 1915. Pero ninguno de esos éxitos o de esos fracasos tuvo consecuencias decisivas en el terreno militar y su único resultado fue el de aumentar desmesuradamente el número de bajas. Sólo frente a Verdún encontraron la muerte un millón de seres humanos en los dos bandos, mientras que en Galípolis perdió la vida el cuerpo de expedición australiano casi en su totalidad.

Más pasaba el tiempo y más se hacía evidente que una solución militar del conflicto, en el campo de batalla, según las reglas del viejo Von Clausewitz, era improbable y que, por el contrario, el factor decisivo iba a ser la capacidad de resistencia y de aguante del que fue calificado como el «frente interior». La guerra de 1914-1918 fue, de hecho, la primera que involucró a fondo a la población civil, y en este sentido se trató de una guerra «total». En todos los países beligerantes se introdujo el racionamiento, más o menos severo, de los productos alimenticios y del carbón; en todos los países se adoptaron medidas de movilización industrial que conllevaban cierto nivel de militarización de la mano de obra; en todos los países las libertades de prensa, de asociación y de huelga se vieron sometidas a un régimen de ocupación por parte de los ejércitos extranjeros y las poblaciones de algunas ciudades europeas experimentaron los primeros bombardeos aéreos.

En los imperios centrales, que de entre los países beligerantes eran los menos autosuficientes y los que más dependían de las importaciones, el frente interior era más vulnerable, ya que sufría el bloqueo de los abastecimientos marítimos efectuado por la armada inglesa. El intento de la potente armada alemana –construida con tanto derroche y tanto orgullo por la Alemania guillermina– de romper el bloqueo, enfrentándose a la Royal Navy en la batalla de Jutlandia (mayo de 1916), acabó en un sustancial fracaso: ambas armadas sufrieron pérdidas relevantes, pero a partir de entonces la armada alemana ya no se atrevió a salir a mar abierto. Así, durante el invierno de 1916-1917, Alemania se vio obligada a introducir un racionamiento extremadamente severo, de mil trescientas calorías diarias por trabajador. Una situación análoga se daba en Austria-Hungría. Es comprensible, pues, que fueran estos países los que realizaran los primeros tanteos para una paz negociada. Esto aconteció durante 1916, por iniciativa del canciller alemán Von Bethmann Hollweg y del nuevo emperador austríaco Carlos, sucesor de Francisco José. Pero se trataba de iniciativas tibias y aun instrumentales, que no prosperaron en absoluto. La guerra seguía y, además, se extendía. En mayo de 1915 Italia, como se ha visto, había entrado en guerra al lado de los aliados, después de suscribir un tratado secreto –el pacto de

Londres– que, además de Trento y Trieste, le garantizaba ventajas territoriales en los Balcanes y en Anatolia, mientras Bulgaria hacía lo mismo en el frente opuesto. En 1916 le tocaba a Rumania ir a engrosar las filas de los aliados, y en 1917 se sumaba Grecia. Nuevos escenarios de lucha se añadían, así, a los iniciales: los Balcanes, Oriente Medio –donde los ingleses apoyaban la rebelión de las poblaciones árabes contra el Imperio turco–, Extremo Oriente –donde Japón, que había entrado en guerra junto a los aliados ya desde 1914, expulsaba a los alemanes de los archipiélagos que éstos poseían en el Pacífico–, y finalmente, sobre todo, el océano Atlántico, a causa de la decisión alemana de desencadenar la guerra submarina contra cualquier nave, cualquiera que fuese su nacionalidad, con rumbo a Inglaterra o a Francia, como respuesta al bloqueo en su contra. El hundimiento del piróscafo estadounidense *Lusitania* sucedió en mayo de 1915. A consecuencia de este episodio, el estado mayor alemán, preocupado por una posible intervención en la guerra por parte de Estados Unidos, ordenó la suspensión temporal de los ataques a buques de países neutrales; pero, en febrero de 1917, la guerra submarina fue reanudada a mayor escala y en marzo el ministro de Exteriores alemán pidió a México que entrara en guerra contra Estados Unidos, prometiendo, una vez alcanzada la victoria, la devolución de los territorios mexicanos incorporados a Estados Unidos a lo largo del siglo XIX. Su telegrama fue descifrado por los servicios secretos ingleses, que se apresuraron a informar al gobierno de Washington. De este modo, la que había empezado como una guerra europea, se convertía en una guerra mundial, la primera guerra mundial de la historia. A través de ésta millones de hombres y mujeres se percataron de que vivían ya en un mundo interdependiente.

La guerra, pues, no sólo continuaba, sino que parecía haberse convertido en una macabra rutina. Los automatismos que tanto habían contribuido a desencadenarla seguían en marcha: las fábricas seguían produciendo armas y municiones, los estados mayores seguían elaborando planes que cada vez prometían ser decisivos, la prensa seguía exaltando el heroísmo de los combatientes, los soldados seguían muriendo en el frente.

1.3. EL PUNTO DE INFLEXIÓN DE 1917

Sin embargo, la costumbre y la rutina tenían un límite, que fue alcanzado a lo largo de 1917. En todos los países beligerantes se produjeron manifestaciones de descontento y de protesta; no faltaron episodios de amotinamiento: en Francia, en mayo de 1917, por parte de dos regimientos acuartelados en Soissons; en Alemania, durante el verano, por parte de los marineros de la armada anclada en el puerto de Kiel. En Italia, en agosto de 1917, la ciu-

dad de Turín fue escenario de una rebelión. Se trató de episodios aislados, lo que no evitó que el general Cadorna –comandante general del frente y hombre de miras estrechas y de talante conservador– achacase la derrota de Caporetto a una «huelga militar», que, en su opinión, habría sido fomentada por los rojos y los clericales. Por doquier se intensificaron las huelgas, a pesar de las limitaciones y de las medidas de represión del período de guerra. La respuesta de los poderes constituidos ante estas manifestaciones fue muy severa: en el frente interior se produjeron detenciones entre los que habían participado en las iniciativas pacifistas o que resultaban inscritos en alguna lista negra (la más famosa es el *Carnet B* francés), mientras que en la línea de fuego no se dudó en ordenar que se diezmara la tropa.

La situación se acercaba al punto de ruptura. Pero ¿cuál sería el eslabón más débil de la cadena, el que cedería primero? La respuesta a esta pregunta llegó la última semana de febrero, cuando la guarnición de Petrogrado confraternizó con los obreros que desde hacía días estaban en huelga y ocupaban las plazas reclamando pan y el fin de la autocracia. Se trató de una sublevación totalmente espontánea, que ningún partido había promovido o dirigido, pero su fuerza y su impacto fueron de tal magnitud que el zar se vio obligado a dimitir en favor de su hermano, el gran duque Miguel, quien por su parte, se negó a subir al trono. No tuvo que pasar mucho tiempo para que quedara claro que el gobierno provisional –que se puso en marcha tras la revolución de febrero, bajo la presidencia del príncipe Lvov, hombre de arraigadas convicciones demócratas y filoccidentales, y cuyos miembros eran en su mayoría representantes del partido de los constitucionales democráticos (los cadetes)– no era capaz más que de gestos que –dada la situación de disgregación en que se encontraba el país– tenían un valor poco más que simbólico, como la introducción de la jornada de ocho horas y una serie de medidas dirigidas a democratizar el sistema político y constitucional. Pero no se encontraba el gobierno en condiciones de tomar las medidas y las decisiones que ansiaban los rebeldes de febrero: poner punto y final a la guerra, promulgar una reforma agraria y convocar con la mayor rapidez una asamblea constituyente. Por contra, aumentaba y se consolidaba el prestigio de los soviets, organismos que ya habían hecho acto de presencia durante la revolución de 1905, y en especial de los de Petrogrado y Moscú. Éstos no sólo tenían una función de crítica y de estímulo, sino que se comportaban con el gobierno como un auténtico contrapoder, promulgando por iniciativa propia órdenes y disposiciones. El caso más conocido es el de la orden número uno del primero de marzo de 1917, mediante la cual el soviet de Petrogrado daba disposiciones para la elección de «órganos de autogestión propios» en las unidades militares y retiraba a los oficiales «el derecho a disponer de las armas a su arbitrio». Cuando, en abril, circuló la noticia de que el ministro de Exteriores, Miliukov, un intelectual de gran prestigio y autorizado expo-

nente del partido de los cadetes, había comunicado con una nota a los aliados que Rusia no sólo mantendría sus compromisos, sino que insistía en perseguir los mismos objetivos por los cuales había entrado en guerra –incluyendo tanto la conquista de Constantinopla como el control de los Estrechos–, la crisis de gobierno pareció inevitable. Pudo ser solucionada, temporalmente, sólo con dar entrada en el gobierno a representantes de los partidos menchevique y socialista revolucionario.

La gravísima crisis que Rusia estaba atravesando representaba ciertamente un factor de debilidad para el bando aliado, pero lo que las potencias de la Alianza perdían en lo estrictamente militar, se compensaba con las ventajas que adquirían en lo político y en términos de imagen. De hecho, la instauración de un gobierno democrático en Rusia ponía fin a la anomalía de una alianza entre dos democracias experimentadas y una autocracia considerada universalmente como un baluarte de la reacción y del oscurantismo y, por consiguiente, otorgaba a la guerra los caracteres de una confrontación ideológica entre dos visiones del mundo distintas e irreconciliables. Al presidente norteamericano, el demócrata Wilson, se le ofrecía, así, otro buen motivo para convencer a una opinión pública reacia a aceptar la intervención al lado de la Alianza y en defensa de la democracia. Como dijo él mismo, se trataba de «hacer seguro el mundo para la democracia».

La entrada en guerra de los Estados Unidos en abril de 1917 no cambió, por el momento, los equilibrios militares que se habían establecido en el terreno, ya que el cuerpo de expedición norteamericano sería operativo en Francia sólo en la primavera de 1918; pero el enorme potencial económico del que disponía este país aseguraba a los aliados un arsenal y unos recursos decisivos. La guerra había llegado a un punto de inflexión: a partir de ahora, la cuestión ya no era quién sería el vencedor, sino cuándo y cómo terminaría la guerra.

En Austria-Hungría y en la propia Alemania hubo quien se percató de ello. En abril-mayo el nuevo emperador austríaco, Carlos, dio a su cuñado, el príncipe de Borbón Parma, el encargo de sondear al presidente francés y a Lloyd George, declarando su disponibilidad para importantes concesiones, y en julio el Reichstag aprobó una resolución en la que se pedía la paz. En agosto fue el turno de la mencionada nota pontificia y en septiembre el de los gestos aperturistas que el secretario de estado de Asuntos Exteriores alemán, barón Von Kuehlmann, tuvo para con sus interlocutores ingleses. Pero tampoco esta vez todos estos intentos llegaron a resultado alguno y también esta vez el partido de los intransigentes y de los militares logró salirse con la suya. Ya en julio de 1917 el canciller Von Bethmann Hollweg había sido obligado a dimitir por el hombre fuerte del momento, el general Ludendorff. En el frente opuesto, en Francia, a consecuencia de la crisis del gobierno Painlevé y del alejamiento de la Union Sacrée por par-

te de los socialistas, el cargo de presidente del consejo de ministros pasaba a Georges Clemenceau, el «Tigre», feroz adversario de cualquier intento de reconciliación o de mediación, y partidario inflexible de continuar la guerra hasta la victoria.

Pero algunos creían (o tenían la ilusión) que esa paz que los gobiernos no conseguían acordar, podría, sin embargo, alcanzarse gracias a la presión de la opinión pública, desde abajo. Esta era la convicción de amplios sectores de los partidos de la Internacional Socialista. Cuando había estallado la guerra, en cada partido de la Internacional se había producido, como hemos observado, una escisión entre los que apoyaban el esfuerzo bélico y una minoría que se mantenía firme en el principio de la oposición a la guerra. Esta minoría se había reunido en la neutral Suiza para celebrar una serie de conferencias en las que habían participado, entre otros, Lenin, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht y algunos socialistas italianos, pero sus llamamientos habían tenido escasa resonancia. A lo largo de 1917, por iniciativa de los socialistas de los países neutrales y especialmente de los escandinavos y de los holandeses, fue tomando consistencia la idea de convocar para el mes de agosto, en Estocolmo, una conferencia en la que habrían tenido que participar delegaciones de todos los países. Esta propuesta encontró de inmediato el apoyo sin reservas de los socialistas rusos y de aquellos socialistas alemanes que en 1917 se habían separado de la Socialdemocracia para formar un partido socialdemócrata independiente (USPD); además, se mostraron interesados en ella miembros aislados de los países aliados. En Inglaterra uno de los más autorizados exponentes laboristas, Arthur Henderson, ministro del Gabinete de Guerra, fue a Petrogrado, en junio, para ponerse en contacto con los socialistas rusos y para conversar con ellos sobre las modalidades de la conferencia que se proyectaba. Pero poco después, en agosto, se vio obligado a dimitir por haber declarado, durante una conferencia especial del Partido Laborista, su apoyo a la participación de los laboristas ingleses en la conferencia. Las divisiones que se dieron entre los varios partidos de la Internacional Socialista y dentro de cada uno de ellos hicieron que finalmente la conferencia de Estocolmo tuviese que ser aplazada *sine die*. A ello contribuyó también, por lo demás, el desarrollo de los acontecimientos.

Porque, mientras tanto, en Rusia la situación se había deteriorado todavía más. En las dos metrópolis del país, Petrogrado y Moscú, se sufría el hambre; en las filas del ejército se acentuaba cada día más el proceso de disolución, lo que permitía a los ejércitos imperiales penetrar cada vez más profundamente en territorio ruso, hasta llegar a amenazar Petrogrado. La ofensiva en Galitzia, decidida en junio por el gobierno provisional, y a cuya cabeza se encontraba ahora el socialrevolucionario Kerensky, se saldó con un desastroso fracaso y unidades enteras del ejército ruso dejaron simplemente de luchar. Los soldados que formaban parte de ellas volvieron a sus

aldeas y reclamaban la tierra como compensación por sus sufrimientos y sus sacrificios. La economía se encontraba totalmente colapsada y la moneda había perdido prácticamente todo su valor. La situación era, pues, insostenible. Un gobierno autoritario era para muchos la única alternativa a la disolución y a la anarquía definitivas. Como se sabe, éste fue el rumbo que tomaron los acontecimientos.

La revolución de 1917 es un acontecimiento que no pertenece sólo a la historia rusa, sino a la de toda la humanidad contemporánea. Así que tendremos que volver a hablar con más detenimiento tanto de sus consecuencias internas como de su enorme impacto fuera de las fronteras de Rusia. Por ahora, para no perder el hilo del discurso que hemos venido desarrollando hasta aquí, nos limitamos a considerar su influencia en los sucesivos avatares del conflicto mundial y en las negociaciones de paz.

Una de las primeras iniciativas del gobierno revolucionario presidido por Lenin fue la promulgación de un decreto sobre la paz, dirigido «a los pueblos y a los gobiernos»; allí, el gobierno se declaraba a favor de una paz «sin indemnizaciones y sin anexiones» y del derecho a la autodeterminación, y se apelaba a los pueblos para que obligaran a sus respectivos gobiernos a terminar con la masacre que se estaba produciendo. Al mismo tiempo, y en relación con lo anterior, se hacían públicos los tratados suscritos por el gobierno zarista, revelando así las intrigas de la «diplomacia secreta».

Se trataba de un documento explosivo, pero también ambiguo. Al dirigirse «a los pueblos y a los gobiernos», el gobierno soviético no llegaba a elegir entre una solución negociada del conflicto, sobre la base de los principios enunciados en el decreto, y una solución revolucionaria. Ésta última se contemplaba sobre todo en relación con Alemania, donde la perspectiva de una revolución inminente parecía cercana. Lenin estaba convencido, incluso, de que, de no realizarse esta expectativa, los propios bolcheviques no tendrían posibilidad ninguna de mantenerse en el poder. Cuando resultó claro que esta esperanza tenía que ser aplazada, el grupo dirigente se encontró ante la dramática disyuntiva entre aceptar unas condiciones para la rendición que se anunciaban durísimas o rechazar dichas condiciones, confiando en el desarrollo futuro del movimiento revolucionario y en la solidaridad del proletariado internacional. Ante tal dilema, el grupo dirigente bolchevique se encontró dividido entre quien, como Trotsky y Bujarin, sostenía la tesis del rechazo y quien, como Lenin, estaba decidido a firmar la paz, por muy dura que fuese. Al final, tras un debate dramático, esta última solución prevaleció, aunque por poco tiempo. El 3 de marzo de 1918 se firmaba así, en Brest-Litovsk, un tratado de paz según el cual la Rusia soviética renunciaba a los países bálticos, a Finlandia y a algunas regiones de la Transcaucasia, que pasaban a los turcos, y retiraba sus tropas de Ucrania, donde los alemanes se apresuraron a instalar un gobierno títere fiel a ellos.

Aunque no pudo evitar la humillación de Brest-Litovsk, el decreto de paz no careció de efectos. En la nueva situación que se había determinado a raíz de la intervención norteamericana y la revolución de octubre, el problema de la definición de las finalidades de la guerra –es decir, de las soluciones que se tendrían que adoptar para asegurar una paz duradera, dando ya por descontada la previsible y deseada victoria aliada– se fue imponiendo cada vez más entre amplios sectores de la opinión pública. Una aportación especialmente relevante en tal sentido vino del Partido Laborista inglés, que en diciembre de 1917 hizo pública una declaración, redactada por Arthur Henderson –el hombre de la conferencia de Estocolmo–, Sidney Webb y Ramsay MacDonald, donde, entre otras cosas, se abogaba por el derecho a la autodeterminación de los pueblos que formaban parte de los imperios austro-húngaro y turco y por la creación de una Sociedad de las Naciones, a la que, entre otros cometidos, tendría que ser confiado el mandato sobre toda África tropical.

Sobre este telón de fondo hay que colocar los catorce puntos que el presidente americano, Wilson, hizo públicos el 8 de enero de 1918. Este célebre documento tenía unos cuantos puntos en común con el decreto de Lenin sobre la paz, como la condena de la diplomacia secreta y la reivindicación del derecho a la autodeterminación; pero en otros aspectos se diferenciaba de él radicalmente. El principio de la «libertad de los mares», mencionado en su primer artículo, suponía no sólo un mundo regulado por las leyes de la libre competencia y de la economía capitalista, sino también el papel hegemónico que Estados Unidos habría ejercido en este mundo y en este mercado. Bajo estos presupuestos, estaba claro que en la Sociedad de las Naciones, cuya creación se proponía en el último artículo, las potencias vencedoras, y en particular Estados Unidos, iban a tener un papel preponderante. Había, pues, entre ambos documentos y entre las visiones del mundo que ellos suponían, diferencias irreconciliables: el proyecto de Wilson de un nuevo orden internacional –realizable mediante una expansión gradual de la democracia occidental en las relaciones internas e internacionales y una prudente descolonización («solución imparcial de todas las exigencias coloniales»)– estaba muy lejos del de Lenin, según el cual la única posibilidad de prevenir una nueva *Weltkrieg* consistía en una *Weltrevolution*, que destruyera el orden capitalista y llevara a cabo una descolonización integral. Existía, sin embargo, una coincidencia fundamental. Objetivo final de ambos documentos era un nuevo sistema de relaciones internacionales, capaz de asegurar la paz no ya en virtud del mantenimiento del *statu quo* y de la congelación de las relaciones entre los estados y las clases, sino gracias a la eliminación de las causas de la guerra: la opresión y la sumisión de un pueblo por parte de otro, y las desigualdades sociales dentro de cada estado.

1.4. LOS TRATADOS DE PAZ

La paz de Brest-Litovsk permitió a Alemania desplazar todo su potencial bélico al frente occidental, donde, entre marzo y julio de 1918, lanzó unas ofensivas a gran escala que, sin embargo, después de los primeros éxitos, se estrellaron en la resistencia aliada. En julio, las tropas anglofrancesas, reforzadas por un contingente norteamericano de un millón de hombres al mando del general Pershing, pasaron a la ofensiva, obligando a los alemanes a la retirada, esta vez sin posibilidades de revancha. También en los demás frentes –en los Balcanes, en Oriente Medio y en el frente italiano– los aliados pasaron al ataque. En octubre el Káiser ofreció a Wilson la paz sobre la base de los catorce puntos, pero su propuesta fue rechazada. Se constituyó entonces un gobierno de coalición presidido por el príncipe Max von Baden, que, por lo demás, tuvo una duración efímera. El amotinamiento de la base naval de Kiel y el estallido de motines revolucionarios en Berlín, obligaron al príncipe a transferir sus poderes al líder socialdemócrata Ebert. El 9 de noviembre se proclamaba la república en Berlín, mientras que el Káiser se refugiaba en Holanda. Unos días antes, el 4 de noviembre, Austria había firmado el armisticio con Italia y también había proclamado la república. Finalmente, el 11 de noviembre, el nuevo gobierno republicano alemán firmaba la capitulación. La primera guerra mundial había terminado.

La conferencia de paz de París comenzó el 12 de enero de 1918 y concluyó el 28 de junio de 1919 con la estipulación de una serie de tratados con las potencias derrotadas: el de Versalles con Alemania, el de Saint-Germain-en-l'Haye con Austria, el del Trianon con Hungría, el de Neuilly con Bulgaria y el de Sèvres con Turquía. La duración de la conferencia –un año y medio– revela los contrastes que tuvieron lugar durante su celebración, y las dificultades que se encontraron para superarlos. El problema mayor, y preliminar, consistía ciertamente en alcanzar un compromiso entre la visión universalista de las relaciones internacionales, propia de Wilson, quien no se sentía vinculado por los tratados suscritos por los aliados, y los intereses –o los egoísmos– nacionales, defendidos a capa y espada por algunas de las potencias europeas vencedoras. Entre ellas figuraba Italia, que, además de lo que se le asignaba en base al tratado de Londres, reivindicaba también la ciudad de Fiume, pero sobre todo la Francia de Clemenceau, que pretendía que la frontera se estableciera en el Rin y pedía el valle minero del Sarre. En definitiva, fue esta concepción revanchista o –para emplear el término de Keynes en su libro sobre las consecuencias económicas del armisticio– «cartaginesa» de la paz, la que acabó prevaleciendo.

Es cierto que el tratado de Versalles retomaba algunas de las propuestas de Wilson. De hecho, en uno de sus artículos el tratado instituía la Sociedad de las Naciones propugnada por el presidente americano; y también es

cierto que el principio de la autodeterminación fue aplicado en toda la Europa central y oriental. De la disolución del Imperio austro-húngaro nacieron los estados de Yugoslavia, Checoslovaquia y Polonia. Esta última recobraba así su independencia y su integridad, perdidas desde hacía dos siglos. Tarea especialmente ardua resultó ser la de trazar las fronteras entre estos nuevos estados, y esto se logró sólo parcialmente. Porque en cada uno de ellos estaban presentes minorías nacionales a menudo consistentes, y eso, como veremos, constituirá una fuente de inestabilidad y contrastes. En algunos casos, en particular el de la Alta Silesia, la cuestión quedó abierta y su solución fue encomendada a la Sociedad de las Naciones. Si se pudo llegar a una solución de conjunto, se debió al hecho de que las grandes potencias vencedoras estaban todas interesadas por igual en la formación de un «cordón sanitario» que impidiese el contagio de la revolución rusa. Tal cordón incluía también buena parte de los territorios que la Rusia soviética había cedido en Brest-Litovsk, a los que, en 1920, se añadirán los que cedió a Polonia con la paz de Riga; asimismo, Finlandia y los países bálticos se convirtieron en estados independientes.

En cuanto a los territorios mediorientales del Imperio turco, el principio del derecho de autodeterminación no tuvo aplicación ninguna y los compromisos asumidos con los árabes, como veremos, no fueron respetados. Dichos compromisos se convirtieron, en efecto, en mandatos, cuya administración fue confiada a las potencias vencedoras: Irak y Palestina a Inglaterra, Líbano y Siria a Francia. La misma suerte tocó a las colonias alemanas en África. Por lo que respecta al problema colonial en su conjunto, la única, tibia, innovación fue precisamente la de la institución del mandato, según el cual la Sociedad de las Naciones se encargaba de confiar a una potencia mandataria por ella escogida la responsabilidad de administrar un país o una región, con el compromiso de encaminarla hacia la independencia. Se preveían varios tipos de mandato (A, B, C), según el grado de desarrollo de cada país y de su mayor o menor madurez para autogobernarse. No era, desde luego, un gran paso hacia adelante en el camino de la descolonización y en la práctica las decisiones de la conferencia se resolvieron en un nuevo reparto de los territorios coloniales, cuyos mayores beneficios los obtuvieron Inglaterra y Francia.

Los elementos inspirados por los planteamientos de Wilson, que hasta aquí hemos observado, desaparecen sin embargo totalmente si consideramos el apartado de los tratados que concierne a las relaciones entre vencedores y vencidos en Europa. El Imperio austro-húngaro, como se ha visto, había dejado de existir: la guerra había acelerado y provocado aquella disolución que el propio Imperio había tratado de evitar al intervenir en el conflicto. A la Austria superviviente se le prohibió expresamente realizar sin el consentimiento de los vencedores la *Anschluss* con Alemania, apoyada por

una amplia mayoría de la opinión pública, entre otros, el nuevo ministro de Exteriores, el socialista Otto Bauer. Alemania, por su parte, tuvo que devolver Alsacia y Lorena a Francia, ceder los distritos de Eupen y Malmedy a Bélgica, el Schleswig septentrional a Dinamarca, la Posnania a Polonia y renunciar a todas sus colonias en África y en el Pacífico; asimismo, se vio obligada a aceptar que la región de Renania fuese desmilitarizada y que la explotación de las minas del Sarre fuese asignada a Francia por una duración de quince años; una vez transcurrido este plazo, la población se pronunciaría a través de un plebiscito. Además, el tratado de Versalles establecía que Alemania debía eliminar el servicio militar obligatorio, reducir su ejército a cien mil hombres y la armada a pocas unidades de tonelaje reducido. La clásula más humillante, con todo, era la prevista por el artículo 231: en ésta Alemania se reconocía responsable de la guerra y, como tal, obligada a pagar unas reparaciones. Otro artículo –el 227– se refería a las responsabilidades personales del Káiser. A éste último lo dejaron finalmente tranquilo en su exilio holandés, pero las reparaciones, como veremos, fueron exigidas sin descuentos. En su calidad de país agresor y vencido, Alemania vino a ser, así, un *outcast*, un paria en el sistema de relaciones internacionales y, como tal, junto con la Rusia soviética, no se le permitió acceder a la Sociedad de las Naciones. Los demás tratados con los estados derrotados tuvieron también carácter vejatorio, aunque menos acentuado que el del tratado de Versalles. De ello se hablará en el lugar correspondiente, al tratar de los países afectados por dichos tratados.

El mapa político de Europa que resultó de la conferencia de París era mucho más variado que el de antes de la guerra: en él se contaban ocho nuevos estados, algunos de ellos étnicamente no homogéneos, lo que no representaba precisamente una garantía de equilibrio. La Rusia soviética había sido aislada detrás de un «cordón sanitario» y también esto representaba un factor de crispación en la relaciones entre las mayores potencias. La amenaza más grande para el edificio del equilibrio europeo consistía, con todo, en el trato «cartaginés» que se había dispensado a Alemania. La Europa que salió de la conferencia de paz no era, pues, una Europa más segura frente al peligro de una nueva guerra de lo que lo había sido en la anteguerra. Más bien todo lo contrario.

Un balance de la primera guerra mundial no puede, sin embargo, limitarse a registrar los cambios territoriales y políticos que se produjeron por su causa. La guerra, en efecto, fue ante todo el caldo de cultivo y el trámite de una auténtica mutación antropológica. En primer lugar, lo fue para los combatientes: para ellos, quedará como la experiencia fundamental de su vida, que algunos recordarán con orgullo o incluso con nostalgia, otros con horror. Pero lo fue también para los que se quedaron en casa o en el puesto de trabajo: para mujeres y menores, que sustituyeron a sus hombres y sus padres

en el campo y en las fábricas, para las familias de millones de caídos y de minusválidos, para aquellos que se habían empobrecido con la inflación, y también para los que se habían enriquecido con la especulación. En resumen, fue un cambio para todos: la guerra había transformado no sólo los pensamientos y los sentimientos de los hombres y de las mujeres, sino las propias relaciones entre los sexos, entre las clases, e incluso las relaciones interpersonales; en definitiva, el entramado mismo de la convivencia. La guerra dejaba atrás un lastre y un fermento de sentimientos y de estados de ánimo diversos y contradictorios: el rencor y el deseo de revancha de algunos, las frustraciones de otros. Ante tamaña alteración, que afectaba a los estratos más profundos de la sociedad, estratos que la guerra había despertado de la pasividad y de la resignación, había quien invocaba como única solución posible la vuelta al orden, la restauración. Éste era, por ejemplo, el espíritu de la encíclica *Ubi arcana*, de diciembre de 1922, donde el nuevo pontífice, Pío IX, denunciaba la «intranquilidad morbosa» y el «materialismo» pujantes e indicaba el camino de la vuelta a la auténtica «sociedad de las naciones», que había sido y seguía siendo la cristiandad. Pero para otros la guerra había sido la prueba clara de que el viejo equilibrio ya no se sostenía y de que sólo un «nuevo orden» evitaría que se produjera una nueva masacre. Éstos eran los sentimientos y los estados de ánimo que, confusamente, se agitaban y se entrelazaban en aquellos sectores de la opinión pública más sensibles a la exigencia de un cambio, pero también en las almas de los cientos de miles de soldados de color que habían luchado en los campos de batalla europeos y que ahora volvían a sus países y a sus aldeas con el prestigio del veterano y la experiencia del combatiente, así como de los estudiantes chinos protagonistas de los motines de 1919 o de los manifestantes indios asesinados en Amritsar.

En el plano político la consecuencia más relevante de esta mutación antropológica fue que las cuestiones de política dejaron de ser consideradas como terreno exclusivo de los diplomáticos y de los entendidos, como lo habían sido ampliamente en el período anterior a la guerra, y pasaban a adquirir una dimensión pública, convirtiéndose en parte integrante del debate político y cultural, tal como se desarrollaba en los parlamentos, en la prensa, en los medios de comunicación. Si no se tiene en cuenta esta nueva dimensión de la política exterior, se corre el riesgo de perder de vista un elemento importante para la comprensión de la historia del mundo entre las dos guerras. Naturalmente, la opinión pública podía ser dirigida o incluso manipulada desde las altas esferas a través de un uso discreto de llamamientos emotivos y de símbolos –lo que se entiende, en definitiva, con la expresión «nacionalización de las masas»–, pero podía jugar –y, como veremos, en cierta medida jugó– un papel activo de presión sobre los gobiernos en defensa de la paz.

2

Estados Unidos en los años veinte

En comparación con las de los países beligerantes, la pérdida de vidas humanas para los Estados Unidos fue limitada: cien mil hombres, el 0,2% de la población activa masculina. No obstante, para un país que en toda su historia nunca se había visto envuelto en una guerra en los lejanos campos de batalla europeos, se trataba de pérdidas psicológicamente importantes. En efecto, el precio pagado parecía cada vez más intolerable a medida que la opinión pública norteamericana iba descubriendo que la guerra no había sido una cruzada de las naciones libres contra el militarismo prusiano, tal como se la había proclamado y justificado, y que el mundo posbélico no era en absoluto aquel mundo «hecho más seguro por la democracia», vaticinado por el presidente Thomas Wilson; al contrario, era un mundo hecho todavía más inseguro e inestable por la arrogancia de los vencedores y los rencores de los vencidos, por el egoísmo de los conservadores y la cólera de los revolucionarios. La que mientras duraba había sido la más popular de las guerras combatidas por los Estados Unidos, una vez terminada se convirtió, para muchos, en una guerra vana e inútil.

A este propósito no hay que olvidar que la reelección de Wilson en las elecciones presidenciales de 1916, por lo demás lograda por un margen muy estrecho, había sido una prueba de gratitud hacia el hombre que «nos ha mantenido al margen de la guerra». Pero, a partir del hundimiento del *Lusitania*, de repente se había creado un clima de movilización contra el enemigo exterior y de psicosis contra el derrotismo interior, alentado por el *Espionnage Act* y el *Sedition Act*. Pero ahora que la guerra, con la misma rapidez, había terminado y la tensión interior bajaba, volvían las perplejidades y la nación, traumatizada por una experiencia contradictoria y concentrada en el espacio de poco más de un año, conocía una crisis de identidad que ha sido comparada con la que experimentó al final de la guerra de secesión y tras el asesinato de Lincoln.

El camino más directo hacia la recuperación de la identidad perdida y la vuelta a la «normalidad» parecía a muchos el del retorno a los orígenes y a la tradición. En este contexto hay que enfocar esa suerte de reacción de rechazo hacia todo lo que no era «americano al cien por cien», que afectó a una gran parte de la opinión pública y que se manifestó en varias formas.

La más conocida entre las manifestaciones de este estado de ánimo fue el llamado *red scare* (temor rojo), es decir, la psicosis de un complot revolucionario que tendría el objetivo de repetir en Estados Unidos el éxito obtenido en Rusia. Como en todos los países beligerantes, también en los Estados Unidos la inmediata posguerra se caracterizó por una oleada de manifestaciones y de huelgas. En enero de 1919 la ciudad de Seattle fue el escenario de una huelga general que duró cinco días; le siguió una gran huelga de los metalúrgicos del U.S. Steel, que alcanzó casi a una docena de estados y vio la participación de trescientos mil trabajadores. La huelga de los metalúrgicos, que al final tuvieron que reconocer su derrota, duró seis semanas, se registraron enfrentamientos y hubo dieciocho muertos. También en septiembre hubo graves desórdenes en Boston, a consecuencia de la huelga de la policía local, episodio que puso en alarma a la opinión pública y que ofreció la ocasión al gobernador de Massachusetts, Calvin Coolidge, de reprimir con mano firme lo que él consideraba un acto intolerable de insubordinación y de derrotismo. Tampoco faltaron, en el clima candente de la posguerra, atentados y episodios aislados de terrorismo. La respuesta de los poderes públicos –no sólo a nivel de cada estado, sino a nivel federal– fue dura. El 1 de enero de 1920, el ministro de Justicia Palmer ordenó la detención en todo el país de seis mil presuntos subversivos. Pocos meses después el mismo Palmer movilizó a la guardia nacional para frustrar un presunto golpe de estado, que tendría que haber tenido lugar en coincidencia con la jornada del primero de mayo. Dos de los detenidos fueron los anarquistas italianos Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, que siete años más tarde serían condenados a la silla eléctrica.

En realidad, no existía ningún peligro de subversión y menos aún de revolución. El sindicalismo militante de los *Wobblies* hacía tiempo que se encontraba en fase menguante y el partido socialista americano, que en la inmediata posguerra había experimentado un efímero aumento de popularidad, llegando hasta los cien mil afiliados, en 1920 no contaba más que con veintisiete mil asociados. Eso era, en parte, la consecuencia de la escisión que en septiembre de 1919 había dado origen al Partido Comunista, pero sobre todo dependía de las dificultades que el partido encontraba a la hora de calmar las tensiones que surgían a raíz de su composición interétnica. El propio recién nacido Partido Comunista tuvo que experimentar muy pronto esta misma dificultad y los contrastes que se produjeron entre militantes norteamericanos e inmigrantes redujeron su ya muy escasa influencia.

El *red scare* terminó al cabo de pocos meses, pero no terminó el substrato psicológico del que éste había sido la manifestación más extrema, el sentimiento generalizado de animadversión hacia todo lo que no fuese americano y hacia los inmigrantes, cualquiera que fuese su procedencia. Si durante la guerra habían sido los alemanes y los irlandeses los sospechosos de derrotismo y los objetivos del *Espionnage Act*, ahora ya no se hacían distinciones. Cada alemán podía ser un socialista, cada eslavo un comunista, cada italiano un anarquista, cada irlandés un terrorista y cada judío cualquiera de esas aberraciones. En todo caso, todos eran unos bebedores empedernidos, unos «húmedos», ya fuera de cerveza, vino o whisky. Antes de la guerra la lucha contra el alcoholismo y los *saloons* había sido uno de los caballos de batalla de las asociaciones que luchaban por las reformas sociales y especialmente de las femeninas y feministas, pero ahora, en el nuevo clima de la posguerra, cambiaba de signo, para convertirse en una bandera de la América puritana y nativista. Es en este mismo contexto –como generalmente se acepta– donde hay que colocar la campaña en favor del prohibicionismo, que culminó con la aprobación del *Volstead Act* en octubre de 1917 y, concluida la guerra, con la aprobación de la 18ª enmienda, que prohibía la comercialización y el consumo de bebidas alcohólicas superiores a 0,5 grados. Y también en este contexto se sitúan las medidas que limitaban la inmigración, a las que nos referiremos más adelante.

A enturbiar y complicar todavía más el cuadro esbozado hasta aquí contribuían también las tensiones raciales. En el curso de la guerra y en la inmediata posguerra, cerca de medio millón de trabajadores de color se habían trasladado a las ciudades del norte, lo que había determinado una situación de conflictividad latente, que no pocas veces se resolvió en enfrentamientos sangrientos: en East Saint Louis en 1917, con un saldo de cuarenta y siete muertos, en Chicago en 1919, con treinta y ocho muertos, y en la propia capital federal en el mismo año, con seis muertos. Pasada la fase aguda de la posguerra, las tensiones raciales cesaron, o por lo menos se atenuaron, en el Norte, pero no se puede decir lo mismo del Sur, donde tenían hondas raíces históricas, del Oeste y de la Costa del Pacífico... Aquí la tensión se mantuvo en un nivel de alerta y contribuyó a mantener viva la animadversión hacia todo lo que no fuese americano, fueran hombres o ideas; finalmente, todo ello adquirió una expresión organizada y permanente: el Ku Klux Klan. Reconstituido en 1915 por un viajante metodista, William J. Simmons, el clan –al que sólo podían afiliarse «ciudadanos blancos nacidos en el país» y que fueran creyentes en los «fundamentos de la religión cristiana»– conoció una rápida expansión en los años de la posguerra, hasta alcanzar, en 1925, un número de afiliados estimado entre dos y cuatro millones. Sus bastiones eran

el campo y las pequeñas ciudades de provincia, pero su presencia activa se señala también en Dallas, en Los Ángeles y en otros centros mayores, donde la inmigración de color era más numerosa. Con todo, los negros no eran el único blanco de las intimidaciones y de las represalias del clan; también lo eran los católicos, los judíos, los activistas del *American Civil Liberties Union* y los intelectuales. Ha pasado a la historia el caso Scopes, un profesor de biología de Dayton (Tennessee), quien en 1925 fue procesado y condenado a una multa por haber explicado en clase la teoría de la evolución. También en 1925 el Gran Dragón de Indiana fue procesado con la acusación de haber violado a su secretaria; a partir de entonces, el auge del clan fue disminuyendo gradualmente. Entre los dos grandes partidos de la política norteamericana, el que más sufría la oleada de retroceso y disgregación era sin duda el Partido Demócrata, a causa de la heterogeneidad de su composición y del consenso electoral del que gozaba. Los mayores depósitos de sus votos eran, en efecto, las grandes ciudades de la Costa Este, con sus masas de inmigrantes *wets*, y los estados del Sur y del Oeste, con sus campesinos «nacidos en el país» e intransigentemente *dry*, secos. Representantes y expresión de los primeros eran hombres como el presidente Wilson o el joven Franklin D. Roosevelt, licenciado en Harvard y senador del estado de Nueva York; representantes y expresión de los segundos eran personalidades como William G. MacAdoo, secretario de estado de Economía y yerno de Wilson, o William G. Bryan, encarnizado defensor de los intereses de la provincia y de la frontera, quien dimitió de su cargo de Secretario de Estado en 1915, por no compartir la intervención americana en la guerra. Unos y otros tenían en común la animadversión hacia los banqueros de Wall Street y un culto sincero por la figura y el pensamiento de Jefferson, y por ello se reconocían en el proyecto de «nueva democracia» de Wilson y en la política reformadora de la administración que éste presidía. Pero ahora que las decepciones de la posguerra profundizaban las diferencias entre las grandes ciudades y la provincia «nativista», entre «húmedos» y «secos», las razones de esta convergencia y de esta convivencia resultaban seriamente comprometidas y la unidad del Partido Demócrata seriamente amenazada.

Ello puede explicar en parte las dificultades que Wilson encontró en los últimos meses de su presidencia, sus incertidumbres y sus errores. Cuando volvió definitivamente de la conferencia de París, en julio de 1919, él no dio prueba en el trato con sus interlocutores republicanos, que habían salido reforzados de las elecciones de medio término de 1918, de la misma ductilidad de la que había hecho gala con sus interlocutores en París. La manzana de la discordia era, como se sabe, el problema de la ratificación del tratado de Versalles y en particular el proyecto de constitución de la Sociedad de las Naciones que, tras sugerencia e insistencia del propio Wilson, constituía parte integrante del tratado mismo. Más exactamente, el Senado tenía que pro-

nunciarse sobre aquel artículo del estatuto de la Sociedad de las Naciones –todavía en el centro de la controversia– en base al cual las partes firmantes se comprometían a garantizar la independencia y la integridad de los estados miembros que fuesen víctimas de una agresión; se trataba de un compromiso que muchos senadores consideraban incompatible con la doctrina Monroe y, en cualquier caso, susceptible de envolver a Estados Unidos en un nuevo y aborrecido conflicto europeo. Confiando en su popularidad y en sus capacidades oratorias, Wilson emprendió una *tournée* propagandística en los estados del Oeste, durante la cual sostuvo calurosamente la necesidad de ratificar el tratado, pero el 25 de septiembre, en Pueblo, Colorado, sufrió un ataque de trombosis que durante varias semanas no le permitió ejercer sus funciones. Algunos intentaron persuadirle para que dimitiera, pero en noviembre el presidente ya había vuelto al trabajo, decidido a seguir en su lucha. Pero mientras tanto los opositores a la ratificación, al mando del senador Henry Cabot Lodge, habían trabajado intensamente y las posibilidades de que se aprobara el tratado parecían ya comprometidas. Wilson rechaza tajantemente la posibilidad de un compromiso, y a pesar de las sugerencias de algunos de sus colaboradores, encaró la batalla y salió derrotado. El 19 de noviembre de 1919 el Senado se expresó en sentido desfavorable a la ratificación; en la siguiente votación, ya en marzo de 1920, los partidarios de la ratificación no lograron obtener la mayoría de dos tercios que se requería. Para Wilson fue una derrota que mermó gravemente su prestigio.

Si en la política exterior Wilson había demostrado que sabía nadar contracorriente, no se puede decir lo mismo de su política interior; al contrario, pareció dispuesto a secundar los humores y los resentimientos generalizados en la opinión pública y en la clase política. Así pues, no sólo aprobó, sino que alentó las medidas represivas de Palmer durante los días del *red scare*, animándole a «no dejar que este país vea el rojo». Pero lo que más importa es que su programa reformador, basado en la atribución al Estado de poderes de intervención y de regulación de la vida económica, no sólo se detuvo, sino que sufrió cierto retroceso respecto de las iniciativas y los logros del tiempo de guerra. Los ferrocarriles, que por iniciativa de MacAdoo habían sido puestos bajo control federal, en 1919 fueron restituidos a manos privadas y se dejó caer un plan del secretario de la Marina Josephus Daniel para poner bajo control del estado las comunicaciones radiofónicas, cuyas enormes posibilidades ya se vislumbraban. Más en general, buena parte de la compleja herramienta puesta en funcionamiento para orientar y controlar el gran esfuerzo económico que se había producido durante la guerra con la institución del *War Industries Bureau*, fue abandonada al deterioro o fue desmantelada. Tampoco se registraron, en los últimos meses de la presidencia de Wilson, nuevas iniciativas en el campo de la legislación social. La única innovación, que satisfacía una tradicional reivindicación del movimiento fe-

minista y los planteamientos de los reformadores sociales, fue la concesión del derecho de voto a las mujeres, con la 19ª enmienda, aprobada en junio de 1919 y puesta en vigor en agosto de 1920, ya en vísperas de la campaña electoral. Se trataba, sin embargo, de una medida madura, ya aprobada en muchos países europeos, ya en vigor en muchos estados norteamericanos y que, gracias al aumento de la importancia del papel social y productivo de la mujer que se había producido durante a guerra, se había hecho difícilmente prorrogable. A consecuencia de la adopción de la 19ª enmienda tanto el Partido Republicano como, y en mayor medida, el Partido Demócrata se apresuraron a incluir en sus plataformas electorales una serie de reivindicaciones avanzadas por las organizaciones femeninas.

La convención demócrata, que tuvo lugar en San Francisco, fue harto laboriosa. Se necesitaron cuarenta votaciones para que al final el candidato a la presidencia fuese designado en la persona de James M. Cox, ya gobernador de Ohio, con Franklin D. Roosevelt como candidato a la vicepresidencia. Wilson, que hasta el final había concebido la esperanza de ser designado para un tercer mandato, fue dejado al margen por el aparato del partido, convencido de que su candidatura no encontraría el favor de una opinión pública radicalmente cambiada. Salía así de la escena política uno de los más grandes presidentes de Estados Unidos. En el testamento político que publicó poco antes de su muerte en 1924, el ex presidente encontará en el «exagerado egoísmo capitalista» una de las causas de la oleada revolucionaria que se había abatido sobre Europa y había prevalecido en Rusia. De ello sacaba la conclusión de que, si se quería evitar una subversión del orden internacional y una nueva y más espantosa guerra, era preciso que los Estados Unidos, que ya habían trabajado para «hacer seguro el mundo para la democracia», se empeñasen ahora con toda su influencia en difundir y reforzar esta democracia y hacer «seguro el mundo contra la revolución irracional», eliminando sus causas. Era un mensaje para el futuro, pero también era una admisión de las contradicciones y de los límites de su propia obra política.

En el campo republicano la elección del candidato a la presidencia se presentaba más factible: se trataba de elegir al hombre que mejor interpretase y encarnase el afán de vuelta a la normalidad del americano medio, el mismo que precisamente en aquellos años Sinclair Lewis representaba eficazmente en sus novelas *Main Street* (1920) y *Babitt* (1922). Este hombre se encontró en la persona de Warren G. Harding, senador de Ohio, aficionado a la buena cocina y a las buenas compañías. Candidato a la vicepresidencia fue Calvin Coolidge, el gobernador de Massachusetts que se había labrado todo un prestigio por la firmeza demostrada en ocasión de la huelga de la policía de Boston.

La lucha entre estas dos mediocridades –Coolidge y Harding– no apasionó a los electores. El porcentaje de votantes, que en las precedentes elec-

ciones había alcanzado el 71 %, bajó en las elecciones de 1920 al 49 %, en cifras absolutas poco más de veinticinco millones sobre una población de ciento cinco millones. Según había sido ampliamente previsto, la victoria del candidato republicano fue contundente: 16.125.200 votos contra los 9.147.353 de su antagonista. Eugene Debs, el candidato del Partido Socialista, que todavía se encontraba en la cárcel, recibió 920.000 votos.

Una vez elegido presidente, Harding escogió a sus colaboradores entre los hombres que gozaban de la confianza del mundo de los negocios o que eran directa expresión de éste, dejando al margen a los viejos notables del partido que habían sido protagonistas de la batalla parlamentaria contra la ratificación del tratado de Versalles o que en su tiempo habían estado al lado de Theodore Roosevelt. Andrew W. Mellon, un magnate de la industria del aluminio de Pittsburgh, fue secretario de Economía y Herbert Hoover, un *manager* con gran experiencia internacional y autor de un libro significativamente titulado *American Individualism*, fue secretario de Comercio. En Secretario de Estado se convirtió Charles E. Huges, ya gobernador del estado de Nueva York. Se trataba de decisiones meditadas y de personas de reconocida capacidad. Sin embargo otros cargos de gobierno fueron confiados a exponentes de la que se llamará la «banda de Ohio», especuladores y aventureros políticos que –como el secretario de Justicia H.M. Daugherty y el de Interior Albert B. Fall– serán responsables de malversaciones y escándalos. Tras la repentina muerte de Harding, en agosto de 1923, el vicepresidente Coolidge, que lo había sustituido, no tardó en desembarazarse de estos incómodos colaboradores y logró así levantar el prestigio de la administración sin introducir, por lo demás, ningún cambio sustancial. Los puestos clave siguieron en manos de los anteriores titulares y el rumbo de la administración siguió inspirado en los mismos principios: «El negocio más importante para los norteamericanos –había afirmado el propio presidente Coolidge– son los negocios». Le hacía eco su secretario de Economía Mellon: «El gobierno no es más que una empresa económica y puede y debe ser efectuado en base a los principios de dicha empresa».

A estos planteamientos de la administración en el poder, los demócratas no fueron capaces de oponer una línea política igualmente coherente y persuasiva. En la convención que precedió a las elecciones presidenciales de 1924 se manifestó con toda su evidencia el contraste, ya surgido desde hacía tiempo, entre los delegados del Sur y del Oeste, que sostenían la candidatura de MacAdoo, y los de los grandes centros del Este, que sostenían al gobernador de Nueva York, Alfred E. Smith, un hombre capaz surgido de la nada, pero que, a los ojos de sus detractores, tenía el defecto de ser católico y «húmedo». Los dos bandos estaban igualados y las votaciones asignaban la ventaja al uno o al otro, con márgenes muy estrechos. La más llamativa y significativa fue la que tuvo lugar a la hora de incluir en la plataforma elec-

toral una denuncia expresa del Ku Klux Klan, propuesta que sostenían los partidarios de Smith y rechazaban, más o menos abiertamente, los de MacAdoo y el viejo Bryan. Fue rechazada por un solo voto de diferencia. Al final, tras dieciséis días de discusiones encarnizadas, tuvieron que consensuar una candidatura de compromiso, John W. Davis, un brillante abogado que había trabajado en la administración Wilson como embajador en Londres y que a continuación había sido consejero legal del magnate J. P. Morgan.

Con estas premisas, el resultado de las elecciones era fácilmente previsible. Davis obtuvo ocho millones y medio de votos contra los quince de Coolidge. Casi cinco millones de votos, más del 15 % del total, fueron a parar a Robert M. La Follette, gobernador de Wisconsin, quien, siguiendo el ejemplo de Theodore Roosevelt en las elecciones de 1912, se había presentado como candidato de un «tercer partido», el «Partido Progresista». En su plataforma figuraban reivindicaciones como la propiedad pública de la energía eléctrica, la eventual nacionalización de los ferrocarriles, el convenio colectivo, un paquete de ayudas o subvenciones en favor de los agricultores afectados por las rebajas de los precios agrícolas, la abolición de las disposiciones que limitaban la libertad de huelga y un cierto número de medidas de legislación social. Todo ello bajo el signo del rechazo al «principio del individualismo despiadado y de la despiadada competencia». Se trataba de un programa en el espíritu de la tradición reformadora y «populista» y que, como tal, logró reunir un consenso relevante y en todo caso poco habitual para un «tercer partido». Pero también se trataba de un consenso socialmente heterogéneo y diversamente motivado en términos políticos. Entre los partidarios y los electores de La Follette se contaban no sólo seguidores (o nostálgicos) del populismo de Theodore Roosevelt y de la «nueva democracia» wilsoniana, sino también algunos sindicatos, el Partido Socialista y, a través del *Farmer Labour Party*, donde se habían infiltrado incluso algunos comunistas, cuyo apoyo, por otra parte, La Follette se apresuró a rechazar. La aportación de votos más consistente fue, con todo, la de la minoría étnica alemana, que no olvidaba que La Follette había sido un decidido opositor de la intervención en la guerra. En realidad el éxito del «tercer partido», que resultó especialmente llamativo en Wisconsin y en otros estados agrícolas representaba más una prueba de la crisis del Partido Demócrata y del «progresismo» –ya fuera de derivación rooseveltiana o wilsoniana–, que el nacimiento de una fuerza política en condiciones de introducirse de forma estable en el tradicional sistema bipartidista. A la muerte de La Follette en 1925, el Partido Progresista se descompuso, en efecto, en sus varios componentes y dejó de ejercer un papel político eficaz.

Durante los años veinte, pues, la hegemonía republicana fue indiscutible y por consiguiente las administraciones que se sucedieron pudieron trabajar con tranquilidad y continuidad.

El terreno donde fue más evidente la inversión de tendencia respecto de las administraciones demócratas fue el de la política exterior y de las relaciones internacionales. La orientación general fue la de devolver a los Estados Unidos su plena libertad de acción, desvinculando al país de los compromisos adquiridos durante la guerra y en la conferencia de París. En este contexto se sitúan los tratados de Washington de febrero de 1922 sobre el área del Pacífico –de los que hablaremos en su momento– y, en lo que respecta el escenario europeo, la estipulación, en julio de 1921, de un tratado de paz con Alemania. También la cuestión rusa –cuya trascendencia había sido percibida claramente por Wilson, hasta el punto de intentar establecer, a principios de 1919, un contacto con el gobierno soviético (misión *bullitt*)– fue, a su manera, solucionada, simplemente soslayándola. Ello no obstó, sin embargo, para que la administración republicana, y su dinámico secretario de Comercio Hoover, enviara consistentes ayudas humanitarias a la Rusia hambrienta. En cuanto a la Sociedad de las Naciones, el presidente Harding, nada más tomar posesión de su cargo, se apresuró a declarar que Estados Unidos excluía la posibilidad de entrar a formar parte de ellas y nombró embajador en Londres, la capital más interesada en la asamblea de Ginebra, a un notorio opositor del *Covenant*. A los tres años de la enunciación de los catorce puntos, que tantas esperanzas y tantas ilusiones habían despertado en este lado del Atlántico, Norteamérica daba la espalda a Europa y renunciaba al designio wilsoniano de un liderazgo internacional, retirándose –para utilizar un término que precisamente en aquellos años se hizo corriente– en su «aislacionismo».

En un mundo que, si había dejado de ser un sistema, seguía, no obstante, siendo interdependiente, las relaciones internacionales no se limitaban, sin embargo, a las tradicionales relaciones diplomáticas, sino que implicaban una compleja red de correlaciones, a partir de las económicas. Los datos relativos a la balanza comercial, comparando entre anteguerra y posguerra, son elocuentes: mientras que las importaciones, especialmente las de productos acabados, sufrieron entre 1911-1913 y 1926-1929 un importante retroceso, las exportaciones registraron un incremento muy fuerte. Durante la guerra las fábricas americanas habían trabajado a pleno ritmo y el desempleo había bajado. La guerra, como dijo con amargura un pacifista, Randolph Bourne, se había revelado como «la salud de la nación».

En consecuencia, Estados Unidos se había convertido con diferencia en el mayor acreedor internacional. Sus créditos con los países aliados ascendían a más de nueve mil millones de dólares, una cantidad casi astronómica. Si, como exigía imperiosamente la opinión pública norteamericana, esas deudas tenían que ser pagadas, era preciso poner a los países deudores en condiciones de pagar y una de las posibles soluciones era la de alentar sus exportaciones, abriéndoles el mercado americano. Ése había sido el camino

sugerido por Wilson, pero no el que siguieron las administraciones republicanas. Bajo el azote de la recesión de 1921 y del consiguiente crecimiento del desempleo, con dos leyes sucesivas, el *Emergency Tariff Act* de 1921 y el *Fordney-McCumber Act* de 1922, las tarifas proteccionistas ya existentes tanto sobre los productos agrícolas como sobre los industriales, fueron sensiblemente aumentadas, mientras, al mismo tiempo, se alentaba a los bancos para que ayudasen a las exportaciones americanas mediante la concesión de préstamos al exterior. Casi simultáneamente se redujo la emigración transoceánica, que para muchos países europeos y extraeuropeos había sido y seguía siendo una tradicional válvula de seguridad. Sólo entre junio de 1920 y el final de 1921 se habían registrado ochocientos mil nuevos inmigrantes, procedentes en su mayoría de Europa oriental. Alarmado por las consecuencias económicas y políticas que semejante afluencia masiva podía provocar en un país donde se contaban, a causa de la recesión, cinco millones de parados, el Congreso votó en 1921 una medida –el *Johnson Act*– a la que en su día Wilson había opuesto su veto; en base a ella la cuota anual de inmigrantes se fijaba para cada país de origen en el 3 % de las respectivas cuotas, sobre la base del censo de 1910. Resultó una cuota anual de 358.000 inmigrantes, 200.000 para los países de la Europa septentrional y 155.000 para los de la Europa meridional y oriental, que vinieron así a ser los más desfavorecidos. Sucesivamente, en 1924, esta cuota se redujo aún más, hasta el 2 % sobre la base del censo de 1890 y finalmente, en 1929, sufrió una enésima rebaja al bajar a la cifra absoluta de 150.000 inmigrantes al año. En 1931 las llegadas desde Europa fueron 23.068, la cifra más baja desde el lejano 1831. Restricciones análogas se adoptaron también para con los países asiáticos y africanos. La nación más afectada fue Japón, lo que no dejó de influir de forma negativa, como veremos, en sus relaciones con los Estados Unidos. La inmigración quedaba abierta sólo a los países fronterizos (México y Canadá), pero esto no fue suficiente para que no se mantuviera en un nivel elevado, aunque muy inferior al de la anteguerra y de la inmediata posguerra. Del máximo de 1.218.000 inmigrantes de 1914 se había bajado a 355.000 en 1927.

Todo ello hacía más difícil, cuando no imposible, el pago de las cantidades debidas por parte de los países deudores. Hubieran podido hacerlo más fácilmente si a su vez Alemania les hubiese pagado las ingentes reparaciones que ellos reclamaban. Para que eso fuera posible, sin embargo, se necesitaba una negociación multilateral, que afrontara de forma conjunta la cuestión de las deudas aliadas y la de las reparaciones alemanas, pero las administraciones republicanas, a pesar de las repetidas solicitudes que, como veremos, le llegaron tanto de parte inglesa como de parte alemana, no se tomaron en serio esta solución, amparándose en el argumento de que los Estados Unidos habían renunciado a exigir reparaciones de Alemania. No que-

daba pues otro camino que el de las negociaciones bilaterales con cada uno de los países deudores. Entre 1923 y 1926 se negociaron, así, reducciones y dilaciones con trece países, incluidos Francia, Inglaterra e Italia, que obtuvo condiciones especialmente ventajosas. Fue sólo en 1924, con el plan Dawes, cuando los Estados Unidos, como veremos, aceptaron de hecho el principio de una solución multilateral, que por lo demás tampoco conllevaba una implicación política por parte de la administración.

En la política interior el giro que dio la administración republicana fue menos acentuado, especialmente si se tiene en cuenta –como ya se ha constatado– que ya en los últimos tiempos de la administración Wilson la política de reformas había registrado un seco frenazo. Por otra parte, algunas reformas introducidas durante el conflicto no podían ser tocadas y menos aún anuladas, ya que representaban unas conquistas sociales ya consolidadas. Así la jornada de ocho horas, que había sido introducida durante la guerra en todas las industrias implicadas en la producción bélica, no sólo se mantuvo también después de la reconversión, sino que se extendió a otros sectores productivos. El promedio del horario de trabajo semanal en los años veinte rondó las cincuenta horas. Quedó en vigor también la ley *antitrust* Clayton de 1914, por la cual las actividades de las organizaciones sindicales no podían ser suprimidas por orden de los tribunales federales, pero con frecuencia fue burlada y violada. Un proyecto de enmienda a la Constitución para mejorar la legislación sobre el trabajo de los menores no encontró aplicación a causa de la oposición de muchos estados. Por contra, en otros casos las rémoras de la administración y del Congreso fueron obviadas o burladas por las legislaciones de los estados, que actuaron así como suplentes, con iniciativas autónomas de reforma. Finalmente, por lo que respecta a los conflictos del trabajo, no faltaron episodios de represión y de ilegalidad, pero eso no constituía en absoluto algo nuevo de por sí.

Así pues, si no hubo consistentes pasos atrás en la legislación social, tampoco hubo pasos hacia adelante en la política de reformas. El proyecto de nacionalización de los ferrocarriles, ya dejado a un lado por Wilson, quedó en nada y la larga batalla del senador George N. Norris a favor de la propiedad pública de las fuentes de energía, batalla que tuvo su epicentro y su símbolo en la central hidroeléctrica de Muscle Shoals, en Tennessee, tropezó con los dos vetos sucesivos de los presidentes Coolidge y Hoover. Tampoco en el sector agrícola, que padecía una fase de grave depresión, las administraciones republicanas asumieron iniciativas consistentes para paliar las dificultades de los numerosos cultivadores obligados a endeudarse o a hipotecar sus propiedades. Las repetidas tentativas del secretario de Agricultura James J. Wallace de poner en marcha una serie de medidas a favor de los agricultores encontraron la tajante oposición de su compañero Hoover. Tras la muerte de Wallace, en 1924, prosiguieron su batalla su hijo Henry Agard,

el senador de Iowa Gilbert H. Haugen y el congresista de Oregon McNary. Estos últimos lograron hacer aprobar un proyecto de ley en 1927, pero éste también fue bloqueado por el veto presidencial.

En conjunto, no nos apartamos de la realidad si afirmamos que la política interior de la administración republicana durante las presidencias de Harding y Coolidge se caracteriza no tanto por lo que hizo o deshizo, sino por lo que dejó que se hiciera. Si el negocio de Estados Unidos eran los negocios, éstos tenían que dejarse en manos de los que sabían cómo manejarlos, en primer lugar a los empresarios. Hay que decir que estos últimos se mostraron a la altura de la confianza que se les había concedido. En efecto, una nueva mentalidad empresarial, profundamente distinta de la de las precedentes generaciones de empresarios, estaba surgiendo y afianzándose poco a poco. Según esta mentalidad, el beneficio ya no se concebía únicamente como un objetivo a perseguir por sí mismo, sino como un elemento más de un sistema económico integrado y sano. En la práctica ello significaba ante todo que las funciones de las empresas consistían no sólo en la producción y venta de sus productos, sino en la ampliación del mercado y, por consiguiente, en asegurar al consumidor el poder adquisitivo adecuado. En segundo lugar, ello significaba que hacía falta persuadir al consumidor para no atesorar, sino para gastar la mayor capacidad de gasto conseguida. La vieja moral de la parsimonia, tal y como se había predicado tradicionalmente, era reemplazada por la nueva filosofía del consumo y algunos llegaban a sostener que el ahorro habían dejado de ser una virtud. A la luz de esta filosofía el empresario cobraba así una nueva dimensión, la del *manager*, una suerte de «ingeniero social» al servicio de la colectividad.

Es evidente, incluso obvio, que no todos los industriales eran, y tampoco se consideraban a sí mismos, ingenieros sociales, pero tal fue sin duda Henry Ford. Si las ideas personales de éste eran las de un conservador, como empresario fue un innovador genial. En efecto, él fue el primero en aplicar sistemáticamente en sus establecimientos las teorías tayloristas sobre la organización científica del trabajo, introduciendo la cadena de montaje y apostando por la estandarización del producto. Ello le permitió reducir el precio de sus automóviles de los ochocientos veinticinco dólares de 1908 hasta los doscientos sesenta de 1925, haciendo así que fuesen asequibles para un abanico mucho más amplio de consumidores. Los mayores beneficios así obtenidos le permitieron a su vez practicar una política de salarios altos y reducir la semana laboral. El modelo de automóvil T, cuya producción comenzó en 1908, en 1919 había alcanzado el medio millón de ejemplares, para llegar a los dos millones en 1923. En su conjunto, la producción automovilística norteamericana alcanzó en 1929 las 4.800.000 unidades, el 88 % de toda la producción mundial. El automóvil, cuyo uso tanto el republicano Theodore Roosevelt como el demócrata Wilson habían considera-

do indecente para las personas respetables, se convertía así en consumo de masas y Estados Unidos en el primer país del mundo con la necesidad de enfrentarse a los problemas de una motorización a gran escala. El advenimiento del automóvil supuso cambios profundos y duraderos en las formas de asentamiento humano en el territorio, especialmente en los grandes centros urbanos. Fue durante la década de los años veinte cuando las grandes ciudades norteamericanas comenzaron a tomar la fisonomía que hoy nos es familiar: un centro donde tienen su sede los bancos y las oficinas de las grandes *corporations*, con sus rascacielos (la construcción del Empire State Building data de 1930); una corona de zonas residenciales donde viven mayoritariamente las familias de la clase media; y los barrios populares, donde se hacinan los menos acomodados y los marginados. El automóvil tuvo además un efecto de arrastre sobre toda una serie de sectores productivos, en particular sobre la construcción de infraestructuras y la industria del petróleo de Tejas y California y, más en general, tuvo un papel determinante en el poderoso proceso de crecimiento que Estados Unidos conoció a lo largo de los años veinte y que todos los principales indicadores económicos –del de la producción industrial al de la renta *per capita*– están de acuerdo en testimoniar. Este crecimiento fue sostenido y ampliado gracias a las nuevas formas del sistema de distribución, ahora dominado por las cadenas de los grandes almacenes, por la extensión de la venta a plazos y, sobre todo, por la publicidad, cada vez más omnipresente e invasiva. Uno de sus vehículos más eficaces era la radio, cuyas ventas experimentaron un crecimiento vertiginoso: de los cien mil aparatos de 1922 a los dos millones y medio de 1925. Cuestión controvertida y complicada es la que se refiere a la distribución de este flujo de prosperidad entre las distintas clases sociales. Resulta obvio que el mayor provecho redundó en los propios beneficios y es consabido que los que se beneficiaron poco o nada de dicha prosperidad fueron los campesinos, que en una coyuntura de precios menguantes como la de los años veinte no podían hacer frente a las deudas por inversiones contraídas en años de coyuntura alta y de precios elevados como había sido la de los años de guerra. Muchos de ellos se convirtieron así en arrendatarios de los mismos terrenos de los cuales habían sido antaño propietarios. Las cosas se complican si tomamos en consideración la amplísima faja intermedia. Una estadística de 1929 nos revela que menos de una tercera parte de las familias americanas gozaba en aquel período de una renta superior al nivel del *decent living*, fijado en dos mil quinientos dólares anuales, un nivel, por otra parte, superior al de los demás países industrializados. En todo caso, es notorio que los salarios crecieron en una medida menor que la productividad, pero también es notorio que entre 1921 y 1929 la tasa de desempleo bajó del 11,9 % al 3,2 % de la población activa.

Cualesquiera que puedan ser las conclusiones de un análisis sobre la distribución de la renta, lo que merece ser subrayado es que a la coyuntura alta

no correspondió un aumento de la conflictividad social: entre 1920 y 1928 la cifra total de huelguistas disminuyó de un millón trescientos mil a trescientos mil. La mayor organización sindical, la *American Federation of Labour*, vio cómo sus afiliados se reducían de cinco millones a menos de tres millones y el movimiento reivindicativo conoció una época de estancamiento, aunque cosechó algunos éxitos como la limitación y, en ciertos casos, la prohibición del trabajo infantil por debajo de los catorce años en la mayoría de los estados. Ello fue, por un lado, la consecuencia de la intransigencia de algunos empresarios y de la práctica del *open shop*, en virtud del cual la libertad de contratación por parte de los empresarios a menudo se resolvía en una discriminación hacia los trabajadores sindicados; por otra parte, dependía del espejismo de los salarios altos, practicado por algunos industriales, pero también, en una medida considerable, de la incapacidad por parte de los sindicatos, con sus estructuras corporativas, de representar a una clase obrera heterogénea, formada en gran medida por ex campesinos e inmigrantes de «segunda generación» ansiosos de integrarse en la sociedad americana. Las asociaciones femeninas y feministas también vivieron un período de estancamiento, posiblemente porque la ocupación femenina, que había crecido de forma impetuosa durante la guerra, aumentaba ahora con un ritmo más lento y se quedaba limitada a los trabajos menos cualificados y más temporales. En cuanto a las asociaciones de color, a cuya cabeza estaba la *National Association for the Advancement of Coloured People*, todavía se encontraban en una fase de ensayo y estaban divididas entre los partidarios del «retorno a África», propugnado por el jamaicano Marcus Garvey, y sus opositores.

El cuadro esbozado hasta aquí es, pues, el de un vertiginoso proceso de crecimiento económico, de urbanización y modernización que se pone en marcha en el marco de una sustancial estabilidad política. Eso no significa, obviamente, que los que han pasado a la historia como los *roaring twenties*, los locos años veinte, hayan transcurrido bajo el signo de la euforia general y del conformismo masivo, sin frustraciones y sin traumas. Estaban las frustraciones de los ricos y de la *middle class*, cuya manifestación más evidente fue la verdadera chaladura por las teorías y las prácticas psicoanalíticas, a la zaga de un freudianismo de oídas. Y estaban las frustraciones de los pobres y los inmigrantes que llenaban los *speak-easy*, los locales semiclandestinos donde se podían conseguir bebidas alcohólicas a pesar de los reglamentos prohibicionistas. Y había, en fin, como manifestación extrema del malestar social, la violencia de la criminalidad y del gangsterismo en los grandes centros urbanos; un *crescendo* que llegó a su cenit en la celebérrima masacre de san Valentín, el 14 de febrero de 1929.

Pero el cuadro psicológico de los años veinte no se agota en la euforia de los integrados y en las frustraciones de los marginados. La inmigración del campo a la ciudad, el automóvil, la radio e incluso la publicidad no sólo mo-

dificaron la conformación de las ciudades y del paisaje, sino que afectaban también a las mentalidades, las costumbres y los comportamientos, estimulaban nuevos gustos y nuevos intereses, contribuían a la afirmación de nuevos valores. Fue durante los años veinte cuando la música jazz salió de los locales de las gentes de color para conquistar a la juventud americana y también fue en los años veinte cuando las relaciones entre los dos sexos conocieron una evolución acelerada, que apuntaba a una caída o una relajación de los arraigados prejuicios de la tradición puritana y a la conquista de una mayor libertad. En 1929 el número de divorcios se había duplicado en comparación con 1910 y la práctica de la anticoncepción ya no era *tabú*.

Todo ello quedaba, sin embargo, limitado a la esfera privada y no se traducía, *por ahora*, en una participación activa en la vida pública. Hacia esta última el talante mayoritario (tal y como indicaban, por lo demás, las cifras de la participación en las elecciones) era de indiferencia y desinterés, episódicamente interrumpidos por momentos de emotividad colectiva, cuando, como en un *happening*, la nación recuperaba el sentido de su unidad y de su orgullo. Eso pasó, por ejemplo, con ocasión del vuelo transoceánico de Lindbergh en 1927. «Una de las características de la era del jazz –escribió Scott Fitzgerald– fue la de no tener ningún interés por la política». Los que no aceptaban el conformismo oficial estaban, en este *vacuum*, destinados ellos también a la frustración, la misma frustración de los personajes de Fitzgerald, o a la ostentación de excentricidad. Es el caso de la *flapper*, la mujer que con su indumentaria y su comportamiento exhibía su emancipación y su desdén hacia las convenciones; o de los intelectuales «airados». El más extremista y provocador de ellos, H.L. Mencken, llegó a convertir en blanco de su escarnio a todos los hombres y las instituciones de la respetabilidad norteamericana, hasta la misma democracia, que en su opinión no era más que una mezcla de «crueldad, envidia y cobardía».

En las elecciones presidenciales de 1928 los republicanos presentaron la candidatura de Herbert Hoover, verdadera encarnación de la eficiencia empresarial. Los demócratas se le opusieron con el gobernador de Nueva York, Alfred E. Smith, quien, como se recordará, en 1924 había tenido que renunciar por la oposición a su candidatura de los delegados del Sur y del Oeste. Éste condujo una campaña electoral poco agresiva, antes bien tímida y reticente: en lugar de apostar por sus convicciones progresistas, se esforzó en camuflarlas, hasta el punto de encomendar la dirección de su campaña a un conocido industrial, John J. Raskob, decisión que Franklin D. Roosevelt consideró un grave error. En ausencia de una seria confrontación sobre temas políticos, el tema dominante de la campaña acabó siendo una vez más el trillado de la contraposición entre «húmedos» y «secos». Una vez más, los reflejos condicionados de la tradición y el temor de interrumpir el ciclo de prosperidad que duraba ya desde hacía años jugaron a favor del candida-

to republicano, quien superó a su antagonista en casi todos los estados, incluido el de Nueva York. No obstante, Al Smith cosechó seis millones de votos más que los que había cosechado el candidato demócrata en las precedentes elecciones, y en las doce mayores ciudades del país, donde en 1924 los republicanos habían ganado con una ventaja de 1.300.000 votos, los demócratas prevalecieron, aunque con un margen exiguo. Era la primera señal del despertar del partido y de los ideales demócratas. Pero será necesaria la crisis económica más devastadora de toda historia americana para que éstos saliesen impetuosamente a la luz.

Por entonces ya los Estados Unidos ofrecían al mundo un modelo de sociedad y de convivencia totalmente nuevo e inédito. Gracias a las películas producidas en los estudios de Hollywood la imagen de este país rico y extrovertido, con sus calles rebosantes de automóviles, con sus gángsters y sus millonarios, con sus «americanadas», provocaba en los espectadores europeos y de todo el mundo una reacción en la que la incredulidad y la ironía se entremezclaban con la envidia y la atracción.

3

La Unión Soviética de Lenin a Stalin

3.1. LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE

Que en un país atrasado como era Rusia una revolución socialista era prematura hasta que no se alcanzara el nivel superior de desarrollo y de civilización de las naciones de la Europa occidental era un presupuesto básico de la cultura del movimiento socialista y del marxismo. En su primera obra, el joven Lenin había polemizado vivamente –como se puede observar por el propio título (*El desarrollo del capitalismo en Rusia*)– con los populistas y su concepción según la cual Rusia podía «saltarse» la fase de la revolución burguesa y del desarrollo capitalista, para pasar directamente a un socialismo propio, es decir, que se remontara a la tradición del *obina* y del *mir*. Como marxistas que eran, los mayores representantes de las varias corrientes en que se dividía el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso –incluidos los bolcheviques–, seguían estando convencidos de que el paso a una revolución socialista no estaba en el orden del día y eso explica la actitud de espera, más o menos benevolente, que ellos adoptaron en un primer momento para con el gobierno provisional. Entre los pocos que no compartían este punto de vista se encontraban Trotsky y Lenin, que en abril había vuelto de Suiza después de un largo viaje a través de Alemania en un tren precintado.

Vladimir Ilich Ulianov, apodado Lenin, había pasado buena parte de su vida en la emigración. Como todos los emigrados, había leído mucho y era quizá el más culto de los exponentes del socialismo europeo; pero no por ello era un doctrinario, o incluso un fanático, como se le suele presentar en algunos estudios recientes. En los ambientes del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso y en los de la Internacional Socialista se le conocía por sus posturas radicales y por su tajante intransigencia, un compañero incómodo, pero siempre un compañero. El propio Lenin, por otra parte, se consideraba

un socialdemócrata y a la muerte de Bebel, en 1913, le dedicó una necrológica en que rendía homenaje a la figura del dirigente de aquella socialdemocracia alemana por la que sentía respeto y a la que reconocía una función de guía. Y cuanto mayores habían sido este respeto y este reconocimiento, tanto más se sintió Lenin afectado por la decisión de la socialdemocracia alemana de votar a favor de los créditos de guerra y de sumarse a la *Bürgerfriede*. En sus escritos de los años de guerra el resentimiento para con los «traidores de la Segunda Internacional» tiene los acentos del livor. Kautsky, que durante tantos años había sido un maestro, se había convertido en un «renegado». Pero al margen de los excesos verbales e intelectuales, Lenin, como político realista que era, captaba un aspecto esencial: se daba cuenta de que algo irreparable había pasado y que el movimiento socialista se encontraba ahora en la necesidad de atravesar territorios inexplorados y afrontar aguas peligrosas. No obstante, él estaba decidido a seguir en su labor de «revolucionario de profesión» y a arriesgarse. *On s'engage et puis on voit*, afirmará en uno de sus últimos escritos. Por ello no dudó en negociar con los alemanes su regreso a Rusia, consciente de las críticas a que se enfrentaba, y subió al vagón precintado.

Ya desde su llegada a la estación de Finlandia de Petrogrado se declaró contrario a cualquier apoyo al gobierno provisional y en favor de la formación de un gobierno que fuera expresión de los soviets de los obreros, de los soldados y de los campesinos, que se habían venido formando y que representaban un punto de referencia para sectores muy amplios de la población. La consigna, que él enunció por primera vez en sus *Tesis de abril*, era, pues, «todo el poder a los soviets». El cometido de este gobierno, una vez tomada posesión, sería poner fin a la guerra, confiscar los terrenos de los grandes propietarios, reducir los bancos bajo su control. Lenin, come se ha visto, estaba convencido de que semejante gobierno revolucionario no podía sobrevivir si se quedaba aislado. Por tanto, proponía que se promoviera la formación de una Tercera Internacional que rompiera con los partidos del socialismo europeo que habían sostenido a los respectivos gobiernos y colaborado con ellos en el transcurso de la guerra, y que apoyara, por contra, los movimientos que en cada país luchaban para una solución revolucionaria.

A muchos, y en un primer momento a sus propios compañeros de partido, incluido Stalin, esas posiciones les parecían excesivas, cuando no aventuradas. Sin embargo, el exceso estaba ya en los hechos: la guerra seguía, pero los soldados *ya* se negaban a luchar; el gobierno provisional tergiversaba la puesta en marcha de la reforma agraria, pero los campesinos *ya* ocupaban las tierras de los *pomešiki*. A medida que la situación se hacía más tensa e incontrolada, las ideas de Lenin hacían mella y aparecían como una salida posible del caos y de la disgregación.

Era un hecho, sin embargo, que en los soviets de las dos mayores ciudades –Petrogrado y Moscú–, que hubieran tenido que ser las avanzadillas

y las protagonistas de la nueva revolución, los bolcheviques estaban en minoría frente a los socialrevolucionarios y a los mencheviques. En las localidades menores, los soviets eran sustancialmente unos órganos de autogobierno local, cuya principal preocupación era la de garantizar el abastecimiento de su ciudad o aldea, incluso a costa de bloquear los abastecimientos dirigidos a otros centros y a la capital hambrienta. ¿Cómo se podía pensar que semejantes órganos estuviesen en condiciones de dirigir y canalizar un proceso revolucionario resistiendo los apremios extremistas y «plebeyos» presentes en el subproletariado de Petrogrado o entre los marineros de Kronstadt? Y sobre todo, ¿cómo se podía pensar que los soviets estuviesen en condiciones de ejercer y mantener el poder una vez que lo hubiesen conquistado?

Desde los tiempos de la escisión de los mencheviques, Lenin se había pronunciado en favor de un partido de cuadros, de «revolucionarios profesionales», organizado según el modelo del «centralismo democrático»; un partido, en suma, como él mismo lo había teorizado en una de sus primeras obras, el *¿Qué hacer?* Y así era el Partido Bolchevique. En el momento de la revolución de octubre contaba con tan sólo entre cien y doscientos mil miembros, una pequeña minoría, pero se trataba de hombres entregados en cuerpo y alma a la causa de la revolución, capaces de obedecer, pero también –si las circunstancias lo exigían– de mandar y de asumir la responsabilidad de sus iniciativas. Era con este partido con el que contaba Lenin: a quienes durante una reunión le objetaban que no existía en Rusia ningún partido capaz de tomar el control de la situación, él contestaba que este partido existía y era el suyo. Sus palabras provocaron risas, pero los acontecimientos no tardarían en demostrar que no se trataba sólo de presunción o fanatismo, sino también, y sobre todo, de clarividencia en el análisis y de audacia.

En julio Petrogrado fue escenario de manifestaciones y de huelgas de carácter en gran medida espontáneo e insurreccional que los bolcheviques habían considerado prematuras, pero que igualmente intentaron acaudillar. El intento fracasó y el Partido Bolchevique fue disuelto, Lenin tuvo que huir a Finlandia y Trotsky fue arrestado. En agosto Kerensky, que mientras tanto había sido investido de plenos poderes, tuvo que afrontar otra amenaza, procedente de las tropas al mando del general contrarrevolucionario Kornilov, que marchaba hacia Petrogrado con el objetivo de barrer el gobierno provisional. Este último se salvó gracias a la movilización de los obreros, de los soldados, de los marineros, organizados principalmente por los bolcheviques. Uno de ellos, Antonov-Ovseenko, destacó por haber logrado bloquear o desviar los trenes militares que se dirigían a la ciudad.

Tras estos acontecimientos la popularidad de que gozaban los bolcheviques no cesó de aumentar, lo que les permitió conquistar la mayoría en los soviets de Moscú y Petrogrado. Este último eligió como su presidente a Trotsky.

El gobierno provisional, a su vez, del que ya no formaban parte los cadetes, parecía cada vez más incapaz de tomar decisiones, mientras se acercaba el peligro de una avanzada alemana hacia Petrogrado. Existían, en conclusión, todas las condiciones para la revolución que Lenin había imaginado ya desde su regreso, pero no era seguro que las cosas no pudieran cambiar rápidamente. Si los alemanes ocupaban Petrogrado, la revolución perdía su capital. Se trataba, pues, de extraer las consecuencias y de escoger el momento favorable.

El 10 de octubre (según el antiguo calendario) el comité central del Partido Bolchevique, en presencia de Lenin, quien había regresado de Finlandia, se pronunciaba, con el voto contrario de Zinóviev y Kámenev, a favor de la insurrección. El día establecido fue el 25 de octubre (7 de noviembre), cuando se reuniría el II Congreso de los soviets de toda Rusia. Se cumplió con los planes: en el día fijado los insurrectos ocuparon los puntos estratégicos de la ciudad y el Palacio de Invierno sin encontrar prácticamente ninguna resistencia. Kerenski abandonó la ciudad. El Congreso de los soviets, que se reunió al día siguiente, se encontró –tal y como los bolcheviques habían previsto y deseado– ante el hecho consumado. Los delegados mencheviques y socialrevolucionarios se negaron a aceptarlo y abandonaron el congreso, con el resultado de que los delegados bolcheviques decidieron la deposición del gobierno provisional y la elección de un Consejo de comisarios del pueblo presidido por Lenin sin oposición alguna.

Como se observa a través de esta somera reconstrucción de los acontecimientos, la toma del poder por parte de los bolcheviques había sido posible gracias a una serie de circunstancias, algunas de ellas casuales, y a los errores de sus adversarios. El propio Lenin, en su *Estado y Revolución*, escrito durante su retiro forzoso en Finlandia, había definido la revolución como «un arte». Una vez más, él había actuado según la lógica de *on s'engage et puis on voit*. La definición de «golpe de Estado», si sólo se aplica a las jornadas de octubre, no carece del todo de fundamento.

En efecto, el nuevo gobierno revolucionario estaba muy lejos de estar consolidado. De hecho, si los bolcheviques eran ampliamente mayoritarios en Petrogrado y Moscú, no lo eran en las provincias y en todo el país. Los resultados de las elecciones de la Asamblea constituyente, que el gobierno provisional había accedido a convocar *in extremis* y que se celebraron a partir del 12 de noviembre, lo demostraron: los bolcheviques obtuvieron el 25 %, concentrado generalmente en las mayores ciudades y en algunos distritos industriales, los mencheviques el 4 %, los cadetes el 14 %, mientras que el partido más votado resultó ser el de los socialistas revolucionarios, que eran tradicionalmente el partido de confianza de la población campesina.

Amenazaba con volver a producirse, con los papeles invertidos, la situación de «dualismo de poder» que se había dado entre febrero y octubre. Ante esta perspectiva los bolcheviques no dudaron en disolver la nueva

asamblea (18 de enero de 1918). Desde luego, ni Lenin ni sus compañeros sentían la menor simpatía por la democracia parlamentaria y, al contrario, afirmaban que una democracia directa, basada en los soviets, era «mil veces» superior a la que ellos llamaban «democracia formal» o burguesa. Pero no sólo se trataba de esto: ellos sabían también que la aventura que habían emprendido era difícil y eran conscientes de que disponían de poco tiempo. Así que tenían prisa y no estaban dispuestos a demorarse.

3.2. EL COMUNISMO DE GUERRA

El 8 de noviembre, un día después de haberse adueñado del poder, el Consejo de los comisarios del pueblo promulgó dos decretos, uno sobre la paz y otro sobre la tierra. Del primero ya hemos hablado anteriormente; nos queda hacer mención del segundo, que no fue menos importante.

El decreto sobre la tierra y la subsiguiente ley fundamental sobre la repartición de las tierras, de enero de 1918, realizaron una redistribución de las tierras del estado, de la Iglesia y de los *pomeshiki* a favor de los campesinos, redistribución que en ciertas regiones se realizó en la forma integral de la llamada «repartición negra». Esta decisión, que en gran medida era la ratificación de un hecho ya consumado, contribuyó a favorecer un acercamiento con los socialistas de izquierda, en cuyo programa esta medida figuraba desde hacía tiempo, pero también sirvió para ensanchar desde las grandes ciudades al campo el área del consenso o de expectación benévola hacia el nuevo gobierno. Era necesario, sin embargo, asegurar el abastecimiento de las ciudades y con ese objetivo, en mayo-junio de 1918, fueron promulgados una serie de decretos con los que se limitaba, hasta prácticamente prohibirlo, el comercio del trigo y se instauraba una suerte de «dictadura alimentaria» realizada a golpe de requisiciones *manu militari*. En comparación con el decreto del 8 de noviembre el cambio era brusco, con la consecuencia de que el margen de consenso entre los campesinos se fue reduciendo. El gobierno soviético intentó encontrar un punto de apoyo en los campos, promoviendo la formación de comités de campesinos pobres (*kombedy*), con el objetivo de aprovecharse del antagonismo entre estos últimos (*bednaki*) y los campesinos medianos (*serednjaki*) y ricos (*kulaki*), que se habían beneficiado en mayor medida de la distribución de las tierras. Los *kombedy* no duraron mucho (fueron suprimidos a principios de 1919), pero el principio y la práctica de la lucha de clases ya habían sido introducidos en los campos y en el *mir*, causando desgarros. Es más: hay estudiosos que mantienen que estas medidas, en lugar de ser una consecuencia de la guerra civil, fueron una de sus causas, dada su intempestividad y falta de maduración, y que la misma guerra civil se hubiera podido evitar si en la prima-

vera de 1918 se hubiesen adoptado aquellas medidas de liberalización comercial que se tomaron en 1921 con el viraje de la NEP (Medvedev, 1978).

Es cierto que si el poder soviético hubiese carecido de apoyo en el campo, no hubiese podido superar la prueba terrible de la guerra civil, pero también es cierto que la actitud de los campesinos durante la guerra –fuera de pasividad, de neutralidad o incluso de apoyo– se explica más por el temor –que la experiencia de las zonas ocupadas por los blancos había demostrado que era fundado– de un retorno de los *pomeshiki*, que por motivaciones positivas.

Sea como fuere, es seguro que el principio de la guerra civil coincidió con el giro de los bolcheviques en la política agraria, cuando no fue una consecuencia de ello. En efecto, fue en junio de 1918 cuando un contingente checoslovaco de sesenta mil hombres, que tenía que ser enviado a Vladivostok a través del transiberiano, se negó a dejarse desarmar y entró en conflicto con las autoridades soviéticas locales. Fue la señal del inicio de una guerra civil que se prolongaría durante dos años y costaría la vida de millones de seres humanos. Su desarrollo fue muy confuso, especialmente en Ucrania, en el Cáucaso y en las regiones de Asia central, donde los conflictos políticos se sumaron y se mezclaron con los de las diversas etnias, y conoció fases alternas: hubo momentos en que los ejércitos de los generales blancos, que operaban en varios frentes y eran apoyados por Francia, Inglaterra y Japón, estuvieron cerca de alcanzar la victoria, pero al final el poder soviético pudo resistir y superar la fase más difícil. Esto fue posible, en una medida considerable, gracias a la colaboración de los llamados *spezy*, oficiales del disuelto ejército zarista, los cuales, con tal de evitar la disolución del país, eligieron servir en el ejército rojo. Sobre su utilización se produjo un agrio contraste entre Trotsky, presidente del consejo militar revolucionario, y Stalin, que en cambio era contrario: el anuncio de una rivalidad política y personal que se manifestaría de forma dramática más adelante.

A principios de 1920 la guerra civil estaba ya finalizando, cuando un nuevo peligro se fue acercando. A finales de abril las tropas polacas cruzaron la frontera soviética y el 6 de mayo ocuparon Kiev, con la intención de reunirse con el ejército blanco del general Wrangel, que actuaba en la Rusia meridional. En julio el ejército rojo pasó al contraataque, reconquistó Kiev, y avanzó en profundidad en territorio polaco. La caída de Varsovia se consideraba inminente y los delegados llegados a Moscú para el II Congreso de la Internacional Comunista seguían sobre un mapa instalado en la sala del congreso los avances del ejército soviético, confiando en que la avanzada y las victorias de éste serían la señal para una reactivación del movimiento revolucionario en los baluartes del Occidente capitalista. Se producía así una situación en la que quedaban de manifiesto todas las cuestiones que no habían sido solucionadas anteriormente y se imponían decisiones llenas de consecuencias. ¿Era preciso escoger la ocasión favorable para profundizar

en los contactos ya tomados con las diplomacias occidentales y aceptar la oferta de mediación en el conflicto ruso-polaco ya avanzada por Inglaterra, o bien era preciso avanzar hacia Varsovia y apostar por una escalada revolucionaria en el corazón de Europa?

Igual que en el caso de Brest-Litovsk, también en esta ocasión el grupo dirigente bolchevique se encontró dividido, pero con respecto a entonces las partes se habían invertido. Porque esta vez fue Lenin el que defendió la opción de la guerra revolucionaria, mientras que Trotsky, apoyado por Radek y Rykov, se pronunció en contra de la prosecución de la ofensiva. Con todo, los acontecimientos impusieron una decisión: a mediados de agosto los polacos, al mando del general Pilsudsky, pasaban a su vez al contraataque, obligando al ejército rojo a una retirada tan rápida como lo había sido su avance. En octubre la República Soviética Federativa Socialista Rusa (RSFSR) y Polonia firmaban un armisticio y en marzo de 1921 la paz de Riga fijaba la frontera entre los dos estados en las líneas ocupadas por los dos ejércitos en el momento del cese de las hostilidades: una solución más desfavorable, para la RSFSR, que la opción propuesta pocas semanas atrás por el ministro de Exteriores inglés Curzon, basada en un criterio étnico. En cambio el ejército soviético pudo concentrar sus esfuerzos en la liquidación de las formaciones contrarrevolucionarias blancas y en diciembre los restos de las huestes de Wrangel abandonaban por vía marítima la Rusia meridional. El poder soviético salía así definitivamente vencedor de la guerra civil. El precio de esta victoria fue sin embargo muy elevado, no sólo en términos humanos, sino también políticos.

Los bolcheviques definían el estado a cuya cabeza estaban como una dictadura del proletariado, de la cual eran expresión los soviets. De hecho, se trataba de la dictadura de un partido: la colaboración con los socialistas revolucionarios de izquierda, puesta en marcha desde noviembre de 1917, no había sobrevivido a la crisis de las relaciones entre los dos partidos, que se había producido a consecuencia de la paz de Brest-Litovsk, no compartida por los socialistas revolucionarios, y del nuevo curso de la política agrícola que, como se ha visto, los bolcheviques emprendieron a partir de mayo de 1918. El asesinato del embajador alemán Mirbach por obra de dos militantes socialistas revolucionarios, y el intento de insurrección promovido por ellos en Moscú en julio de 1918, dieron el golpe de gracia a la colaboración entre los dos partidos. Ninguno de los dirigentes bolcheviques había teorizado nunca un sistema monopartidista y sólo en el XI Congreso del partido, en marzo de 1922, el sistema de partido único (que en todo caso es cosa distinta del totalitarismo) recibirá una sanción oficial. De hecho, sin embargo, ya desde julio de 1918 se había establecido un monopolio del poder por parte de los bolcheviques, aunque los demás partidos formalmente continuaban existiendo y tenían representación, cada vez más limitada, en los soviets y en los sindicatos. Pero sus márgenes de iniciativa se hacían cada

vez más estrechos y sus representantes más destacados acabaron eligiendo la salida de la emigración, allanando así el camino a un éxodo masivo de intelectuales que privó a la Rusia soviética de energías y competencias preciosas. Entre los que dejaron el país se encontraba también Maxim Gorky, el más conocido de los escritores rusos de la época y amigo de Lenin.

La dictadura del proletariado iba asumiendo, pues, cada vez más las formas de una dictadura militar. El precedente histórico al que se referían los bolcheviques y el propio Lenin era el de la fase jacobina de la revolución francesa, con su *levée en masse* y su Terror. La primera se realizó con la restauración del servicio militar obligatorio y la formación de un ejército que llegó a contar con cinco millones de hombres; pero también se produjo lo segundo. La pena de muerte, que había sido abolida en diciembre de 1917, fue restablecida en junio de 1918 y entre las primeras víctimas estuvieron el zar y su familia, que fueron fusilados en Ekaterinemburgo en julio. Además se instituyó una milicia extraordinaria con cometidos de represión de las actividades contrarrevolucionarias –la Checa– y se abrieron los primeros campos de trabajo y de deportación.

Las férreas leyes que el partido imponía al país, se las imponía también a sí mismo. Durante la guerra civil sus filas habían aumentado hasta superar los seiscientos mil afiliados, una cifra que, por lo demás, no tiene en cuenta las pérdidas de la guerra civil –cerca de doscientos mil hombres– y de la tasa muy alta de rotación de los militantes, sometidos a un enorme desgaste psíquico y físico. En total, pues, algunos centenares de miles de personas, tal vez un millón, sobre una población de ciento treinta y dos millones, mayoritariamente concentrados en las ciudades y en su gran mayoría jóvenes. Además, buena parte de los afiliados (hasta el 50 % en mayo de 1920) servían en el ejército rojo y esta identificación con el ejército tuvo como consecuencia la introducción en el partido de valores y modelos de organización típicos de la vida militar. El principio de la elección de los cargos fue sustituido por el del nombramiento desde arriba (*naznaentsvo*), el de la dirección colectiva por el principio de la unidad de mando (*edinonacalie*) y de la «responsabilidad personal». En el estatuto aprobado en la VIII conferencia de 1919 figura por vez primera un artículo que indica la «severa disciplina» como la primera obligación para los militantes y las organizaciones. Así, una virtud militar se convertía en una virtud política.

La guerra civil acabó, pero las formas y los métodos organizativos con los que se había conducido le sobrevivían e incluso se abría paso la idea de transferirlos a la obra de reconstrucción. El primer partidario de esta orientación fue Lev Davidovich Bronstein, apodado Trotsky, el principal artífice de la victoria en la guerra civil. En la ponencia que presentó en el IX Congreso del partido (marzo-abril de 1920), éste avanzó una serie de propuestas para la formación de unos ejércitos de trabajo, encontrando el apoyo sin reservas de Lenin. Por su parte, Nikolai Ivanovich Bujarin fue incluso más allá y en su libro sobre la economía de la transición, publicado también en

1920, defendió que la economía basada en el trueque y en la abolición de la moneda –el llamado «comunismo de guerra»– no debía considerarse como una dura necesidad impuesta por circunstancias excepcionales, sino precisamente como una «transición» hacia el comunismo según la fórmula marxiana de «a cada uno según sus necesidades». De modo consecuente con esta orientación, en noviembre de 1920 todas las empresas existentes en el país fueron nacionalizadas y el suministro de bienes y servicios esenciales –en la medida en que existían– se hizo gratuito para obreros y empleados.

Más que una «incursión en el futuro», como se dijo, se trataba de una huida del presente, sólo explicable por la euforia de la victoria y la esperanza persistente de una revolución en Occidente.

Pero no tuvo que pasar mucho tiempo para que, como se ha observado, el desenlace de la guerra polaca obligara al grupo dirigente bolchevique a volver a la realidad, a la trágica realidad de un país agotado y hambriento. Si la cosecha de 1920 había sido peor que la del año anterior, la de 1921 se anunciaba catastrófica. En el curso de este año Rusia conoció, en efecto, una de las peores carestías de su historia, donde encontrarían la muerte –según cálculos aproximados– dos millones de personas y el número de niños abandonados –los *brezprizorny*– alcanzaría la cifra espantosa de cinco millones y medio. En estas condiciones, pedir a un país agotado que continuara sometiéndose a la dura disciplina de la militarización significaba superar los límites de lo tolerable y, de hecho, el país no lo toleró. En el verano de 1920 una revuelta de grandes proporciones estalló en la región de Tambov, pero no era sino el epicentro de un descontento y de una agitación que se difundían por doquier. Después de Tambov, en marzo de 1920, se rebelaba la ciudadela de Kronstadt, uno de los bastiones de la revolución, y sus marineros reclamaban unos «soviets sin comunistas». La rebelión de Kronstadt fue reprimida por el ejército rojo al mando de Trotsky y Tujachevsky, y las revueltas en los campos se apagaron no sólo a causa de las represiones de las que fueron objeto, sino sobre todo de la carestía. Sin embargo, ya era evidente para todos que aquellas leyes de la economía y del mercado que se creyó poder dominar mediante la «coerción extraeconómica» y el entusiasmo jacobino estaban tomándose su revancha y no se podían ignorar. Comenzaba así un nuevo período en la historia soviética, pero la huella dejada por el «comunismo de guerra» y la militarización de los años de la guerra civil nunca se borraría y será un elemento básico del estalinismo.

3.3. LOS PRIMEROS AÑOS DE LA NEP

La Rusia revolucionaria venía, así, a enfrentarse sola a los enormes problemas de un país literalmente destruido por seis años de guerra y de guerra ci-

vil. Leningrado y Moscú, las dos fortalezas de la revolución, entre octubre de 1917 y marzo de 1920, habían visto sus poblaciones reducirse a dos tercios y a la mitad respectivamente, y los que quedaban padecían frío y hambre. La producción industrial de 1920 resultó ser el 12,9 % de la de 1913 y la de acero el 1,6 %; los trabajadores ocupados en la industria, que habían sido el alma de la revolución, desde los tres millones de 1917 se habían quedado en 1.240.000. Los salarios correspondían a cerca de un tercio de los pagados antes de la guerra y se pagaban generalmente en especie, puesto que el rublo había perdido prácticamente todo su valor. De la red de ferrocarriles, que durante la guerra había sido sometida a un deterioro sin precedentes, quedaba disponible sólo una cuarta parte de su extensión. Rusia sobrevivía sólo gracias al campo, –adonde habían afluido todos los obreros sin trabajo y los soldados desmovilizados– o, mejor dicho, gracias a la tradicional capacidad de sufrimiento y a los recursos humanos del campesino ruso.

Rusia seguía siendo, en efecto, un país campesino donde el 84 % de la población vivía en el campo. Y precisamente a causa de la propia revolución, lo era más que antes. La redistribución masiva de tierras llevada a cabo después de Octubre no había afectado sólo a las tierras de los *pomeshiki* y del estado, sino también a aquellas haciendas más modernas que se habían constituido a raíz de las reformas de Stolypin y que producían para el mercado. Por consiguiente el número de pequeñas propiedades, cuya producción estaba destinada en buena parte al autoconsumo, había aumentado de diecisiete a veinticinco millones. No es de extrañar que, dada esta fragmentación, se acentuase la tendencia de los pequeños propietarios a asociarse en la tradicional comunidad del *mir*. Las posibilidades de la reconstrucción y la suerte del poder soviético dependían, pues, de los campos y de la reanudación de una relación de intercambio entre la ciudad y el campo y de la convivencia –ya que no de alianza– entre obreros y campesinos (*smychka*). De los dirigentes bolcheviques, Lenin fue el que con más claridad se dio cuenta de ello: en su opúsculo *Sobre el impuesto en especie*, de abril de 1921, esbozó los rasgos de la que pasaría a la historia como la «Nueva Política Económica», la NEP. Casi al mismo tiempo, el comité ejecutivo central soviético (VCIK) emanaba una serie de decretos que establecían que los campesinos serían a partir de aquel momento libres de comerciar con sus productos, a cambio de la obligación de pagar al estado un impuesto en especie proporcional a la «laboriosidad del cultivador». Sucesivamente, en mayo de 1922, una nueva ley fundamental sobre la explotación de la tierra reconocía a los campesinos plena libertad en la elección entre varios tipos de organización agrícola, pudiendo optar por la asociación en el *mir* o por la parcela aislada, y les permitía incluso, dentro de ciertos límites, contratar mano de obra asalariada. Es difícil evaluar el impacto de tales medidas, pero es un hecho que la cosecha de 1922 fue buena y que a partir de este año la superficie de tie-

rra cultivada se fue extendiendo, lenta pero constantemente; asimismo, aumentó la producción, que pasó de los 56,3 millones de toneladas de 1922 a los 92,2 de 1928. En algunas aldeas apareció la luz eléctrica y la Rusia campesina retomaba aliento. La población total del país, que desde 1914 –entre guerra, guerra civil y carestía– había bajado a ciento treinta y dos millones en 1922, volvió a acercarse, entre 1925 y 1926, al nivel de antes de la guerra, sin, por lo demás, alcanzarlo. Disposiciones análogas a las adoptadas en el campo se tomaron también en el sector industrial. A partir de mayo de 1921, con una serie de medidas sucesivas y escalonadas, se desmanteló el decreto de 1920 que, como se ha visto, nacionalizaba todas las empresas. Muchas de ellas volvieron a la gestión privada o cooperativa, y el estado se quedó únicamente con las de mayores dimensiones. Pero estas últimas fueron obligadas a operar en base al cálculo de los beneficios y de las pérdidas (*chozrascet*), con el objetivo de alcanzar rápidamente la autofinanciación. Para ello se alentaron los procesos de racionalización y concentración en *trusts* o sindicatos por sectores de producción. Los sectores que más se beneficiaron de esta vuelta a la economía de mercado fueron los de la industria ligera, generalmente de gestión privada, que producían bienes de consumo que el campo necesitaba de forma acuciante; menores, en cambio, fueron las ventajas de la industria pesada administrada por el estado. En conjunto, según una estimación de 1923, la utilización de las instalaciones en aquella fecha correspondía al 30 % de sus potencialidades, lo que, considerando el punto de partida, representaba un resultado no irrelevante. Durante los años siguientes la situación mejoró todavía más y en 1927 se alcanzó el nivel de la producción industrial de 1913.

Todo ello permitió que se reanimara la vida económica, aunque en cierta medida la economía de la NEP no era más que la legalización del mercado negro que ya existía y el *Nepman*, que ostentaba sus ganancias en los restaurantes y en los locales de diversión nuevamente abiertos en las grandes ciudades, no era más que el heredero del «hombre con el saco» de los años de la guerra civil. La reactivación económica permitió una vuelta gradual a la circulación monetaria y en octubre de 1921 inició su actividad el Banco del Estado, encabezado por Grigori Sokolnikov, uno de los pocos bolcheviques con experiencia financiera. En julio de 1922 el *Gosbank* lanzó un préstamo nacional, que tuvo un éxito inesperado, y en noviembre empezaron a circular los primeros *cervoncy*, una nueva moneda cubierta en un 25 % por metales preciosos y en el resto por obligaciones a corto plazo. Fue posible, así, restaurar gradualmente el salario en dinero y en diciembre de 1922 abrieron sus ventanillas las primeras cajas de ahorro. Finalmente, se instituyó también una lotería del estado.

El retorno a una economía de mercado controlada o, como se dijo, de «capitalismo de estado», conllevaba también, sin embargo, la reconstitución

de un mercado de trabajo, lo que a su vez implicaba el azar del desempleo y, en consecuencia, un replanteamiento de las funciones del sindicato, en el sentido del abandono de las funciones de producción que había desempeñado durante la guerra civil y de la recuperación de su papel tradicional de tutela de los trabajadores y de su contratación. Se comprende, pues, que la cuestión sindical constituía uno de los principales argumentos en los congresos del partido que tuvieron lugar entre 1920 y 1922, una especie de test en el que se confrontaban los puntos de vista de los que, como Trotsky, se inclinaban a mantener para los sindicatos las funciones de órganos del estado y gerentes de la planificación, y de los que, como los miembros del grupo de la «oposición obrera», veían en ellos los órganos del autogobierno y de la autogestión obrera y finalmente de los que, como Lenin, eran favorables a devolverles una autonomía de reivindicación, aunque limitada. Tras largos y confusos debates, que se arrastraron durante tres congresos, esta última fue la solución que de hecho prevaleció y Tomsky, el hombre que había sido uno de sus más convencidos valedores y que por esta misma razón había sido apartado en un primer momento de la dirección de los sindicatos, después del XI Congreso de marzo-abril de 1922 volvió a asumir su dirección. En este mismo año se aprobó un nuevo código del trabajo, que no excluía, aunque como *ultima ratio*, el recurso a la huelga. De hecho, en el curso de 1922 y más aún en el de 1923, tuvieron lugar algunas huelgas.

La tenaza de la dictadura del proletariado empezaba, pues, a aflojarse y la concentración de los años de la guerra civil iba siendo sustituida por una embrional división de los poderes, y la militarización por la «legalidad socialista». En este contexto se sitúan medidas como la institución de una fiscalía del estado, la aprobación de una serie de códigos (civil, penal, agrario, del trabajo) y también la transformación de la Checa en un órgano del estado dependiente del Ministerio de Interior, lo que, por lo demás, implicaba su institucionalización. Se mantuvo la pena de muerte, aunque aplicada con menor frecuencia y –como aconteció en el caso del proceso a los socialistas revolucionarios en el verano de 1922, que había despertado un gran revuelo en el extranjero– sin ejecutar las condenas. Y también se mantuvo la censura de la prensa, que fue confiada a un órgano apropiado, el *Glavit*.

Una piedra de toque harto ardua para el nuevo curso político era la cuestión nacional. Los territorios habitados por las poblaciones no rusas o no eslavas constituían una parte extensa del Imperio zarista y se caracterizaban por una extremada variedad de nacionalidades y etnias, de estructuras sociales y niveles de civilización, desde los más avanzados de Finlandia y de los países bálticos hasta los más retrasados y feudales de Asia central. En la mayor parte de ellos la revolución había llegado tarde o no había llegado en absoluto. Como se sabe, el principio de autodeterminación había sido proclamado solemnemente por los bolcheviques, justo en el momento de la

toma del poder, con el decreto sobre la paz de noviembre de 1917, y había encontrado su aplicación en Finlandia, cuya independencia fue reconocida en diciembre de 1917. Tras la derrota de Alemania, y a pesar de que la RSFSR había declarado nulo el tratado de Brest-Litovsk, en el que renunciaba a la soberanía sobre los países bálticos, también estos últimos alcanzaron a su vez la independencia y con ellos, en 1920, se firmaron tratados de paz. Por contra, en Ucrania, en la Transcaucasia y en Asia central, donde en el transcurso de la guerra civil fuertes movimientos nacionalistas se habían insinuado en la lucha entre rojos y blancos, la situación seguía siendo fluida. Existía una República Socialista Federativa Rusa, llamada así porque incluía algunas regiones autónomas, pero ésta no incluía ni a Ucrania ni a Bielorrusia ni a las tres regiones en que se dividía la Transcaucasia (Georgia, Azerbaiyán y Armenia), que eran todas ellas repúblicas socialistas independientes. Finalmente otra república socialista independiente, constituida como una suerte de «estado trinchera» para parar la amenaza de una intervención japonesa, existió hasta 1922 también en la Siberia del sureste, mientras que en Asia central la situación quedó durante mucho tiempo turbulenta y confusa.

La elaboración de un proyecto para la solución de la cuestión nacional en un ámbito pansoviético fue confiada a una comisión presidida por Stalin, que ocupaba el cargo de comisario de las nacionalidades. Éste orientó la labor de la comisión hacia una solución sustancialmente centralista, que reconocía a las repúblicas una autonomía similar a la que tenían las regiones autónomas que ya existían en la RSFSR. El proyecto encontró sin embargo la oposición de Lenin; el asunto más controvertido era el que concernía a Georgia y su inclusión en la Transcaucasia, pero las implicaciones del contraste que oponía a Lenin y Stalin eran mucho más amplias, ya que no sólo se limitaban a la cuestión nacional, sino que atañían también a problemas de orientación política general, como veremos en su lugar. Se elaboró, pues, un nuevo proyecto que preveía la constitución de una «unión» entre las cuatro repúblicas de la RSFSR, de Ucrania, de Bielorrusia y de la Transcaucasia, proyecto que fue aprobado por un congreso de los soviets de la naciente Unión en diciembre de 1922. Tampoco esta solución satisfacía a Lenin, pero el proyecto fue presentado y discutido en el curso del XII Congreso del partido en abril de 1923, en el que Lenin, quien en marzo había tenido un ataque cerebral, no pudo participar. En esta ocasión Stalin supo defender el texto en discusión y en julio de 1923 un segundo congreso de los soviets de la Unión aprobó definitivamente la constitución de la que a partir de entonces sería la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Según el proyecto aprobado, las cuatro repúblicas mencionadas ejercerían la jurisdicción sobre sus asuntos internos (agricultura, justicia, educación, sanidad, etc.), mientras que los asuntos exteriores –defensa, comercio exterior y comunicaciones– quedaban para los órganos pansoviéticos. Una serie de «comisariados» –entre ellos

los de trabajo y hacienda– estaban previstos en los dos niveles de administración. Finalmente, por lo que respecta a los órganos representativos centrales, al soviet de los diputados se le unió un soviet de las nacionalidades.

Si por el oeste el poder soviético no había logrado recuperar los territorios cedidos en Brest-Litovsk, por el este las fronteras de la Unión Soviética coincidían con las del Imperio zarista y éste podía atribuirse el mérito de haber logrado evitar la disgregación que había afectado a los imperios austrohúngaro y otomano. Eso no significa, por otra parte, que sea posible establecer una continuidad entre el Imperio zarista y la Unión Soviética. En la Rusia zarista las nacionalidades no tenían forma alguna de reconocimiento. Existían los ucranianos, pero no una Ucrania delimitada por fronteras exactas y reconocidas, y en las escuelas la lengua de la enseñanza era únicamente el ruso, con el resultado de que el uso de la lengua local quedaba en gran medida limitado al campo y se identificaba con el analfabetismo. En el nuevo orden soviético, aunque los planteamientos para una solución centralizada resultaron predominantes, la estructura escogida dejaba a las autonomías unos márgenes notables de efectiva autonomía. Si en un principio los cuadros dirigentes locales estaban formados en gran medida por rusos, también es verdad que se favoreció el ascenso de cuadros locales. Algunos de los dirigentes de primer rango, como Ordzonikidze, Mikoyan, Lominadze y otros –dejando al margen al georgiano Stalin– procedían de las nacionalidades. El uso de la lengua nacional no sólo fue respetado, sino que fue alentado mediante la introducción de su enseñanza en las escuelas, y los progresos realizados en el campo económico y cultural fueron importantes. En el caso de las repúblicas asiáticas dichos progresos fueron desde luego mayores que los de otras naciones asiáticas independientes. Fue sólo durante los años treinta cuando los órganos centrales –naturalmente por impulso de Stalin– empezaron a apretar las tuercas en el sentido de la rusificación. Por lo tanto, es posible concluir que tanto la política de promoción cultural practicada durante la NEP como la represión estaliniana contribuyeron –naturalmente desde vertientes opuestas– a alimentar aquella conciencia de la identidad nacional y aquel nacionalismo que recientemente han llevado a la disolución de la Unión Soviética.

A juicio de Lenin, del comisario de Exteriores Chicherin y de sus colaboradores del *Narkomindel*, una de las condiciones para el éxito del nuevo curso de la política económica consistía en la reinserción de la URSS en el circuito de la economía internacional. El mayor obstáculo en este camino era la escasa disponibilidad de los eventuales socios, es decir, de las grandes potencias occidentales, que seguían mirando con desconfianza el nuevo régimen. Francia, en particular, ponía como condición previa el reconocimiento de las deudas del Imperio zarista. Eso explica, entre otras cosas, el escaso interés con que se acogió la oferta de «concesiones» que Lenin avanzó en el marco de la NEP.

Pero además de los obstáculos externos existían fuertes diferencias internas. ¿No se corría el riesgo, de esta forma, de convertir la Unión Soviética en una suerte de «semicolonia», rebajándola al rango de proveedora de materias primas para el Occidente industrializado? Y ¿no conllevaba tal política la renuncia definitiva a la intervención activa en favor de las fuerzas revolucionarias que luchaban dentro de las fortalezas del capitalismo, con la consiguiente desautorización de la Tercera Internacional? Objeciones semejantes se planteaban a menudo en el partido y en la Internacional: a cada brote revolucionario, o supuestamente tal, en cualquier parte del mundo –en Alemania, en Bulgaria, en China– volvían a presentarse invariablemente.

Pese a estas rémoras e incertidumbres, la política exterior de los primeros años de la NEP se caracteriza por una aproximación más realista a los problemas internacionales y un uso más cuidadoso de los instrumentos de la diplomacia y de la negociación. No faltaron algunos buenos resultados: en 1921 se estipuló un tratado comercial con Inglaterra (véase cap. 4) y en este mismo año se suscribieron sendos tratados con Persia, la Turquía de Ataturk y Afganistán (véase cap. 7). En abril de 1922 la URSS fue invitada a participar en la conferencia económica internacional de Génova. Esto representaba un éxito para la joven diplomacia soviética, pero un éxito todavía más importante fue el tratado entre la Unión Soviética y Alemania, suscrito en Rapallo, al margen de los infructuosos trabajos de la conferencia. En éste las dos partes se reconocían mutuamente y renunciaban a cualquier petición de reparaciones. A partir de entonces una política de relaciones privilegiadas con Alemania constituyó un eje de la diplomacia soviética. La colaboración entre los dos países se extendió, sucesivamente y de forma secreta, al sector militar, lo que permitió que Alemania ensayase en la URSS los armamentos y las tecnologías que le estaban vedados por el tratado de Versalles. Las relaciones con Francia seguían siendo difíciles y el tratado de Rapallo –en el que Francia veía la amenaza de una alianza entre los dos grandes derrotados de la primera guerra mundial– no había contribuido a mejorarlas. En cuanto a las relaciones anglosoviéticas, después de la firma del tratado comercial de 1921 también experimentaron altibajos. En 1923, el año de la crisis del Ruhr, se hicieron especialmente difíciles e Inglaterra llegó a amenazar con denunciar el tratado en el caso de que la Unión Soviética no dejara de fomentar las actividades revolucionarias en Oriente (ultimátum Curzon). En 1924, sin embargo, se registró una mejora, con el reconocimiento *de iure* de la Unión Soviética por parte del gobierno presidido por Ramsay MacDonald (véase cap. 5). El ejemplo de Inglaterra fue seguido al poco tiempo por otros doce estados, entre ellos Francia, Italia y China. Japón ya lo había hecho en 1922. El muro de lo que en Moscú se solía definir como «el cerco del capitalismo» mostraba sus primeras y evidentes fisuras.

3.4. EL ASCENSO DE STALIN

Gracias a la NEP la Rusia soviética había logrado superar la fase más aguda de su crisis y encontrar un equilibrio. Sin embargo se trataba de un equilibrio precario, continuamente expuesto a las fluctuaciones de la coyuntura internacional e interna. Por lo que concierne a esta última, una amenaza permanente eran las continuas oscilaciones de la relación entre precios agrícolas y precios industriales, la llamada «crisis de las tijeras». Al principio los primeros resultaron favorecidos, gracias a la competencia entre empresas impulsada por la introducción del *chozrascet*; pero en un segundo momento, a raíz de los procesos de racionalización y concentración de la producción industrial y de los costes que éstas conllevaban, se invirtió la tendencia y los campesinos fueron los que tuvieron que pagar más caros los productos de las ciudades. Los órganos de dirección económica se veían obligados, por tanto, a rectificaciones y arreglos continuos, en un intento –nunca del todo logrado– de cerrar las «tijeras». En cuanto a la coyuntura internacional, siempre surgía algo nuevo o imprevisto –una chispa revolucionaria que se encendía o se apagaba, la amenaza de una ruptura de las relaciones diplomáticas o incluso la posibilidad de un «peligro de guerra»– para que volviera a cundir la psicosis del cerco capitalista o se reanimaran las esperanzas en una revolución hermana. La NEP, desde luego, continuaba, pero no estaba claro si, como había dicho Lenin, era una «retirada», al final de la cual el país retomaría su marcha hacia metas más ambiciosas, o bien –como también había dicho Lenin– se trataba de una elección hecha «seriamente y por mucho tiempo».

Tarde o temprano sería necesario salir de esta ambigüedad, pero ello implicaba un replanteamiento y una revisión de certezas arraigadas, una reflexión que concerniera no sólo a las perspectivas de desarrollo interno, sino también a la misma situación internacional de la Unión Soviética, en resumidas cuentas, a su identidad. Dentro del grupo dirigente bolchevique, el que se mostró más consciente de esta necesidad fue, una vez más, Lenin. Sus últimos escritos, dictados cuando la enfermedad ya lo había apartado de la actividad política, son el testimonio de un lúcido tormento político.

La nota predominante de estos escritos es la conciencia del atraso económico y cultural de Rusia y del riesgo de que el país se hundiera en el «reino de la mezquindad campesina». Pero Lenin no creía que la salida de este estado de atraso se pudiese buscar en los atajos de una planificación y de una «acumulación originaria» aceleradas y miraba más bien con desconfianza a las propuestas que se avanzaban en este sentido. Ello no excluía, por lo demás, formas de planificación más limitadas y concretas, como el plan de electrificación (*Goelro*) que él mismo había impulsado en 1920. Pero el camino maestro era, en su opinión, el de la reinserción de la URSS en el mer-

cado y en la división del trabajo internacional y, como se ha visto, ya en 1920 se había decantado por una política de «concesiones» a empresas extranjeras dispuestas a invertir en Rusia. Sin embargo, como todos sus compañeros de partido que habían vivido la experiencia traumática de la primera guerra mundial, él seguía convencido de que el contraste entre las fuerzas del capitalismo y las de la revolución era la contradicción fundamental de la época contemporánea, y creía inevitable una nueva guerra. La expresión «coexistencia pacífica», cuya paternidad le fue atribuida durante mucho tiempo, no aparece en su lenguaje y su sistematización conceptual es posterior a su muerte. Entre capitalismo y comunismo podía darse, en su opinión, sólo una tregua, una *peredishka*, más o menos prolongada. Así las cosas, la lucha por la modernización y la renovación de Rusia se configuraba como una carrera contrarreloj, como una apuesta de resultado incierto. Los últimos escritos de Lenin contenían pocas respuestas y muchos interrogantes: tocaría a sus sucesores encontrarles una solución.

En el clima de vivacidad intelectual de los años de la NEP, las ideas y las sugerencias no faltaban. Ya hemos mencionado las teorías sobre la planificación, cuyos partidarios tenían como punto de referencia el *Gosplan* instituido en 1921, que agrupaba, bajo la dirección de Krzhizhanovsky, la flor y nata de la cultura económica soviética, pero que, por entonces, era poco más que un centro de estudios. Los más prestigiosos entre sus colaboradores eran J. Larin, un ex menchevique que durante la guerra había tenido la posibilidad de estudiar de cerca la planificación bélica alemana, y E. A. Preobrazhensky, el teórico de la «acumulación originaria» basada en un «intercambio no equivalente» entre ciudad y campo. En la vertiente opuesta la personalidad de mayor relieve es ciertamente la de Bujarin. Representante en un principio del ala más radical del partido y opositor de Lenin en Brest-Litovsk, había modificado sus puntos de vista gradualmente hasta llegar a teorizar la necesidad de un desarrollo lento y equilibrado, incluso «a paso de tortuga». Fue Bujarin el que –en un artículo que suscitó gran escándalo– lanzó a los campesinos la incitación a «enriquecerse».

La cuestión de las formas y de los plazos del desarrollo económico se entremezclaba con la de la posición internacional del país. A este respecto los dos extremos de las posiciones sobre la mesa eran por un lado la idea de una «revolución permanente», formulada en su tiempo por Trotsky –con sus variantes y sus puestas al día–, y por otro, la fórmula del «socialismo en un solo país», propuesta con cautela por Stalin y luego retomada con mayor convicción por Bujarin.

Las ideas, pues, no faltaban, pero costaba convertirlas en programas políticos concretos e incisivos. Para que esto se realizara hubiera sido necesario que el debate no quedase limitado al partido, sino que las varias posiciones surgidas durante la discusión salieran a la luz para tantear los humores y

las reacciones del país, es decir, que lo que ha sido definido como el «pluralismo embrionario» de la NEP (Boffa, 1972, p. 289) se convirtiera en pluralismo abierto y desplegado. Pero en un país pobre en tradiciones políticas democráticas, recién salido de una guerra civil y donde la única alternativa al «estancamiento» podía ser la de los «desórdenes», esta apertura amenazaba con volver a abrir heridas que se acababan de cerrar y con provocar nuevos traumas. Todos los integrantes del grupo dirigente eran conscientes de ello, así que nadie puso en tela de juicio el monopartidismo y todos compartían la necesidad de cerrar filas en los momentos difíciles. Así había sido, por ejemplo, en marzo de 1921, durante el episodio de Kronstadt, cuando, a propuesta de Lenin, el X Congreso del partido aprobó una resolución que preveía la posibilidad de expulsión, por mayoría de dos tercios, de aquellos miembros del partido (y del propio comité central) que fueran hallados responsables de «fraccionarismo»: el llamado «punto 7». Mientras el sistema soviético aflojaba su tenaza y suavizaba su predominio en el país, el partido, en cambio, los endurecía y se convertía cada vez más –en expresión de Bujarin– en una «falange absolutamente unida».

En este contexto y con estas premisas, el control sobre el partido y su aparato resultaba decisivo con vistas al desenlace del debate y de la confrontación política del momento. El que lo entendió antes y mejor que todos los demás fue Josif Vissarionovich Dzugasvili, apodado Stalin, quien en abril de 1925 había sido elegido secretario general, un cargo aparentemente rutinario y por ello poco codiciado. Su concepción del partido era profundamente distinta de la de una élite política con cometidos de orientación y dirección general, tal y como la veía Lenin. En un escrito de 1921, Stalin había definido el partido como «una especie de orden de caballeros que llevan espada», entendiendo con ello un cuerpo separado, pero lo suficientemente numeroso como para invadir y estructurar todo el aparato del estado, con cometidos no sólo de dirección, sino también de ejecución y control; un partido eficiente y operativo, formado –como él mismo se definía– por gente «práctica», capaz de resolver las cuestiones que se planteaban a medida que se iban presentando, sin demasiados miramientos; un partido que, en consecuencia, se valía de una estructura jerárquica y se ceñía al criterio de una unidad «monolítica». De hecho, fueron éstos los principios a los que Stalin se mantuvo fiel en su calidad de secretario. Gracias a la «jerarquía de secretarios» encumbrados por él, pudo asegurarse el control del aparato.

Lenin, quien –como se ha visto– había discrepado con Stalin sobre la cuestión nacional, no dejó de intuir los riesgos que semejante concepción del partido conllevaba. En la carta al congreso del 23-24 diciembre de 1922, que pasó a la historia como su testamento político, expresó su preocupación por el «inmenso poder» que Stalin había acumulado en sus manos y dudaba de que éste lo usaría «con la prudencia suficiente». Pocos días después,

el 4 de enero de 1923, rompía las reservas que le quedaban y proponía que se sustituyera a Stalin por alguien menos «tosco» y «más tolerante». Pero Lenin no comunicó al XII Congreso –que tuvo lugar pocas semanas más tarde– su recomendación, y Stalin se mantuvo en su puesto. Incluso le tocó a él, en enero de 1924, pronunciar la oración fúnebre ante el féretro de Lenin. El tono solemne y litúrgico del juramento que pronunció era el de un jefe consciente de su fuerza y decidido a utilizarla hasta el final.

La ofensiva contra la gestión estaliniana del partido, iniciada por Lenin, fue retomada en otoño de 1923 por Trotsky, quien hasta entonces se había mantenido al margen, y por cuarenta y seis prestigiosos dirigentes bolcheviques, entre ellos Preobrazhensky y Antonov-Ovseenko, con la presentación de una «plataforma» en la que denunciaban la «dictadura de una fracción» del partido y pedían el retorno a un régimen interno de «democracia obrera». El debate que siguió se prolongó de forma confusa hasta la XIII conferencia (enero de 1924), que aprobó una resolución donde se reiteraba la condena del «fraccionarismo» y se hacía público aquel punto 7, aprobado por el X Congreso, que hasta entonces había permanecido secreto: era otra forma de apretar las clavijas al régimen interno del partido y otro punto en favor de Stalin. La única petición de Trotsky que fue aceptada fue la del lanzamiento de un reclutamiento masivo entre los obreros en activo. La iniciativa –que coincidió con la muerte de Lenin y que por ello fue llamada impropiamente «reclutamiento leninista»– tuvo éxito y en pocas semanas doscientos mil nuevos afiliados se unieron a las filas del partido. Las incorporaciones continuaron en los años siguientes, hasta alcanzar la cifra de 1.305.834 miembros del partido en 1928. Se trataba en gran medida de obreros y campesinos pobres, con escasa preparación política, cuando no analfabetos, y por eso fácilmente influenciables por parte del aparato y naturalmente dispuestos a seguir las indicaciones del que, una vez muerto Lenin, cada vez más aparecía como el «jefe». De entre estos reclutas –para cuya formación y adoctrinamiento se organizaron cursos acelerados de alfabetización política (*politgramota*)– surgió, en los años inmediatamente posteriores, buena parte del aparato del partido y del estado, realizando una especie de promoción masiva (*vydvizenie*). La propuesta avanzada por Trotsky se volvía así en su contra y Stalin pudo afrontar con cierta tranquilidad el XIII Congreso del partido (mayo de 1924), cuyos delegados habían sido puestos al corriente del testamento de Lenin. Pero la partida no había terminado todavía y a este primer enfrentamiento seguirían otros.

Derrotado en el tema de la «democracia obrera», Trotsky volvió a la carga en octubre de 1924 con la publicación de un opúsculo –*Las lecciones de octubre*– donde, partiendo de una comparación entre la audacia revolucionaria de Lenin en 1917 y la torpeza de la Internacional Comunista cuando, un año antes, no había sabido aprovechar «una situación totalmente excepcio-

nal» como la que, en opinión de Trotsky, se había producido en Alemania, defendía la causa de una vuelta al «leninismo», enterrado por la burocracia estaliniana. De nuevo fue una batalla perdida, porque le fue fácil a Stalin volver en contra de su opositor –cuyas divergencias con Lenin antes de 1917 eran bien conocidas en el partido– este mismo concepto de «leninismo» evocado por Trotsky y transformarlo en ortodoxia. A raíz de este nuevo enfrentamiento, Trotsky fue cesado del mando del ejército rojo (enero de 1925) y Antonov-Ovseenko fue apartado de la responsabilidad que ostentaba en la sección militar del comité central. El nuevo jefe de estado mayor, M. V. Frunze, promovió y realizó una modernización del sistema militar, que conllevó un amplio recambio de cuadros. Trotsky se quedaba así sin los apoyos con los que hasta entonces había contado en el ejército rojo, del que había sido el jefe y el símbolo.

En el grupo dirigente, que había conducido unido la lucha contra Trotsky, no tardaron, sin embargo, en manifestarse las divisiones. El objeto principal de la controversia era la fórmula del «socialismo en un solo país», defendida por Stalin y Bujarin, y entendida como una interpretación de la NEP como política a largo plazo. Semejante interpretación era contrastada, o al menos aceptada con muchas reservas, por G.E. Zinóviev, presidente de la Internacional Comunista, y L.B. Kámenev, quien hasta poco tiempo antes había sido el jefe reconocido de la organización en Moscú. También esta vez el choque terminó con una derrota de la oposición: en el XIV Congreso (diciembre de 1925) Kámenev, Zinóviev y la delegación de Leningrado que éste controlaba, resultaron perdedores frente a la poderosa mayoría de los delegados controlados por el aparato. Al año siguiente, Zinóviev y Kámenev se aliaron con Trotsky (quien en el XIV Congreso se había mantenido al margen) y dieron vida a una oposición unificada, pero también en esta ocasión se enfrentaron a una derrota. En octubre de 1926 tuvieron que acceder a suscribir una declaración en la que se reconocían responsables de actividad fraccionista: en la práctica, una capitulación. Como consecuencia de ello, Kámenev y Zinóviev fueron excluidos del *Politburó* y Zinóviev, cuyo prestigio había quedado comprometido por el fracaso de la huelga general en Inglaterra, dejó de ser presidente de la Internacional Comunista. Le sucederá Bujarin.

Pero el enfrentamiento más duro fue el que se produjo en 1927, en medio de una coyuntura internacional cargada de tensiones y de riesgos. La ruptura entre el Kuomintang y los comunistas en abril (véase cap. 9), que asestó un golpe mortal a las perspectivas de una revolución en China, fue seguida, en mayo, por la ruptura de las relaciones diplomáticas por parte de Inglaterra y, en junio, por el asesinato del embajador soviético en Varsovia, por parte de un exiliado. Esta secuencia de eventos concurrió en la creación de una psicosis de «peligro de guerra»: en las ciudades la gente hacía acopio

de provisiones y la población se movilizaba para ejercicios de protección civil. Es muy probable que esta psicosis fuese alimentada de forma artificial para justificar las medidas represivas contra la oposición, que en mayo había presentado otra plataforma, firmada por ochenta y tres dirigentes, y que parecía decidida a aprovechar los fracasos chino e inglés para dar de nuevo la batalla, utilizando la desorientación que se manifestaba en la mayoría y en el grupo dirigente. En efecto, en dicha mayoría había moderados –especialmente Rykov y Chicherin– que abogaban por un relajamiento de la tensión, tanto en el frente interno como en el internacional. Pero la oposición no supo insinuarse en estas contradicciones e incluso contribuyó a elevar el nivel de la tensión, favoreciendo de esta forma la polarización de las posiciones y su propio aislamiento. Trotsky, en particular, con una declaración en la que se reservaba, en caso de guerra, el mismo papel que había tenido en Francia Clemenceau durante la primera guerra mundial, no hizo sino alimentar la psicosis de guerra y la tensión que de ello derivaba. El enfrentamiento político cobró pues una aspereza hasta entonces nunca alcanzada: en la madrugada entre el 12 y el 13 de septiembre muchos miembros de la oposición fueron detenidos bajo la acusación –que luego se reveló sin fundamento– de haber organizado una tipografía clandestina y otros, entre los que figuraba Preobrazhensky, fueron expulsados del partido. En noviembre, como respuesta, la oposición organizó unas manifestaciones en Moscú y Leningrado, al margen de las celebraciones para el X aniversario de Octubre. Eso significaba infringir la regla según la cual las disensiones internas no tenían que ser trasladadas fuera del partido y de hecho ponía en discusión el principio del monopartidismo, cuya necesidad todos reconocían. Así, una vez más, la oposición pudo ser aislada y derrotada. Al final del XV Congreso (diciembre de 1927) sus representantes más destacados, empezando por Trotsky, Zinóviev y Kámenev, fueron expulsados del partido. Muchos de ellos se doblegaron ante el rito humillante de la admisión de sus errores. Pero no así Trotsky, quien fue deportado a Alma Ata, primera etapa del largo exilio que concluirá con su asesinato.

Los estudiosos han discutido y seguirán discutiendo sobre el momento histórico en el que hay que situar el punto de inflexión en que el sistema soviético derivó hacia el estalinismo, y a este propósito se han propuesto varias fechas. Tendremos ocasión de volver sobre esta cuestión. De momento, se puede decir que a finales de 1927 su proceso de formación se encuentra ya muy avanzado. Lo que no se puede decir es que Stalin fuera su arquitecto, en el sentido de ser el autor de un proyecto *político* que luego iría realizando paso a paso. En realidad, él no tenía ningún proyecto y navegaba y avanzaba «a ciegas» (Medvedev, 1972, p. 368), sin otro rumbo que el de la consideración de las relaciones de fuerza. Sí se puede decir, en cambio –por usar un término propio de su lenguaje político– que Stalin fue un «constructor»,

en el sentido de que reunió y utilizó los materiales disponibles: las tradiciones militares y burocráticas del estado zarista, las costumbres militares del período de la guerra civil, el punto 7 creado por Lenin y, finalmente, las dudas y los errores de sus adversarios. El sistema que resultó de todo ello se caracterizaba por una extremada concentración de los poderes, y en esto residía su fuerza. Pero también era un edificio con débiles fundamentos, como lo son los que se construyen deprisa y con materiales heterogéneos. Le faltaba no sólo un consenso que no fuera el de la mera pasividad y la inercia de la mayoría y el de la dedicación de una minoría, sino también, y sobre todo, unos objetivos por conseguir. Precisamente a partir de esta mala dialéctica entre fuerza y debilidad, se formará la espiral del estalinismo.

4

Inglaterra y la Commonwealth en los primeros años veinte

4.1. LOS PROBLEMAS INTERNACIONALES

En las convulsas jornadas que transcurrieron entre el asesinato de Sarajevo y el principio de las hostilidades, la diplomacia inglesa había sido la que más a fondo se había empeñado en evitar que los acontecimientos se precipitaran. También en esta dramática coyuntura, Inglaterra había intentado cumplir con su función de garante del equilibrio europeo, función que había desempeñado con éxito durante décadas; pero esta vez su intento se había saldado con un fracaso. Ahora que el desastre de la primera guerra mundial se había consumado y que los antiguos equilibrios europeos y planetarios ya no existían, para Inglaterra se hacía cada vez más difícil jugar aquel papel de «director de orquesta» que había jugado en el pasado. Por otra parte, nadie parecía tener la intención o estar en condiciones de tomar su relevo: no lo estaba Estados Unidos, que después de que Wilson lanzara el manifiesto de un nuevo orden internacional, se iba replegando hacia su aislacionismo; menos aún los revolucionarios rusos, que veían cómo se desvanecía el espejismo de una «revolución mundial». En esta nueva constelación internacional la fuerza inmensa de la costumbre y su propio prestigio internacional se unían para que Inglaterra asumiera un papel de «suplencia» y asumiera graves responsabilidades. Al fin y al cabo, al encontrarse en el cruce entre las grandes comunidades de la Commonwealth y la SDN, era el único de los estados europeos que podía intentar hacerse cargo de esta tarea, y su clase política seguía siendo la que en conjunto tenía una visión más global del contexto internacional de posguerra. Se le planteaba, pues, el problema de hacer frente a los difíciles retos del mundo posbélico, comprometiéndose en esta obra de suplencia.

Entre sus hombres de gobierno y su experimentada clase política había algunos –como lord Curzon, que en el gabinete desempeñaba el cargo de

lord presidente, o Winston Churchill– que se mantenían fieles a la concepción tradicional del Imperio y que no ocultaban su escepticismo hacia la «nueva diplomacia» wilsoniana. Pero también había otros que habían acogido con interés y en ciertos casos con aprobación los catorce puntos, y que se empeñaban ahora con convicción en la obra de construcción de la Sociedad de las Naciones. Entre ellos lord Cecil, un conservador; el general surafricano Smuts, un bóer que había sido llamado a formar parte del gabinete de guerra y que fue el inventor de la institución del «mandato»; y todos los que durante la guerra habían sido simpatizantes de la *Union for Democratic Control* (UDC), cuyas propuestas encontraron amplia acogida en el programa con el que los laboristas se presentaron en las primeras elecciones de la posguerra. Por otra parte, en Inglaterra el terreno estaba preparado para acoger el mensaje de Wilson ya que muchas de las ideas y de las propuestas que contenía se habían gestado precisamente en los ambientes de la izquierda y del pacifismo ingleses. El hombre que había estado a la cabeza del gobierno durante los últimos años de guerra y que siguió después de ella, el liberal Lloyd George, no era insensible al nuevo espíritu de los tiempos y en la conferencia de París se había esforzado en limitar los daños de una paz, en palabras de John Maynard Keynes, de tipo «cartaginés» y en introducir elementos de equilibrio en un cuadro internacional confuso y rebosante de potenciales conflictos. Ahora que los tratados de paz «cartagineses» habían sido suscritos, su tarea se hacía aún más difícil.

Las dificultades de la política exterior inglesa empezaban por una cuestión «doméstica», o por lo menos que muchos consideraban como tal: la cuestión irlandesa. Tras la concesión del *Home Rule* y la rebelión de la Semana Santa de 1916, promovida por el *Sinn Fein*, el fuego había seguido anidándose bajo las cenizas y había vuelto a arder cuando el *Sinn Fein* obtuvo setenta y tres de los ciento cinco diputados que le tocaban a Irlanda en las elecciones de 1918. Los nuevos electos se negaron a sentarse en Westminster, se constituyeron como parlamento nacional en Dublín y aquí proclamaron la república. Los militantes del *Irish Republican Army* (IRA), que disponían de miles de voluntarios bien entrenados y de una importante financiación por parte de la emigración irlandesa en los Estados Unidos, no se conformaron con las palabras y pasaron a la lucha armada. Los ingleses contestaron con igual decisión y enviaron a la isla cuerpos especiales. Estalló una guerrilla en la que ambas partes lucharon sin piedad, con centenares de víctimas, hasta que en junio de 1921 el gobierno inglés accedió a tratar con los insurrectos. Tras laboriosas negociaciones se llegó a un acuerdo que contemplaba el reconocimiento del «libre Estado de Irlanda», que incluía toda la isla, con exclusión de los seis condados del Ulster, y quedaba integrado en la Commonwealth con un estatuto de *dominion* similar al ya otorgado a Canadá. Todavía no era la república inde-

pendiente por la que los insurrectos del IRA y su líder De Valera habían luchado y siguieron luchando después del acuerdo; pero el cordón umbilical con Inglaterra ya se había cortado y el principio de la autodeterminación había quedado reconocido.

La fórmula adoptada para Irlanda se encontró gracias a la experiencia acumulada en las relaciones dla Commonwealth. En las décadas que habían precedido a la primera guerra mundial éstas, en efecto, se habían ido modificando gradualmente, en el sentido de una mayor autonomía de los *dominions*, pero permanecían roces y problemas sin solucionar. Había, pues, razones fundadas para temer que una participación automática de los *dominions* en la guerra pudiera levantar reacciones desfavorables y resistencias. Y de hecho éstas tuvieron lugar tanto en Suráfrica, donde el resentimiento por la guerra anglo-bóer estaba lejos de apaciguarse, como en Canadá o en Australia. Finalmente, sin embargo, prevaleció el sentido de solidaridad británica y doscientos mil soldados procedentes de los *dominions* lucharon en los campos de batalla de la primera guerra mundial, los surafricanos en Egipto, en defensa del canal de Suez, los canadienses en Francia, los australianos en Galípolis. También India, que no era un *dominion* pero aspiraba a serlo, envió a sus soldados a los campos de batalla europeos y de Oriente Medio. Era una prueba de lealtad a la que Londres estaba llamada a responder con medidas concretas, y así lo hizo. Se constituyó un *Imperial War Cabinet*, con funciones consultivas, y se llamó a formar parte de él a todos los primeros ministros de los *dominions* y en enero de 1917 el general Smuts se incorporó al gabinete de guerra constituido por Lloyd George. También en 1917 se convocó una sesión de la conferencia imperial, que elaboró un primer borrador del *status* de los *dominions*, calificándolos de «naciones autónomas» dotadas de «poderes adecuados en política exterior». Coherentemente con la definición adoptada, los *dominions* fueron admitidos en la conferencia de paz y entraron a formar parte de la Sociedad de las Naciones. A algunos de ellos, como Suráfrica, Australia y Nueva Zelanda, les fueron asignados unos mandatos, respectivamente sobre el África occidental ex alemana, sobre Nueva Guinea y sobre las Islas Samoa. Por su parte, en 1920 Canadá obtuvo el consentimiento para el nombramiento de su embajador en Washington, que será acreditado en 1926. También India tuvo un reconocimiento por su contribución: en abril de 1917 fue admitida en el *Imperial War Cabinet* y en este mismo año el secretario de estado, Montagu, hacía una declaración en la que el gobierno expresaba su intención de trabajar para «una gradual realización de un gobierno responsable en la India como parte integrante del Imperio británico». Como los hechos demostrarían, la expresión no carecía de ambigüedad y el que la había formulado estuvo obligado a dimitir poco después. Sin embargo, también la India se sentó a la mesa de la conferencia de París y poco después fue admitida en la Sociedad

de las Naciones. La idea de una Commonwealth que no estuviera limitado a los pueblos de origen y lengua ingleses, sino que fuese «multirracial», comenzaba a extenderse y el propio Lloyd George, en un discurso ante la Cámara de los Comunes de enero de 1918, reconocía que el derecho a la autodeterminación tendría que valer, en un futuro, también para los pueblos de las colonias. Las medidas adoptadas en la posguerra para con la Commonwealth se mantuvieron firmes, y las decisiones posteriores apuntaron todas hacia la ampliación de los márgenes de autonomía de los *dominions*. En la conferencia imperial de 1926 estos últimos se definían, con mayor precisión, como «comunidades autónomas en el ámbito del Imperio británico, iguales por estatuto, de ninguna manera subordinadas la una a la otra en ningún sector de sus asuntos internos e internacionales, aunque unidas por la común fidelidad a la Corona y libremente asociadas como miembros de la Commonwealth británico». Finalmente, en 1931, el Estatuto de Westminster sancionó definitiva y legalmente la nueva ordenación de la Commonwealth: una forma de asociación entre pueblos lejanos y distintos, original por su flexibilidad y su estabilidad. Los parlamentos de los *dominions*, equiparados al de Westminster, vieron reconocida su plena soberanía y al poder efectivo de los gobernadores sucedió el poder simbólico de los virreyes como representantes de la Corona.

Pero de este «tercer Imperio inglés» –como lo definió un profesor de Oxford, Alfred Zimmern– no formaban parte sólo los *dominions*, sino también los mandatos que Inglaterra se había comprometido a encaminar hacia la independencia y los inmensos territorios del *dependent Empire*, las colonias en el sentido estricto del término. Tendremos ocasión de constatar en cada caso, en el curso de nuestra exposición, en qué medida los criterios aplicados a los *dominions* se aplicaron también a estas entidades.

Un camino más accidentado, en cambio, tuvo que recorrer la política exterior inglesa en sus relaciones con Europa y especialmente en la cuestión alemana. Aquí había que lidiar con la intransigencia de los que en nombre de la patria pedían el «ahorcamiento del Káiser» y de los que estaban decididos –en primer lugar la Francia de Clemenceau– a exigir el pago de las reparaciones alemanas hasta el último céntimo. Lloyd George era consciente de la imposibilidad de que Alemania pagara las exorbitantes reparaciones que se le imponían, pero todo lo que había podido lograr en la conferencia de París había sido una reducción del importe total. Además de la cuestión alemana, otro asunto que complicaba más aún la situación era el de la postura a mantener con la Rusia soviética, con la que Francia también tenía una posición intransigente. Pero aquí Inglaterra no estaba vinculada por los compromisos de los tratados de paz y disponía de una mayor libertad de acción. Lloyd George no dejó de aprovechar esta libertad y cuando, en la primavera y el verano de 1920, los sindicatos y el *Labour Party* amenazaron con una huelga general si no cesaban los envíos de armas a Polonia, involucrada en la guerra

contra Rusia (véase cap. 2), el primer ministro no sólo ofreció compromisos que permitieron evitar la huelga, sino que aprovechó la ocasión para intensificar los discretos contactos trabados desde hacía tiempo con el gobierno soviético hasta llegar a estipular, en marzo de 1921, el tratado comercial ya mencionado (véase cap. 2), un primer paso hacia el reconocimiento diplomático.

En la conferencia económica de Génova de abril de 1922, para cuya convocatoria Lloyd George se había empleado a fondo y a la que habían sido invitadas tanto Rusia como Alemania, la delegación británica insistió para que los problemas de las reparaciones alemanas y de las deudas entre los aliados se afrontaran en el ámbito de un plan conjunto de reconstrucción de la economía internacional; pero la conferencia, a la que no acudieron los americanos y sabotearon los franceses, terminó sustancialmente en nada. El gobierno inglés se limitó entonces –con la nota Balfour de agosto de 1922– a un objetivo más limitado, la cancelación de las deudas entre aliados, declarándose Inglaterra dispuesta a exigir a sus deudores europeos sólo la cuota necesaria para pagar sus deudas con Estados Unidos; pero también en este caso la propuesta fue ignorada por los americanos. Cualquier nueva iniciativa en el camino de la conciliación y del equilibrio fue impedida por el auténtico paso en falso que dio Lloyd George en ocasión de la llamada «crisis de Chanak». La postura intransigente que asumió hacia la Turquía kemalista en su conflicto con Grecia (véase cap. 7) contribuyó, en efecto, a aislar a Inglaterra en su relación tanto con los aliados como con los *dominions*, y las elecciones que convocó en diciembre de 1922 –quizá convencido de que también esta vez funcionaría el reflejo patriótico e imperial que le había permitido ganar las de 1918– se saldaron con una estrepitosa derrota de su gobierno. De ellas salieron reforzados tanto los conservadores como los laboristas, mientras que las dos corrientes del Partido Liberal –la de Asquith y la del propio Lloyd George– resultaron debilitadas.

La formación del nuevo gobierno conservador, presidido por Bonar Law, coincidió con el estallido de la crisis del Ruhr y por tanto tendremos ocasión de examinar más adelante la postura que adoptó Inglaterra en esta coyuntura (véase cap. 5). Pero podemos adelantar que dicha postura se caracterizó sustancialmente por una tendencia al desinterés y por la renuncia a ejercer un papel activo. Con la llegada de los conservadores al gobierno, las insinuaciones y las tentaciones de vuelta a una política de aislamiento dentro de la «jaula de oro» del Imperio afloraban de nuevo y encontraban audiencia. Así lo expresó la propuesta avanzada por Baldwin, quien en mayo de 1923 había sucedido a Bonar Law, gravemente enfermo; en ella se pedía el abandono de la política económica basada en el libre intercambio a nivel internacional y la adopción de un nuevo curso proteccionista combinado con un sistema de preferencias mutuas entre los países de la Commonwealth. A decir verdad, algunas medidas en este sentido estaban vigentes desde hacía

tiempo: durante la guerra se habían introducido importantes impuestos aduaneros sobre la entrada de ciertos artículos industriales (tarifas de McKenna) y en la posguerra, con el *Industrial Act* de 1921, se había seguido en este camino. Sin embargo, estaba claro que la propuesta de Baldwin tenía un alcance mucho más amplio y un valor político mucho más relevante. Los tiempos de Joseph Chamberlain y de los «imperialistas», que habían sido los primeros en enarbolar la bandera del proteccionismo, ya quedaban atrás y en la nueva realidad de la posguerra volverlo a proponer equivalía a renunciar al papel de «suplente» que en el mundo posbélico aparecía como cada vez más inviable, para replegarse dentro de los límites, por lo demás muy amplios, del Imperio británico. «La actitud definitiva que había tras ella era que, puesto que la industria británica no podía dominar ya el mundo entero, bien podría concentrarse en la cuarta parte de él, constituida por un Imperio británico acorralado por los agresivos extranjeros» (Hobsbawm, 1977, p. 233). La propuesta, como se verá, no fue aceptada, pero no tendrá que pasar mucho tiempo para que la constatación de las necesidades de las que se hacía eco acabara imponiéndose.

4.2. LOS PROBLEMAS INTERNOS

A medida que se iban percatando de que vivían en un mundo radicalmente distinto al de antes de la guerra, los ingleses se daban cuenta también de que la prosperidad de la que habían disfrutado hasta entonces era el fruto de un equilibrio ya perdido y que pertenecía al pasado. La trabajosa toma de conciencia de este estado de cosas constituye el hilo conductor de la historia de Inglaterra en el curso de los años veinte.

Inglaterra fue el primero de los países beligerantes europeos en convocar elecciones generales. De hecho, la decisión de llamar a los electores a acudir a las urnas se tomó en diciembre de 1918, pocas semanas después del armisticio. El país volvía así a la normalidad de su vida democrática, y lo hacía con un acto de confianza en la democracia. El derecho de voto, en efecto, fue extendido a las mujeres con edad superior a los 30 años. La larga batalla del movimiento sufragista en la anteguerra recogía sus frutos.

Los electores premiaron a aquellos hombres y partidos que aparecían como los mayores artífices de la victoria, los conservadores «unionistas» de Bonar Law y los liberales de Lloyd George. Los laboristas, por su parte, a pesar de haber participado con sus representantes en la coalición de guerra, obtuvieron cincuenta y nueve escaños, con un incremento de veinte, y pasaron, en cifras absolutas, de medio millón a 2.250.000 votos, y en porcentaje del 8 al 22 %. Con este triunfo, el Partido Laborista dejaba de ser esa especie de satélite del Partido Liberal, como había sido antes de la guerra, y se

presentaba ahora como una fuerza política autónoma, con un propio programa orgánico y su propuesta de un «nuevo ordenamiento social». Su base más sólida seguían siendo las *Trade Unions*, que en 1920 alcanzaron la cifra de ocho millones de afiliados (eran cuatro antes de la guerra); pero ahora el partido se apoyaba también en organizaciones territoriales locales, a las que era posible adherirse individualmente, sin estar afiliados a ningún sindicato. De esta manera las puertas del partido se abrían a simpatizantes de la clase media y su base social se ampliaba. Además, a diferencia de los partidos de la izquierda continental, el *Labour Party* no había sufrido ninguna escisión. No es que no existieran en Inglaterra grupos y corrientes radicales, pero quedaban afiliados al *Labour*. Es el caso, en primer lugar, del *Indipendent Labour Party* (ILP), el partido de Keir Hardie y ahora de Ramsay MacDonald. El mismo Partido Comunista de Gran Bretaña, fundado en julio de 1920, pidió afiliarse al Partido Laborista, que sin embargo se lo denegó.

A pesar del éxito de los laboristas, los reales vencedores de las elecciones de diciembre de 1918 eran los conservadores y los liberales. En efecto, en la opinión pública había primado el orgullo por la prueba que la nación había superado dignamente... En la guerra cada uno había hecho su papel. Ante todo, el ejército, que había sufrido setecientas cincuenta mil bajas; la armada, que había tenido en jaque a su temible antagonista alemana; la marina mercante, que había perdido el 40 % de su tonelaje para poder asegurar al país los abastecimientos necesarios; los millones de jóvenes que se habían alistado con anterioridad a la introducción del reclutamiento obligatorio; las mujeres, que habían sustituido a los hombres en las fábricas y en las oficinas; los sindicatos, que habían puesto un freno a sus reivindicaciones y agitaciones; las clases altas, sometidas a una imposición fiscal cada vez más gravosa. Y, naturalmente, el gobierno, que había sabido construir, coordinar y dirigir la compleja maquinaria de la economía de guerra. Era, pues, legítimo esperar que los que habían conducido el país a la victoria supiesen, mejor que otros, recoger los frutos abundantes que la victoria prometía.

Los primeros meses de la posguerra parecieron justificar estas expectativas y esta euforia. Durante todo el año 1919 y parte de 1920 la coyuntura se mantuvo favorable también en Inglaterra: el nivel de los salarios, que ya antes de la guerra era más elevado que el de los países del continente, experimentó un incremento calculado alrededor del 17 % al tiempo que el paro se mantenía en un nivel tolerable, lo que permitió extender el subsidio de desempleo a todos los trabajadores con una renta semanal inferior a las cinco libras. Los mayores conflictos laborales, que también en Inglaterra aumentaron repentinamente después de la guerra, pudieron solucionarse, en la mayor parte de los casos, con una relativa facilidad. Así, por ejemplo, la huelga de los trabajadores ferroviarios, en octubre de 1919, y la de los portuarios, en 1920, terminaron positivamente gracias a la prudente mediación

de Ernest Bevin, que por entonces daba sus primeros pasos como sindicalista. En este clima de confianza las metas más ambiciosas parecían estar al alcance. Durante la campaña electoral se había hablado de «construir un país adecuado para los héroes» y se comenzó lanzando un gran programa de construcción denominado precisamente «casas para los héroes», del que fue animador el ministro de Sanidad, Christofer Addison. Se continuó con la aprobación de un *Educational Act*, que prolongaba la duración de la instrucción obligatoria hasta los 14 años, aumentaba el sueldo de los profesores y otorgaba un buen número de becas para estudiantes necesitados. La cuestión de la nacionalización de las minas y de los ferrocarriles, reclamada por los sindicados, era objeto de discusión y de consideración.

En el invierno entre 1920 y 1921 la coyuntura favorable terminó. El mercado interior, y sobre todo el internacional, ya no absorbían los productos que tradicionalmente exportaba Inglaterra. El sector minero y el del algodón resultaron ser los más afectados y su producción sufrió una dura contracción. De ello derivó un descenso de la producción, que en 1921 había bajado en un 55% respecto a 1913, y un aumento del desempleo que, también en 1921, afectó a dos millones y medio de trabajadores. En estas condiciones, hubo que revisar la política de balance y el gasto público y a este fin, en febrero de 1922, un comité presidido por sir Eric Geddes presentó una serie de propuestas que en su mayoría fueron aprobadas. El «hacha de Geddes» se abatió, así, sobre los subsidios de desempleo, que fueron reducidos, sobre los proyectos de modernización y nacionalización de los ferrocarriles, que fueron abandonados, sobre el proyecto de Addison para la construcción popular y sobre el *Educational Act*. Se mantuvo la escolarización obligatoria hasta los 14 años, pero se recortaron los salarios de los profesores y las becas.

El sector que más sufrió los efectos de la crisis fue el minero, que en el transcurso de la guerra había trabajado a pleno ritmo y en el que estaban ocupados más de un millón de trabajadores, el mayor colectivo obrero inglés y el más combativo. Por tanto, cuando en abril de 1921 el gobierno anunció su decisión de abandonar su control sobre la producción minera y restituir las minas a sus propietarios, y cuando quedó claro que éstos intentarían descargar el peso de la crisis sobre los trabajadores, recortando sus salarios y aumentando el horario de trabajo, el sindicato de los mineros apeló a la solidaridad de los portuarios y de los ferroviarios, con los que estaba asociado en una «triple alianza». Estos últimos en un primer momento accedieron a la petición, pero cuando los mineros insistieron en su reivindicación de un *pool* nacional de los salarios, el 15 de abril de 1921, en vísperas de una huelga ya proclamada, se disociaron y los sindicatos ingleses experimentaron así su «viernes negro». A pesar de haberse quedado solos, los mineros continuaron la huelga hasta julio, pero al final ellos también tuvieron que ceder. Las consecuencias de esta derrota gravaron sobre el movimiento obrero in-

glés en su conjunto y los trabajadores en general. En 1922 se registraron sólo diecinueve millones de horas de huelga y el número de afiliados a los sindicatos se redujo a la mitad, desde los 8.334.000 de 1921 a los 4.328.000 de 1922. No obstante, en las elecciones de diciembre de 1922 los laboristas obtuvieron un sensible incremento de votos.

Pero, como se ha visto, los vencedores de las elecciones fueron los conservadores y era difícil esperar que ellos practicaran una política de reformas y de renovación. La única iniciativa de un cierto relieve que adoptaron durante su breve permanencia en el gobierno fue el *Housing Act* presentado por el ministro de Sanidad Neville Chamberlain, una versión reducida y privatista del esquema de Addison.

La euforia y las esperanzas de la posguerra parecían, pues, desgastadas y lejanas, cuando, en diciembre de 1923, se convocaron nuevas elecciones generales. La campaña electoral fue dominada por la mencionada propuesta de Baldwin de un nuevo curso proteccionista de la política económica. La promovían los conservadores, mientras que la combatían tanto los liberales, desde siempre guardianes de la tradición del libre comercio, como los laboristas, que se hacían eco de las preocupaciones que suscitaba en las clases populares el previsible aumento del precio de los productos agrícolas importados. La perspectiva de un giro proteccionista no sólo encontraba resistencias de carácter psicológico o político, sino que también chocaba contra la oposición de intereses económicos constituidos, especialmente por parte de aquellos sectores industriales, como el minero y el algodonero, que producían para el mercado internacional y que verían su ya precaria situación agravarse aún más. Además, el giro proteccionista levantaba perplejidades en la City, que seguía siendo, a pesar del ascenso de Wall Street, el mejor mercado financiero del mundo. Eso explica por qué, como le había pasado un año antes a Lloyd George, el resultado de las elecciones fue decepcionante para el gobierno que las había convocado. En efecto, los conservadores perdieron casi cien escaños de los trescientos cuarenta y cinco que poseían, y los laboristas, a pesar de seguir siendo el segundo partido, con ciento noventa y un escaños, fueron los vencedores morales de las elecciones.

El encargo de formar el nuevo gobierno fue, por tanto, confiado a Ramsay MacDonald, líder del grupo parlamentario laborista y conocido por la opinión pública gracias a su pasado de militante radical y sus convicciones pacifistas. Éste constituyó un gobierno laborista que gozó del apoyo parlamentario de los liberales y así, por primera vez en su historia, Inglaterra tuvo un primer ministro socialista, cuya personalidad y cuya vida aparecían como el compendio y el símbolo de la larga marcha del trabajo hacia su propia emancipación. MacDonald era, en efecto, hijo natural de una lavandera y, antes de dedicarse a la militancia política, había conocido una existencia de privaciones y pobreza y los ministros que lo acompañaban procedían de las

filas de los sindicatos y de la UDC. En un país donde la clase política todavía se reclutaba en gran parte entre las clases altas, esto era indudablemente algo nuevo, que reavivaba las esperanzas y parecía abrir nuevos horizontes.

La duración del gabinete MacDonald fue igual de breve que la del gobierno conservador que lo había precedido, pero mucho más accidentada. Desde la oposición, los conservadores, que habían discrepado con el reconocimiento diplomático de la URSS (véase cap. 2), no dudaron en desencadenar un ataque a fondo cuando se supo que el gobierno había renunciado a tomar medidas legales contra un periodista comunista, autor de un artículo en el que se había detectado el delito de incitación a la sedición. Al ser derrotado en el Parlamento, MacDonald convocó nuevas elecciones.

La campaña electoral estuvo dominada por el clamor levantado por la denominada «carta roja» o «carta de Zinóviev» –probablemente una falsificación fabricada en los ambientes de la emigración rusa en Berlín– en la que se impartían instrucciones a los comunistas ingleses para la preparación de una insurrección. El electorado no se dejó trastornar por la campaña de prensa que siguió a la publicación de la carta, y en las elecciones de diciembre de 1924 los laboristas obtuvieron un millón de votos más, aunque el juego de alianzas en los colegios electorales les hizo perder cuarenta escaños. En cambio, los liberales se desplomaron y de ello sacaron provecho los conservadores, que cosecharon dos millones de votos más y cuatrocientos quince escaños, la mayoría absoluta.

El primer gobierno laborista de la historia inglesa había durado, pues, sólo un año, pero dejó huella en la sociedad y en la vida del país. Si bien no alcanzó resultados significativos en la lucha contra el desempleo, que ya se había convertido en un fenómeno crónico, logró, en cambio, volver a poner en marcha los proyectos de edificaciones populares y las reformas escolares promovidos por el gobierno de Lloyd George. De los primeros fue animador C. I. Wheathely, un radical que se había formado en las luchas de la cuenca minera de la Clyde, quien presentó y llevó a cabo con éxito un amplio plan de construcción de nuevas viviendas; las reformas escolares, en cambio, fueron inspiradas por el historiador R. H. Tawney. Según el esquema elaborado por éste, la obligación escolar quedó en 14 años, pero se articuló en dos ciclos, de los que el segundo –de 11 a 14 años– fue el de la «secundaria». Se introducía así el principio del derecho para todos a una instrucción que no se limitara a «leer, escribir y hacer cuentas».

Pero fue en el campo de la política exterior donde el gobierno de MacDonald manifestó su mayor dinamismo, al contribuir de manera decisiva en la superación de la crisis abierta por la ocupación francesa del Ruhr y en la normalización de las relaciones entre los países europeos. Pero de esto tendremos ocasión de ocuparnos adecuadamente en breve.

5

La Europa continental en los primeros años veinte

5.1. CARACTERES GENERALES DE LA POSGUERRA EN EUROPA

El término «posguerra» no tiene evidentemente ningún sentido para los países que no se vieron envueltos en el conflicto. Nos reservamos, por tanto, la mención de aquellos países de la Europa meridional (España) y septentrional (países escandinavos) que quedaron ajenos a la primera guerra mundial para otro y más apropiado lugar. Pero también es evidente que el término «posguerra» no se limita a una indicación cronológica. En su uso corriente, evoca más bien el cuadro de una coyuntura caracterizada por una gran inestabilidad política y social y por bruscos cambios. Por ejemplo, por lo que respecta a Italia, por «posguerra» se entiende generalmente el breve período entre el «bienio rojo» y la llegada al poder del fascismo.

Esta inestabilidad es en primer lugar un dato objetivo, es decir, el retrato de una sociedad caracterizada por profundas desigualdades. Las enormes pérdidas de vidas humanas –más de ocho millones de bajas– habían alterado la relación entre los sexos y las franjas de edad y harán falta años para que el equilibrio demográfico se restablezca. Además, la sociedad de la posguerra es en muchos aspectos una sociedad fluida. Es difícil ofrecer una evaluación exacta del fenómeno de los refugiados, pero es seguro que éste, especialmente en Europa oriental, alcanzó proporciones ingentes: un millón setecientos cincuenta mil rusos emigrados, más de un millón de griegos de Asia menor y Tracia, doscientos mil macedonios refugiados en Bulgaria, cuatrocientos mil magiares huidos de Transilvania, para limitarnos a los ejemplos más significativos. Pero, además de la movilidad territorial, también hay una movilidad social entre las clases. Casi todas las monedas europeas experimentaron en la posguerra una drástica devaluación y todos los países europeos, aunque

en distinta medida, tuvieron que sufrir la inflación. Si, en términos de poder adquisitivo, por una libra de antes de la guerra se necesitaban ahora dos y por un franco francés, cinco, en Austria por un chelín se necesitaban catorce mil y en Rusia por un rublo, cuatro millones. El caso extremo, del que nos ocuparemos más abajo, fue el de Alemania, donde la inflación alcanzó en 1923 niveles de vértigo. Las principales víctimas de la devaluación fueron las clases medias, cuyos ahorros resultaron diezmados, cuando no anulados. Desde luego también hubo quien se aprovechó de la inflación: los «tiburones». Pero fueron muchos más los que vivieron la amarga experiencia de la proletarización.

El concepto de posguerra no se agota, por lo demás, en el cuadro de disgregación social que hemos someramente esbozado, sino que incluye también el nivel de las «mentalidades» y los comportamientos colectivos. Para amplios estratos sociales, que hasta ahora habían participado en la vida colectiva de su país sólo de forma pasiva y ocasional, la primera guerra mundial había representado la primera y traumática experiencia de socialización y politización, una suerte de noviciado. A través de la experiencia del ejército y de la trinchera muchos campesinos tomaron conciencia de formar parte de una comunidad nacional y de un sistema político a cuya suerte estaba ligado indisolublemente su propio destino. Una vez de regreso a casa, se sintieron naturalmente inclinados a trasladar la solidaridad nacida en los campos de batalla al asociacionismo político. De ahí, la proliferación y la fortuna de los partidos agrarios y campesinos en la Europa de la posguerra: el de Stambolinsky en Bulgaria, el de los hermanos Radic en Croacia, el de Vitos en Polonia, el de Mihalache en Rumania, el de Svehla en Checoslovaquia; pero también el movimiento de los ex combatientes y el partido sardo de acción en Italia, y los cristianosociales en Austria. A su vez, a través de la experiencia de la fábrica millones de mujeres eludieron la condición de marginación y subordinación a las que las obligaba el trabajo doméstico, empezaron a madurar en la conciencia de sus derechos y obtuvieron su reconocimiento: además de, como se ha visto, en Inglaterra y en Estados Unidos, el derecho de voto para las mujeres fue reconocido también en la Alemania de Weimar y en varios países europeos más. El voto, en cambio, continuó siendo una prerrogativa masculina en Francia, Bélgica, Italia, Rumania, Yugoslavia, Grecia, Turquía y Suiza.

Pero no se trataba sólo de eso, de lo que se suele definir como «democracia de masas». La cosa más importante es que esta democracia de masas se concreta en muchos países en el curso y en el regazo de una experiencia dramática y desgarradora como es la de una guerra de larga duración; por tanto, lleva la marca de la exasperación engendrada por la guerra, de la cólera y de la protesta de los que la han sufrido hacia quien la ha querido, de los combatientes hacia los «emboscados», de los soldados contra los oficiales, de los hambrientos contra los aprovechados. De ahí la aspereza de las ten-

siones políticas en la posguerra, de ahí también la tendencia generalizada a trasladar a la lucha política modelos de organización de carácter militar. En la Europa de la posguerra pululan formaciones paramilitares de varios colores, pero generalmente «blancas», y pocos períodos de la historia europea como la posguerra están plagados de atentados políticos: Rathenau, Erzberger, Rosa Luxemburg, Wilhelm Liebknecht, Kurt Eisner, en Alemania; Matteotti, en Italia; Stambolinsky, en Bulgaria; Radic, líder del Partido Campesino Croata, en Yugoslavia; Narutowicz, en Polonia, sólo por citar a las víctimas más conocidas. Así, la práctica de la violencia se convertía en una forma «normal» de la lucha política, cuya forma extrema era el terror, ya fuese «rojo» o «blanco», que causó miles de víctimas, en Rusia, pero también en Finlandia, en Bulgaria, en Hungría. En este contexto, también la lucha política tradicional se impregnaba de una lógica de radicalización y polarización.

Aquí se plantea la cuestión del papel de los partidos comunistas adheridos a la Tercera Internacional y de su relación con esas formas de radicalismo de protesta. El propio Lenin se planteó este problema cuando, en 1920, escribió un opúsculo para condenar el «extremismo», en el que él veía una «enfermedad infantil del comunismo». En realidad, su principal preocupación era la de asegurar a su partido, a través de la Tercera Internacional, el liderazgo y el control sobre los partidos comunistas que se adherían a ella. Así, en el curso del II Congreso de la Tercera Internacional, que tuvo lugar en Moscú en agosto de 1920, se estableció que los partidos que quisieran afiliarse se comprometieran a respetar las famosas veintiuna condiciones que, de hecho, otorgaban al Partido Comunista Ruso una posición de preeminencia y de dirección. Entre ellas la más significativa y gravosa era la que imponía a todos sus miembros la obligación de abandonar su nombre histórico y adoptar el de «Partido Comunista». Se les pedía, entonces, que evitaran caer en el «extremismo» y al mismo tiempo se adecuaran al modelo bolchevique o –de manera más simplista, como sonaba un eslogan de la época– que «hicieran como en Rusia»: dos tareas y dos objetivos que difícilmente se podían conciliar. De ello eran conscientes los dirigentes más experimentados de los partidos comunistas europeos y especialmente Paul Levi, un representante del Partido Comunista Alemán que se había formado en la escuela de Rosa Luxemburg, quien aunque había saludado con entusiasmo los acontecimientos del octubre rojo, no obstante, había expresado sus perplejidades acerca de la constitución de una nueva Internacional. Cuando, en marzo de 1921, el partido promovió un intento de insurrección que acabó en fracaso, Levi no dudó en calificar de «putschista» esta iniciativa y abandonó las filas del partido. Desde entonces, como veremos, la vida interna del KPD estuvo marcada por una gran conflictividad y una vocación constante al extremismo maximalista. Pero el Partido Comunista Alemán no fue el único en el que prevalecieron las tendencias más radicales. Lo mismo se puede

decir del Partido Comunista de Italia, nacido en 1921 en Livorno de una escisión del Partido Socialista. Amadeo Bardiga, su dirigente más prestigioso, había sido partidario de la neutralidad y seguía siendo un extremista, y la línea política del partido, por lo menos hasta 1926, cuando Gramsci alcanzó su liderazgo, se inclinaba hacia el aislamiento y el sectarismo. Entre los grandes partidos socialistas de Europa occidental el único que votó por mayoría la afiliación a la Tercera Internacional y a las veintiuna condiciones fue el francés, en su congreso en Tours de diciembre de 1920. Pero esta decisión no encontró la aprobación de la mayoría de los parlamentarios y de los afiliados. El recién nacido Partido Comunista Francés heredó el órgano del partido –*L'Humanité*, fundado por Jaurés–, pero no heredó su fuerza y su prestigio; antes bien, sus primeros años de vida estuvieron caracterizados por un alto grado de crispación en su interior. Ello explica las razones por las que en los mayores países de Europa occidental, –por no decir Inglaterra y los países escandinavos–, las escisiones llevadas a cabo por los comunistas sólo lograron reducir o lastimar la tradicional hegemonía socialdemócrata sobre las clases obreras y el electorado de izquierdas. En todas las elecciones que se sucederán a lo largo de los años veinte, los partidos socialistas y socialdemócratas recogerán una cosecha de consensos ampliamente superior a la de los respectivos partidos comunistas.

De todas maneras, el «extremismo», el «maximalismo» o el *diciannovismo* italiano, o como se les quiera llamar, son un fruto típico de la posguerra, que afectaron y arrastraron –con distinta intensidad según las situaciones y los países– a todas las formaciones y las opciones políticas.

En este cóctel explosivo de disgregación social y radicalismo político se han de buscar los orígenes y las motivaciones de la extremada inestabilidad que caracteriza los acontecimientos de la posguerra, de esa «oscilación del péndulo» de la que habla Karl Polanyi.

La duración y la intensidad de esta oscilación dependen de múltiples variables y por tanto pueden concentrarse en el tiempo o prolongarse por un período más largo, presentar una andadura convulsa o más distendida. En general, puede decirse que fueron tanto más rápidas y repentinas cuanto menos moderna y articulada era la estructura social y política del país en el que se dieron y, a la inversa, fueron más lentas en las sociedades más complejas y dotadas de mecanismos experimentados de organización del consenso y de relajación de las tensiones. *Grosso modo*, la línea de demarcación entre estos dos modelos es la que separa la Europa occidental de la central y oriental, pero, como veremos, no faltaron excepciones por uno y otro lado. Pero el sentido de la oscilación, allí donde se produjo, siempre es el mismo: de izquierda a derecha, de la revolución o la efervescencia revolucionaria hacia el orden y la restauración.

5.2. LA POSGUERRA EN LA EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL

En Austria el gobierno de coalición surgido de las elecciones de febrero de 1919, presidido por el socialista Karl Renner, tuvo que enfrentarse a la difícil tarea de gobernar un país agotado y endeudado, dividido entre una capital «roja» y un campo «blanco» y clerical. En esta situación, muchos opinaban que no había otra solución viable que no fuese la de anexionarse (*Anschluss*) a la nueva república alemana, en el espíritu de la tradición democrática de la «gran Alemania». En esta dirección se movió el ministro de Exteriores, el conocido teórico socialista Otto Bauer. Esta posibilidad, sin embargo, quedó excluida a causa de la postura de las potencias vencedoras, en particular de Francia e Italia, que lograron que se incluyera en el tratado de Saint-Germain una cláusula que sometía una eventual *Anschluss* al consentimiento, muy improbable, de la Sociedad de las Naciones. Otra oportunidad de introducir a Austria en un espacio político más amplio pareció presentarse fugazmente cuando, en marzo-abril de 1919, se proclamaron en Budapest y Múnich sendas repúblicas soviéticas; pero nadie –salvo algunas alas extremistas que en junio dieron vida a una tentativa de insurrección que inmediatamente fracasó– tomó en consideración esta hipótesis, que hubiera aislado al país y lo hubiera privado de aquellas ayudas financieras occidentales que le permitían sobrevivir. En ese espacio restringido los proyectos de reformas y de renovación que habían animado la proclamación de la república parecían muy difícilmente realizables y el péndulo del equilibrio político comenzaba a bascular hacia la derecha. En las elecciones de octubre de 1920 los socialdemócratas perdieron la mayoría absoluta y, tras un breve paréntesis en el que gobernó un gabinete de técnicos, se constituyó en 1922 un gobierno presidido por monseñor Seipel e integrado por hombres del Partido Cristianosocial, que negoció con la Sociedad de las Naciones un acuerdo en el que Austria se comprometía a estabilizar su moneda para poder recibir un importante préstamo. Los socialistas, por su parte, conservaban firmemente el control de Viena y de ello hicieron el escaparate de sus avanzados progresos en el campo de la legislación social, de la urbanística y de la cultura popular. Esta suerte de diarquía sufrió un fuerte golpe en 1927, cuando los socialistas revocaron una huelga convocada para protestar contra la policía, que había disparado a los participantes en una manifestación, causando 94 víctimas. El resultado de esta prueba de fuerza influyó considerablemente en el desarrollo sucesivo de la situación política, desplazándola, como veremos, cada vez más a la derecha.

La oscilación del péndulo, que en Austria había durado ocho años, fue, en cambio, muy rápida en la vecina Hungría, donde en marzo de 1919 los comunistas de Bela Kun, un superviviente de la Rusia revolucionaria

–los cuales se habían fusionado en un único partido con los socialistas– instauraron una república de los consejos, siguiendo el modelo soviético. Debilitada por las disensiones internas e incapaz de llevar a cabo en el campo otra política que no fuese la de las expropiaciones y el «terror rojo»; sometida a la presión militar checa en el norte y rumana en el sur, la república de Bela Kun tuvo una vida breve. A primeros de agosto las tropas rumanas entraban en Budapest y poco a poco iba asumiendo el poder el almirante Horthy, típico representante de la nobleza y del latifundismo magiar, quien gobernó el país con el título de «regente» y desencadenó una oleada de «terror blanco» que produjo miles de víctimas. Hungría, que, junto con Rumania, era el país de Europa oriental donde más extendida estaba la gran propiedad, fue así también el menos afectado por la reforma agraria.

Muy parecido al húngaro fue el caso de Bulgaria. Aquí en las primeras elecciones de la posguerra, en marzo de 1920, triunfó la Liga Agraria y su líder indiscutible Alexander Stambolinsky, recién salvado de una cadena perpetua a la que había sido condenado por su oposición a la entrada en guerra. Éste promovió una reforma agraria que entregó las tierras de la Iglesia y del estado a los braceros y a los pequeños propietarios, que formaban la gran mayoría de la población agrícola, y logró obtener de las potencias aliadas una importante reducción de las reparaciones de guerra al aceptar, como contrapartida, firmar el tratado de Neuilly y renunciar así a los territorios cedidos a Rumania y Grecia. Eso le valió la hostilidad de los emigrados macedonios, que no dudaron en sumarse al golpe de estado que en junio de 1923 derrocó a Stambolinsky, quien después fue mutilado y asesinado. Los comunistas, que no lo habían apoyado, intentaron en septiembre una insurrección, pero ésta fue reprimida violentamente; siguió una oleada de «terror blanco» que causó cinco mil muertes.

La evolución política de Yugoslavia o, más exactamente, del Reino de los serbios, croatas y eslovenos –que había sido proclamado en diciembre de 1918–, a diferencia de lo que se ha constatado en países étnicamente más homogéneos, como Hungría y Bulgaria, estuvo influida, más que por los contrastes sociales, por las diferencias entre las nacionalidades y especialmente entre serbios y croatas. El Reino de croatas, serbios y eslovenos, tal y como había sido concebido en la conferencia de Corfú en julio de 1917, en la que participaron representantes de las tres nacionalidades y que fue proclamado en la conferencia de Zagreb, de diciembre de 1918, hubiera tenido que adoptar una estructura federal; pero en 1929 el rey Alejandro Karageorgevich asumió plenos poderes, suprimió la Constitución de 1921 y modificó la estructura federal del estado en sentido centralista, imponiéndole el nuevo nombre de «Reino de Yugoslavia». El resultado estuvo muy lejos de lo esperado: en lugar de suavizarse, los contrastes étnicos se agudizaron hasta explotar de forma dramática durante la segunda guerra mundial.

Una evolución análoga en el sentido del autoritarismo se observa también en Rumania, donde la dialéctica política quedó durante mucho tiempo limitada al ámbito de una democracia asfixiada y clientelar, hasta que en 1930, a raíz de la vuelta del exilio y de la subida al trono del rey Carol II, se instauró un gobierno personal. Por otra parte, tanto en Yugoslavia como en Rumania se llevaron a cabo leyes de reforma agraria de notable alcance. Eso se explica, por un lado, por la enorme extensión de la propiedad latifundista en Rumania y, por otro, por la circunstancia de que, en las regiones adquiridas gracias a los tratados de paz, los propietarios de latifundios eran mayoritariamente extranjeros: magiares en Transilvania, rusos en Besarabia, turcos en Bosnia.

En Polonia el nuevo estado surgido de la primera guerra mundial incluía en sus fronteras regiones como Galitzia, Posnania y la Baja Silesia, notablemente industrializadas y donde se había desarrollado un importante movimiento obrero. Pero su sistema político estaba dominado por los partidos y por una clase dirigente anclada en los valores tradicionales. Este era el caso del Partido Demócrata Nacional de Roman Dmowsky y del Partido Campesino *Piast* de Wincent Vitos. En cuanto al Partido Socialista Polaco (PSP), que gozaba de un amplio apoyo, en su mayoría había seguido la evolución política de su líder Józef Pilsudsky, desde el socialismo revolucionario de su juventud al nacionalismo antirruso de la madurez; de la revuelta al golpe de estado de mayo de 1926 y al ejercicio del poder en calidad de «padre de la patria».

En Polonia el problema de la reforma agraria también se presentaba con urgencia y se entremezclaba con la cuestión nacional. En efecto, mientras que en la parte occidental del país los campesinos polacos trabajaban las tierras que en gran medida pertenecían a propietarios alemanes o austríacos, en la parte oriental eran los campesinos rutenos o bielorrusos los que trabajaban campos cuyos propietarios eran polacos. Ello complicaba la situación y facilitaba la resistencia de las clases y de las fuerzas políticas conservadoras representadas en el *Sejm*. Se necesitó la avanzada soviética sobre Varsovia en agosto de 1920 (véase cap. 2) para que se imprimiera una aceleración a la reforma agraria, que entró en vigor en 1925 y afectó mayoritariamente a las tierras de los propietarios alemanes. Tras el golpe de estado de
, que tuvo lugar con el consentimiento de los socialistas y de los comunistas, que se empecinaban en ver en él al viejo militante revolucionario que había sido, ya no hubo más iniciativas en esta dirección.

La trayectoria política de Finlandia y de los países bálticos fue distinta. En Finlandia, después de que el «terror blanco», con la ayuda de las tropas alemanas, barriera un efímero gobierno revolucionario proclamado en Helsinki, la situación se normalizó y se volvió a la normal dialéctica política entre las agrupaciones de izquierda y derecha, lo que permitió en 1927 promulgar una avanzada reforma agraria. Y también aquí esto fue a costa sobre todo de los propietarios extranjeros, en este caso suecos. También en los paí-

ses bálticos se pusieron en marcha unas reformas agrarias y gracias a ellas se distribuyeron entre los campesinos tierras que habían pertenecido fundamentalmente a propietarios alemanes.

Pero en Europa oriental la excepción más llamativa a la «regla del péndulo» es la de Checoslovaquia, un país con una notable intensidad industrial y que había heredado el lote más consistente del patrimonio productivo del Imperio de los Habsburgo y que además disponía de una clase política culta y no provinciana, y de dirigentes de gran prestigio internacional, como Tomás G. Masaryk, que fue presidente de la república hasta 1935, y Edvard Benes, quien fue su sucesor después de haber desempeñado el cargo de ministro de Exteriores. Pero Checoslovaquia era también el estado más heterogéneo desde el punto de vista étnico. Los checos y los eslovacos, además de estar divididos por rivalidades históricas, representaban sólo los dos tercios de la población, ya que el otro tercio estaba constituido por varias minorías nacionales, entre ellas la alemana de los Sudetes, que al sumar una quinta parte de la población total del país era, con mucho, la más numerosa. Ello no sólo exponía el país a presiones externas y lo hacía vulnerable, sino que comprometía su propia estabilidad interna al favorecer la fragmentación de las varias agrupaciones políticas según divisiones étnicas. Los socialdemócratas de lengua alemana, por ejemplo, no se reconocían en el Partido Socialista Checo y se organizaron de forma autónoma.

Por eso, también el escenario político checoslovaco durante los años veinte estuvo crispado, pero los contrastes y los cambios que derivaron de ello siempre se mantuvieron en el ámbito de la constitución. Checoslovaquia pudo conseguir, así, resultados brillantes en el terreno económico. Fue el único país de Europa centroriental que supo sustraerse a tiempo del cerco de la inflación y el primero que logró, en 1922, estabilizar su moneda, poniendo así las bases para el progreso económico de los años siguientes. Al mismo tiempo se promovió una avanzada legislación social, que contemplaba, entre otras cosas, el control obrero sobre las minas, se aprobó una reforma agraria y se alentó la formación de cooperativas.

En los países de la Europa occidental, de los que nos ocuparemos en los párrafos siguientes, la «oscilación del péndulo» se realizó en tiempos y ritmos distintos. En algunos de ellos se prolongó más allá de los años veinte; en otros no se produjo en absoluto. Pero tampoco faltaron excepciones, y en especial la de Italia.

5.3. EL ADVENIMIENTO DEL FASCISMO

Italia había salido vencedora de la primera guerra mundial, pero el coste de la victoria había sido elevado, no sólo en términos de vidas humanas (seis-

cientos mil caídos), de destrucciones materiales y de quiebra económica interna y externa, sino también, y sobre todo, en términos de crisis política y social. Durante el conflicto y a causa de éste el sistema de poder había sufrido un proceso de rápida transformación, en el sentido, por un lado, de una mayor concentración y compenetración de los aparatos estatal y económico y, por otro, de una disgregación debida a la proliferación de órganos y funciones diversos que a menudo escapaban a cualquier control. De ello resultaba un estado más autoritario y al mismo tiempo más ineficaz, y un personal dirigente heterogéneo, integrado por políticos, militares e industriales unidos por sus comunes aspiraciones autoritarias y todos ellos muy poco dispuestos a satisfacer las expectativas y las reivindicaciones que la guerra había generado en el país.

En efecto, también en Italia la guerra había despertado la conciencia y la participación política de masas que hasta entonces habían permanecido alejadas o pasivas: las mujeres, que habían entrado masivamente en las fábricas; los campesinos, que al volver del frente reclamaban la tierra que se les había prometido; una clase obrera más numerosa, más joven y más radical, pero también los pequeños burgueses y los oficiales desmovilizados, para los que el fin de la guerra significaba la vuelta a las frustraciones del anonimato, los estudiantes, que de la guerra sólo habían conocido la retórica, los supervivientes y los inadaptados. En este magma de aspiraciones confusas y en contraste, el factor principal de diferenciación seguía siendo el de la postura hacia la guerra, entre los que la habían buscado y exaltado y los que la habían sufrido y odiado. Volvía a producirse, ya terminada la guerra, la misma contraposición entre «intervencionistas» y «neutralistas» que se había producido en las semanas precedentes al conflicto, pero con la diferencia de que esta vez dicha contraposición no sólo afectaba a las minorías «activas», sino también a amplísimos estratos sociales.

Cuando, en abril de 1919, la delegación italiana en la conferencia de paz abandonó la mesa de negociaciones para protestar en contra del rechazo de sus propuestas acerca de la fijación de la frontera oriental, y cuando, en junio, el «ministro de la victoria» V. E. Orlando dimitió y le sucedió Francesco Saverio Nitti, Gabriele d'Annunzio, a la cabeza de un puñado de incondicionales, ocupó en septiembre de 1919 la ciudad de Fiume para reivindicar su pertenencia a Italia y protestar contra la decisión en sentido contrario de la conferencia de París. Pero fueron mucho más numerosos los italianos que se preguntaron si el precio pagado por la victoria que ahora se definía «mutilada» no había sido demasiado alto, y la balanza de la opinión pública se inclinó ahora a favor de los «neutralistas». Italia fue el único país vencedor que renunció a celebrar el primer aniversario de la victoria y el único en que las primeras elecciones de la posguerra, que tuvieron lugar en noviembre de 1919, vieron el triunfo –favorecido por la introducción del sistema propor-

cional y del escrutinio de lista– de aquellos partidos que parecían los menos comprometidos con las responsabilidades de la guerra: el Partido Socialista, que se había opuesto a la intervención y, una vez declarada la guerra, se había ceñido a la fórmula de «no sumarse ni sabotear», y que obtuvo el 32,5 % de los votos; y el Partido Popular, una formación política recién fundada y de inspiración católica, dirigida por un sacerdote –don Luigi Sturzo– que había compartido con el pontífice el horror por la «inútil masacre», y que obtuvo el 20,2 %.

Durante casi un año –de noviembre de 1919 al otoño de 1920– la corriente predominante en la vida pública italiana fue la que procedía de las capas más profundas de la sociedad, que aspiraban a un futuro mejor y más justo. Fue un manantial impetuoso, pero nadie supo canalizarlo y dirigirlo hacia objetivos precisos de renovación política y social. No lo lograron los distintos gobiernos que se sucedieron en aquel período, sometidos como estaban a presiones diversas y naturalmente preocupados por contener la onda de choque que se les venía encima; pero tampoco lo lograron los que más hubieran debido hacerlo, es decir, los partidos que habían salido reforzados de las elecciones. Populares y socialistas estaban divididos no sólo por rencores históricos, sino también cada uno en su seno; los primeros, entre una derecha moderada y vinculada a las jerarquías vaticanas y una izquierda sensible a las reivindicaciones de las poderosas organizaciones sindicales, entre participar en el gobierno y volver a la oposición; los segundos, entre la minoría reformista, que mantenía las posiciones clave dentro del grupo parlamentario y de los sindicatos, y la mayoría maximalista que había salido vencedora del congreso de Bolonia de noviembre de 1919 y que perseguía el espejismo de una revolución siempre anunciada y siempre aplazada.

No es que en el desarrollo de este temblor general no se realizaran adquisiciones y conquistas. La jornada de ocho horas se conquistó de golpe, los obreros obtuvieron aumentos de salario y contratos que sancionaban los nuevos derechos, los campesinos y los ex combatientes se beneficiaron gracias a los decretos de los ministros Visocchi y Falcioni por la asignación, aunque limitada, de tierras sin cultivar. La ocupación de las fábricas en agosto-septiembre de 1920 terminó con el reconocimiento del derecho de los trabajadores al «control obrero» sobre la producción, un principio, por lo demás, que resultó inutilizado por el desarrollo sucesivo de la coyuntura y de los avatares políticos. Pero se trataba de conquistas no sostenidas por adecuadas garantías políticas y que, como tales, fueron puestas en tela de juicio y con frecuencia anuladas al desvanecerse la coyuntura favorable que –en Italia así como en otros países europeos– había caracterizado los primeros meses de la posguerra y al que sucedió, a partir del otoño de 1920, una época de fuerte depresión. Los efectos de la crisis fueron tanto más devastadores cuanto más imprevistos: a medida que los índices de desempleo aumen-

taban, disminuían los de los afiliados a los sindicatos y de los participantes en los conflictos laborales. Tampoco faltaron reflejos políticos: en enero de 1921, el PSI vivió, como se ha visto, su primera escisión, la que dio origen al Partido Comunista de Italia, a la que siguió, en octubre de 1922, la del ala reformista de Filippo Turati y Giacomo Matteotti. Simultáneamente, la Confederación General del Trabajo se distanció del Partido Socialista, relajando un vínculo históricamente consolidado. En cuanto al Partido Popular, los congresos de Nápoles (abril de 1920) y Venecia (octubre de 1921) confirmaron las divergencias y las divisiones de su grupo dirigente y entre los afiliados.

Para las fuerzas de la conservación y del orden había llegado, así, la hora de la revancha, pero también esta vez la señal y el empuje vinieron desde abajo. Fue en la provincia donde, a partir del otoño de 1920, cundió el movimiento *squadrista*, en el que confluyeron clases sociales y motivaciones políticas y psicológicas muy diversas, desde el deseo de revancha de los propietarios agrícolas y de los industriales a las frustraciones de los supervivientes y de los estudiantes; del resentimiento de los comerciantes para con las cooperativas rojas, a las vagas esperanzas de palingenesia de los jornaleros en paro. Su radio de acción, inicialmente limitado al valle padano, se extendió poco a poco por toda la Italia centroseptentrional, llegando, en el transcurso de 1921 y 1922, a los grandes centros urbanos. Los objetivos de las «expediciones punitivas» de las escuadras de acción eran las sedes de los partidos de izquierda, de los sindicatos, de las cooperativas y de los ayuntamientos regidos por administraciones socialistas o también populares, y fueron objeto de sus persecuciones y de sus «avisos» los hombres que los dirigían. Frente a esos abusos las autoridades locales, civiles y militares cerraban los ojos, mientras que los propietarios agrarios y algunos industriales no escatimaban apoyos.

Los escuadristas tenían como punto de referencia político la figura de Benito Mussolini, quien en marzo de 1919 había fundado en Milán el primer *fascio* de batalla, sobre la base de un programa heterogéneo y radicalizante; de ahí que sus integrantes se llamaran «fascistas». Hasta entonces el fascismo había sido un movimiento con pocos seguidores –en las elecciones de noviembre 1919 había presentado una lista sólo en la circunscripción de Milán, obteniendo poco más de cuatro mil votos – y la popularidad de su jefe era sin duda inferior a la de Gabriele d'Annunzio, el protagonista de la empresa de Fiume. El propio Mussolini quedó sorprendido por el éxito del movimiento escuadrista, pero tan pronto como éste comenzó a imponerse no dudó en reivindicar su paternidad y asumir su dirección política, logrando con habilidad capitalizarlo y administrarlo, aflojando o tensando sus riendas según las circunstancias. En mayo de 1921, Mussolini aceptó la oferta de Giolitti, quien en junio de 1920 había sucedido a Nitti, de entrar a formar parte de la lista de concentración nacional que se presentó a las elecciones, logrando así que fuesen elegidos treinta y cinco diputados fascis-

tas y adquiriendo un primer reconocimiento de respetabilidad política, aunque inmediatamente después devolvió plena libertad de acción a sus escuadras. Pero cuando, en julio, una expedición punitiva se estrelló por primera vez contra la reacción contundente de las fuerzas del orden, él tensó de nuevo las riendas y selló, bajo los auspicios del nuevo presidente del gobierno, Ivanoe Bonomi, un «pacto de pacificación» con los socialistas. La iniciativa levantó las protestas de los caciques locales, pero Mussolini contestó presentando su dimisión en la comisión ejecutiva. Ésta fue rechazada y Mussolini, fortalecido por este éxito, convocó en Roma un congreso del que lo que hasta entonces había sido un «movimiento» heterogéneo y disperso salió convertido en un partido, del que él era el líder o, mejor dicho, el *Duce* reconocido e indiscutible. Mientras tanto, no cesaba de lanzar señales tranquilizadoras y guiños en dirección a los varios sectores del *establishment*: hacia los industriales, dejando caer las propuestas de socialización y de un impuesto progresivo, contenidas en el programa de 1919, y profesando convicciones liberalistas; hacia la monarquía, renunciando a la declaración de principios republicanos del programa; hacia los militares, muchos de los cuales simpatizaban con el fascismo; y finalmente hacia la Iglesia, de la que exaltaba la misión universal.

Se determinó, así, una situación de incertidumbre y de inestabilidad política: entre la dimisión del gobierno de Giolitti, en junio de 1921, y octubre de 1922, tuvieron lugar tres crisis y se sucedieron dos gobiernos, presididos, respectivamente, por Bonomi y Facta. El caos llegó a su cúspide en verano de 1922, cuando la Alianza de Trabajo, en la que se integraban algunas de las mayores organizaciones sindicales, proclamó una huelga «legalista» para exigir al gobierno una política de firmeza hacia las nuevas violencias fascistas. La huelga tuvo un éxito parcial, y una nueva oleada de represalias se extendió por todo el país. La situación ya estaba madura para un giro político y el advenimiento de un gobierno de orden. Entre los fascistas de las provincias tomó cuerpo, en aquellos días, la idea, ya avanzada por D'Annunzio, de una «marcha sobre Roma», con el objetivo de imponer al rey y al gobierno aquella solución que por sí solos eran incapaces de tomar. En Roma, en cambio, se trabajaba por una solución que se mantuviera dentro de los límites de la praxis constitucional y parlamentaria, como podía ser un gobierno presidido por Giolitti o Salandra con la participación de ministros fascistas. Y también en este trance Mussolini dio prueba de una consumada habilidad táctica: mientras las columnas escuadristas se concentraban a la espera de moverse hacia la capital, él mantenía contactos frenéticos con el mundo político romano. La hora de la verdad llegó la noche del 27 y la mañana del 28 de octubre, cuando el rey, tras alguna vacilación, se negó a firmar el decreto de estado de sitio, obligando a Facta a la dimisión. Las escuadras fascistas obtuvieron así luz verde para marchar sobre

Roma y Mussolini, que había esperado prudentemente en Milán el desarrollo de los acontecimientos, pudo acudir ante el rey para recibir el encargo de formar el nuevo gobierno.

Algunos estudiosos (Nolte, Furet) han visto en los acontecimientos italianos de los años 1921-1922 el primer acto de una «guerra civil europea» en la que comunistas y fascistas se enfrentarían en un duelo a muerte cuya conclusión sería sólo en 1945. Que los fascistas fuesen anticomunistas está fuera de duda; pero ello no significa y no implica que, como ellos decían, en Italia existiera una situación revolucionaria análoga a la rusa. Los únicos que lo creían (o tenían esa ilusión) eran los comunistas, y ni siquiera todos. Pese a su maximalismo, el Partido Socialista, como también hemos visto, se había negado a aceptar las veintiuna condiciones impuestas por Moscú. Por lo que concierne a los sindicatos, cuyos dirigentes eran en gran medida reformistas, una delegación que acudió a Rusia en 1920 no dejó de hacer públicas sus perplejidades. En realidad, el anticomunismo de los fascistas no era más que un pretexto para justificar sus «expediciones punitivas» ante una opinión pública desorientada y asustada. El objetivo de la «guerra civil», si así se la quiere llamar, que perseguían las escuadras de acción eran las ligas campesinas, ya fuesen rojas o blancas, las Cámaras del Trabajo, los representantes políticos antifascistas, en resumen, la democracia.

La fecha del 28 de octubre de 1922 será celebrada, durante los veinte años de fascismo, como la de la «revolución fascista». En realidad, se trató de una revolución hecha posible por la complacencia y la complicidad de los poderes constituidos y que formalmente se resolvió según las reglas constitucionales. A pesar de la arrogancia con la que Mussolini se dirigió al Parlamento en su discurso de presentación del nuevo gabinete, se trataba de un gobierno de coalición en el que el número de ministros fascistas o profascistas era exactamente igual al de ministros procedentes de otras formaciones políticas: populares, nacionalistas, liberales, sin cuyo apoyo no dispondría de la mayoría parlamentaria. Sin embargo, aunque en un plano estrictamente formal se habían salvado las apariencias, un profundo desgarro se había producido y se había emprendido un camino muy difícil de deshacer. Los hechos no tardaron en demostrarlo.

Entre los primeros actos del gobierno de Mussolini, al que en noviembre de 1922 la Cámara de diputados había concedido «plenos poderes» hasta el 31 de diciembre de 1923, los más relevantes fueron la institución de la Milicia Voluntaria para la Seguridad Nacional (MVSN), en la que confluyeron los hombres de las escuadras de acción, y la decisión de hacer permanente el Gran Consejo del fascismo, fijando un calendario de reuniones mensuales. Nacían, así, un ejército paralelo y una suerte de «gobierno en la sombra», y comenzaba un período de «interregno constitucional» (Lyttelton, 1970) que se prolongará hasta la crisis generada por el asesinato de Mat-

teotti. La posteriores etapas de esta involución autoritaria fueron la fusión con los nacionalistas, en febrero de 1923, por medio de la cual el fascismo se aseguró la colaboración de hombres competentes como Alfredo Rocco y Luigi Federzoni– que gozaban de la confianza de los ambientes industriales y militares y propugnaban una concepción orgánica del estado–, y la ruptura con los populares, que se vieron obligados a dimitir en abril. Este último acontecimiento fue facilitado por los contactos que Mussolini había establecido con el Vaticano y por las presiones que éste ejerció sobre el Partido Popular para que no adoptara la línea de la oposición, que don Sturzo había defendido en el congreso de Turín en abril de 1923.

Con la salida de los populares de la mayoría, el gobierno se encontraba todavía más expuesto al riesgo de una crisis. La salida de este atolladero la indicó el Gran Consejo, al adoptar una nueva ley electoral, cuya elaboración fue confiada a Giacomo Acerbo. Su proyecto llegó al Parlamento y se aprobó con la abstención de los populares y el voto contrario de la oposición de izquierda. En él se contemplaba la asignación de dos tercios de los escaños a la lista que recogiera el mayor número de votos en el colegio único nacional, mientras que el tercio restante se distribuiría entre las demás listas.

La «listona», que había congregado, además de a los fascistas, a numerosos representantes de la vieja clase política liberal, entre ellos Salandra y Orlando, obtuvo el 64,9 % de los votos y 374 diputados (de los que 275 eran fascistas), mientras que las listas de la oposición obtuvieron 145. En Piamonte, en Lombardía, en Liguria y en Véneto, regiones en donde los partidos de la oposición estaban más arraigados, éstos obtuvieron resultados ligeramente superiores a los de la «listona», que en cambio resultó ampliamente mayoritaria en la Italia central y meridional.

Los fraudes y las violencias que tuvieron lugar durante las elecciones fueron denunciados el 30 de mayo por el diputado socialista Giacomo Mattetotti en un apasionado discurso ante el Parlamento. Diez días después –el 10 de junio– un grupo de escuadristas al mando de Amerigo Dumini lo raptaban cerca de su casa romana, y el 16 de agosto su cuerpo fue encontrado en un campo cerca de Roma. La conmoción en el país fue enorme y la oposición parlamentaria se hizo eco de ella abandonando el aula de Montecitorio y negándose a volver hasta que no se aclarara el episodio y se disolviera la milicia. Fue la llamada secesión del Aventino. Los diputados aventinianos, cuyo miembro más representativo y escuchado era Giovanni Amendola, no llegaron, como proponían los comunistas, hasta la convocatoria de una huelga general, porque temían que se repitiera el fracaso de la «huelga legalista» de agosto de 1922 –sólo hubo un paro en el trabajo durante diez minutos, al que se adhirieron también los sindicatos fascistas–, sino que prefirieron apostar por la intervención de la Corona. En el frente opuesto, los dirigentes del fascismo radical de las provincias, el más extre-

mista de los cuales era el cremonés Roberto Farinacci, invocaban una «segunda oleada» que barriera las resistencias a la instauración de un régimen fascista. Volvía a perfilarse, así, el riesgo de una recaída en la guerra civil, pero también en esta ocasión Mussolini, cuyas responsabilidades en el asesinato de Matteotti eran probablemente sólo políticas, supo maniobrar con habilidad, alternando la firmeza con la flexibilidad. En junio procedió a una remodelación del gobierno y confió a Federzoni, notoriamente un hombre de orden y cercano a la monarquía, la cartera de Interior, que hasta entonces había ostentado el propio Mussolini, que hacía así un gesto dirigido a tranquilizar a los bienpensantes. Sin embargo, inmediatamente después, en julio, hizo aprobar un decreto que limitaba la libertad de prensa. Y también en esta ocasión pudo contar con el discreto apoyo del Vaticano: en septiembre, el cardenal Gasparri advertía en una circular al clero que no participara en la lucha política. La admonición estaba dirigida, en particular, a don Sturzo, al que en octubre se instó, con igual discreción, a que abandonara el país. Así, ésta fue la primera personalidad política obligada a tomar el camino del exilio. También la patronal se declaró a favor de la estabilidad de gobierno, y lo mismo hizo el Partido Liberal.

Envalentonado por los apoyos recibidos, Mussolini pudo así presentarse ante las Cámaras el 3 de enero de 1925 y pronunciar un discurso en el que asumía toda la responsabilidad de lo que había pasado, hasta desafiar al Parlamento a llevarle ante la Alta Corte, un desafío que él sabía muy bien que no sería aceptado.

5. 4. LA REPÚBLICA DE WEIMAR DE 1919 A 1923

A finales de 1918, tras la proclamación de la república y la firma del armisticio, la situación de Alemania era la de un país al borde del colapso. En Múnich se había constituido una república bávara gobernada por una coalición de izquierdas encabezada por Kurt Eisner, en Renania los franceses soplaban sobre el fuego del separatismo, en las regiones orientales acampaban, amenazadoras, unidades procedentes del frente y la misma Berlín era una ciudad en ebullición, escenario de continuos enfrentamientos entre las distintas tendencias y facciones surgidas del movimiento revolucionario de noviembre.

Friedrich Ebert y los otros comisarios «mayoritarios» –quienes tras la retirada de sus compañeros «independientes» en diciembre habían quedado como únicos miembros del gobierno elegido por la asamblea de obreros y soldados del 10 de noviembre– tuvieron, pues, que enfrentarse a una tarea ardua. Al precio de una dura batalla política contra los partidarios de una «república de los consejos» basada en el modelo soviético, lograron que prevaleciera la solución propugnada por ellos, es decir, la elección de una asamblea constituyente.

Las elecciones se celebraron en enero de 1919 y en febrero tomaba posesión un gobierno de coalición presidido por el socialdemócrata Scheidemann. El primer problema al que tuvo que enfrentarse fue tremendamente escabroso: la firma del tratado de paz. Si un observador extranjero como J. M. Keynes calificaba las cláusulas de Versalles como «una paz cartaginesa», tanto más intolerables y humillantes las consideraba la inmensa mayoría de los alemanes, empezando por Scheidemann, quien se negó a firmar y dimitió en junio de 1919. Fue necesario, así, constituir un nuevo gobierno, también presidido por un socialdemócrata –Gustav Adolf Bauer–, que se hizo cargo de la responsabilidad de la firma. Fue una decisión contradictoria y difícil, pero sabia: la alternativa podía ser la disgregación de un estado que, después de todo, todavía no alcanzaba el medio siglo de vida.

Desatado el nudo gordiano del tratado de Versalles, la asamblea constituyente, que había escogido como sede la tranquila Weimar en lugar de la turbulenta Berlín, pudo seguir con su trabajo, y el 31 de julio de 1919 se aprobaba la nueva constitución. Con todo, muchos contemporáneos y no pocos historiadores la han considerado una abstracta elaboración de profesores, como eran desde luego Max Weber y Hugo Preuss, quienes estuvieron entre sus principales artífices. En realidad, se trataba de un texto complejo y contradictorio, donde los elementos inspirados en una concepción avanzada y participativa de la democracia –como una ley electoral rigurosamente proporcional, el voto para las mujeres y la institución del referéndum– se veían compensados por elementos de tipo unanimista y hasta autoritario, como la elección directa del presidente de la república y el recurso a poderes extraordinarios previsto en el artículo 48. Es muy difícil juzgar en abstracto su funcionalidad: prueba de ello es precisamente el artículo 48, que ha sido diversamente juzgado, según se consideren los primeros o los últimos años de la república, como un precedente peligroso o un eficaz pararrayos en el camino hacia una involución autoritaria. Análogamente, el hecho de que en el ámbito de la estructura federal de la república Prusia conservara su integridad territorial y su influencia puede evaluarse diversamente, según se considere lo que esta región representaba históricamente o el papel que, como veremos, ejerció en defensa de la democracia el gobierno socialdemócrata que la dirigió ininterrumpidamente hasta 1932. La segunda parte de la constitución de Weimar estaba dedicada a los «derechos y deberes fundamentales de los alemanes», entendiendo por derechos no sólo los políticos, sino también los «sociales», como la libertad ilimitada de asociación (art. 159), el reconocimiento de los convenios colectivos sellados por las partes sociales (art. 165), el derecho al trabajo y al sustento (art. 163), la puesta en marcha de un sistema de seguros «para la salvaguarda de la salud y de la capacidad de trabajo, para la tutela de la maternidad y la prevención de las consecuencias económicas de la vejez, de la debilitación física y de las

circunstancias negativas de la vida» (art. 161), y el control del estado sobre la «división y utilización de la tierra» (art. 155). Todo ello, en el marco de un proyecto destinado a realizar un «ordenamiento de la vida económica que se corresponda con los principios de la justicia, con el objetivo de garantizar a todos una vida digna» (art. 151). Es evidente que los compromisos contenidos en esta segunda parte de la constitución querían ofrecer una satisfacción de las expectativas de renovación social expresadas por el movimiento de los consejos y por los partidos de izquierda, además de dar un respuesta a la solemne «Declaración del pueblo oprimido y explotado» promulgada por el Congreso de los soviets rusos en enero de 1918. De todas maneras, más allá de la situación contingente, la constitución de Weimar queda como la primera que recoge los principios que constituirán la base del *welfare state*.

La constitución de Weimar superó con éxito su primera dura prueba. Cuando, en marzo de 1920, algunas unidades se amotinaron e instalaron en Berlín un gobierno encabezado por el general Von Luttwitz y por Wolfgang Kapp, un hombre político de la Prusia oriental conocido por sus ideas pangermanistas, el *Putsch* fracasó a causa de la huelga general proclamada por los sindicatos y por la falta de colaboración de los funcionarios, que se mantuvieron fieles al estado, aunque éste era una república. Pero el *Putsch* dejó unas consecuencias políticas: por ejemplo en Baviera, donde el gobierno socialista, que había sucedido a una efímera república soviética, fue derrocado y sustituido por un gobierno «de orden».

La colaboración que se había establecido ya durante la guerra entre las formaciones de la «comisión de los partidos» –socialdemócratas, *Zentrum* y Partido Demócrata, que en las elecciones de enero de 1919 habían alcanzado todos juntos el 76 % de los sufragios– ciertamente contribuyó a hacer menos impracticable el camino que condujo a Weimar, pero no hubiera sido suficiente sin el apoyo, o por lo menos la neutralidad, de la gran patronal, que había sido la protagonista del impresionante crecimiento económico de Alemania antes de la guerra. Dicha colaboración se vio confirmada en noviembre de 1918 por el acuerdo firmado entre Hugo Stinnes, en representación de los industriales, y Karl Legien, en representación de todos los sindicatos. En base a este acuerdo, las dos partes se reconocían como sujetos exclusivos de la contratación sindical dentro de un sistema de «comunidad de trabajo» (*Arbeitsgemeinschaft*), que culminaba en un organismo central, la *Zentrale Arbeitsgemeinschaft*. Además, los sindicatos obtuvieron el reconocimiento de las conquistas alcanzadas en el curso de la revolución de noviembre, empezando por la jornada de ocho horas, los contratos colectivos, los subsidios de desempleo y la participación en los beneficios. De las grandes reivindicaciones que mantenía el mundo del trabajo quedaban pendientes, en cambio, las que hacían referencia a la socialización y al papel de los consejos obreros. Ni para la una ni para la otra, aunque fueron objeto de vivaces discusiones, se encontró una solución concreta.

El acuerdo alcanzado entre Stinnes y Legien, esa «constitución social de la república» (H. Schulze, 1987, p. 77), hizo posible el mantenimiento de los salarios en un nivel no demasiado alejado del de la anteguerra y un control del desempleo en niveles aceptables. La conflictividad, que había alcanzado su cúspide en 1920, en los años siguientes decreció rápidamente, y sólo experimentó un recalentamiento durante la ocupación del Ruhr. ¿Cómo evitar que las conquistas realizadas por el mundo del trabajo afectaran negativamente al nivel de los beneficios? La contrapartida que los industriales pedían a las autoridades políticas y monetarias consistía en una política económica capaz de favorecer las exportaciones y aliviar las deudas de la industria y el peso de las reparaciones. Pero todo ello comportaba la explosión de un proceso inflacionista y una progresiva devaluación del marco, cuyas consecuencias gravarían sobre las espaldas de los ahorradores y de las clases medias. De hecho, éste fue el camino que se emprendió; entre mayo de 1921 y mediados de 1922 el cambio del marco con el dólar pasó de 14,8 a 400 marcos. Las razones de la competencia, en efecto, habían primado sobre las de la estabilidad monetaria y el ahorrador alemán estuvo mucho menos amparado que su homólogo francés. No pasará mucho tiempo hasta que las consecuencias de esta estrategia de política económica se dejen sentir de forma dramática.

Junto con la industria, el otro pilar tradicional de la sociedad alemana era el ejército y éste también ayudó a sostener la república recién nacida en sus primeros pasos. Casi al mismo tiempo del acuerdo Stinnes-Legien, el 10 de noviembre de 1918, se estipuló otro acuerdo entre Ebert y el general Gröner, el sucesor de Ludendorff; en él, el ejército se comprometía a respetar la nueva legalidad republicana, a condición de que la república se comprometiera a su vez a restablecer el orden y a reprimir cualquier intento de subversión revolucionaria. Gracias a este acuerdo, pudo restablecerse el orden en Berlín, en Múnich y en el Ruhr, que entre marzo y abril de 1920 fue escenario de violentos enfrentamientos entre las milicias obreras organizadas por los comunistas y las unidades de la *Reichswehr*. Y también fue gracias a la postura neutral que mantuvieron las jerarquías más altas en el momento del *Putsch* de Kapp que la república pudo sobrevivir. Pero el precio de este pacto fue alto y consistió en el alejamiento del espíritu de Weimar por parte de importantes energías morales e intelectuales. El asesinato de Karl Liebknecht y de Rosa Luxemburg, perpetrado el 15 de enero de 1919 por los *Freikorps* a los que el socialdemócrata Noske había dado la orden de mantener la calma en Berlín, y el de Kurt Eisner, al que mató en Múnich un nacionalista aristócrata, privaron de sus cabezas más clarividentes al ala radical del movimiento obrero, empujándolo hacia posiciones de defensa y oposición al sistema y perjudicando, así, las posibilidades existentes de reunificación de la izquierda alemana. Desde entonces, la historia del Partido

Comunista Alemán (KPD), en el que, en octubre de 1920 había confluido la mayoría de los «independientes», se caracterizará, de hecho, por su constante vocación al sectarismo y por una cada vez más estrecha subordinación a la Internacional Comunista. En 1921, con el atisbo revolucionario de la «acción de marzo», que Paul Levi, alumno y heredero espiritual de Rosa Luxemburg, intentó inútilmente evitar; en 1923, con los intentos de insurrección en Turingia y Saxonia; en 1925, con la decisión de defender la candidatura de Thälmann, contribuyendo así a la victoria de Hindenburg en las elecciones para la presidencia de la república; y finalmente, entre 1928 y 1933, con la consigna «clase contra clase» y la consiguiente lucha contra el «socialfascismo» del SPD: siempre será esta vocación sectaria la que se impondrá.

La relativa rapidez con la que se había producido la estabilización había abierto, pues, heridas profundas y su impacto en la opinión pública pudo medirse en las elecciones para el nuevo Parlamento en junio de 1920. Los integrantes de la «comisión de partidos» sufrieron pérdidas relevantes, en especial los socialdemócratas, que bajaron del 37,9 % de 1919 al 21,6 %; en cambio, los partidos de derecha (*Deutsche Nationale Partei*, *Deutsche Nationale Volkspartei*) y los de extrema izquierda (comunistas y socialistas independientes) resultaron beneficiados. Se perfilaba, así, aquel proceso de polarización del electorado hacia los extremos que, salvo algún momento de tranquilidad, representará una constante en la vida política de la república hasta el ascenso de Hitler al poder. A partir de ahora la inestabilidad política será la regla y los gobiernos se sucederán con un ritmo sostenido. Además, para mayor complicación, seguía el estado de cuarentena política al que Alemania estaba sometida dentro del sistema de relaciones internacionales. El tratado de paz con los Estados Unidos (véase cap. 1) y el tratado de Rapallo con la Unión Soviética, de abril de 1922, habían abierto, desde luego, una brecha en su aislamiento. Pero continuaban siendo difíciles las relaciones con las mayores potencias europeas, dificultadas como estaban por la complicada cuestión de las reparaciones, cuya impopularidad entre la opinión pública alemana era igual (cuando no mayor) a la del tratado de Versalles. A acrecentarla y transformarla en emotividad e indignación concurrieron la ocupación por parte de los aliados de las ciudades de Duisburg, Düsseldorf y Ruhrort en marzo de 1921, a consecuencia del rechazo alemán a aceptar los términos y el calendario de los pagos de las reparaciones propuestos por los aliados, y, más aún, la decisión del consejo de la Sociedad de las Naciones, en octubre de 1921, de asignar a Polonia el 40 % de la Alta Silesia, a pesar de que en el referéndum que se había celebrado en marzo sobre los términos del tratado de paz, la población se había expresado a favor de la permanencia en el *Reich*: era la prueba de que el proclamado principio de la autodeterminación no valía cuando se trataba de poblaciones alemanas.

La indignación llegó a su punto álgido cuando, en mayo de 1922, se notificó el importe total de las reparaciones requeridas por los aliados: ciento treinta y dos millones de marcos en oro. La cifra era exorbitante, pero los mecanismos del pago y sus plazos (se preveían cuarenta y dos anualidades) dejaban algún margen para más negociaciones en el sentido de una revisión. Era sabido, por otra parte, que en el extranjero, y en particular en Inglaterra, se tenía conciencia de que un colapso de la economía alemana llevaría a un deterioro de la coyuntura para todos. Confiando en la ayuda del tiempo, el gobierno de canciller Wirth se decantó por una «política de cumplimiento» y empezó a efectuar los primeros pagos. Pero una política semejante suponía una contención gradual de la inflación y un saneamiento de la situación financiera interna y, en el plano de las relaciones internacionales, una mejora de las relaciones francoalemanas que permitiese nuevas negociaciones y alivios. Éstos fueron precisamente los objetivos que persiguió Walther Rathenau, quien al hacerse cargo de la cartera de Exteriores en el gobierno de Wirth, gozaba de un gran prestigio en los ambientes internacionales, por la experiencia acumulada en su calidad de organizador y planificador de la economía de guerra. Pero él también tuvo que enfrentarse a una serie de circunstancias imprevistas y desfavorables. En la esfera internacional, la caída del gabinete de Briand y el ascenso al poder de Poincaré en Francia después de la conferencia de Cannes (véase abajo, pp. 96-97) lo privaron del interlocutor más comprensivo; dentro de Alemania, en cambio, el obstáculo principal lo representaron los círculos industriales y su principal representante, Hugo Stinnes, interesados en mantener y acrecentar la competitividad de la industria alemana y por consiguiente reacios a una política de mayor severidad fiscal y crediticia.

El 14 de junio de 1922, Rathenau, que en la madrugada anterior había mantenido un tenso coloquio con Stinnes en la residencia del embajador americano, fue asesinado por un grupo de fanáticos nacionalistas y en noviembre el gobierno de Wirth, tras haber pedido una moratoria de las reparaciones sin obtenerla, propuso que la mayoría se extendiera a los populares de Stresemann, el partido que tradicionalmente defendía los intereses de la gran industria. Los socialdemócratas se opusieron y el canciller tuvo que presentar su dimisión. El nuevo gobierno que se constituyó, presidido por Wilhelm Cuno e integrado por personalidades de segundo orden, tuvo que afrontar, como veremos, una situación de grave emergencia, que se determinó a raíz de la ocupación francobelga del Ruhr.

5.5. LA FRANCIA DE LA POSGUERRA

Entre los países europeos Francia era aquel cuyo territorio más directamente y por más tiempo había sido arrasado por la guerra. Regiones enteras, que

durante años habían sido simples campos de batalla, estaban devastadas, y los daños materiales sufridos por el país se calculaba que equivalían a once años de inversiones de la anteguerra. Para reconstruir se necesitaban brazos, pero también éstos faltaban. Nada menos que un millón trescientos cincuenta mil franceses habían caído en el frente. En un país caracterizado por una tasa de incremento demográfico reducida eso representaba, entre otras cosas, una drástica contracción de las fuerzas productivas, a la que se intentó poner remedio alentando una masiva emigración desde el extranjero y en particular de Europa meridional y oriental y de las colonias, y promulgando una ley contra el aborto (julio de 1920). Pero, en este último caso, se trataba de un remedio a largo plazo. De momento quedaba la sensación de vacío y de dolor que había dejado la guerra. Ésta había tenido también un coste enorme y para saldar el déficit en la balanza de gastos e ingresos se había recurrido en amplia medida a la deuda pública mediante la emisión de «bonos de la defensa nacional», cuyos suscriptores ahora tenían que ser pagados con los intereses debidos. La propuesta, avanzada por los socialistas, de consolidar la deuda pública no sólo sonaba como una ofensa para quien había dado prueba de patriotismo, sino que minaba las mismas bases del consenso y de la confianza en las instituciones. En un país en el que la figura del ahorrador era particularmente común, el franco asumía un valor casi fetichista, análogo al del metro como unidad de medida (Berstein-Milza, 1991, p. 360). Así que su defensa contra la devaluación que había sufrido frente a las monedas fuertes y el mantenimiento de su valor de antes de la guerra eran una exigencia ineludible no sólo económica, sino también política. Se recurrió, por tanto, al artificio contable de distinguir la balanza de gastos y entradas de tipo ordinario de la de gastos extraordinarios o «recuperables», que tenían que ser cubiertos esencialmente por las reparaciones alemanas. Francia –confiaban sus gobernantes– tenía todos los medios para obligar a Alemania a pagar.

En efecto, Francia era un país vencedor que gracias a su victoria no sólo había recuperado las tierras perdidas en 1871 y ampliado sus posesiones coloniales, sino que venía a ser, tras la derrota alemana y el desastre en que se encontraba Rusia, la mayor potencia continental. Además, si bien tenía ingentes deudas con Estados Unidos e Inglaterra, era a su vez acreedora no sólo de Alemania, sino también de Rusia.

La desorientación por la tragedia vivida y el sentido de orgullo y de revancha por la victoria conseguida encontraron su coágulo en la formación del *Bloc National*, en donde confluyeron, bajo el auspicio de la potente *Union des intérets économiques*, representantes y agrupaciones de varias familias políticas, tanto conservadores como moderados y «republicanos» en sus distintas facetas, que antes de la guerra se habían dividido frente a temas como la laicidad del estado y de la enseñanza. Ahora que Francia vetaba el aborto y volvía a abrir su embajada en el Vaticano (mayo de 1921), tales

controversias quedaban atrás y la mayoría de los franceses se reconocía en la común animadversión hacia la amenaza de la subversión y en el propósito común de valorar una victoria obtenida al precio de tantos sacrificios. El Bloque, del que Clemenceau era el líder y la personificación, consiguió una aplastante victoria, conquistando dos tercios de los escaños en juego. Las pérdidas más consistentes fueron las de los radicalsocialistas de Herriot, que perdieron a noventa diputados. También los socialistas, aunque registraron un incremento de los votos, perdieron cerca de treinta escaños. Desde luego un triunfo tan claro había sido posible gracias al mecanismo de una ley electoral proporcional modificada para favorecer la victoria de las listas de concentración en cada colegio; sin embargo, era un triunfo igualmente indicativo de las orientaciones mayoritarias en la opinión pública.

Una serie de circunstancias imprevistas o fortuitas, en primer lugar la fallida elección a la presidencia de la república de Clemenceau al expirar el mandato de Poincaré, hicieron que entre 1919 y 1922 se sucedieran varios gobiernos. No obstante, la línea política que todos ellos siguieron no experimentó variaciones sustanciales.

En la política exterior el objetivo, tenazmente perseguido, fue no sólo el de garantizar el respeto de los tratados y mantener el equilibrio que con ellos se había instaurado, sino también de asegurar a Francia una posición dominante en la Europa posbélica. Con este fin, se consolidaron los vínculos de alianza con Bélgica y se estipularon una serie de tratados con los estados de Europa oriental que estaban más interesados en respetar el orden de Versalles: con Polonia, cuyas reivindicaciones sobre la ciudad de Vilnius y sobre la Alta Silesia Francia sostuvo con vigor, y con los estados de la Pequeña Alianza (Checoslovaquia, Yugoslavia y Rumania). También la SDN, que Francia habría querido dotar de una fuerza de intervención propia, se consideraba en Quay d'Orsay esencialmente como el garante y el guardián del equilibrio europeo contra un posible revisionismo alemán y contra la amenaza de subversión que procedía de la Rusia soviética. La postura de Francia hacia esta última fue especialmente intransigente; no sólo envió sus barcos al Mar Negro y sus tropas a Odesa, sino que también fue la única potencia europea en comprometerse militarmente en la guerra ruso-polaca de 1920 y en reconocer el gobierno blanco de Wrangel.

Si el orden tenía que reinar en Europa, también tenía que reinar en Francia. Los gobiernos del *Bloc National*, como todos los demás gobiernos europeos de la posguerra, se vieron obligados a enfrentarse a una oleada de reivindicaciones y huelgas, alentada por la *Confederation générale du travail* y por el Partido Socialista. Se intentó atajar dicha oleada con la introducción de la jornada laboral de ocho horas y el reconocimiento de la validez jurídica de los convenios de trabajo (marzo y abril de 1919), pero ello no fue suficiente para frenar el crecimiento de las agitaciones sociales. Así, se llegó al

pulso entre el gobierno y las más aguerrida y radical de las organizaciones sindicales, la de los ferroviarios, quienes en mayo de 1920 entraron en huelga, exigiendo la nacionalización de los ferrocarriles; de este pulso el gobierno, que no dudó en tomar medidas de intimidación y en despedir a quince mil trabajadores, salió airoso. Las consecuencias de esta derrota fueron muy graves para la CGT, cuyos afiliados disminuyeron de dos millones a seiscientos mil, y para el propio Partido Socialista, que en su congreso de Tours de diciembre de 1920 se escindió, como se ha visto, entre una mayoría partidaria de la adhesión a la Tercera Internacional y que se denominó Partido Comunista Francés, y una minoría que mantuvo la vieja denominación y en 1923 se adhirió a la Internacional Obrera y Socialista. La escisión se trasladó al campo sindical, con la constitución en diciembre de 1921 de una nueva confederación, la CGTU, de inspiración comunista.

Apoyada por el gobierno, la patronal francesa se encontró, así, en condiciones de proceder con rapidez a la obra de reconstrucción y de modernización del aparato productivo. Los principales indicadores económicos disponibles demuestran que los resultados obtenidos fueron brillantes. Las regiones devastadas fueron rápidamente reconstruidas, el paro fue casi totalmente eliminado y, gracias al dinamismo de una nueva generación de empresarios (Renault, Berliet, Citroen, Boussac), se desarrollaron una serie de nuevas actividades industriales, donde encontraron su aplicación los métodos de organización del trabajo experimentados y verificados en Estados Unidos. A finales de los años veinte la industria automovilística francesa era la primera de Europa.

Pero este proceso de modernización afectaba tan sólo a los sectores tecnológicamente más avanzados. Francia seguía siendo un país de «ciudades medias, patrimonios medios y clases medias» (Leon, 1979, p. 233); un país, como ya hemos dicho, de ahorradores y poseedores de títulos del estado: para ellos la estabilidad del franco era un bien en sí y la inflación, un fenómeno nuevo y traumático. Por eso se entiende la magnitud, en la opinión pública francesa, del impacto psicológico y político del problema de las reparaciones alemanas. Todos se daban cuenta, en efecto, de que, de no pagar Alemania, la estabilidad del franco quedaría seriamente comprometida. Alemania, pues, *tenía* que pagar, tal y como lo había hecho puntualmente Francia tras la derrota de 1871.

Cuando, a principios de 1922, tras una larga serie de encuentros y conferencias, los estadistas de los países aliados se encontraron en Cannes para preparar la próxima conferencia de Génova, y cuando en la opinión pública francesa se difundió la sensación de que el presidente del gobierno, Briand, presionado por Lloyd George, era proclive a hacer alguna concesión sobre la cuestión de las reparaciones, la alarma fue notable y el presidente de la república Millerand se hizo eco de ello públicamente. Briand fue obligado a

dimitir y le sucedió Poincaré, el hombre que, junto con Clemenceau, encarnaba la voluntad de victoria y de revancha de Francia. La conferencia de Génova, en la que Poincaré no quiso participar personalmente, no produjo, como se ha visto, más resultados que el tratado de Rapallo entre Alemania y la Unión Soviética. Este entendimiento entre los dos grandes derrotados, y deudores, no hizo sino aumentar la preocupación de la opinión pública y del gobierno y cuando, a finales de 1922, Alemania, que acababa de pedir una nueva moratoria, no respetó los términos de unas entregas de materias primas que debía como reparación, se consideró que el vaso se había colmado. Si Alemania se negaba a pagar o intentaba pagar con un marco devaluado, Francia se desquitaría asegurándose unas «prendas productivas». El 27 de noviembre de 1922, el gobierno tomó la decisión de ocupar el Ruhr y el 26 de diciembre la comisión interaliada para las reparaciones hizo suya esta decisión con el voto a favor de Francia, Bélgica e Italia y sólo el voto en contra de Inglaterra. En enero de 1923, las tropas francobelgas entraron en la cuenca del Ruhr. Las relaciones entre Francia y Alemania volvían a ser extremadamente tensas y Europa retenía la respiración con ansiedad.

5.6. DE LA CRISIS DEL RUHR A LA MEJORA DE LOCARNO

A la decisión francobelga de proceder a la ocupación del Ruhr, el gobierno alemán, apoyado firmemente por el presidente Ebert, contestó con el llamamiento a la resistencia pasiva. Los trabajadores y los funcionarios recibieron la invitación a negarse a colaborar con las autoridades de ocupación. Éstas respondieron con igual energía, haciéndose cargo directamente de la gestión y de los transportes y con el despido o la expulsión de los que se negaban a colaborar. Ya en los primeros seis meses de ocupación las personas expulsadas fueron 147.000, entre ellos muchos ferroviarios. Tampoco faltaron episodios de violencia; en marzo de 1923 trece obreros de las fábricas Krupp, que se habían opuesto a una acción de secuestro, murieron bajo el fuego de las tropas de ocupación y en mayo el asesinato de un ex oficial de los *Freikorps*, Leo Schlageter, proporcionó a los partidos de derecha la ocasión para una campaña de denuncia y de protesta a la que se sumaron también los comunistas.

La proclamación de la resistencia pasiva suponía para el gobierno alemán un coste sumamente elevado. Precisamente en el momento en que comenzaban a faltar las materias primas y los recursos de la región más industrializada del país, el gobierno se hacía cargo de un peso más, al comprometerse a pagar los salarios y los sueldos de los trabajadores que habían sido despedidos o expulsados por haber practicado la resistencia pasiva. No

se encontró otra manera de hacer frente a esta situación sino la de continuar en la línea inflacionista ya emprendida y de imprimir papel moneda. Ciento treinta y tres tipografías trabajaron día y noche para sacar billetes con un ritmo cada vez más vertiginoso. La consecuencia no podía ser sino una devaluación sin ningún precedente histórico. Se llegó hasta el punto de que los salarios se pagaban dos veces al día y a sus titulares se les concedía media hora de pausa en el trabajo para que pudieran gastar el dinero antes de que saliera una nueva cotización del marco. No se trató sólo de una crisis económica, sino de una tragedia moral. La herida que se estaba abriendo ya no se cerraría más y la pesadilla de la inflación condicionará a partir de ahora la psicología popular y las propias decisiones de los responsables económicos. La principal víctima de la inflación fue aquel *Mittelstand* que con sus ahorros y su espíritu de servicio había sido uno de los pilares de la comunidad nacional. Pero la inflación también representó un mazazo para el compromiso entre empresarios y trabajadores realizado con el acuerdo entre Stinnes y Legien. Ante los intentos por parte de la patronal de aprovecharse de la situación para poner en tela de juicio las conquistas realizadas por los trabajadores, incluida la jornada de ocho horas, éstos contestaron con una oleada de huelgas que llegó a implicar incluso a los tipógrafos que trabajaban en la impresión de papel moneda; mientras, en los tradicionales bastiones rojos de Turingia y Sajonia, los comunistas, alentados por Moscú, presionaban para la constitución de gobiernos de coalición «marxista» y la formación de «centurias» obreras armadas, con la perspectiva de una insurrección inminente. Por contra, en Baviera la bandera de la autonomía de Berlín, que en 1918 y 1919 había sido levantada por la izquierda, ahora la impugnaban personajes de la derecha conservadora y los militares vinculados a ellos.

Cinco años después del fin de la guerra Alemania parecía, pues, volver a precipitarse en el caos de las jornadas de noviembre y la amenaza de la disgregación volvía a pesar sobre ella. El gobierno de coalición no soportó esta prueba. Los socialdemócratas, presionados por los comunistas y preocupados por perder el contacto con sus propias bases, fueron los primeros en abandonar el gobierno, pero su ejemplo pronto lo siguieron los demás partidos. El gobierno de Cuno, totalmente desautorizado, si vio obligado a presentar su dimisión.

Para hacer frente a esta situación dramática se constituyó un gobierno de «gran coalición», en la que, a pesar de la resistencia de su ala izquierda, participó también el SPD, y cuyo presidente fue Gustav Stresemann.

La formación política e intelectual del nuevo Canciller era la de un patriota alemán criado en la Alemania guillermina y educado en sus valores; el partido fundado por él –el DVP– había votado en contra de la ratificación del tratado de Versalles y gozaba de la simpatía y del apoyo de influyentes círculos industriales. Pero la experiencia trágica de la posguerra había hecho

madurar en él la convicción de que la defensa y el relanzamiento de los valores de los que se sentía heredero y la persecución del objetivo de una revisión de los tratados de paz sólo eran posibles en el marco de la nueva realidad de la posguerra y de nada servían las recriminaciones y los gestos precipitados. De algún modo, su trayectoria política era similar a la de Thomas Mann, desde el nacionalismo de las *Consideraciones de un apolítico* hasta la aceptación convencida de la democracia del discurso a los estudiantes de Breslavia en 1922.

El primer paso en esta dirección –la de poner fin a la resistencia pasiva– era el más difícil, pero Stresemann no dudó en darlo y el 26 de septiembre anunció a un *Reichstag* perplejo y turbulento su decisión en este sentido. Las arcas del estado se encontraban, así, liberadas del peso que habían asumido, pero la interrupción del flujo de los subsidios contribuyó a reavivar el fermento autonomista y antiprusiano en Renania, fermento que las autoridades francesas ocupantes no dejaron de alimentar. En octubre se llegó a la proclamación, por parte de una minoría filofrancesa, de una efímera «república renana», que sin embargo fue arrollada por la compacta reacción popular. Mayores preocupaciones le venían a Stresemann de Turingia y de Sajonia, donde la situación tenía ya casi el carácter de la insurrección, y de Baviera, donde el gobierno local había proclamado el estado de sitio y concedido plenos poderes al ex primer ministro Gustav von Kahr, un monárquico que había llegado al poder en la estela del golpe de Kapp. La amenaza de desintegración volvía a perfilarse, pero Stresemann supo enfrentarse a la situación con energía y habilidad. En Baviera, logró maniobrar para aislar a los grupos más radicales del *Nationalsozialistische deutsche Arbeitspartei* (NSDAP, Partido Obrero Alemán Nacionalsocialista) de Adolf Hitler, haciendo que fracasara el *putsch* intentado por ellos en la jornada del 8 de noviembre; en Turingia y en Sajonia, en cambio, no dudó –apoyado por el presidente Ebert– en valerse de los poderes extraordinarios previstos en el artículo 48 de la constitución, enviando al ejército y obligando a los poderes locales, de los que formaban parte representantes comunistas, a disolver las «centrales proletarias» y a dimitir. Esta política de «dos pesos y dos medidas», según se tratara de la blanca Baviera o de la roja Turingia, no podía ser aceptada por los socialdemócratas, que de hecho el 2 de noviembre se retiraron de la coalición. El día 23 Stresemann, al quedar en minoría en el *Reichstag*, dimitía, pero lo peor ya había pasado y su sucesor, Wilhelm Marx, del *Zentrum*, pudo formar un gabinete de minoría apoyado desde fuera por el SPD y, amparado en los poderes que le había concedido el *Reichstag* durante un semestre, disponerse con mayor tranquilidad a la obra de restauración económica.

En noviembre de 1923 una nueva moneda, el *Rentenmark*, cuya cobertura estaba asegurada por obligaciones sobre instalaciones agrícolas e indus-

triales, entraba en circulación. Se trataba de una cobertura inadecuada e incluso ficticia, pero las medidas de tipo deflacionista puestas en marcha por el gobierno y por el presidente del *Reichsbank*, Hjalmar Schacht, ayudaron a asegurar la estabilidad. Entre estas medidas, destacaba el fin de la obligación legal de la jornada laboral de ocho horas: a partir de ahora, sería el convenio entre las partes el que fijaría la duración de la jornada laboral. Se trataba de medidas que, si bien tranquilizaban a las clases medias traumatizadas por la crisis del Ruhr, suscitaban preocupación y resentimiento en el electorado tradicional del SPD. Prueba de ello fueron las elecciones de mayo de 1924, que vieron un aumento de la polarización del electorado hacia los dos extremos del arco político, los comunistas, que aumentaron sus escaños de diecisiete a sesenta y dos y los nacionales del DVNP, que con sus ciento seis escaños se convirtieron en el primer partido del país. Los partidos de la coalición de Weimar resultaron ser los perdedores, y en especial los socialdemócratas, que bajaron de ciento setenta y uno a cien escaños. Así pues, la recuperada estabilidad financiera tenía su revés de la moneda en la persistente inestabilidad política.

De ello se tenía conciencia no sólo en Alemania, sino también en el extranjero. La crisis del Ruhr había hecho que muchos comprendieran que la solución del problema de las reparaciones no se podía aplazar, no sólo en el interés de Alemania, sino de toda la economía europea. La misma Francia, aunque había salido políticamente vencedora de la prueba de fuerza en que se había empeñado, no había sacado de ello los beneficios económicos que esperaba. Al contrario, había quedado claro que su estabilidad financiera dependía totalmente de las reparaciones y eso había contribuido a debilitar el franco y a empeorar la inflación y las consiguientes reivindicaciones salariales, obligando al gobierno a recurrir a los anticipos del Banco de Francia y del mundo financiero internacional. Pero uno y otro subordinaban su intervención a una solución de la cuestión de las reparaciones y a un saneamiento financiero radical. Así, hubo que acabar con el artificio financiero que permitía distinguir el balance de cuentas ordinario del extraordinario y aprobar un balance de austeridad que contemplaba un aumento sustancial de la carga fiscal y severas reducciones en el gasto. Fue la llamada «Verdún financiera». Sólo en estas condiciones el Banco de Francia permitió nuevos anticipos y el Banco Morgan concedió un préstamo de cien millones de dólares.

Era, pues, cada vez más evidente la necesidad de superar una visión meramente *contable* del problema de las reparaciones y sustituirla con una aproximación *económica* y, en definitiva, *política*. Con este fin, ya desde noviembre de 1923, Francia había aceptado participar, junto a expertos ingleses y norteamericanos, en dos comisiones encargadas de afrontar de forma conjunta el problema de las reparaciones y el de las finanzas alemanas. Las reuniones comenzaron en París en enero de 1924 y concluyeron en Londres

en agosto con la aprobación de un plan que tomó el nombre del presidente de una de las dos comisiones, el norteamericano Gates Dawes, pero que, en realidad, era el fruto de una elaboración colectiva. La filosofía del plan Dawes consistía esencialmente en solapar la cuestión de las reparaciones con la del saneamiento de las finanzas y de la economía alemanas. En efecto, el plan preveía un calendario de los pagos debidos por Alemania –cuyo importe total no se especificaba– según un criterio progresivo que llegara a los dos mil millones y medio de marcos en el año financiero de 1928-1929. Tales plazos podían, sin embargo, ser modificados según un criterio de flexibilidad que tuviese en cuenta la marcha de la balanza comercial alemana. Por tanto, los aliados se reservaban el derecho de controlar, a través de una agencia general para las reparaciones, los fondos que debían proporcionar las cifras necesarias para efectuar los pagos; de estos fondos, los más cuantiosos eran un impuesto sobre los dividendos de las empresas y sobre los ferrocarriles, que se privatizarían. También se sustraía el *Reichsbank* al control del gobierno y su consejo de administración se sometía a la vigilancia de un consejo general internacional integrado también por representantes de los aliados. Se trataba, desde luego, de limitaciones de la soberanía nacional que una opinión pública afectada por Versalles se resistía a aceptar, pero el plan Dawes contemplaba también la concesión de un consistente préstamo a Alemania y el fin de la explotación francesa del Ruhr, previsto en origen para enero de 1925 y que había comenzado ya en agosto de 1924 con la evacuación por parte de los franceses de las ciudades de Dortmund y Offenburg. En noviembre de 1924 el *Reichstag*, tras un debate muy crispado, aprobó el plan Dawes. Más adelante tendremos ocasión de comprobar cómo los efectos de esta decisión fueron saludables para la economía alemana.

La mayor novedad del plan Dawes consistía en la participación norteamericana. Pero la forma oficiosa en que ésta se dio constituía la confirmación del hecho de que la administración norteamericana no estaba dispuesta a cruzar la línea de demarcación que separaba la cooperación económica de una más comprometida cooperación política. Esta última recaía en los países europeos y especialmente en Inglaterra, que una vez más estaba llamada a un papel de suplencia.

Tras el fracaso de la conferencia de Génova y la caída del gabinete de Lloyd George (véase cap. 3), el nuevo gobierno conservador, que tomó posesión en diciembre de 1922 y estaba presidido por Bonar Law, se había mantenido en una posición marginal con respecto a los asuntos europeos. El ministro de Hacienda, Baldwin, negoció en Washington un acuerdo sobre las deudas de guerra inglesas, dejando caer así la propuesta de una solución multilateral en la que estaba inspirado el informe de Balfour (véase cap. 3), y durante la crisis del Ruhr la diplomacia británica renunció a ejercer un papel activo, limitándose a marcar las distancias de la iniciativa francesa. Fi-

nalmente, en julio de 1923, un proyecto de tratado de mutua asistencia elaborado por la Sociedad de las Naciones y abierto tanto a los miembros de la asamblea de Ginebra como a los que no lo eran, había sido rechazado por el gobierno británico. Inglaterra, pues, se mantenía alejada y este alejamiento no ayudaba a superar el *impasse* en el que estaban las relaciones europeas.

Pero en el transcurso de 1924, el panorama internacional empezó a cambiar radicalmente. El primer hecho nuevo fue la formación, en enero de 1924, del gabinete de MacDonald (véase cap. 3). El segundo, en mayo, el resultado de las elecciones francesas; decepcionados por los escasos resultados de la ocupación del Ruhr y cansados de la política de austeridad de Poincaré, una parte importante de los electores desplazaron su voto hacia los candidatos del *Cartel des gauches*, donde habían confluido los socialistas y los radicales, haciendo posible la formación de un gobierno presidido por Herriot y apoyado desde fuera por los socialistas. Sin estas novedades y sin la nueva constelación política que así se determinó, la feliz conclusión de las negociaciones sobre el plan Dawes difícilmente hubiera llegado a buen fin. Pero tanto MacDonald como Herriot no querían limitarse al ámbito de la cooperación económica y se marcaban metas más ambiciosas de cooperación política. Con este objetivo, Francia e Inglaterra presentaron a la SDN una resolución conjunta, que constituyó la base para un protocolo que la asamblea de Ginebra aprobó con entusiasmo en octubre de 1924. Dicho protocolo se basaba esencialmente en la repesca y la revalorización de la institución del arbitraje obligatorio –una vieja reivindicación de los movimientos pacifistas de la anteguerra–, que se encargaría de solventar las controversias que surgiesen entre los estados suscriptores. En caso de que uno de ellos se negara a acudir al *Covenant* o se desentendiera de su veredicto, se le reconocería *ipso facto* como agresor y se le sometería a las sanciones previstas en el artículo 16 del Estatuto de la SDN, previa aprobación de una mayoría de dos tercios. Además, se preveía para 1925 la convocatoria de una conferencia sobre el desarme y para este fin se creó una comisión preparatoria *ad hoc*. Los compromisos previstos en el protocolo no carecían de generalidades y lagunas, pero el documento elaborado por la asamblea de Ginebra representaba ante todo una señal política de notable resonancia y envergadura.

Al ser el fruto de la iniciativa política de MacDonald y de Herriot, el protocolo no sobrevivió a la desgracia política de sus dos promotores. Después de MacDonald, que perdió las elecciones de 1924, también Herriot fue obligado, en abril de 1925, a dejar la cabeza del gobierno, bajo la presión de una vasta coalición de intereses alarmada por las iniciativas reformistas y la política de agravios fiscales que se achacaban al gobierno, y también a causa de la consiguiente negativa por parte del Banco de Francia a continuar concediendo al radical Herriot los anticipos que un año antes había concedido al moderado Poincaré. Con todo, la aceleración que MacDonald y Herriot im-

primieron al sistema de relaciones europeas no se agotó y el que le dio un nuevo impulso fue, para muchos inesperadamente, Gustav Stresemann.

Después de su dimisión como canciller, éste había conservado la cartera de Exteriores, que mantuvo en todos los gobiernos que se sucedieron, hasta su muerte en 1929, confiriendo de esta manera a la política exterior alemana una estabilidad que hasta la fecha no había experimentado. El cometido en el que trabajó tenazmente consistía en hacer que su país saliera del estado de cuarentena política en que, a pesar del acuerdo de Rapallo y del plan Dawes, todavía estaba sumido. Se trataba de un objetivo sin alternativas, pero encontrar los caminos que seguir y las opciones que escoger era tarea sumamente complicada. Estaban los que proponían una solución de mayor colaboración con Francia, como el alcalde de Colonia Konrad Adenauer, y los que, como el embajador en Moscú Brockdorff-Rantzau y el propio jefe de la *Wermacht*, Von Seekt, se inclinaban, en cambio, por seguir en la línea de política exterior emprendida en Rapallo y concebían la colaboración con la Unión Soviética como un instrumento para recuperar los territorios alemanes en Europa central y oriental perdidos en Versalles. La habilidad de Stresemann consistió en eludir esta alternativa y apostar por la reinserción de Alemania en el sistema global de las relaciones internacionales.

El primer paso lo dio en febrero de 1925, cuando, de forma reservada, informó a Londres acerca de una eventual disponibilidad alemana para asumir compromisos para garantizar la seguridad en Europa occidental, incluidos los relativos a la frontera francoalemana. La propuesta fue recibida con interés por el *Foreign Office* y también en París, donde, a causa de las dimisiones de Herriot, la cartera de Exteriores había pasado a manos de Aristide Briand, cuya flexibilidad en la cuestión de las reparaciones y cuya propensión a una reconciliación francoalemana eran conocidas desde los días de Cannes (véase cap. 4). La intensa labor diplomática que siguió implicó a todas las potencias interesadas y llegó a su culminación con los acuerdos de Locarno en octubre de 1925.

Entre los medios diplomáticos aprobados al final de las sesiones de trabajo, el más importante fue sin duda el «pacto renano». Según éste, Alemania y Francia se comprometían a renunciar a la guerra como medida para resolver eventuales controversias y a este fin se estipularon dos convenciones de arbitraje con Francia y Bélgica. Además –y éste era el punto más relevante– Alemania reconocía como definitiva su frontera occidental y se comprometía a respetar la desmilitarización de la zona renana, tal y como establecía la conferencia de Versalles. Todo ello quedaba garantizado por las otras dos potencias que firmaban el pacto renano, Inglaterra e Italia. Lo que en Versalles había sido un *diktat*, se convertía, así, en un acuerdo libremente suscrito, y la que durante décadas había sido la frontera más caliente de Europa se convertía en la más segura.

Pero quedaba el problema de las fronteras orientales de Alemania, acerca de las cuales Stresemann no quería vincularse a compromisos análogos a los adquiridos en el oeste. Por lo tanto, sólo accedió a suscribir con Polonia y Checoslovaquia unas convenciones de arbitraje análogas a las suscritas con Francia y con Bélgica, pero que no estaban cubiertas, como estas últimas, por una garantía internacional. La seguridad de estos dos países estaba garantizada sólo en virtud de los tratados que Francia, tradicionalmente interesada en los equilibrios en Europa oriental, formalizó separadamente con ellos en Locarno.

Los acuerdos de Locarno, si definían y estabilizaban la situación en el oeste, dejaban Europa oriental en un estado de fluidez y expuesta a riesgos, lo que, naturalmente, era una fuente de inquietud en las capitales del este de Europa, sobre todo en Moscú. Todavía durante la conferencia, Stresemann había insistido en que, como de hecho sucedió, se hiciera pública una nota colectiva en la que se daba una interpretación del artículo 16 del *Covenant*, al que Alemania se disponía a adherirse, que tranquilizara a la Unión Soviética acerca de la indisponibilidad por parte alemana a favorecer o secundar eventuales iniciativas de las potencias occidentales que afectaran a la seguridad soviética; pero eso no era suficiente para tranquilizar a Moscú. Stresemann advirtió, pues, la necesidad de ofrecer más garantías a la URSS y estipuló con ella, en abril de 1926, un tratado de amistad y neutralidad, una especie de versión puesta al día del «pacto de mutuo respeto» de Bismarck. Poco después, en septiembre, Alemania hacía su ingreso en la SDN, en calidad de miembro del Consejo. Era el final de su cuarentena política y un éxito sin precedentes para Stresemann, quien había perseguido con ahínco este objetivo.

Si el tratado de Versalles había marcado el final de la guerra, los acuerdos de Locarno marcaron el de la posguerra. Además de Alemania, también Rusia salía de la cuarentena a la que había sido relegada durante años, gracias al reconocimiento diplomático por parte de todas las mayores potencias europeas (véase cap. 2). Todo el entramado de las relaciones internacionales, convulsionado por las tensiones y los resentimientos de la posguerra, aparecía, en definitiva, recompuesto.

El «espíritu de Locarno», del que tanto hablaba la prensa, parecía resucitar las esperanzas despertadas al final de la guerra por los catorce puntos de Wilson. El premio Nobel de la Paz, que durante dos años no había sido concedido, fue otorgado conjuntamente, en diciembre de 1926, a Stresemann y a Briand, que acababan de celebrar una cumbre en Thoiry que había tenido un gran eco y que había afrontado los problemas de la reconciliación francoalemana con un espíritu de gran apertura y confianza. Se había discutido, entre otras cosas, la posibilidad de la evacuación francesa de la orilla izquierda del Rin, a cambio del pago de la totalidad de las reparaciones, de la restitución a Alemania del territorio del Sarre antes del plazo de

quince años previsto en el tratado de Versalles y de una intensa colaboración económica francoalemana. Los avatares políticos internos de los dos países no permitieron, como se verá, que nada de lo que se había barajado en Thoiry llegara a concretarse, pero ello no valió para disolver la atmósfera de optimismo que se había creado. Fue en estos años cuando el proyecto de una Europa unida, cuyo principal valedor y sostenedor era el conde Coudenhove Kalergi, comenzó a ser objeto de una cierta atención por parte de los políticos más avisados y también fue en estos años cuando la idea de un pacto que desterrara la guerra, nacida en los ambientes aislacionistas americanos, encontró audiencia a este lado del Atlántico, y especialmente en Francia. El 27 de agosto de 1928 se firmó en París el pacto Briand-Kellogg, al que se sumaron al poco tiempo todas las principales potencias, la URSS incluida.

En él se condenaba la guerra como instrumento de solución de las controversias internacionales y los estados suscriptores se comprometían a recurrir a vías pacíficas para dirimir eventuales contiendas o conflictos. Además de estas proclamas solemnes, pero genéricas, el pacto de París –como también se le llamó– no contenía ninguna disposición concreta de ejecución y tampoco referencia alguna al *Covenant* de la SDN, respecto del cual, en cambio, presentaba unas diferencias. Constataremos más adelante cómo este pacto no tuvo ninguna influencia en el desarrollo posterior de las relaciones internacionales. Sin embargo, en 1928 fue saludado como un acontecimiento histórico y una señal de los nuevos tiempos, tanto en Norteamérica, que estaba en la cúspide de su prosperidad, como en Europa, que, tras tantas privaciones, empezaba a saborear el gusto de un incipiente bienestar.

6

Una efímera prosperidad

Los años entre 1925 y 1929 fueron para los países europeos años de coyuntura favorable. Si ello fue el efecto o la causa de la renovada normalización de las relaciones internacionales y de la estabilización de las situaciones internas tras los años tumultuosos de la posguerra, es una cuestión ociosa. Es evidente, en efecto, que entre los dos fenómenos hubo interacción y cruce.

Aunque con ritmo e intensidad distintos la buena coyuntura llegó a todos los países del continente. Lo atestiguan tanto los índices de las rentas nacionales, como los de las producciones industriales. Del análisis de estos últimos, resulta claro que los sectores más dinámicos fueron los de las industrias cronológica y tecnológicamente más recientes, como la del automóvil y la eléctrica. La «recuperación» de la economía de los países capitalistas iba, así, de la mano de su modernización y también la Tercera Internacional tenía que asumirlo: en sus documentos se hablaba cada vez menos de «crisis general» del capitalismo y cada vez más de su «estabilización», aunque relativa.

Si la recuperación era general y difundida en toda el área europea, lo que variaba en cada país era la distribución de sus beneficios entre las clases sociales y el uso político que se hizo de la nueva prosperidad. Por lo tanto, será preciso, como ya hemos hecho para los años de la posguerra, volver a una aproximación diferenciada, analizando por separado cada una de las realidades nacionales.

6.1. EL CASO INGLÉS

En Inglaterra la tendencia positiva se delineó a partir de 1924. En este año el índice de la producción industrial ya había alcanzado el del período pre-

cedente a la guerra y en los años siguientes crecería todavía más. El desempleo, aunque había experimentado un ligero descenso, se mantenía alto, pero se concentraba mayoritariamente en las cuencas mineras y en las áreas de la vieja industrialización. Por contra, la ocupación crecía en las industrias de nueva formación y las condiciones generales de los trabajadores en su conjunto habían mejorado. Se construían casas a un ritmo de cien mil al año y la mayoría de las familias poseía una radio y algunas incluso el automóvil. No era, desde luego, un *boom* comparable al de Estados Unidos, pero también en Inglaterra los consumos comenzaban a diferenciarse y a cualificarse por impulso de la publicidad y del desarrollo de la red de los grandes almacenes.

En esta coyuntura económica y psicológica, el gobierno consideró llegado el momento de realizar aquel retorno de la libra a la paridad oro en que se pensaba desde hacía tiempo y que gran parte de la opinión pública continuaba viendo como la señal de la vuelta a la normalidad. El anuncio lo dio el nuevo ministro de Hacienda, Winston Churchill, el 25 de abril de 1925. Por los reflejos que tuvo sobre la economía internacional, el juicio sobre esta decisión no puede limitarse al ámbito inglés, así que volveremos a este tema más adelante. Sin embargo, si nos ceñimos a sus efectos internos, se puede afirmar que tuvo sus beneficiarios y sus víctimas. Entre los primeros figuran en primer lugar los ambientes de la City, que sacó ventajas del alza de los tipos de descuento decidida por el gobierno y de la consiguiente revalorización de los créditos ingleses en el extranjero y vio crecer su tradicional prestigio; en segundo lugar, las empresas que importaban materias primas y producían mayoritariamente para el mercado interno. Entre las víctimas figura ante todo el sector de las industrias tradicionalmente exportadoras, en particular las «clásicas» del algodón y del carbón, los precios de cuyos productos en el mercado internacional aumentaron por la revalorización. Especialmente la industria del carbón, que a pesar de todo seguía siendo la que ocupaba al mayor número de trabajadores, se encontró expuesta a la competencia del carbón alemán o polaco y de las nuevas fuentes de energía.

Se hacía necesario, pues, bajar los precios de las mercancías exportadas y para ello el gobierno conservador recurrió al instrumento más fácil y adecuado para sus intereses. Mientras los propietarios de las minas anunciaban reducciones salariales y aumentos del horario de trabajo, el primer ministro Baldwin hacía un llamamiento a «todos los obreros de este país» para que aceptaran los sacrificios que las circunstancias imponían. Siguieron meses de negociaciones y escaramuzas durante los cuales la *Trade Union Council* (TUC) y, con menos convicción, el gobierno, intentaron encontrar el camino de un compromiso entre propietarios y mineros. Al final, el 2 de mayo de 1926, los propietarios proclamaron el cierre patronal, al que el TUC respondió con el llamamiento a la huelga general a partir de la jornada del 3 de mayo. La

respuesta de los trabajadores fue unánime, llena de ilusión e incluso de alegría por la solidaridad restablecida. Pero en 1926 la huelga general ya no era un instrumento idóneo para paralizar el país, como quizá podía serlo todavía en 1921. Si los ferrocarriles no funcionaban, funcionaban los transportes por carretera, lo que hizo posible asegurar el abastecimiento de la población. Si los periódicos no salían, estaba la BBC, recientemente constituida como ente público, para llevar a los hogares una información no exenta de tendenciosidad. Una vez más, se repetía la historia del «viernes negro»: el 12 de mayo, el TUC desconvocaba la huelga sin poner condiciones y los mineros se quedaban solos en la lucha, que prosiguió hasta diciembre. Luego, ellos también tuvieron que aceptar la «rendición incondicional» que Winston Churchill había invocado con jactancia.

La derrota acarreó consecuencias graves no sólo para los mineros, sino para todo el movimiento obrero británico. En mayo de 1927 se aprobó una ley que abrogaba la *Trade disputes Act* de 1906, que regulaba los conflictos de trabajo. La ley declaraba ilegal cualquier huelga de solidaridad, prohibía que los *civil servants* se afiliaran a los sindicatos y hacía más difícil el mecanismo de la retención de las cuotas sindicales de los salarios, contribuyendo, así, a debilitar todavía más las *Unions*. En su extremismo el gobierno conservador llegó a oponerse a la ratificación de la convención de Washington de 1919 sobre la jornada de ocho horas y a que el *Bureau International du Travail* (BIT) de Ginebra examinara la propuesta de una semana laboral de cuarenta horas. Tras haber superado el punto de inflexión de la huelga general, la economía inglesa podía retomar su curso favorable. Los índices de la producción continuaron subiendo, pero los de desempleo nunca disminuyeron por debajo del millón.

Se mire por donde se mire, la huelga general inglesa de 1926 marca una fecha importante, cuando no un hito, en la historia de la Inglaterra contemporánea. Se puede mantener que fue una respuesta anacrónica de sectores del mundo del trabajo que, al defender con saña sus conquistas, de hecho retrasaban el proceso de modernización. Pero también se puede mantener, y con mayor fundamento, que se trató de un arranque de profundo y arraigado espíritu de solidaridad, uno de esos «gestos de generosidad espontánea sin paralelos en ningún otro país» (Taylor, 1968, p. 305). De la derrota de los mineros salió empobrecido aquel gran recurso que representaba una solidaridad curtida por los sufrimientos de la guerra y las esperanzas de la posguerra, una solidaridad que no sólo rebasaba los límites políticos y sociales de la izquierda británica, sino también la misma esfera política. Una herida se había abierto y una injusticia quedaba por reparar. Ha sido observado con acierto que «la huelga general de 1926 fracasó en sus objetivos inmediatos, pero abrió el camino para el *welfare state* moderno» (Gilpin, 1990, p. 180).

El proceso de polarización y radicalización que se había hecho manifiesto en las elecciones de 1924 con la reducción de los liberales a partido marginal aparecía ahora como prácticamente irreversible. Pero no sólo se trataba de esto, es decir, de una contraposición entre *tories* y laboristas, entre lectores del *Times* y del *Daily Herald*. Se trataba del conflicto entre dos países distintos y ajenos el uno al otro: el de las zonas mineras y de la vieja industrialización –Gales o Escocia–, de donde la gente escapaba por desesperación, y el de las áreas en expansión –Londres, el valle del Támesis y las Midlands– hacia donde llegaba un flujo creciente de inmigración; se trataba de dos estilos de vida distintos que se manifestaban en distintos gustos, distintos comportamientos sociales y, sobre todo, distintos valores. Desde luego, estas divisiones eran anteriores a la huelga, pero la derrota de ésta las había hecho más evidentes y conscientes. Sólo acontecimientos igualmente trágicos como los de la primera guerra mundial restaurarán la solidaridad perdida.

6.2. EL CASO ALEMÁN

Con el regreso al circuito financiero internacional propiciado por el plan Dawes y con la vuelta al seno de la comunidad internacional a consecuencia de su entrada en la SDN, Alemania recuperó su dinamismo económico. El préstamo previsto en el plan Dawes fue en amplia medida suscrito en los Estados Unidos y su éxito abrió el camino a un flujo cada vez más abundante de capitales y préstamos norteamericanos hacia Alemania. En el curso de 1925 una nueva moneda vinculada al oro, el *Reichsmark*, entró en circulación. La entrada de capitales y la estabilización monetaria agilizaron el proceso de renovación del aparato productivo del país. Nuevas grandes concentraciones, como el grupo Thyssen en el campo de la industria siderúrgica y el IG Farben en el de la química, sucedieron al imperio creado por Stinnes y derrumbado repentinamente en 1925, y conocieron un rápido desarrollo. A partir de 1924 y hasta 1928 las inversiones crecieron a un ritmo acelerado: en 1928 resultaron más que triplicadas respecto a 1924. La consecuencia natural fue una subida consistente de los índices de la producción y de las exportaciones. Los salarios, que se habían resentido de la crisis de 1923, también registraron un aumento, aunque el desempleo seguía siendo importante y la jornada de ocho horas era para muchos sólo un recuerdo del pasado. Con todo, en 1927 entró en vigor una ley de seguro contra el paro, cuya aplicación fue confiada a una oficina federal creada para tal propósito.

Pero el talón de Aquiles de esta prosperidad recuperada continuaba siendo, como ya hemos subrayado, el alto nivel de inestabilidad política que había caracterizado a la república de Weimar desde sus orígenes. Respecto de las elecciones de mayo de 1924 (véase cap. 4), las de diciembre del mismo

año marcaron una inversión de la tendencia a la polarización hacia los extremos del arco político y registraron una clara recuperación de los socialdemócratas. Pero cuando, a raíz de la muerte de Ebert en febrero de 1925, en abril se celebraron elecciones para la presidencia de la república y los partidos de derecha avanzaron la candidatura del mariscal Hindenburg, el vencedor de Tannenberg, quedó demostrado que la nostalgia del pasado conservaba su fuerza de atracción para muchos y que la popularidad de la república tenía raíces poco profundas. Aunque con un estrecho margen, y gracias también a la decisión de los comunistas de mantener a su candidato en la segunda vuelta, Hindenburg ganó a su oponente, el ex canciller Wilhelm Marx, apoyado por el *Zentrum*, los socialdemócratas y el Partido Demócrata. Para los que lo habían votado, la imagen de la república quedaba asociada al recuerdo del «golpe de puñal» asestado a traición a una Alemania que nunca había sido vencida en campo abierto. En efecto, parcelas enteras del estado y de la sociedad seguían impermeables al espíritu de Weimar y había quien llegaba a no reconocer los colores de la nueva bandera, el rojo, negro y oro de la revolución de 1848. Semejante rechazo se percibía, por ejemplo, en el mundo académico y escolar, y en amplios sectores de la burocracia, por no hablar del ejército. Éste, reducido a cien mil hombres, según los términos del tratado de paz, se había convertido, bajo el mando de Von Seeckt, en un cuerpo apartado, cuyo declarado alejamiento de la política era en realidad alejamiento de la república y así seguiría después de la destitución de Von Seeckt en 1926.

Entre todos los partidos de la coalición republicana, el que por su pasado y por sus recursos humanos e intelectuales tenía mayores posibilidades de abrir una brecha en este muro de indiferencia y de desconfianza era el SPD. En la historia del pensamiento socialista, la reflexión teórica de hombres como R. Hilferding, P. Levi, F. Naphtali y V. Voitinski sobre los temas de la «democracia económica» y del «capitalismo organizado» ocupa un lugar destacado y constituye todavía hoy un patrimonio de ideas e ilusiones actuales. Fue también gracias a sus teorizaciones que el marxismo dejó de ser la subcultura a la que había quedado reducido por sus divulgadores y se abrió a la confrontación con las corrientes más nuevas y más vivas de la cultura posbélica, de Wilson a Keynes. Pero todo ello no se tradujo sino parcialmente en una línea y una propuesta políticas capaces de agregar nuevos consensos, de hablar a los estratos sociales de nueva formación. También durante la república de Weimar el SPD siguió siendo el partido «histórico» de los obreros y de sus sindicatos que había sido en el pasado y ello explica su escasa capacidad de atracción hacia los jóvenes.

En las elecciones de mayo de 1928 los socialdemócratas registraron un significativo incremento de votos y por primera vez después de varios años un socialdemócrata, Hermann Müller, se encontró a la cabeza de un go-

bierno de coalición. Un nueva ocasión se le presentaba, pues, a la socialdemocracia alemana de dar prueba de sus capacidades de gobierno.

Se daba por descontado que el gobierno tendría que afrontar los ataques y las insidias que venían de la derecha y era previsible que el terreno de la confrontación sería una vez más la cuestión, todavía abierta, de las reparaciones. En septiembre de 1928, Alemania había pedido una revisión del plan Dawes y a raíz de esta iniciativa una comisión de expertos, presidida por el norteamericano Owen D. Young, elaboró un nuevo plan que reducía el importe total de las reparaciones, prorrogaba el plazo de los pagos y ponía fin a algunos de los controles previstos por el plan Dawes, trasladando los poderes del agente general de las reparaciones, el norteamericano Gilbert, a un banco de los reglamentos internacionales, en cuyo consejo de administración Alemania estaría representada. Además el plan de Young preveía una retirada gradual de Renania por parte de las fuerzas de ocupación, y de hecho, en septiembre de 1929, empezaron a retirarse las primeras unidades. Contra semejante plan la derecha desencadenó una violenta campaña, promoviendo un referéndum «contra la esclavitud del pueblo alemán» y sin dudar en lanzar la acusación de «alta traición» contra los hombres políticos y de gobierno, incluido el propio Stresemann, dispuestos a aceptar el plan de Young. Por otra parte, esta ruidosa agitación encontró escaso eco en la opinión pública y cuando, en diciembre de 1929, se celebró el referéndum, sólo un 13 % de los electores acudió a las urnas.

Además de los ataques de la derecha, sin embargo, el gobierno de Müller tuvo que enfrentarse a otros más insidiosos que procedían de las filas de la coalición y del propio Partido Socialista. Fue cuando el gobierno incluyó en el presupuesto de 1928 los fondos necesarios para la construcción de dos pequeños acorazados que, según los términos del tratado de paz, Alemania había sido autorizada a poseer. El grupo socialdemócrata en el *Reichstag* reaccionó con indignación contra esta decisión hasta llegar a imponer a sus miembros, incluidos los ministros, que votaran en contra de la asignación de los fondos, desautorizando con ello la acción del canciller socialdemócrata. El episodio suscitó mucho revuelo y reveló las tensiones que existían dentro de la mayoría y las dificultades del SPD a la hora de asumir responsabilidades de gobierno. Llegado al gobierno sobre las alas de la coyuntura favorable, se encontraba ahora en la necesidad de afrontar los problemas de una política anticíclica, para la cual no estaba preparado conceptualmente.

Las tensiones y las dificultades de la situación se iban haciendo, en efecto, más evidentes y más agudas cuando, en el curso de 1929, la coyuntura económica favorable comenzó a dar muestras de cansancio y de retroceso. En febrero los parados habían aumentado hasta casi dos millones y medio y en agosto tuvo lugar la quiebra de una de las principales compañías de seguros del país. La vuelta de la inseguridad acompañó a la de las tensiones

sociales y el 1 de abril, por primera vez, la policía volvió a disparar sobre una manifestación comunista en Berlín, matando a diecinueve personas. En estas condiciones, el camino de la coalición gubernamental se hacía cada vez más difícil a causa de las discrepancias que se manifestaban no sólo, como se ha visto, entre los partidos que la integraban, sino también en el interior de cada uno de ellos: en el DVP, donde el liderazgo de Stresemann estaba cada vez más en vilo; en el *Zentrum*, en cuya presidencia un prelado –Ludwig Kaas– sustituyó, en 1928, a un sindicalista; y finalmente, y sobre todo, en el SPD, entre el ministro de Hacienda Hilferding, proclive a una mediación entre las distintas exigencias, que asegurase continuidad y autoridad al gobierno, y los parlamentarios que se erigían en portavoces de las reivindicaciones de los sindicatos y se oponían, en consecuencia, a cualquier propuesta de reducción del subsidio de desempleo y de los salarios. Mientras tanto, en la derecha, después de que el pangermanista Hugenberg sucediera al moderado Westarp a la cabeza del DNVP, se iba perfilando aquel proceso de convergencia que, a finales de octubre de 1932, llevará a la formación del frente de Harzburg hegemonizado por Hitler.

A todas estas dificultades se añadieron las de lo imprevisible y la casualidad. El 3 de octubre fallecía Gustav Stresemann y el 24 de octubre llegaba la noticia del desplome de Wall Street. Poco después, en diciembre, Hilferding se veía obligado a dimitir y a su dimisión siguió, en mayo de 1930, la del gobierno de Müller. Se iniciaba así un nuevo capítulo de la historia de la república de Weimar, el capítulo final.

6.3. EL CASO ITALIANO

En Italia, tras superar la prueba de fuego del asesinato de Matteotti, el régimen fascista pudo actuar rápidamente en el camino de la liquidación del estado liberal. Una serie de atentados contra la persona de Mussolini –no menos de cuatro entre noviembre de 1925 y octubre de 1926– ofrecieron la ocasión para ir apretando las tuercas. Se comenzó en enero de 1925, con una ley sobre las asociaciones, orientada, en particular, contra la masonería, y se continuó en diciembre, con una nueva y más restrictiva ley sobre la prensa –en un momento en que, por lo demás, los grandes diarios ya estaban normalizados– y con otra sobre la presidencia del consejo de ministros, con la que el primer ministro dejaba de ser un *primus inter pares* para convertirse en «jefe del gobierno», responsable únicamente ante el rey. Posteriormente, en el transcurso de 1926, se sucedieron una ley sobre administraciones locales que ponía fin al principio de su elegibilidad, un nuevo texto único de seguridad pública y una ley de la defensa del estado, en la que se establecía la pena de muerte para los que atentaran contra la vida de los miembros

de la familia real y del jefe del gobierno o cometieran crímenes contra la seguridad del estado, se instituía un tribunal especial para la defensa del estado y se prohibía la reconstitución de las organizaciones disueltas. A los diputados que habían participado en el Aventino se les declaró suspendidos del cargo. En 1928 el edificio del nuevo estado fascista se completó con la reforma radical de la ley electoral, que confió al Gran Consejo el cometido de presentar la lista de los cuatrocientos diputados del colegio único nacional que los electores estaban llamados a aprobar o rechazar en bloque; a esto se añadió la transformación del Gran Consejo del fascismo en organismo institucional, con amplias competencias, entre ellas la de tener voz propia en las cuestiones tocantes a la sucesión al trono. Finalmente, en 1930, entró en vigor un nuevo código penal, de inspiración conservadora, elaborado por Alfredo Rocco. Mientras tanto el régimen reforzaba y extendía su control sobre la sociedad: sobre la organización de la juventud, con la institución de la *Opera nazionale Balilla* (1926), sobre el tiempo libre, con la *Opera nazionale Dopolavoro* (1925), sobre los nuevos medios de comunicación de masas, con la constitución del *Ente italiano audizioni radiofoniche* (EIAR). La instrucción ya se había reglamentado con la reforma de Gentile (1923), que Mussolini calificó como «la más fascista» de las reformas, basada en la primacía de las humanidades y del liceo clásico como lugar de formación de las élites. De este proceso de normalización no se libró el propio partido fascista, cuyo nuevo estatuto preveía una estructura centralizada y jerárquica, que terminaba definitivamente con las iniciativas de los cabecillas locales. En las provincias los secretarios federales fueron subordinados a los *prefetti* (gobernadores civiles) y el Gran Consejo, aunque se le habían reconocido competencias muy amplias, se convocó cada vez con menos frecuencia

Finalmente, una importancia especial para la consolidación del régimen la tuvo la «conciliación» con la Santa Sede, un objetivo perseguido por los gobiernos prefascistas, que Mussolini logró culminar en febrero de 1929. De los tres instrumentos que constituyeron los acuerdos lateranenses –un tratado que ponía fin a la cuestión romana con el reconocimiento de Ciudad del Vaticano como estado autónomo y soberano, una convención financiera y un concordato– este último era el que contenía las mayores concesiones a la Iglesia, al reconocer la religión católica como religión del Estado, al atribuir efectos civiles al matrimonio religioso y al conceder un papel privilegiado a la enseñanza de la religión católica en las escuelas primarias y secundarias. Además, el régimen renunciaba, en parte, a su monopolio sobre la juventud, otorgando a las organizaciones católicas el derecho a operar de forma autónoma «para la actuación y la difusión de los principios católicos». Como contrapartida, el estado recibía la confirmación por parte de la Iglesia de la prohibición para los eclesiásticos de «afiliarse y militar» en los par-

tidos políticos. Pocas semanas después de la Conciliación los electores fueron llamados a votar para aprobar o rechazar la lista de diputados en la Cámara presentada por el Gran Consejo. Los votos favorables fueron el 89,9 % y la que resultó elegida fue así una Cámara domesticada, que en 1939 cambiará su nombre por el de Cámara *dei Fasci e delle Corporazioni.*

Si desde un punto de vista político-institucional la consolidación del fascismo podía darse por terminada, no se puede decir lo mismo de la estabilización económica. El ascenso de Mussolini al poder había coincidido con el fin de la depresión iniciada en otoño de 1920 y la política económica de su ministro de Hacienda, Alberto de Stefani, había sido la de estimular el desarrollo de la iniciativa y de la empresa privada. En este contexto hay que situar medidas como la abolición de las acciones nominales y del impuesto de sucesión, la vuelta a la privatización de la telefonía y de los seguros de vida y, más en general, una política financiera dirigida a alcanzar la paridad en la balanza comercial, objetivo que se realizó en 1925, más con la reducción de los gastos que con el aumento de las entradas.

La revalorización del marco alemán y el retorno de la libra a la paridad oro concurrieron para determinar una nueva y mucho menos favorable coyuntura. El aumento del coste de las importaciones repercutió en el nivel de los precios internos, lo que a su vez redujo el poder adquisitivo de los salarios. En las regiones industrializadas del norte se registró, en la primera mitad de 1925, una reanudación de las huelgas y en las elecciones para las comisiones internas las listas de la FIOM y las comunistas cosecharon importantes éxitos. Por consiguiente, surgieron problemas no sólo de carácter económico-financiero, sino también político, y los industriales presionaron a Mussolini para que confiara la política económica a un hombre en el que ellos tenían confianza, el conde Volpi.

El primer problema que éste afrontó fue el de las deudas de guerra, que solucionó negociando en Washington, en octubre de 1925, un acuerdo en su conjunto beneficioso, según el cual Italia se comprometía a pagar dos mil millones de dólares repartidos entre sesenta y dos anualidades y con un criterio de progresión de los plazos que en los primeros cinco años hacía tolerables los compromisos italianos. Ello hizo posible pedir préstamos a los grandes bancos norteamericanos. El más consistente fue el del banco Morgan, de cien millones de dólares, que se añadía a otros cincuenta concedidos con anterioridad.

En el frente interno, las iniciativas más relevantes fueron el restablecimiento del derecho protector sobre el trigo, en julio de 1925, primer paso de la «batalla del trigo» que comprometerá al régimen en los años siguientes, y el pacto del palacio Vidoni entre la patronal (*Confindustria*) y la Confederación de las Corporaciones Fascistas, una organización sindical fundada en 1922 por Edmondo Rossoni, un ex militante del sindicalismo revoluciona-

rio de la anteguerra, que se había pasado al fascismo. Gracias a este pacto (2 de octubre de 1925) las dos partes se reconocían como representantes exclusivos del empresariado y del mundo del trabajo, respectivamente, y como sujetos únicos de la contratación colectiva. Posteriormente el acuerdo fue completado y concretado por una serie de decretos y de leyes que preveían, entre otras cosas, la prohibición de la huelga y de las ocupaciones de fábricas y la institución de una magistratura del trabajo, que se ocuparía de eventuales conflictos y controversias. Sucesivamente, se estableció, además, que las asociaciones de los trabajadores y las de los empleadores se asociaran a nivel nacional en «corporaciones» y se instituyó un ministerio *ad hoc*, precisamente el ministerio «de las corporaciones», con cometidos de coordinación. Pero pasaron varios años antes de que las funciones de dichas corporaciones se definieran por ley. Como culminación de tales medidas, el 21 de abril de 1927, día de la fundación de Roma y –tras la abolición del primero de mayo– también fiesta del trabajo, se promulgó una Carta del Trabajo, que, por lo demás, al no ser una ley, no tuvo eficacia práctica alguna. Todo ello marcaba el fin del libre sindicalismo: las dos mayores organizaciones sindicales, la Confederación Italiana del Trabajo (CIL), blanca, y la CGL, roja, se disolvieron, respectivamente, en noviembre de 1926 y enero de 1927.

Pero la estabilización financiera que las medidas adoptadas lograron asegurar temporalmente resultó seriamente comprometida en la primavera de 1926, a causa de una nueva caída de la lira en los mercados internacionales. Para el gobierno fascista la defensa de la moneda nacional era una cuestión de prestigio interno e internacional. El recuerdo de la ruinosa inflación alemana de 1923 todavía estaba vivo en la opinión pública europea e italiana, y Mussolini no podía permitirse perder, con una política incluso moderadamente inflacionista, los apoyos de las clases medias, que constituían el principal soporte del régimen. En el discurso que pronunció en Pesaro el 18 de agosto, Mussolini fijó el objetivo de la defensa de la «cuota noventa» frente a la libra y ello se llevó a cabo limitando el derecho de emisión únicamente al Banco de Italia y realizando una severa congelación del crédito. El objetivo de la «cuota noventa» fue alcanzado, pero las consecuencias de esta operación para la economía italiana fueron duras. Los que más se vieron afectados fueron las industrias exportadoras y, sobre todo, los salarios. Pero, mientras que las primeras fueron parcialmente compensadas mediante desgravaciones fiscales y derechos protectores –como en el caso de la industria automovilística–, los salarios de los obreros sufrieron dos recortes sensibles, uno en 1927 y otro en 1928, y ambos del 10%. El desempleo también volvió a los niveles de 1920-1921.

A finales de los años veinte, el fascismo parecía, a los ojos de la opinión pública italiana y extranjera, definitivamente estabilizado y la imagen que promocionaba de sí mismo como solución nueva del problema social más

allá de las viejas fórmulas del capitalismo y del socialismo, para muchos era creíble y persuasiva. Está fuera de duda que representaba una ruptura radical con el estado liberal y con las instituciones democráticas y todos, defensores y detractores, estaban de acuerdo en reconocer que su rasgo distintivo era la supresión de las libertades políticas y sindicales. La controversia estribaba en si esto tenía su compensación en términos de modernización. En realidad, como se ha visto, la política económica del fascismo, tanto con De Stefani como con Volpi, no se apartó sustancialmente de la de los gobiernos anteriores. Análogas consideraciones se pueden hacer, como también se ha visto, acerca de la política eclesiástica y de la misma política exterior y colonial. El acuerdo italo-yugoslavo de 1924 sobre Fiume no era, en definitiva, más que un corolario del tratado de Rapallo negociado por Giolitti en 1920 y la reconquista de Cirenaica, llevada a cabo mediante represiones que causaron decenas de miles de muertos, había sido iniciada por el gobierno de Facta.

Un estado policial y una política carente de elementos reales de innovación no podían producir grandes resultados en términos de modernización. Es cierto que durante los años veinte la industria italiana continuó desarrollándose según la misma tendencia de la anteguerra y del período posterior a la guerra, es decir, en el sentido de una mayor concentración y racionalización y de un estrecho vínculo con los aparatos del estado, y en este contexto se registró un proceso de modernización y de crecimiento. Los sectores más dinámicos fueron los de la industria eléctrica y química. Pero los principales indicadores tanto en el sector agrícola como en el industrial, testimonian en su conjunto tasas de crecimiento inferiores a los de la época de Giolitti y en la línea de los de otros países europeos durante los años veinte; superiores a los de Francia, pero inferiores a los de Alemania, de Estados Unidos y también, aunque en menor medida, de Inglaterra. La ocupación obrera se situaba poco más por encima de los niveles de 1920 y el 49 % de la población activa continuaba ocupada en la agricultura, agricultura que la batalla del trigo no contribuyó, desde luego, a modernizar. Al contrario, los sectores más dinámicos, como el de los cítricos y la ganadería, resultaron perjudicados. También los niveles del consumo quedaron por debajo de la media europea e incluso, según algunos estudiosos, sufrieron una contracción. Los desequilibrios regionales continuaron siendo profundos: en el sur el ascenso del fascismo se había saldado con la sustitución de nuevas clientelas en el lugar de las antiguas o, más a menudo, con un amalgama de las dos. Además, la válvula de escape de la emigración ya no funcionaba.

La vuelta de la normalidad y del orden, desde luego, generaba consenso, y no sólo entre los beneficiarios de esta nueva estabilidad. Pero también generaba pasividad y resignación en todos los que en la posguerra habían expresado en formas radicales e ingenuas sus aspiraciones de renovación y

ahora habían vuelto al letargo de la inactividad. El fascismo era la expresión y el retrato de esta Italia.

Había, sin embargo, quienes no se resignaban. Entre ellos los firmantes del manifiesto de los intelectuales antifascistas promovido en 1925 por Benedetto Croce, en respuesta a un manifiesto análogo de los intelectuales fascistas patrocinado por Gentile, y los dirigentes políticos –Sturzo, Turati, Gaetano Salvemini, Carlo Rosselli y muchos otros–, que eligieron o se vieron obligados a elegir el camino del exilio. París y Francia se convirtieron en el centro de esta nueva emigración política que en 1927 dio vida a una «concentración antifascista», que sin embargo no llegó a convertirse en un instrumento efectivo de relación y menos aún a ejercer alguna influencia en Italia. De entre los partidos antifascistas, los comunistas fueron los que con más éxito lograron mantener contactos con sus militantes dentro del país, y por ello pagaron un alto precio. Pero ellos también estaban divididos por agrias disensiones internas, que por un lado tenían su origen en las distintas interpretaciones que daban del fascismo y de la lucha antifascista, y por otro reflejaban los contrastes internos de la Internacional Comunista. En el congreso de Lyón, en enero de 1926, el grupo que se reconocía en Antonio Gramsci y Palmiro Togliatti logró vencer a la corriente de izquierdas de Amedeo Bordiga, con una plataforma programática que delineaba un proyecto a largo plazo y asumía la cuestión meridional como cuestión central de la revolución italiana. Compaginar semejante programa con la aceptación –también sancionada en el congreso de Lyón– de la «bolchevización», no era cosa sencilla. Antonio Gramsci se percató con gran lucidez de esta contradicción y desde la cárcel, donde fue recluido en 1926 y donde languideció hasta su muerte en 1937, intentó superarla consignando en sus cuadernos su rica y atormentada reflexión política, en medio de la desconfianza, cuando no la hostilidad, de sus compañeros de partido y de reclusión.

6.4. EL CASO FRANCÉS

En Francia, ya hemos tenido ocasión de observar cómo, tras la afirmación del *Cartel des gauches* en las elecciones de 1924 y el ascenso de Briand al Quay d'Orsay, las directrices de la política exterior francesa se mantuvieron orientadas con bastante estabilidad hacia la búsqueda de una mayor cooperación política y una mejora de las relaciones francoalemanas. Los tiempos de Poincaré y de su intransigencia ya quedaban lejos. No se puede decir lo mismo por lo que respecta a la política interna. El gobierno de Herriot, que había despertado tantas expectativas, no duró mucho tiempo, justo el tiempo necesario para realizar algunos gestos y actos políticamente significativos, como la institución de un consejo general económico, que los sindica-

tos reclamaban desde hacía tiempo, la traslación de los restos mortales de Jaurés al Panteón y la reincorporación de los trabajadores ferroviarios despedidos a raíz de la huelga de 1920. Tras su caída, el carrusel de las crisis de gobierno volvió a empezar con la frecuencia habitual. Francia compartía, pues, con Alemania la tasa más alta de inestabilidad política, pero se trata de una analogía aparente y superficial. En la república de Weimar la inestabilidad reflejaba, en efecto, una realidad caracterizada por tensiones sociales muy agudas y por la crisis de identidad de un país traumatizado por la derrota, y se expresaba en la radicalización política y en la consiguiente polarización de amplios sectores de la opinión pública hacia uno u otro extremo del arco político. En cambio en Francia, país vencedor y lanzado en el camino de la recuperación de la prosperidad, las fluctuaciones de la opinión pública se limitaban mayoritariamente a las clases medias, en el sentido más amplio del término, y a aquel abanico de fuerzas políticas que incluía desde una derecha moderada a una izquierda igualmente moderada. La referencia principal para las cambiantes decisiones de los electores era la suerte del franco y el ministerio más vigilado, y en consecuencia más inestable, era el de Hacienda. Si en 1923 el electorado había dado la espalda a Poincaré, al considerarlo responsable, con su política exterior de prestigio, de la especulación que se había abatido sobre el franco, posteriormente abandonó también a Herriot, cuando, en abril de 1925, su gobierno, presionado por el Banco de Francia, que amenazaba con hacer públicas las cifras de déficit del balance, llegó a plantear, por sugerencia de los socialistas, la hipótesis de un impuesto sobre el capital, suscitando la alarma en el mundo de los negocios. Un escenario análogo se repitió en julio de 1926, cuando Herriot recibió de nuevo el encargo de formar gobierno. Fue suficiente esta noticia para que el franco –por lo demás, a causa también de la revalorización de la libra– llegara a sus niveles más bajos. El pánico cundió entre los ahorradores, que se apresuraron a retirar sus depósitos, y entre los suscriptores de títulos del estado, que reclamaban el pago total de las cifras que se les debían. Una muchedumbre de ahorradores se congregó ante el Parlamento y sólo se dispersó cuando se anunció que el cargo había sido confiado a aquel Poincaré que tres años antes los electores habían rechazado.

El retorno de éste al poder, a la cabeza de un nuevo gobierno de «unidad nacional», coincidió con el de los capitales que prudentemente habían sido traslados al extranjero y contribuyó a restaurar un clima de confianza. El franco fue poco a poco recuperándose frente a la libra y en junio de 1928 se pudo restablecer su convertibilidad en oro. A diferencia de lo que había sucedido en Inglaterra, su valor se fijó en una tasa inferior a la del 80% de antes de la guerra, lo que en la práctica significó una drástica devaluación. Si bien ello introdujo, como veremos, más elementos de turbación en el sistema monetario internacional, la operación resultó rentable para las expor-

taciones francesas y representó un saludable espaldarazo para la producción industrial, que ya estaba en buenas condiciones. En 1940, ésta superaba la del período precedente a la guerra en más de un 40%. Esta renovada estabilidad hizo posible la realización de importantes reformas sociales, como la ley de abril de 1928 sobre los seguros sociales y la ley Loucheur, de junio de 1928, que dio comienzo a un vasto programa de construcción de vivienda popular.

En el plano político los beneficiarios de esta estabilización y de estos éxitos fueron, naturalmente, Poincaré y los moderados, que en las elecciones de 1928 fueron claramente confirmados y que, a pesar de la salida de los radicales de Daladier de la coalición de «unidad nacional», conservaron el gobierno hasta 1932. También para Francia, pues, la segunda mitad de los años veinte fue una época de coyuntura favorable. El vacío demográfico provocado por la guerra y por la baja tasa de natalidad había sido equilibrado gracias a la llegada de trabajadores inmigrantes (en 1930 se contaban tres millones de residentes extranjeros) y la renta per cápita, que ya en 1926 superaba en un 20% la del período anterior a la guerra, seguía creciendo, mientras que el desempleo había prácticamente desaparecido. La ocasión, pues, era propicia para emprender una política de reformas y de modernización y de ello era consciente André Tardieu, quien, tras haber sido titular de varios ministerios, sucedió en 1929 a Briand, que a su vez había sucedido a Poincaré, quien se había retirado de la vida política. Por iniciativa suya, en 1932 las ayudas económicas estatales se extendieron a todas las familias y se aprobaron leyes que reconocían a todos los ex combatientes el derecho a la pensión y ampliaban la enseñanza gratuita hasta la sexta clase. Pero sobre todo dejó su huella al promover un amplio programa de edificación de infraestructuras, desde la construcción de carreteras a la culminación de la electrificación en los campos; en 1932, las poblaciones dotadas de energía eléctrica eran el 83%, frente al 17% de 1919. Sin embargo, Tardieu tuvo que renunciar a la idea de introducir la conquista de las vacaciones pagadas.

En todo caso, se trata de un balance relevante, pero que quedaba por debajo de las posibilidades del país. Tardieu fue, en efecto, un aislado, en un gobierno y en un país en los que la preocupación por conservar lo que ya se poseía era más fuerte que el deseo de experimentar la innovación.

Ello es especialmente evidente en el sector de la política colonial. Durante la guerra, Francia había recurrido ampliamente a los recursos humanos de sus vastas posesiones coloniales. En efecto, fueron más de quinientos mil los soldados enrolados en las colonias y en particular en el Magreb, y más de doscientos mil los trabajadores de color empleados en las fábricas y en los campos. Los *tiraillers sénégalais* habían luchado con honor en los campos de batalla europeos y ello había contribuido a llamar la atención del mundo político y de la opinión pública sobre el problema de la relación entre la metrópolis y sus colonias. Expresiones como «la Francia de los cien millones» o

«la Francia de los cinco continentes» eran frecuentes en la prensa de la posguerra y en 1922 Albert Sarraut, un conocido exponente radicalsocialista que había sido gobernador de Indochina, publicó un ensayo sobre la «revalorización de las colonias», donde afrontaba el problema colonial en términos nuevos. La «revalorización» en cuestión era, en efecto, algo distinto de la tradicional explotación, en tanto que quería ser precisamente una revalorización de los recursos humanos y económicos de las colonias, que se debía poner en práctica mediante la difusión de la instrucción y la promoción de las iniciativas económicas *in loco*. Algunos no excluían que ello conllevase un cierto nivel de implicación de las poblaciones locales y contemplaban la posibilidad de pasar de una política de la «asimilación» a una política de la «asociación».

En realidad, las directrices de la política colonial de Francia siguieron siendo sustancialmente las mismas que antes de la guerra. La estructura del imperio colonial francés continuó basándose en la distinción entre «viejas colonias» –Antillas, Guayana, Reunión, Argelia y factorías indias–, equiparadas a los territorios metropolitanos y dependientes del Ministerio de Interiores, «nuevas colonias» –África occidental, Madagascar, Indochina–, administradas por un gobernador asistido por consejos parcialmente electivos, con poderes limitados y que dependían del Ministerio de las Colonias, y finalmente los protectorados –Túnez y Marruecos–, donde los dirigentes locales conservaban una apariencia de autonomía. Al margen quedaban los mandatos de Oriente Medio y de África, que Francia administraba por cuenta de la SDN. Pero la gran mayoría de los habitantes de las colonias eran *sujets* o *protegés* y como tales carecían de los derechos políticos propios de los «ciudadanos», empezando por el de voto, del que sólo gozaban los habitantes de las «viejas colonias» y de los «cuatro cantones» de Senegal, que elegían en el Parlamento de París a algunos diputados, algunos de ellos de color. El paso de la condición de *sujet* a la de *citoyen* podía darse gracias a la naturalización, pero se trataba de un pasaje muy estrecho. De quince millones de habitantes de África occidental, los naturalizados –exceptuando a los residentes en los cuatro cantones de Senegal, que ya lo eran *ab origine*– eran dos mil quinientos en 1936. Por lo tanto, la «revalorización» se limitó a una política de construcción de infraestructuras, con un amplio empleo del trabajo forzado y de las *corvées*, y al desarrollo de la instrucción, que, salvo en Indochina y en Madagascar, se impartía en lengua francesa y por maestros franceses.

Las únicas reformas de un cierto relieve se realizaron en Argelia en 1919. Se reservó para los indígenas un tercio de los escaños de las comunidades locales y la admisión a los cargos públicos, siempre y cuando no se tratara de «funciones de autoridad». Además, se facilitaron los trámites para la natura-

lización, pero no se fue más allá. Cuando, en 1925, el Cartel de las Izquierdas nombró a un radicalsocialista, Viollette, gobernador de Argelia, éste tuvo que enfrentarse a las resistencias de los colonos, que ya se habían opuesto a las reformas de 1919, y tuvo que desistir de sus propósitos de renovación hasta que, en 1927, se vio obligado a la dimisión.

Un caso en varios aspectos anómalo es el de Marruecos, que desde 1912 a 1925 fue gobernado por el mariscal Liautey, hombre de convicciones monárquicas y por consiguiente respetuoso con las autoridades constituidas. En Marruecos, éstas estaban representadas por el Sultán y por los dirigentes locales y con ellos Liautey puso en práctica una política de colaboración, incluso después de que la revuelta de Abd el Krim, iniciada en el Marruecos español, afectara al francés. Admirador de Inglaterra, prefirió seguir el camino de la «asociación», inspirándose en el modelo inglés del «gobierno responsable». Después de que el gobierno Herriot le hizo volver a casa por considerarlo un conservador, su sucesor optó, al contrario, por una política de asimilación similar a la de la vecina Argelia, alentando la llegada de colonos y de personal administrativo de la madre patria. Mientras tanto, el mariscal Pétain, a la cabeza de un contingente de cien mil hombres, vencía la resistencia de los insurrectos.

En su conjunto, pues, la evolución del imperio colonial francés fue profundamente distinta de la del imperio inglés, no sólo por lo que respecta a las relaciones entre Londres y los *dominions*, sino también por lo que concierne a sus relaciones con el *dependent Empire*. Y eso que los fermentos de emancipación y los movimientos anticolonialistas afectaban también a las posesiones francesas. La revuelta marroquí del Rif no quedó, en efecto, como un episodio aislado, pero de esto ya tendremos ocasión de hablar en su debido lugar.

Por lo demás, todo ello no preocupaba en exceso a los gobiernos y la opinión pública francesa y menos aún a los visitantes de las exposiciones coloniales de Marsella (1922) y de París (1931). El anticolonialismo, en la Francia de los años veinte, quedaba reducido a minorías políticas e intelectuales: los comunistas, que se solidarizaron con los rebeldes del Rif, y escritores, como André Gide, que publicó en 1926 su *Voyage au Congo*, o como André Malraux. En cuanto al Partido Socialista, no dedicó mucha atención al problema colonial, aunque sus representantes, como Léon Blum, se expresaron en favor de una política dirigida a promover la autodeterminación. Por lo tanto, no sorprende que la respuesta que en el curso de los años treinta se dará a los fermentos y protestas que llegaban de las colonias, será, como veremos, la de la mano dura.

7

El mundo islámico

La disgregación del Imperio otomano a raíz de la primera guerra mundial no sólo implicó un distinto ordenamiento territorial de la vasta área geográfica sobre la que éste se extendía. Constantinopla, en efecto, no había sido sólo la capital del imperio, sino también la sede de la más alta autoridad del Islam, el Califato, y bajo el sultanato de Abd el Hamid (1876-1909) se había convertido en el centro de irradiación de las ideologías panislámicas desarrolladas en las últimas décadas. La caída del imperio, pues, representó una ocasión para volver a reflexionar sobre los valores tradicionales y provocó un proceso de búsqueda de nuevos horizontes y nuevas orientaciones, que afectó a todo el mundo islámico y asumió formas diversas y también contradictorias.

El país que resultó más sacudido fue obviamente Turquía. El movimiento modernizador de los Jóvenes Turcos de la anteguerra no había soportado, tras unos éxitos iniciales, la prueba de la doble derrota, la que habían sufrido en la guerra ítalo-turca de 1911-1912 y la de la primera guerra mundial, y sus principales representantes habían tomado caminos diferentes. Uno de ellos fue el que siguió el ministro de Guerra Enver Pachá, quien, tras haber luchado contra los italianos en Libia y al lado de los alemanes en la primera guerra mundial, acabó encontrándose, en 1920, en Moscú al servicio de la Tercera Internacional, para luego pasar al frente opuesto y encontrar la muerte en 1924 luchando en Uzbekistán en las filas de los rebeldes basmacos contra el ejército rojo. Las aparentes contradicciones de esta trayectoria azarosa hallan su explicación y su justificación en la fidelidad de Enver Pachá al «patriotismo otomano y panislámico» (Gabrieli, 1986, p. 7). Un itinerario totalmente distinto fue el de Mustafá Kemal; como hombre político realista que era, éste no creía en una imposible revancha o en una revolución conducida bajo el estandarte del panislamismo, sino que, al con-

trario, apostó todas sus bazas al «patriotismo» turco y la creación de un estado moderno en el ámbito, más restringido pero étnicamente más homogéneo, de Anatolia. Aunque menos ambicioso, semejante objetivo no se presentaba en absoluto fácil de realizar. Tras el armisticio de Mudros (octubre de 1918), las tropas aliadas habían ocupado grandes extensiones de territorio turco; los ingleses se habían establecido en los Estrechos, los italianos en Antalya, los franceses en los territorios colindantes con Siria y los griegos en Esmirna. En agosto de 1920 el Sultán firmaba el tratado de Sèvres, en base al cual Turquía quedaba subdividida, salvo sus regiones centrales, en esferas de influencia y los griegos permanecían en Esmirna. Aunque el tratado no fue aprobado a la espera de una improbable adhesión norteamericana, la situación a la que Mustafá Kemal, quien en abril había convocado en Ankara una asamblea nacional y proclamado la decadencia del Sultán, tuvo que enfrentarse parecía difícilmente reversible. La nueva Turquía de la que él se proclamaba representante estaba, en efecto, aislada en el plano internacional y su único posible aliado –la Rusia soviética– parecía, en verano de 1920, orientada a sostener la causa de la revolución panislámica y poco dispuesta a sostener una revolución nacional «burguesa». Enver Pachá, como se ha visto, se encontraba en Moscú y en septiembre participó, junto con varios delegados turcos, persas y kurdos, en un congreso de los pueblos de Oriente que tuvo lugar en Bakú bajo la presidencia de Zinóviev y durante el cual se llegó a oír el llamamiento a la «guerra santa» contra el Occidente capitalista y a la revolución mundial. Por su parte, Kemal pagaba con la misma moneda: el líder comunista turco, Suphi, y otros dieciséis dirigentes fueron arrojados al mar en las aguas de Trebisonda y murieron ahogados. Con el paso de la Rusia soviética al nuevo curso de la NEP y con la revisión de la política exterior que ello conllevó también las relaciones con la Turquía kemalista se modificaron. El 16 de marzo de 1921, el mismo día en el que se firmó el tratado comercial anglo-soviético (véase cap. 2), se estipuló en Kars un tratado entre los dos gobiernos revolucionarios en el que la frontera entre los dos países partía en dos la martirizada Armenia. Se trataba de una solución ventajosa para ambas partes; Rusia podía actuar ahora libremente en la turbulenta área caucásica sin temores a interferencias extranjeras y la Turquía kemalista, además de obtener la seguridad de su frontera septentrional, se aseguraba el apoyo político y militar necesario para llevar a cabo su contraofensiva contra los ejércitos de los ocupantes aliados. Iniciada en mayo de 1922, ésta procedió con rapidez, y en el curso del año los franceses y los italianos abandonaron los territorios que ocupaban y en septiembre los griegos eran expulsados de Esmirna. Sólo quedaba Inglaterra, tradicionalmente interesada a la cuestión de los Estrechos, pero, como se ha visto (véase cap. 3), la política de firmeza seguida en esta ocasión por Lloyd George fue una de las causas de su derrota política. El gobierno conserva-

dor que le sucedió adoptó una línea más flexible, lo que permitió a lord Curzon salir con éxito de las laboriosas negociaciones que se concluyeron con la paz de Lausana (julio de 1923). De hecho, a cambio del reconocimiento de la soberanía turca sobre toda Anatolia y sobre la Tracia al este de Maritza, logró que prevaleciera el punto de vista inglés sobre la cuestión de los Estrechos, que quedaron abiertos, salvo algunas limitaciones de poca importancia, a los barcos de guerra en tiempos de paz. Se rechazaba así la tesis soviética, defendida calurosamente por Chicherin, que pretendía que se cerraran. Al tomar, no sin vacilaciones, esta decisión, la nueva Turquía kemalista no sólo actuaba en base a criterios de oportunidad y de falta de prejuicios políticos, sino que también se mostraba coherente con su aspiración a una modernización de tipo occidental. Del modelo soviético Mustafá Kemal sólo adoptó el unipartidismo: en efecto, el partido que fundó –el Partido Popular Republicano (PPR)– fue el único partido del país hasta que, tras la muerte de Kemal (1938), su sucesor Ismet Inönü favoreció la experimentación de un sistema pluripartidista. Por otra parte, ello permitió a Kemal proceder con rapidez en el camino que había escogido. En pocos años Turquía cambió su cara: se promulgaron nuevos códigos modelados sobre los de los estados europeos, se reformó el derecho de familia y se promovió la emancipación de la mujer con la abolición de la poligamia y la introducción del divorcio; se alentó la alfabetización y la instrucción básica y con este objetivo también se sustituyó la grafía árabe con los caracteres latinos. En 1924 se declaró abolido el Califato y en 1928 el Islamismo dejó de ser religión de estado. Turquía rompía así con la tradición panislámica y se convertía en el primer estado laico del mundo musulmán. Naturalmente, detrás de estas instituciones renovadas existía una economía que seguía basada en una agricultura de subsistencia y se producían los fenómenos, no necesariamente incompatibles, de la especulación y del atraso.

Pero el alcance innovador de las reformas de Kemal, quien, cuando él mismo hizo obligatorio el uso del apellido tomó el de Atatürk, esto es, «padre de los turcos», resulta más notorio si se hace una comparación con la situación y el desarrollo de los demás países islámicos.

Ciertamente, el que presenta mayores analogías con la Turquía kemalista es Persia. Aquí también, el malestar hacia las gravosas injerencias extranjeras, que ya se había manifestado en los motines de 1907-1908, en la posguerra encontró a su intérprete en un militar, Rehza Khan, quien en febrero de 1921 se adueñó del poder y se mantuvo en él gracias al apoyo de Turquía, con la que en 1921 selló un pacto de alianza, y de la Rusia soviética, con la que pocos días después de su ascenso al poder estipuló un pacto que siguió vigente durante mucho tiempo. Ello no impidió, por otra parte, a Rehza

Khan, igual que había hecho Atatürk, liberarse de los círculos intelectuales de izquierda, que lo habían apoyado en su carrera hacia el poder, y liquidar la pequeña república soviética de Gilan, en el norte del país, suprimiendo a su jefe, Kuchik Khan. Y también para Rehza Khan el objetivo era el de una modernización llevada a cabo en plena independencia, pero los obstáculos que encontró en su camino eran muchos y de distinta naturaleza. Por un lado, desde fuera, presionaban los intereses de las compañías extranjeras que explotaban los yacimientos de petróleo del país, en aquella época los más ricos de Oriente Medio; por el otro, en el interior, estaban las resistencias de los *iman* chiítas, los mismos que en los años noventa habían sido los animadores de la «rebelión del humo» contra la concesión del monopolio del tabaco a una compañía británica y los inspiradores del primer artículo de la efímera constitución de 1907, donde se afirmaba que «ningún acto legislativo ... podrá estar en contraste con los sagrados principios del Islam». Por opuestas que fuesen las mentalidades de los petroleros y de los *iman*, juntas podían aliarse para obstaculizar una política de modernización, y en parte lo lograron. Mientras que Ataturk se había convertido en presidente de una república laica, Rehza Khan, tras deponer en 1926 la dinastía formalmente reinante de los Qajar, se proclamó a su vez emperador inaugurando una nueva dinastía, la de los Pahlevi: una ruptura en el signo de la continuidad y de la tradición, pero ruptura al fin y al cabo.

Siguiendo el modelo de Ataturk, Rehza Khan introdujo consistentes elementos de modernización en los sectores de la justicia y de la educación, limitando la competencia de los tribunales religiosos y fundando en Teherán una universidad que entre sus docentes contaba también con algunos occidentales. En 1926, se prohibió a las mujeres el uso del *chador*.

Avatares parecidos a los de Persia vivió el vecino Afganistán. Aquí también hubo un reformador –el emir Aman Alá–, un tratado de amistad con la Rusia soviética (febrero de 1921) y una modernización que se estrelló contra los escollos del atraso y del tribalismo.

Entre los países árabes sujetos al imperio otomano, el primero que se había emancipado fue, como es sabido, Egipto. Pero también fue el primero que tuvo que experimentar la condición de país con soberanía limitada, desde que Inglaterra, que ya en 1882 había asumido su control fáctico, lo trasformó en 1914 en un «protectorado». Para un país que, gracias a los ingentes beneficios acumulados durante la guerra con el comercio del algodón y al cosmopolita mundo de los negocios que giraba en torno al canal de Suez, disponía de recursos económicos e intelectuales mayores que otras zonas del mundo árabe, y donde un movimiento nacionalista era activo ya desde los tiempos de Arabi Pachá en los años ochenta, se trataba de una situación di-

fícilmente tolerable, y que de hecho no fue tolerada. Ante la negativa del gobierno británico a permitir que una delegación de nacionalistas egipcios participara en la conferencia de paz, el *Wafd* (término que significa precisamente «delegación») respondió con el llamamiento a la movilización popular, llamamiento que fue ampliamente secundado por intelectuales, estudiantes y comerciantes. El pulso entre el gobierno de Londres y los nacionalistas egipcios se arrastró durante tres años y sus altibajos se reflejan en la azarosa biografía de Zaglul Pachá, el líder del movimiento nacionalista; detenido y deportado a Malta en marzo de 1919 y posteriormente liberado, fue arrestado de nuevo en febrero de 1921. Liberado también esta vez, en diciembre fue por enésima vez detenido y deportado a las islas Seychelles, para volver definitivamente al país en abril de 1923. Mientras tanto, en efecto, escuchando las sugerencias de lord Milner, quien había llevado las negociaciones con los nacionalistas e ignorando la opinión contraria del nuevo ministro de las colonias, Winston Churchill, el gobierno inglés había renunciado al protectorado (febrero de 1922) y en Egipto se había dado una nueva constitución (abril de 1923). Sin embargo, la independencia que había conquistado seguía siendo limitada, en tanto que las tropas británicas se quedaban a cargo del canal de Suez e Inglaterra, aunque compartiéndola con Egipto, mantenía su soberanía sobre Sudán, y en consecuencia el control sobre las aguas del Nilo. Además, a través del Khedivé Fuad, que ahora había asumido el título de rey, y su corrupto entorno, y utilizando los mecanismos de una constitución que asignaba al rey el nombramiento de las dos quintas partes de los parlamentarios, Inglaterra estaba en condiciones de ejercer su influencia en los asuntos internos. Entre 1928 y 1935 el parlamento se encontró de hecho desautorizado y la constitución de 1923 quedó como papel mojado.

En los territorios árabes de Oriente Medio destaca en este período la figura de Feisal, el más dinámico de entre los tres hijos del sherif hachemí de Hegiaz, Al Hussein. Al proclamarse en octubre de 1921 «rey de los Árabes», Feisal quería asumir como programa político el ideal de la unidad árabe que hasta entonces sólo había sido teorizada por algunos intelectuales, en su mayoría exiliados en Occidente, como el sirio Abd el Rahman o el sirio-libanés Najib Azouri, autor del libro *Le Reveil de la nation arabe*, publicado en París en 1905. Para alcanzar su ambicioso objetivo Feisal confiaba en las aseveraciones, en verdad no exentas de ambigüedades y reservas, contenidas en una carta que el alto comisario británico en Egipto, MacMahon, había dirigido a su padre en octubre de 1915, y en la sincera devoción por la causa panárabe de Edward Lawrence («Lawrence de Arabia»), un coronel inglés que participó activamente en las operaciones militares de los guerrilleros de Feisal contra los ocupantes turcos. Pero ignoraba que en mayo de 1916 Francia e Inglaterra habían acordado un tratado secreto (acuerdos de Sykes-Picot) que preveía la división de la región en zonas de influencia entre

las dos potencias. El contenido de tales acuerdos se puso al día y fue hecho explícito en la conferencia de San Remo de abril de 1920 cuando se decidió que a Francia le corresponderían los mandatos sobre Siria y Líbano y a Inglaterra los mandatos sobre Irak y Palestina. Feisal, quien en octubre había entrado con Lawrence en Damasco, la gran capital omeya, y en julio de 1919 había convocado allí un congreso que terminó con la proclamación de la independencia de la Gran Siria y de Irak, tuvo que poner buena cara al mal tiempo y conformarse con el título de rey de Irak bajo mandato británico. Su hermano Adbulah se convirtió en emir de un estado que se había separado de Palestina, la Transjordania.

Así, el proyecto panárabe de Feisal había fracasado. Pero las causas de este fracaso no se han de buscar únicamente en Europa, sino también dentro del mundo árabe. Entre 1919 y 1925, Ibn Saud, sultán de Nagd, una región interior de la península arábiga, logró extender su soberanía sobre toda la península, con excepción de Yemen. También la Meca y Medina, las dos ciudades sagradas del Islam, que los hachemíes habían arrebatado a la dominación turca durante la guerra mundial, entraron a formar parte del «reino de Hegiaz y de Nagd», que en 1932 asumió el nombre de Arabia Saudí. Así, nacía un nuevo estado que en muchos aspectos constituía un polo de atracción para todos los musulmanes, en particular para los de la India británica. En efecto, su dinastía gozaba del prestigio que le venía de su apego a una interpretación rigurosa de la ortodoxia islámica –la wahabita– y de la determinación que ponía en preservar su identidad ante las potencias occidentales. El peregrinaje a la Meca, facilitado gracias a la mejora de las comunicaciones terrestres y marítimas, cobraba así un nuevo significado. De hecho, en los años entre las dos guerras el número de peregrinos no dejó de aumentar.

Irak, Palestina y Siria eran mandatos de tipo A, es decir, de los que se consideraban más maduros para la independencia y donde el cometido de las potencias mandatarias hubiera tenido que ser precisamente el de poner en marcha y acelerar el acceso a la plena soberanía. En realidad, la manera en que Francia e Inglaterra desempeñaron la tarea que les había confiado la SDN constituye una prueba más de sus respectivas aproximaciones a la cuestión colonial. Siria fue separada de Líbano y desmembrada en varias provincias, cada una dotada de instituciones representativas con jurisdicción limitada sobre asuntos locales. El poder real lo tenía el gobernador nombrado desde París. Fue sólo a consecuencia de la oleada de agitaciones y protestas que sacudieron el país entre 1926 y 1927 y que pasaron a la historia como «la revuelta de los Drusos», que Francia sustituyó al anterior gobernador, un militar, con un civil, Henry Ponsot, quien adoptó una línea más flexible. Pero su sucesor, Daniel de Martel, quien tomó posesión en 1933, volvió al uso de la fuerza, con las consecuencias que veremos más adelante.

En el mandato británico sobre Irak, que durante los años veinte, a consecuencia del inicio de la explotación de los yacimientos de Kirkuk, se convirtió en uno de los mayores productores de petróleo de la región, las cosas fueron de otra manera. En su calidad de soberano, Feisal se mostró muy hábil en defender las razones del país del que había sido puesto a la cabeza, tanto frente a la potencia mandataria como ante la SDN, que en 1926 le concedió el territorio de Mossul y sus ingentes recursos petrolíferos, largamente reclamados por Turquía. En 1926 Irak promulgó su constitución, en 1930 fue reconocida su independencia y en 1932 entró a formar parte de la SDN. Sin embargo, los ingleses conservaron unas bases aéreas y las compañías petroleras el control de los yacimientos.

En Palestina, la novedad la constituyó la creciente inmigración judía, que, iniciada a la sordina entre finales del siglo XIX y principios del XX, recibió un nuevo impulso con la declaración Balfour de noviembre de 1917, con la que el gobierno inglés se declaraba «favorablemente interesado en la fundación de una *national home* para el pueblo judío». Se calcula que, entre 1922 y 1942, el porcentaje de población judía en la región ascendió del 10 % al 31 % y que en 1939 los terrenos que los *efendi* árabes vendieron a colonos judíos tenían una extensión de ciento cincuenta mil hectáreas, correspondiente a una cuarta parte de toda la superficie cultivable. En 1925, por iniciativa de Chaim Weismann, un científico que había sido uno de los inspiradores de la declaración Balfour y que ahora era presidente de la organización sionista, se fundó la Universidad de Jerusalén. A medida que el flujo de la inmigración crecía, la convivencia entre la población palestina y los colonos, que procedían en su mayoría de Europa oriental y central, se hacía más difícil y las autoridades no encontraron otra medida para suavizar la tensión que no fuese un control gradual del flujo de inmigración según las circunstancias. En 1929 tuvieron lugar los primeros enfrentamientos y cayeron las primeras víctimas; era el principio de un conflicto entre dos derechos que dura todavía hoy.

8

El mundo indio

La India británica, cuyo territorio correspondía al que actualmente ocupan India, Pakistán, Bangladesh y Birmania, contaba, según el censo de 1921, con una población de trescientos cinco millones y, según el de 1931, con una de trescientos treinta y ocho millones. La diferencia entre estas dos cifras es de por sí indicativa de una tasa de crecimiento demográfico muy elevada. Junto con la de América latina, la población india era, en efecto, una de las más jóvenes del mundo. Una humanidad inmensa, pues, pero también heterogénea. Según el informe Simon de 1930, había en la India doce grupos lingüísticos y se profesaban seis grandes religiones. La más difundida era la hindú, con ciento setenta millones de fieles, seguida por la musulmana, con ochenta. La gran mayoría de la población india –el 67 % en 1931– estaba ocupada en la agricultura y estaba constituida por una aristocracia de *zamindari* y un sinfín de pequeños propietarios y campesinos sin tierra, pero también consistentes núcleos de proletariado industrial se habían formado alrededor de las ciudades. Iniciado a principios de siglo, el desarrollo industrial había conocido una notable aceleración en el curso de la guerra y a finales de los años veinte los establecimientos textiles indios estaban en condiciones de satisfacer el 80 % de la necesidad interna. (Es de 1913 el comienzo de la producción de acero por parte de la Iron and Steel Company de la gran familia Tata). También desde un punto de vista social, la India era, pues, un país heterogéneo y complejo.

Los orígenes del movimiento anticolonialista indio se pueden remontar a 1885, año en el que, con el consentimiento de las autoridades inglesas, se fundó el Partido del Congreso (*All India National Congress*). En realidad, como en otros países asiáticos, también en la India el movimiento adquirió consistencia por impulso de la victoria japonesa en la guerra contra Rusia. En 1906 nació la Liga Musulmana y a partir de este mismo año comenzó a manifestarse en el Partido del Congreso el contraste entre la corriente mo-

derada de Gockale, que se proponía alcanzar la autonomía en el ámbito del imperio únicamente con medios constitucionales, y la del malayo Tilak, que no descartaba el recurso a acciones ilegales e incluso al terrorismo. Las reformas introducidas en 1909 por lord Minto, que había sucedido al adusto lord Curzon en el cargo de virrey, que abrieron las puertas del consejo legislativo federal y de los consejos provinciales a un número mayor de indios elegidos por sufragio indirecto o de censo, contribuyeron probablemente a hacer que la corriente moderada prevaleciera temporalmente sobre sus opositores y que las relaciones entre el partido del Congreso y las autoridades inglesas conocieran una suerte de luna de miel. En 1911 el nuevo rey Jorge V visitó la India, recibiendo una acogida muy favorable. En coincidencia con esta visita se reconoció a Bengala el *status* de gobernatorado y la capital del país se trasladó de Calcuta a Nueva Delhi. Cuando, en 1914, estalló la primera guerra mundial, la opinión pública india, convencida de que la guerra sería breve y acabaría con una victoria de Inglaterra, sostuvo el esfuerzo bélico de la metrópolis: los indios alistados en el ejército inglés fueron un millón doscientos mil.

El impacto político y psicológico provocado por una guerra que duró mucho más de lo que se esperaba y la repatriación de los soldados que habían luchado en los campos de batalla europeos y ahora volvían a sus aldeas con el prestigio del veterano y la experiencia del combatiente, modificaron profundamente la situación. En el congreso de Luchnow en 1916, al año de la muerte de Gockale, la corriente que se reconocía en Tilak y Annie Besant, una teósofa inglesa que se había convertido al brahamanismo y se había establecido en la India, prevaleció y logró imponer una línea radical que se inspiraba en la experiencia de la lucha de los nacionalistas irlandeses.

En Londres, como ya se ha dicho, la situación india se seguía con preocupación y se tenía conciencia de que el compromiso de mínimos contenido en la declaración de Montagu (véase cap. 3) de abril de 1917, no podía ser suficiente para responder a las expectativas de los nacionalistas indios y hacían falta compromisos y reformas concretos. Tales propósitos se concretaron en la asignación al propio Montagu, en su calidad de secretario de estado para las colonias, y al nuevo virrey lord Chelmsford, del encargo de elaborar un proyecto de reformas. El efecto de distensión que se esperaba de este anuncio resultó anulado a causa de la decisión, tomada al mismo tiempo, en marzo de 1919, de prorrogar las medidas de excepción adoptadas en tiempo de guerra para el mantenimiento del orden público (*Rowlatt bill*). La matanza perpetrada el 13 de abril en Amritsar, la ciudad santa de los sij, por parte de una unidad de las tropas inglesas, que disparó sobre la multitud asesinando a 379 personas, convirtió la decepción en indignación.

Fue entonces cuando la figura de Mohandas Karamchand Gandhi se impuso en el escenario político con todo su protagonismo. Nacido en 1869 de familia acomodada, casado a los trece años, terminó sus estudios de de-

recho en Londres, donde permaneció durante tres años, de 1888 a 1891. De vuelta a su país, fue encargado por una empresa india para solucionar un trámite legal en Durham, en Suráfrica. Hubiera debido ser una estancia breve y sin embargo duró, con alguna interrupción, hasta 1914. Gandhi, en efecto, se encontró cada vez más envuelto en la tutela de la comunidad india allí residente, contra los abusos y las discriminaciones del gobierno surafricano y fue durante su permanencia en Suráfrica cuando elaboró y experimentó su doctrina del *satiagraha* (fuerza de la verdad).

Culturalmente, representaba la culminación de un proceso de investigación y de meditación que maduró en la lectura de los textos de la tradición religiosa hindú, del discurso de la montaña y, finalmente, de los últimos escritos de Tolstoi, con quien había establecido una correspondencia ya desde 1909. Su núcleo fundamental consistía en la negativa a obedecer a las leyes injustas, en la aceptación de las sanciones que se derivaban de esta transgresión y en el principio de la no violencia. Como tal, representaba el punto de convergencia entre la profunda y rigurosa religiosidad de Gandhi (durante su vida practicó repetidas veces el voto de castidad) y su agudísimo sentido e intuición política. Políticamente, Gandhi nunca fue un integrista o un extremista. Su modelo político, como él mismo nos informa, no fue Tilak, sino Gockale y en el curso de la guerra él se declaró favorable al reclutamiento de sus compatriotas en el ejército inglés. Su rechazo del extremismo y de la violencia que de él necesariamente derivaba, reflejaba, pues, además de sus arraigados principios morales y religiosos, su igualmente arraigada convicción de que una lucha política no violenta, capaz de atraer a grandes masas, representaba, en Suráfrica así como en la India, un instrumento de acción y de movilización política de mayor y extraordinaria eficacia. Bajo la dirección de Gandhi, el movimiento nacionalista indio vivió una experiencia y experimentó una evolución que de alguna manera –y con mucha aproximación analógica– se pueden comparar con las del movimiento obrero en Europa occidental en el curso del siglo XIX, al pasar de las formas de lucha tumultuosas e insurreccionales a las propias de la moderna agitación sindical.

Así se explica por qué Gandhi, tras la matanza de Amritsar, cuando averiguó que por parte de los manifestantes no se habían respetado las reglas de la *satiagraha*, reconoció su corresponsabilidad en haber cometido «un error grande como el Himalaya» y ordenó la suspensión temporal de la *satiagraha*. Poco después, durante las sesiones anuales del Congreso, que tuvieron lugar en Calcuta en septiembre de 1920, consciente del prestigio alcanzado y de su popularidad, lanzó una campaña de no cooperación, que se desarrolló durante casi dos años y en el curso de la cual decenas de miles de personas fueron detenidas. Las formas de lucha eran las más variadas; la negativa a matricular a los niños en las escuelas estatales o acudir a los tribunales para dirimir diferencias privadas, el boicot de las mercancías inglesas, las di-

misiones de responsabilidades civiles o militares, la negativa a participar en manifestaciones públicas, como las que se organizaron con ocasión de la visita del príncipe de Gales... La más conocida y quizá la más efectiva fue la campaña para el retorno a la tejeduría y la hilandería manuales, que había sido uno de los principales recursos de la economía india antes de la revolución industrial. Los indios fueron invitados a abandonar las vestiduras de tipo europeo y a volver a llevar el tradicional *khaddi*, y el propio Gandhi no dejó de dar ejemplo. No se trataba sólo de un gesto simbólico y de protesta contra aquella civilización industrial de la que Gandhi se sentía ajeno, cuando no hostil, sino también de una medida dirigida a implicar a la población del campo, que en la tejeduría y la hilandería tenían –como él mismo subrayaba– tenían «una ocupación subsidiaria de la agricultura en los seis meses en que la agricultura no es posible». Finalmente, para implicar a las masas musulmanas y su Liga en el movimiento de no cooperación, Gandhi se sumó a la protesta contra el tratado de Sèvres y contra la abolición del Califato.

Tampoco en esta ocasión el prestigio de Gandhi y su doctrina pudieron evitar que se produjesen numerosos episodios de violencia y acciones aisladas de terrorismo. El más grave tuvo lugar el 4 de febrero de 1922 en Chauri-Chaura, donde una docena de policías ingleses fueron quemados vivos. Por su parte, también en esta ocasión el gobierno inglés dio prueba de flexibilidad, al aprobar en 1921 un *India Government Act* que retomaba y desarrollaba el proyecto de reformas de Montagu-Chelmsford. Según dicho proyecto, el derecho de voto se extendió a seis millones de indios y en los gobiernos provinciales, en los que la representación electiva india era mayor, se instituyó el principio de la «diarquía» y se les reconocieron mayores competencias, exceptuadas las del virrey y del gobernador de la provincia en materia de defensa, asuntos exteriores, comunicaciones y otras de interés general. Tales reformas entraron en vigor en marzo de 1921 y ello concurrió a frenar el auge del movimiento de no cooperación e indujo a Gandhi a renunciar a pasar al nivel más radical de la «desobediencia civil». Inmediatamente después de los hechos de Chauri-Chaura él anunció, además, el fin de la no cooperación. Algunos días después –el 10 de marzo de 1922– lo detenían y lo condenaban a seis años de cárcel, de los que cumplió dos.

Durante unos años el movimiento para la emancipación (*svaraj*) vivió, así, una fase de estancamiento. Pero cuando, en el curso de 1927, se tuvo la noticia de que ningún indio había sido llamado a formar parte de la comisión, presidida por lord Simon, que el gobierno inglés había nombrado para examinar los problemas de la India, el movimiento entró en una nueva fase. Gandhi, quien en 1924 había salido de la cárcel y en 1927 había vuelto a participar activamente en la vida del partido del Congreso, seguía siendo el punto de referencia natural para todos, pero su liderazgo ya no era indiscutible. En efecto, en el partido se iba perfilando un ala más radical, que consideraba

superado y restrictivo el objetivo de alcanzar el *status* de *dominion*, y avanzaba la propuesta de la independencia, la *purna svaraj*. Los principales representantes de esta tendencia eran el bengalí Subhas Chandra Bose, dispuesto, como hará durante la segunda guerra mundial, a aliarse con todos los que fuesen enemigos de Inglaterra, incluidos los estados fascistas, y Jawaharlal Nehru, único hijo varón de una familia brahamánica (su padre era uno de los más autorizados dirigentes del Congreso), recién regresado de un largo viaje a Europa durante el cual había participado en el congreso anticolonialista organizado en Bruselas por Willy Münzenberg y había realizado una visita a Moscú, quedando favorablemente impresionado por la realidad soviética. Nehru consideraba el *status* de *dominion* como «una promoción del campo de los explotados al de los explotadores» y se declaraba abiertamente socialista, incluso después de que, en 1929, fue expulsado de la Liga Antiimperialista a la que se había adherido en Bruselas, por ser considerado demasiado proclive al compromiso con el nacionalismo burgués. En noviembre de 1928 Nehru fundó una Liga por la Independencia y cuando, por impulso del nuevo virrey lord Irwin, el gobierno laborista de MacDonald se pronunció en favor de la concesión a la India del *status* de *dominion*, en cumplimiento de los dictámenes de la conferencia imperial de 1926 (véase cap. 3), y anunció su decisión de convocar una mesa redonda para tratar los problemas del país, mantuvo su postura de intransigencia. Gandhi, quien en enero de 1928 le había escrito que «las divergencias entre tú y yo parecen tan grandes que no veo qué punto de contacto pueda existir entre nosotros», inesperadamente se pronunció en su favor y lo designó como presidente de la próxima sesión del partido, que se celebraría en Lahore a finales de diciembre de 1919. El congreso de Lahore marcó, así, la victoria de Nehru, pero sobre todo representó la prueba de la unidad del partido y del movimiento anticolonialista indio. A diferencia de lo que constataremos para otros países asiáticos, la India disponía ahora de un instrumento político en el que orientaciones ideales y políticas distintas, tradicionalistas y modernizadores, seguidores de Gandhi y seguidores de Nehru y de Bose, habían logrado realizar una convivencia no fácil, pero auténtica, y cuyo grupo dirigente, a pesar de las diferencias, estaba unido por vínculos mutuos de respeto y de amistad. Sólo quedaban al margen algunos grupos más radicales y en particular los comunistas del *All India Workers And Peasants Party*, en el que en 1928 habían confluido varias formaciones locales, pero cuya influencia estaba limitada a las concentraciones obreras de las grandes ciudades y a sus organizaciones sindicales.

En los años de la gran depresión, cuyas consecuencias fueron dramáticas para la economía india y para el nivel de vida de la población, el movimiento de no cooperación y de desobediencia civil, interrumpido en 1922, se reanudó, como veremos, con renovado vigor, implicando a masas humanas cada vez mayores. En marzo de 1930 Gandhi comenzaba la célebre «marcha de la sal».

9

El área del Pacífico

Japón había entrado en guerra al lado de los Aliados desde las primeras semanas del conflicto en virtud del pacto de alianza que en 1902 había suscrito con Inglaterra. La aportación nipona a la victoria aliada se limitó a la ocupación de las bases alemanas en las Carolinas, en las Marianas y en las islas Bismarck y a la de la concesión alemana de Kiao Chou en el Shantung chino. En realidad, más que de una participación de Japón en la guerra hay que hablar de una inserción de este país en el conflicto mundial con fines y objetivos propios. En efecto, la conquista de Kiao Chou fue concebida como un trampolín para una política de penetración en China, aprovechando el estado de disgregación en el que ésta se encontraba. Las «21 cuestiones» que en enero de 1915 el gobierno japonés presentó al chino y que éste se vio obligado, en mayo, a aceptar en gran medida, constituían una poderosa limitación a la soberanía de China. Ello preocupaba a los aliados, y especialmente a los norteamericanos, favorecedores desde siempre de una política de «puerta abierta» para con China, y fue también por ello que ejercieron presiones cada vez más insistentes sobre el gobierno chino para que declarara a su vez la guerra a Alemania y se pusiera al lado de ellos, lo que sucedió en agosto de 1917. Pocos meses después, la revolución rusa ofreció a los japoneses la ocasión para reforzar su presencia militar en Manchuria, una área geográfica en cuyos recursos mineros e industriales estaban especialmente interesados. Tampoco en esta ocasión los Aliados les permitieron una iniciativa unilateral y en agosto-septiembre de 1918 una cuerpo de expedición aliado precedía a la ocupación de Vladivostok. Japón se reveló como un compañero incómodo también en la mesa de la conferencia de paz. De hecho, no se conformó con los mandatos sobre las islas ex alemanas del Pacífico situadas al norte del ecuador y con el reconocimiento de sus derechos sobre Santung, sino que propuso la abolición de cualquier limitación de la

emigración japonesa, cuyo flujo más consistente se dirigía hacia California y hacia los *dominions* británicos en el Pacífico. Esta propuesta encontró en el primer ministro australiano, el laborista W. Huges, a su más feroz opositor y fue rechazada con la abstención de Inglaterra y Estados Unidos. Pero con ella se rechazaba también la motivación que la animaba, es decir, el principio de la igualdad de las razas, proporcionando así a Japón un nuevo y poderoso argumento para denunciar ante la opinión pública propia y asiática en general la hipocresía de la proclamada democracia occidental y para reivindicar para sí mismo el papel de vengador de Asia frente a las injusticias sufridas por culpa de los occidentales. ¿No había sido Japón el único estado asiático capaz de derrotar por tierra y por mar a una gran nación blanca, la Rusia zarista? Y, más en general, ¿no era Japón la única nación asiática y «no blanca» que había logrado modernizarse desarrollando una industria competitiva y dotándose de instituciones eficientes?

Ahora, concluida la guerra, se presentaba en los mercados internacionales con un potencial económico no sólo intacto, sino aumentado. En el curso de la guerra su aparato industrial había aprovechado la coyuntura favorable que se había producido a consecuencia de la caída de la competencia europea. Ello había permitido el crecimiento de las exportaciones y favorecido un proceso de expansión productiva sostenida. Finalmente, a diferencia de los países aliados, Japón no estaba endeudado con Estados Unidos.

Pero también tenía que contar con la otra cara de la moneda; todavía en 1920 el 53 % de la población activa estaba ocupado en la agricultura, actividad sobre la que pesaban gravosos vínculos de tipo feudal, que frenaban su desarrollo. Si se comparan con los de la producción industrial, los índices de la producción agrícola aparecen limitados, hasta el punto en que se hizo necesario cada vez más recurrir a las importaciones. Si se tiene en cuenta la elevada tasa demográfica, que ya no encontraba desahogo en la emigración y en la práctica tradicional del infanticidio, progresivamente abandonada, el persistente carácter «dual» de la economía japonesa resultará evidente y se comprenderán sus contradicciones y dificultades.

Estas últimas se acrecentaron cuando también el sector industrial, terminada la coyuntura favorable del período bélico, tuvo que volver a medirse con la competencia extranjera en los mercados internacionales. Así, también Japón, cuyo territorio no había sido tocado por la guerra, pero que en 1923 fue sacudido por un tremendo terremoto, tuvo su posguerra, y él también, como los países europeos, experimentó el péndulo entre inflación y deflación y los fermentos y agitaciones sociales. Éstas fueron especialmente difusas y agudas en agosto-septiembre de 1918, con la llamada rebelión del arroz, durante la cual se lamentó la pérdida de más de cien muertos y miles de manifestantes fueron detenidos. Si la protesta adquirió la forma típica de los tumultos por el pan, ello se debe en gran medida al hecho de que el mo-

vimiento obrero estaba escasamente extendido y arraigado y, por consiguiente, las organizaciones sindicales eran débiles, con apenas 285.000 afiliados en 1926. Y eso que en Japón la condición de los obreros era mucho más desfavorecida que en Europa o en los Estados Unidos: si los salarios conocieron en los años veinte un notable incremento, los horarios de trabajo seguían siendo, para la mayoría de los trabajadores, superiores a las diez horas y la legislación social era extremadamente anticuada. Sólo en 1926 se prohibió por ley la contratación de jóvenes por debajo de los catorce años. Finalmente, una ley de «paz pública», en vigor desde 1900 e inspirada en un modelo del *Sozialistengesetz* bismarckiano, hacía difícil cualquier intento de organizar un movimiento de asociación y resistencia.

La única institución en la que se producía una amplia agregación popular era el ejército, compuesto en su mayoría por campesinos vinculados a las tradiciones y desconfiados, cuando no hostiles, hacia la «modernización» importada de Occidente. En consecuencia, la forma más difundida de socialización era la que se daba bajo el signo del espíritu de cuerpo y del militarismo y eso explica el papel que, como veremos, el ejército tuvo en los acontecimientos que llevaron a la segunda guerra mundial.

Así como había pasado con la restauración de los Meiji, el impulso a las reformas y a la democratización tenía, pues, que llegar desde arriba. El hecho más destacado, desde este punto de vista, fue la aprobación por parte de la Dieta, en mayo de 1925, de una nueva ley electoral que extendía el derecho de voto a todos los varones de edad superior a los 25 años. Se trataba de una reforma radical respecto del sistema de censo anteriormente en vigor, según el cual sólo una pequeña minoría de la población gozaba del derecho de voto, pero eso se daba en el marco de un sistema institucional y político en el que la iniciativa del gobierno y de la propia Dieta estaban fuertemente condicionadas por los tradicionales poderes constituidos: en primer lugar por el emperador, que podía disolver la Dieta a su discreción y al que directamente tenía que responder el gobierno; en segundo lugar, por el círculo restringido de los viejos estadistas que formaban parte del *Genro*, un organismo informal, pero muy influyente; en tercer lugar, por el Consejo privado y la Cámara de los Pares, donde se sentaban los representantes de la vieja aristocracia y que gozaba de amplios poderes; y finalmente por los altos mandos militares, a los que correspondía de hecho la designación de los ministros de la Guerra y de la Marina. En cuanto a los partidos políticos –el *Seiyukay*, que tenía su base electoral en el campo, y el *Minseito*, cuyo electorado era mayoritariamente urbano–, ambos estaban ampliamente condicionados por las infiltraciones y las presiones de las grandes concentraciones económicas y financieras (*Zaibats*), entre las cuales destacaban las de las familias Mitsui y Mitsubishi. La dialéctica política que se establecía entre ellos no se basaba sino muy parcialmente en la diferencia de los proyectos y

de los programas políticos y la forma de lucha política a la que ambos recurrían sistemáticamente era la de la corrupción.

Los gobiernos que se sucedieron en los últimos años de la era *Taisho* (o era de la Gran Rectitud), desde el de Hara Takashi, que murió víctima de un atentado en 1921, a los de Kato y de Watasuky, se esforzaron, sin embargo, por sustraerse a los condicionamientos y a las presiones de los militares y persiguieron, no sin vacilaciones, una política de apertura y de cooperación internacional. El test decisivo para esta orientación política fue la conferencia que se celebró en Washington entre diciembre de 1921 y febrero de 1922, con la participación de todas las potencias interesadas en el área del Pacífico y que concluyó con la firma de una serie de tratados y de instrumentos diplomáticos. Entre ellos el más importante fue el acuerdo sobre la limitación de los armamentos navales, en base a un sistema de cuotas y de topes para cada uno de los firmantes: 525.000 toneladas para Inglaterra y Estados Unidos, 325.000 para Japón y 175.000 para Francia e Italia. A cambio de sus concesiones los japoneses obtuvieron la suspensión de la construcción de nuevas bases navales inglesas y norteamericanas y de la fortificación de las existentes en el Pacífico, con la exclusión de Singapur y Hawai, pero incluidas las de las Filipinas, de Guam y de Hong Kong. La conferencia de Washington se ocupó asimismo del problema chino, comprometiendo a los participantes a respetar la «soberanía, independencia e integridad» de China y reafirmando sustancialmente el principio de la «puerta abierta», por el que se decantaba la diplomacia americana. Ello supuso la renuncia, por parte de los japoneses, a la ocupación de Kiao Chou y al control de Shantung, donde por otra parte conservó importantes intereses económicos.

La opinión pública japonesa reaccionó de diversas formas ante las decisiones de la conferencia de Washington: algunos vieron en ella el principio y la garantía de una nueva era de paz en el Pacífico, otros, en cambio, vieron en ella una especie de Versalles asiática, en la que Japón había hecho el papel de Alemania. De hecho, lo que se puede decir es que, de los dos recursos de los que disponía, el de la fuerza militar y el del dinamismo de su economía y de sus exportaciones, el segundo fue el que privilegiaron los círculos políticos y económicos japoneses. A la conferencia de Washington la URSS no había sido invitada, pero también con ella Japón normalizó, en 1925, las relaciones diplomáticas establecidas en 1922, permitiendo la evacuación de la parte septentrional de la isla de Sachalin. Vladivostok había sido evacuada ya en 1922.

La apertura hacia el extranjero y hacia Occidente se reflejó también en el plano interno y en el de las costumbres. Los últimos años de la era *Taisho* (el Emperador murió en diciembre de 1926) fueron los que vieron cómo la juventud japonesa de las grandes ciudades –los *modern boys* (mobo) y las *modern girls* (mogi)– ostentaban sus prendas y sus comportamientos sin pre-

juicios y antitradicionalistas. Algunos –los *Marx boys*– llegan a abrazar aquellas ideas que la ley de «paz pública» consideraba «peligrosas». Pero para muchos estos años fueron los del *Ero* (erotismo), del *Guro* (caricatura) y del *nansensu* (sinsentido), y éstos recibieron con alivio y esperanza el principio de la nueva era *Schowa*. Pero la «paz celeste» que ésta prometía no llegaría a hacerse realidad y el equilibrio establecido con los tratados de Washington no duraría mucho. Porque en la otra orilla del Pacífico, en China, algo nuevo e importante se estaba produciendo.

China, como se ha visto, también había participado en la primera guerra mundial al lado de los Aliados, aunque su intervención se había producido *in extremis*. Pero el país no sacó ninguna ventaja de su participación en el conflicto: las peticiones de las delegaciones del gobierno de Pekín en la conferencia de paz de París para el retiro de los japoneses de Shantung y para la abolición de los «tratados desiguales» impuestos en su momento por las potencias occidentales, fueron ignoradas. La indignación que estas noticias suscitaron en China se manifestó en la oleada de agitaciones conocida como «el movimiento del 4 de mayo», un acontecimiento que marcó un giro histórico para la China contemporánea. En primer lugar, por su extensión: a diferencia de la insurrección campesina de los Tai Ping, que había afectado sólo al valle del Yang Tze Kiang, del movimiento de los *boxers*, que había quedado circunscrito a la China septentrional, y de la revolución de 1911, cuyo epicentro había sido la parte meridional del país, el movimiento del 4 de mayo de 1919, iniciado en Pekín, se extendió rápidamente a todos los principales centros del país, a pesar del estado de disgregación en el que éste se encontraba. En segundo lugar, representó una novedad por la amplitud de las clases y de las fuerzas sociales que en él se vieron implicadas: los promotores fueron los estudiantes, pero no tardaron en sumarse a ellos los ferroviarios y los obreros de las concentraciones industriales que durante la guerra se habían formado en las grandes ciudades de la costa, y el movimiento gozó de la simpatía y del apoyo de amplios sectores de la burguesía mercantil e industrial. Finalmente, y sobre todo, el movimiento del 4 de mayo representó una aproximación nueva a los problemas del país, una auténtica ruptura intelectual. Hasta entonces, la idea de modernización, al suponer la adopción de modelos de vida occidentales, había parecido a muchos irreconciliable con la idea de patriotismo. A este propósito, es significativa la polémica que, en 1914-1915, había enfrentado a dos intelectuales de gran prestigio, Chen Duxiu y Li Dazhao, el primero, defensor a capa y espada de la modernización y opositor de las «viejas ideas acerca de la conservación de nuestra esencia nacional»; el segundo, defensor de los valores del «patriotismo» y horrorizado ante la convicción de los modernizadores que «sólo si

se tiene un estado como el de Inglaterra, Francia, Rusia o Norteamérica, se puede amarlo». Ahora los estudiantes, los obreros y las clases medias, protagonistas del movimiento del 4 de mayo, constituían la prueba viva de que era posible ser al mismo tiempo «modernizadores» y «patriotas», y que entre las dos posturas no había incompatibilidad, sino complementariedad. El ejemplo de la Rusia soviética, que había destronado al zar y que defendía sus conquistas contra la injerencia de las potencias imperialistas, era una confirmación de ello, y Chen Duxiu y Li Dazhao, los dos adversarios de antaño, se encontrarán juntos en aquel reducido grupo de intelectuales que, en julio de 1921, constituyeron en Shanghai el Partido Comunista Chino. Mientras que desde el punto de vista de los socialistas europeos el retraso de Rusia representaba un obstáculo insalvable en el camino de la edificación de una sociedad socialista y, por consiguiente, un freno a cualquier tentativa de seguir su ejemplo, precisamente este retraso constituía para los comunistas y nacionalistas chinos y de los demás países asiáticos un motivo más de interés por la experiencia soviética, en tanto que les indicaba una salida de una condición que hoy diríamos de subdesarrollo.

Para la generación que había participado en las luchas del período anterior a la guerra se planteaba, pues, el problema de poner al día y revisar sus orientaciones y sus convicciones. Ello valía también para Sun Yat Sen, quien había sido el líder y seguía siendo el símbolo de la revolución de 1911. En mayo de 1921 había vuelto a Cantón, pero se vio obligado a dejarla a principios de 1922, al faltarle el apoyo del «señor de la guerra» local. Se refugió en Shanghai y aquí, en el mayor centro industrial de la costa, trabó sus primeros contactos con los jóvenes intelectuales fundadores del Partido Comunista y con un emisario soviético, Joffe. Es posible e incluso probable que estos contactos lo indujeran a una parcial revisión de su doctrina de los «tres principios» –independencia, soberanía, bienestar– en el sentido de su actualización. Ahora que la dinastía extranjera de Manchuria sólo era un recuerdo del pasado, la «independencia» no se podía entender sino como liberación de las grandes potencias imperialistas y ahora, tras la victoria soviética, el nuevo y moderno nombre de «bienestar» era el de «socialismo». Lo cierto es que cuando, en febrero de 1923, Sun Yat Sen volvió a Cantón, era consciente de que sin un partido organizado y sin una fuerza militar propia que lo emancipara de la dependencia de los «señores de la guerra», la persecución de sus fines resultaría imposible. Con este fin, y ayudado eficazmente por el consejero soviético Borodin, trabajó para transformar el Guomintang en un partido organizado al estilo soviético, en el que fueron admitidos, a título individual, también los militantes del Partido Comunista, y en mayo de 1924 instituyó en Whampoa una academia militar que debía formar a los cuadros del futuro ejército nacionalista. Su presidente fue Chiang Kai-shek, recién vuelto de una estancia en Moscú, su consejero político el comunista Zhou

Enlai y su consejero militar el general soviético Bliucher. En septiembre de 1924 los cadetes de Whampoa sostuvieron con solvencia a las milicias sindicales organizadas por los comunistas para repeler el intento de los «tigres de papel» –unos mercenarios a sueldo de los sectores más retrógrados del mundo de los negocios local y más comprometidos con la delincuencia– de retomar el control sobre Cantón. Esta ciudad se convirtió, así, en el símbolo de la revolución china en marcha, la Moscú de Extremo Oriente.

Mientras tanto, en Pekín, el «mariscal cristiano» Feng Yu-hsiang se había temporalmente adueñado del poder y su gobierno parecía tener la intención de discutir con el gobierno de Cantón sobre la posibilidad de una reconciliación y reunificación del país. Por tanto, Sun Yat Sen se puso en marcha hacia la capital del norte, pero su viaje nunca finalizó, ya que murió de cáncer de hígado el 12 de marzo de 1925. En su testamento, dictado en el lecho de muerte, al tiempo que expresaba su dolor por no haber podido cumplir el objetivo de su vida –el de «devolver» a China una posición de «independencia e igualdad entre las naciones»– recomendaba a sus colaboradores la lealtad a los tres principios que había enunciado.

Pero, ¿a cuál de ellos había que dar prioridad? Sobre este aspecto, las opiniones dentro del Guomintang estaban lejos de ser acordes. Mientras que la mayoría de sus cuadros se inclinaba por dar prioridad a los principios de la independencia y de la soberanía y por consiguiente apostaba por una rápida reunificación nacional, los comunistas y la izquierda del Guomintang privilegiaban el principio del «bienestar», a conseguir mediante la revolución social y la instauración del socialismo, al considerar que sólo sobre esta base era realizable la unidad del país. Por eso apoyaban sin reservas las duras huelgas que se producían en las grandes ciudades de la costa, Cantón, Shanghai, Hong Kong, donde su presencia estaba notablemente consolidada. Los afectados por esta oleada de huelgas ya no eran sólo los propietarios de fábricas extranjeros, sino también los chinos y ello contribuía a mermar todavía más la solidez del bloque de fuerzas sociales que sostenía el Guomintang. De hecho, si una revolución de tipo socialista en China se consideraba prematura y por ello se estaba a favor de una colaboración entre los comunistas y el Guomintang, por otra parte también se consideraba poco realista la reunificación del país en breve plazo y se mantenían, por tanto, relaciones, además de con Cantón, también con Pekín, con cuyo gobierno la URSS estipuló un tratado en el que el gobierno soviético renunciaba a los privilegios de los que había gozado la Rusia zarista y se comprometía a resolver la vieja cuestión del ferrocarril oriental de Manchuria teniendo en cuenta los intereses chinos.

El abanico de las posibles opciones era, pues, muy amplio, pero era preciso elegir si se quería evitar que el proceso de disgregación del país llegara a un punto sin retorno. El hombre que supo hacerlo fue Chiang Kai-shek,

quien en marzo de 1926, con un golpe de mano, se hizo con el poder en Cantón, hizo arrestar a numerosos dirigentes comunistas y puso fin a la huelga que desde hacía meses se arrastraba en Hong Kong. En cuanto a los consejeros soviéticos, se limitó a confinarlos en sus habitaciones, para luego valerse de su colaboración en la ofensiva hacia el norte que emprendió en julio de 1926.

Aclamado por las poblaciones de las zonas liberadas, el ejército del Kuomintang llegaba en enero de 1927 al Yang Tze Kiang, ocupando la ciudad de Wuhan, en marzo liberaba Nanquín y Shanghai y en mayo de 1928 entraba en Pekín. Posteriormente, a principios de 1929, Chiang Kai-shek, a raíz del atentado en el que perdió la vida Chiang Tso-lin, un «señor de la guerra» notoriamente vinculado a los japoneses, se aseguró también el control de Manchuria. Por lo menos desde un punto de vista formal, China recuperaba, así, su unidad.

A medida que la victoria de Chiang Kai-shek se perfilaba y que su poder se consolidaba, las grandes potencias reconocían el gobierno que él había instaurado en Nanquín y renunciaban a una parte de los privilegios y de las inmunidades de las que hasta el momento habían gozado. Desde América y desde las colonias de la emigración china comenzaron a llegar a la China nacionalista préstamos, capitales y personal técnico cada vez más abundantes. Paradójicamente, el único gran país con el que la nueva China no mantenía relaciones era el que más le había ayudado a conseguir su victoria, la Unión Soviética, con la que fueron interrumpidas las relaciones diplomáticas. Análogamente, en el plano interno los grandes perdedores del revolcón político que había llevado a la unificación de China fueron los comunistas, que, al promover y guiar las sublevaciones de las grandes ciudades de la costa, habían facilitado notablemente la avanzada del ejército nacionalista. La ruptura con ellos se produjo entre abril y mayo de 1927 y fue seguida por una represión despiadada en la que las víctimas se contaron por decenas de miles. El primer baño de sangre fue el que se perpetró en Shanghai en abril; el último, el de diciembre de 1927 contra la «Comuna» de Cantón. La represión afectó también a los elementos de la izquierda del Guomintang y al gobierno que en enero de 1927 se había constituido en Wuhan con la participación de algunos representantes comunistas. Éste, en efecto, fue desautorizado por el gobierno que Chiang Kai-shek estableció en Nanquín.

El Partido Comunista, que bajo la dirección de Chen Duxiu había apostado todas sus cartas por la clase obrera de los grandes centros de la costa, había sido físicamente aniquilado y los cuadros y los militantes que habían sobrevivido a la salvaje represión se refugiaban en las regiones del interior, en el intento de dar una expresión y una dirección política al estado de agitación y de rebelión endémica que allí reinaba desde hacía décadas, o incluso desde siempre, y al que los últimos acontecimientos habían dado un nuevo

vigor. Una de esas regiones era la de Hunan, y fue a Hunan, en donde había nacido, que fue enviado Mao Zedong. Alumno y colaborador de Li Dazhao Chao, había tomado de su maestro el sentido y el orgullo del patriotismo chino y había sido, de entre los miembros comunistas del Guomintang, uno de los defensores de la política de colaboración con el fin de conseguir la unidad del país. Al mismo tiempo, en su calidad de responsable del Instituto para la Formación del Movimiento Campesino, había alcanzado un profundo conocimiento del problema agrario, del cual es testimonio su *Relación sobre el movimiento campesino en Hunan*, de 1926. La derrota del movimiento revolucionario en las grandes ciudades reforzó en él la convicción de que la locomotora de la revolución china consistía en las inmensas masas campesinas, que hasta entonces se habían limitado a «asistir» a las mutaciones en curso en el país, y con esta convicción había vuelto a su Hunan natal. Los principios de su carrera de revolucionario no fueron felices: la «revuelta de la cosecha de otoño» de septiembre-diciembre de 1927 en Hunan fue, en efecto, un fracaso y Mao Zedong tuvo que retirarse a la zona montañosa de Changkanshan, donde, rodeándose de elementos marginales y bandidos, constituyó una base revolucionaria. Nadie, ni siquiera entre sus compañeros de partido, hubiera podido imaginar que desde allí empezaría su larga marcha hacia el poder.

La unificación de China bajo el Guomintang de Chiang Kai-shek modificaba profundamente el equilibrio del área del Pacífico que se había establecido en los tratados de Washington. La perspectiva de una colaboración entre chinos y norteamericanos y de la consiguiente modernización de China suscitaba en Tokio inquietudes y preocupaciones, reavivaba los recelos antiamericanos despertados por las recientes limitaciones de la emigración japonesa a los Estados Unidos y relanzaba las ideologías panasiáticas. A decir verdad, el panasiaticismo no era un fenómeno exclusivamente japonés y el propio Sun Yat Sen, en una conferencia ante los estudiantes de la Universidad de Kobe, poco antes de morir, había hecho votos por una alianza entre China y Japón «para inducir armónicamente a los asiáticos a que luchen por una Asia más grande, haciendo progresar así la paz mundial». Pero la versión más acreditada en los círculos políticos y militares de Tokio no era la «armoniosa» y pacifista de Sun Yat Sen. Para ellos, el panasiaticismo se identificaba con la teorización de la hegemonía japonesa en el Pacífico y de su papel de gran potencia.

Estas tendencias encontraron su primera expresión en el gobierno que se formó tras las elecciones de 1928 –las primeras con sufragio universal masculino–, presidido por el general Tanaka, del partido Seiyukai y defensor a ultranza de los intereses japoneses en Manchuria y en China. Pero al

gobierno de Tanaka sucedió, tras las elecciones de 1930, el gobierno de Hamaguchi, del partido Minseito, constituido en su mayoría por personajes moderados y orientados hacia una política de colaboración con China. Sin embargo, ya sabemos que la vida política japonesa reflejaba sólo parcialmente los contrastes de intereses y de opiniones existentes en el país. El contraste real se desarrollaba en la sombra, sin escatimar golpes bajos, y sus protagonistas eran las grandes concentraciones industriales y financieras y los cuerpos separados del ejército y de la armada. Cuando, en junio de 1928, el tren en que viajaba Chiang Tso-lin, el hombre de confianza de los japoneses en Manchuria que se disponía a tratar con Chiang Kai-shek, saltó por los aires, no se tardó en sospechar que los responsables del atentado eran las unidades japonesas estacionadas en la península de Liaotung y que tenía que ser la señal para una acción militar en Manchuria. Fue precisamente el intento de aclarar este episodio y el temor a las revelaciones que podían salir a la luz lo que provocó la caída del gabinete de Tanaka. Su sucesor, Hamaguchi, en noviembre de 1930 se libró del atentado de un nacionalista extremista de pura casualidad. Pero no pasaría mucho tiempo hasta que –de nuevo en Manchuria– un incidente análogo al que había costado la vida a Chiang Tso-lin, se repitiera. Pero esta vez, como veremos, las consecuencias serían mucho más graves.

Con excepción, naturalmente, de los *dominions* de Australia y Nueva Zelanda, los países del Sudeste asiático presentaban varios rasgos en común. En primer lugar, todos eran posesiones coloniales, aunque su grado de subordinación y dependencia de la potencia colonial no siempre era el mismo. Más estricto en la Indochina francesa y en la Indochina holandesa, donde el *Volksraad* instituido en 1916 y en el que estaban presentes también quince representantes indonesios sólo ejercía funciones consultivas; en cambio, en las Filipinas el grado de dependencia era más débil, puesto que allí, ya desde la época de la administración de Wilson, la jurisdicción de los asuntos internos había sido confiada a un gobierno y un parlamento que eran expresión de la aristocracia inmobilista de origen español. Además, todos los estados del Sudeste asiático se caracterizaban por la coexistencia de un incremento demográfico muy elevado y una agricultura atrasada y dividida entre las necesidades de la exportación y del cultivo único y las de la subsistencia. Pero a diferencia de Japón, ellos no disponían de recursos políticos y económicos alternativos y por consiguiente la única salida –si se puede llamar salida– del círculo vicioso entre retraso y superpoblación era la de la limitación del consumo de alimentos. Entre 1914 y 1940 en Indonesia el consumo de arroz disminuyó un 15 %. En fin, en todos estos países crecía y maduraba la conciencia de que existía un nexo entre su condición de subdesarrollo y su dependencia colonial.

Así, en cada uno de ellos la aspiración a la independencia encontró su expresión en los movimientos anticolonialistas, cuyas formas y tendencias varían, sin embargo, según la situación geográfica de cada país, de su composición étnica y religiosa y de su exposición a influjos de otras experiencias, fuesen los del kemalismo, del gandhismo, del nacionalismo, del comunismo chino o del panasiaticismo japonés o incluso, como en Birmania, de la tradición budista.

En Indonesia, que con su población de cuarenta millones de personas concentradas principalmente en Java era el mayor de los países del Sudeste asiático, ya antes de la guerra se había formado una asociación –el *Sareket Islam*– que se proponía preservar la identidad cultural de la población de religión musulmana (cerca del 90% del total) del influjo que ejercían las escuelas misioneras. En la posguerra, en parte por influencia de la revolución kemalista, la asociación se convirtió en un movimiento de masas cuyo objetivo era alcanzar el autogobierno. En 1920, al *Sareket Islam* se sumó el Partido Comunista, que se adhirió a la Tercera Internacional y estableció estrechos lazos con los comunistas chinos. Entre los afiliados al *Sareket Islam* y los comunistas las relaciones no eran fluidas, ya sea por las distintas orientaciones ideales y políticas, ya sea por la distinta composición social de los dos movimientos. El intento por parte de Tan Malaka, un comunista que había vivido algún tiempo en Moscú, de realizar una síntesis entre islamismo y comunismo al calor del antiimperialismo no produjo efectos concretos y los comunistas indonesios siguieron el mismo camino que sus compañeros chinos, haciéndose promotores, en 1926, de una insurrección en Java, que, como las casi contemporáneas de Cantón y Shanghai, fue reprimida despiadadamente. Su fracaso asestó un duro golpe no sólo a los comunistas, sino a todo el movimiento nacionalista, que durante algunos años atravesó un período de estancamiento y desorientación. Un impulso a su recuperación vino del proceso que en 1927 se celebró en Holanda contra algunos estudiantes indonesios que habían participado con Nehru y Wan Chin Wei en el congreso antiimperialista promovido por Willy Münzenberg. Los imputados fueron puestos en libertad y uno de ellos, el futuro presidente de la República indonesia, publicó un libro –*Indonesia libre*– que tuvo amplia repercusión en su patria. Y fue sobre la base del programa contenido en este libro que Akmed Sukarno, un dinámico ingeniero de formación marxista, fundó en 1927, junto con otros, el *Partaj nasional Indonesia* (PNI), una especie de Guomintang o de Partido del Congreso en versión indonesia. También el nuevo partido conoció pronto el bautismo de la represión, cuando, en 1929, sus dirigentes fueron arrestados. En 1930 Sukarno fue condenado a cuatro años de cárcel.

Particular importancia en el conjunto de los movimientos antiimperialistas asiáticos tiene el caso de Vietnam. Los primeros estímulos para la afirmación de una conciencia nacional vinieron de la victoria japonesa en la guerra con Rusia de 1904-1905, pero mucho más decisivos fueron el retorno de cien mil combatientes de los campos de batalla y de las fábricas francesas y, sobre todo, el revuelo suscitado por los acontecimientos de China. En 1927 se constituyó en el *Vietnam Quoc Dan Dang*, un partido nacionalista basado en el modelo del Guomintang y que operaba en la clandestinidad; y en Cantón se estableció y permaneció de 1925 a 1927 Nguyen Ai Quoc (Ho Chi Minh), hijo de un modesto funcionario anamita, que había hecho su aprendizaje político en Francia, militando en las filas del Partido Socialista y, tras la escisión de Tours, en las comunistas, y en Moscú, donde había participado en el congreso de fundación de la Internacional Campesina (*Krestintern*) en 1923. En Cantón fundó en 1925 la Asociación de la Juventud Revolucionaria Vietnamita. En su *Procès à la colonisation française*, publicado en París en 1926, Nguyen Ai Quoc distinguía claramente entre la fase democráticoburguesa y la fase socialista de la revolución por la que él luchaba. Es posible que, al plantear un esquema de revolución gradual y por etapas, quisiera ahorrar al movimiento revolucionario de su país los traumas y las laceraciones de los que era partícipe y testigo en China. Lo cierto, de todas maneras, es que el Partido Comunista Vietnamita nació relativamente tarde, en 1929, cuando la Tercera Internacional ya había adoptado las líneas de la ruptura con los movimientos nacionalistas «burgueses», y que la decisión de constituirlo fue discutida. En la reunión en la que se tomó la decisión Nguyen Ai Quoc no estaba presente y por tanto no es posible saber si la compartió. Sólo más tarde asumió la dirección del comunismo vietnamita, pero entre sus biógrafos hay quien pone en duda que se le pueda definir como un comunista. Pero se trata de una observación que vale también para otros dirigentes del comunismo asiático, de Tan Malaka al propio Mao Zedong. Lo cierto es que la Tercera Internacional y su grupo dirigente no eran sino en una medida muy limitada representativos de la compleja realidad del comunismo asiático. Ninguno de sus líderes más prestigiosos, incluidos Mao Zedong y Ho Chi Minh, formó parte nunca de sus organismos dirigentes, mientras que sí formaron parte de ellos hombres –como el chino Wan Min, enemigo declarado de Mao– que se habían hallado en desacuerdo con la línea política de su respectivos partidos y habían perdido el contacto con la realidad y los problemas de su país.

Más en general, se puede afirmar que la línea de demarcación entre comunismo y nacionalismo modernizador en Asia resulta difícil de trazar.

10

América Latina en los años veinte

Entre los estados de América Latina, algunos, en particular la mayoría de los de América central y del Caribe, participaron en la primera guerra mundial al lado de los Aliados después de la intervención de Estados Unidos, mientras que otros, como Argentina, Paraguay, Venezuela y Chile, mantuvieron durante todo el conflicto una postura de neutralidad más o menos favorable hacia uno u otro de los contendientes. Sólo Brasil eligió, en diciembre de 1917, el camino de una declaración de guerra unilateral a Alemania.

Si la implicación militar y política de los estados latinoamericanos en la guerra fue reducida y en algunos casos simbólica, su economía resultó ampliamente afectada y el proceso de expansión ya comenzado en las décadas anteriores resultó muy estimulado. Los estados beligerantes necesitaban más que nunca los productos agrícolas y las materias primas de las que América Latina era tradicionalmente exportadora, los géneros coloniales brasileños, la carne y la lana argentinas, el estaño boliviano, el cobre y el salitre chilenos y el petróleo, del que Venezuela en pocos años se había convertido en uno de los mayores exportadores mundiales. Así, las exportaciones registraron en el curso de la guerra un consistente incremento y lo mismo hicieron las importaciones de productos acabados, en particular desde Estados Unidos. Pero en su conjunto las balanzas comerciales de cada uno de los países resultaron notoriamente en activo: entre 1914 y 1920 la de Argentina registró un incremento de su activo en un 305 %, y la de Brasil en un 91 %. Quedaron así disponibles enormes recursos y resultó estimulada la reorientación de las inversiones hacia el sector industrial y la construcción de infraestructuras y obras de urbanización. Fue en el curso de los años veinte cuando las ciudades latinoamericanas dieron sus primeros pasos en la senda de su transformación en megalópolis, conglomerados de edificios futuristas y de chabolas, como hoy las vemos; y fue entonces cuando se dio gran impulso a

la construcción de las redes de carreteras. Esta efervescencia de iniciativas atrajo un notable flujo de créditos y capitales desde el extranjero, en particular desde Estados Unidos. Inglaterra, que antes de la guerra había sido el mayor proveedor de capitales, vio así cómo la posición de privilegio que hasta entonces había mantenido se erosionaba gradualmente. En 1929 la cifra total de las inversiones norteamericanas en los países de América Latina era todavía casi igual a la británica, pero en los sectores tecnológicamente más avanzados y en particular en la industria petrolífera la relación era claramente favorable a los Estados Unidos.

Por otra parte, se trataba de una prosperidad frágil, basada como estaba en la exportación de productos agrícolas y de materias primas y por tanto caracterizada por un alto grado de dependencia de la curva de la coyuntura y de los precios en el mercado internacional. Era suficiente con que se deterioraran para que la balanza comercial resultase dañada. Lo experimentaron los ganaderos argentinos y uruguayos cuando, en la inmediata posguerra, el mercado europeo dejó temporalmente de absorber sus exportaciones, y los propietarios de minas chilenos, que vieron reducirse cada vez más sus beneficios a causa del recurso sistemático por parte de los países europeos al nitrato artificial, cuya producción había emprendido Alemania durante la guerra.

Al margen de estas oscilaciones coyunturales, los años 20 fueron para América Latina no sólo años de relativa prosperidad económica, sino también de relativa estabilidad política. En algunos países del subcontinente la estabilidad fue asegurada por formas e instrumentos tradicionales. Éstos podían ser los de la dictadura militar, abierta o encubierta, como en la Venezuela del general Juan Vicente Gómez o en otros países del Caribe, o los del caudillismo más o menos populista, como es el caso del Perú de Augusto B. Leguia y de su movimiento «Patria nueva», o finalmente podían ser los mecanismos experimentados con los que las oligarquías tradicionales solían ejercer su control sobre la vida pública a espaldas de instituciones democráticas más o menos aparentes; es el caso de Brasil, Bolivia y Colombia. En Argentina, la victoria de la Unión Radical en las elecciones de 1916 marcó el principio de un período de normalidad constitucional dominado por la figura de Hipólito Irigoyen, mientras que en el vecino Uruguay el Partido Colorado, renovado a principios de siglo por José Battle y Ordóñez, continuó asegurando el equilibrio político del país. Más tormentosa –ya tendremos ocasión de volver sobre ello– la trayectoria política de Chile, aunque aquí también nos topamos con una figura preeminente, la de Arturo Alessandri, líder de la Unión Liberal ganadora de las elecciones presidenciales de 1920. Reelegido en 1924 y posteriormente alejado del poder y obligado al exilio por una junta militar, en 1925 volvió triunfalmente para volver a asumir los poderes de presidente y convocar una asamblea constituyente.

Una década de relativa estabilidad política constituía un lapso de tiempo suficiente y representaba una ocasión difícilmente repetible para emprender y desarrollar una política de modernización del sistema y de reformas sociales. Si se observa desde este punto de vista, el escenario político suramericano aparece muy variado y rico en contrastes. En algunos países no se registra ningún progreso en esa dirección, en particular los de América central y del Caribe, donde a una economía basada en el cultivo único correspondían regímenes políticos autoritarios y personalistas. Pero en otros el proceso de reforma es bien visible, aunque su ritmo es más o menos rápido y sus realizaciones más o menos importantes.

El lugar de honor pertenece a México. La constitución de 1917, surgida de la revolución, representó un marco de referencia en el que, bajo las presidencias de Obregón (1920-24) y Calles (1924-28), los persistentes contrastes sociales pudieron encontrar su composición. Dicha constitución preveía, en efecto, la separación del Estado y de la Iglesia, un objetivo histórico de los movimientos liberales y progresistas mexicanos, y la introducción de medidas de legislación social que incluían la jornada laboral de ocho horas, la institución del salario mínimo garantizado y el reconocimiento de la personalidad jurídica de los sindicatos. Finalmente, en aplicación de un artículo *ad hoc* de la constitución que sancionaba la propiedad pública del suelo y del subsuelo, los campesinos, que habían sido liberados de la servidumbre del peonaje, conservaron las tierras de las que se habían adueñado durante la revolución y obtuvieron nuevas asignaciones. Pero el artículo en cuestión no se aplicó cuando, en 1927, se trató de decidir sobre la propiedad de los yacimientos petrolíferos. En esta circunstancia los intereses de las grandes compañías norteamericanas y de sus asociados mexicanos acabaron prevaleciendo.

En Argentina y Uruguay la introducción del sufragio universal masculino, en 1912 y 1917 respectivamente, y el consiguiente ascenso al poder de los partidos políticos representativos de las clases urbanas y emergentes, hizo posible una dialéctica política que ya no se limitaba a los contrastes de intereses y a los personalismos internos de las oligarquías tradicionales e imprimió un mayor dinamismo a la vida política. En ambos países, así, se introdujo la jornada laboral de ocho horas, se reconoció el derecho de huelga y se promovieron una serie de medidas dirigidas a introducir un sistema de prevención y de asistencia. Se abrían así espacios, por limitados que fuesen, para el ascenso de nuevos sujetos políticos y en particular para el joven movimiento obrero. El Partido Socialista Argentino, fundado en 1896, reunió, bajo la guía de J. B. Justo, un líder dotado de una fuerte personalidad, un apoyo electoral no despreciable, aunque circunscrito a las áreas urbanas, y lo mismo sucedió en Uruguay, bajo la dirección de un inmigrante italiano, Emilio Frugoni. Pero los partidos de izquierdas carecían del so-

porte de una fuerte organización sindical. Hasta 1929, cuando, tras varios intentos fallidos, se constituyó la Confederación General de Trabajadores (CGT), el movimiento sindical argentino continuó dividido entre dos organizaciones rivales, la Fora, de tendencia anarquista, y la UGT, socialista. A falta de un arraigo real, el movimiento no fue capaz de controlar la oleada de huelgas que, también en Argentina, caracterizó a la primera posguerra. El ejemplo más conocido es el de la «semana trágica» de Buenos Aires, en 1919, un intento de insurrección reprimido de forma sangrienta. Pero desde luego no fue el único.

En cambio, demostró mayor efectividad el movimiento estudiantil, que se inició en Argentina y se extendió posteriormente a otros países. Los estudiantes reclamaban una reforma de la universidad, dominada por los hombres y los modelos culturales de la oligarquía, y en varios casos lograron alcanzar una parte de sus objetivos. Por otra parte, su movimiento contenía evidentes implicaciones políticas y, como tal, tuvo una función de suplencia y de estímulo en el sentido de una política de reformas.

Un papel análogo de suplencia desempeñaron en otros países los militares o, más exactamente, aquellos sectores y cuadros de las fuerzas armadas que mal toleraban el autoritarismo de las altas jerarquías y de la oligarquía. Fueron ellos los que en Chile hicieron volver al poder a Alessandri, haciendo posible así, como se ha visto, la promulgación de una constitución avanzada basada en el modelo mexicano; y también fueron ellos los que, tras la dimisión de Alessandri, asumieron, en 1927, los amplios poderes que la constitución de 1925 concentraba en la figura del presidente y continuaron su actividad reformadora.

Entre los estados de América Latina, Brasil, con sus veintiocho millones de habitantes, era el más poblado, pero también era uno de los más atrasados por lo que respecta a la estructura política. El derecho de voto, del que quedaban excluidos los analfabetos, estaba extremadamente limitado y en las elecciones que se celebraron entre 1920 y 1930 sólo el 2,7 % de la población lo ejerció efectivamente. No existía un partido político representativo de las clases medias urbanas, como el Radical en Argentina, el Colorado en Uruguay o el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) en Perú. Hasta 1916 no existió en Brasil ningún Partido Socialista y sólo en 1929 se llegó a constituir una organización sindical unitaria. El recambio del personal político se daba, pues, exclusivamente dentro de la oligarquía dominada por los productores y los exportadores de café y en el ámbito de la constitución de 1889, que limitaba sustancialmente los poderes de la autoridad federal a favor de los de cada estado. Como en Chile, también en Brasil el empuje hacia la renovación llegó de los cuadros inferiores del ejército, pero, a diferencia de Chile, sucumbió. Los intentos de insurrección, promovidos en 1922 y 1924 por los «tenientes», acabaron en un fracaso. Uno de sus pro-

motores –el oficial del cuerpo de ingenieros Luis Carlos Prestes, que llegará a ser el líder del comunismo brasileño– formó una columna y a su cabeza marchó durante varios años a través del *sertao*, hasta que, en 1927, fue obligado a refugiarse en Bolivia.

Los avatares de la columna de Prestes constituyen sin duda una de las páginas más fascinantes de la historia de los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Pero también son la imagen y el testimonio de las dificultades y de los límites que estos movimientos encontraron a la hora de intentar salir de las grandes aglomeraciones urbanas donde habían nacido, y ahondar sus raíces entre las masas campesinas, interpretando sus aspiraciones en formas que no fuesen las tradicionales de la protesta aislada, como lo había sido la insurrección de los *braceros* de Patagonia en 1921, o de la guerrilla campesina colindante con el fenómeno endémico del bandolerismo, como la que otro «teniente», Sandino, conducía en Nicaragua contra la oligarquía local apoyada por los ocupantes norteamericanos.

El único intento de superar esta limitación histórica se debe al trabajo de dos intelectuales peruanos, Víctor Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui. El programa de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), que Haya de la Torre fundó en México en 1924, presentaba consistentes elementos de novedad respecto de aquellos de los partidos socialistas y comunistas que actuaban en el continente. Igual que estos últimos, el APRA también contraponía al panamericanismo de la Unión Panamericana, controlada por Estados Unidos y trámite de su influencia en el continente, una propia y nueva concepción panamericana. Partiendo de este presupuesto la organización reivindicaba, entre otras cosas, la internacionalización del canal de Panamá. Pero no se trataba de realizar sólo la unidad política auspiciada por Bolívar, sino también, y sobre todo, de una unidad entre las etnias y de dar voz común a todos los pueblos y las etnias –blancos, negros, mestizos, indios– que vivían sobre el suelo de América Latina o, mejor dicho –según la expresión de Haya de la Torre–, de Amerindia. Con este fin y a diferencia de los partidos de izquierdas que actuaban en América Latina, el APRA propugnaba la formación de un vasto frente revolucionario del que formaran parte no sólo los obreros, sino también los campesinos y la clase media. Ello no sería posible sino sobre la base de un programa de renovación social radical. Por lo tanto, Haya de la Torre se pronunciaba sin reservas por la nacionalización de las tierras y de las industrias.

José Carlos Mariátegui, quien, cuando Haya de la Torre fue obligado a abandonar la dirección de la Universidad Popular de Lima se convirtió en su sucesor, estaba de acuerdo con el programa aprista y se reconocía en él. Pero del viaje que había realizado por Europa y de la estancia en Italia, donde había sido testigo de las luchas políticas y sociales de la posguerra y del ascenso del fascismo, volvió con la convicción de que «no hay salvación para

Indoamérica sin la ciencia y el pensamiento occidental» y, en particular, sin aquel marxismo a cuya defensa había dedicado uno de sus escritos. Así, se fue gradualmente alejando de la que él consideraba una ideología demasiado interclasista y en 1928 fundó un Partido Socialista que después de su muerte (1930) se transformó en Partido Comunista. Por el momento, sin embargo, ni las ideas de Haya de la Torre ni las de Mariátegui encontraban eco fuera de restringidos círculos intelectuales. Los propios comunistas, que en 1929 se reunieron en Montevideo para su primer congreso continental, rechazaron las tesis sobre la cuestión agraria presentadas por Mariátegui y tampoco ahorraron críticas a Sandino. En todos sus componentes, el movimiento obrero y socialista suramericano, muchos de cuyos dirigentes eran inmigrantes europeos, seguía vinculado a la imitación de los modelos europeos, ya fuese el socialista de la Segunda Internacional o el marxista-leninista de la Tercera Internacional. El vacío que dejaban será llenado en el curso de los años treinta, como veremos, por los varios movimientos «populistas» que, en formas distintas, tomarán cuerpo y avanzarán en muchos países de América Latina.

Segunda parte

De la gran depresión a la segunda guerra mundial

11

La gran depresión

11.1. LOS ORÍGENES

El desplome de la bolsa de Wall Street, iniciado el 23 de octubre de 1929 y que continuó en los días y las semanas siguientes, se considera generalmente como la señal del principio de la gran depresión que, con tiempos distintos y distinta intensidad, afectó a todos los países de planeta, en el centro así como en la periferia. Los datos relativos a la producción industrial, a las inversiones y al desempleo indican claramente que no hubo ningún país industrializado que no se encontrase afectado, tarde o temprano, por la tormenta desencadenada en Wall Street. Entre los grandes países industrializados los más dañados fueron Estados Unidos y Alemania, donde tanto la producción como las inversiones resultaron en 1932 reducidos casi a la mitad respecto a 1929. Más contenidas, aunque igualmente relevantes, fueron las caídas que se registraron en Inglaterra, Francia, Italia y Japón.

El único índice que, con la excepción en absoluto irrelevante de Alemania, muestra una tendencia positiva es el de los salarios reales, pero cabe tener en cuenta el hecho de que esta estabilidad representa, de alguna manera, la otra cara del fenómeno de la caída de los precios y del aumento del desempleo. Por ese carácter sistemático y por los trastornos que generó, la «gran depresión» queda como un hecho único en la historia contemporánea; de ahí que siga siendo objeto de un apasionado y controvertido debate historiográfico.

Es prácticamente obligado hacer referencia, a este propósito, al debate televisivo que en 1969 opuso a dos premios Nobel de Economía, Milton Friedman y Paul Samuelson. A juicio del primero, los orígenes y las razones de la crisis eran especialmente norteamericanos y se encontraban en los errores de las autoridades monetarias y políticas de los Estados Unidos; para

Samuelson, en cambio, los orígenes de la crisis había que buscarlos, además de en los Estados Unidos, en Europa y no se podían reducir a una sola causa, sino que había que atribuirlos a una pluralidad de factores. Si –como han hecho los más autorizados historiadores de la economía– se asume esta segunda hipótesis como base para la reconstrucción del desarrollo y de las fases de la «gran depresión», parece evidente que el análisis no puede limitarse al período de la crisis y que, además de extenderse en el espacio, tiene que remontarse en el tiempo.

La reconstrucción llevada a cabo en la primera parte debería haber proporcionado al lector más de un elemento útil para la comprensión de los orígenes de la depresión. Sin embargo, considero oportuno, dada la inevitable dispersión que una exposición general conlleva, volver a recorrer el camino hecho, añadiendo alguna conexión y centrándome en aquellos elementos y aquellos acontecimientos que en mayor medida concurrieron al resultado final.

Arranquemos con la conferencia de Génova de 1922, que representó el primer intento de emprender la reconstitución de un orden económico internacional tras los desajustes provocados por la guerra. Como se ha visto, sus resultados fueron decepcionantes y difícilmente podían ser de otra manera, a causa de la ausencia de Estados Unidos. Éstos se limitaron sustancialmente a sugerir que se adoptara una variante más flexible y suave que el *gold standard* prebélico, el *gold exchange standard*, con el cual la cobertura de las varias monedas nacionales quedaba garantizada, además de por el oro, también por una moneda fuerte, como lo era el dólar y como lo será la libra a partir de 1925. La sugerencia quería ser un primer paso hacia la restauración de los mecanismos y de los automatismos de un mercado amparado por el *gold standard*, pero, para que este deseo se realizara hubiera sido necesario que las medidas adoptadas en tiempo de guerra para proteger a las economías nacionales fuesen gradualmente desmanteladas. Sin embargo, ya hemos constatado que en este camino se interpusieron serios obstáculos y fuertes resistencias.

En primer lugar estaba la cuestión de los derechos aduaneros y de las tarifas de protección. Las más elevadas eran las de Estados Unidos, que con la ley de Ford McCumber (véase cap. 11) habían subido hasta el 38 % del valor de las mercancías importadas. También los derechos ingleses, establecidos por las tarifas de McKenna y por el *Import Duties Act* de 1921, eran elevados –cerca del 33 %–, pero se limitaban a algunos productos más sensibles. Los derechos franceses han sido calculados alrededor del 12-13 %, mientras que en Italia la tasa de protección resultaba del 27,8 %. La lista podría seguir: con excepción de Alemania, a la que el tratado de Versalles imponía la concesión de la cláusula de nación favorita a todos los países vencedores, los demás países recurrieron a instrumentos análogos. Especialmente elevadas fueron las tarifas proteccionistas de los *dominions* de la Commonwealth y de los países latinoamericanos. Las resoluciones de las varias conferencias, que recomendaban

la bajada de las tarifas, quedaron en papel mojado y fue sólo en 1927, en la conferencia de Ginebra, cuando se aprobó una tregua de las tarifas. Pero se trató de un acuerdo de principio, puesto que varios países se reservaron el derecho a hacerla operativa. De hecho, como veremos, no sólo la tregua fue ampliamente ignorada, sino también discutida. Todas estas limitaciones actuaban como un freno al desarrollo del comercio internacional; en 1928, en vísperas de la crisis, su volumen total había subido sólo un 13 % respecto del nivel prebélico, muy por debajo del incremento de la producción, que estaba en el 41 %.

Además de los derechos y de las tarifas, existían otras herramientas que, con un régimen de *gold exchange standard*, podían asegurar la protección de las varias monedas y economías nacionales. Se podía, por ejemplo, maniobrar con los cambios a fin de favorecer las exportaciones o elevar o bajar los tipos de interés, según se quisiera alentar o desanimar la afluencia de aquella masa de capital fresco que se desplazaba de una plaza a otra en busca del empleo más rentable. Desde luego cada una de estas medidas tenía contrapartidas negativas y un precio en términos de inflación o deflación interna y ello explica por qué cada país adoptó políticas distintas según la coyuntura. Para más complicación, en fin, quedaba abierta la cuestión de las deudas entre los aliados y de las reparaciones alemanas.

En este contexto tan inestable y en esta mezcla de posturas en contraste, la vuelta al *gold standard*, en lugar de representar una solución y una normalización, amenazaba con introducir nuevos elementos de complicación y crispación y así sucedió cuando, en abril de 1925, Inglaterra decidió volver al patrón oro (véase cap. 13) sobre la base de la paridad anterior a la guerra. Ya hemos podido observar cómo en el plano interno los efectos de esta decisión resultaron contradictorios. En el plano internacional, el juicio de autorizados especialistas es que se trató de un «error irreparable» (Kindleberger, 1985, p. 34), ya que la decisión se basaba en una sobrevaloración del valor de la libra y con ello provocaba una serie de tensiones monetarias entre los mayores países europeos. La estabilización del franco francés en un nivel inferior al prebélico en un 80 % –prácticamente una devaluación– y la política de «cuota noventa» perseguida por Mussolini, se colocan ambas en este contexto de tensiones monetarias. Se determinaba así una situación de inestabilidad y de nerviosismo y parecía evidente que la vuelta de Inglaterra al patrón oro creaba más problemas que los que resolviera y que la City había dejado de tener ese papel de regulación y concertación que había tenido antes de la guerra.

Si existía un estado en condiciones de suceder a Inglaterra en este papel, éste era con seguridad el de los prósperos Estados Unidos de América. Los instrumentos con los que éstos hubieran podido concurrir al saneamiento de las relaciones económicas y financieras internacionales eran varios; desde la bajada de las tarifas arancelarias, que facilitaría la exportación de productos europeos al mercado norteamericano, a la de los tipos de interés, que

favorecería el flujo del oro y de los capitales de los que Estados Unidos era el mayor posesor, a la reducción, en fin, de las deudas de guerra de los aliados. Pero, como se ha visto, no eran éstas las orientaciones de las administraciones republicanas y del mundo financiero. La forma de intervención que ellos preferían para sostener la economía europea e internacional fue más bien la de los préstamos, cuya principal beneficiaria fue Alemania.

En los años y en los meses que precedieron al desplome de Wall Street estas líneas de tendencia no experimentaron cambios sustanciales y las decisiones que iban tomando las autoridades políticas y monetarias norteamericanas seguían inspiradas en gran medida por el criterio del interés nacional más que por la responsabilidad internacional.

La idea de facilitar las importaciones a Estados Unidos mediante una bajada de las tarifas no se tomó en consideración, a pesar de que fue avanzada por muchos, e incluso en la campaña electoral de 1928 se comenzó a barajar la hipótesis de encarecerlas todavía más. Como veremos, no pasaría mucho tiempo para que esta idea se hiciera realidad. También las medidas sobre los tipos de interés se pusieron en marcha con vistas sobre todo a la situación coyuntural interna. Los tipos fueron reducidos del 4 al 3,5 % en julio de 1927 con el fin de ejercer una acción de estímulo para las inversiones en acciones y contribuir así a superar los síntomas de recesión que se estaban manifestando en varios sectores de la economía norteamericana. Por contra, el tipo de descuento fue elevado, en agosto de 1928, hasta el 6 %, cuando comenzaron a perfilarse los riesgos que derivaban de la euforia de la bolsa. Si en el primer caso la decisión norteamericana se avenía a las peticiones de los estados europeos, frenando la llegada de capitales a Estados Unidos, no se puede decir lo mismo de la decisión de agosto de 1928, que obligó a los países europeos, y en primer lugar a Inglaterra, a elevar ellos también sus tipos para evitar una nueva inmigración de capitales hacia Nueva York. En cuanto a las deudas de guerra, la posición de principio de Estados Unidos seguía siendo, como se ha visto, la de exigir su pago, salvo en el caso de llegar a transacciones bilaterales con cada uno de los países deudores. Análogamente, los norteamericanos siguieron rechazando durante mucho tiempo la conexión entre el problema de las deudas y el de las reparaciones alemanas y sólo después del plan de Dawes se hizo posible la activación de un circuito por el que los préstamos norteamericanos a Alemania permitieran a ésta hacer frente a sus obligaciones de reparación. Pero cuando la situación alemana dio las primeras muestras de deterioro, a partir del tercer trimestre de 1928, el flujo de préstamos hacia Alemania y otros países europeos fue disminuyendo: de los 629 millones de dólares de 1925 se pasó a los 142 de 1929. La puesta a punto del plan de Young quedó lejos de tener el efecto de arrastre que en su tiempo había logrado el plan de Dawes. Los capitales que anteriormente habían sido empleados en préstamos al extran-

jero volvieron a casa y se dirigieron hacia la inversión accionaria, desatando el proceso especulativo que terminaría dramáticamente en octubre de 1929.

Ahora, tras esta somera reconstrucción de los orígenes de la gran depresión y antes de empezar a profundizar en el análisis de los desarrollos posteriores, será oportuno intentar recapitular. Si queremos compendiar los elementos señalados hasta ahora, podemos decir que, en los orígenes de la gran depresión estuvo el fracaso en la realización, por mucho que se intentara, de una auténtica cooperación internacional, tanto en lo económico-financiero como en lo político. No se trató, pues, de la crisis de un sistema –el capitalista– desgarrado por contradicciones internas insalvables, ni de la infracción de reglas que, en caso de ser respetadas, hubieran permitido que el sistema siguiera funcionando regularmente. Ni la lógica de la superficie inclinada ni la de la piedra en el engranaje valen para comprender las razones de la depresión. Diría, más bien, que si con el término «sistema» no nos limitamos a tomar nota de la existencia de una interdependencia, por lo demás descontada, sino que designamos una cooperación económica y política que, como tal, supone la presencia y el despliegue de un liderazgo, entonces tal «sistema» ni siquiera existió y los intentos para construirlo no tuvieron éxito. Semejante cooperación y semejante liderazgo no se realizaron en los años que precedieron a la crisis, ni, como veremos, se realizaron en el transcurso de ella. La búsqueda de un nuevo orden internacional avanzaba, si avanzaba, a ciegas. La crisis del 29 fue el punto de llegada de esta navegación a tientas. Esto significa que no se trató sólo de una crisis económica, sino también política. Como ha observado Charles P. Kindleberger, «parte de las causas de la duración, y el grueso de la explicación de la profundidad de la depresión mundial, radicó en la incapacidad de los británicos para continuar en su papel asegurador del sistema y en la mala disposición de Estados Unidos para desempeñar el mismo hasta 1936» (Kindleberger, 1985, p. 32).

Si este planteamiento es, como creo, correcto, es evidente que la «explicación» –si se puede aplicar este término a una disciplina eminentemente empírica como es la historia– no cabe buscarla en supuestas leyes sociológicas y tampoco limitarla al ámbito especializado de la historia económica. No existe otra «explicación» que la que ofrezca una reconstrucción que tenga en cuenta la compleja mezcla de fenómenos económicos y acontecimientos políticos a nivel internacional. En las páginas que siguen trataremos de ceñirnos a esos criterios.

II.2. LA CRISIS EN EL CENTRO

Antes del desplome de Wall Street no habían faltado señales premonitorias. Como se ha visto, síntomas de recesión productiva se habían manifestado

en Estados Unidos ya en 1927. La producción automovilística, sector pujante de la economía del país, había experimentado una contracción del 22 %, aunque en parte eso se debía a la decisión de Henry Ford de interrumpir la producción del modelo T. Pero señales de cansancio se registraron también en el sector de la construcción y el índice de conjunto de la producción había caído por debajo de la media de los años 1923-1925. Pese a todo, gracias también a la citada bajada de los tipos de interés, la coyuntura desfavorable había sido superada. Análogamente, las sensibles pérdidas que repetidamente, en diciembre de 1928 y marzo de 1929, se registraron en la bolsa, habían sido recuperadas. Al término de su mandato, el presidente Coolidge había dejado un país próspero como nunca.

La caída de 1929 fue tan imprevista como drástica. Como se ha visto, al cabo de pocas semanas las acciones perdieron la mitad de su valor. Muchos creían que la crisis de una bolsa notoriamente hinchada por la especulación no podría repercutir en el sector de la producción, pero no fue así. Las pérdidas sufridas por millones de ahorradores no podían por menos de influir negativamente en el nivel del consumo y de los contratos de venta a plazos y ello, a su vez, repercutía en las empresas que, al necesitar liquidez, se vieron obligadas a reducir sus gastos y la propia producción. La caída de la industria automovilística fue espectacular; desde los 440.000 coches de agosto a los 92.500 de diciembre. Pero también en otros sectores productivos los efectos de la crisis no tardaron en dejarse sentir. Todos los principales índices, como se ha visto, comenzaron a bajar, salvo el del desempleo que a finales de 1929 ya había superado el millón y medio de personas, para seguir subiendo con velocidad de vértigo, hasta alcanzar los doce millones en 1932. La respuesta de la nueva administración de Hoover consistió en una serie de medidas dirigidas a detener el proceso de deflación en acto mediante una política de abaratamiento del dinero y ayudas. Entre noviembre de 1929 y junio de 1930 el tipo de interés bajó repetidas veces hasta quedarse en un 2,5 %. Por otra parte, se incentivó a las empresas para que mantuviesen e incrementasen sus niveles de producción mediante desgravaciones fiscales y con la condición de que se comprometieran a no efectuar despidos o recortes de los salarios. De hecho, en 1930 sólo el 7 % de ellas recurrió a recortes salariales.

Estas medidas, que algunos historiadores de la economía han calificado como de tipo keynesiano, surtieron algún efecto y en los primeros meses de 1930 la situación parecía estabilizarse. En mayo, el presidente Hoover podía asegurar que «todas las pruebas demuestran que los efectos peores del desplome sobre el desempleo desaparecerán en el plazo de sesenta días». Pero el problema no era sólo detener la crisis y la deflación interna, sino también evitar que eventuales acciones unilaterales emprendidas por la administración en tutela de los intereses nacionales pudieran introducir más elementos de turbación en la coyuntura internacional.

No iba ciertamente en esta dirección la decisión de la Cámara de representantes de aprobar en febrero de 1929 el proyecto de ley de Smoot-Hawley, que preveía otro aumento de las tarifas de protección de las importaciones. Esta medida, tomada antes de que la crisis se manifestara, había recibido múltiples críticas no sólo en el extranjero, sino también en los propios Estados Unidos por parte de prestigiosos economistas. Ahora que la crisis estaba en plena vigencia, parecía todavía más inoportuna, pero ello no impidió que el Senado la aprobara a su vez en junio de 1930, anulando así las nuevas tarifas. Su entrada en vigor provocó una ráfaga de críticas y represalias por parte de numerosos países y ello contribuyó a acentuar la bajada del volumen de los intercambios comerciales que ya se había perfilado tras el desplome de Wall Street y agravó la coyuntura internacional.

El país que más se resintió de ello fue Alemania, donde las consistentes señales de recesión que se habían manifestado en el curso de 1928 fueron agudizándose durante 1929. A finales de este año los parados llegaban ya a un millón novecientos mil. Fue a esta difícil situación a la que, tras la dimisión del gobierno de Müller, tuvo que enfrentarse el nuevo gobierno presidido por Heinrich Brüning, presidente del grupo parlamentario del *Zentrum*. Su mayoría era muy restringida, habiendo los socialdemócratas pasado a la oposición, pero en cambio gozaba, a diferencia de los precedentes gobiernos, de la confianza y del apoyo del presidente Hindenburg y de los militares. El de Brüning era, en suma, un «gobierno presidencial» y la prueba de ello fue cuando, en julio de 1930, tuvo que recurrir a los poderes extraordinarios previstos en el artículo 48 para superar las resistencias del *Reichstag* a aprobar las medidas de rigor fiscal y de recorte del gasto público propuestas en el marco de una política de defensa de la moneda nacional y de deflación. Como el *Reichstag* se había pronunciado en favor de la revocación de la relativa orden presidencial, Brüning no dudó en disolverlo y convocar nuevas elecciones.

Éstas se celebraron en septiembre y dieron un resultado inesperado, pero que reflejaba el clima de radicalización exasperada que existía en el país. En efecto, de las urnas salieron reforzados los comunistas y triunfadores los nacionalsocialistas de Adolf Hitler, que obtuvieron 107 escaños frente a los 12 anteriores y se convirtieron así en el segundo partido, por detrás de los socialdemócratas con sus 143 escaños. La impresión suscitada por este auténtico terremoto electoral fue enorme y contribuyó a difundir los temores de la insolvencia alemana y a hacer volver hacia sus lugares de origen los capitales invertidos en Alemania. Por consiguiente, la coyuntura sufrió un deterioro aún mayor y el número de desempleados subió vertiginosamente hasta alcanzar los cuatro millones en el verano de 1931. Todo, pues, se hacía más difícil para Brüning. Un punto a su favor era el representado por la postura de «tolerancia» del SPD, traumatizado por el resultado de las elec-

ciones y por la amenaza inminente de nuevas elecciones y convencido por el primer ministro prusiano, Otto Braun, a no enzarzarse en una oposición estéril. Pero la drástica reducción de los salarios que el presidente llevó a cabo en junio de 1931 encontró la oposición de los sindicatos, mientras que la derecha, que había salido reforzada de las elecciones, retomaba sus agitaciones contra las reparaciones. Para parar los golpes que le llegaban desde este lado, Brüning entabló negociaciones secretas con Austria para realizar una unión aduanera entre los dos países que, de concretarse, aseguraría un mercado más amplio a los productos de la industria alemana. El anuncio del acuerdo suscitó resentimiento y preocupación en el extranjero e indignación en Francia. Ésta se apresuró a retirar sus créditos del principal banco austríaco, el *Credit-Anstalt* de Viena, que en mayo de 1931 se vio obligado a declarar la bancarrota. Fue la señal del inicio de una reacción en cadena; en junio Brüning declaró públicamente que Alemania no estaba en condiciones de seguir pagando las reparaciones y su anuncio fue seguido por una nueva fuga de capitales. Pocos días después los principales bancos alemanes cerraban sus puertas y el marco, pese a los intentos de salvarlo *in extremis*, dejaba de ser cotizado en los mercados mundiales. Fue entonces cuando el presidente Hoover intervino, proponiendo una moratoria de todas las deudas entre gobiernos, propuesta que, si fue recogida por Inglaterra y, obviamente, Alemania, suscitó vivaces oposiciones por parte francesa. Al final, Francia también tuvo que poner buena cara a la mala suerte. En junio de 1932, una conferencia internacional convocada en Lausana tomó nota de la insolvencia de Alemania, que a su vez se comprometió a renunciar a la unión aduanera con Austria. La cuestión de las deudas de guerra y de las reparaciones, que durante años había enturbiado las relaciones internacionales, quedaba, así, resuelta o, mejor dicho, eliminada. Pero, mientras tanto, la crisis se había agudizado y había alcanzado un punto sin retorno.

Después de Alemania le tocó a Inglaterra, donde tras las elecciones de junio de 1929, en las que por vez primera votaron las mujeres de edad inferior a los treinta años, había tomado posesión un gobierno laborista encabezado por MacDonald, quien volvía así al poder después de su breve experiencia en 1924. Un nuevo gobierno laborista no podía eximirse de hacer un gesto de reparación para con los mineros derrotados y humillados en 1926 y el gobierno de MacDonald no dejó de hacerlo, haciendo aprobar en 1930 un *Coal Mines Act*, que preveía entre otras cosas la reducción de la jornada laboral de ocho a siete horas y media. También se relanzaron los planes de construcción de viviendas populares emprendidos desde la primera posguerra, pero esta y otras iniciativas reformadoras sufrieron un brusco frenazo a raíz del estallido de la crisis; aunque, en verdad, su impacto fue menos traumático que en los Estados Unidos o en Alemania. Inglaterra no había conocido, en el curso de los años veinte, una expansión análoga a la de Estados Unidos y de

otros países y continuaba siendo el país europeo con el índice de crecimiento más bajo y el de desempleo más alto. En consecuencia, los efectos del cambio de coyuntura resultaron más suaves e incluso el poder adquisitivo de los trabajadores en activo resultó mayor a consecuencia de la disminución de los precios de los productos importados. Más que una crisis económica, la que se abatió sobre Inglaterra en el curso de 1931 fue una crisis financiera, causada por un lado por los desequilibrios de balance y por otro por las repercusiones negativas que tuvieron en la City las perturbaciones financieras de Europa central y la retirada de los depósitos por parte de los inversores extranjeros. El prestigio del que había gozado la libra antes de la guerra se iba poco a poco disolviendo, aunque el libre mercado y el *gold standard* seguían siendo para muchos un punto de referencia, casi un artículo de fe. Pero eran cada vez más numerosos los que se interrogaban acerca de la oportunidad de seguir supeditando el desarrollo del país a la perspectiva de restablecimiento de una incierta cooperación internacional y, menos aún, al espejismo de una imposible cooperación política. Los remedios y las recetas sugeridos eran varios: algunos, como la mayoría de los conservadores, retomaban la propuesta avanzada por Baldwin en 1923 (véase cap. 3) para la adopción de una política económica proteccionista combinada con un sistema de tarifas preferentes para los países de la Commonwealth; otros, como Bevin y otros representantes sindicales, se inclinaban por una devaluación de la libra que permitiría alentar las exportaciones; otros, en fin, como el viejo Lloyd George, pedían una política de incentivos económicos y de incremento del gasto público. Keynes, cuyo *Treatise on Money* vio la luz en 1930, aún no había elaborado el corpus de ideas que expondrá en *Teoría general del empleo, el interés y el dinero* de 1936, pero muchas de las ideas que ahora se definen usualmente como keynesianas ya circulaban. Por otra parte, la experiencia soviética comenzaba a ejercer cierta fascinación y el término «planificación» aparecía cada vez con mayor frecuencia en los escritos y en el debate político. Entre los que se referían a él con más insistencia se encontraban exponentes intelectuales y políticos como John Strachey, autor de un libro –*The Coming Struggle for Power*– en el que la crisis actual era concebida como la salida inevitable de la economía capitalista, y Osvald Mosley, él también un laborista de izquierdas, quien en 1930 presentó al congreso laborista un audaz plan de reactivación económica que atribuía al estado amplios poderes de intervención y dirección. Sus propuestas fueron rechazadas con amplia mayoría y Mosley, en 1931, dejó el Partido Laborista para fundar un nuevo partido –la *British Unions of Fascists*–, que tuvo cierto séquito durante un tiempo y luego desapareció.

En este marco hay que situar los convulsos acontecimientos del verano de 1931, cuando la crisis se dejó sentir en Inglaterra. Las disensiones, dentro del gobierno y del propio Partido Laborista, entre los que, como el ministro de Hacienda Snowden, defendían la necesidad de una política de ri-

gurosa deflación, y los que, en cambio, se inclinaban por dar audiencia a las peticiones de los sindicatos por una política de expansión, llevaron, el 24 de agosto, a la caída del gabinete de MacDonald y a la formación de un gobierno de unidad nacional que incluía a los conservadores, presidido por el propio MacDonald. Su partido no le perdonó el haber «saltado al precipicio» y en septiembre a él y a todos los ministros que habían entrado a formar parte del gobierno de unidad nacional se les consideró excluidos del *Labour*. El nuevo gobierno, en el que Snowden había conservado el cargo de ministro de Hacienda, siguió en su línea de rigor e hizo aprobar un balance de emergencia que preveía, además de una agravación de la carga fiscal, una revisión del sistema de seguros contra el paro y un sensible recorte de los salarios, incluidos los de los militares. La cúspide de la tensión producida por estas medidas se alcanzó el 16 de septiembre, cuando los marineros de la base de Invergorden, en Escocia, se negaron a obedecer las órdenes en señal de protesta contra la reducción de sus pagas. El «amotinamiento» en la *Royal Navy* –así es como fue percibido por la opinión pública el episodio de Invergorden– contribuyó a acrecentar la turbación que existía en el país y en el extranjero. La libra se depreció más aún y el 19 de septiembre el Banco de Inglaterra comunicó que los créditos exteriores estaban agotados. A grandes males, grandes remedios: el 21 de septiembre el Parlamento decidía el abandono del *gold standard*.

Lo que para muchos contemporáneos fue un gesto de audacia o incluso de desesperación, se reveló a la larga como una decisión sabia y madura. El curso de la libra se fue estabilizando en un nivel de cerca del 30 % inferior al anterior. Naturalmente, era preciso proteger la nueva libra y a este fin el gobierno de unión nacional, animado por el gran apoyo obtenido en las elecciones de octubre de 1931, acordó la subida del tipo de descuento y un nuevo *Import Duties Act*, según el cual los derechos de entrada para la gran mayoría de las mercancías se elevaban en un 10 % de media. Posteriormente, en agosto de 1932, una conferencia de los países de la Commonwealth, con la participación de la India, convocada en Ottawa, estableció, tras laboriosas negociaciones, un sistema de «preferencias» con el que, mientras que Inglaterra se comprometía a no imponer derechos sobre los productos agrícolas de los *dominions*, éstos aumentaban sus tarifas para los productos industriales procedentes de países terceros, favoreciendo así las importaciones de manufacturados ingleses. Gracias a estos procedimientos, las exportaciones se reanimaron y fue posible bajar el tipo de interés, estimulando las inversiones. Ya a finales de 1932 la curva del desempleo, que había alcanzado la cifra de tres millones, manifestó las primeras señales de inversión de tendencia.

Esta combinación de medidas distintas, desde la keynesiana a la proteccionista, realizada en el signo de lo empírico, permitió a Inglaterra situarse en el camino de la superación de la crisis e imprimir un mayor dinamismo a

su economía. Pero esto significaba también que ella había sido el primer país en abandonar la búsqueda de una solución concertada de la crisis y que, al actuar de esta forma, introducía nuevos elementos de inestabilidad y de división en el escenario internacional. Tras su ejemplo, otros veinticinco países –además de los de la Commonwealth, exceptuando Suráfrica–, los escandinavos y numerosos estados de Europa oriental y de América Latina abandonaron la paridad oro, devaluando así su moneda. En cambio, se quedaban anclados en el oro Francia, Alemania, Italia y, de momento, Estados Unidos. Las tensiones monetarias ya existentes resultaron aumentadas y se registró una nueva contracción de los intercambios comerciales internacionales, cuyos efectos negativos se notaron, naturalmente, más en los países que no habían devaluado sus monedas, vale decir, los del bloque del oro y en particular Estados Unidos.

La crisis, que había nacido en Norteamérica y había pasado a Europa, volvía así a su lugar de origen. El año de 1932 fue uno de los más oscuros de la historia norteamericana. Entre marzo de 1931 y junio de 1932, la producción industrial bajó de un índice 87 (1929 = 100) a un índice 59, los contratos de construcción, de un índice 77 a uno 27 y las importaciones, de 205 millones de dólares a 112. En 1933 la situación empeoró aún y el paro llegó a afectar a un cuarto de la población activa, en cifras absolutas, trece millones de personas. Los bancos locales, que constituían la base del complejo sistema de créditos norteamericano, seguían quebrando a centenares. Las consecuencias de este recrudecimiento de la depresión en el plano social y humano fueron terribles. A diferencia de los mayores países europeos, Estados Unidos no disponía de un sistema nacional de ayudas a los parados. De su asistencia se hacían cargo esencialmente los estados y las comunidades y fue sólo en 1932 cuando, con dificultades, se aprobó un *Emergency Relief Act* con el que el gobierno federal se comprometía a complementar la asistencia local. Sin embargo, los fondos erogados eran insuficientes para el ritmo creciente de desempleo. En el país más rico del mundo, millones de ciudadanos sufrían así la amarga experiencia de la desnutrición, de la promiscuidad del chabolismo (las llamadas *hoovervilles*), del vagabundeo a lo largo de los ferrocarriles, de una vida de mera subsistencia. Entre mayo y julio de 1932, miles de veteranos de guerra que reivindicaban el pago por adelantado de las indemnizaciones que cobrarían en 1945, acamparon cerca del Congreso hasta que no fueron dispersados por las unidades encabezadas por un joven oficial, Dwight D. Eisenhower. Mientras tanto, el importe total de las hipotecas sobre las propiedades campesinas había alcanzado cifras astronómicas y en algunos estados el 85 % de las factorías estaban hipotecadas. La desconfianza generaba más desconfianza y la depresión –término que en su origen pertenecía más al vocabulario de la psicología que al de la economía– se alimentaba a sí misma. Mientras disminuía el índice de nata-

lidad (el de 1932 fue inferior en un 10% al de 1926), aumentaba el número de suicidios, que en 1932 fueron 133 por cada millón de habitantes.

Por su parte, la administración seguía haciendo frente a la situación mediante el recurso a medidas de carácter exclusivamente financiero. A este fin, se instituyó una agencia federal –la *Reconstruction Finance Corporation*– que en 1932 concedió préstamos por mil quinientos millones de dólares a bancos, empresas ferroviarias y compañías de seguros en apuros. Pero, una vez sometida a la prueba de fuego, la agencia se reveló de eficacia limitada. Para salir de la crisis ya no bastaban la astucia y ni siquiera medidas acertadas, sino que se necesitaba un cúmulo de energías humanas y morales y un líder que se hiciera intérprete de ello. Las elecciones de medio término, en noviembre de 1930, que aseguraban a los demócratas la mayoría en la Cámara de representantes, constituyeron la primera señal en este sentido. Como gobernador del estado de Nueva York fue reelegido Franklin Delano Roosevelt, quien dos años después sería presidente de los Estados Unidos de América.

También en Alemania el de 1932 fue un año terrible. En febrero el número de parados superó el techo de seis millones y se contaron nada menos que 260 suicidios por cada millón de habitantes. La conflictividad social se tornó en una guerrilla prácticamente diaria entre las formaciones de paramilitares que emanaban de los diversos partidos, la *Reichsbanner* republicana, las formaciones comunistas del *Rotfront* y, las más aguerridas de todas, las SA (*Sturmabteilungen*) nazis. Sólo en 1931 fueron trescientos los muertos en enfrentamientos callejeros. En semejante contexto, una radicalización de la lucha política todavía más acentuada era inevitable y la prueba se dio con ocasión de las elecciones para la presidencia de la república en marzo de 1932, en las que Hindenburg, aunque gozara del apoyo de los partidos de la coalición weimariana, socialdemócratas incluidos, no alcanzó la mayoría absoluta y Hitler obtuvo el 30% de los sufragios. Se precisó una segunda vuelta para que el viejo mariscal fuese reelegido. En mayo Brüning, cuyas relaciones con Hindenburg se habían ido enfriando, presentaba su dimisión. El fracaso de su intento de «gobierno presidencial» volvía a sumir a Alemania en su crónica inestabilidad. Más adelante veremos cómo salió de ella, si de salida se puede hablar.

Si Estados Unidos, Inglaterra y Alemania fueron los países más duramente azotados por la crisis, no fueron desde luego los únicos. El viento de la depresión sopló por doquier, incluso en los países que hasta entonces habían permanecido relativamente seguros. Es el caso, en primer lugar, de Francia, cuya estructura social, caracterizada por la difusión de la pequeña y mediana propiedad campesina y de la pequeña empresa, la hacía menos expuesta

a los riesgos procedentes de las fluctuaciones de la coyuntura y cuyos sectores productivos más dinámicos sacaron provecho de la devaluación del franco y del consiguiente incremento de las exportaciones. Durante un largo período, Francia había representado una isla de prosperidad en un mundo en crisis. El Banco de Francia había acumulado ingentes reservas de oro y los parados que recibían el subsidio estatal eran, todavía en 1930, unos pocos millares. Fue la devaluación de la libra la que asestó el primer golpe severo a la economía francesa: sus exportaciones cesaron, en efecto, de ser competitivas, con la consecuencia de que los índices de la producción comenzaron a bajar y los del desempleo a subir. En enero de 1934 ésta había alcanzado los 334.000 parados. Otro golpe llegó del resultado de la conferencia de Lausana que, como se ha visto, marcó el fin del espejismo de las reparaciones. Las medidas de protección que aseguraban la estabilidad del país comenzaron a tambalearse y la opinión pública lo percibía y manifestaba su inquietud. Las elecciones de junio de 1932 otorgaron la mayoría al reconstituido *Cartel des gauches* y auparon a la cabeza del gobierno a Eduard Herriot. Pero el malestar continuaba cundiendo en el país y, como veremos, no tardará en manifestarse en formas más llamativas y ásperas. Mientras que otros países ya vislumbraban el final del túnel de la depresión, Francia entraba en él.

Un país donde la gran depresión se dejó sentir de forma especialmente virulenta fue Bélgica. El Borinage, de donde el país extraía su principal recurso, el carbón, fue quizá, entre las áreas industriales de Europa, la que la crisis azotó de la manera más salvaje, tal y como testimonian las imágenes del documental de Joris Ivens. Pero Bélgica fue también el escenario de uno de los más interesantes intentos de política anticíclica. Me refiero al *Plan du travail* que el Partido Obrero Belga adoptó en su congreso de Navidad de 1933. Su inventor y redactor había sido Henry de Man, que en 1918, al término de una estancia en Estados Unidos, había publicado un libro titulado significativamente *Au pays du Taylorisme*, y que posteriormente había ido elaborando una propia revisión del socialismo y del marxismo, cuyo eje era la búsqueda de una «tercera vía» que permitiera la superación de la tradicional antítesis entre reformas y revolución. A partir de esas ideas el plan del trabajo se configuraba no ya como una lista de reivindicaciones, sino como un programa cabal para un gobierno de amplia coalición en el que se implicaran, además de los socialistas y los sindicatos, los partidos que gozaban de la confianza del mundo empresarial y de las clases medias, es decir, los liberales y los católicos. El plan preveía el abandono de la paridad oro, una política anticíclica que llevar a cabo a través de la reactivación de las exportaciones, la planificación de grandes obras públicas y una política salarial dirigida a hacer crecer la demanda. El gobierno de Van Zeeland, del que De Man entró a formar parte, intentó realizar este programa y a él se debe, entre otras cosas, la introducción del salario mínimo y de la semana de vaca-

ciones pagadas. Pero muy pronto su acción fue perdiendo brillo a raíz de los contrastes que se produjeron en el seno de la coalición y de las resistencias de una parte del movimiento sindical y del propio Partido Obrero, en el que la vieja guardia de Émile Vandervelde no ocultaba su escepticismo hacia las ideas y las iniciativas de De Man. Las elecciones de 1936, que vieron un importante retroceso del Partido Obrero, significaron el principio de la trayectoria menguante del «planismo» y del interés que había despertado fuera de Bélgica. El aislamiento en que se encontró Henry de Man le indujo a buscar a otros interlocutores, hasta llegar a dar crédito al corporativismo fascista y llegar finalmente al colaboracionismo. Su caso, por otra parte, no fue el único: una trayectoria análoga fue, como se ha visto, la del británico Mosley y la de los franceses Déat y Doriot.

En Italia la economía todavía no se había recuperado de las consecuencias de la congelación del crédito de la «cuota noventa» cuando apareció la crisis. Los primeros síntomas se manifestaron ya durante 1929, pero fue a partir de 1931 y de la bancarrota del *Credit Anstalt* cuando la situación fue a peor. Las repercusiones de la crisis fueron diversas para los varios sectores productivos, tanto agrícolas como industriales. Por lo que respecta a los primeros, si la producción de cereales, sostenida por la «batalla del trigo», se mantuvo en un nivel superior al de los años 1925-29, un grave descenso se registró, en cambio, en la ganadería y en la producción hortofrutícola. Por lo que respecta a la industria, mientras que la producción de energía eléctrica y de otros sectores resistió e incluso mejoró, el sector textil, siderúrgico y de la propia industria automovilística experimentaron una acentuada caída. En conjunto, la producción manufacturera sufrió una reducción de cerca del 20% entre 1930 y 1933 y el desempleo pasó de trescientas mil personas en 1929 a un millón trescientas mil en febrero de 1933. Entre las varias terapias contra la crisis que se adoptaron en los diversos estados, la italiana se caracterizó por la amplitud y el alcance de la intervención del estado, que se hizo cargo de muchas de las funciones que hasta entonces habían desempeñado algunos grandes bancos, como el *Credito italiano* y la *Banca commerciale*, que operaban según el modelo del «banco mixto». A través de la constitución del Instituto Inmobiliario Italiano (IMI), en noviembre de 1931, y la del Instituto para la Reconstrucción Industrial (IRI), en enero de 1933, el estado compró buena parte de las acciones que poseían los bancos y se hizo cargo de los gravámenes de las empresas en crisis mediante la emisión de títulos garantizados por él mismo, empeñándose en una vasta obra de racionalización y saneamiento. Se constituía así un organismo que controlaba enteros sectores productivos, desde los astilleros y las compañías de navegación a la siderurgia, y que detenía importantes cuotas de participación en otros sectores. Después de la URSS, Italia se convertía así en el país europeo con el más alto porcentaje de actividades productivas controladas por el estado.

Algunos quisieron ver en esto una nueva y original solución de los problemas planteados por la crisis, una suerte de «tercera vía» entre capitalismo liberal y planificación de tipo soviético y en este sentido algunos intelectuales relanzaron la idea del «corporativismo» contenida en la *Carta del lavoro* de 1927, encontrando cierta audiencia en algunos representantes del Partido Fascista. En particular, se avanzó la idea de una «corporación de los propietarios», como instrumento para realizar una «gradual fusión entre capital y trabajo» y un «autogobierno de los productores» en función de los intereses superiores de la comunidad nacional. Sin embargo, tales expectativas no resultaron satisfechas por la ley que en febrero de 1934 instituyó las corporaciones, y en la que se asignaban a las corporaciones sólo tareas limitadas y un papel predominantemente consultivo. A diferencia de lo que se constatará en otros países, la intervención del estado, con la excepción de las asignaciones presupuestarias para el «saneamiento integral» que se llevó a cabo en la llanura pontina (al sur de Roma) y para algunas discutibles intervenciones urbanísticas, no fue acompañado ni apoyado por medidas dirigidas a alentar las inversiones y expandir la demanda. Al contrario, las directrices de la política económica y financiera del fascismo continuaron siendo las que se habían estrenado con la elección de la «cuota noventa» y su filosofía de deflación, y los instrumentos que se adoptaron fueron los de altos tipos de interés, nuevas y más elevadas tarifas aduaneras y finalmente repetidos recortes salariales, compensados por el descenso de los precios y por la introducción, en octubre de 1934, de la semana laboral de cuarenta horas. Todo ello, en el marco de la «defensa de la lira», que siguió anclada en el oro hasta 1936. En semejante contexto, la intervención estatal se tradujo, en definitiva, en una «nacionalización de las pérdidas» a expensas de las clases menos protegidas. En efecto, los índices relativos al consumo de los que disponemos testimonian que, en comparación con otros países, su estructura se caracterizó por un alto porcentaje destinado a productos de primera necesidad, mientras que los bienes de consumo duraderos registraron escasos incrementos. Si la crisis no afectó a Italia con igual violencia que a otros países, ello se debió también a que la frugalidad de la población y el retraso del país funcionaron como amortiguadores.

La gran depresión no se quedó en Europa occidental. También los países de Europa oriental sintieron sus efectos devastadores, aunque con distinta intensidad. De hecho, si en cada uno el sector agrario tuvo que sufrir las consecuencias dramáticas de la caída de los precios en los mercados internacionales, el sector industrial resultó más afectado allí donde existían empresas que producían predominantemente para la exportación, mientras que donde éstas se limitaban a satisfacer la modesta demanda interior, el daño fue

menor. Los países más azotados por la depresión fueron, pues, los que estaban más industrializados, como Checoslovaquia y Polonia, que vio cómo sus exportaciones de carbón se reducían drásticamente y al mismo tiempo el número de sus parados crecía dramáticamente. En todas partes los intereses de la deuda exterior alcanzaron niveles muy elevados. Los efectos políticos de este deterioro de la situación económica consistieron en un nuevo desplazamiento del eje político hacia la conservación y la reacción. Regímenes abiertamente autoritarios y en algunos casos filofascistas se instauraron en Grecia, con Metaxas (1936), en Bulgaria, con la asunción de plenos poderes por parte del rey Boris (1935), en Letonia, con el golpe de estado filofascista de Ulmanis, en 1934, en Estonia, en el mismo año, con el de Paets y en Rumania, con la suspensión de la constitución (1938). En Hungría el giro filofascista coincidió con el nombramiento como primer ministro de Gombos (1932), del que eran notorias las simpatías filonazis, mientras que en Austria se produjo con la supresión de la institución parlamentaria, la ilegalización de los partidos políticos y la adopción de una constitución de tipo corporativo. En febrero de 1934 el intento por parte de las milicias obreras del Partido Socialdemócrata de oponer resistencia y de sublevarse fue reprimido de forma sangrienta. En todas partes el tradicional antisemitismo recibió nuevo alimento de la crisis. De entre los países de Europa oriental, sólo Checoslovaquia se mantenía fiel a un régimen de tipo parlamentario, pero, como veremos, pagará cara su libertad y su aislamiento. Porque la crisis iba redefiniendo el sistema de equilibrios y alineaciones de toda la región.

La depresión no perdonó tampoco a los países escandinavos. El más afectado de ellos fue Dinamarca, cuyo principal y casi único recurso consistía en las exportaciones de su floreciente agricultura, pero también Suecia, con su economía más compleja y diversificada, sufrió las consecuencias de la crisis y de la caída del imperio financiero construido por Ivar Kreuger, el «rey» de las cerillas, quien se suicidó en marzo de 1932. Sin embargo, si comparamos los principales indicadores económicos de los países escandinavos con los de los mayores países europeos y de Estados Unidos, constatamos una mayor resistencia y una recuperación más rápida por parte de los primeros. Este éxito fue ciertamente facilitado por una serie de requisitos previos, como el alto nivel tecnológico y la especialización de la industria sueca y de la marina noruega, la expansión, que la crisis no llegó a parar, del consumo mundial de papel y de la celulosa procedentes de las florestas escandinavas y la no dependencia del extranjero para el abastecimiento de energía eléctrica, gracias a una explotación racional y a gran escala del gran potencial hidroeléctrico. Pero hacía falta saber administrar y valorizar estos recursos y los gobiernos escandinavos demostraron estar a la altura de la situación. Cuando, en septiembre de 1931, Inglaterra abandonó la paridad oro, ellos no dudaron en seguirla, pero –como Inglaterra y mejor que ella– a

esta decisión le acompañaron una serie de medidas dirigidas no sólo a proteger, sino a fomentar, sobre nuevas bases, la economía nacional. Tanto en Dinamarca como en Suecia se adoptó una política de balance basada en la distinción entre una parte corriente, administrada con criterios de rigor, y una parte relativa a los gastos a cuenta del capital, para la cual se recurrió a criterios de *deficit spending*. Así, en Dinamarca fue posible financiar una política de reconversión de los cultivos y en Suecia realizar un amplio programa de obras públicas, cuya financiación se cubrió, entre otras cosas, con la subida de los impuestos de sucesión. Una política de bajos tipos de interés consintió incentivar las inversiones y mantener remunerativo el nivel de los beneficios. Todo ello –y ése es el aspecto más relevante– sin recurrir a recortes salariales, antes bien, gracias a una política de implicación de los sindicatos en la mejora de la productividad, los salarios pudieron ser aumentados y la legislación social, ya avanzada, pudo ser extendida y mejorada. En 1938, un acuerdo entre las organizaciones sindicales y las de los empresarios sancionó estas conquistas. Decisiva, para la consecución de estos logros y el éxito de esta política fue la adopción, por parte de los sindicatos y de los partidos socialdemócratas, de las elaboraciones de los economistas Ernst Wigforss y Gunnar Alva Myrdal, quienes en sus escritos habían trazado un programa de medidas anticíclicas destinadas a realizar la plena ocupación, y la experiencia de gobierno acumulada con la participación en varios gobiernos de coalición. A diferencia de lo que hemos constatado para otros países europeos, y en particular para Alemania, la depresión y el desempleo generados por la crisis non influyeron negativamente en la fuerza y el peso de la izquierda, ni modificaron las orientaciones en el sentido de un mayor radicalismo. Al contrario, tanto en las elecciones danesas de 1929 como en las suecas de 1932 los socialdemócratas obtuvieron importantes victorias, que les permitieron asumir la conducción del gobierno, en la que se mantendrán durante cuatro décadas.

También en Noruega los socialdemócratas, que habían sido apartados del gobierno en 1928, volvieron a él en 1932, asumiendo su dirección. En la Europa de los años 30 los países escandinavos representaban, pues, una excepción. Pero se trataba de un éxito limitado a una zona periférica de Europa y como tal especialmente vulnerable. Ello explica la posición de estricta neutralidad mantenida por el gobierno socialdemócrata antes y durante la segunda guerra mundial y las concesiones que los convencidos antifascistas que lo componían se vieron obligados a hacer a la Alemania nazi, proporcionándole durante todo el conflicto el hierro que necesitaba. Todavía más anómala era la situación de Dinamarca, donde el gobierno socialdemócrata siguió en el cargo incluso después de la ocupación alemana.

II.3. LA GRAN DEPRESIÓN EN LA PERIFERIA

Ya hemos subrayado que el indicador más significativo de la depresión fue la contracción del comercio internacional que de ella derivó. Ahora bien, si se repara en que las tres quintas partes de dicho comercio consistían en productos agrícolas y materias primas y que los unos y las otras sufrieron una reducción mayor que la de los productos industriales, se comprende fácilmente que los países cuyo único o principal recurso eran las exportaciones del sector primario y de las materias primas resultaron más duramente afectados que los que podían contar con una pluralidad de recursos.

Es incluso ingenuo preguntarse de qué países se trataba. Con todo, al consultar la tabla reproducida en la página 166 de la citada obra de Kindleberger, encontramos algunos países de Europa occidental y todos los de Europa oriental de los que ya hemos hablado. Encontramos Canadá pero no Estados Unidos, cuya agricultura, por otra parte, fue, como sabemos, duramente dañada. Pero la mayoría son países de la periferia, designando con este término tanto a los *dominions* ingleses del Pacífico como a los estados asiáticos, africanos y de América Latina. Estos últimos ocupan incluso los últimos puestos en las clasificaciones de las pérdidas. El récord lo tiene Chile, cuyas exportaciones se redujeron en un 80 %, seguido por China (75-80 %), Bolivia, Cuba, Malaisia, Perú y El Salvador (70-75 %).

Se determinaba así, en algunos aspectos, una inversión de tendencia respecto del *trend* de los años de la primera guerra mundial y de la inmediata posguerra, cuando una Europa hambrienta y sus ejércitos combatientes se habían convertido en grandes devoradores de materias primas. Ya en la segunda mitad de los años veinte la tendencia había comenzado a invertirse, pero fue sólo después de octubre de 1929 cuando la caída de los precios se tornó en desplome y las reservas comenzaron a acumularse cada vez más. Esto afectó, en diversa medida, a todos los productos: hasta la fecha de enero de 1933, el precio de la goma calculado en oro se situaba en el 13 % del de enero de 1929, el de la lana en el 22 %, los del arroz y café en el 41 %, el del trigo en el 42 % y el del azúcar en el 50 %. Al daño producido por el desplome de las exportaciones se añadieron los que causó la reducción de los préstamos y de las inversiones extranjeras y el efecto combinado de estos dos factores negativos se tradujo en un crecimiento de la deuda. Por consiguiente, las monedas de los países deudores se depreciaron y sus reservas disminuyeron.

Tendremos ocasión de integrar este cuadro general a medida que examinemos las distintas situaciones nacionales. Por lo demás, ya desde ahora es evidente que el impacto de la depresión debió resultar tanto más devastador cuanto más superpoblados y retrasados eran los países que se veían afectados por él. Pero las consecuencias de la desestructuración de los equilibrios preexistentes se dejaron sentir por todas partes. Piénsese sólo, por limitar-

nos al aspecto más llamativo, en el fenómeno del desplazamiento de grandes masas humanas a las ciudades, con la consiguiente formación de un subproletariado concentrado en las grandes áreas metropolitanas. Entre 1920 y 1940 la población de ciudades como Shanghai, Calcuta, São Paulo resultó duplicada como media y la de Ciudad de México, triplicada.

Es en este escenario donde hay que situar las tensiones sociales y políticas que, en formas y con resultados distintos, caracterizaron la historia de los países de la periferia en los años 30. En la rápida mirada de conjunto a la que nos disponemos, dejaremos al margen a Japón –en el supuesto de que éste pueda considerarse como parte de la periferia– y a los *dominions*, y nos limitaremos a reseñar los países sujetos a dominio colonial, China y los estados de Latinoamérica.

Empecemos por la India. Para un país cuya economía dependía en gran medida de la marcha de las exportaciones de productos primarios, la caída de sus precios, que se calcula en cerca de dos tercios de su valor precedente, representaba una fuente de gravísimas tensiones sociales. Éstas encontraron su expresión en la segunda campaña de no cooperación que se inició en marzo de 1930 con la célebre marcha de la sal y se desarrolló en los meses y en los años siguientes con un *crescendo* de manifestaciones, huelgas, boicots y también de episodios de violencia que los líderes no violentos del partido, tal como había pasado durante la primera campaña, no pudieron evitar. La respuesta de las autoridades británicas y del gobierno de Londres, presidido por MacDonald, fue, también en esta ocasión, la represión conjugada con la flexibilidad. Mientras que por un lado se procedió a detenciones masivas de los manifestantes –en total fueron cerca de sesenta mil, incluidos los mayores dirigentes del Congreso y el propio Gandhi–, por el otro se convocó en Londres una mesa redonda sobre los problemas de la India, cuyos trabajos comenzaron en noviembre de 1930, y se presionó a Gandhi para que aceptara participar en ella. El *Mahatma*, en un primer momento, se negó; pero, en agosto de 1931, en virtud de las garantías recibidas por parte del virrey lord Irwin, decidió ir a Londres, donde permaneció hasta que en noviembre se concluyó la mesa redonda con un acuerdo de máximos acerca de la constitución de una federación india, de la que formarían parte tanto los territorios de la India británica como los varios estados o microestados principescos a los que Inglaterra desde siempre había reconocido una apariencia de soberanía para utilizarlos de contrapeso al movimiento de liberación nacional. Pero seguían abiertos algunos puntos importantes, como la cuestión del cuerpo electoral, es decir, si éste tenía que ser único, como querían Gandhi y el Congreso, o fraccionado en colegios que reflejaran los principales grupos étnicos, hindúes, musulmanes, sij, como defendía la Liga Musulmana y su líder, Jinnah. También para los «intocables», en cuyo problema Gandhi tenía especial interés, se planteaba el problema de si incluirlos en el cuerpo

electoral general o asignarles un colegio separado. Se trataba de problemas demasiado relevantes y cargados de implicaciones para el porvenir del país para que Gandhi y el Congreso pudiesen permitir que se declarase cerrada la campaña de no cooperación. De hecho, ésta continuó y en enero de 1932 Gandhi fue nuevamente encarcelado. Liberado en mayo de 1933, Gandhi emprendió una huelga de hambre que duró tres semanas y en agosto fue de nuevo encarcelado, para ser liberado tras unas cuantas semanas de detención. Pero mientras tanto, siguiendo su consejo, se había proclamado el fin de la desobediencia civil colectiva. Iniciada con la crisis, la campaña se acercaba a su fin junto con la atenuación de la propia crisis. Y también en esta ocasión, así como en los primeros años veinte, se consiguieron unos resultados, aunque inferiores a las expectativas y a las esperanzas. Con el *Indian Government Bill*, aprobado por el Parlamento británico en 1935, la India, de la que se había separado Birmania, se convertiría en una federación entre los varios gobiernos locales y los príncipes que pidieran entrar a formar parte de ella. El principio de la «diarquía», que en 1921 había encontrado su aplicación sólo a nivel de los gobiernos locales, se trasladaba así a nivel federal. El virrey, en su calidad de representante de la Corona, conservaba para sí los «asuntos reservados», es decir, los relativos a la defensa nacional, a las relaciones con el extranjero y al culto, pero para los asuntos internos se valía de la colaboración de ministros y consejeros nombrados por los organismos legislativos previstos, la Cámara alta y la Asamblea legislativa, en los que, junto con los representantes de los príncipes, se sentaban miembros elegidos por las asambleas locales. El electorado se ampliaba, pero los analfabetos seguían excluidos, así que constituía sólo el 13 % de la población total. Además seguía vigente, con algún retoque, el principio de los colegios separados por etnias y, en lo que respetaba a los intocables, por casta. De momento, sin embargo, este esquema se quedó en mero proyecto, a causa de la negativa por parte de los príncipes a entrar en la federación y de la abierta oposición del Congreso que, reunido en Fazipur en diciembre de 1936, lo declaró «impuesto a la India contra la voluntad de su pueblo». Pero al mismo tiempo se decidió en Fazipur que el Partido del Congreso presentaría candidatos propios en las inminentes elecciones provinciales. Éstas se celebraron en enero-febrero de 1937, y el Congreso obtuvo la mayoría en cinco de las once provincias, mientras que en otras dos ganó la Liga Musulmana.

Todavía estaba lejos el reconocimiento del *status* de *dominion* planteado por lord Irwin en 1929, pero eran cada vez más numerosos los que, en la India como en Londres, se daban cuenta de que la completa emancipación de la India sólo era una cuestión de tiempo.

El desarrollo económico de China, comenzado ya durante la primera guerra mundial, recibió un fuerte impulso por la unificación del país llevada a

cabo por el Kuomintang de Chiang Kai-shek. La abolición de la estrecha red de derechos aduaneros interiores y la mejora de las comunicaciones favorecieron el proceso de formación de un mercado nacional y contribuyeron a hacer que, a pesar de la importante bajada de las exportaciones que ya se ha constatado, la producción industrial china se mantuviera en una fase ascendente también durante los años de la depresión. Pero se trataba de un desarrollo alimentado en gran medida por el capital extranjero, especialmente japonés, y concentrado en las grandes ciudades de la costa y en el valle del Yang Tze Kiang. El campo, donde vivía la gran mayoría de la población del país, seguía siendo el reino de la explotación, de la usura, del bandolerismo, de la subalimentación y de las epidemias. La que arreció entre 1928 y 1930 causó cerca de dos millones de víctimas. Como se ha visto, era con estas grandes masas campesinas con las que contaba Mao Zedong para apartar del poder al Guomintang y emprender la transformación revolucionaria del país.

La pequeña base revolucionaria que había creado en los montes de Changkanshan tras el fracaso de la revuelta de la cosecha de otoño (véase cap. 10) se reforzó gracias a la unión, en abril de 1928, con la cuarta armada de Chu Teh, un señor de la guerra que se había pasado al comunismo. Así fue posible consolidarla y posteriormente trasladarla a algunos distritos de Kiang-si, con una población de entre cinco y seis millones de habitantes. Mientras tanto, otras bases rojas se habían ido constituyendo en otras zonas de China. La consolidación de estas islas revolucionarias fue posible gracias a la adopción de una táctica militar flexible, basada en el principio de evitar las grandes batallas campales, y sobre todo gracias a las medidas de reforma agraria que se pusieron en marcha con el objetivo de realizar una redistribución de la tierra que favoreciera a los campesinos pequeños y medianos en detrimento de los grandes propietarios. Pero en el grupo dirigente comunista –del que de momento Mao no formaba parte– había quien, como Li Li San, que se había acercado al marxismo durante su estancia como estudiante en París, no compartía este punto de vista y consideraba que era «una idea equivocada el no otorgar especial atención al trabajo urbano y contar con las aldeas para rodear las ciudades». Por eso, hacía falta esperar la ocasión propicia para pasar a la ofensiva y tomarse la revancha de la derrota sufrida a manos del Guomintang en los grandes centros de la costa, cuna natural de la revolución. En el curso del VI Congreso del Partido Comunista Chino, que se celebró en Moscú en el verano de 1928 y en el que Mao no participó, estas directrices encontraron el favor de una parte los dirigentes de la Tercera Internacional, en la que entonces prevalecía una línea de radicalismo extremista, y Li Li San fue colocado a la cabeza de la secretaría política del partido. En el verano de 1930 se lanzó una ofensiva con el objetivo de conquistar las ciudades situadas a lo largo del Yang Tze Kiang, pero ésta acabó en un nuevo fracaso. No les quedaba más remedio a los comu-

nistas chinos que replegarse sobre sus bases rurales, y en una de ellas, en Juching, en noviembre de 1931, se reunió el primer congreso de los soviets chinos, que adoptó un texto de constitución provisional de la República China. En él se preveía, entre otras cosas, la abolición de los «tratados desiguales» con las grandes potencias y de las concesiones extranjeras, la tutela de los derechos de las minorías nacionales incluida la autodeterminación, y una serie de medidas dirigidas a erradicar la discriminación de la que la mujer era objeto en la tradición china. Además, se proponía un proyecto de reforma agraria basado en criterios de moderación. Entre 1930 y 1934, las bases rojas tuvieron que soportar no menos de cinco «campañas de aniquilación» llevadas a cabo por las tropas del Guomintang con la asistencia de consejeros militares alemanes, hasta que en 1934 los comunistas fueron obligados a abandonar Kiang-si. Comenzó así aquel repliegue de las fuerzas supervivientes que ha pasado a la historia con el nombre de la «larga marcha». Ésta se prolongó durante dos años y fue sólo en octubre de 1936, tras recorrer doce mil kilómetros y haberse abierto camino luchando, cuando los soldados rojos, cuyas filas habían ido aumentando en el camino, se reunieron en Shen-si. Mao Zedong, quien tras el congreso de Tsuny en enero de 1935 se había convertido en el jefe reconocido del comunismo chino, estableció su capital en Yenan y fue allí donde el periodista norteamericano Edgar Snow tuvo la ocasión de encontrarse con él y dar a conocer al mundo lo que había visto y aprendido. La publicación de su libro, *Red Star on China*, en 1937, coincidió con el inicio de la agresión japonesa y contribuyó a difundir en los ambientes políticos e intelectuales interés y simpatía hacia el comunismo chino.

Los países del sudeste asiático fueron de los más afectados por la recesión. En Indonesia, por ejemplo, las exportaciones se redujeron a una sexta parte respecto de los años 1928-1929, y en la Indochina francesa, entre 1929 y 1932, del 50%. En Malaisia el precio del caucho, principal recurso del país, cayó en picado. A diferencia de lo que hemos constatado en China y en la India, el crecimiento de las tensiones sociales no se tradujo sino episódicamente en movimientos sociales y políticos de carácter continuado y organizado. En Indonesia el amotinamiento de los marineros indígenas del buque de guerra holandés *Siete provincias*, en febrero de 1933, fue un suceso altamente simbólico, pero aislado, y fue seguido por una nueva oleada de represión que llevó en 1934 a la detención de los principales representantes nacionalistas. En Malaisia el malestar de la población, más que contra las autoridades inglesas, se dirigió contra los inmigrantes chinos e indios. En Vietnam el fracaso de la intentona insurreccional de Yen Bay y la cruel represión de las revueltas campesinas que tuvieron lugar durante 1930 –el año que los colonos franceses recordarán como el del «terror rojo»– fueron seguidas por la desarticulación

del movimiento anticolonialista y por la agudización de los contrastes entre *Viet nam Quoc Dan Dang*, una suerte de Guomintang vietnamita, el Partido Comunista recién constituido y los grupos trotskistas. En los años siguientes, alrededor del periódico *La Lutte*, de Saigón, se realizó una inédita y original convergencia entre comunistas y trotskistas, que permitió utilizar los espacios abiertos por las reformas introducidas por los franceses en 1932-1933 y elegir así a algunos representantes en las elecciones municipales de 1933 y en las del consejo colonial en 1937.

Entre las regiones de la periferia, Oriente Medio y África septentrional fueron las menos afectadas por la crisis. Si el algodón egipcio siguió la trayectoria descendiente de las demás materias primas, no pasó lo mismo con el petróleo, cuya demanda seguía en alza en los mercados mundiales.

No obstante, los efectos de la depresión se dejaron notar también en esta área. Por lo tanto, también en Oriente Medio y África los años treinta fueron años de agitación, marcados por un importante desarrollo de los movimientos nacionalistas y anticolonialistas. En Siria el fermento antifrancés, que seguía vivo desde la época de la revuelta de los Drusos (véase cap. 7), desembocó, en febrero de 1936, en una huelga de carácter insurreccional que impulsó al gobierno del Frente Popular, que tomó posesión en París tras las elecciones de mayo, a comprometerse a conceder la independencia, compromiso que llegó a cumplirse sólo durante la guerra, en 1943. Casi al mismo tiempo, una oleada de huelgas y de rebeliones, que se prolongó durante varios meses, estallaba en la vecina Palestina, donde a raíz del ascenso de Hitler al poder, la inmigración judía había aumentado intensamente. A esa circunstancia se remonta la primera propuesta, avanzada en 1937 por un comité presidido por lord Peel, para la subdivisión del territorio palestino en dos estados, uno árabe y otro hebreo, separados por una zona de seguridad que Inglaterra gestionaría en calidad de potencia mandataria.

Siempre en 1936, en agosto, el largo pulso entre el gobierno de Londres y los nacionalistas egipcios del *Wafd* llegó a su fin, al firmar ambos países un tratado en el que Inglaterra se comprometía a retirar sus tropas del canal de Suez y Egipto entraba a formar parte de la SDN como miembro con plenos derechos. Agitaciones antifrancesas se produjeron también en Magreb: en Túnez, donde en 1934 se constituyó el partido del *Neo Destour* encabezado por Habib Bourguiba, en Marruecos, donde en este mismo año los representantes nacionalistas dieron vida a un *Comité d'action marocaine*, y en Argelia y en la propia emigración argelina en Francia, en la que operaba la *Etoile nordafricaine* de Messali Hadi.

El fermento se extendía, pues, a todo el mundo árabe, cuyos mayores dirigentes se reunieron en un congreso en Blidan, en Siria, en 1937. Pero se

trataba de un acervo de fuerzas y de orientaciones heterogéneos. Esto se vio en la agresión italiana a Etiopía, cuando algunos de ellos, como el Gran Mufti de Jerusalén y el emir sirio Shekib Arslan, se declararon a favor de la Italia fascista.

El área periférica donde la gran depresión se manifestó de la forma más virulenta fue sin lugar a dudas América Latina. El cultivo único, que sustentaba la economía y las exportaciones de la mayor parte de los países del subcontinente, hacía que éstos se encontraran especialmente indefensos ante la brusca caída de los precios, mientras que la incipiente industrialización, iniciada en los años veinte, se quedaba estancada al reducirse los préstamos y las inversiones norteamericanos, que hasta entonces habían constituido su principal fuente de financiación. El desempleo, fenómeno hasta la fecha desconocido, hacía acto de presencia y las ciudades, que habían crecido de forma desmedida, se llenaban de un subproletariado inquieto y voluble. En ninguna otra parte del mundo los desajustes de la crisis fueron tan traumáticos. De entre las veinte repúblicas de América Latina, nada menos que once, entre ellas los mayores estados del continente –Argentina y Brasil–, sufrieron transformaciones políticas e institucionales radicales. Para algunas, sin embargo, cabe añadir que las soluciones y los resultados fueron harto distintos.

La experiencia más original es la del «populismo» en Brasil, una variante, puesta al día y peculiar, del «caudillismo» latinoamericano. Getulio Vargas, gobernador del estado de Río Grande do Sul, llegó al poder en octubre de 1930 por la fuerza de una sublevación popular, con el apoyo determinante de aquellos tenientes que habían sido protagonistas de las intentonas revolucionarias de los años veinte (véase cap. 10) y con un programa reformista que preveía, entre otras cosas, el refuerzo de los poderes federales respecto de los de cada estado, una nueva ley, más democrática, y medidas de legislación social. La insurrección tenía como objetivo derrumbar a la oligarquía del café, que desde los estados de São Paulo y Minas Gerais había controlado hasta entonces la vida económica y política del país y que ahora parecía incapaz de hacer frente a los problemas creados por la depresión. Tras repeler un intento de insurrección promovido en 1932 por la oligarquía paulista, Vargas convocó una asamblea constituyente elegida mediante una nueva ley electoral que aunque concedía el voto a las mujeres, seguía negándolo a los analfabetos. La constitución que dicha asamblea aprobó en 1934 atribuía al presidente de la República –cargo para el que fue elegido el propio Vargas– mayores poderes y acogía una parte de las instancias de renovación defendidas por los «tenientes». Las directrices fundamentales de la nueva administración consistían en favorecer la diversificación de las cul-

turas y promover la industrialización. Esta solución, que se erigió en modelo para varios estados suramericanos, tuvo cierto éxito. Al amparo de unas tarifas de protección prohibitivas, la industria conoció, a partir de 1933, un desarrollo muy rápido y ya en 1934 había superado el nivel de 1929.

El bloque de fuerzas políticas y sociales que se reunieron alrededor de Vargas era, sin embargo, heterogéneo y frágil: entre los dos polos opuestos de los tenientes más radicales, que reclamaban la extinción de la deuda exterior y la nacionalización de las industrias extranjeras, y el de los «integristas» que se inspiraban en el modelo del fascismo italiano, quedaba una vasta área de opinión pública insegura y desorientada. Aprovechando esta desorientación y su propia popularidad, y tomando como pretexto el descubrimiento de un plan subversivo comunista, en noviembre de 1937 Vargas disolvió los partidos políticos y asumió plenos poderes. El *Estado novo* que se constituyó era de hecho un régimen autoritario de carácter populista, articulado según una estructura corporativa. Aunque se inspiraba en los principios de la Carta del Trabajo fascista, no se puede, sin embargo, definir como un estado fascista. Como se ha visto, no existían en Brasil organizaciones sindicales y partidos políticos consolidados y la misma clase obrera estaba formada mayoritariamente por trabajadores recién inmigrados del campo. La participación en las organizaciones corporativas del *Estado novo*, que en ocasiones tuvo carácter obligatorio y siempre fue incentivada, representaba, pues, una primera forma de socialización y de participación; y las mejoras salariales y de las condiciones de trabajo –la jornada de ocho horas, la ampliación del sistema de jubilaciones y de seguridad social, la introducción de la liquidación y de las vacaciones y la tutela del trabajo de las mujeres y de los menores– constituían una primera promoción social. De ahí la fuerza y, sobre todo, la larga duración del populismo brasileño. Vargas siguió de forma casi ininterrumpida en el poder hasta su destitución y su suicidio en 1954.

El caso argentino presenta algunas analogías, pero también algunas diferencias con el brasileño. También en Argentina el gobierno de Irigoyen fue derrocado en 1930 por una rebelión en la que participaron obreros, estudiantes y militares. Pero estos últimos enseguida asumieron el control de la situación y en 1931 instalaron en el poder a uno de sus hombres, el general Justo, quien gobernó el país según una línea análoga a la de Vargas en Brasil. Unas tarifas aduaneras extremadamente elevadas y la drástica devaluación del peso argentino favorecieron un desarrollo industrial sostenido y dirigido por el estado y le permitieron salir de la crisis. A diferencia de Brasil, en cambio, no se produjo en Argentina, donde las organizaciones sindicales y los partidos políticos estaban más arraigados, ningún cambio institucional y aparentemente las reglas del juego político y constitucional siguieron siendo respetadas. El poder se limitó a manipularlas, hasta llegar a alterar los resultados de las elecciones durante la que pasó a la historia como «la década in-

fame». La solución populista, sin embargo, sólo quedaba aplazada: se realizará en 1943, con Juan Perón, un oficial que, tras la revolución de 1930, había desempeñado el cargo de secretario de estado del Ministerio de Guerra.

Chile, cuyas exportaciones, como se ha visto, sufrieron un auténtico desplome, fue el país latinoamericano donde la crisis tuvo las consecuencias más radicales. En junio de 1932, a raíz de un pronunciamiento de la Fuerza Aérea, se proclamó una república socialista que tuvo una vida breve y agitada. En octubre de aquel mismo año, en efecto, las elecciones auparon de nuevo al poder al viejo Alessandri, pero su línea conservadora favoreció la formación de un Frente Popular, que agrupaba desde los radicales hasta los comunistas, que resultará vencedor en las elecciones de 1938. El terremoto que en 1939 destruyó la parte meridional del país y el estallido de la segunda guerra mundial perjudicaron gravemente la realización de su programa de reformas.

Distintos, cuando no opuestos, fueron los acontecimientos de Perú. En 1930 el presidente Leguia fue destituido por un golpe de estado militar encabezado por Luis M. Sánchez Cerro. Éste promulgó una ley electoral que concedía el derecho de voto a todos los varones alfabetizados por encima de los veintiún años y convocó las elecciones, en las que su lista ganó por un estrecho margen a la de la APRA. Ésta buscó la revancha en el recurso a la lucha armada, pero el enfrentamiento que siguió la vio sucumbir. Miles de «apristas» cayeron víctimas de la represión y las riendas del poder volvieron establemente a las manos de la oligarquía y de los militares.

Regímenes autoritarios y en gran medida sometidos a los intereses de los propietarios de las grandes plantaciones frutícolas se instalaron en varios países de América central y del Caribe. En Santo Domingo llegó al poder el dictador Trujillo en 1930; en Honduras, lo hizo Tiburcio García en 1933; en Nicaragua, la familia Somoza en 1937 y en Haití, François Duvalier; el Salvador fue escenario en 1932 de una masacre donde perecieron miles de trabajadores de las plantaciones de café y donde encontró la muerte también el líder comunista Farabundo Martí. En Cuba, tras el derrocamiento de la dictadura de Machado en 1933, la legalidad constitucional fue restaurada, pero ya se perfilaba la figura de un nuevo hombre fuerte, el sargento Batista, quien asumirá plenos poderes en 1940. Incluso en el pacífico y democrático Uruguay, el presidente electo Terra asumió en 1933 poderes extraordinarios, de los que se valió para promulgar una nueva constitución que, mediante complicados mecanismos electorales, le permitió seguir en el poder hasta 1938 y después pasar el testigo a un cuñado suyo. Faltan en esta lista de estados americanos los nombres de Bolivia y Paraguay, pero esto no significa que se libraron de la crisis, sino únicamente que ésta se manifestó de una forma distinta, la de una guerra por el control de Chaco que se prolongó durante tres años, de 1932 a 1935, y produjo ciento cuarenta mil muertos.

Una vez más, un caso aparte, por su importancia y originalidad, es el de México. Con la elección a la presidencia de Lázaro Cárdenas en 1934, se abre una época en la historia mexicana caracterizada por la original combinación de la tradición revolucionaria del país y la experiencia norteamericana del *New Deal*. Otros estados de América Latina, como el Brasil de Vargas o Colombia, también habían mirado con interés la experiencia rooseveltiana y habían aplicado algunas de sus medidas. Pero ninguno de ellos se había atrevido a recorrer con decisión el camino de la ampliación del mercado interior mediante una política de reformas radicales. Esta fue precisamente la vía que tomó el México de Lázaro Cárdenas. En efecto, se reanudó a gran escala la distribución de tierras a los campesinos y a las comunidades campesinas (*ejidos*), que había comenzado con la revolución y que posteriormente había sido interrumpida. La repartición afectó a veinte millones de hectáreas y de ella se beneficiaron un millón de familias. Gracias a estas medidas, el desplazamiento de población rural hacia las ciudades, que había adquirido dimensiones alarmantes, pudo ser temporalmente contenido y además resultó estimulado el desarrollo de nuevas iniciativas industriales dirigidas a abastecer el mercado interior. Otro impulso a la política de apoyo de la demanda consistió en las mejoras salariales y legislativas obtenidas por los sindicatos, que al reunirse en 1936 en una única confederación encabezada por Vicente Lombardo Toledano, cuyas simpatías filocomunistas eran notorias, dispusieron de márgenes de autonomía y de iniciativa más amplios, aunque dentro de un sistema político sustancialmente unipartidista, dominado como estaba por el Partido de la Revolución Mexicana (desde 1946, Partido Revolucionario Institucional). Todo ello tenía, naturalmente, un coste elevado y para cubrirlo no eran suficientes los ingresos procedentes de los *royalties* pagados por las compañías petroleras. Así que Cárdenas se encontró en la necesidad de dar aquel paso que sus predecesores no habían querido dar: la expropiación de las compañías petroleras extranjeras y la constitución de una empresa del estado (*Pemex*, 1936). No se trató de una operación indolora: Inglaterra rompió sus relaciones con México y Estados Unidos, aunque no la imitó, ejerció una serie de presiones y de represalias. Al terminar su mandato, en 1940, Cárdenas entregaba así a su sucesor un país renovado y «rejuvenecido», donde la lealtad a las tradiciones revolucionarias ya constituía parte de la propia identidad nacional.

11.4. LAS CONSECUENCIAS DE LA DEPRESIÓN: UN MUNDO MÁS DIVIDIDO

Entre finales de 1932 y principios de 1933, algunos países, como se ha visto, ya habían emprendido la senda de la recuperación económica y otros se

apresuraban a hacerlo. Las soluciones a través de las cuales se encontró una salida a la crisis fueron variadas y en ciertos casos opuestas, tanto desde el punto de vista de los instrumentos monetarios y económicos adoptados como –en mayor medida– desde el punto de vista de los resultados políticos. Todas, no obstante, presentaban un rasgo común, el de la unilateralidad. En otras palabras, cada uno intentó superar la crisis contando con sus propias fuerzas, sin preocuparse de las consecuencias que sus decisiones tendrían para los demás y para el conjunto de las relaciones internacionales. El mundo que surgió de ellas fue, pues, un mundo más dividido.

Desde una perspectiva monetaria, la división que se determinó fue entre los países que, a la zaga de Inglaterra, habían abandonado la paridad oro y alineado su moneda a la libra, y los que seguían fieles al oro. La decisión tomada por Estados Unidos en 1933 de abandonar la paridad oro introdujo nuevos y consistentes elementos de turbación y de tensión y será sólo con el acuerdo monetario entre Francia, Inglaterra y Estados Unidos, en 1936 –es decir, cuando el sistema de las relaciones internacionales ya estaba seriamente deteriorado–, cuando se intentará restablecer un régimen de concertación monetaria entre las grandes potencias que serán los aliados de la segunda guerra mundial.

Tales tensiones monetarias, por otra parte, no eran más que la consecuencia y el reflejo de una tendencia cada vez más acentuada a compartimentar el mercado mundial en zonas de influencia. Ya se ha mencionado la conferencia de Ottawa de agosto de 1932, en la que Inglaterra y los países de la Commonwealth acordaron crear una zona de integración económica. Esta decisión ciertamente obligaba a renuncias y desventajas, y en particular a una mayor pérdida de presencia en algunos mercados exteriores, pero en general los países suscriptores se vieron beneficiados, aunque cada uno en distinta medida. En conjunto, tuvo lugar un notable incremento de los intercambios dentro del área de Ottawa; si en 1929 el 51 % de las exportaciones británicas se dirigía a los países de la Commonwealth, en vísperas de la guerra este porcentaje había subido hasta un 62 %, al tiempo que el porcentaje de las importaciones aumentaba del 42 % al 55 %.

Análogo repliegue hacia el mercado constituido por sus extensas posesiones coloniales se aprecia también en Francia. Entre 1931 y 1938, las importaciones y, en menor medida, las exportaciones francesas desde y hacia los territorios de ultramar conocieron un consistente incremento, mientras que se redujo el intercambio no sólo con Alemania, sino también con Inglaterra, y con Estados Unidos se registró un sensible incremento de las importaciones y un nivel estacionario en las exportaciones.

Evidentemente, soluciones de este tipo eran imposibles para aquellos estados que no disponían de posesiones coloniales o de recursos suficientes para asegurarles una relativa autosuficiencia, como era la Unión Soviética de

los años treinta, y tanto más en cuanto el mercado interno era ya sofisticado y diferenciado, como en el caso de los países más avanzados. Así que éstos se veían cada vez más abocados a soluciones de colaboración y de asociación, en la forma de uniones aduaneras o acuerdos de *clearing*, o bien se inclinaban hacia la autarquía. Este último fue el camino que escogió la Italia fascista; aunque fue proclamada oficialmente por Mussolini en un discurso de marzo de 1936 y presentada como respuesta a las sanciones decretadas por la SDN a raíz de la agresión a Etiopía, en la práctica la autarquía había sido estrenada ya anteriormente. En cambio, los países de Europa oriental, y en particular los de la llamada Pequeña Alianza, se orientaron hacia formas de integración económica. Se trató, por otra parte, de intentos de corto alcance. Si Alemania, como se ha visto, había tenido que renunciar a su proyecto de unión aduanera con Austria y sus peticiones para que se revisara la distribución de los territorios coloniales surgida de Versalles seguían desatendidas, a medida que su situación interna se iba estabilizando, el país recobraba su fuerza de atracción hacia los países de Europa oriental. La Alemania nazi pudo así estipular con la mayoría de ellos una serie de tratados comerciales basados en el intercambio entre las materias primas que ellos producían y los productos acabados alemanes. A lo largo de los años treinta el porcentaje del comercio exterior sólo con la Europa suroriental conoció un incremento del 5 % al 13 % por lo que respecta a las importaciones y del 4,5 % al 12 % para las exportaciones. El *Lebensraum* teorizado por Hitler comenzaba así a perfilarse. Italia también, a pesar de su autarquía, iba orientando hacia Alemania una parte cada vez más consistente de su comercio exterior. En efecto, los porcentajes del intercambio entre Italia y Alemania subieron, entre 1929 y 1935, del 12,8 % al 18,3 % para las importaciones, y del 12,3 % al 16,2 % para las exportaciones.

El resultado final de esta compartimentación en zonas y esferas de influencia fue que la mejora de los intercambios que siguió a la gran depresión, resultó muy débil y en todo caso sensiblemente inferior a la que se registró para la producción. Si las mercancías viajaban poco, todavía menos viajaban los hombres; mientras que en 1927 las emigraciones intercontinentales habían involucrado a siete millones de personas, en los años 30 esta cifra bajó a dos millones.

Aunque de forma reptante, la crisis seguía y con ella la búsqueda de una salida y de fórmulas que permitieran la reanudación del desarrollo. Una importante función de estímulo era la representada por lo que se podría definir, con un término genérico, como americanismo, entendido como taylorismo y fordismo. La idea fundamental consistía en que la racionalización del proceso de producción según los criterios del *scientific management*, la estandarización del producto y la consiguiente reducción de los costes y de los precios de venta, especialmente si iba acompañada de una política de al-

tos salarios, haría posible, como lo demostraba la experiencia del *New Deal*, una expansión de la demanda y una ampliación del mercado.

Éstas fueron las ideas que autorizados exponentes del taylorismo norteamericano expusieron a un público de sindicalistas y socialistas europeos durante el congreso sobre planificación económica mundial que se celebró en Amsterdam en agosto de 1931, en el que participaron también, en calidad de invitados, representantes del *Gosplan* soviético.

La ocasión era importante, pero le faltaba la sanción de un marco institucional. La idea de una conferencia económica internacional que afrontase los problemas planteados por la depresión fue retomada y lanzada por el BIT y la SDN y posteriormente por la conferencia de Lausana en 1932. En las intenciones de sus promotores, entre los cuales figuraban prestigiosos representantes sindicales, la conferencia tendría que presentar un orden del día muy amplio y arduo. Entre las cuestiones sobre la mesa que tendrían que ser debatidas figuraban no sólo las que concernían a la estabilización monetaria, las deudas de guerra o la reducción de las tarifas aduaneras, sino también la recuperación económica basada en el incremento de la ocupación y en la mejora de las condiciones de trabajo. A este fin, se proponía un amplio plan de obras públicas a realizar a través del empeño y la cooperación internacional y la introducción generalizada de la semana de cuarenta horas. Durante las sesiones de preparación, que fueron harto laboriosas y empeñaron a las cancillerías de las potencias en difíciles negociaciones, el programa de la conferencia se fue reduciendo. En primer lugar, por iniciativa norteamericana se apartó la cuestión de las deudas de guerra y, para disipar cualquier ambigüedad al respecto, la expresión «problemas financieros», que inicialmente aparecía en el orden del día, fue sustituida con la de «problemas monetarios». También la propuesta de un plan de obras públicas a escala internacional se abandonó, y en lo que concernía a las cuestiones aduaneras, los participantes se conformaron con sugerir la posibilidad de una tregua. Quedaban, sustancialmente, sólo los problemas monetarios. Cuando, el 12 de junio de 1933, la conferencia se abrió solemnemente en Londres bajo la presidencia de MacDonald, eran pocos los que esperaban que fuese un éxito. Y cuando, justo en medio de los trabajos, se leyó un mensaje de Roosevelt, en el que, repitiendo un concepto que ya había expresado en el discurso de su toma de posesión, el presidente afirmaba explícitamente que «una sólida situación interna representa para el bienestar de una nación un factor económico más importante que el cambio de su moneda con las monedas de otras naciones», resultó claro para todos que la mayor potencia económica del mundo no tenía intención de dar marcha atrás en las decisiones que había tomado y que había elegido el camino de la salida unilateral de la crisis. La conferencia se prolongó durante algunas semanas más y terminó sin ningún resultado relevante.

Por otra parte, las consecuencias de la depresión no se limitaron al terreno de la cooperación económica y financiera. Fue la cooperación política realizada en los años veinte –ya fuese mucha o poca– la que resultó dañada y puesta en tela de juicio, y con ella el sistema entero de relaciones internacionales. El primer impulso para su desestabilización llegó de Oriente, del área del Pacífico.

La crisis no había perdonado, desde luego, a Japón. Los productos de su industria textil, y en particular la seda bruta, que todavía constituían más de un tercio de su producción total, siguieron la trayectoria descendiente de todas las demás materias primas. A los daños y pérdidas que resultaron de ello, el estado y los grandes *zaibatsu* reaccionaron con una acción conjunta dirigida a promover un proceso de reconversión industrial masiva hacia sectores más modernos y dinámicos. En la década de 1930, la producción de la industria textil se redujo de la mitad, mientras que la de los sectores mecánicos y metalúrgico resultó más que duplicada y en su conjunto la curva de la producción industrial japonesa presenta, en correspondencia con los años de la crisis, una bajada menor que la de los grandes estados industrializados. Ello tenía, naturalmente, un coste, al que se hizo frente mediante un complejo y prudente paquete de medidas fiscales y monetarias, comenzando, a la zaga del ejemplo inglés, con el abandono de la paridad oro en diciembre de 1931 y otros procedimientos, incluido el uso del *dumping*, dirigidos a favorecer las exportaciones. Todo ello, a su vez, tenía un coste social que en gran medida, a causa de la caída de los precios de los productos agrícolas y de las materias primas, tuvo que soportar la población del campo. Por eso, fue desde el mundo campesino, que constituía la reserva natural del reclutamiento militar, que el malestar se difundió en el ejército, haciendo a éste todavía más receptivo de lo que ya era a las ideas y las ideología de los que denunciaban el capitalismo occidental como una intrusión e indicaban en la vuelta a las tradiciones militares y a una suerte de imperialismo populista el camino del rescate y de la recuperación de la auténtica identidad nacional. A través de los canales de las varias sociedades secretas, estas ideas y estos estados de ánimo se difundían entre los cuadros de los jóvenes oficiales y llegaban a tocar a los altos mandos. Se comprende, pues, que la renovación de los acuerdos navales de Washington, en una conferencia convocada en Londres en 1930, fue recibida desfavorablemente por amplios sectores de la opinión pública y suscitó la indignación de los círculos nacionalistas. En noviembre de 1930, el primer ministro Hamaguchi, quien junto con el ministro de Exteriores Shidehara había sido el principal responsable de la ratificación de los tratados, fue objeto de un atentado al que sobrevivió sólo pocos meses. En el curso de 1931 y de 1932 fueron desbaratados, por pura casualidad, varios complots organizados por militares afiliados a las varias asociaciones patrióticas, pero no fue posible impedir que en septiembre de 1931 las uni-

dades del ejército destinadas en Manchuria pasaran por su propia iniciativa a la ofensiva y en pocos días ocuparan la capital, Mukden. Era la repetición del intento llevado a cabo ya en 1928, con el asesinato de Chiang Tso-lin, pero esta vez, gracias a la connivencia del estado mayor y del ministro de Guerra, la operación tuvo éxito y el gobierno, encabezado ahora por un dirigente del partido *Minseito*, Watasuky, se encontró ante el hecho consumado y en diciembre se vio obligado a dimitir. Le sucedió un gabinete presidido por Inukay Tsuyoshi, del partido *Sejukay*, quien, presionado por las protestas de la diplomacia internacional, por un lado, y por una opinión pública interna cada vez más animada por el fervor nacionalista, por otro, intentó ganar tiempo hasta que, el 15 de mayo de 1932, él mismo fue asesinado en su residencia por un grupo de oficiales nacionalistas. Su sucesor fue el almirante Sato y, a partir de entonces y hasta el final de la segunda guerra mundial, ningún civil volvería a encabezar el gobierno.

Mientras tanto, las operaciones militares en Manchuria se habían desarrollado y durante algunas semanas incluso se extendieron a China, cuando en enero de 1932, tropas de desembarco japonesas reunidas en Shanghai atacaron, con el apoyo de la aviación, las posiciones chinas. Casi al mismo tiempo, en febrero, se proclamaba la independencia de Manchuria que, con el nombre de Manchukuo, quedaba bajo la soberanía formal del último emperador manchú de China, Pu Yu. De hecho, se trataba de un protectorado que atrajo, durante los años treinta, ingentes inversiones japonesas. Con la adquisición de Manchuria y de sus recursos mineros e industriales, la esfera de influencia japonesa en el Pacífico, que ya incluía Corea y Taiwán, se consolidaba y se ampliaba. Entre la madre patria y las posesiones de ultramar, ésta se extendía sobre un territorio de 1.481.050 kilómetros cuadrados con una población de 137 millones de personas y un alto nivel de autosuficiencia económica. Entre 1929 y 1938 las importaciones entre Japón y el bloque del *yen* subieron del 20 % al 41 % y las exportaciones del 24 % al 55 %.

La agresión japonesa a Manchuria no sólo alteraba los equilibrios regionales sentados en los acuerdos de Washington, sino que constituía una violación patente del pacto de Briand-Kellogg, del que Japón era suscriptor, y del propio *Covenant* de la SDN, de la que Japón era miembro. Por lo tanto, dicha violación afectaba a todo el sistema de relaciones internacionales y constituía un motivo de alarma para todas las potencias mayores.

Se perfilaba el riesgo de que se solaparan las dos crisis, las del centro y la de la periferia, lo que entrañaría un trastorno general de resultados imprevisibles. Entre las grandes potencias, la más interesada en el Pacífico era, tras el abandono británico, Estados Unidos. De hecho, éstos no dejaron de enviar una nota a los gobiernos chino y japonés en la que se reafirmaba en su compromiso en defensa de la integridad territorial de China y, derogando su práctica de aislamiento, mandó a Ginebra a un observador invitado por

la SDN. Pero la campaña electoral era inminente y la acción de la administración de Hoover se vio frenada por el temor de reacciones y críticas por parte de los aislacionistas. En Inglaterra, el anuncio de los hechos de Manchuria coincidió con la decisión de devaluar la libra, lo que, desde luego, no ayudó a que la ya tibia iniciativa diplomática del *Foreign Office* se hiciera más contundente. Así se explica la lentitud con que la SDN reaccionó a los acontecimientos manchúes y la insuficiencia de las medidas que acabó tomando. En efecto, fue sólo en diciembre, dos meses después del comienzo de la agresión, cuando en Ginebra se tomó la decisión de formar una comisión de investigación presidida por lord Lytton. La comisión llegó a Manchuria en febrero de 1932 y un año después presentó a la asamblea de la SDN una relación que contenía una reconstrucción de los acontecimientos desfavorable a Japón, y recomendaba que no reconociera al Manchukuo. La asamblea se limitó a aprobar la relación, sin sacar de ella la consecuencia, reclamada por los representantes de las potencias menores, de denunciar a Japón como agresor y aplicar sanciones en su contra. Con todo, ello no evitó que el representante japonés anunciara en marzo la retirada de su país de la asamblea de Ginebra.

Uno de los motivos que pueden explicar la tibieza de la SDN en la cuestión de Manchuria consiste en su preocupación por no perjudicar el resultado de la conferencia sobre el desarme de la que se discutía desde 1924 y que, tras muchos aplazamientos y laboriosas negociaciones, se había iniciado en Londres en febrero de 1932. Pero sucedió lo contrario: las posiciones de la SDN contribuyeron a alimentar el sentido de inseguridad ya difuso y ello no dejó de influir negativamente en los trabajos de la conferencia.

Las cuestiones sobre la mesa de la conferencia, en la que participaban sesenta y cuatro países incluidos Estados Unidos y la Unión Soviética, eran muchas, pero una vez más el obstáculo principal era el contraste, que pronto surgió, entre la tesis alemana, que defendía el principio de que el desarme tendría que realizarse sobre la base de la «igualdad de derechos», es decir, aplicando a los demás países las mismas limitaciones que habían sido impuestas a Alemania por el tratado de Versalles, y la tesis francesa, expuesta en una de las primeras sesiones por Tardieu, según la cual los problemas de seguridad habían de ser considerados prioritarios. Con este espíritu y partiendo de estos presupuestos, Tardieu volvía a avanzar la propuesta, defendida por la diplomacia francesa, de constituir una fuerza militar supranacional bajo la égida y el control de la SDN. Por su parte, Inglaterra y Estados Unidos, presionados por los representantes de las potencias menores, que encontraron en el ministro de Exteriores español Salvador de Madariaga su elocuente portavoz, no ahorraron esfuerzos para encontrar una salida de este *impasse*. En este sentido, un empeño especialmente significativo fue representado por el paquete de propuestas avanzadas por el presidente Hoover en junio de 1932.

En cambio, Japón –hasta que siguió siendo miembro del *Covenant*– mantuvo una postura muy rígida y negativa, mientras que Italia, que en un primer momento había apoyado los intentos de compromiso británicos, modificó sucesivamente su posición y sustituyó a la cabeza de su delegación al conciliador Dino Grando por el aguerrido Italo Balbo.

Es imposible reconstruir aquí todo el tormentoso *iter* de la conferencia, que oficialmente terminó sus trabajos en junio de 1934. Sólo podemos decir que atravesó por varios momentos críticos y fue interrumpida repetidas veces, con la esperanza de que se aplacara la conflictividad; sin embargo, en cada reanudación la situación se hacía más comprometida.

Un primer momento de tensión se registró en abril de 1932, cuando, al reanudar los trabajos tras una primera suspensión, las nuevas propuestas avanzadas por Brüning, que habían encontrado una acogida favorable por parte de Estados Unidos, Inglaterra e Italia, se estrellaron contra la *fin de non recevoir* de Francia. Siguió una nueva interrupción de la conferencia, pero cuando en junio éstos volvieron a empezar, Brüning ya no era canciller y en su lugar le había sucedido el conservador Von Papen. Los efectos de este cambio pronto se manifestaron, cuando la delegación alemana no sólo se negó a votar una resolución muy suave que había sido propuesta, sino que decidió abandonar la conferencia. Posteriormente aceptó volver a Ginebra, pero cuando, tras un enésimo aplazamiento, los trabajos se reanudaron a finales de enero de 1933, Von Papen había sido sustituido a su vez por un nuevo canciller, Adolf Hitler. Siguió un intervalo extremadamente confuso, durante el cual se estipuló un tratado, propuesto por Mussolini, entre cuatro potencias –Inglaterra, Francia, Italia y Alemania–, en el que los compromisos de los países suscriptores eran ambiguos y susceptibles de distintas interpretaciones. Finalmente, el 14 de octubre, se llegó al desenlace: un telegrama desde Berlín comunicó a la asamblea la decisión alemana de abandonar la conferencia y salir de la SDN.

La conferencia, pues, había fracasado y su prolongación sólo hizo más patente este fracaso. No sólo no se había logrado resolver el conflicto entre Francia y Alemania ni emprender un proceso de desarme general, sino que tampoco se habían conseguido resultados parciales en cuestiones donde parecía que existía una amplia convergencia, como la distinción entre armas «de ofensa» y armas «de defensa». Todos, o casi todos, se declaraban de acuerdo en considerar «ofensivos» los aviones de combate, pero tanto Francia como Inglaterra no estaban dispuestas a renunciar a utilizarlos en las incursiones contra los movimientos de guerrilla en sus colonias. La perspectiva de una guerra aérea o, mejor dicho, aeroquímica, y de bombardeos sobre las grandes ciudades, tal y como la habían teorizado los expertos militares –el primero de ellos había sido el italiano Giulio Douhet, autor en 1921 de un libro sobre el «dominio del aire»– se convertía así en una amenaza real.

Ahora podemos intentar recapitular. En dos años, dos conferencias internacionales –la económica y la de desarme– habían fracasado, y dos grandes potencias –Alemania y Japón– habían abandonado su asiento en la SDN. La autoridad de la asamblea de Ginebra, en la que seguían sin estar presentes ni los Estados Unidos ni la URSS, resultaba todavía más menguada. En Manchuria se había dado prueba de que una agresión podía quedar impune; en el Pacífico, los tratados de Washington habían sido, de hecho, violados y en Europa se anunciaban tiempos duros para los acuerdos de Locarno. A los pocos años de su firma el pacto de Briand-Kellogg aparecía ya como una reliquia de una época lejana y el intento de uno de sus promotores, el francés Briand, por realizar un proyecto de unión europea tuvo escasa fortuna, ya que la comisión instituida a este fin por la SDN, a la que había sido invitada también la URSS, no produjo resultado alguno. Todos se encaminaban hacia un mundo más dividido y más armado.

12

Estados Unidos e Inglaterra en los años treinta

12.1. LOS ESTADOS UNIDOS DEL *NEW DEAL*

Las elecciones presidenciales de noviembre de 1932 coincidieron con la fase más aguda de la gran depresión. Raras veces una administración se había presentado ante los electores con un balance peor que el de la administración de Hoover y no es sorprendente, por tanto, que sólo seis de los cuarenta estados que en las elecciones de 1928 se habían pronunciado en su favor, permanecieran fieles al presidente saliente; los demás dieron la mayoría al candidato demócrata, el gobernador de Nueva York Franklin Delano Roosevelt, que obtuvo un total de 22.800.000 votos contra los 15.750.000 de su oponente.

Los meses que pasaron entre las elecciones y la toma de posesión del nuevo presidente en marzo de 1933, vieron un nuevo empeoramiento de la situación económica. Uno por uno, los gobernadores de varios estados, desde Nevada a Michigan, Maryland, California, Illinois, hasta el estado de Nueva York, se vieron obligados a declarar unas «vacaciones bancarias» y, en el momento de la asunción del cargo del nuevo presidente, los bancos se encontraban cerrados en treinta y ocho estados.

En el programa que Roosevelt había presentado a los electores durante la campaña electoral no se mencionaban las iniciativas y las innovaciones que iba a realizar y, según la práctica habitual, sólo se hablaba de reducción del gasto y de paridad de balance. La expresión *New Deal* con la que ha pasado a la historia la experiencia de la administración de Roosevelt, había sido utilizada sin especial énfasis en uno de sus discursos electorales, pero se hizo popular cuando la prensa se adueñó de ella y la convirtió en eslogan. Pero como el político dotado de una excepcional intuición que era, Roosevelt se daba cuenta de que lo que el país esperaba de él era precisamente un *New Deal*, un nuevo curso capaz de romper con el pasado, una sacudida de

la apatía dominante y una inyección de confianza y optimismo. El discurso que pronunció el 4 de marzo al asumir los poderes de presidente reflejaba muy bien esta conciencia. Frente a la «invasión de las langostas» que se había abatido sobre el país y mientras los «mercaderes» escapaban de los templos de sus bancos, el pueblo norteamericano era invitado a reunir las energías necesarias para ganar a su verdadero único enemigo, el «miedo». Al día siguiente, el presidente suspendía el comercio de oro y proclamaba unas «vacaciones bancarias nacionales». Al mismo tiempo, convocaba una sesión extraordinaria del Congreso, que comenzó el 9 de marzo y se prolongó durante cien días. La rapidez y la tempestividad de estas decisiones contribuyó a dar a la opinión pública la sensación de que existía un liderazgo determinado y decidido en perseguir objetivos de renovación. En realidad, las primeras medidas de los cien días no presentaban elementos de innovación. El recorte de las pensiones de los ex combatientes y de los empleados públicos por un total de quinientos millones de dólares, sancionado por el *Economy Act* entraba en el marco de una política económica deflacionista, y el *Banking Act*, que daba disposiciones para la reapertura de los bancos o, como dijeron los comentaristas malignos, para readmitir en el templo a los «mercaderes» que habían sido expulsados pocos días atrás, era una medida de emergencia que no se podía aplazar. Pero al cabo de pocos días siguió la decisión de abolir el régimen prohibicionista. De un solo golpe se eliminaba así una diatriba ya inútil y que había sido uno de los temas dominantes de las anteriores campañas electorales y se pedía a los norteamericanos –tanto los «húmedos» de las grandes ciudades como los «secos» de las provincias– que no se enzarzaran en querellas superadas y volvieran a sus responsabilidades presentes. Así se percibió el mensaje y su impacto psicológico fue notable.

Pero la decisión más importante fue la de abandonar la paridad oro en abril de 1933. Uno de los colaboradores más estrechos de Roosevelt, Lewis Doglas, la definió como «el fin de la civilización occidental». En realidad, como sabemos, Estados Unidos no hacía más que seguir el ejemplo que había dado dos años antes Inglaterra, pero con la diferencia sustancial de que la decisión norteamericana se tomaba a conciencia entre varias alternativas posibles, mientras que la inglesa había sido obligada y sin alternativas. Las reservas de oro de las que Estados Unidos disponía permitirían mantener estable el curso del dólar y su convertibilidad. Se trató, en palabras del propio Roosevelt en su mensaje a la conferencia económica de Londres, de anteponer el «bienestar» de la nación norteamericana a una estabilización monetaria que ya se consideraba impracticable. Ya que dominaba el desorden monetario, entonces también Estados Unidos contaría con sus propias fuerzas, que eran grandes.

La siguiente decisión de fijar el contenido áureo del dólar en el 59 % y el precio del oro en 35 dólares por onza, decisión que se hizo operativa con el *Gold Reserve Act* de enero de 1934, constituyó ciertamente un elemento de

estabilidad y un correctivo a la decisión de abril de 1933, aunque sus efectos se vieron limitados por la aprobación en junio de 1934 del *Silver Purchase Act*, con el que, cediendo a las presiones de los *lobbies* de los estados productores de plata, se autorizó la compra de plata por parte del gobierno federal en el mercado interno e internacional, lo que tuvo consecuencias desestabilizadoras sobre la economía de aquellos países, en primer lugar China, que tenían un sistema monetario basado en la plata.

Sin esta decisión principal, es decir, sin liberar a Estados Unidos de las obligaciones y el peso que conllevaba la paridad oro del dólar, hubiera sido más difícil, cuando no imposible, disponer de los ingentes recursos que se destinaron a la solución de los problemas internos y a la recuperación del «bienestar».

En primer lugar, se actuó en favor de la agricultura, que era el sector más dañado. Para resolver su crisis, algunos proponían seguir con la política de subsidios practicada por Hoover, o también liberarse de los enormes excedentes mediante una política de *dumping* en los mercados extranjeros, pero el objetivo de Roosevelt fue otro, el de estabilizar los precios. A juicio del secretario de agricultura Henry Wallace y del propio Roosevelt, ello se podía conseguir sólo mediante una reducción de los cultivos acompañada por incentivos e indemnizaciones que aseguraran a los campesinos una renta constante. Pero, ¿cómo encontrar los fondos necesarios? Los impuestos sobre las industrias de transformación de los productos agrícolas, a los que de hecho se recurrió, podían proporcionar una parte de estos fondos, pero los representantes de los estados agrícolas en el Congreso pedían reformas más radicales y a este fin el senador Thomas presentó una enmienda que, al margen de los poderes discrecionales del presidente, se aprobó el 18 de abril, es decir, un día antes de la decisión de abandonar el *gold standard*, lo que prueba que entre las dos medidas existía una evidente conexión. Entre mayo y junio, el Congreso pudo, así, aprobar un paquete de medidas de reestructuración agrícola basada en la racionalización de la producción y la rentabilidad de los precios. Dicho paquete consistía en una ley marco, el *Agricultural Adjustment Act*, unas medidas en favor del crédito agrícola, de cuya aplicación se encargó una agencia especial, la *Farm Credit Administration*, y la constitución de un *Civilian Conservation Corps*, una especie de ejército forestal que empleó a quinientos mil jóvenes. La coordinación y la supervisión de toda esta política se confió al *Agricultural Adjustment Administration* (AAA), a la que tocó la tarea de tratar con las asociaciones campesinas y las instituciones locales sobre las modalidades concretas de la reconversión de los cultivos y de la fijación de los precios. No fue, desde luego, empresa fácil, la de persuadir a los agricultores para que erradicaran, durante el verano de 1933, diez millones de hectáreas de cultivos de algodón y mataran a seis millones de cochinillos de leche, pero se consiguió. Los precios

volvieron a subir y la tensión de los campesinos, que había alcanzado niveles de paroxismo, hasta amenazar la huelga general, se suavizó, aunque siguió alta.

Problemas igualmente complejos se presentaban en el sector industrial. En marzo de 1933, el índice de la producción estaba estancado en el 59 % del período de 1923-1925 y los desempleados ascendían a trece millones. Entre los colaboradores del presidente, el llamado *brain trust*, algunos defendían una planificación en la que el estado tuviera un lugar destacado. Estas orientaciones encontraron su aplicación en la promulgación, en mayo de 1933, de una ley que instituía la *Tennessee Valley Authority* (TVA), una *public corporation* que realizó el proyecto de la central hidroeléctrica de Muscle Shoals, por la que había luchado inútilmente durante años el senador Norris (véase cap. 1)–, utilizando la energía que ésta producía para un amplio programa de saneamiento y de reestructuración económica y ambiental de un área especialmente subdesarrollada. Pero el de la TVA no era más que un experimento limitado y su modelo no se podía ciertamente aplicar a escala nacional, donde era preciso tener en cuenta el alto grado de concentración monopolista del aparato productivo norteamericano. Entre las dos hipótesis de una vuelta a la legislación *antitrust*, preferida por la tradición demócrata, y la de una concertación entre el estado, la gran industria y los sindicatos, los colaboradores de Roosevelt se inclinaron por la segunda, que por otra parte había sido experimentada con éxito en el transcurso de la segunda guerra mundial con la institución del *National Industry Bureau*. En este criterio estaba inspirado el *National Industry Recovery Act*, que fue aprobado en junio de 1933, y en esta línea actuó la *National Recovery Administration* (NRA), el organismo que tenía la tarea de aplicar la ley y a cuya cabeza fue puesto el general Hugh Johnson, quien durante la guerra había sido colaborador del *National Industry Bureau*. El instrumento para su aplicación fue la estipulación de unos «códigos» entre las empresas de cada sector productivo, códigos en los que se establecían las cuotas de producción y el nivel mínimo de los precios. En obediencia a una párrafo específico de la ley –el 7a– dichos códigos debían contener también el compromiso por parte de los industriales a reconocer la institución de la contratación colectiva y a respetar los mínimos salariales y los horarios de trabajo acordados con los sindicatos. Por su parte, el estado asignaba un fondo de tres mil cien millones de dólares para financiar un vasto programa de obras públicas, cuya administración, por otro lado, fue distinta de la NRA. Pero la intervención estatal se realizó especialmente a través de una campaña de presión psicológica colectiva. Los que habían firmado los códigos estaban autorizados a exponer en sus productos el símbolo del Águila azul con el lema «nosotros cumplimos», símbolo que se les podía retirar en caso de infracciones de las reglas previstas en los códigos. Durante el verano de 1933, todos los principales códigos fueron suscritos y sólo algunas empresas se negaron a adherirse; entre ellas, la de Henry Ford.

Por otra parte, las medidas a favor de la agricultura y de la industria no abarcan toda la legislación de los cien días. Siguiendo el ejemplo de lo que se había hecho con las factorías agrícolas, el *Home Owners Loan Act* de junio de 1933 hizo posible la conversión a títulos del estado de los créditos derivados de hipotecas sobre propiedades inmobiliarias urbanas, suavizando de esta forma la situación de los propietarios de inmuebles endeudados; además, con la institución de la *Federal Emergency Relief Administration* (FERA), en mayo, se erogaron cinco mil millones de dólares para la asistencia a los parados. Especial atención se concedió, naturalmente, al sector de las actividades financieras y bancarias, al que la opinión pública achacaba las mayores responsabilidades en la crisis. Con el *Securities Act* de mayo de 1933, la emisión de nuevas acciones se sometía a una serie de controles por parte de una comisión federal, y con el *Glass–Stegall Act* se dio un primer paso en el camino del reajuste del sistema bancario y de un mayor control sobre él. En efecto, se introdujo el criterio de la separación entre bancos de inversión y bancos comerciales y se instituyó un organismo de garantía bancaria para tutelar a los pequeños ahorradores.

Este auténtico ciclón legislativo no tardó en dar resultados. Gracias al NRA y a la reducción de los horarios de trabajo que éste hizo posible se crearon dos millones de puestos de trabajo y el índice semanal de los negocios dio señales de mejora. La crisis estaba lejos de quedar atrás, aunque su virulencia se había atenuado, pero –y éste era el resultado más importante– la gente había recobrado la confianza y el gusto de la participación. A través de los referéndums promovidos por la AAA y de la campaña del Águila azul, estratos sociales muy amplios habían sido implicados en la vida pública y ahora se sentían parte de la recuperación del país. Ello era especialmente cierto para los trabajadores de la industria, para los que la experiencia del *New Deal* significó un auténtico salto de calidad. Con ella se marcó, en efecto, un antes y un después entre la concepción subalterna de la lucha sindical, tal como la había practicado la AFL con su organización corporativa y basada en una idea anticuada de las «artes y las profesiones», y la práctica militante que se expresó en el nuevo sindicalismo del *Congress of Industrial Organizations* (CIO). A diferencia de la AFL, que reclutaba a sus miembros mayoritariamente entre los trabajadores blancos cualificados, el CIO, cuyo líder, John Lewis, era el presidente del sindicato de los mineros, abría sus puertas a todos, sin distinción de niveles, de nacionalidades, de color y de ideas políticas. Por consiguiente, su constitución y su alejamiento de la AFL coincidieron con una reanudación de las huelgas y de las agitaciones sociales como no se recordaba desde principios de los años veinte. En verano de 1934, San Francisco, donde el novelista Upton Sinclair había dado vida a un movimiento «para el final de la pobreza en California» (EPIC), quedó paralizada por una huelga general durante la cual se produjeron enfrentamientos

con la policía y se lamentaron dos muertos. Análogos estallidos de protesta social se produjeron también en otros centros, como Milwakee, Toledo, Mineápolis y otros. A pesar de estas hogueras pasajeras, a partir de entonces el movimiento sindical tuvo un peso y un papel en la sociedad norteamericana mucho más relevantes que en el pasado. También el mundo campesino tuvo a sus radicales y su radicalismo: el más conocido fue el de Floyd Olson, dirigente del *Farmer Labour Party* y gobernador de Minnesota. Finalmente, también las clases medias tuvieron su reviviscencia, de la que se hicieron intérpretes algunos personajes dotados de grandes capacidades comunicativas, como el senador Huey Pierce Long de Luisiana, que se hizo promotor de una campaña de distribución de las riquezas o el médico californiano Francis Towsend, quien proponía que al cumplir los sesenta años a cualquier ciudadano se le concediese una pensión de doscientos dólares. Pero el más autorizado era el reverendo Coughlin, «el cura de la radio», quien, aunque se abstenía de atacar al presidente, despotricaba a través de los micrófonos contra la que en su opinión era la conjura, perpetrada a la sombra de la NRA, entre obreros y patrones para damnificar a los consumidores y a las clases medias.

En este fermento general, también el *establishment* y los sectores de la opinión pública más allegados a éste se movilizaban. En agosto de 1934, con el apoyo de algunos grupos industriales y en particular de *General Motors*, se constituyó la *American Liberty League*, a la que se sumaron también algunos representantes demócratas contrarios a Roosevelt, entre ellos Al Smith, el candidato a las elecciones de 1928. En las múltiples siglas creadas por la administración, la *League* veía el peligro de la pérdida de la tradición del individualismo y del pionerismo norteamericano, cuando no, incluso, el vestíbulo del socialismo y del comunismo.

Al perdurar la incertidumbre acerca de las perspectivas de recuperación económica, el riesgo era que este hervidero de humores y malestares diversos acabara coagulándose, como había sucedido en 1912 y en 1924, en un tercer partido que quitara votos a los demócratas. Por eso, entre los colaboradores de Roosevelt y en su *brain trust* tomaba cuerpo la necesidad de efectuar una corrección de la ruta. La despedida de Tugwell y Johnson, dos entre los más firmes defensores y ejecutores de la concertación económica, fue todo un síntoma del cambio de dirección que se estaba produciendo. Por contra, iba creciendo la influencia de los jóvenes discípulos del juez constitucional Brandeis, quienes, remitiéndose a la tradición antimonopolista del Partido Demócrata, se pronunciaban con insistencia en favor de una política dirigida a favorecer una distribución de la riqueza más equitativa e indicaban las medidas keynesianas de incremento del gasto público y *deficit spending* como los instrumentos más idóneos para llevarla a cabo. Entre ellos, el más prestigioso era Felix Frankfurter, que se convirtió en uno de los consejeros del presidente más escuchados. Este último no tenía una orientación

precisa y un breve encuentro que tuvo con Keynes en mayo de 1934 no parece haber suscitado en él una particular impresión. Pero se daba cuenta de que no podía seguir ejerciendo de «medianero» y, también en este caso, confiando en su intuición política, supo elegir.

Un impulso decisivo para el cambio fue el resultado de las elecciones de medio término de noviembre de 1934, que, contrariamente a la tradición que hacía perdedor al partido que había ganado las presidenciales, dieron una importante mayoría a los demócratas, tanto en la Cámara como en el Senado. En esta ocasión, se hizo evidente que amplios sectores del electorado popular que tradicionalmente votaban a los republicanos, como por ejemplo los italoamericanos, se estaban pasando a los demócratas y esto era para la administración un aliciente para su política de reformas.

En junio de 1935, se iniciaban así los segundos cien días y el Congreso se vio obligado a aplazar sus vacaciones hasta finales de agosto para debatir un conjunto de iniciativas legislativas. Entre ellas destaca por su importancia y su novedad el *Social Security Act*, que fue aprobado en agosto y representó una superación de la concepción tradicional de la asistencia, que confiaba ésta a las comunidades y las instituciones locales. El *Social Security Act* representaba también una innovación respecto a la anterior legislación rooseveltiana, incluidos los *Emergency Relief Act* de mayo de 1933 y marzo de 1935, en tanto que se basaba en un concepto distinto del de asistencia mediante la formación laboral y reconocía el derecho a la asistencia también a los inválidos. Por vez primera en la historia norteamericana, en efecto, se instituía un sistema federal de asistencia social para las pensiones de invalidez y ancianidad, financiado con cuotas salariales y contribuciones de los patronos. Pero quedaba excluida la asistencia en caso de enfermedad, y no todas las categorías de trabajadores se beneficiaban de ella; carecían de asistencia los funcionarios, los trabajadores agrícolas y los domésticos, estos últimos mayoritariamente negros. La ley preveía también el subsidio de paro mediante una contribución federal y de cada estado. A pesar de sus limitaciones y su retraso respecto de las correspondientes legislaciones sociales europeas, el *Social Security Act* fue un «hito en la historia norteamericana», en tanto que «cambió concepciones antiguas y arraigadas acerca de la naturaleza de la responsabilidad social y sentó el principio de que el individuo posee derechos sociales bien delimitados» (Leuchtenburg, 1976, p. 125). Junto al *Social Security Act*, la medida legislativa más relevante e innovadora que se aprobó en los segundos cien días fue el *National Labour Relations Act*, conocido comúnmente como *Wagner Act*, por el nombre del parlamentario que más luchó para que se aprobara. En esta ley, retomando y ampliando el párrafo 7a del NIRA, se garantizaban los derechos de los sindicatos en los lugares de trabajo, poniendo fin de esta manera a la práctica del *open shop*, que permitía a los industriales contratar a trabajadores no sindicados, y a la exis-

tencia del sindicalismo «amarillo». Siempre durante los segundos cien días se aprobó el *Wealth Tax Act*, que modificaba el sistema fiscal vigente en el sentido de una mayor progresividad de los impuestos. Pero durante la discusión parlamentaria la ley perdió mucha de la contundencia de la que hacía alarde el texto primitivo. Un camino igualmente discutido fue el del *Public Utilities Act*, que se proponía limitar los poderes de las sociedades financieras que controlaban los servicios públicos y especialmente el de la electricidad y cuyo texto también fue aprobado en versión reducida respecto de la original; finalmente, el *Banking Act* reforzó el control federal sobre el sistema bancario.

La prueba del alcance innovador de este conjunto de medidas legislativas está en las fuertes resistencias que encontró no sólo por parte de los varios *lobbies*, sino también del poder establecido, comenzando por el más alto organismo del estado, la Corte suprema. Ésta, en mayo de 1935, aceptando el recurso de dos hermanos comerciantes de pollos responsables de haber violado el código de su sector, desautorizó en la práctica la NRA y en enero de 1936, al declarar inconstitucional el impuesto sobre la transformación de los productos agrícolas, asestó un grave golpe al otro eje de la legislación de los primeros 100 días, la AAA. Se inició así un pulso entre el presidente y la Corte suprema que terminará sólo en la primavera de 1937, cuando la Corte, cuya composición se había ido modificando, reconoció la constitucionalidad del *Securities Act*. Pero esta victoria no hubiese sido posible si en las elecciones presidenciales de 1936 Roosevelt no hubiese sido reelegido con la mayoría más amplia nunca obtenida por un candidato a la presidencia, el 60,2 % de los votos.

Las razones de este triunfo sin precedentes cabe buscarlas en parte en la mejora de la coyuntura. En el transcurso de 1936 la fase más aguda de la depresión ya estaba superada y el producto interior bruto de 1937 superó en un 10 % el de 1929, mientras que los salarios, gracias a la recuperación sindical y al *Wagner Act*, también habían superado el nivel de antes de la crisis. Pero la mejora de la coyuntura económica no es suficiente para explicar una victoria electoral tan clara. El paro afectaba todavía a nueve millones de personas y la situación seguía siendo precaria. Es más: en la segunda mitad de 1937 empeoró bruscamente y sólo con la segunda guerra mundial Estados Unidos saldrá definitivamente de la crisis. Las razones por las que tantos norteamericanos votaron a Roosevelt en las elecciones de 1936 y volvieron a hacerlo, aunque en menor número, en 1940, cabe buscarlas en la conciencia que ellos tenían de que les estaba guiando un líder decidido a seguir en su camino y a vivir en un país distinto y mejor. Un observador de la época, el laborista británico Noel Brailsford, reveló que las reformas sociales introducidas por la administración de Roosevelt no superaban lo que Lloyd George había hecho en Inglaterra entre 1906 y 1914, y un observador norteame-

ricano observó a su vez que el *New Deal* representó «un intento tardío por modernizar al pueblo norteamericano y llevarlo al nivel de Gran Bretaña». En efecto, la legislación social norteamericana siguió siendo poco desarrollada también después de Roosevelt, no sólo en comparación con la británica, sino también con la de los países continentales en los que habían actuado fuertes movimientos sindicales y socialistas. Pero el término de comparación no debe y no puede ser Europa, sino los propios Estados Unidos de los años veinte, con su capitalismo triunfante y con su *red scare*, los Estados Unidos del prohibicionismo y del *open shop*. Los obreros del CIO, que, a la zaga de su líder, desplazaron su voto de los republicanos a los demócratas, los inmigrantes italianos, que tuvieron la alegría de ver a uno de ellos –Fiorello La Guardia, un republicano disidente, orientado a la izquierda– como alcalde de Nueva York en 1933, los agricultores, a cuyas factorías había llegado la luz gracias al programa de electrificación impulsado por el presidente, los intelectuales que tuvieron múltiples ocasiones de satisfacción profesional en las numerosas actividades promovidas por la administración, y los mismos negros, que, a pesar de que no mucho se hizo para el reconocimiento de sus derechos civiles, cobraron por primera vez el subsidio de paro: todos tenían buenas razones para tener confianza en «su» presidente. Incluso los comunistas, cuyas filas se habían ampliado en el transcurso de la crisis, y su líder Earl Browder miraban a Roosevelt con interés, y algunos de ellos colaboraron en los programas de la administración. En fin, a los ojos de la opinión pública internacional, los Estados Unidos de Roosevelt aparecían como la prueba evidente de que era posible realizar el progreso social a través de la expansión de la democracia, sin tener que recurrir a planificaciones rígidas o a colectivizaciones forzadas. Por eso, como veremos, muchos intelectuales y exiliados políticos europeos eligieron Norteamérica como su patria de adopción.

Por otra parte, precisamente por lo que el *New Deal* representaba a nivel internacional, el juicio sobre él no puede quedar reducido a una perspectiva exclusivamente interna o «doméstica» y no puede prescindir del problema de la colaboración internacional de los Estados Unidos de Roosevelt y de su política exterior. Cabe, pues, preguntarse si el cambio que se observa en el plano interno respecto de las precedentes administraciones republicanas, se realizó también en el plano de las relaciones internacionales y de la cooperación económica y política, y en qué medida esto se produjo.

A este propósito, el mayor biógrafo de Roosevelt, al referirse a la mencionada decisión de abandonar el *gold standard*, ha observado que su administración siguió una línea más «nacional» que la de las anteriores administraciones republicanas, que siempre permanecieron fieles al principio del *gold standard* (Schlesinger, 1963, II, p. 186). Pero este mismo autor observa también que, por lo que respecta a la política comercial, la administración

de Roosevelt se caracterizó, en cambio, por un talante de mayor apertura «internacional». En efecto, el secretario de estado Cordell Hull, vinculado a las tradiciones liberalistas de los estados del sur de los que procedía, era un convencido «internacionalista» y, como tal, se empeñó en revisar las tarifas aduaneras levantadas por la administración republicana, aunque encontró fuertes resistencias dentro del *brain trust* y del gobierno. El resultado o, mejor dicho, el compromiso entre estas diversas tendencias fue el *Reciprocal Trade Agreement Act* de junio de 1934, que otorgaba al presidente la facultad de retocar, hacia arriba o hacia abajo hasta un límite del 50 %, los derechos en vigor, teniendo en cuenta el criterio de la reciprocidad y la cláusula de nación favorita. A partir de esta medida se estipularon cerca de quince acuerdos, casi todos con socios latinoamericanos y escandinavos y no implicaron más que una parcela limitada del comercio exterior norteamericano. Éste registró, en la década de 1930, un activo creciente de las exportaciones respecto de las importaciones, gracias también a la devaluación del dólar en los mercados internacionales.

En cuanto a la cooperación política, las novedades más relevantes se dieron en las relaciones con los estados de Latinoamérica. La aceptación del principio de no intervención establecido en la conferencia panamericana de Montevideo (1933), la denuncia de la llamada enmienda de Platt insertada en un tratado con Cuba de 1934, la retirada de los marines de Haití también en 1934, la renuncia al derecho de intervención en el canal de Panamá en 1936, el *Tyding McDuffie Act* de marzo de 1934, con el que se concedía a Filipinas una amplia autonomía y los Estados Unidos se comprometían a reconocer su independencia en 1946 y finalmente la prudencia que el país demostró en el asunto de la nacionalización mexicana del petróleo, además de los numerosos tratados comerciales ya mencionados, hicieron creíble la política de «buena vecindad» y de reactivación del panamericanismo formulado por la nueva administración y ayudaron al éxito del viaje que Roosevelt efectuó en 1936 a varias capitales de América Latina. En cambio, en las relaciones con la SDN no hubo novedades significativas. Ya en el transcurso de la campaña electoral, Roosevelt, olvidando evidentemente su pasado wilsoniano, había declarado públicamente que era contrario a la vuelta de Estados Unidos a la asamblea de Ginebra y cuando, a principios de 1935, se arriesgó a proponer la entrada de Estados Unidos en la Corte internacional de justicia de la SDN, fue el Senado el que se encargó de impedirlo. Y cuando, en el verano de aquel mismo año, se perfiló la inminente agresión italiana a Etiopía, la respuesta norteamericana fue la aprobación del *Neutrality Act* (agosto de 1935), que decidía el embargo de las ventas norteamericanas de armas a los países beligerantes, sin distinción entre agresores y agredidos. Ya comenzadas las hostilidades, se recomendó un «embargo moral», pero ello no impidió a las petroleras norteamericanas incrementar sus exportaciones

a Italia. Ni el estallido de la guerra civil española ni, como veremos, la denuncia por parte de Japón del tratado naval de Washington sirvieron para que la administración modificara su postura de neutralidad. En 1937 se aprobó un nuevo *Neutrality Act*, que contenía la llamada cláusula del *cash and carry*, en base a la cual los países beligerantes tenían que pagar al contado las mercancías adquiridas en Estados Unidos y encargarse de su transporte en buques de su propiedad. En cambio, una novedad muy importante se dio en las relaciones con la Unión Soviética, con el reconocimiento, en noviembre de 1935, del gobierno soviético. Se trató desde luego de una iniciativa significativa y valiente en tanto que desafiaba prejuicios consolidados y arraigados en la opinión pública y en la propia diplomacia norteamericana, aunque en ella tuvieron que ver las presiones de los *lobbies* interesados en las exportaciones al mercado ruso. Además, tal decisión no tuvo consecuencias inmediatas de relieve en el sistema de las relaciones internacionales.

Así pues, podemos contestar a la pregunta que nos habíamos planteado, constatando que elementos de continuidad y discontinuidad están igualmente presentes en la política exterior norteamericana de los años treinta, lo que de por sí representa un dato nuevo y relevante; a pesar de que, como veremos, el llamado «discurso de la Cuarentena» quedó como un hecho aislado, marcó igualmente una ruptura con la inercia de la tradición aislacionista y anunciaba desarrollos futuros.

12.2. INGLATERRA EN LOS AÑOS TREINTA

Si en los Estados Unidos la superación de la crisis económica se había producido al calor del cambio y de la renovación de la dirección política, en Inglaterra se produjo al calor de la unidad nacional. Como se ha visto, el gobierno de coalición presidido por MacDonald había conseguido superar la difícil prueba de la devaluación de la libra. Tras ganar las elecciones de 1931, continuó gobernando el país durante toda la década. Cuando, en junio de 1935, MacDonald dejó la dirección del gobierno y le sucedió el conservador Baldwin, el cambio fue percibido como una alternancia normal entre dos políticos con convicciones no muy distintas. No le faltaba razón a Winston Churchill, adversario de ambos, cuando aseguraba que desde la caída de Lloyd George Inglaterra había vivido bajo el «régimen de Baldwin y MacDonald». En realidad, no se trataba de un régimen, sino de la continuidad de una clase dirigente envejecida pero todavía capaz de cooptaciones valientes e innovaciones calculadas y en la que la mayoría del país seguía confiando, por costumbre pero también por convicción. Lo había demostrado

en las elecciones de 1931 y lo volvió a demostrar, aunque con un margen menor, en las de noviembre de 1935.

Esta estabilidad política no suponía que las heridas abiertas con la huelga general de 1926 estuviesen curadas, y tampoco que los problemas provocados por la gran depresión estuviesen solucionados. Para millones de ingleses, los años treinta fueron *gloomy years*, años oscuros. Lo fueron para los parados, que, tras llegar en enero de 1933 al pico de tres millones, nunca, hasta 1939, se situaron por debajo del millón y medio; lo fueron para los habitantes de las que eufemísticamente se llamaban las «zonas especiales», es decir, Escocia, Gales del sur, West Cumberland, Tyneside, con sus industrias obsoletas, o para los habitantes de ciudades como Jarrow, que con dos tercios de su población en paro se llamó la «ciudad asesinada», o York, donde una encuesta del sociólogo Rowntree comprobó que el 31 % de la población vivía por debajo del nivel de pobreza y el 14 % en la miseria.

Los defensores naturales e históricos de los débiles y de los explotados eran el Partido Laborista y los sindicatos. Pero el primero había salido literalmente diezmado de las elecciones de 1931 y ahora no disponía más que de cincuenta y dos escaños en el parlamento. El «salto del foso» de MacDonald y la derrota electoral habían tenido efectos devastadores: la primera secesión fue la de Mosley y de su grupo, auténticas balas perdidas que en otoño de 1932 dieron vida a la Unión de los Fascistas Ingleses, llegando a promover manifestaciones de protesta contra la inmigración de exiliados judíos de Alemania. Al mismo tiempo se produjeron la secesión de la ILP y la formación en el seno del partido de grupos de presión de tendencias radicales, el principal de los cuales era la *Socialist League* de Stafford Cripps. El debate que en estos años difíciles se desarrolló en el Partido Laborista y en la izquierda británica y las propuestas que se avanzaron darán sus frutos inmediatamente después de la guerra, cuando los laboristas volverán al poder. Pero de momento el partido atravesaba por una fase crítica y en las elecciones de 1935 sólo pudo recuperar una parte de los escaños perdidos.

En cuanto a los sindicatos, su capacidad de resistencia era mayor, aunque los afiliados se habían reducido a poco más de la mitad de la cifra récord alcanzada en 1920. Pero la experiencia de 1926 los había afectado profundamente y ahora eran reacios a recurrir al arma de la huelga e incluso a participar en las varias «marchas del hambre», una forma de lucha típica de los años de la depresión, que organizaban el *National Unemployed Workers Movement* (NUWM) y los comunistas. Sus líderes más autorizados, como Ernest Bevin y Walter Citrine, se inclinaban cada vez más –quizá por influencia de la experiencia norteamericana del NIRA– a considerar que el proceso de concentración industrial que se estaba produciendo constituía un paso obligado hacia la solución de los problemas creados por la depre-

sión y hacia la disminución del desempleo y por tanto que el camino de la concertación era preferible al de la lucha sindical tradicional.

Por su parte, el gabinete de unión nacional, que hasta 1935 fue presidido por un hombre que, aunque ya no tenía carnet del *Labour*, conservaba, no obstante, sus ideas, también estaba interesado en mantener una relación de colaboración constructiva con los sindicatos. Pero para ello no bastaba desde luego con conceder prebendas y ennoblecer a algún que otro dirigente sindical, como se hizo con Citrine, sino que hacía falta plantear una seria política de reformas. Los modelos y las sugerencias no faltaban, del *New Deal* estadounidense a la planificación soviética. Algo se intentó hacer y algo se hizo.

Entre las cuestiones sobre la mesa, la más urgente y compleja era sin lugar a dudas la del subsidio de paro, especialmente al tener que lidiar con un desempleo no ya coyuntural sino crónico. En un primer momento se pensó en resolver el problema asignando a los comités de asistencia que existían en cada ayuntamiento la tarea de averiguar los ingresos personales y familiares de los que pedían el subsidio y de hacer una lista priorizada que correspondiera a los datos averiguados. Pero sucedió que mientras que en los ayuntamientos administrados por los conservadores se adoptaron criterios restrictivos, en los laboristas se hizo todo lo contrario. Prescindiendo de esta anomalía y de las discriminaciones que de ahí se produjeron, los parámetros de comprobación (*test means*), al asimilar la figura del desempleado a la del indigente asistido por la *Poor Law*, constituían para todos una humillación moral y, puesto que se basaban en la renta familiar, una instigación a la disgregación de los núcleos familiares. Con el *Unemployment Act* de 1934, la administración del subsidio fue centralizada y confiada a un organismo, el *Unemployment Assistance Board*, integrado por personalidades independientes de los partidos políticos. Al mismo tiempo se abrogó el recorte del 10% del importe del subsidio que había sido decidido en 1931, lo que consintió superar las dificultades y los inconvenientes del nuevo sistema, que, tras un período de prueba, pudo empezar a funcionar a pleno rendimiento. Otras intervenciones en el campo de la legislación social fueron el *Factories Act* de 1937, que impuso un límite legal a los horarios de trabajo, y el *Holidays with Pay Act* de 1938, que introdujo las vacaciones pagadas y del que en 1939 se beneficiaron once millones de trabajadores. En cambio, la ley que instituía unos comisarios para las «zonas especiales» obtuvo escasos resultados. Hubo que renunciar también a hacer operativa la decisión, que todos apoyaban, de prolongar la obligación escolar hasta los quince años y el gobierno se conformó con asegurar la distribución de leche a bajo precio en las escuelas. Por lo que respecta a la política de la vivienda, la acción del gobierno fue poco contundente, especialmente si se compara con la de los gobiernos de la inmediata posguerra. Entre 1930 y 1939, las administracio-

nes locales construyeron cien mil apartamentos, frente a los 2.700.000 que construyeron las empresas privadas. Por contra, la ley de demolición de los *slums* no se realizó sino parcialmente. Un sector en el que la intervención estatal se demostró eficaz fue, en cambio, el de la agricultura: gracias a las subvenciones a los consorcios de productores, durante los años treinta la producción agrícola registró un incremento de casi una sexta parte de su cantidad total.

El balance general de las iniciativas gubernativas no era ni decepcionante ni considerable, pero los gobiernos británicos de los años treinta intentaron, más que intervenir directamente, secundar las energías que la sociedad almacenaba y que poco a poco estaban cambiando el aspecto del país y su misma geografía económica y humana. Si las viejas industrias del carbón y del algodón se deterioraban, las nuevas industrias químicas, mecánicas y automovilísticas, que producían para el mercado interno y para la Commonwealth, conocieron una etapa de desarrollo y crearon una organización más articulada y concentrada. Si un millón y medio de parados estaban obligados a vivir del *dole*, el subsidio de paro, los trabajadores ocupados en las industrias y en los servicios vieron aumentar el poder adquisitivo de sus salarios y sueldos gracias a las subidas obtenidas, pero sobre todo gracias a la reducción del coste de vida. Si entre 1930 y 1940 Gales perdió 128.000 habitantes, el área de Londres acogió a 490.000 inmigrantes.

Junto con la geografía económica y humana del país cambiaban también los comportamientos y los modelos de vida. Fue durante los años treinta cuando muchas familias de empleados y obreros cualificados se hicieron propietarios de sus viviendas y compraron un automóvil –al principio de la guerra circulaban dos millones–; y fue entonces cuando para un número creciente de ciudadanos ingleses las vacaciones en el mar o en los campings de la organización Butlin, la frecuentación del *pub* o del estadio los domingos, la lectura de los periódicos populares o, para los más exigentes, de las ediciones de bolsillo de la editorial Penguin o también de las publicaciones del *Left Book Club*, se convirtieron, más que en costumbres, en derechos. Los que acudían a las salas de cine pasaron de treinta y seis mil a ochocientos mil al año. En suma, se vivía mejor y más tiempo.

El país cambiaba y cambiaba el sentido mismo de la identidad nacional. Si se excluye el puñado de los «irreductibles», del que Winston Churchill era la cabeza visible, ya no eran muchos los que se sentían a gusto al evocar o contemplar la gloria del Imperio. En el transcurso de su estancia en Inglaterra, durante la conferencia de la Mesa Redonda, Gandhi fue objeto de demostraciones de simpatía y la opinión pública recibió sin demasiada emotividad la decisión del presidente irlandés De Valera de romper cualquier relación que quedase con Inglaterra y bautizar con el nombre de Eire el estado libre de Irlanda (1937). Por contra, el país siguió con apasionado interés e

incluso con simpatía el romance sentimental de su nuevo rey, Eduardo VIII, obligado a abdicar para poder casarse con una mujer divorciada, la norteamericana Wallies Simpson.

Pero este repliegue hacia adentro no concernía sólo a las relaciones entre las colonias y el Imperio, sino al conjunto de las relaciones internacionales. Tras las desventuras de la guerra y de la depresión, lo que la mayoría de la población inglesa anhelaba era una tranquilidad y una paz que le permitiesen gozar de su recuperado bienestar, un aislamiento menos «espléndido» y más doméstico. El pacifismo tenía raíces profundas en la historia y la sociedad británicas, pero pocas veces ocupó tanto el escenario como durante los años treinta.

Naturalmente, había varias maneras de ser pacifistas: al estilo «radical» de los estudiantes de Oxford, que en febrero de 1933 declararon, para escándalo de los bienpensantes, que ya no estaban dispuestos a «luchar por el Rey y por la Patria», o bien al estilo «ético» de los movimientos religiosos que defendían la objeción de conciencia, o también al «político» de los miembros de la *Nation Union League* de lord Cecil, futuro premio Nobel de la Paz, que indicaban en la SDN el único garante de la seguridad colectiva y de la paz. Estos últimos promovieron, en la primera mitad de 1935, un referéndum autogestionado (el *Peace Ballott*), en el que se preguntaba a los ciudadanos si estaban a favor o no de la permanencia de Inglaterra en la asamblea de Ginebra, de la reducción de los armamentos y de la abolición del ejército y de la armada previo acuerdo internacional. Once millones de ingleses, casi la totalidad de los votantes, respondieron afirmativamente, mientras que, como veremos, menos masiva fue la respuesta a la pregunta sobre la aplicación de sanciones económicas y militares contra un eventual país agresor. Finalmente, existía el pacifismo oportunista de aquellos conservadores que temían que el edificio del Imperio no sobreviviría a un nuevo trastorno de las relaciones internacionales. Esta mezcla de auténtico y falso pacifismo, de nobles ideales y menos nobles cálculos políticos, encontró su expresión en un término con el que toparemos con frecuencia en las páginas que siguen: el de *appeasement*.

Ningún gobierno hubiera podido ignorar un estado de ánimo tan generalizado, y de hecho Baldwin no lo ignoró. Hablando ante los Comunes en 1933, declaró que si el gobierno hubiese planteado la cuestión del incremento del gasto militar, que por lo demás era harto limitado, con seguridad perdería las elecciones, y cuando en octubre de 1935, después del *Peace Ballott*, convocó las elecciones, se preocupó, como veremos, de presentarse ante los electores con una plataforma política tranquilizadora. Naturalmente, todo ello tuvo sus reflejos en la conducta de la política exterior británica, como ya en parte se ha constatado en lo tocante al área del Pacífico, en ocasión de la agresión japonesa a Manchuria, y como pronto tendremos ocasión de constatar a propósito de Europa.

13

La Alemania nazi

Hasta las elecciones de septiembre de 1930, en las que el Partido Nacionalsocialista obtuvo un éxito tan clamoroso como inesperado, muy pocos fuera de Alemania y no todos en la misma Alemania estaban al corriente de la existencia o conocían el nombre de Adolf Hitler, un ex combatiente condecorado de la guerra que en la política había encontrado la realización personal que había estado buscando en la actividad artística durante su inquieta juventud en Viena. Tras trasladarse a Múnich, se había puesto a la cabeza, en febrero de 1920, de un pequeño grupo extremista de derecha fundado por el herrero Anton Drexler –la *Deutsche Arbeitspartei* (DAP)–, estrenando así su carrera política. Su primera iniciativa fue la de cambiar el nombre del partido por el de *Nationalsozialistische deutsche Arbeitspartei* (NSDAP, Partido Obrero Alemán Nacionalsocialista) y redactar un programa en el que, conforme a la nueva denominación del partido, elementos «socialistas» como la nacionalización de «todas las empresas de carácter monopolista» y una borrosa «eliminación de la esclavitud del interés» se acompañaban y se entremezclaban con elementos de carácter «nacional», como la abrogación del tratado de Versalles, la formación de una «gran Alemania» y la sustitución del derecho romano con un *Gemeinrecht* alemán. Este eclecticismo hacía que el programa del NSDAP tuviera mucho en común con el de los *fasci* italianos de 1919, hacia cuyo jefe Hitler nutría una gran admiración, y ambos se podían considerar subproductos de la posguerra. Por otra parte, lo que caracterizaba la orientación política del NSDAP respecto de los demás grupos de derecha alemanes y extranjeros era el antisemitismo del que estaba impregnado y que constituía su *Leitmotiv*: a los judíos, en su programa, Hitler les negaba el derecho a ser miembros de la comunidad nacional alemana (*Volksgenosse*) y cerraba el acceso a cualquier cargo público.

La primera salida pública del nuevo partido tuvo lugar en 1923, en la atmósfera candente que siguió a la ocupación francesa del Ruhr y al estallido de la hiperinflación, cuando, junto con el general Ludendorff, Hitler organizó y promovió en Múnich un *Putsch* que hubiera tenido que ser el punto de partida de una marcha sobre Berlín, como la de Mussolini sobre Roma. Pero al fallarle los apoyos políticos y militares con los que contaba, el intento –pasado a la historia con el nombre de *Putsch* de la cervecería– fracasó miserablemente y Hitler fue detenido y condenado a cinco años de reclusión. De hecho, sólo pasó en la cárcel nueve meses, durante los cuales escribió la primera parte de su *Mein Kampf* (Mi lucha). Pero de esta experiencia sacó la conclusión de que el único camino realmente practicable para conquistar el poder pasaba por aceptar las reglas del juego y utilizar sin escrúpulos y de forma instrumental la legalidad republicana, y a esta convicción se aferró al retomar la actividad política, una vez salido de la cárcel.

Los ambiciosos proyectos que perseguía hubiesen sido irrealizables y el NSDAP se hubiese quedado como una reliquia de la posguerra (en las elecciones de 1928 no sacó más que el 2,8 % de los votos) si la gran depresión no hubiese de nuevo precipitado a Alemania en la atmósfera de radicalización y exasperación propia de la posguerra. La violencia y los enfrentamientos entre las varias formaciones paramilitares volvieron a ser una forma habitual de lucha política y en ella los nazis no se encontraban para nada incómodos. En abril de 1932 el gobierno de Brüning, con una de sus últimas medidas, intentó apagar el fuego de la violencia ilegalizando las *Sturmabteilungen* (SA) nazis, pero dos meses después, en junio, el nuevo gobierno del canciller Von Papen retiró esta medida y las luchas callejeras pudieron así reanudarse. Sólo en Prusia se contaron en pocas semanas noventa y nueve muertos y más de mil heridos. En este clima de total crispación las consignas más extremistas se hacían creíbles y el NSDAP se convertía en un poderoso polo de atracción para los rencores y las frustraciones de los que habían conocido los tiempos amargos de la posguerra y de la inflación y para las aspiraciones de muchos jóvenes que sólo conocían la desolación del presente y esperaban confusamente una regeneración. Humores y reacciones psicológicas de este tipo existían en todos los estratos sociales y eso explica la composición extremadamente heterogénea que caracterizaba al NSDAP respecto de todos los demás partidos políticos alemanes. A la altura de 1930, entre sus afiliados el 28,3 % eran obreros, el 25,6 % empleados, el 14 % campesinos, el 20,7 % trabajadores independientes y el 8,3 % funcionarios. Cierto que un consenso caracterizado por un nivel tan alto de emotividad podía evaporarse tan rápidamente como se había formado, pero Hitler sabía cómo cimentarlo y capitalizarlo. No sólo era un orador capaz de enfervorizar a su audiencia, sino un maestro en el uso y la combinación de cualquier técnica de agregación y movilización, tanto las bien experimentadas propias del movi-

miento obrero y de sus organizaciones de masas como las del fascismo italiano o del comunismo soviético, o también las menos llamativas, pero más eficaces, de la gradual infiltración en asociaciones profesionales y recreativas hasta alcanzar su control. Sobre todo, estaba convencido del valor movilizador de la acción ejemplar y de ello se encargaban sus SA, que siempre figuraban en primera fila en los desfiles y en las manifestaciones de masas del NSDAP, inspirando en los participantes un sentimiento de seguridad y de infalibilidad de la victoria. Cuando, en agosto de 1932, un tribunal condenó a muerte a cinco nazis culpables de haber matado a un comunista en su casa y ante su familia, Hitler no dudó en expresarles su solidaridad y estigmatizar la falta de patriotismo de los jueces.

Con las dimisiones del gobierno de Brüning en mayo de 1932 el edificio de la República de Weimar ya se tambaleaba. Otro fuerte golpe lo recibió de la decisión que en julio tomó Von Papen de desautorizar al gobierno prusiano encabezado por el socialdemócrata Otto Braun. Por una de esas paradojas de las que la historia es tan generosa, la misma Prusia que había sido el baluarte y el símbolo de la conservación, ahora acababa siendo la última fortaleza de una democracia asediada.

Los meses que mediaron entre julio de 1932 y enero de 1933 se caracterizaron por una actividad política intensa e incluso frenética. Los alemanes fueron llamados dos veces a las urnas, a finales de julio y a principios de noviembre, y dos gobiernos se sucedieron, el de Von Papen, un aristócrata *racé* que casi por casualidad era miembro del *Zentrum* y de éste fue expulsado al convertirse en canciller, y el del general Kurt von Schleicher, el más escuchado, después de la dimisión de Gröner, de los consejeros de Hindenburg. El primero duró pocos meses y el segundo, pocas semanas. En realidad, este sucederse de elecciones y gobiernos no era sino el indicio de cómo los mecanismos de la democracia weimariana ya giraban en el vacío, casi una pantomima a la espera de que el telón bajara definitivamente. El juego político real, en el que se decidía el destino del país, se desarrollaba en los bastidores, en una espesa trama de contactos y encuentros, y sus interlocutores y protagonistas eran los que de verdad contaban, la camarilla que se había formado alrededor de Hindenburg, cada vez más ausente y desorientado, los altos mandos militares, la poderosa Liga Rural Alemana, desde siempre expresión y portavoz de los intereses de la nobleza agraria del lado oriental del Elba, algunos sectores y exponentes de las finanzas y de la industria y, naturalmente, el incómodo Adolf Hitler. Durante estos contactos y negociaciones, varias hipótesis se sucedieron. Von Papen avanzó una solución autoritaria que pusiera fin al régimen de los partidos, incluidos los nacionalsocialistas, y sin excluir a este fin la posibilidad de un golpe de estado. Su sucesor, Von Schleicher, contando con la posible escisión del NSDAP de su ala izquierda encabezada por Georg Strasser, apostó en cambio por la

formación de un gobierno basado en la colaboración entre organizaciones sindicales y jerarquías militares similar a la que se había producido durante los años de la guerra.

Ambas soluciones demostraron ser ilusorias, al prescindir de la posición de fuerza de los nacionalsocialistas, que, aunque habían retrocedido en las elecciones de noviembre respecto de las de julio, seguían representando a un tercio del electorado y se habían convertido en el primer partido. Hitler, quien había rechazado repetidas veces el cargo de vicecanciller, insistía, en efecto, en reclamar para sí la cabeza del gobierno y al final Hindenburg, que nutría hacia él sentimientos de animadversión, tuvo que aceptarlo.

El 30 de enero Hitler asumía el cargo de canciller, con Von Papen como vicecanciller. Del nuevo gobierno formaban parte sólo dos ministros nazis y Hitler había tenido que comprometerse a despachar con Hindenburg sólo en presencia del vicecanciller. De este modo el presidente y sus consejeros pensaban tenerlo controlado y esperaban a que su popularidad se deshinchara y a que quedara claro que no podía cumplir con sus promesas demagógicas para liberarse de él. El resultado de las elecciones de noviembre, en que, como se ha visto, los nazis habían perdido dos millones de votos, sustentaban esta persuasión y esta previsión. Por otra parte, ésta era la opinión más generalizada en los ambientes diplomáticos y entre los estadistas europeos. Más sorprendente es el hecho de que esta miopía política estuviese difundida también entre los adversarios más enconados de Hitler. Muchos comunistas, por ejemplo, creían que el ascenso de Hitler al poder era una etapa necesaria en el camino de la instauración de la dictadura del proletariado por la que luchaban y el Partido Comunista Alemán, al hilo de esta lógica perversa, no dudó en empeñarse en acciones convergentes con las de los nazis. Cuando, tras la llegada de Hitler al poder, los comunistas lanzaron el llamamiento a la huelga general, ya habían perdido su credibilidad y su invitación no fue secundada por los socialdemócratas, desesperadamente aferrados a la idea, también carente de perspectivas, de «salvar lo salvable». La izquierda alemana, que en las elecciones de noviembre había sumado el 36 % de los votos, pagaba así con una derrota sin gloria sus errores y sus divisiones. A pesar del precedente italiano, no se había percatado de que un movimiento contrarrevolucionario, como era el nazismo, era cualitativamente distinto de los tradicionales movimientos reaccionarios o conservadores y que poseía un arraigo y una fuerza muy superior a la de éstos. Que eso no lo comprendieran los viejos aristócratas como Von Papen no puede sorprender. En cambio, sorprende el que no lo comprendieran los que, como los comunistas, habían dedicado su vida al movimiento revolucionario.

En las negociaciones para formar su gobierno, Hitler, superando la oposición del líder de los populares Hugenberg, había obtenido que en breve término se celebrasen nuevas elecciones, confiando en el efecto de arrastre que

tendría su ascenso al poder. La fecha se fijó en el 5 de marzo y la campaña electoral estaba en pleno desarrollo cuando la noche del 27 de febrero el edificio del *Reichstag* fue destruido en un incendio. Cualquiera que fuese el que prendió el fuego, si el desequilibrado holandés que fue detenido o, más probablemente, una unidad de las SA, lo cierto es que esta circunstancia brindaba a Hitler la ocasión para reforzar su poder personal y dar otro apretón de tuercas. La responsabilidad se dejó recaer sobre los comunistas y cuatro mil de ellos, incluido Georgi Dimitrov, el futuro dirigente de la Internacional Comunista, fueron detenidos. Acabaron en la cárcel también muchos opositores e intelectuales, entre ellos Karl von Ossietzky, el director de la revista *Weltbühne*, que terminará sus días en un campo de concentración tras haber sido galardonado con el premio Nobel de la Paz. Al día siguiente al incendio del *Reichstag*, Hindenburg, presionado por Hitler, firmaba un decreto «en defensa del pueblo alemán» que suspendía todos los derechos y las libertades constitucionales y prescribía la pena de muerte por una serie de atentados contra el estado. En esta atmósfera de terror se celebraron las elecciones del 5 de marzo. El NSDAP, con el 43,9 % de los votos, y los partidos de derechas aliados obtuvieron la mayoría absoluta, pero no la de dos tercios necesaria para reformar la constitución y atribuir a Hitler los poderes absolutos que reclamaba. Pero igualmente alcanzó su objetivo gracias a la anulación de la elección de los 81 diputados comunistas y a la debilidad del *Zentrum*. En el momento del voto, el 23 de marzo, los únicos que se opusieron fueron 94 de los 120 diputados del SPD. A los diputados comunistas se les prohibió participar en el voto. Así terminaba la República de Weimar y se iniciaba la *Gleichschaltung* («sincronización») nazi.

Ésta implicó a todo el sistema político e institucional sobre el que se había sostenido Alemania en la posguerra: los partidos, desde los comunistas hasta los nacionalistas, fueron disueltos, con la obvia excepción del partido nacionalsocialista, que en julio se convirtió en el único partido legal; los sindicatos fueron unificados en el *Deutsche Arbeiterfront* «Frente alemán de los trabajadores», DAF); en los *Länder*, unos plenipotenciarios enviados desde el centro (*Reichsstatthalter*) sustituyeron a los organismos electivos; en las universidades los rectores también fueron nombrados desde arriba; la prensa y los demás medios de comunicación fueron puestos bajo el estricto control de un ministerio de nueva formación, el ministerio «para la información popular y la propaganda», encabezado por el más intolerante entre los jerarcas nazis, Joseph Göbbels; la propia gloriosa academia prusiana, fundada por Federico II, fue purgada y normalizada: dejaron de formar parte de ella, entre otros, Heinrich Mann y Kate Kölwitz. La *Gleichschaltung* no perdonó tampoco a las Iglesias protestantes. Apoyándose en el movimiento de los «alemanes cristianos», para los que Jesucristo era un ario y San Pablo un rabino, un judío, el régimen intentó unificar en una Iglesia nacional

bajo la guía de un *Reichsbischof* y bajo control del Ministerio de Asuntos Eclesiásticos.

Sin embargo, al constatar cuán fuertes eran las resistencias a este intento de politización por parte de la mayoría de los creyentes y de prestigiosos representantes religiosos, como el pastor berlinés Martin Niemöller, el régimen modificó su postura y renunció al proyecto, pero al mismo tiempo alentó al movimiento de los «creyentes en Dios» (*Gottglaubiger*) y dejando rienda suelta a la propaganda de las teoría neopaganas de Alfred Rosenberg. En cuanto a la Iglesia católica, las relaciones con ella fueron reguladas por un tratado entre el Reich y la Santa Sede en julio de 1933, según el cual, como en el concordato italiano de 1929, ésta se comprometía a no interferir en la vida política a cambio de garantías acerca de la libertad de culto y de las escuelas católicas. La interpretación y la aplicación de estas garantías por parte de las autoridades nazis no tardó en revelarse muy restrictiva y en marzo de 1937 el pontífice Pío XI formuló su protesta en la encíclica *Mit brennender Sorge*, en la que se denunciaban no sólo las violaciones del tratado, sino también la ideología racista y las persecuciones de los judíos.

Pero existía una institución que, por su prestigio y por su fuerza no podía ser «sincronizada»: el ejército. Si entre los jóvenes oficiales había muchos simpatizantes del nazismo, los altos mandos seguían fieles al principio, enunciado en su tiempo por Von Seekt, del apoliticismo de la *Wermacht* como un cuerpo separado, auténtico estado dentro del estado.

Además, algunos de ellos, como el general Von Seeck, futuro jefe de estado mayor, o el coronel Von Stauffenberg, quien en julio de 1944 protagonizará un atentado contra Hitler, pensaban que el ejército tenía el deber moral de oponerse al gobierno en caso de que resultase claro que éste arrastraba al país a la ruina. En todo caso, era general la preocupación por la creciente intromisión de las SA, integradas por un millón de hombres y a cuya cabeza se encontraba un personaje, Erich Röhm, que no ocultaba sus ambiciones políticas e invocaba una «segunda revolución». La hostilidad o incluso simplemente la frialdad de la *Wermacht* era algo que Hitler no podía permitirse y por eso decidió actuar a su manera, de forma «quirúrgica». En la madrugada del 30 de junio de 1934, unidades de la policía y de las SS, un cuerpo de incondicionales nacido en origen como guardia personal del *Führer*, tomaron por sorpresa y mataron a Röhm, Strasser y un número indeterminado de sus seguidores, aprovechando la ocasión para liberarse también del general Schleicher y de su ayudante de campo. A pesar del asesinato de uno de sus más altos exponentes, la *Wermacht*, que había proporcionado los medios de transporte para la operación, no rechistó: su objetivo, la liquidación política de las SA, había sido conseguido. Pocas semanas más tarde, el 2 de agosto, moría Hindenburg y Hitler convocaba un plebiscito para pedir la unificación de los cargos de canciller y presidente, obteniendo una mayoría aplastante.

Ahora era, más que nunca, el *Führer* y con este título, además del de comandante en jefe de las fuerzas armadas, la *Wermacht*, en aquel mismo día 20 de agosto, le juró fidelidad. Por su parte, él se comprometió, con una carta dirigida al ministro de la Guerra Blomberg, a reconocer en la *Wermacht* «la única fuerza armada de la nación». Sin embargo, ello no le impidió mantener vivas y en servicio a las SS y posteriormente potenciar sus efectivos.

Así, la *Gleichschaltung* estaba terminada. Por otra parte, no cabe pensar que el *Reich* fuese una máquina perfectamente engrasada y en funcionamiento. Como sucedió en otros estados totalitarios, la centralización del poder conllevaba la formación de una serie de burocracias paralelas, cuyas competencias se entrecruzaban y con frecuencia entraban en conflicto, dando pie a una especie de «policracia» que sobrevivió incluso durante la guerra, perjudicando notablemente la eficacia del aparato productivo.

Lo que diferenciaba el tercer *Reich* de las demás dictaduras era la legitimación ideológica que reclamaba para sí. En efecto, se definía a sí mismo como una «unión popular» o *Volksgemeinschaft* de la que formaban parte como ciudadanos (*Reichsbürger*) todos los «miembros del estado de sangre alemana», quienes «con su comportamiento den prueba de estar dispuestos a adoptar y servir fielmente al pueblo y al *Reich*». Semejante definición excluía a los opositores del régimen y a los quinientos mil judíos alemanes quienes, en su calidad de *Staatsgehörige*, es decir, «miembros del estado» pero no «de sangre alemana», no gozaban de los derechos de los ciudadanos. A éstos se les prohibió no sólo contraer matrimonio con judíos, sino también mantener con ellos relaciones «extramatrimoniales». Así estaba escrito en las leyes de Núremberg de septiembre de 1935, que pueden definirse como la macabra guinda en la tarta del nazismo. En el momento de su promulgación los campos de concentración hacía tiempo que estaban en función –Dachau lo estuvo desde 1933, mientras que Auschwitz, el más tristemente famoso, fue abierto en 1941– y su población estaba en constante aumento. El mundo de los años treinta conocía otros ejemplos de totalitarismos basados en la práctica de las expulsiones, las represiones y el exterminio de masas, y en breve volveremos sobre ello. Pero ninguno de ellos asumía como principio de su legitimación el concepto biológico y bárbaro de la raza y de la desigualdad de las etnias.

El ascenso de Hitler al poder coincidió con el principio de la superación de la depresión. En enero de 1933 el número de los desempleados era todavía espantosamente alto, pero ya a finales de año había comenzado a descender. También la producción industrial daba señales de recuperación. Pero hacía falta alentar este principio de mejora de la coyuntura y a este fin el gobier-

no nazi lanzó un plan imponente de obras públicas, que preveía, entre otras cosas, la construcción de una red de autopistas. Las inversiones públicas, que entre 1928 y 1932 habían descendido llamativamente, volvieron a aumentar y ello contribuyó a la disminución del desempleo. Esto se vio facilitado también por las medidas dirigidas a excluir a las mujeres de todos los sectores de la administración pública para devolverlas al papel de madres y esposas que, según la doctrina nazi, les pertenecía. Conforme a esta misma doctrina y al mito de la defensa de los caracteres originales del pueblo alemán y de su sanidad moral, el «jefe de los campesinos del *Reich*», Walther Darré promulgó una ley de «herencia de las factorías» que sancionaba la inalienabilidad y la indivisibilidad de un número considerable de propiedades rurales. De esta forma, se pretendía frenar el flujo de inmigración hacia las ciudades, pero la ley no dio los resultados esperados.

A medida que el nivel de la vida económica se reanimaba, también aumentaba la necesidad de las materias primas –petróleo en primer lugar, pero también goma, minerales ferrosos, bauxita, etc.– de las que Alemania carecía o era pobre. También desde el punto de vista alimentario, el país no era del todo autosuficiente y la política agrícola de Darré no había contribuido a mejorar la situación, sino todo lo contrario. La balanza comercial, que hasta 1932 había permanecido ampliamente en activo, registró, a partir del primer cuatrimestre de 1934, una creciente pasividad. Dada la escasez de reservas de oro y de divisas extranjeras de las que disponía el *Reich*, esto representaba un riesgo para la estabilidad del marco y amenazaba con reactivar la espiral de la inflación, con consecuencias negativas para el nivel de las rentas, de los consumos y de la propia ocupación. La salida a este *impasse* la indicó Schacht, que Hitler, para tranquilizar a los ambientes financieros e industriales, había vuelto a colocar a la cabeza de la *Reichsbank* y que en 1934 fue nombrado ministro de Economía. En el discurso que pronunció para la inauguración de la Feria de otoño de Leipzig de 1934, el nuevo ministro esbozó las líneas de su *Neuer Plan* («nuevo plan»; el término remedaba el *New Deal* de Roosevelt), que consistía esencialmente en un intento de reglamentar el comercio exterior sobre la base de principios de complementariedad y, según la expresión del propio Schacht, del trueque. En otras palabras, a partir de ahora Alemania importaría sólo de aquellos países que estuviesen dispuestos a importar a su vez mercancías alemanas, según un criterio de compensación. Naturalmente, semejante plan comportaba la reorientación del comercio exterior alemán y la búsqueda de nuevos socios, como los países balcánicos y los de Latinoamérica: con ellos, como se ha visto, el volumen de los intercambios registró un fuerte crecimiento. Pero acuerdos satisfactorios de compensación se estipularon también con Inglaterra y con la propia Francia. Mientras tanto, se impulsaba la investigación y la experimentación de nuevos materiales sintéticos, capaces de sustituir las materias primas im-

portadas. En este campo se empeñó especialmente el gran complejo industrial de la I. G. Farben.

Pero se trataba de un modelo de desarrollo económico artificial y precario y en todo caso incompatible con las importantes inversiones en el rearme que pedían el partido y el ejército, y en particular los ministros Göring y Blomberg. Schacht era plenamente consciente de ello y se esforzó para resistir a las presiones que se ejercían sobre él. Si quería rearmarse, la única solución practicable era la de encontrar los fondos necesarios operando una reestructuración económica general que privilegiara los sectores industriales vinculados a la producción bélica respecto de los de bienes de consumo y que llevara a cabo una severa reglamentación del trabajo, incluidos los horarios y las retribuciones. Éste era el camino por el que se pronunciaba y luchaba el coronel Georg Thomas, responsable de la sección para la movilización económica de la *Wermacht*.

Hitler se negó a elegir entre «mantequilla y cañones», en el sentido de que quiso las dos cosas. A partir de 1936, los gastos en armamentos conocieron un drástico incremento, pasando de cuatro mil millones de marcos en 1934 a dieciocho en 1938 y en octubre de 1936 se promulgó un plan cuatrienal que tenía el objetivo de realizar un ambicioso programa de expansión económica orientada al rearme, cuya realización se confió a Göring, al que se otorgaron poderes muy amplios. En noviembre de 1937, Schacht fue destituido de su cargo ministerial y posteriormente fue también apartado del *Reichsbank*. Mientras, los trabajadores, en particular los especializados, continuaron percibiendo salarios adecuados y en 1938 ciento ochenta mil de ellos disfrutaron de sus vacaciones pagadas en los cruceros organizados por la *Kraft durch Freude*, la organización recreativa del DAF. En 1937 arrancó la producción del *Volkswagen* y para muchos alemanes poseer un automóvil pareció un objetivo al alcance de la mano. El desempleo había bajado hasta un nivel insignificante y a pesar de los prejuicios antifeministas del régimen, la misma ocupación femenina había aumentado. La gente volvía a tener confianza y volvía a tener hijos: Alemania fue el país «blanco» que conoció en los años treinta el mayor incremento demográfico. En suma: había mantequilla y habría cañones.

Pero Hitler y sus colaboradores se daban cuenta de que una política económica de este tipo no era sostenible a medio plazo y que los recursos internos tenían un límite. No obstante, en su opinión la solución de la que en términos económicos era una cuadratura del círculo se podía encontrar en términos políticos, y especialmente de política exterior. Se trataba de transformar el *Lebensraum* económico en el que vivía Alemania en un *Lebensraum* político. Ésta es la idea básica que se encuentra en un memorándum que Hitler redactó en el verano de 1936 en su retiro de Berchtesgarten y de cuyo contenido informó sólo a Göring y Blomberg. La idea de una expan-

sión hacia el este, mucho más allá de los territorios perdidos en Versalles, era su *Leitmotiv*. Para conseguir este objetivo era necesario, sin embargo, desvincularse de las obligaciones y los condicionamientos internacionales a los que Alemania estaba sometida.

El primer paso en este camino fue la decisión, ya mencionada, de abandonar la conferencia del desarme y la SDN, decisión que Hitler se apresuró a someter a plebiscito, obteniendo también en este caso una mayoría aplastante. Esta primera medida, que en cierto sentido podía parecer obvia, si no obligada por su propia demagogia, no fue seguida, en el transcurso de 1934-1935, por otras iniciativas capaces de suscitar particular alarma en la comunidad internacional. Si el tratado de no agresión con Polonia, en enero de 1934, despertó inquietudes en Francia, tradicionalmente aliada y protectora de Polonia, y todavía más en la Unión Soviética, otros, en cambio, lo juzgaron como una renuncia, por lo menos provisional, a la revisión de las fronteras orientales. Mayores preocupaciones suscitó el *Putsch* promovido por elementos pronazis en Viena, en julio de 1934, pero Hitler se apresuró a declarar su desvinculación de los hechos y a llamar a consulta a su embajador en Viena. La reacción más resentida fue la de Italia, que envió sus tropas a la frontera con Austria. La temida perspectiva de una convergencia entre los dos dictadores parecía así alejarse, lo que constituía otro elemento de tranquilidad. Así se explica cómo, al vencer el término previsto por el tratado de Versalles, en enero de 1935, pudo celebrarse el referéndum para decidir el destino del Sarre. Ésta era una región católica caracterizada por una fuerte presencia obrera; no obstante se expresó con aplastante mayoría en favor de la anexión al *Reich*.

A partir de 1935, a medida que el nuevo curso económico y el plan cuadrienal iban desarrollándose, la política exterior del nazismo cambió de registro y de tono. Pero de eso nos ocuparemos más adelante. En ese momento, a raíz de la llegada del nazismo al poder en Alemania y a pesar de las rencillas pasajeras entre Hitler y Mussolini, el fascismo había dejado de ser un fenómeno italiano para convertirse en un fenómeno internacional. Partidos y movimientos fascistas o profascistas se habían formado e iban consolidándose en muchos países europeos: en la Austria de Dollfuss, en los países de la Europa oriental, en Bélgica, con los rexistas de Degrelle, en Francia, con el movimiento francista, en España, con la Falange de José Antonio Primo de Rivera, en Finlandia y en los países bálticos, y en la misma Inglaterra, con Mosley. Paralelamente, también el antifascismo se convirtió en un fenómeno internacional, una orientación general en la que se reconocían y convergían no sólo los partidos de la izquierda obrera, sino también amplios sectores de la opinión pública europea e internacional. A la formación de esta orientación antifascista contribuyó notablemente la masiva emigración de políticos e intelectuales desde Alemania. La lista de sus nombres es de-

masiado larga como para no correr el riesgo de omisiones: bastará con recordar los nombres más conocidos, como los de los hermanos Mann, de Albert Einstein, Walter Cropius y Bertold Brecht. Entre los políticos, recordemos a los dirigentes socialdemócratas que reconstituyeron en Praga el partido que Hitler había disuelto y a Willy Münzenberg, que orquestó la campaña de solidaridad hacia Dimitrov, quien, acusado de haber participado en el incendio del *Reichstag*, llegó a transformar su proceso en un acto de acusación contra el nazismo.

Así pues, la instauración del nazismo en Alemania estuvo en el origen de una de las mayores migraciones de intelectuales de la historia contemporánea. Una de sus consecuencias fue la disgregación de lo que quedaba de la comunidad científica que la primera guerra mundial había puesto en crisis, pero no destruido. Tampoco la ciencia se libraba de la compartimentación y la división del mundo. Los avatares de los físicos, quienes, como Einstein o Szilard, se fueron a Norteamérica y quienes, como Heisenberg y Von Weiszächer, siguieron trabajando en Alemania, avatares que tuvieron su epílogo en Hiroshima, son demasiado conocidos para que sea necesario recordarlos. También esta disgregación y esta instrumentalización de la ciencia forman parte del precio que la humanidad ha pagado por el nazismo y también éste fue un aspecto no secundario del triste inventario y del balance desolador que tienen que hacer quienes evoquen la historia de los años entre las dos guerras.

14

La URSS de Stalin y el estalinismo

Hacia finales de 1927 el equilibrio precario entre ciudad y campo que se había establecido en los años de la NEP dio señales evidentes de deterioro. La diferencia entre los precios de los productos agrícolas y los industriales se había ampliado en beneficio de estos últimos y los campesinos estaban cada vez menos dispuestos a proporcionar su trigo a un estado que no les ofrecía precios competitivos y que no estaba en condiciones de satisfacer su demanda de mercancías. Así, a partir de octubre de 1927 las cuotas de trigo que se entregaban a los silos de grano fueron poco a poco reduciéndose y en consecuencia la situación alimentaria de las ciudades, ya inestable, empeoró. El racionamiento de los géneros de primera necesidad, del que se comenzó a hablar a principios de 1928, se hizo efectivo en febrero de 1929. En algunas fábricas de Moscú se produjeron huelgas, y el valle del Don, vital para la economía del país, estaba continuamente agitado por las protestas obreras. Si la situación no era comparable a la dramática de 1921, podía serlo en poco tiempo y los gobernantes del país eran conscientes de ello. Se daban cuenta de que el ciclo de la NEP se iba agotando y por tanto la superación de las dificultades a las que se enfrentaban no podía darse, como hasta entonces había sucedido, mediante ajustes o rectificaciones, sino a través un programa de amplio alcance. Por otra parte, eso no era posible sin potenciar y ensanchar la base industrial, lo que a su vez postulaba la elaboración y la puesta en marcha de un «plan». A fin de cuentas, aunque en términos genéricos, así se había expresado el XV Congreso del partido, el que había significado la derrota definitiva de la oposición, aquella misma oposición que con mayor decisión había defendido la necesidad de una política de planificación (véase cap. 2). Pero quedaban por establecer las modalidades, las prioridades y los plazos de este nuevo ciclo. No se trataba sólo de decisiones económicas: la adopción de una u otra variante implicaba una previsión de

los posibles escenarios internos e internacionales, tanto desde el punto de vista económico como político. La complejidad de los problemas y la dificultad de las previsiones hacían inevitables las divergencias en el seno del grupo dirigente y del propio *Politburó*, pero a principios de 1928, éstas no parecían irreconciliables.

Nadie, incluido Stalin, proponía entonces una colectivización integral de la agricultura tal y como se llevará a cabo en los años siguientes o un plan quinquenal tan ambicioso como el que se aprobará al cabo de un año. Entre la perspectiva de un desarrollo equilibrado e integrado en la división internacional del trabajo, tal como la exponía Bujarin, y la de una planificación más acelerada, el acuerdo, o incluso sólo el compromiso, era posible. Se trataba de establecer la forma y la medida del mismo.

Sin embargo, para que un acuerdo o un compromiso fuesen posibles era necesario un instrumento político distinto del que se había ido fraguando tras la muerte de Lenin, es decir, un partido que tuviese las características de un auténtico organismo político, encabezado por un grupo dirigente política e intelectualmente autorizado y representativo de las varias tendencias existentes en el país y no de las de una organización burocrática con una estructura rígidamente jerárquica. A lo sumo, ya que algunas de las ideas de la oposición trotskista habían sido reconocidas como válidas, se podía incluso tomar en consideración la posibilidad de solucionar el conflicto con ella y recuperar a sus hombres y sus competencias.

Pero esto era lo que Stalin *no* quería. No sólo porque ello comportaría una retractación de su acción o incluso su desautorización, lo que era obvio, sino también porque Stalin seguía convencido de que sólo un partido «monolítico» era el instrumento idóneo para actuar con tempestividad y eficacia y para conseguir el éxito. Puesto ante la necesidad de elegir, él se decantaba, pues, por aprovechar la «ocasión» que se le ofrecía para reafirmar su propia concepción política y su propio poder personal y posponer, en cambio, el meollo de la cuestión. Si consideraba que no se encontraba en condiciones de hacer una elección, conciliaba y aceptaba los compromisos. En caso contrario, no vacilaba en actuar con la máxima determinación y con crueldad. Ésta es la única forma de coherencia que se puede detectar en su comportamiento político entre 1928 y 1933, un período crucial para la historia soviética. Es más, desde el punto de vista del contenido de sus decisiones, la suya fue una política incoherente y sin rumbo, una serie de actos imperialistas unilaterales. De Lenin, del que se declaraba discípulo fiel, sólo había aprendido la máxima de *on s'engage et puis on voit.*

El primero de estos actos de imperio fue el proceso que la GPU instruyó, sobre la base de pruebas inconsistentes, contra un grupo de técnicos e ingenieros, algunos de ellos alemanes, con la acusación de haber saboteado la producción minera de Sachty, en el valle del Don, proceso al que se dio

gran publicidad. Al señalar ante la opinión pública a unos extranjeros e intelectuales como responsables de las dificultades económicas, se contaba con una reacción psicológica popular que de hecho se produjo, y en una medida considerable. Pero muy distinta fue la reacción de los dirigentes políticos que eran más conscientes y estaban alarmados por las consecuencias negativas que el deterioro de las relaciones con la *intelligentsia* técnica y con los socios extranjeros tendría para la economía del país y sus mismas relaciones internacionales. El presidente del *Sovnarkom*, Rykov, el presidente de la Internacional Comunista, Bujarin, y el jefe de los sindicatos, Tomsky, no ocultaron sus preocupaciones y cuando, en julio de 1928, habiendo llegado el proceso a su conclusión con la petición por parte del fiscal de veintidós condenas a muerte, se consultó sobre la cuestión al *Politburó*, ellos votaron en contra. Así, sólo cinco de las condenas a muerte fueron ejecutadas y entre los condenados no hubo ningún alemán.

La división que se había producido con ocasión del proceso de Sachty no se hizo pública y la sesión del Comité Central que se celebró después terminó con la votación de un documento ambiguo. Evidentemente, Stalin todavía no se sentía en condiciones de lanzar el ataque y esperaba la ocasión favorable. De momento, no perdía ocasión de intentar apartar de sus posiciones a los que consideraba como adversarios. Así lo hizo durante el VI Congreso de la Internacional Comunista de julio de 1928, maniobrando entre bambalinas en perjuicio de Bujarin y así lo hizo también en la organización de Moscú en perjuicio de su responsable, Uglanov, del que eran notorias las simpatías hacia el ala moderada del partido.

Por su parte, Bujarin, viendo las orejas al lobo, tomó contacto con la oposición y el 11 de julio celebró una reunión con Kámenev. Y cuando, en enero de 1929, un volante clandestino trotskista dio la noticia del encuentro, Stalin aprovechó la ocasión para pasar a la ofensiva, poniendo en el orden del día del *Politburó* la cuestión de la condena de Trotsky al exilio. El golpe había sido asestado a la izquierda, pero estaba claro que con él se quería afectar a los delegados que no habían tenido reparos en contactar con la oposición. Pero hay más: lo que se quería perjudicar era la posibilidad misma de la disensión política dentro del partido. Bujarin, Rykov y Tomsky eran conscientes de ello y votaron en contra del envío de Trotsky al exilio. Stalin respondió atacándoles violenta y públicamente durante el pleno del Comité Central de abril. Su liquidación política ya era sólo una cuestión de tiempo: en diciembre de 1928 Tomsky había sido apartado de la dirección de los sindicatos; en julio de 1929 le tocó a Bujarin ser apartado de la presidencia de la Internacional. La exclusión del *Politburó* de los «derechistas» se produjo poco a poco: Bujarin fue excluido en noviembre de 1929, Tomsky en julio y Rykov en diciembre de 1930.

Mientras, la situación económica no daba señales de mejora, sino al contrario. Las requisiciones y las confiscaciones llevadas a cabo en el campo

con los métodos ya experimentados durante la guerra civil, si bien valieron para tapar temporalmente unos cuantos agujeros, aumentaron la atávica desconfianza de los campesinos hacia el poder. La cosecha de 1928 fue ligeramente superior a la del año anterior, pero las entregas a los centros de abastecimiento resultaron todavía más reducidas. Aún era posible dar marcha atrás, pero Stalin ya había quemado demasiados puentes a sus espaldas. Una retirada o incluso sólo una pausa hubiera mermado su posición y comprometido su prestigio. Por lo tanto, decidió seguir adelante y jugar al azar.

Hacía tiempo que en las oficinas del *Gosplan* y del Consejo Superior de Economía (VSNC) estaba en preparación la elaboración de un plan quinquenal. La discusión acerca de los objetivos y de los plazos era muy encarnizada y a final se acordó presentar dos variantes, una «mínima» y una «máxima». A petición de Stalin, la XVI Conferencia del partido de abril de 1929, que se celebró inmediatamente después del pleno en el que había lanzado el ataque contra la «oposición de derecha», aprobó la variante máxima. El primer plan quinquenal (*piatiletka*), que cubría el período entre octubre de 1928 y septiembre de 1933, comenzó así con varios meses de retraso respecto de la fecha prevista por sus autores y ello constituía un aliciente más para acelerar los plazos. Entre los presupuestos y las previsiones del plan se encontraba la de una marcha regular de las cosechas y por tanto se planteaba el problema de encontrar los instrumentos adecuados para asegurar dicha regularidad. Desde los años de la NEP, existían varias formas de cooperativas agrícolas (*koljoz*), desde la más blanda del *toz*, a la de la *artel* (la comuna), además de las granjas estatales (los *sovjoz*), pero éstas no explotaban sino una porción irrelevante de las tierras de cultivo y hasta entonces se les había prestado escasa atención. El «plan cooperativo» auspiciado por Lenin se había quedado en papel mojado. Fue precisamente en el transcurso de 1929 cuando se comenzó a encontrar en la gran finca agrícola, colectivizada y modernizada, la solución al crónico problema agrícola sin tener que recurrir, como se había hecho en el pasado, a drenajes forzados y medidas de emergencia. Por lo tanto, en la XVI Conferencia se acordó que en el desarrollo de la *piatiletka* cerca del 20 % de los *dvory*, correspondiente a una población de cinco o seis millones, se asociarían en cooperativas. En 1929 se contaban ya 57.054 *koljoces*, en los que se empleaba el 3,6 % de la población agrícola y en octubre este porcentaje había subido al 7,6 %. Para sostener y alentar este nuevo curso hubiera sido necesario disponer de una base técnica adecuada, pero ésta no existía. A finales de 1929 había en la URSS sólo 34.943 tractores y 35.000 conductores y la nueva fábrica de tractores de la que se hablaba desde 1924 se había empezado a construir sólo en 1929. Además, quedó claro que muchos campesinos habían aceptado el *koljoz* sólo para no correr el riesgo de requisiciones, a la espera del desarrollo de los acontecimientos y de tiempos mejores. Había, pues, buenos motivos para

proceder con prudencia, pero Stalin estaba decidido a quemar etapas. El 5 de enero de 1930, como culminación de una serie de reuniones, se promulgó una *postanovelnie* en la que el objetivo de la colectivización en la forma de la *artel* se extendía a la gran mayoría de las tierras. Los supuestos *kulaky* –se calculaba que sumasen cuatro o cinco millones– habían de ser liquidados «como clase», lo que significaba ser expropiados y deportados. A este fin, en consideración de la crónica debilidad de las organizaciones del partido en los campos, se enviaron al campo a veinticinco mil militantes obreros cuya fidelidad estaba asegurada, pero esto no bastaba desde luego para garantizar el éxito de la operación. Así que se recurrió a la GPU e incluso al ejército. A esta declaración de guerra en plena regla, el campesinado respondió con la resistencia, los saboteos, las revueltas o el asesinato de los comunistas enviados desde las ciudades. Sólo en 1930 se contaron 13.754 agitaciones que involucraron a millones de campesinos. Pero la forma más generalizada de protesta consistió en el sacrificio del ganado y en la amenaza de abstenerse de la siembra. Un nuevo y más grave fracaso de la campaña de acopios tendría efectos devastadores y Stalin se vio obligado a dar marcha atrás. Lo hizo publicando en el *Pravda* del 2 de marzo un artículo significativamente titulado *Vértigo de éxitos*, en el que achacaba a los cuadros intermedios del partido responsabilidades que eran únicamente suyas. Durante la primavera, muchos campesinos que se habían visto obligados a entrar en el *koljoz* salieron de éste, y el ritmo de la colectivización marcó un compás de espera, o incluso disminuyó. Las siembras pudieron así salvarse e incluso la cosecha de 1930 resultó superior a la de los años anteriores. Superada esta fase crítica, las colectivizaciones y las deportaciones se reanudaron y esta vez ya no habría pausas ni piedad. Con un decreto de agosto de 1932, los robos a los habitantes de *koljoces* se declararon castigados con la pena de muerte y se calcula que fueron millones los campesinos deportados, ya fuesen verdaderos *kulaky* o sospechosos de serlo. En efecto, si en términos sociológicos la definición de *kulak* era problemática, en términos políticos estaba muy clara: era un *kulak* cualquiera que «las autoridades declarasen como tal» (Lewin, 1988, p. 113). La colectivización fue, de hecho, una segunda guerra civil y el propio Stalin, conversando en Moscú con Churchill en 1944, declarará que había sido una prueba más dura que la misma guerra mundial. A finales de 1932, quince millones de familias campesinas, el equivalente al 61-62 % de toda la población rural, estaban encuadradas en los *koljoces*. En los años siguientes este porcentaje fue aumentando hasta cubrir casi la totalidad de las tierras.

Por lo que respecta a la industria, la marcha del primer plan quinquenal también presenta un ritmo convulso e irregular. Las cifras previstas en el esquema original fueron revisadas repetidas veces, siempre al alza, y los plazos se acortaron. A principios de 1933, con un año de adelanto sobre las previ-

siones, el primer plan quinquenal se declaraba concluido y ya en febrero de 1932 se habían elaborado directrices y compromisos para el segundo. La presión y los esfuerzos inmensos a los que el país había sido sometido durante cuatro años produjeron resultados imponentes, aunque inferiores a las previsiones y a los objetivos. Al comprobar los datos de las estadísticas oficiales, cuya fiabilidad ha sido puesta en duda, se puede constatar fácilmente que los resultados más relevantes se dieron en los sectores de la industria de la extracción y pesada, mientras que fueron más modestos en la industria ligera y de bienes de consumo. Estos desequilibrios eran, en primer lugar, las consecuencias de medidas tomadas desde arriba con el fin de concentrar los esfuerzos en los sectores considerados más estratégicos, pero también dependían de un estilo de trabajo basado más en el «trabajo a destajo» (*udarniki*) que en una programación racional. Es significativo, a este propósito, que el estreno del primer plan quinquenal coincidió con el abandono de las investigaciones que, en los años de la NEP, se habían desarrollado con el fin de introducir en la Unión Soviética una «organización científica del trabajo» basada en la experiencia del taylorismo norteamericano y con la desaparición del organismo que se ocupaba de ellas, la NOT (*Naucnaya organizacya truda*). Más que de una economía planificada cabe hablar, pues, de una economía de mando. En cuanto a la agricultura, el único resultado obtenido con la colectivización forzada fue el de estabilizar y aumentar la cuota de los productos entregados al estado (del 12-14% de la cosecha en los años de la NEP hasta casi el 40% en 1934), lo que permitió, entre otras cosas, exportar, entre 1930 y 1931, cerca de diez millones de toneladas de trigo. Sin embargo, puesto que la producción total, tras la cosecha favorable de 1930, volvió a niveles inferiores a los de los años veinte y que la consistencia del patrimonio ganadero se había quedado prácticamente en la mitad, ello significaba que las reservas disponibles para la población campesina se habían reducido de forma dramática. La prueba trágica de ello se dio cuando, a partir del otoño de 1932, una tremenda carestía –la primera carestía artificial de la historia, como se ha escrito– asoló los campos rusos, produciendo un número impreciso pero muy elevado de víctimas. La estimación más alta es de seis millones (Werth, 1997); la región más afectada fue Ucrania. En el censo de 1937, cuyos datos no se hicieron públicos y han sido divulgados sólo recientemente, la población de la Unión Soviética resultaba, así, aumentada en cerca del 10% respecto del anterior censo de 1926, y la de las ciudades resultaba duplicada, pero un estudio más detallado de las cifras demuestra que en algunos *oblast*, en particular los de Ucrania occidental y Kazajistán, se registraba una disminución y, en general, la relación entre los sexos se había ido modificando en favor de las mujeres y las edades en favor de los ancianos.

Un balance del plan quinquenal y de la colectivización no puede realizarse en términos de comparación o compensación entre las metas alcanza-

das en algunos sectores industriales y su dramático fracaso en la agricultura. El que salió del huracán que lo había atravesado era un país nuevo y desconocido. Millones de campesinos habían encontrado trabajo, y refugio, en las grandes obras del plan quinquenal. De los doce millones y medio de ciudadanos soviéticos que entre 1928 y 1932 entraron en la industria, nada menos que ocho millones y medio procedían del campo y la tasa de incremento de la población urbana entre 1926 y 1939 fue de un 6,5 % anual, con picos del 10 % hacia finales de los años treinta. Los nuevos inmigrantes se llevaron a las ciudades sus costumbres, sus relaciones sociales, sus prejuicios, con la consecuencia de una cierta «ruralización» de la vida ciudadana. A un ritmo todavía mayor que la obrera, había aumentado la población estudiantil, que en vísperas de la segunda guerra mundial sumaba ya más de treinta y cinco millones contra los ocho de los años 1915-1918. El cuadro general era, pues, el de una movilidad social sin precedentes en la historia moderna –ni siquiera en los tiempos de la revolución industrial británica– y la formación social que resultó del conjunto de estas mutaciones se caracterizaba ante todo por su naturaleza magmática.

Tras cuatro años de trastornos y de traumas, el país necesitaba una pausa, un respiro, y los hombres en el poder eran conscientes de ello. En enero de 1933, el Comité Central decidía la reducción de los ritmos y de los objetivos previstos para el segundo plan quinquenal y, aunque posteriormente en el XVII Congreso del partido, en 1934, las cifras volvieron a ser modificadas al alza, nunca volvieron a los niveles astronómicos previstos en origen. En general, el segundo plan quinquenal, que concluyó en 1937, tuvo una andadura menos convulsa que el primero y sus resultados fueron mejores, aunque seguía siendo notoria la desproporción entre los sectores de la industria pesada y los de la industria ligera.

Ello era en gran medida la consecuencia del peso creciente de las inversiones destinadas al rearme, que en 1934 resultaron quintuplicadas respecto de 1928 y no cesaron de aumentar también en los años siguientes. En los campos el control que el partido ejercía mediante los círculos políticos (*politotdely*), a los que el Comité Central de enero de 1933 había confiado la supervisión de los *koljoces*, siguió siendo extremadamente estricto, aunque de forma menos militar y arbitraria. Las relaciones entre los *koljoces* y el estado se fueron regulando poco a poco y en febrero de 1935 un congreso de campesinos *udarniky* (de asalto) aprobó un estatuto de la *artel* campesina. Así, en noviembre de 1934 pudo ser abolido el racionamiento del pan.

A esta relativa relajación de la presión ejercida sobre el país, correspondió una distensión, también relativa, de las relaciones internas del partido y del grupo dirigente, que en los años de la colectivización habían sido muy tensas. En los varios procesos que se habían instruido contra supuestos partidos clandestinos o grupos «fraccionaristas» habían sido condenados, en

efecto, prestigiosos representantes del mundo intelectual soviético, como los economistas Kondratev y Kayanov, y autorizados dirigentes del partido, como el georgiano Lominadze, que algunos señalaban como el sucesor de Stalin. Es en esta atmósfera cargada de sospechas donde cabe situar el suicidio de la joven esposa de Stalin, Nadezda Alleluyeva.

Una primera señal de inversión de la tendencia se dio en el otoño de 1932, cuando la mayoría del *Politburó* se negó a aceptar la petición de Stalin de condenar a muerte a Rjutin, un colaborador de Bujarin que desde el campo de concentración en el que se encontraba había conseguido hacer llegar a Moscú un memorial en el que criticaba duramente la política de Stalin. Posteriormente, en el ya mencionado pleno de enero de 1933, Bujarin, Rykov y Tomsky hicieron su *rentrée* política, aunque para pronunciar unos discursos de autocrítica. Además, Bujarin fue nombrado director de *Izvestia* y se le dio el encargo de presentar la ponencia ante el congreso de los escritores en agosto-septiembre de 1934, lo que quiso ser un gesto de reconciliación entre el poder y la *intelligentsia*. Ahí habló también Boris Pasternak. Pero la novedad de mayor envergadura no era la recuperación, por otra parte en una posición subordinada, de algunos representantes históricos del bolchevismo, sino más bien el auge de nuevos cuadros dirigentes que se habían formado en la dura experiencia de la colectivización y del plan quinquenal. Éstos, naturalmente, eran devotos al partido, pero gracias al contacto directo con la realidad y los sufrimientos del país habían tenido la posibilidad de constatar personalmente el daño provocado por una línea política errática como la de Stalin y, en consecuencia, eran partidarios de un curso político más estable y menos personalista y de un sistema político autoritario, pero no despótico. El más autorizado entre ellos era el secretario de la organización de Leningrado, Serguei Mironovich Kirov. En el XVII Congreso del partido, en enero de 1934, éste obtuvo un importante respaldo, mientras que, al parecer, a Stalin le faltaron algunos votos. Incluso parece ser que se le ofreció a Kirov el puesto de secretario del partido, pero él lo rechazó. El 1 de diciembre de 1934 Kirov fue asesinado en el palacio del Smolny de Leningrado por un joven comunista, Nikolaev.

A pesar de que todo el asunto mantiene puntos oscuros y la responsabilidad de Stalin en el asesinato ha sido recientemente puesta en duda, lo cierto es que, en todo caso, éste aprovechó la ocasión del asesinato para dar un giro radical y emprender un nuevo y siniestro curso político. No era hombre que dejara que se le quitara el control de la maquinaria política que él mismo había plasmado, y tampoco lo compartiría con otros.

Los años entre 1935 y 1939 representan el período más negro de toda la historia soviética, salpicados como están por el sucederse de grandes procesos políticos, de los que salió prácticamente destruida toda la vieja guardia bolchevique. En 1935 se celebró el primer proceso contra el grupo de Zi-

nóviev y Kámenev, que se resolvió con la condena a penas de cárcel; en 1936 el segundo, contra el mismo grupo, que terminó con la condena a muerte de los principales imputados; en 1937 tuvo lugar el proceso en el que los principales acusados eran Piatakov y Radek y en junio del mismo año se procesaron a Tujachevsky y a otros altos oficiales del ejército rojo; finalmente, de 1938 es el proceso contra Rykov, Bujarin y otros representantes de la oposición de derechas. No hubo sector alguno del aparato de poder que se librase de la represión: en primer lugar, el partido, en el que dos tercios de los miembros del Comité Central elegido en el XVII Congreso fueron asesinados, pero también el ejército y la misma policía política, cuyo jefe, Jagoda, tras ser sustituido por el sanguinario Ezhov, fue procesado y condenado a muerte. Se produjeron, además, suicidios, como el de Ordzonikidze, y muertes sospechosas. Del millón setecientos mil miembros del partido que fueron expulsados a raíz de la purga promovida por Stalin ya con anterioridad al asesinato de Kirov, la gran mayoría acabó en campos de concentración o suprimida, y con ellos muchísimos ciudadanos soviéticos, ilustres o anónimos. El cálculo del número total de víctimas ha sido objeto de polémicas y valoraciones distintas, según se incluyan o no en su número las víctimas de la carestía de 1932. En todo caso, se trata de cifras escalofriantes que rondan los dos millones. Ésta era la trágica realidad que se ocultaba tras la fachada de la Constitución de 1936, de la que Stalin exaltó el carácter democrático y en la que había trabajado el moribundo Bujarin. La acusación más frecuente que se dirigía a los imputados en los procesos estalinistas era la de espionaje, de acuerdo con la teoría del propio Stalin del «cerco capitalista» y la exacerbación de la lucha de clases. A medida que se reforzaba el estado soviético, el capitalismo internacional multiplicaba sus esfuerzos para derrumbarlo, contratando a espías y saboteadores. En realidad, cuando, entre 1928 y 1929, la Unión Soviética puso en marcha su primer plan quinquenal, la alarma por el «peligro de guerra» que había recorrido el país durante la primera mitad de 1927 ya se había desvanecido. A finales de 1927 la URSS había sido invitada a participar en la comisión para la preparación de la conferencia sobre el desarme y en 1928 se había adherido, con un protocolo adicional, al pacto Briand-Kellogg. En 1929, el gobierno de MacDonald había restablecido las relaciones diplomáticas con los soviéticos y también habían mejorado las relaciones con Alemania, Francia e Italia. En los Estados Unidos, influyentes círculos económicos, interesados en exportar a la Unión Soviética (en 1931 ésta absorbió el 65 % de las exportaciones norteamericanas de bienes de consumo), presionaban para que se llegase a su reconocimiento, lo que, como se ha visto, se produjo en 1933. Finalmente, y como también veremos, en 1934 la URSS fue admitida en la SDN. Sin embargo, existían motivos de preocupación. En las fronteras orientales, la ocupación japonesa de Manchuria constituía un motivo real de alarma, sólo

parcialmente compensado por el restablecimiento de las relaciones con China. El ascenso de Hitler al poder, que, por otra parte, se había producido en una fecha en que el primer plan quinquenal ya era un hecho consumado, representaba sin duda un elemento nuevo e inquietante, aunque no parece que hasta la liquidación de las SA en junio de 1934 Stalin se hubiese percatado de toda su peligrosidad. De todas formas, quedaban márgenes para la iniciativa diplomática soviética, sobre todo porque nunca como entonces –si se exceptúan los días de Stalingrado– la imagen que prevaleció de la Unión Soviética fue la de un país que, en un mundo sacudido por la crisis, estaba empeñado en un esfuerzo colosal de edificación económica. Ni siquiera los grandes procesos, aunque suscitaron una profunda impresión e indignación, pudieron ofuscar esta imagen. El libro del matrimonio Webb, en el que el comunismo soviético era definido como «una nueva civilización», es de 1935. Más adelante veremos cómo Stalin supo –o no supo– utilizar estos márgenes y este prestigio.

Como conclusión de este capítulo es natural preguntarse si una alternativa al estalinismo habría sido posible. Una respuesta afirmativa a este interrogante está –creo– implícita en la reconstrucción que se ha intentado hasta aquí y que se basa en los resultados a los que han llegado la investigación y el análisis más recientes, tanto en Occidente como en Rusia. Al interrogante planteado por Alec Nove en el título de uno de sus ensayos, se puede, pues, responder que Stalin no era necesario.

Sin embargo, ya que una alternativa *no* se dio, es preciso preguntarse por qué el estalinismo pudo triunfar a pesar de las tremendas tensiones que él mismo había generado, y superando pruebas, incluida la invasión alemana en la segunda guerra mundial, muy arduas. Es preciso plantearse, en resumen, la misma pregunta que Palmiro Togliatti se planteaba en Moscú acerca del fascismo italiano. ¿En qué consistió la «fuerza» del estalinismo? La comparación con los regímenes fascistas y la inclusión del estalinismo en el común denominador de «totalitarismo», en mi opinión, no sirve de mucho. Si bien es cierto que los extremos se tocan, también es cierto que se trata, precisamente, de extremos, de sistemas políticos basados en principios opuestos. Pero, al margen de estas consideraciones generales, cabe reparar en que tanto en Alemania como en Italia, la instauración de regímenes fascistas tuvo lugar en un contexto social y político articulado y complejo, que siguió siendo tal también *después* del ascenso de Mussolini y Hitler al poder. En otras palabras, tanto el uno como el otro tuvieron que ajustar cuentas con los aparatos burocráticos, con el ejército, con los ambientes económicos, con las iglesias y con una opinión pública marcada por décadas de experiencia política democrática. Por lo tanto, además del arma de la represión y del terror, ambos se vieron obligados a utilizar también el arte del compromiso y aceptar condicionamientos y limitaciones.

En la Rusia devastada por siete años de guerra, de guerra civil y de carestía, empobrecida por una emigración intelectual sin precedentes, y cuyo principal recurso era una agricultura en la que la diferencia entre campesino pobre y campesino rico consistía en poseer unas *dejatina* de tierra o algún ejemplar de ganado más o menos, estos condicionamientos y estos límites eran lógicamente menores. En este sentido – y se quiere a toda costa utilizar este término– el estalinismo fue *más* totalitario que los regímenes fascistas. Naturalmente, el que no estuviera obligado a medirse con una opinión pública curtida y con una sociedad estructurada, no significa que actuara en un vacío, sin encontrar resistencias. El campesino, al que se obligaba a entrar en el *koljoz*, se vengaba sacrificando su ganado, y el obrero del plan quinquenal, si no podía hacer huelgas, podía trabajar a desgana, sabotear o incluso, como sucedió en algunos casos, recurrir al luddismo. El edificio del régimen estalinista corría el riesgo, así, de hundirse en las arenas movedizas de una sociedad magmática y quedar atrapado en la red de burocracias paralelas que él mismo había creado. Si eso no sucedió, o sucedió en medida parcial, fue porque el estalinismo supo atraer y canalizar una cierta dosis de consenso y encontrar puntos de apoyo en el terreno resbaladizo que pisaba. Estaban ciertamente del lado de Stalin los miles de cuadros obreros que, conscientes de los riesgos que corrían, se lanzaron a los campos para combatir a los *kulaky*. Una singular y volátil forma de consenso fue además la del movimiento stajanovista, expresión del radicalismo plebeyo típico del valle del Don.

Pero en cualquier caso se trataba de minorías. El principal apoyo a la política de Stalin se realizó mediante la reconstitución de aquel modelo jacobino que, como se ha visto, había sido operativo durante la guerra civil: como entonces, se produjo un nuevo flujo de afiliaciones al partido, cuyos miembros, entre efectivos y candidatos, aumentaron de 1.212.505 en 1927 a 3.117.250; como entonces, los recién llegados eran sobre todo jóvenes y como entonces el tradicional contraste entre generaciones, entre «padres» e «hijos», influyó en gran manera en el desarrollo de los acontecimientos. Pero la «fuerza» del estalinismo no consistía tanto en el consenso activo y en ocasiones fanático de sus partidarios como, más bien, en una suerte de «hipnosis de masas» que el líder ejercía sobre multitudes para las que la desconfianza hacia todo lo que era extranjero y la confianza en un zar lejano pero implacable contra los arbitrios de su *bojari* y de sus funcionarios, un «pequeño padre», el *batiuska*, eran una tradición arraigada, casi un reflejo condicionado. Es en este *humus* profundo donde ahonda sus raíces el culto a Stalin. Su primera manifestación oficial se produjo el 21 de diciembre de 1929, con ocasión del 50º cumpleaños del dictador, y desde entonces no se dejó escapar ninguna ocasión para exaltar su persona en términos cada vez más excesivos. Nada es más distinto del hombre tosco, caprichoso y cruel que Stalin era en la realidad, que la imagen tranquila y segura que sus retratos difun-

dían en cada rincón del inmenso país. Y sin embargo, para muchos Stalin *era* aquella imagen y aquel icono. La guerra que Stalin había temido, pero a la que había llegado sin preparación, dará cuerpo y realidad a esta imagen. Se consolidará así una formación social sin precedentes en la historia, en la que islas de modernidad convivían con océanos de atraso, el terror convivía con la esperanza, y para la cual es difícil encontrar una definición que no sea negativa. En efecto, no se trataba de una sociedad capitalista, pero desde luego tampoco era, como en cambio se proclamaba, una sociedad socialista. Pero de cualquier manera que se la juzgara, existía, y esto, para amigos y enemigos, era lo esencial.

15

El fracaso de la seguridad colectiva

Tras la retirada de Alemania de la conferencia sobre el desarme, ésta se arrastró inútilmente durante unos meses, hasta que, en junio de 1935 se aplazó *sine die*. No sólo, como se ha visto, no había conseguido ningún resultado, ni siquiera parcial, sino que su fracaso coincidió –cuando no la estimuló– con una nueva fase de la carrera armamentística.

A partir de 1934 el gasto en la defensa de las grandes potencias conoció, en efecto, un dramático incremento, aunque con un ritmo y una intensidad diversos. Los incrementos mayores fueron los de la Unión Soviética, de Japón y de Alemania, mientras que en los países de Europa occidental, Italia incluida, y más aún en los Estados Unidos, los aumentos en el gasto militar fueron más contenidos. Pero en el análisis de estas cifras cabe tener en cuenta la diferencia de puntos de partida y el diverso potencial industrial de cada país, además de los aspectos cuantitativos y cualitativos. Los países que, como Inglaterra y Estados Unidos, comenzaron más tarde su política de rearme se vieron favorecidos desde un punto de vista tecnológico respecto de los que ya estaban en este camino con anterioridad, cuyos armamentos al principio de las hostilidades quedaron parcialmente obsoletos. Baste con pensar en el radar, cuya instalación, entre 1936 y 1939, sirvió para asegurar a Inglaterra una protección eficaz contra los ataques aéreos. Finalmente, cabe tener en cuenta la relación entre política de rearme y objetivos generales de política exterior o, en otros términos, la funcionalidad del rearme.

Una vez comenzada, la carrera armamentística difícilmente podía detenerse; antes bien, como había sucedido en 1914, se ponía en marcha un proceso de automatismo prácticamente imparable. En particular, los que se habían quedado atrás tenían que apresurarse para recuperar el tiempo perdido.

Así, en marzo de 1935, el gobierno británico presentó al Parlamento un «libro blanco» en el que se perfilaba y se solicitaba un incremento de los gas-

tos militares y casi al mismo tiempo, en Francia el gobierno de Laval avanzó la propuesta de prolongar el servicio militar de uno a dos años; mientras, se trabajaba con intensidad en la construcción de la línea Maginot, que se terminó en 1936. La réplica de Alemania no se hizo esperar: el 16 de marzo de 1935, Hitler hizo pública su decisión de volver al reclutamiento obligatorio y aumentar los efectivos del ejército de los cien mil hombres previstos en el tratado de Versalles a quinientos cincuenta mil.

La conferencia de Ginebra había concluido, como se ha visto, sin que se aprobara ninguna de las propuestas que se habían avanzado para limitar o prohibir el uso de armas susceptibles de implicar a la población civil en las operaciones bélicas. Por consiguiente, el rearme afectó a todos los sistemas armamentísticos y en especial a la aviación y las armas químicas. En marzo de 1935, Hitler anunció que Alemania disponía de aviación militar y así la carrera del rearme aéreo recibía un nuevo impulso. La pesadilla de la guerra aérea o, como se decía, de la guerra aeroquímica, se fue así extendiendo a medida que en las ciudades europeas se organizaban simulaciones de ataques aéreos enemigos, con distribución de máscaras antigás, construcción de refugios y planes para la evacuación de la población de las ciudades. Se trataba, en opinión de muchos, de medidas de dudosa eficacia, cuyo único efecto era el de preparar a la población para aceptar psicológicamente la eventualidad de una guerra. Científicos eminentes, como el francés Langevin y el inglés Bernal, se implicaron especialmente en denunciar esta campaña de condicionamiento psicológico. Sobre estos temas se desarrolló, en Francia y en Inglaterra, un apasionado debate, que culminó en ocasión del bombardeo de la ciudad vasca de Guernica por parte de la aviación alemana en abril de 1937. Es interesante observar que los términos de este debate anticiparon en amplia medida los del debate de posguerra acerca de las consecuencias del descubrimiento del arma atómica.

Cuanto mayor era el sentido de inseguridad que cundía en Europa, más afanosa y casi obsesiva era la búsqueda de seguridad. En el léxico político de la mitad de los años treinta pocas expresiones son tan recurrentes como la de «seguridad colectiva», y pocos momentos históricos están marcados por una actividad diplomática tan intensa, casi frenética, especialmente por parte de aquellos estados que se sentían más inseguros y amenazados.

Este es el caso de la Unión Soviética. Despiadado con sus opositores internos, Stalin, consciente de la vulnerabilidad del sistema político que encabezaba, era, al contrario, muy prudente en el terreno de las relaciones internacionales y particularmente activo en la búsqueda de seguridad. Entre 1929 y 1933, la URSS estipuló una serie de pactos de no agresión con los estados fronterizos (Finlandia, Estonia, Lituania, Polonia y Rumania), con Francia y con Italia y en 1935 Anthony Eden fue de visita a Londres. Como dijo Stalin en enero de 1934, la Unión Soviética seguía «orientada hacia sí

misma» y por ende dispuesta a mantener buenas relaciones con todos, pero el desarrollo de los acontecimientos, en particular la consolidación del régimen nazi en Alemania y el auge de las corrientes militaristas en Japón, obligaban a una revisión de las directrices anteriores por parte del estado soviético y de la propia Internacional Comunista. Ésta, en su VII Congreso de julio y agosto de 1935, no dudó en señalar a Alemania y Japón como los «focos de guerra» más peligrosos, pero también en su seno eran conscientes de que las relaciones entre alemanes y soviéticos se habían deteriorado y por tanto era preciso encontrar en Europa un interlocutor que sustituyera a Alemania en el papel de apoyo político que ésta había desempañado desde los días de Rapallo. Si éste era el objetivo, ya no era de recibo seguir considerando Versalles como el origen de todos los males y la SDN como un reducto de ladrones imperialistas, especialmente ahora que Hitler invocaba la revisión de los tratados y abandonaba su escaño en Ginebra. De ello en Moscú eran cada día más conscientes y trabajaban para buscar una alternativa.

Entre los estados de Europa occidental, el más preocupado y hasta alarmado era obviamente Francia. Así, la idea de reeditar con la Rusia soviética la alianza que en su momento se había realizado con la Rusia zarista, fue tomando cuerpo en la diplomacia francesa y con este espíritu el ministro de Exteriores Barthou propuso una «Locarno oriental», es decir, un pacto que comprometiera a todos los estados, Alemania incluida, que estaban interesados en el respeto de las fronteras de la región. La propuesta encontró, naturalmente, una acogida favorable en Moscú, pero no en Berlín y Varsovia, así que tuvo que ser abandonada. Pero Barthou no desistió en su política de apertura hacia el Oriente europeo y fue principalmente gracias a sus buenos oficios que, en septiembre de 1934, Rusia fue admitida en el seno de la asamblea de Ginebra en calidad de miembro permanente del Consejo. Se reconocía así a la Rusia soviética el *status* de gran potencia, lo que constituía un hecho político nuevo y relevante. Pocas semanas más tarde, Barthou, al acudir a Marsella para recibir al rey Alejandro I de Yugoslavia, de visita en Francia, fue asesinado, junto con su huésped, por un nacionalista croata. Su sucesor, Pierre Laval, se mostró menos dispuesto con la Rusia soviética y su primera iniciativa relevante fue, en efecto, su visita a Roma para encontrarse con Mussolini. Los acuerdos que se firmaron tras los coloquios se limitaban a confirmar el compromiso común para la independencia austríaca y a regular algunas cuestiones coloniales menores mediante rectificaciones de la frontera. En realidad, Mussolini había obtenido de Laval la garantía del «desinterés» francés por la empresa africana a la que, como veremos, se aprestaba. Se necesitó el anuncio del rearme alemán para que Laval retomara el diálogo iniciado por su predecesor con la Unión Soviética. En mayo se llegó, así, a la firma de un pacto franco-soviético, por el que ambas partes se comprometían a consultarse mutuamente y proporcionarse ayuda

en caso de agresión por parte de un tercer país. El pacto fue complementado por otro análogo entre Checoslovaquia, aliado tradicional de Francia, y la Unión Soviética, en virtud del cual ésta se comprometía a intervenir en caso de agresión a Checoslovaquia, con la condición de que Francia hiciera lo mismo. En conjunto, estos acuerdos no estaban exentos de lagunas y ambigüedades. Entre otras cosas, faltaba el apoyo de una convención militar, tanto más necesaria cuanto que la URSS no limitaba ni con Alemania ni con Checoslovaquia y era bien conocida la indisponibilidad de Polonia a permitir el paso de tropas rusas por su territorio. Además no estaba prevista la hipótesis de una agresión de Japón a la Unión Soviética. No obstante el valor y el significado político de los acuerdos eran notables, lo que explica las resistencias de la mayoría moderada del Parlamento francés a ratificarlos. Se nutrían perplejidades no sólo a la derecha, sino también a la izquierda y por parte de los mismos comunistas, que veían cómo se desautorizaba su dura batalla parlamentaria contra la prolongación del servicio militar. Pero, para disipar sus dudas, llegó una declaración del propio Stalin en la que expresaba «comprensión» hacia los esfuerzos del gobierno francés para garantizar la seguridad del país.

Escarmentada por la experiencia de la primera guerra mundial y reacia a dejarse involucrar en el hervidero diplomático continental, Inglaterra se mantenía a la espera y sólo después del desafío lanzado por Hitler con su anuncio de rearme, accedió a participar, con Francia e Italia, en la conferencia que se celebró en Stresa (Italia) del 11 al 13 de abril de 1935 y terminó con la aprobación de un documento, que posteriormente la SDN hizo suyo, en el que, además de insistir en el compromiso común para la independencia de Austria y en favor del proyecto de pacto oriental, se condenaba cualquier incumplimiento de los pactos de Locarno y se dejaba vislumbrar la amenaza de sanciones contra los responsables de nuevas infracciones. Pero el denominado «frente de Stresa» se reveló, en los hechos, muy débil y el primer golpe se lo asestó precisamente Inglaterra, que en junio negoció con Alemania un tratado naval, en el que ésta se comprometía a que su flota de guerra no superase una cuota de tonelaje correspondiente al 35 % de la británica. Pero dentro de estos límites Alemania estaba autorizada a construir un número de sumergibles igual al de la Commonwealth. Se trataba de una violación notoria del tratado de Versalles, que prohibía explícitamente a Alemania la construcción de una flota de guerra, lo cual hacía poco creíbles las declaraciones de Stresa.

Se habrá observado que todos los acuerdos e instrumentos diplomáticos mencionados hasta ahora –con la excepción del efímero pacto del 4 de junio de 1933, por otra parte ratificado sólo por Italia y Alemania– eran de carácter bilateral. Tales fueron el pacto entre Alemania y Polonia de enero de 1934, los acuerdos Laval-Mussolini, el pacto franco-soviético y el sovié-

tico-checoslovaco y finalmente el tratado naval anglo-alemán. Esta práctica de lo bilateral difícilmente se compaginaba con el principio de la seguridad colectiva en el que, al menos de palabra, todos se reconocían y al que todos rendían homenaje. Guardiana y garante de este principio quedaba, pues, sólo la SDN. Su prestigio había sido notablemente mermado por el asunto de Manchuria, pero el reciente ingreso de la Unión Soviética y el renovado empeño de Inglaterra dejaban confiar en la posibilidad de que su papel se reforzara. El banco de pruebas fue la cuestión de Etiopía.

La decisión de agredir Etiopía había sido tomada por Mussolini ya en diciembre de 1934 y a partir de las primeras semanas de 1935, tropas italianas comenzaron a desplazarse a Eritrea. Al sentirse amenazada, Etiopía se había dirigido a la asamblea de Ginebra, pero ésta intentó ganar tiempo con la esperanza de que se pudiese alcanzar una solución por la vía diplomática, evitando así el conflicto. A este fin, Anthony Eden, ministro para las relaciones con la SDN del gobierno de Baldwin, en junio fue de visita a Roma para proponer un plan basado en la concesión a Italia de la región de Ogaden, por la que Etiopía sería indemnizada con la adquisición de una salida al mar en la Somalia británica. Sus propuestas fueron rechazadas por Mussolini, quien el 3 de octubre anunció el principio de las hostilidades.

Se trataba de un acto de agresión manifiesto contra un estado miembro de la SDN y como tal fue considerado por la opinión pública británica. En el *Peace Ballott* de junio de 1935, es decir, en una fecha en que la cuestión etíope ya dominaba el escenario internacional, los ingleses se habían pronunciado, con amplia mayoría (casi siete millones y medio contra dos de abstenciones y dos en contra) en favor de las sanciones económicas y también militares contra un eventual agresor. Se trataba de un pronunciamiento que el gobierno no podía ignorar, especialmente en vísperas de las elecciones previstas para noviembre. La armada británica en el Mediterráneo y en el Mar Rojo fue reforzada y el 11 de septiembre, hablando en Ginebra, el nuevo ministro de Exteriores Hoare se pronunció con decisión a favor de las sanciones económicas en caso de una agresión que, más que probable, parecía inminente. Por eso, cuando, pocas semanas más tarde, la agresión se materializó, la asamblea de Ginebra no dudó en decretar sanciones económicas contra Italia. A favor votaron cincuenta y dos estados y sólo tres, Austria, Hungría y Albania, todos estrechamente vinculados con Italia, votaron en contra.

Siguiendo la estela de esta enérgica postura el gobierno de Baldwin afrontó en noviembre las elecciones y logró hacer converger sobre su candidato tanto los votos de los que veían en la empresa italiana un desafío al prestigio del Imperio británico, como los de una parte de aquellos que veían en una política de seguridad colectiva y en la SDN las únicas garantías de paz; pudo así mantener una mayoría parlamentaria confortable, aunque in-

ferior a la que disfrutaba anteriormente. Sin embargo, pocas semanas después, en acuerdo con su homólogo francés Laval, el ministro de Exteriores Hoare ponía a punto un plan que, retomando las propuestas que Eden había formulado en junio, las integraba con otras concesiones a Italia. La propuesta no surtió efecto alguno, tanto por la indignada reacción de la opinión pública británica, que al enterarse por una fuga de noticias obligó a Hoare a la dimisión, como, sobre todo, porque también en esta ocasión Mussolini, pese a la opinión contraria de su diplomacia, tergiversó las cosas hasta que la cuestión quedó solucionada con la dimisión de Hoare. Lo que quería era una victoria en campo abierto que reforzara su prestigio interno e internacional; y la obtuvo. En mayo de 1936, las tropas italianas, tras haber doblegado la tenaz resistencia etíope, sin dudar en la utilización de gases, entraban en Addis-Abeba y el *duce* podía proclamar el retorno del Imperio a las «colinas fatales» de Roma. El 18 de junio Inglaterra suspendía las sanciones, que a la postre se habían aplicado sólo parcialmente. Las repetidas peticiones de las potencias menores para que se extendieran al petróleo nunca se tomaron seriamente en consideración por parte de las grandes potencias, la URSS incluida. Mussolini lo sabía e incluso había recibido confirmaciones a este propósito.

Así, la prueba de la agresión italiana a Etiopía concluía con la pérdida definitiva de prestigio de la SDN y con el deterioro aún más grave del sistema de relaciones entre los estados europeos. La principal beneficiaria de las mutaciones de los equilibrios internacionales generadas por la crisis etíope fue, pues, Alemania, que al no ser miembro de la SDN, se había mantenido apartada, limitándose a observar. Hitler, al que desde luego no le faltaba intuición política, se percató de ello a tiempo y decidió aprovechar el momento favorable. El 7 de marzo de 1936, poniendo como pretexto la ratificación del tratado franco-soviético e ignorando la opinión de su estado mayor, ordenaba a unidades de la *Wermacht* que entraran en la zona desmilitarizada de Renania. Se trataba de una nueva y más grave violación de los tratados de Locarno y Versalles, pero también en este caso, como ya el año anterior cuando había sido restablecido el reclutamiento obligatorio, las reacciones de las potencias occidentales, de los garantes de los tratados de Locarno y de la SDN se quedaron en protestas y amonestaciones para el futuro.

Uno de los motivos por los que las mayores potencias se habían mostrado tibias en la cuestión etíope y en la aplicación de las sanciones, había sido el temor a que Italia se viese obligada a acercarse a Alemania, superando los contrastes que la separaban de ella a causa de la cuestión austríaca, y que se constituyera así un bloque de las potencias fascistas. En cambio, se obtuvo el resultado contrario. Irritado por los obstáculos puestos en su camino, animado por sus éxitos, Mussolini sintió más fuerte el reclamo de las afinida-

des políticas y comenzó un proceso de acercamiento hacia la Alemania nazi, hasta llegar, en octubre de 1936, a la firma de un acuerdo, suscrito por los dos ministros de Exteriores. Nacía así lo que, en un discurso del primero de noviembre, Mussolini definió como «el eje Roma-Berlín». Todavía no era una alianza, pero pronto lo sería. Para la Austria de Schuschigg, privada de la protección italiana, no le quedaba más remedio que suscribir, en julio de 1936, una convención con Alemania, en la que, aunque obtenía el reconocimiento formal de su soberanía, se declaraba «estado alemán» y abría las puertas del gobierno a representantes de la «oposición nacional», aceptando de hecho una primera limitación a la soberanía que formalmente se le acababa de reconocer. Así, se había dado un paso hacia la formación de un sistema de alianzas intereuropeas basadas en afinidades políticas entre estados fascistas o profascistas, y la seguridad colectiva aparecía ya como una expresión superada e incluso anacrónica.

La reconstrucción de los complicados acontecimientos políticos y diplomáticos de esos años, que aquí hemos intentado hacer de manera somera, puede haber generado en el lector una impresión de recaída en el pasado prebélico, cuando no decimonónico, con su diplomacia secreta (los acuerdos Hoare-Laval son un ejemplo típico), con su carrera armamentística y su política de equilibrios. No falta, para completar el cuadro y reforzar esta impresión de anacronismo, una guerra colonial, la última guerra colonial de la historia.

Esta impresión refleja, por lo demás, una estado de ánimo y una aproximación mental que fue la propia de amplios sectores de la opinión pública de entonces. Fueron varios, por ejemplo, los observadores que, al estallar la crisis de Etiopía, pensaron en la guerra de Libia de 1911, llegando a la conclusión de que, al igual que ésta, había sido el primer paso en la escalada que llevó a la primera guerra mundial, así la empresa de Mussolini corría el riesgo de convertirse en la antesala de la segunda.

Pero no es más que, precisamente, una impresión o, más exactamente, un tipo de ilusión óptica que consiste en prefigurar el futuro como una réplica del pasado. Si es comprensible que no pocos de los políticos y los estadistas de entonces estaban convencidos de estar viviendo la víspera de un «nuevo 1914» y actuaban en consecuencia para evitar los errores cometidos en su tiempo, nosotros, hoy, no podemos asumir su falta de clarividencia como base de un juicio histórico. Sabemos, en efecto, que Europa y el mundo de los años treinta ya no eran, ni política ni antropológicamente, los de 1914. Otras eran, por ende, las vías de la prevención del conflicto y de la paz, pero no era fácil detectarlas y recorrerlas.

16

Los frentes populares y la guerra civil española

Entre los países de la Europa occidental, España fue uno de los pocos que no se vio involucrado en la primera guerra mundial y no tuvo, por tanto, que experimentar las perturbaciones de la posguerra. Es más: análogamente a los países no europeos, su economía sacó provecho de las dificultades de los países beligerantes y durante los años veinte registró una considerable expansión y un sensible incremento de las exportaciones. No obstante, España seguía siendo un país caracterizado por los desequilibrios regionales y los contrastes sociales y políticos típicos de una condición de retraso: el país de los «grandes de España», con sus inmensos latifundios, y de los miserables braceros andaluces; de los anarquistas catalanes y los carlistas navarros; del catolicismo más integrista y del anticlericalismo más enraizado y radical. El país no se libró de la crisis de 1929, y sus consecuencias fueron relevantes también, y sobre todo, en el plano político. En efecto, de la crisis salió profundamente mermado el bloque de la burguesía industrial y los terratenientes en el que se sostenía el sistema político español, con consecuencias extremadamente desestabilizadoras. En poco más de un año se sucedieron la dimisión del dictador Primo de Rivera, quien había gobernado desde 1923, la abdicación del rey Alfonso XIII en abril de 1931 y la proclamación de la República. Todas las tensiones y los rencores que durante décadas habían permanecido sepultados bajo una capa de represión y resignación, salieron a la superficie. Mientras que en el campo los campesinos ocupaban las tierras de los grandes propietarios, en las ciudades docenas de iglesias y conventos eran saqueados. La respuesta, como en la más típica tradición española, fue un intento de golpe militar, llevado a cabo por el general Sanjurjo en Sevilla en agosto de 1932, golpe que, por otra parte, fracasó. El gobierno republicano que se constituyó tras las elecciones de junio de 1931, presidido por el republicano de izquierdas Azaña y compuesto por ministros radicales y

socialistas, se empeñó a fondo en una obra de transformación del estado y de la escuela en sentido laico, llegando hasta la disolución de la Compañía de Jesús, y concedió a Cataluña un estatuto de autonomía. Más tibia, en cambio, fue su acción en el sector de las reformas sociales. En particular, la reforma agraria promulgada en septiembre de 1932 no fue aplicada sino parcialmente y de forma limitada y en los primeros dos años sólo doce mil quinientas familias, de las sesenta mil previstas, se beneficiaron de ella. Por contra, en enero de 1933 la Guardia Civil reprimió por la fuerza de las armas un motín anarquista en la aldea de Casas Viejas. El episodio fue hábilmente explotado por la oposición y Azaña fue obligado a dimitir. En las siguientes elecciones, gracias también a la abstención de los anarquistas, los partidos de la derecha prevalecieron claramente y formaron un gobierno presidido por Alejandro Lerroux, un personaje con un pasado azaroso y equívoco. Se iniciaba así el «bienio negro», durante el cual la legislación reformadora emprendida por el anterior gobierno fue puesta al margen o desmantelada y la represión se convirtió en la única respuesta a los conflictos laborales. En octubre de 1934 una insurrección de mineros en Asturias fue sofocada de manera sangrienta por una unidad del ejército encabezada por el general Francisco Franco y por la legión extranjera. Los muertos fueron más de mil y los prisioneros políticos, entre ellos Azaña y los principales dirigentes socialistas, fueron treinta mil. Pero la experiencia de la revuelta de Asturias representó una doble enseñanza para la izquierda española: en primer lugar, había sido posible porque sus promotores habían sabido superar sus divisiones, dando vida a organismos unitarios –las Alianzas obreras–; y, en segundo lugar, había sido derrotada porque las divisiones existentes en la izquierda del resto del país habían posibilitado el aislamiento de la revuelta misma. Hacía falta, pues, alcanzar en el ámbito nacional la misma unidad que en Asturias y en esta dirección, de hecho, se movió la izquierda. Se llegó así a la formación de una amplia concentración de fuerzas políticas que iba desde el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la fuerte central sindical a éste vinculada (UGT), a los republicanos de izquierdas de Azaña, los autonomistas y los separatistas catalanes, el pequeño Partido Comunista y una formación de extrema izquierda, el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), de simpatías trotskistas.

Siguiendo la estela de Francia y por sugerencia de los comunistas, empeñados en realizar la línea de unidad antifascista aprobada por el VII Congreso de la Internacional, el nombre de la coalición fue el de «Frente Popular». Quedaban al margen sólo los anarquistas de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Pero en las elecciones de febrero de 1936, en muchas zonas los militantes y simpatizantes anarquistas votaron por el Frente Popular y su voto contribuyó a asegurar a éste una afirmación que, aunque limitado en cifras absolutas, le

permitió obtener una segura mayoría parlamentaria en las Cortes. Azaña volvió así al poder, encabezando un gobierno constituido por representantes de su partido y de otras formaciones menores afines y lo dejó sólo para asumir en mayo el cargo de presidente de la República.

El programa del Frente Popular consistía esencialmente en relanzar la política de reformas emprendida por el primer gobierno republicano y que el bienio negro había interrumpido. Los presos políticos fueron liberados, se restituyó a Cataluña su estatuto y la reforma agraria se aplicó con mayor determinación y eficacia. Pero esto se consideraba insuficiente no sólo por parte de los anarquistas, empeñados en promover experimentos de «colectivización» donde les fuese posible, sino también del PSOE, que no participaba en el gobierno y que por influencia de su líder Largo Caballero mantenía posiciones de izquierda radical. Para ellos, la victoria del Frente Popular no era más que el primer paso en el camino hacia la revolución y Azaña era un nuevo Kerensky. Como probaron los hechos, el Frente Popular se reveló, así, sólo como una alianza electoral y no una fuerza de gobierno. Mientras que las divisiones de la izquierda no daban muestras de solucionarse, la derecha trabajaba en cerrar filas, con la perspectiva de un golpe. Entre los más activos se señalaban José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, un movimiento de inspiración filofascista, y Calvo Sotelo, líder reconocido de la derecha. Pero la dirección quedaba en manos de los militares: el general Franco, el hombre de la represión asturiana, que la República había alejado, poniéndolo a la cabeza de la guarnición de Canarias, y el general Mola, él también trasladado de Marruecos a Navarra, bastión tradicional de la monarquía. Así, la situación seguía siendo inestable y salpicada por continuos episodios de violencia y de guerrilla urbana y rural. El 13 de julio de 1936 fue asesinado Calvo Sotelo: la guerra civil ya estaba a las puertas.

Más adelante tendremos ocasión de volver con más detalle a los acontecimientos españoles. De momento, trasladémonos a Francia, un país cuya historia de estos años está estrictamente entremezclada con la de España.

Ya hemos podido observar que Francia quedó relativamente exenta de las consecuencias de la gran depresión hasta 1930. Pero cuando fue afectada, la crisis adquirió aspectos crónicos que hicieron difícil su superación. Su estructura económica, basada en la difusión de la pequeña y mediana empresa, que en un primer momento la había protegido de las fluctuaciones de la coyuntura internacional, se reveló como un obstáculo y un freno en el camino de la recuperación. Cuando los precios de los productos agrícolas e industriales comenzaron a bajar, los pequeños *patrons* franceses reaccionaron limitando su producción y adoptando una especie de malthusianismo económico, lo que contribuyó al aumento del desempleo. Por su parte, los distintos gobiernos que se sucedieron –desde la dimisión de Herriot en diciembre de 1932 hasta enero de 1934, fueron nada menos que cinco– estu-

vieron todos de acuerdo en negarse a recurrir, como en cambio hicieron Inglaterra y Estados Unidos, a una nueva devaluación del franco, lo que hubiese hecho más competitivas las exportaciones francesas y estimulado el tono de la vida económica, y en perseguir una política de reajuste, poniendo en marcha, por un lado, nuevas medidas de proteccionismo y por otro medidas de carácter deflacionario, en especial repetidos recortes de salarios. El resultado de ello fue una bajada general de las rentas del trabajo asalariado y autónomo y de los beneficios. Sólo algunas capas sociales restringidas y muy protegidas, como la de los pensionistas, resultaron beneficiadas.

Es en este contexto de depresión económica e inestabilidad política que, a finales de 1933, estalló el «escándalo Staviski», un financiero judío con muchas amistades y protecciones políticas. La Tercera República conoció entonces una de las crisis más graves de su historia, una auténtica crisis de régimen. El ataque contra sus instituciones y sus ministros corruptos fue lanzado por las *Ligues*, un ensamblaje heterogéneo de formaciones políticas y paramilitares de derecha, desde los nacionalistas tradicionalistas de las *Croix de feu*, a los filofascistas del francismo y de la *Solidarité nationale* financiada por el perfumista Coty, todas unidas en el desprecio por la «gueuse», como se llamaba a la Tercera República. El 6 de febrero de 1934 las *Ligues* organizaron una movilización contra el gobierno del radical Daladier, responsable de haber cesado al jefe de la policía de París, Chiappe, conocido simpatizante de aquéllas; la movilización adquirió rápidamente un carácter insurreccional. La policía respondió con contundencia y al final de la jornada se contabilizaron 15 muertos y 1.435 heridos. Parecía que la prueba de fuerza se había saldado a favor del gobierno, pero al día siguiente varios ministros presentaron su dimisión, obligando a Daladier a dimitir a su vez y sumiendo de nuevo al país en la inestabilidad política.

Históricamente, los defensores naturales de los valores y de la legalidad republicana eran los partidos de la izquierda, pero éstos estaban divididos no sólo entre ellos, sino también cada uno en su seno. En el Partido Radical, el liderazgo de los viejos caciques, en primer lugar Herriot, era discutido por las nuevas generaciones, los llamados «jóvenes turcos»; por su parte, la SFIO encontraba cada vez más dificultad para conciliar la intransigencia doctrinal de sus proclamas programáticas con su inclinación al compromiso. Algunos de sus representantes más significativos y de sus mejores cabezas se alejaron en diversas direcciones. El caso más clamoroso fue el de Marcel Déat, que terminará en las filas del fascismo y del colaboracionismo. También el PCF, el más pequeño, pero también el más sólido entre los partidos de la izquierda, tenía sus problemas internos. Después del 6 de febrero, el diputado del bastión comunista de Saint-Denis, Jacques Doriot, que terminará él también en el colaboracionismo, se pronunció en favor de la unidad de acción con los socialistas, pero fue desautorizado y regañado pú-

blicamente. En efecto, las relaciones entre socialistas y comunistas seguían tensas. La organización de los ex combatientes, cercana al PCF, había participado en la manifestación convocada por las *Ligues* el 6 de febrero y su posterior participación en la gran manifestación antifascista del 12 de febrero, convocada por la CGT, no fue la consecuencia de una decisión consensuada.

De forma imprevista, en junio de 1934, durante la conferencia nacional del partido en Ivry, el líder comunista Maurice Thorez se pronunció en favor de un pacto de unidad de acción con los socialistas. Pronto se entablaron negociaciones y el 27 de julio el pacto estaba sellado. Poco después, en octubre, en Nantes, Thorez lanzaba la propuesta de un «frente popular» que incluyese también a los radicales. En junio de 1935, el acuerdo entre los tres partidos de la izquierda se había alcanzado y sus líderes, Blum, Thorez y Daladier encabezaron juntos el tradicional desfile popular del 14 de julio. Así, en el espacio de un año, la unidad de las izquierdas se había realizado. Posteriormente, ya en marzo de 1936, las dos confederaciones sindicales, la CGT, socialista, y la CGTU, comunista, acordaban su fusión, mientras que entre el PCF y el SFIO continuaban las negociaciones para alcanzar la «unidad orgánica» de los dos partidos, negociaciones que sin embargo no tuvieron éxito.

Con frecuencia se ha planteado la pregunta de si cabe buscar los orígenes de este cambio radical de los comunistas franceses en París en el empuje unitario que se había expresado en la manifestación del 12 de febrero, o en Moscú, donde se tenía todo el interés en consolidar el reciente pacto franco-soviético. Estas dos hipótesis no se excluyen mutuamente. Lo cierto, de todas maneras, es que el Frente Popular representaba un hecho político nuevo no sólo para Francia, sino para toda Europa. Todos los que miraban con preocupación hacia Berlín, miraban ahora con esperanza hacia París y saludaban el nacimiento de ese contrapoder antifascista que era el Frente Popular, como por otra parte ya hemos constatado en el caso de España.

La campaña para las elecciones de 1936, que se desarrolló bajo la impresión causada por la ocupación alemana de Renania, fue una de las más reñidas y animadas de toda la historia política francesa y prueba de ello es el inusitado porcentaje de participación en el voto, un 84,3 %. De las urnas salió claramente vencedora la coalición izquierdista y, dentro de ésta, el PCF, que duplicó sus votos. El 4 de junio el gobierno del Frente Popular, presidido por el socialista Léon Blum, tomaba posesión. De él formaban parte ministros radicales y socialistas, mientras que los comunistas, aunque Thorez en un principio se había expresado en sentido favorable a la participación, se limitaron al apoyo externo. Es posible que a esta decisión no fuese ajena Moscú, reacia a ir demasiado más allá y deseosa de guardarse cartas en la manga.

El programa del Frente Popular, fruto de un laborioso compromiso, era esencialmente un programa democrático y antifascista: se preveía la disolución de las *Ligues* y una serie de medidas de consolidación de las instituciones republicanas. En cuanto a los aspectos económicos y sociales, no se iba más allá del compromiso de reanimar la economía francesa mediante la planificación de grandes obras públicas y medidas para el incremento del poder adquisitivo de las clases populares. Las únicas reformas «estructurales» (término que entonces entró en el léxico político de la izquierda) eran la nacionalización de la industria de armamento y una borrosa transformación del Banco de Francia en un «banco de Francia», en un intento de sustraerlo al poder de las «doscientas familias» que lo controlaban. Además, se preveía la institución, que de hecho llegará realizarse, de una oficina nacional para el trigo, con el cometido de regularizar el mercado. Ésta estaba por debajo de las expectativas no sólo de las teorías «planistas» del socialista Henry de Man, que habían encontrado mucha audiencia en Francia, o de la impaciencia de quienes, como el socialista Marcel Pivert, opinaba que «todo era posible», sino también, y sobre todo, de las esperanzas que la larga batalla finalizada con la victoria del Frente había generado en amplísimos estratos sociales. Ya antes de que el gobierno tomase posesión, Francia se vio sacudida por una oleada de huelgas y de ocupaciones de fábricas y el primer acto del nuevo gobierno fue convocar a los representantes de la patronal y de los sindicatos y guiarlos hacia un acuerdo que se hiciera eco lo más posible de las peticiones de los huelguistas. En julio de 1936 se llegó así a los acuerdos de Matignon, que preveía para los trabajadores aumentos salariales de entre el 7 y el 15 %, el reconocimiento de los delegados sindicales elegidos en los lugares de trabajo y la institucionalización del convenio colectivo. Por su parte, el gobierno aprobó, durante el verano, dos leyes con las que se introducía la semana de cuarenta horas y las vacaciones pagadas de quince días. En términos estrictamente sindicales se trataba de resultados importantes aunque no excepcionales, pero el valor de los acuerdos de Matignon era sobre todo político. Quedaba demostrado que la unidad sindical y política estaban en condiciones no sólo de doblegar la resistencia de la patronal, sino también de abrir la perspectiva de nuevas conquistas. De ello eran conscientes los trabajadores franceses que en aquellos días se iban de vacaciones, las primeras vacaciones pagadas de su vida. Pero la euforia de aquel verano de 1936 se vio turbada por las noticias procedentes de España.

El 17 de julio las guarniciones de Marruecos y Canarias encabezadas por Francisco Franco se amotinaron y al día siguiente su ejemplo fue seguido por las de Sevilla, Córdoba, Burgos, Pamplona y otras ciudades. Arrancaba así la operación que los generales habían estado preparando durante mucho

tiempo y que, aunque anunciada, cogió por sorpresa al gobierno de Casares Quiroga. Fue sólo en la jornada del 19, después de que al dimisionario Quiroga le sucediese un nuevo gobierno presidido por José Giral, cuando se repartieron entre el pueblo las armas que éste reclamaba y se comenzó a preparar la defensa. A los pocos días, la situación parecía ya relativamente estabilizada: los «nacionales» controlaban Marruecos, Canarias, Mallorca, todo el territorio del noroeste salvo el País Vasco y Asturias, algunas ciudades y una parte de la costa de Andalucía, con las ciudades de Sevilla y Córdoba. El resto, incluidas Madrid y Barcelona, quedaba en manos de los republicanos. La sorpresa proyectada por los generales, pues, había fracasado y el gobierno republicano podía proceder a reorganizarse y consolidarse. En septiembre el gobierno de Giral dimitía y en su lugar tomaba posesión una coalición presidida por Largo Caballero, con la participación de todos los partidos de la izquierda, salvo los anarquistas que, sin embargo, entraron pocas semanas después en el gobierno catalán y posteriormente también en el nacional. En noviembre, una ofensiva de los franquistas contra Madrid se estrellaba contra la resistencia de los milicianos y de la población. La que se anunciaba era, pues, una guerra civil áspera y de larga duración.

Europa había conocido otras situaciones de guerra civil en la posguerra y guardaba el recuerdo reciente de las jornadas de Viena y París y del octubre asturiano. Pero nunca hasta entonces se había encontrado en el trance de asistir a una guerra civil que tenía todas las características de una guerra combatida por ejércitos regulares y con las armas más modernas, aviación incluida. Ante este espectáculo estremecedor, por primera vez advertía la carga de electricidad que pesaba sobre el horizonte europeo y adquiría la conciencia del riesgo de que, por sus implicaciones políticas e internacionales, la guerra civil española se convirtiera en un nuevo conflicto general. La enorme impresión que causó el bombardeo alemán del 26 de abril de 1937 sobre la pequeña ciudad vasca de Guernica dependía tanto del horror por la barbarie de una guerra aérea como del miedo ante un futuro incierto y amenazador. La guerra civil española dejaba de ser un asunto interno para convertirse en una cuestión internacional, que ningún gobierno y ninguna opinión pública podía ignorar o subestimar. Pero las reacciones y las opciones posibles eran varias: comprometerse en favor de uno u otro bando, mantener la neutralidad o localizar el conflicto; para cada una de ellas podía haber diversas motivaciones.

El primer factor a tener en cuenta es la actuación de las potencias fascistas, que ya en noviembre de 1936 reconocieron como gobierno legítimo el que se había instalado en Burgos con el general Franco a la cabeza, gobierno que ellas apoyaron con ayuda militar. Pero si Alemania se limitó a una ayuda esencialmente técnica y a experimentar, como en Guernica, en los campos de batalla españoles las armas de una guerra futura, Italia, que des-

de hacía tiempo mantenía contactos con representantes de la derecha española, se empleó más a fondo, enviando un cuerpo de voluntarios que llegó a contar con sesenta mil hombres y que dejó en el terreno a cuatro mil muertos. Los apoyos y las simpatías de los que gozaba Franco no se limitaban, sin embargo, a Italia, Alemania, al Portugal de Salazar y al resto del fascismo internacional. A fin de cuentas, él mismo era un reaccionario según la tradición española, pero no un fascista, como lo demuestra su relación con la Falange, a la que utilizó pero con la que cuidó de no identificarse. Por eso, simpatizaban con él también aquellos sectores de la opinión pública que veían un valor indiscutible en el orden constituido y en la subversión el peligro mayor, los que en Francia temían que el Frente Popular fuese la antesala de la revolución y en Inglaterra se sentían alarmados ante la perspectiva de una España «roja». Por su parte, la Iglesia católica no se limitó a condenar las persecuciones y las masacres de religiosos que se produjeron en las zonas republicanas, sino que en junio de 1937 nombró a un representante ante el gobierno franquista. La prensa católica más autorizada tuvo además palabras de reprobación hacia los intelectuales católicos franceses, como Jacques Maritain, Emmanuel Mounier y Georges Bernanos, que se expresaron en favor de la España republicana y se solidarizaron con el clero vasco.

En el frente del desmarque y de la neutralidad, un papel de primer orden le tocó al gobierno británico, cuyo liderazgo había sido asumido en mayo de 1937 por Neville Chamberlain. En efecto, fueron las argumentaciones inglesas las que indujeron, en julio de 1936, a Blum y al ministro de Exteriores francés, de visita en Londres, a retroceder en su posición de apoyo al gobierno republicano y hacerse promotores de un comité de «no intervención», al que se sumaron todas las grandes potencias. Pero cuando fue evidente el incumplimiento de los compromisos por parte de Italia y Alemania, a pesar de que ambas habían suscrito los acuerdos, y cuando la Unión Soviética, que también en un primer momento se había adherido, manifestó sus perplejidades, Francia e Inglaterra continuaron manteniendo vivo un organismo que ya no era más que una ficción. Pero en este punto cabe observar que, al comportarse así, es decir, cultivando las esperanzas de poder limitar el conflicto considerándolo como un asunto interno de España, los gobiernos inglés y francés interpretaban estados de ánimo ampliamente difundidos y probablemente mayoritarios en sus respectivos países, no sólo entre los bienpensantes horrorizados por los excesos de ambos bandos, sino también entre aquellos sectores de la opinión pública orientados en sentido tanto antifascista como pacifista, los cuales, a pesar de todo, puestos a elegir, privilegiaban las razones del pacifismo respecto de las del antifascismo. La preocupación de que el conflicto español pudiera degenerar en un conflicto general fue el principal argumento del llamado «discurso del Luna Park» que Léon Blum pronunció en julio de 1936. La mayoría

de los miembros del Comité de Vigilancia Antifascista, que agrupaba a la flor y nata de la intelectualidad francesa, se encontró de acuerdo. También Bertrand Russell, en su *Which way to peace?*, publicado en el período de la guerra de España, anteponía las razones del pacifismo a las de la simpatía hacia la España republicana. Tales estados de ánimo se alimentaban con la aportación del extremismo de los que en los acontecimientos españoles veían el principio de las grandes mutaciones revolucionarias y el primer acto de una guerra general ya comenzada y en todo caso inevitable, aunque éstos eran grupos restringidos. Mucho más numerosos eran los que, al haber tomado partido en defensa de la España republicana y siendo adversos a la política de no intervención, consideraban que una derrota del fascismo en España alejaría el peligro de un conflicto y por ende la alternativa entre pacifismo y antifascismo no tenía sentido; al contrario, no se podía ser coherentemente pacifistas sin ser al mismo tiempo antifascistas. De ello estaban convencidos no sólo muchos de los que se enrolaron en las Brigadas Internacionales y se fueron a luchar a España, sino también prestigiosos representantes de la Internacional Socialista, como el belga Vandervelde, el sueco Hjalmar Branting, el italiano Pietro Nenni, quien luchó personalmente en España. En cuanto al Partido Socialista Francés y al laborismo británico, estaban divididos e incluso desgarrados, entre la tibieza o el embarazo de los defensores de la no intervención y la decisión de los partidarios del gobierno republicano. También Clement Attlee fue de visita a España y la foto que lo inmortaliza con el puño levantado, saludando a los milicianos españoles, suscitó revuelo en su patria. Finalmente, en cuanto al variopinto archipiélago del pacifismo inglés, éste también había perdido buena parte de la unidad que se había expresado en el *Peace Ballott* de 1935: en efecto, una guerra en un país europeo parecía mucho más cargada de riesgos que una expedición colonial a un país africano.

Entre las grandes potencias, la única que, tras las vacilaciones iniciales que la habían empujado a adherirse al comité de no intervención, se puso del lado de los republicanos, proporcionando ayudas políticas y militares al gobierno de Madrid, fue la URSS. A partir de octubre de 1936, buques soviéticos comenzaron a llegar a los puertos españoles con su carga de armamentos y los consejeros militares soviéticos, flanqueados por los hombres de la NKVD, empezaron a colaborar con las autoridades militares republicanas en la difícil tarea de encuadrar y disciplinar a un ejército tan entusiasmado como inexperto. Valorar en su conjunto la entidad de las ayudas soviéticas es imposible, pero es seguro que fueron inferiores a las que aportaron las potencias del Eje al bando contrario. Pero también es cierto que las ayudas contribuyeron de manera relevante a mejorar la moral y la eficiencia del ejército republicano. Todavía más controvertida es la cuestión de la naturaleza y del alcance político de la participación soviética. En una carta a Largo

Caballero de diciembre de 1936, Stalin lo invitaba a no proponerse objetivos de transformación socialista y a mantenerse dentro de los límites de una democracia burguesa avanzada. Evidentemente, no quería desacreditar la imagen de la guerra civil española como lucha a muerte entre comunismo y fascismo, que la propaganda fascista intentaba difundir para enajenar simpatías y apoyos a la España republicana. Se trataba de un consejo realista y responsable y a la luz de ello se comprende por qué Stalin recomendaba a los expertos militares soviéticos que se mantuvieran apartados del fuego de las artillerías y también por qué, como se ha observado, sí hubo una Brigada Lincoln o una Brigada Garibaldi, pero no hubo ninguna Brigada Lenin. Pero también hay otra posible interpretación (u otra cara) de la postura de Stalin hacia la cuestión española, y es que la prudencia que aconsejaba a Caballero era una expresión y un reflejo de la línea de prudencia y discreción que él mismo quería seguir. Y tampoco se puede excluir que lo único que le interesase fuera que se prolongase un conflicto en un área periférica de Europa.

En el contexto internacional que hemos bosquejado, las posibilidades de que la España republicana, contando casi exclusivamente con sus propias fuerzas, pudiese debelar la sedición y conseguir la victoria eran bien pocas, y tanto más en cuanto que dentro del bando republicano permanecían e incluso se acentuaban los contrastes entre los comunistas, que daban la prioridad al objetivo de la victoria militar, y los que, como los anarquistas y los militantes del POUM, consideraban la revolución como la premisa y la condición necesaria para la victoria. La situación se precipitó en mayo de 1937, cuando durante algunos días las calles y las plazas de Barcelona fueron el escenario de enfrentamientos sangrientos entre anarquistas y poumistas, por un lado, y comunistas y policía de la *Generalitat* controlada por ellos, por otro, enfrentamientos que dejaron un saldo de cuatrocientos muertos y a los que puso fin sólo la intervención de las tropas enviadas por el gobierno central. A raíz de los hechos de Barcelona, Largo Caballero, que se había negado a aceptar la petición comunista de disolver el POUM estuvo obligado a dimitir y le sucedió a la cabeza del gobierno Juan Negrín, también socialista, pero de notorias simpatías hacia los comunistas y la URSS. Negrín formó un gobierno en el que los anarquistas de la CNT se negaron a participar. En junio el POUM catalán quedaba ilegalizado. Su líder, Andrés Nin fue capturado por los hombres de los servicios secretos soviéticos y asesinado, sin que ni el gobierno ni el propio Partido Comunista español fuesen informados. Así, los métodos de la represión estalinista se exportaban a España.

Todo ello no contribuyó, desde luego, a mejorar la situación en los frentes; antes bien, afectó negativamente a la moral del ejército. En junio, los

franquistas que ya en febrero habían tomado Málaga, expugnaban Bilbao y, tras haber partido en dos el territorio republicano al llegar en abril al Mediterráneo, extendieron, en octubre, su control a todo el norte del país. En noviembre de 1938 las Brigadas Internacionales se retiraban de España, cuando ya la guerra civil, en la que habían encontrado la muerte miles de españoles, llegaba a su fin. Barcelona cayó en enero de 1939 y Madrid en marzo.

Mientras tanto, también la experiencia del Frente Popular francés iba poco a poco desgastándose. Contra lo que esperaba el gobierno, la semana de cuarenta horas no había contribuido a reducir el desempleo, puesto que la mano de obra cualificada era escasa y muchas instalaciones industriales estaban obsoletas; al contrario, su coste, sumado al de los gastos militares, que iba en aumento, contribuyó a empeorar la situación del balance y la propia estabilidad del franco. La devaluación de éste, previo acuerdo con Inglaterra y Estados Unidos, se decidió en otoño de 1936. Esta medida, que de ponerse en marcha con celeridad hubiera podido ayudar a reanimar la economía del país, llegaba tarde y se reveló, pues, ineficaz y psicológicamente dañina. Con la esperanza de recuperar la confianza de los ambientes financieros y empresariales que hasta ahora le habían negado, Blum anunció, en enero de 1937, una «pausa» en su política de reformas, pero sus opositores, que ya con anterioridad habían conducido una violenta campaña contra su gobierno, hasta el punto de llevar a uno de sus ministros, Roger Salengro, objeto de un linchamiento moral en plena regla, al suicidio, no estaban dispuestos a conceder ninguna tregua. En junio de 1937, Blum se vio obligado a presentar su dimisión y Francia volvía así a su habitual inestabilidad política.

A lo largo de 1937, pues, las esperanzas que habían florecido a raíz de la victoria de los dos frentes populares en España y Francia fueron poco a poco marchitándose.

Si había habido un momento en que la convergencia entre antifascismo y pacifismo había sido posible y se había asomado la esperanza de contrarrestar la escalada hacia la guerra, cabe colocarlo en algún punto entre la segunda mitad de 1936 y principios de 1937, digamos entre la batalla de Madrid y Guernica, cuando la movilización de las conciencias y de las inteligencias contra la intervención fascista en España llegó a su cúspide. Pero aquel momento no se aprovechó.

17

La agresión japonesa a China y sus repercusiones internacionales

Tras completar la ocupación de Manchuria, el ejército japonés no se quedó inactivo. En febrero de 1933 invadió y ocupó la provincia china de Jehol y en abril sus unidades avanzaron hacia el sur de la Gran Muralla, amenazando Pekín y Tien Tsin. En mayo, Chiang Kai-shek, que se aprestaba a lanzar otra «campaña de aniquilación» contra las bases comunistas, negoció un armisticio con los japoneses. Pero, de hecho, no se trataba de una tregua. En efecto, si los chinos, según declaraban públicamente, habían cedido «espacios» sólo para ganar tiempo, las señales procedentes de Japón no dejaban presagiar que éste tuviera intención alguna de renunciar a su política de expansión en el continente, sino todo lo contrario. En 1934 Tokio denunciaba los tratados de Washington y Londres sobre la limitación de los armamentos navales y a partir de entonces el ritmo del rearme se fue intensificando, y la economía japonesa tomaba cada día más el aspecto de una economía de guerra.

Formalmente, la vida política del país seguía desarrollándose en el ámbito constitucional. En 1936 y 1937 se celebraron elecciones generales y las crisis de gobierno se sucedían con un ritmo comparable al de la Tercera República francesa. De hecho, como se ha visto, los puestos clave del gobierno estaban bajo control de los militares, mientras que la presencia de políticos se iba reduciendo gradualmente: de siete en el gobierno de Saito, a cinco en el de Okada, cuatro en el de Hirota y ninguno en el de Hayashi.

Además al extinguirse la vieja oligarquía del *Genro*, desaparecía también la función mediadora y reguladora que ésta había desarrollado durante mucho tiempo y el propio emperador perdía un apoyo eficaz para influir en el destino político del país. Tras la fachada de una democracia parlamentaria, la sociedad japonesa vivía así un proceso de militarización encubierta. La ley de preservación de la paz civil, de 1925, se mantuvo y fue acompañada por

otras medidas que limitaban las libertades; la disensión política e intelectual fue marginada y reprimida y la juventud fue educada, según el espíritu del manual *Principios fundamentales del Kokutai*, en el culto de los valores tradicionales y en el rechazo de todo lo que fuese occidental, desde el individualismo y el liberalismo anglosajones, al comunismo soviético. Con todo, esto no permite asimilar el sistema político japonés de los años treinta al de los estados fascistas europeos, y tampoco significa que hubiese desaparecido cualquier forma de lucha política. Esta fue, al contrario, acérrima y no ahorró golpes bajos, pero en gran medida quedó limitada al ámbito de las fuerzas armadas, entre los varios ejércitos y facciones. De estas últimas, las mayores eran la del *Kodo* («la vía imperial»), que tenía su hombre fuerte en el general Araki y sus cuadros más entusiastas en los oficiales más jóvenes, y la del *Tosei* («el control»), más moderada y vinculada a los ambientes económicos y a los grandes *zaibatsu*. Ambas defendían la necesidad de una política dinámica y «positiva», pero, mientras que el *Kodo* opinaba que la URSS era el enemigo y el objetivo principal, los hombres del *Tosei* miraban a China como el campo natural de la expansión económica y política de Japón. La prueba de fuerza entre las dos facciones tuvo lugar el 26 de febrero de 1936, cuando unos mil soldados de la primera división, encabezados por oficiales de rango inferior afiliados al *Kodo*, ocuparon el centro de Tokio y penetraron en las casas de varios ministros y los asesinaron. Sin embargo, no recibieron desde arriba la cobertura y el apoyo que esperaban o que se les había prometido y tuvieron que rendirse. Desde entonces, la facción del *Tosei* adquirió el pleno control del ejército y, mediante éste, de la vida política del país.

Así pues, la situación del Pacífico se perfilaba cargada de peligros, pero eso no parecía preocupar en exceso a las grandes potencias que habían firmado los acuerdos de Washington, que eran las que tendrían que estar más interesadas en el mantenimiento de los equilibrios que ellas mismas habían establecido. Los Estados Unidos, que mantenían con China, y todavía más con Japón, provechosas relaciones comerciales, seguían anclados en la política del *Neutrality Act* y en su tradicional aislacionismo; Inglaterra, por su parte, desde hacía tiempo había renunciado a recobrar la influencia que había ejercido en la región y hacía oídos sordos a las peticiones de sus dominios de Australia y Nueva Zelanda de una mayor presencia en el Pacífico.

Entre las grandes potencias, la que, por razones geográficas –siendo la única que tenía frontera común con Japón– e ideológicas, seguía el desarrollo de la situación con mayor aprensión era, también en este caso, Rusia. La situación a la que tenía que enfrentarse la diplomacia soviética era especialmente delicada, sobre todo a causa de la incomprensibilidad de la política japonesa, lo que permite comprender por qué intentaba moverse en más de un escenario. Ya que los intentos de involucrar a los Estados Unidos en una política de compromiso común para la seguridad en el Pacífico se habían reve-

lado infructuosos, la vía más practicable pareció, en un primer momento, la de mejorar las relaciones bilaterales con Japón y a este fin en 1935 la Unión Soviética accedió a ceder a los japoneses, por un precio ridículo, el ferrocarril oriental que en su tiempo no había cedido a los chinos, reconociendo así, de forma implícita, el régimen projaponés de Manchukuo. Pero tampoco esta concesión dio resultados significativos: la posición japonesa seguía siendo indescifrable y la situación en la frontera de Siberia seguía tensa. En junio de 1937, a lo largo del curso del río Amur tuvieron lugar una serie de incidentes fronterizos que se repetirán de forma cada vez más grave hasta 1939. La URSS no tenía más opción, pues, que jugarse la carta china, pero ésta también presentaba dificultades y márgenes de inseguridad. En efecto, parecía que Chiang Kai-shek, haciendo caso a sus expertos militares alemanes, tenía la intención de prolongar la tregua con Japón y dar prioridad a la destrucción de las bases comunistas. Por su parte, los comunistas chinos estaban decididos, naturalmente, a resistir y Moscú no podía abandonarlos sin mermar su prestigio. Sin embargo, un acontecimiento imprevisible, casi casual, sobrevino y facilitó la tarea soviética: el incidente de X'ian.

En diciembre de 1936, Chiang Kai-shek viajó a X'ian para convencer a Chiang Hsue Liang, un señor de la guerra de origen manchú, de que se sumase a la campaña contra los comunistas, pero éste lo arrestó y lo liberó sólo después de que –gracias a negociaciones en las que participó también el dirigente comunista Zhou Enlai– se comprometió, aunque de manera informal, a colaborar con los comunistas y a asumir una postura de mayor firmeza respecto a Japón. El episodio sigue envuelto en la oscuridad, pero no parece que Moscú haya participado en él. Lo cierto es que el episodio de X'ian y la consiguiente mejora de las relaciones entre los comunistas y Chiang Kai-shek impulsó a Moscú a jugarse a fondo la carta china, proponiendo a Chiang un pacto de no agresión. En el largo duelo a ciegas en que la diplomacia soviética se había empeñado, ésta sería la carta ganadora.

El 7 de julio de 1937, sin una declaración formal de guerra y tomando como pretexto un incidente entre unidades chinas y japonesas en el puente de Marco Polo, cerca de Pekín, Japón daba comienzo a sus operaciones militares a gran escala en territorio chino. Especialmente poderoso fue el uso indiscriminado de la aviación: a los pocos meses de Guernica, Shanghai y otras ciudades sufrieron la misma experiencia. Al cabo de pocos meses, los japoneses ocuparon Pekín y llegaron hasta el valle del Yang Tze Kiang hasta alcanzar Nankín, escenario, en diciembre de 1937, de una horrible masacre. Chiang Kai-shek se veía obligado, así, a trasladar su capital a Hankow y posteriormente a Chung King.

A pesar de los fracasos, los chinos oponían una tenaz resistencia y cerraban filas. Entre el Kuomintang y los comunistas se llegó a un acuerdo en septiembre en virtud del cual éstos, sin abandonar el control de sus bases,

aceptaban integrar sus unidades en el ejército regular y volver al seno de la colectividad nacional poniendo fin a la república soviética proclamada en 1931. También en China, como en España, la guerra se anunciaba, pues, larga y, como en España, adquiría las dimensiones de una cuestión internacional que nadie podía ignorar y ante la que cada uno estaba obligado a determinar su postura y hacer su elección.

La Unión Soviética, como se ha visto, ya había elegido. Al haber estallado la guerra, tenía mucho interés en que Japón siguiese involucrado en ella durante el mayor tiempo posible y sólo le quedaba por sellar el tratado de no agresión con China, lo cual hizo en agosto de 1937, y enviar a China a los consejeros militares que en su momento habían sido expulsados. El problema de determinar su postura lo tenía, en cambio, Estados Unidos, que hasta el momento había evitado dejarse involucrar; desde luego, no se trataba de un problema de fácil solución.

Desde un punto de vista estrictamente formal, había una guerra, pero no una declaración de guerra, como se ha visto, ni por parte japonesa ni por parte china. Una declaración de guerra por parte de China podría haber subsanado esta anomalía, pero en este caso Estados Unidos se encontraría ante la disyuntiva entre el apoyo abierto a los chinos, con el riesgo de implicación en el conflicto que esto conllevaba, y el cese de las ayudas para no incurrir en la violación del *Neutrality Act*, que prohibía proporcionar armas a los países beligerantes.

Ambas eran soluciones que ni la administración ni la opinión pública norteamericana, dividida entre la simpatía y la solidaridad con los chinos agredidos y el persistente reflejo aislacionista, estaban dispuestas a elegir. Por tanto, al gobierno chino no le quedó otro camino que el que había emprendido ya, sin éxito, en la época de la invasión de Manchuria, es decir, el recurso a la SDN, que fue presentado el 13 de septiembre. La asamblea de Ginebra trasladó la cuestión a su comité para el Extremo Oriente, en el que estaban representados también los Estados Unidos en calidad de observadores; éste aprobó un documento en el que se expresaba su condena de la agresión japonesa, pero se abstenía de mencionar eventuales sanciones. El 12 de diciembre de 1937, un buque de guerra norteamericano –el Panay– anclado en el delta del Río Amarillo, era hundido por los japoneses, pero ni siquiera este grave incidente sirvió para modificar la postura norteamericana. En la conferencia de las potencias suscriptoras de los tratados de Washington, que comenzó en noviembre en Bruselas y en la que Japón y Alemania se negaron a participar, la delegación norteamericana se mantuvo en una línea de gran cautela y, así, la conferencia acabó en nada.

A un año del comienzo de la guerra civil española, un nuevo conflicto incendiario, pues, estallaba. Es cierto que China y España estaban lejos la una de la otra, pero eso no significa que entre los acontecimientos chinos y

los españoles no hubiera conexiones. Las potencias que sostenían el pronunciamiento franquista eran, en efecto, las mismas que apoyaban la agresión japonesa a China. En noviembre de 1936, Japón había firmado con Alemania un pacto antiComintern, al que al año siguiente se sumará también Italia. A decir verdad, se trataba de un documento no exento de ambigüedades y contradicciones. Su objetivo declarado –la defensa de la «civilización occidental» contra la amenaza del comunismo internacional– mal se conciliaba con la afirmación del manual *Kokutai* de que esta misma «civilización occidental» era ajena al espíritu y a la tradición nipona, un contagio a evitar. Tampoco en el plano estrictamente político el pacto antiComintern tenía bases sólidas. Lo demuestra el hecho de que el compromiso contenido en el protocolo secreto anejo, por el cual las partes se comprometían –en caso de «ataque no provocado o de amenaza de ataque» por parte soviética– a no tomar iniciativas que pudiesen favorecer al agresor y en cualquier caso a no firmar tratados de no agresión con la URSS, será incumplido por ambas partes, Alemania en 1939 y Japón en 1941, respectivamente. Pese a su incoherencia y ambigüedad, el pacto antiComintern representaba un primer intento de alcanzar una convergencia entre potencias «revisionistas», y como tal era un hecho nuevo e inquietante.

La guerra civil española y la agresión japonesa a China introducían, pues, en el sistema de las relaciones internacionales nuevos elementos de desestabilización. Ya se ha visto cuán distintas fueron las reacciones de los estados, según su nivel de implicación y su percepción de los riesgos que derivaban de la nueva situación. Pero nadie, en mayor o menor medida, renunciaba a la ilusión de que fuese posible localizar los conflictos y aislar los incendios o alejarlos lo más posible de su casa. Faltaba, en suma, una percepción de la *globalidad* del peligro y del desafío que se estaba produciendo. Desde la tribuna del VII Congreso de la Internacional Comunista, Dimitrov había proclamado solemnemente que el mundo ya no era el de 1914 y que una nueva guerra mundial se podía prevenir con la acción solidaria de todas las fuerzas antifascistas. Stalin nunca desmintió públicamente estas afirmaciones, pero lo cierto es que no las compartía. En efecto, creía que la guerra era inevitable y que lo único que se podía hacer era ganar tiempo y trabajar para aplazar el conflicto y llegar a éste en las mejores condiciones posibles para la Unión Soviética y, de ser viable, quedar al margen. Como había afirmado en el XVII Congreso de su partido en enero de 1934, no tenía intención de «sacar las castañas del fuego» a nadie. Tres años después, el 15 de octubre de 1937, en un discurso que por su sinceridad y la novedad de sus ideas suscitó una gran impresión y encendió muchas esperanzas, el presidente Roosevelt planteaba la posibilidad de una «cuarentena» a la que someter a aquel 10 % de la humanidad que desafiaba la legalidad internacional y hacía peligrar la paz mundial, y al mismo tiempo manifestaba sus dudas acerca de la eficacia

de una política de «mero aislamiento y neutralidad» de su país. Pero muy pronto quedó claro que el que ha pasado a la historia como el «discurso de la cuarentena» sólo reflejaba convicciones personales del presidente y de su secretario de estado Cordell Hull, y el propio Roosevelt no tardó en apagar los entusiasmos, aclarando que no había querido plantear la posibilidad de sanciones.

A principios de 1938 el incendio más vasto era el que había prendido en Extremo Oriente, mientras que el de España parecía ya camino de extinguirse. Para los que, como la mayor parte de los estadistas europeos, mantenían una concepción sustancialmente eurocéntrica de las relaciones internacionales, ello constituía un motivo de alivio, pero precisamente de Europa vendría el desmentido de esta ilusión.

La estrategia planetaria esbozada en el discurso de la cuarentena quedaba así inerte y la propuesta avanzada por Roosevelt en enero de 1938, a decir verdad en términos imprecisos, para una conferencia mundial que afrontara los grandes temas de la política internacional, corrió igual suerte. Inglaterra se negó a tomarla en consideración y ya no se volvió a hablar de ello.

18

Hacia la guerra

18.1. DE LA *ANSCHLUSS* A MÚNICH

El 5 de noviembre de 1937, Hitler convocó al ministro de Exteriores Von Neurath, al ministro de la Guerra Von Blomberg y a los comandantes de la armada y de los ejércitos de tierra y de aire, Raeder, Von Fritsch y Göring, para manifestarles sus opiniones acerca de los grandes problemas de la política internacional. Comenzó afirmando que era preciso que Alemania se asegurara su «espacio vital» «por medio de la fuerza», superando la oposición de Francia e Inglaterra, y prosiguió esbozando una serie de escenarios posibles. La prueba de fuerza no había de aplazarse más allá de 1943-1945, ya que tras esta fecha el equilibrio de los armamentos ya no sería tan favorable para Alemania. Pero Hitler también contó con la posibilidad de que una ocasión favorable, por ejemplo una guerra civil en Francia o un conflicto ítalo-francés, pudiera presentarse con anterioridad. Ante esta eventualidad, Alemania debería aprovechar la situación actuando con extremada rapidez (*blitzartig schnell*): los objetivos eran Austria y Checoslovaquia.

El documento relativo a esta reunión, que se conoce por el nombre de su taquígrafo como «memorándum Hossbach» y que será utilizado como cargo contra Göring en el proceso de Núremberg, no es un ejemplo de claridad y eso explica que haya sido interpretado de distintas maneras, sea como prueba de que ya desde 1937 Hitler tenía planificado un conflicto general, sea, al contrario, como prueba de que no tenía plan ninguno y se dejaba llevar por las circunstancias. Lo cierto es que, cuando Hitler se fue, los participantes en la reunión, con la excepción de Göring, manifestaron perplejidades y reservas acerca de lo que habían escuchado. Especialmente críticos fueron los militares y Von Fritsch incluso presentó dos días después un memorándum escrito por él mismo, en el que se declaraba contrario a la hipótesis de

una guerra contra Francia. Algunos meses después de la reunión del 5 de noviembre, tres de sus participantes fueron cesados de sus cargos: Von Neurath fue sustituido en el ministerio de Exteriores por Von Ribbentrop; Von Fritsch por Von Brauchitsch y Von Blomberg por el propio Hitler, quien asumió el cargo de jefe de las fuerzas armadas. Sus nombres se sumaban así a los de Schacht, sustituido por Funk a la cabeza del ministerio de Economía, y de Von Papen, destituido de la embajada de Viena. En suma: una remodelación en plena regla.

Si no nos limitamos a considerar únicamente el «memorándum Hossbach», sino que tomamos en consideración el conjunto de acontecimientos que se originaron a partir de él, me parece que queda confirmado que Hitler era consciente de que una política que se proponía efectuar un gran rearme sin afectar al nivel de vida y del consumo era insostenible; también resulta claro que veía en una política de expansión y en la constitución de un *Lebensraum* la única salida de este *impasse*. Además, es evidente que el dictador estaba decidido a seguir en este camino afrontando los riesgos que de él derivaban. La incógnita mayor residía en la postura de Francia e Inglaterra. En su alocución del 5 de noviembre, Hitler había hecho previsiones optimistas acerca de sus reacciones (o falta de reacciones), ante la eventualidad de un *blitz* contra Checoslovaquia, pero se trataba como mucho de previsiones, si no de buenos presagios. En efecto, Francia e Inglaterra seguían siendo, en sus palabras, «enemigos inspirados por el odio». Mucho dependía de las orientaciones que prevaleciesen en la política británica y francesa en el futuro inmediato.

A diferencia de Francia, que, al terminarse la experiencia del Frente Popular, había vuelto a su habitual inestabilidad política, en Inglaterra el cuadro político parecía consolidado, aunque también tenía ésta sus problemas internos. El nuevo gobierno de Chamberlain estaba decidido a seguir con la política de rearme emprendida por Baldwin, pero tenía que enfrentarse a una opinión pública influida por la prensa, en particular el prestigioso *Times*, adversa en su gran mayoría a cualquier implicación en las intrigas del continente, como por otra parte hemos constatado ya a propósito de las cuestiones de Manchuria y de España. Los propios laboristas, que ciertamente eran los más sensibles al reclamo del antifascismo europeo, parecían indecisos y divididos acerca de la cuestión del rearme. Desde luego, Hitler representaba un peligro y una amenaza, pero el tratado de Versalles nunca había tenido el favor de la opinión pública británica y continuó sin tenerlo también después del ascenso de los nacionalsocialistas al poder. El hombre de a pie no entendía por qué tendría que renunciar al bienestar que había vuelto tras tantos años de crisis sólo para impedir que unas minorías de lengua alemana volvieran a formar parte de Alemania. De ahí que, con esos presupuestos, el gobierno de Chamberlain, aun intensificando sus esfuerzos de

rearme, orientara su política exterior hacia la búsqueda de un arreglo pacífico de las controversias existentes.

Un primer test era el de las relaciones con Italia, que el asunto de Etiopía había deteriorado seriamente. El gobierno de Baldwin había dado ya unos pasos en esta dirección, con el denominado *gentlemen agreement* de enero de 1937, por el que las dos partes se comprometían a respetar la libertad de navegación en el Mediterráneo y la integridad de los estados de la costa, pero estos avances se vieron comprometidos por los ataques de los sumergibles italianos contra naves soviéticas y de otras nacionalidades y por la consiguiente iniciativa británica de convocar en Noyon una conferencia internacional sobre piratería, a cuyos acuerdos Italia se adhirió tardíamente y de mala gana. El gobierno de Chamberlain retomó las negociaciones y en abril de 1938 se llegó a los llamados «acuerdos de Pascua», que preveían, además de la reiteración del *gentlemen agreement* de enero de 1937, el compromiso por parte de Italia de retirar su cuerpo de expedición de España una vez terminada la guerra, y por parte de Inglaterra de reconocer el Imperio italiano en Etiopía, lo que se hará realidad en noviembre de 1938. Es probable que, al adoptar este talante conciliador con Italia, la diplomacia británica se propusiera aflojar el vínculo privilegiado que el Eje instituía entre Roma y Berlín. Sin embargo, esta maniobra no eximía a Inglaterra de coger el toro alemán por los cuernos. Un primer sondeo en esta dirección ya lo había hecho en noviembre de 1937 lord Halifax cuando, en un encuentro con Hitler, aparentó la disponibilidad inglesa a modificar la ordenación territorial de Europa central, a condición de que se llegara a ello mediante negociaciones pacíficas.

Tanto con Italia como con Alemania la línea era, pues, la del apaciguamiento, y a los defensores de una política de firmeza, como el ministro de Exteriores Eden y el secretario permanente Vansittart, no les quedaba más remedio que conformarse. En febrero de 1938, Eden, quien se había opuesto tanto a los acuerdos de pascua con Italia como a las aperturas hacia Alemania, presentó la dimisión y fue sustituido en el *Foreign Office* por lord Halifax. También Vansittart fue destituido de su cargo. Así, mientras en Berlín Hitler se liberaba de sus «palomas», en Londres Chamberlain hacía lo mismo con sus «halcones». Se trataba ahora de ver cuáles serían las reacciones de Hitler. La espera no duró mucho.

El 2 de febrero Schuschigg fue recibido por Hitler en Berthtesgarten. Tras las concesiones hechas con el acuerdo de 1936, el canciller austríaco estaba dispuesto a otras nuevas, pero pedía a Hitler que desautorizara el pequeño partido nazi austríaco, cuyas tramas subversivas habían sido recientemente descubiertas por la policía. La petición era tanto más razonable en cuanto que el intento de insurrección se había realizado a espaldas de Berlín. Para su sorpresa, Schuschigg fue embestido por un agresivo monólogo

de Hitler, que terminó con la imposición de condiciones humillantes: no sólo la liberación de los nazis austríacos detenidos, sino el nombramiento de Seyss Inquart como ministro de Exteriores, el hombre de confianza de Hitler en Austria, y la sustitución de su jefe de estado mayor. A su vuelta, Schuschigg reaccionó convocando un referéndum para una Austria «libre y alemana». La réplica de Hitler fue un *crescendo* de demostraciones de fuerza: obligó a Schuschigg a desistir de su iniciativa, renunciando al referéndum, y a dimitir para dejar sitio a Inquart. Al negarse el presidente de la república Miklas a investir al protegido de Hitler, éste convenció a Inquart de que se autoproclamara primer ministro y pidiera la intervención de las tropas alemanas, que atravesaron la frontera el 11 de marzo. Al día siguiente Hitler entraba personalmente en Viena. Impresionado por las muestras de apoyo de la población, el *Führer* anunció el día 13 su decisión de incorporar Austria en el *Reich*. Esta se convertía, así, en una provincia alemana: para ella se exhumó el nombre carolingio de *Ostmark*.

El éxito de Hitler estuvo sin duda facilitado por la postura que asumió Mussolini. A pesar de que éste estaba sumido en las negociaciones con los ingleses que llevarían a los acuerdos de Pascua, y a pesar de su reciente posición acerca de la cuestión austríaca, no dudó en dar a Hitler la señal de vía libre, obteniendo a cambio la promesa de «eterna gratitud». Así pues, se consolidaban los vínculos entre los dos estados fascistas y el Eje superaba su primera prueba. Por parte de Francia, cuyo gobierno en aquellos días era dimisionario, no hubo reacciones considerables y tampoco por parte de Inglaterra. Una propuesta de Litvinov para una conferencia entre Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética se consideró, no sin fundamento, como un gesto de propaganda y en cualquier caso irrealizable.

Hitler pudo, así, no sólo ganar, sino humillar a sus opositores y también a aquellos de sus colaboradores que habían juzgado demasiado peligrosa su conducta. A los ojos de la opinión pública alemana, él era ahora el hombre que sabía encontrar, solo, el camino de la decisión justa y de la victoria y ello acrecentaba su prestigio personal y silenciaba las perplejidades y las vacilaciones residuales.

Tras la *Anschluss*, la posición de Checoslovaquia se había hecho precaria. Al oeste, se encontraba encerrada por el cerco del *Reich*, y en su interior su estabilidad estaba amenazada por esa auténtica quinta columna que era el *Sudeten deutsche Partei* de Konrad Henlein, que reclamaba en su programa la concesión de una autonomía tan amplia que llegaba a configurar un verdadero «estado de nacionalidad». Pero podía contar con un ejército de treinta y cuatro divisiones bien entrenado y apostado en una frontera adecuadamente fortificada y con un amplio sistema de alianzas basado en la relación privilegiada con Francia. Hitler solía definir a Checoslovaquia como «un portaaviones francés en medio de Europa». Pero en París había también

quienes no estaban dispuestos a batirse en su favor hasta el punto de arriesgarse a una guerra con Alemania. Si Daladier, que había vuelto a la cabeza del gobierno en abril, parecía decidido a honrar los compromisos de Francia derivados de sus alianzas, el ministro de Exteriores Georges Bonnet y el estado mayor del ejército, que lamentaba el atraso de la preparación militar, eran menos entusiastas. En medio de la incertidumbre, se buscó, como era habitual, el apoyo de Inglaterra y con este fin Daladier y Bonnet viajaron a Londres a finales de abril para reunirse con Chamberlain y Halifax. Pero éstos se mantuvieron tibios y por tanto la línea de conducta que acordaron al final del coloquio resultó ambigua. Aunque no se descartaba como *extrema ratio* una intervención anglo-francesa en apoyo de Checoslovaquia, la prioridad estaba en ejercer presiones para que ésta accediera a hacer concesiones e insistir para que Hitler moderara sus peticiones y no precipitara la situación con decisiones repentinas. Durante los meses siguientes, ambas potencias se mantuvieron en esa línea; a finales de mayo, cuando se rumoreó un inminente ataque alemán y Checoslovaquia movilizó a sus reservistas, se produjo un endurecimiento, pero en agosto el gobierno de Londres envió en misión a Praga a Walter Runciman, con el encargo de convencer al gobierno checo para que suavizara sus posiciones. Benes, quien no albergaba duda alguna acerca de las intenciones de Hitler y era consciente de que una postura intransigente por su parte proporcionaría a Londres y a París un pretexto para quitarle al apoyo que le era imprescindible para asegurar la integridad de su país, decidió, el 4 de septiembre, aceptar todas las peticiones de Henlein. Pero eso no fue suficiente para Hitler, quien había dado la orden de invadir Checoslovaquia el primero de octubre. El 12 de septiembre, durante su intervención ante el Congreso de su partido en Núremberg, lanzó una violenta invectiva contra Benes, acusándole de perseguir a la minoría alemana.

Al día siguiente, en el territorio de los Sudetes se produjeron brotes de rebelión, que sin embargo fueron reprimidos. Por parte alemana, ya no se hablaba de autonomía, sino de autodeterminación e incorporación al gran *Reich* y quedaba claro que el objetivo real era el desmembramiento de Checoslovaquia. La situación se había hecho, pues, candente y estaba abierta a cualquier desarrollo.

La mayor incógnita consistía en las posibles reacciones de Hitler. ¿Estaba realmente dispuesto a arriesgar un conflicto general o lo suyo no era más que un *bluff*? En el seno del *Reich*, el general Beck, que en agosto había dimitido del cargo de jefe de estado mayor, informaba de que Alemania no estaba en condiciones de afrontar una guerra en varios frentes y algunos altos oficiales que compartían esas ideas se declaraban dispuestos a derrocar a Hitler para evitar que arrastrara al país a una nueva aventura y una nueva humillación. Pero Chamberlain no les dio crédito, considerando que sus afirmaciones carecían de fundamento y eran fruto del resentimiento de unos de-

rrotados. Por lo tanto, el 15 de septiembre decidió tomar por primera vez en su vida un avión y viajar a Berchtesgarten, donde Hitler le esperaba. En el transcurso del coloquio, el *Führer* insistió en su petición de incorporación de los Sudetes al *Reich* y Chamberlain se comprometió a intentar convencer a los gobiernos de París y Praga para que la aceptaran en principio, dejando el establecimiento de las modalidades para un segundo momento. Francia, al obtener el compromiso de los británicos de defender lo que quedase de Checoslovaquia, dio su visto bueno el día 19 y Checoslovaquia no pudo hacer otra cosa que sumarse dos días después. Cuando, el 22 de septiembre, Chamberlain se encontró nuevamente con Hitler en Godesberg, tenía buenos motivos para creer que la cuestión iba camino de solucionarse y se quedó pasmado cuando Hitler aumentó sus pretensiones, exigiendo la evacuación de las tropas checas del territorio de los Sudetes para el primero de octubre y poniendo sobre la mesa de las negociaciones las reivindicaciones que mientras tanto húngaros y polacos habían avanzado acerca de los territorios de Checoslovaquia. Así pues, todo volvía al punto de partida y durante los días que siguieron Europa vivió bajo la pesadilla de una guerra inminente.

Mientras Checoslovaquia se movilizaba y Alemania, Francia e Inglaterra se preparaban, se sucedían consultas frenéticas entre políticos y militares y por vez primera estuvo implicada también la URSS, que por boca de Litvinov se declaró dispuesta a mantener los compromisos adquiridos con el pacto checo-soviético de 1935 (véase p. 231), pero no se fue más allá de un sondeo y una toma de contacto.

En las jornadas del 27 y 28 se produjo lo que pareció entonces una escampada. Chamberlain, quien en un mensaje radiofónico había hablado de «una controversia en un país lejano entre gentes de las que no sabemos nada», propuso a Mussolini que promoviera una conferencia entre los cuatro que se celebraría en Alemania. Mussolini aceptó y Hitler, que ya tenía en mente la descomposición de Checoslovaquia que realizaría unos meses más tarde, renunció, por una vez, a arrasar y se conformó con ganar.

La conferencia se reunió en Múnich en la jornada del 29 y duró pocas horas, el tiempo suficiente para que Mussolini leyera las propuestas que le había pasado Hitler, que no se diferenciaban de las peticiones del 22 de septiembre más que en algunos detalles insignificantes relativos a los plazos de la ocupación de los Sudetes, y para que Chamberlain y Daladier las aprobaran. La delegación checa no fue admitida en la conferencia y sólo se la informó al final de la sesión de las decisiones tomadas. La URSS no había sido invitada. Al día siguiente, Chamberlain celebró un nuevo coloquio con Hitler, obteniendo el compromiso de que cualquier otra cuestión relativa a los intereses de los dos países se solucionaría mediante consultas.

Europa dio un respiro de alivio. De regreso a su país, Chamberlain, Daldier y el mismo Mussolini fueron recibidos por multitudes entusiastas como

salvadores de la paz. Roosevelt, que el 27 de septiembre había propuesto una ronda internacional de consultas con la participación de Estados Unidos y la URSS, manifestó no estar «nada sorprendido» por el resultado de la conferencia y envió a Chamberlain un telegrama de tan sólo dos palabras: *Good Man*. En medio de la euforia por el peligro pasado, se habló de «paz para nuestro siglo». En realidad, la paz duraría exactamente un año.

18.2. DE MÚNICH A LA GUERRA

No tuvo que pasar mucho tiempo para que los que habían augurado (o se habían ilusionado) que los acuerdos de Múnich favorecerían un proceso de estabilización de la situación europea, tuvieran que darse cuenta de que, al contrario, éstos habían impulsado una mayor desestabilización. Las consecuencias más inmediatas se hicieron sentir en Europa del este, donde el sistema de alianzas y contrapesos que durante años había asegurado la estabilidad de la región, no sobrevivió a la crisis checoslovaca. Francia, que había sido su principal valedora, había perdido en Múnich gran parte de su credibilidad y cuando, en diciembre de 1938, estipuló con Alemania un pacto de no agresión que sustancialmente no hacía más que volver a repetir los compromisos acerca de la frontera franco-alemana ya asumidos por Alemania en Locarno, fueron muchos los que interpretaron esta iniciativa como una renuncia a su tradicional política prooriental. En el vacío que así se había creado se dispararon las tensiones étnicas y las reivindicaciones territoriales de los diferentes estados de la región. Por impulso de Alemania, que ya había planteado la cuestión en las conversaciones que habían precedido a Múnich, Polonia ocupó, en octubre de 1938, el distrito checo de Teschen, mientras que en noviembre Hungría, con el aval alemán e italiano, se adueñó de la parte meridional de Eslovaquia, donde residía una población de un millón de habitantes. Por su parte, eslovacos y rutenos, que habían permanecido dentro de lo que quedaba de Checoslovaquia, también pedían la independencia. Sus peticiones eran apoyadas por la Polonia del coronel Beck, el sucesor de Pilsudsky, que perseguía el espejismo de una hegemonía conjunta ítalo-polaca sobre una porción de territorio –el denominado *Intermarium*– que se extendía desde el Báltico a los Balcanes, y por ende miraba a abolir aquella cuña entre Polonia y Hungría que era Checoslovaquia.

Al nacionalismo de las potencias menores de Europa del este le acompañaba siniestramente el racismo triunfante en las potencias fascistas. En la madrugada entre el 8 y el 9 de noviembre de 1938, pocas semanas después de Múnich, tomando como pretexto el asesinato de un diplomático alemán en París a manos de un prófugo judío polaco, Hitler desencadenó una expedición contra los judíos. El balance de la que pasó a la historia como la «no-

che de los cristales rotos» fue de docenas de muertos, centenares de sinagogas destruidas, miles de tiendas saqueadas y decenas de miles de prisioneros en los campos de concentración. En el transcurso de su larga historia, Europa había conocido muchos pogromos, pero ninguno tan fríamente planificado. Casi en aquellos mismos días, Italia, un país en el que la pequeña minoría judía estaba plenamente integrada en la comunidad nacional, promulgaba sus primeras leyes «para la defensa de la raza», con las que por primera vez los italianos se percataban de que eran una raza «aria». Además de un insulto a la inteligencia del pueblo italiano, se trataba de un acto de servidumbre hacia la Alemania nazi, que entre otras cosas restringía los márgenes de autonomía de Italia respecto a su potente aliado. Todavía en octubre de 1938, el ministro de Exteriores Galeazzo Ciano, preocupado por no deteriorar las relaciones con Inglaterra establecidas con los acuerdos de Pascua, rechazó la oferta de un pacto de alianza de su homólogo Von Ribbentrop; pero, como veremos, su resistencia no duraría mucho tiempo.

Mientras tanto, la carrera armamentística no tenía tregua y se intensificaba. Después de Múnich, Chamberlain había aumentado los fondos para los armamentos navales y aéreos y Hitler no había dejado de replicar con análogas medidas. En abril de 1939 Inglaterra volvió a introducir el reclutamiento obligatorio y también en este caso Hitler reaccionó, denunciando el acuerdo naval anglo-alemán de 1935.

La decisión inglesa de adoptar una medida tan impopular se explica por el precipitarse de los acontecimientos. El 14 de marzo, los nacionalistas católicos eslovacos, instigados desde Berlín, proclamaban su independencia y al día siguiente las tropas alemanas entraban en Bohemia y Moravia al tiempo que los húngaros ocupaban la Rutenia subcarpática. Así pues, Checoslovaquia había dejado de existir, desmembrada entre el protectorado alemán de Bohemia y Moravia y una Eslovaquia formalmente independiente, pero en realidad satélite de Alemania y territorialmente mutilada. Pocos días después las tropas alemanas ocuparon también el distrito de Memel, en Lituania, que Hitler reivindicaba desde tiempo atrás. La siguiente reivindicación fue Dánzig, la ciudad que desde 1919 se regía como ciudad libre bajo control de la SDN. De tal cuestión se había conversado anteriormente de forma reservada entre alemanes y polacos e incluso se había barajado la hipótesis de su reunificación con el territorio nacional mediante una autopista construida a través de un corredor en territorio polaco; a cambio, Polonia recibiría compensaciones territoriales en Ucrania. Pero ahora Hitler hacía públicas sus peticiones y no volvía a mencionar eventuales compensaciones. Polonia, que hasta entonces había secundado ciegamente las iniciativas de Alemania y participado de su botín, reaccionó con agresividad y Hitler a su vez declaró caduco el pacto polaco-alemán de 1934. Mientras tanto Mussolini, al que Hitler no había informado de su decisión de invadir Checoslo-

vaquia hasta el final, quiso dar prueba de su autonomía enseñando él también sus músculos y emprendiendo una acción paralela. En noviembre de 1938 se habían producido en Italia numerosas manifestaciones en las que se había reivindicado la italianidad de Niza, la Saboya, Córcega e incluso Túnez. Se trataba, evidentemente, de eslóganes que tenían el fin de exaltar en sentido chovinista a la opinión pública. Albania, ocupada en abril de 1939, representaba sin duda un objetivo más al alcance de la mano.

Los acontecimientos de marzo-abril de 1939 fueron para la opinión pública internacional algo nuevo y tremendo. En efecto, era ya evidente que el objetivo de Hitler no era sólo el de reparar las injusticias sufridas en Versalles y que el principio de autodeterminación al que se había apelado para los austríacos y los Sudetes no tenía para él ningún valor cuando se trataba de incorporar al *Lebensraum* alemán otros territorios y otras etnias. La motivación que esgrimía, la de «la superioridad de la raza aria», hacía todavía más intolerable su agresividad. Todo esto fue percibido claramente por sectores muy consistentes de la opinión pública internacional, pero la intensidad de las reacciones fue diversa en los distintos países. Mientras que en Francia la perspectiva de «morir por Danzig» –como se dijo– no encontraba favor más que entre los militantes y los simpatizantes de la izquierda, y ni siquiera todos, en Inglaterra la opinión pública encontró la unidad que le había faltado en el momento de las crisis manchú y española. La división de Checoslovaquia, la «noche de los cristales rotos» y, ahora, las amenazas a Polonia, no sólo barrían la efímera euforia de Múnich, sino que generaban la firme determinación de afrontar los tiempos duros que se anunciaban y de hacer cada uno su parte. De estos estados de ánimo se hizo intérprete el propio Chamberlain cuando, el 17 de marzo, declaró que con Hitler era imposible tratar.

Dos semanas después, el 31 de marzo, el gobierno inglés declaraba que apoyaría «con todos los medios» a Polonia, en caso de que se produjera «cualquier acción que ponga en peligro la independencia polaca». Dos semanas después Francia se sumó a esta declaración de garantía, que posteriormente se extendió a Rumanía, también objeto de presiones económicas por parte de los alemanes, que querían asegurarse el control de sus yacimientos petrolíferos, y a Grecia.

A principios de mayo, las alineaciones que iban a enfrentarse en la segunda guerra mundial comenzaban a perfilarse con claridad: por un lado, las potencias occidentales y la reconstituida alianza franco-británica; por el otro, las potencias fascistas y «revisionistas». Precisamente en mayo Italia, cediendo a las reiteradas presiones alemanas, suscribía con Alemania el llamado «pacto de acero», con el que, si bien obtenía el compromiso alemán de respetar la frontera del Brénero (con Austria) y de no plantear la cuestión de las minorías altoatesinas, a su vez se comprometía a sostener a su aliado ante la eventualidad de un conflicto. Sin embargo, Mussolini, que era cons-

ciente de la insuficiencia militar italiana y que, además, se aprestaba a organizar en Roma la exposición universal de 1942, se apresuró a precisar que Italia no podría honrar su compromiso antes de 1943. Éste fue el contenido del «memorial Cavallero» entregado a Hitler a finales de mayo.

Si algunas piezas ya estaban dispuestas encima del tablero, otras todavía no lo estaban. El vínculo entre Alemania, Italia y Japón, plasmado en el pacto antiComintern, no llegaba a cristalizar, como Hitler hubiese deseado, en una alianza política y militar, a causa de la diversidad de las estrategias que perseguían sus posibles integrantes, la estrategia asiática de Japón y la europea de las potencias del Eje. En el otro bando, sin duda la opinión pública norteamericana simpatizaba en su gran mayoría (un 84 % según un sondeo del instituto Gallup) con Inglaterra y sus aliados, pero no hasta el punto de llevarla a renunciar a su habitual aislacionismo. Las convicciones personales del presidente encontraban la resistencia del Senado y de prestigiosos diplomáticos. Contrarios a cualquier tipo de implicación eran, por ejemplo, el embajador en Londres, Kennedy, y el ex embajador en Moscú, Bullitt. Pero nadie podía albergar dudas sobre el bando en el que militarían Estados Unidos y Japón, en el caso de llegar a estar involucrados en el conflicto. En cambio, era una incógnita la actuación de la Unión Soviética. Ya hemos visto cómo las propuestas soviéticas a Francia e Inglaterra durante la crisis austríaca y checoslovaca habían sido ignoradas y cómo la URSS había sido excluida de la conferencia de Múnich. En marzo de 1939, Litvinov había vuelto a presentar su propuesta de una conferencia internacional que se celebrase en Bucarest, en la que participarían Inglaterra, Francia, Rumania, Polonia, Turquía y la Unión Soviética, con el fin de concertar una estrategia común acerca de las cuestiones abiertas en Europa oriental; pero una vez más la iniciativa soviética topó con la frialdad británica y la hostilidad polaca. No es que por parte occidental hubiese, como sospechaban en Moscú, el propósito de canalizar hacia la URSS el empuje agresivo del nazismo alemán, aunque semejante eventualidad sí había sido tomada en consideración en algunos círculos. Pero se trataba más bien, como se expresó Chamberlain en una conversación privada, de «una profunda desconfianza hacia la Unión Soviética», motivada no sólo por las diferencias ideológicas, sino por las dudas acerca de la capacidad operativa del ejército soviético, diezmado por las purgas estalinistas.

Objeto de hostilidad por parte de sus enemigos declarados y de desconfianza por parte de sus eventuales socios, la URSS estaba también amenazada en sus fronteras orientales. Los incidentes en la frontera siberiana de junio de 1937 no quedaron como un episodio aislado y en el verano de 1938 y en el de 1939, tropas soviéticas y japonesas se enfrentaron en auténticas batallas, respectivamente en Chang Ku Fe y a orillas del río Chalchin-Gol. Este último enfrentamiento se resolvió en favor de los soviéticos, pero las hostilidades continuaron hasta septiembre de 1939.

Pero la difícil posición internacional de la URSS mejoró a raíz de la decisión de ingleses y franceses de garantizar la independencia de Polonia. En efecto, en caso de que Hitler decidiese atacar a Polonia, se perfilaba para Alemania el riesgo de verse nuevamente obligada a luchar en dos frentes, como había sucedido en la primera guerra mundial. Pero ¿honrarían los occidentales sus compromisos con Polonia? Tras la conferencia de Múnich, era éste un interrogante que la diplomacia soviética estaba legitimada a plantearse. Con todo, la decisión anglo-francesa sobre Polonia abría para los soviéticos nuevas perspectivas y ampliaba sus márgenes de maniobra. Merecía la pena explorarlos, aunque sin excluir otras soluciones.

El 18 de abril Litvinov renovaba y precisaba su propuesta, ya avanzada anteriormente, de una garantía común, inglesa, francesa y soviética, que se extendería a todos los países fronterizos con la Unión Soviética; sobre esta base se entablaron negociaciones que se prolongaron hasta mediados de mayo sin producir resultados considerables. La sustitución de Litvinov, del que eran conocidas las posiciones filooccidentales, por Molotov, hombre de confianza de Stalin, sustitución que se produjo cuando las negociaciones todavía estaban en marcha, fue interpretada por muchos como una señal de cambio de rumbo en la política exterior soviética y desde luego no ayudó al buen resultado de las negociaciones, que en todo caso se reanudaron a finales de mayo. Tanto Francia como Inglaterra, que estaban representadas por diplomáticos de segunda fila, no parecían interesadas en apresurarse y fue sólo en agosto cuando se afrontó el problema de una convención militar, a la que los soviéticos eran especialmente sensibles; la negociación pertinente fue encargada a expertos militares. El obstáculo principal estribaba en la negativa de Polonia a permitir el paso de las tropas soviéticas por su territorio en caso de guerra con Alemania y éste fue el escollo contra el que se estrellaron las negociaciones. El coronel Beck y los militares polacos, repetidas veces instados por ingleses y franceses, se mantuvieron en su negativa.

Mientras las negociaciones se arrastraban infructuosamente, ambas partes mantenían, por canales reservados, contactos con Berlín. Entre junio y julio, Helmut Wohltat, un estrecho colaborador de Göring, se encontró dos veces con sir Horace Wilson, mano derecha de Chamberlain. Existen varias versiones sobre el contenido de esas conversaciones, pero lo cierto es que no produjeron ningún efecto concreto. Anteriormente, el 17 de abril, el embajador soviético en Berlín, Merkalov, había sondeado al secretario de estado Weiszächer, sondeo que de momento no tuvo consecuencias. Pero el 27 de julio, el consejero de la embajada soviética Astachov se reunía con un funcionario de la *Wilhelmstrasse*, Schnurre, y en esta ocasión sí se vislumbró, por primera vez en términos generales, la posibilidad de un acuerdo entre alemanes y soviéticos. La iniciativa procedía de parte alemana. En efecto, Hitler –que ya el 23 de mayo había comunicado a sus generales su intención de

atacar a Polonia a pesar de que ello entrañara el riesgo de una guerra con Francia e Inglaterra (y en los mismos términos se había expresado Von Ribbentrop en su coloquio del 11 de julio con el italiano Ciano)– quería tranquilizar a los responsables militares, dejándoles ver la posibilidad de un acuerdo que evitaría a Alemania tener que luchar en dos frentes. Moscú demostró interés por la propuesta, pero esta vez fueron los diplomáticos soviéticos los que tergiversaron, a la espera de los acontecimientos, mientras que por parte alemana se hacía cada vez más evidente el deseo de acelerar el proceso. El desenlace comenzó a fraguarse entre el 18 y el 23 de agosto. Molotov, quien hasta pocas horas antes no parecía dispuesto a concluir, en la tarde del día 18 convocó al embajador alemán en Moscú, Von der Schulenburg, y le comunicó el asentimiento soviético para que Von Ribbentrop fuera a Moscú a definir los términos del acuerdo, indicando las fechas del 26 o 27. El día 20 llegaban a su conclusión las negociaciones, que llevaban tiempo arrastrándose, para estipular un tratado comercial entre los dos países. Evidentemente, por parte soviética se había producido un cambio de opinión, y todo deja suponer que ello se debía a la intervención directa de Stalin. Hitler, que había fijado el arranque de las operaciones militares para el día 26, quería quemar las etapas y el 20 de agosto, con un procedimiento inusitado, dirigió a Stalin un mensaje personal en el que se declaraba dispuesto no sólo a aceptar el borrador de tratado propuesto por Molotov, sino que dejaba entrever su disponibilidad hacia el protocolo anejo para la delimitación de las respectivas «zonas de interés», que Molotov también había puesto como condición para el acuerdo. El mensaje de Hitler terminaba proponiendo la fecha del día 22 o 23 para el encuentro entre los dos ministros de Exteriores, ya que –afirmaba– «la tensión entre Alemania y Polonia se había hecho intolerable» y por tanto no era posible que Von Ribbentrop se entretuviera en Moscú más de «uno o dos días». Esto equivalía a decir que la agresión a Polonia era inminente, pero Stalin dio igualmente su consentimiento en un mensaje personal a Hitler, el 21 de agosto. En este mismo día se reunían por última vez las delegaciones militares francesa, inglesa y soviética. Dos días después, el pacto de no agresión estaba firmado y Stalin quiso participar personalmente en la ceremonia de la firma. Lo que se hizo público no se diferenciaba de otros pactos análogos que se habían estipulado durante la última década, pero no así el protocolo anejo, que permaneció secreto. Éste fijaba la línea de demarcación entre las «esferas de interés» alemana y soviética en la frontera septentrional de Lituania y, en territorio polaco, en la línea de división marcada por los ríos Narew, Vístula y San. Así, quedaban incluidos en la zona soviética Finlandia, Estonia y Letonia, además de los territorios ucranianos y bielorrusos perdidos con la paz de Riga y una parte de la Polonia étnica que comprendía la provincia de Lublín y una parte de la de Varsovia.

La noticia del pacto ruso-alemán cogió por sorpresa a las cancillerías, pero representó un auténtico trauma para todos los que habían mirado a la Unión Soviética como un baluarte del antifascismo y de la lucha por la paz. Muchos intelectuales y dirigentes comunistas expresaron públicamente su desacuerdo: entre otros, los italianos Umberto Terracini y Camilla Ravera, el francés Paul Nizan, que nos ha dejado una apasionada reconstrucción de aquellos días, los ingleses Stephen Spender y George Orwell. Para ellos y muchos otros la decisión soviética era una traición de los ideales antifascistas, a los que la URSS había antepuesto su razón de estado. El Partido Comunista Francés, que había aprobado el pacto ruso-alemán, fue ilegalizado en septiembre de 1939.

En efecto, Stalin había llegado a la decisión de firmar sólo en base a la lógica de la razón de estado. Ya se ha observado que estaba convencido de que la guerra se podía aplazar, pero no evitar. El desarrollo de los acontecimientos había confirmado esta convicción y en el XVIII Congreso del partido, en marzo de 1939, había afirmado que «la segunda guerra imperialista» para una nueva repartición del mundo «ya había comenzado», aunque *todavía* no se había convertido en una «guerra mundial». Él nunca había creído en la posibilidad de una gran coalición antifascista capaz de prevenir la guerra y ya se ha visto cómo Francia e Inglaterra le ofrecieron motivos o pretextos de sobra para reafirmarse en esta desconfianza. Con estas convicciones y estos presupuestos, la única solución posible era, según Stalin, mantener a su país apartado del inminente conflicto durante el mayor tiempo posible.

En un intercambio de frases con Von Ribbentrop durante la ceremonia de firma del pacto, Stalin expresó la opinión de que Inglaterra lucharía «con habilidad y tozudez». Hitler, en cambio, cultivó hasta el final la esperanza de que el pacto con la Unión Soviética disuadiría a Francia e Inglaterra de intervenir en la guerra, lo que a la luz de los hechos se reveló como un error. El 25 de agosto, dos días después de la firma del pacto, Inglaterra y Francia reiteraban y formalizaban los compromisos asumidos con Polonia, mientras que Mussolini subordinaba la intervención italiana a la concesión por parte alemana de suministros militares exorbitantes, prácticamente una coartada para la declaración de «no beligerancia» del 1 de septiembre. También el 25 de agosto, Japón, indignado por la firma del pacto ruso-alemán, que era una violación del pacto antiComintern, rompía las negociaciones –comenzadas ya desde hacía tiempo– para la alianza militar con Alemania y tomaba contacto con la URSS, contacto que culminará el 16 de septiembre con una tregua sobre la cuestión de la frontera siberiana. A raíz de estos hechos nuevos e indeseables, Hitler se vio obligado a aplazar el ataque a Polonia hasta el 1 de septiembre. Siguieron algunos días de intentos tan frenéticos como inútiles por encontrar una salida *in extremis*; en ello se volcaron Mussolini, quien el 31 de agosto propuso la convocatoria de una conferencia in-

ternacional –una suerte de nueva Múnich–, y un hombre de negocios sueco, Birg Dahlerus, quien viajó entre Londres, Berlín y Varsovia buscando vanamente una solución de última hora. Pero ya era demasiado tarde: el 1 de septiembre, las tropas alemanas cruzaron la frontera polaca y el 3 Francia e Inglaterra lanzaban un ultimátum a Alemania, que naturalmente lo rechazó. A Inglaterra se sumaron también sus dominios, algunos de los cuales, por otra parte, quisieron presentar su propia declaración de guerra para subrayar su independencia. Por su parte, Irlanda optó por la neutralidad, mientras que en Suráfrica la decisión de asociarse con Inglaterra en el conflicto, sostenida por el general Smuts, prevaleció con un margen de pocos votos, obligando a la dimisión del gobierno, encabezado por Herzog, líder del Partido Nacionalista e impulsor del *apartheid*. Comenzaba así la segunda guerra mundial.

A diferencia de la primera, no es difícil determinar las responsabilidades. Desde Manchuria a Etiopía, desde España a China, desde Austria a Checoslovaquia y a Polonia, la iniciativa política y militar fue siempre de las potencias fascistas y de Japón. El problema surge, en cambio, al deslindar las responsabilidades por la fallida prevención del conflicto. La reconstrucción de los acontecimientos que hemos llevado a cabo permitirá al lector, esperamos, extraer sus conclusiones. Sólo me limito a observar que, si no imposible, es por lo menos muy arduo aislar un evento o un momento que se pueda considerar como un punto sin retorno. El fracaso de la conferencia sobre el desarme, los acuerdos Hoare-Laval, la no intervención, el fracaso de la conferencia de Bruselas sobre la cuestión china, Múnich y el pacto Molotov-Von Ribbentrop... todos ellos son eslabones de una misma cadena y representan otros tantos peldaños de una trágica escalada. Más que de las responsabilidades de cada uno, cabe hablar, pues, de responsabilidad colectiva, no sólo de los que en cada ocasión tomaron determinadas decisiones y asumieron determinadas medidas, sino también, aunque en menor medida, de los que, a pesar de que disponían de los medios adecuados y de prestigio internacional, no tomaron ninguna decisión y no asumieron ninguna medida. A lo sumo, si se quiere introducir un criterio de graduación, quizá se puede decir que las responsabilidades de cada uno son directamente proporcionales al nivel de su influencia en el sistema de relaciones internacionales.

Así, nuestra exposición termina con la constatación de un nuevo fracaso, de una nueva derrota de la razón. En cierto sentido, se trataba de un fracaso y de una derrota más graves que los de la primera guerra mundial, ya que si ésta había cogido por sorpresa a la opinión pública y a los propios gobernantes, la segunda fue, de hecho, una guerra anunciada, que la opinión pública asumió con resignación. A diferencia de lo que había pasado en 1914 y en el «radiante mayo», en 1939 no se produjeron –salvo las que organizaron los regímenes fascistas– manifestaciones de adhesión y de entusiasmo en ninguna capital europea.

19

La segunda guerra mundial

19.1. EL PRIMER AÑO DE GUERRA

La estrategia que Hitler quería seguir y siguió durante la primera fase de la guerra no es, bien mirado, muy distinta de la que había guiado su política exterior: poner a sus adversarios cada vez ante el hecho consumado, esperar sus reacciones y comportarse en consecuencia. En sus planes la guerra se configuraba como una sucesión de campañas instantáneas y victoriosas, una secuencia de «guerras relámpago» alternadas con gestos y ofertas de paz.

Con Polonia le salió perfectamente. Tras apenas cuatro semanas desde el comienzo de las hostilidades, el 28 de septiembre, Varsovia capitulaba. El 6 de octubre, tomando la palabra en el *Reichstag*, Hitler declaraba que, una vez solucionada la controversia con Polonia, no tenía otras reivindicaciones, salvo la devolución de las colonias, sobre la que se podía tratar; así, proponía a Inglaterra y Francia la convocatoria de una conferencia económica europea, oferta que fue rechazada por los gobiernos aliados. Una negativa probablemente esperada, si el 22 de octubre Hitler decidía pasar a su segunda iniciativa, el ataque a Francia, que debería realizarse eludiendo la línea Maginot, como ya en 1914, a través de Bélgica y Holanda. Pero tuvo que enfrentarse a las reticencias de sus generales, quienes, recordando la experiencia de la primera guerra mundial, consideraban que la empresa era arriesgada y precipitada. Algunos, como había pasado en vísperas de la conferencia de Múnich, llegaron a tomar contacto con ambientes ingleses dejando entrever la posibilidad de un golpe de estado para deponer al *Führer*. La fecha del inicio del ataque, pues, fue aplazada nada menos que veintinueve veces antes de ser fijada definitivamente para el 10 de mayo de 1940.

Entre octubre de 1939 y mayo de 1940 pasaron así siete meses en los que las operaciones militares se estancaron: fue la llamada *drôle de guerre*, la

guerra por burla. Si por parte alemana eso se explica, además de por la desconfianza y las resistencias de los mandos militares, por la necesidad de una cuidadosa preparación de una campaña que se presentaba mucho más compleja que la polaca; en cambio la falta de iniciativas por parte aliada en el frente occidental y a lo largo de la línea Maginot plantea algunos interrogantes. Una hipótesis que ha sido avanzada es que los Aliados se habían ido convenciendo de que las relaciones entre la URSS y Alemania se estaban convirtiendo en auténtica cooperación. Esta convicción se reforzaba al observar el desinterés de Alemania hacia la decisión rusa de agredir a Finlandia en diciembre de 1939 y al producirse la firma de un pacto de amistad entre los dos estados (28 de septiembre de 1939) que modificaba en favor de la Unión Soviética las cláusulas del protocolo de agosto, situando a Lituania en la esfera de influencia soviética. Si las cosas estaban en estos términos, entonces agredir a la URSS, más vulnerable que Alemania, podía significar no sólo castigar a un país hacia el que la desconfianza e incluso la hostilidad nunca habían faltado, sino también privar a Alemania de las materias primas de las que la Unión Soviética le abastecía. Eso puede aclarar los motivos por los que los planes que los estados mayores francés y británico venían elaborando durante este tiempo, en vez de estar dirigidos contra Alemania, miraban a hacer daño a la URSS tanto al norte, enviando ayudas a Finlandia, como al sur, partiendo de Oriente Medio en dirección a los pozos petrolíferos de Bakú. El final de la guerra ruso-finlandesa, que terminó con la concesión de la región de Carelia a la Unión Soviética en marzo de 1940, puso fin al primero de esos planes, mientras que el segundo fue abandonado definitivamente en el momento en que los alemanes atacaron a Francia. Pero la explicación más creíble de la falta de iniciativas aliadas en el frente occidental debe buscarse en la falta de preparación de los ejércitos aliados y en la conciencia que tenían de ello los altos mandos militares y los gobiernos. Antes bien, en abril fue Alemania la que tomó la iniciativa, al invadir Dinamarca y Noruega, en cuyas costas septentrionales había desembarcado un ejército aliado. El objetivo de los alemanes era el de asegurarse el pleno control del Báltico y prevenir la ocupación aliada de la cuenca minera sueca.

El 10 de mayo arrancaba la campaña de Francia. Tras invadir a Holanda y Bélgica, las tropas alemanas avanzaron por el norte de Francia, hasta que el 24 de mayo su avance se detuvo por orden de Hitler. A este respecto se ha conjeturado que con esta pausa Hitler quería permitir que el contingente británico pudiese regresar a la isla, y lanzar así a Inglaterra una señal con vistas a su retirada del conflicto y al inicio de una negociación. En efecto, el contingente inglés, integrado por trescientos cincuenta mil hombres, logró embarcarse el 4 de junio en Dunquerque, sustrayéndose así del cerco alemán. Inmediatamente después la *Wermacht* reanudó la ofensiva y el 14 de junio el ejército alemán entraba en París.

La caída de Francia convenció a Mussolini, que hasta entonces se había mantenido a la expectativa, de tomar la iniciativa y anunciar, el 10 de junio de 1940, la entrada de Italia en una guerra que él consideraba ya resuelta en favor de los alemanes. Ante esta situación, el gobierno francés, presidido por Paul Reynaud y que se había trasladado a Burdeos, dimitió; le sucedió un gabinete presidido por el mariscal Pétain, el hombre que había defendido Verdún durante la primera guerra mundial. Éste firmó el 22 de junio un armisticio que preveía que la Francia septentrional, París incluida, y la costa atlántica desde el canal de la Mancha hasta los Pirineos quedaran sometidas a un régimen de ocupación, mientras que el resto del país permanecería bajo la jurisdicción del gobierno de Petain, que estableció su sede en Vichy. Otro armisticio se firmó con Italia, que obtuvo una pequeña zona de ocupación a lo largo de la frontera alpina. A diferencia del de Vidkun Quisling en Noruega, el de Petain no se puede calificar de gobierno fantoche. El traspaso de poderes de Reynaud a Petain se había producido en el respeto de la legalidad constitucional y por tanto el nuevo gobierno estaba reconocido como legítimo por parte de los países no beligerantes, empezando por Estados Unidos. Además, gozaba de un apoyo considerable por parte de los sectores más moderados de la opinión pública y de momento la voz del general De Gaulle, quien el 18 de junio, desde los micrófonos de Radio Londres, había animado a los franceses para que continuaran la lucha, no encontró demasiada audiencia. Será sólo en un segundo momento cuando, por influencia de Pierre Laval, el gobierno de Vichy irá asumiendo cada vez más el carácter de un gobierno colaboracionista.

Tras la derrota de Francia, el siguiente objetivo de Hitler era la Unión Soviética. El dictador estaba convencido de que, como había sucedido con Polonia y Francia, también esta nueva campaña podía terminarse en pocos meses, si no en semanas, y sus generales, cuyas dudas habían sido desmentidas por la fulminante conclusión de la campaña francesa, ya no tenían la autoridad suficiente para oponerse a un *Führer* cuyo prestigio se encontraba en su cúspide. Sin embargo, hacía falta evitar que, como había sucedido en la primera guerra mundial, Alemania se viera obligada a luchar en dos frentes al mismo tiempo. De ahí la decisión de Hitler de dirigir el 19 de julio un «último llamamiento» a Inglaterra. Entre todos sus enemigos, ésta era el que más temía y respetaba, e incluso no descartaba la idea de una especie de condominio mundial anglo-alemán. No se puede excluir, pues, que estuviese dispuesto a entablar una negociación real y que contara con análoga buena voluntad por parte de su interlocutor.

De ser así, se había hecho la cuenta de la lechera. A la cabeza del gobierno británico se encontraba ahora Winston Churchill, que en mayo había sucedido a Chamberlain: un «irreductible» que prometía a su pueblo sólo «sangre y lágrimas», decidido como estaba a continuar la lucha a ul-

tranza. Su talante ya había salido a relucir en julio, cuando había ordenado a la armada británica que echara a pique a la francesa para evitar que cayera en manos de los alemanes.

Ante esta determinación, a Hitler y a sus generales no les quedaba más que asumir la situación. En un primer momento, se consideró la hipótesis de un desembarco en las costas inglesas –la famosa operación *León marino*–, pero ésta pronto se demostró difícilmente viable y es dudoso incluso que algún día hubiese sido tomada realmente en consideración.

La siguiente decisión de lanzar una ofensiva aérea sobre las ciudades británicas fue probablemente una segunda opción una vez abandonada la hipótesis del desembarco. La batalla aérea que se libró en los cielos de Inglaterra y de la Mancha entre septiembre y octubre, entre los *Messerschmidt* alemanes y los *Spitfire* británicos, marcó un primer hito en el conflicto. Porque, gracias también al uso del radar, se resolvió a favor de la *Royal Air Force*, lo que contribuyó a disipar la impresión –que se estaba difundiendo– de una caída de la capacidad de resistencia británica. Al contrario, cada día que pasaba se hacía más evidente que también esta guerra duraría mucho tiempo.

19.2. DE LA GUERRA EUROPEA A LA GUERRA MUNDIAL

Tras un año de hostilidades, sólo las mayores potencias de Europa central y occidental estaban involucradas en el conflicto. Fuera habían quedado, además de la URSS, los países balcánicos y la España de Franco, sobre quien en octubre de 1940 Hitler ejerció inútilmente presiones para que interviniera. Una primera ampliación de los escenarios de operaciones hacia el Mediterráneo y África septentrional y oriental se produjo a raíz de la intervención italiana. Posteriormente, en octubre de 1940, una «misión militar» alemana se instalaba en Rumania, asegurando a Alemania el control del país y de su petróleo. Mussolini, que no había sido informado de esta iniciativa, reaccionó, a su vez sin informar al aliado alemán, decidiendo unilateralmente atacar a Grecia. Lo que en los planes del *Duce* debería haber sido poco más que un paseo militar, muy pronto se reveló como una aventura sin gloria, y con ella se esfumó la ilusión de que Mussolini pudiese conducir una «guerra paralela», con plena autonomía respecto a su incómodo aliado alemán. En efecto, al fracaso de la empresa de Grecia, se añadieron las derrotas del cuerpo de expedición italiano en África septentrional y en Etiopía y las graves pérdidas que la armada sufrió en el Mediterráneo a causa de la *Royal Navy*. Así pues, otro escenario de operaciones se había abierto en una región, como la de los Balcanes, tradicionalmente desgarrada por rivalidades étnicas y nacionalismos enfrentados. Para Hitler, quien el 18 de diciembre había

tomado la decisión de atacar a la Unión Soviética (operación *Barbarroja*), se hacía imprescindible cubrirse las espaldas. En abril de 1941 las tropas alemanas que habían penetrado en Yugoslavia desde Hungría, se esparcieron por toda la península balcánica, poniéndola bajo su firme control. En mayo, la isla de Creta también fue ocupada mediante el lanzamiento de paracaidistas. Ello comportó por otra parte el aplazamiento de la operación *Barbarroja*, que estaba prevista precisamente para mayo. Durante el tiempo de espera, el 10 de mayo, uno de los más estrechos colaboradores de Hitler, Rudolf Hess, tomó la singular iniciativa de subirse a un avión y aterrizar él solo en territorio inglés para en un intento extremo convencer a Inglaterra a negociar. Parece ser, sin embargo, que Hitler no estuvo al corriente de ello.

Las operaciones militares contra la Unión Soviética arrancaron el 22 de junio de 1941. Su desarrollo inicial pareció confirmar en pleno las previsiones de Hitler y sus generales de que sería una campaña breve y victoriosa. Durante los primeros seis meses de guerra, más de tres millones de soldados rusos quedaron atrapados en las bolsas creadas por los ejércitos alemanes que avanzaban en profundidad, hasta llegar a amenazar Moscú y Leningrado. A este respecto, se ha planteado la cuestión de la falta de preparación militar soviética y de las consiguientes responsabilidades de Stalin. Existen varios testimonios que coinciden en que, a pesar de las advertencias que llegaban de muchas partes, éste excluía la posibilidad de un ataque o, más exactamente, subestimó su inminencia. Pero recientes hallazgos de archivo excluyen que, como se ha afirmado durante mucho tiempo, Stalin permaneciese momentáneamente ilocalizable, víctima del desánimo. En todo caso, la cuestión queda abierta y no se puede separar de una valoración general de la línea de política exterior seguida por el dictador soviético.

En su arrollador avance las tropas alemanas dejaban a sus espaldas tierra quemada. La guerra que se combatió en el frente ruso se diferencia de la del frente occidental por su carácter total, de auténtica guerra de exterminio. En los planes de Hitler, Moscú y Leningrado hubieran tenido que ser arrasadas y el grupo dirigente «judío-bolchevique» eliminado físicamente. En cuanto a la población, consideraba a los eslavos como una raza inferior y como tal quería que se les tratara. A diferencia de lo sucedido en otros países ocupados, en Rusia, como ya en Polonia, Hitler no tomó siquiera en consideración la posibilidad de instalar unos gobiernos fantoche e incluso cuando se le ofreció disponibilidad para colaborar, como en Ucrania, él la rechazó, aunque la buscó cuando la situación se había hecho ya desesperada. Lo que quería realizar era un domino directo, de tipo colonial, una Rusia desmembrada en varios «comisariados del *Reich*», cada uno encabezado por un gobernador general, un «virrey» con plenos poderes. Además, estaba prevista –aunque no llegó a producirse– la deportación a Siberia de treinta y un millones de rusos y polacos para dejar espacio a los colonos alemanes. En cuan-

to a los judíos, en Rusia y en toda Europa, había que exterminarlos. Tal era la decisión que Hitler había tomado en julio de 1941, en la cúspide de sus triunfos, decisión que posteriormente se vería confirmada en la conferencia de Wannsee del 20 de enero de 1942, en la que se decidió la «solución final». La tarea de llevar a cabo esas delirantes medidas correspondía a las SS, que en la campaña de Rusia tuvieron un papel y una autonomía de iniciativa que anteriormente no habían tenido.

Hacia finales de 1941, Alemania, pues, ejercía su control sobre toda Europa, desde Escandinavia al Mediterráneo, desde el Atlántico a las llanuras rusas, y la caída de la URSS parecía inminente. Así, la suerte en el conflicto parecía estar del lado de las potencias fascistas, pero quedaba la incógnita de la postura que asumirían los Estados Unidos de América.

Tras su segunda reelección en noviembre de 1940, Roosevelt presentó al Congreso una ley con la que se autorizaba a «vender, alquilar o prestar» ayudas, incluidas las armas y las municiones, a los estados amenazados por una agresión y cuya seguridad se considerara de interés para Estados Unidos, ley que fue aprobada por el Congreso el 11 de marzo de 1941. Es evidente que el estado amenazado por una agresión al que esta medida se refería sin nombrarlo, era Inglaterra y con ella, de hecho, se entablaron conversaciones a nivel de los estados mayores en vista de un compromiso militar común. En julio, contingentes norteamericanos se instalaban en Islandia y en agosto Roosevelt y Churchill se encontraron a bordo de un barco de guerra en las aguas frente a Terranova. Al final de este encuentro suscribieron la Carta Atlántica, sobre la que tendremos ocasión de volver. Estaba claro, pues, por si quedara alguna duda, de qué lado se pondrían los Estados Unidos en caso de que decidieran intervenir, pero esta decisión seguía sin tomarse ni se podía en absoluto dar por descontada. Las tendencias y los humores aislacionistas que habían condicionado la política exterior del presidente estaban todavía ampliamente difundidos, y la opinión pública y el mundo político estaban más interesados en el desarrollo de la situación en el área del Pacífico que en el de la guerra europea. Por lo tanto, las decisiones de la administración norteamericana dependían del rumbo que tomasen las relaciones con la mayor potencia del área, Japón.

Como se ha visto, tales relaciones habían conocido, en los años inmediatamente precedentes al estallido del conflicto, momentos de tensión, y seguían difíciles. Para mayor tensión, los japoneses habían suscrito en septiembre de 1940 una alianza militar con Alemania e Italia que, entre otras cosas, preveía un empeño común en caso de ataque militar norteamericano a uno de los miembros, y posteriormente, en julio de 1941, habían ocupado la Indochina francesa. Como represalia a esta última iniciativa, Estados Unidos decretó el secuestro de los bienes japoneses en su territorio, mientras que Inglaterra y sus dominios rompieron las relaciones diplomáticas con Japón

y efectuaron en su contra un embargo al que se sumó también la Indonesia holandesa. Para un país como Japón, cuya economía dependía totalmente de la importación de materias primas, esto equivalía a un estrangulamiento y por tanto el gobierno japonés se encontró ante la elección entre una negociación en posición de inferioridad y la guerra. En un primer momento se eligió el primer camino, pero las condiciones impuestas por los norteamericanos, que implicaban el abandono de los territorios ocupados en China, se consideraron inaceptables por los gobernantes japoneses. No quedaba otra alternativa que la guerra.

El 7 de diciembre de 1941, aviones japoneses atacaban, sin previa declaración de guerra, la armada norteamericana anclada en Pearl Harbor, en las islas Hawaii, que sufrió enormes pérdidas. El estallido de las hostilidades entre Japón y Estados Unidos no implicaba la unificación automática entre el escenario de guerra que se acababa de abrir en el Pacífico y el europeo: la URSS mantenía un pacto de neutralidad con Japón y Estados Unidos aún no había declarado la guerra a las potencias del Eje, ni es seguro que hubiese podido hacerlo. Los que realizaron esta unificación fueron Hitler y Mussolini: el 11 de diciembre Alemania, y tras ella Italia, declaraban la guerra a los Estados Unidos. Mucho se ha debatido sobre las motivaciones de esta decisión, que algunos estudiosos consideran precipitada e incluso inexplicable, mientras que otros creen que fue impulsada, si no impuesta, por la conveniencia de obligar a los Estados Unidos a distribuir desde un principio su potencial bélico entre dos frentes. Sea como fuere, con ello el conflicto europeo y el asiático confluían en una única guerra mundial.

19.3. LAS ESTRATEGIAS DE LOS DOS BLOQUES CONTRAPUESTOS

Una guerra mundial no se puede conducir sin una estrategia también mundial. Esta última, a su vez, no puede consistir sólo en los planes relativos al desarrollo de las acciones militares, sino también, y sobre todo, en la determinación de los fines de guerra y en la elaboración de un proyecto político para el mundo de la posguerra. En otros términos, cada uno de los contendientes está obligado a declarar para qué tipo de «nuevo orden» lucha y qué sistema de relaciones internacionales quiere construir. Si no lo hiciera, le faltaría un arma fundamental, la que proporcionan las motivaciones de los combatientes –la llamada «moral de las tropas»– y de la opinión pública.

Como se ha visto, Alemania, Italia y Japón habían suscrito en septiembre de 1940 un pacto –el denominado «Pacto Tripartito»– que comprometía a los firmantes a «ofrecerse mutua asistencia en caso de que una de las tres

partes sea atacada por una potencia que no esté actualmente implicada en la guerra europea o en el conflicto chino-japonés», una perífrasis que se refería con toda evidencia a los Estados Unidos. Esto suponía en primer lugar una coordinación entre los respectivos estados mayores y la elaboración de una estrategia militar común, y con este fin en enero de 1942 se firmó en Berlín un acuerdo militar en el que se delimitaban las respectivas zonas de operación. Pero el acuerdo no preveía ningún organismo de mando común, lo que hacía problemática la coordinación de las operaciones. Durante 1942 un intento en este sentido se hizo, pero, como veremos, con pobres resultados. De hecho, cada uno hizo «su» guerra, persiguiendo «sus» objetivos. Por lo demás, difícilmente podía ser de otra manera, no sólo a causa de la distancia geográfica, sino sobre todo por la inconsistencia de los objetivos políticos comunes. Esto se deduce del propio texto del tratado Tripartito: en sus primeros dos artículos las partes se comprometían a «respetar el papel de dirección» de Alemania e Italia «para el establecimiento de un nuevo orden en Europa» y el japonés «para el establecimiento de un nuevo orden en la más grande Asia oriental».

Pero ¿en qué consistía este «nuevo orden» que se auguraba tan solemnemente? El texto del tratado, salvo genéricas y obvias menciones a «una paz duradera» y a la «prosperidad y bienestar de los pueblos interesados», no contenía más indicaciones, y difícilmente hubiera podido contenerlas dadas las divergencias existentes al respecto, no sólo entre los firmantes, sino también dentro de los grupos dirigentes de cada país.

En el caso de Alemania, por ejemplo, el ministro de Exteriores Von Ribbentrop apostaba por la constitución de un «bloque continental» asiático-europeo que incluyera la Unión Soviética y se opusiera a las potencias de lengua inglesa, mientras que otros representantes nazis proponían soluciones distintas. En el marco del plan de Von Ribbentrop, la Unión Soviética quedaría como socio de Alemania y participaría con ella en la división del mundo; incluso se barajó la posibilidad de atribuirle el dominio de la India. Para Hitler, las ideas predominantes seguían siendo, en cambio, las de la ampliación del espacio vital hacia el este, del desmembramiento de la URSS y de un condominio colonial entre el *Reich* y el Imperio británico. Estos y otros planes, si bien se diversificaban y se contradecían entre ellos, sí tenían en común una concepción tosca del sistema de las relaciones internacionales, basada en la geopolítica, una pseudociencia especialmente cultivada en la Alemania nazi, cuyo axioma era el de la conflictividad permanente en las relaciones entre estados. Con esas premisas, la única –y provisional– solución posible era la de la partición del mundo en esferas de influencia entre las grandes potencias y las «razas superiores». En semejante escenario no cabían, obviamente, las aspiraciones a la emancipación y la independencia de los países extraeuropeos y de las colonias. La cosa no sorprende: la idea de

que indios y árabes pudiesen autogobernarse no podía por menos de ser totalmente ajena a la ideología racista hitleriana.

También entre los gobernantes japoneses existían divergencias acerca de las directrices y los objetivos para perseguir especialmente entre los que, como el ministro de Exteriores Matsuoka, apostaban por una expansión en dirección norte y en consecuencia veían en la Unión Soviética al enemigo principal, y los que, en cambio, eran favorables a la creación –como se leía en el tratado Tripartito– de una «área de prosperidad asiática» que incluyera a China, India y los países y colonias del Pacífico meridional y de Asia suroriental. La elección entre esas dos opciones se hizo en julio de 1941: Matsuoka fue destituido y el pacto de neutralidad con la URSS, que él mismo había firmado en abril de 1941, siguió vigente hasta agosto de 1945. Así pues, prevaleció la opción de una expansión hacia el sur y de hecho fue en esta dirección que después de Pearl Harbor se dirigieron, como veremos, las operaciones militares japonesas. En todo caso, los objetivos de la guerra quedaban circunscritos al área del Pacífico y asimismo las propuestas para la posguerra. Estas últimas fueron enunciadas en el transcurso de la conferencia de la más grande Asia oriental convocada en Tokio en noviembre de 1943, en la que participaron el chino Wang Ching-Wei, jefe del gobierno fantoche instalado por los japoneses en China, el indio Chandra Bose, ex rival de Nehru para el liderazgo del Partido del Congreso, representantes de Filipinas, Thailandia, Birmania y otros estados asiáticos ocupados por los japoneses o en los que éstos habían instalado gobiernos de su confianza. La «Declaración Conjunta de las Naciones de Asia Oriental», aprobada al final de los trabajos, se pronunciaba en favor del fin de toda dominación colonial, según el principio de «Asia para los asiáticos», y por la abolición de cualquier discriminación racial en cualquier país, principio que, como se ha visto, Japón ya había sostenido en la conferencia de paz de 1919. Al estar enunciados por un país que por tres veces en diez años –en 1931 en Manchuria, en 1937 en China y en 1941 en Pearl Harbor– había practicado la agresión y que estaba notoriamente impregnado de ideología militarista, estos principios no eran en absoluto creíbles y menos –como era intención del ministro de Exteriores Shigemitsu, impulsor de la conferencia y conocido como «paloma»– podían constituir una respuesta a la Carta Atlántica. Si se puede y se debe dudar de su sinceridad, también debe reconocerse que se trataba de principios no sólo distintos, sino opuestos a los de la geopolítica y del racismo nazi. Se comprende, por tanto, la resonancia que tuvieron en el ámbito geográfico al que estaban destinados también después de la conclusión del conflicto y la capitulación de Japón. En efecto, no cabe duda de que ellos contribuyeron a alimentar y corroborar el proceso de descolonización que se producirá en una serie de países asiáticos después de la guerra. Una excepción fue la de la Indochina francesa, donde el movimiento anticolonia-

lista que se fue desarrollando en la posguerra contra los franceses era la prosecución de la anterior resistencia a los ocupantes japoneses.

Como conclusión de lo expuesto hasta aquí, se puede afirmar, pues, que las potencias del Tripartito no llegaron a elaborar una estrategia común, ni en el plano militar ni en el político, ni para la guerra ni para la paz.

Tomemos en consideración ahora al bloque opuesto, comenzando obviamente por las relaciones anglo-americanas. De las relaciones entre Estados Unidos, aliados occidentales y Unión Soviética nos ocuparemos más adelante. Ya desde junio de 1940 Roosevelt autorizó a su jefe de estado mayor, el general Marshall, a tomar contacto con sus colegas ingleses para elaborar un plan común. Como se ha visto, esta colaboración militar entre Inglaterra y Estados Unidos se intensificó tras la aprobación de la ley sobre alquiler y préstamos de armas de febrero de 1941. Además, en agosto de 1941, en un encuentro entre Churchill y Roosevelt en aguas de Terranova, se acordó que buques de guerra norteamericanos escoltarían a los convoyes británicos en su navegación a través del Atlántico. Finalmente, en enero de 1942, durante la conferencia «Arcadia», que tuvo lugar inmediatamente después de Pearl Harbor, se decidió la constitución de un organismo militar común, los *Combined Chiefs of Staff*. La estrategia militar aliada se basaba en una opción fundamental, la de asignar prioridad a la lucha contra Alemania en vez de contra Japón: *German first*. Como veremos, durante la guerra se producirán contrastes entre ingleses y norteamericanos acerca de las decisiones a adoptar en cada ocasión. Pero este principio que otorgaba prioridad al escenario occidental nunca se discutió, como por otra parte resulta evidente por el desarrollo de las operaciones militares.

En el plano político, el documento fundamental de la estrategia anglo-americana es la Carta Atlántica, que se hizo pública el 14 de agosto de 1941, en una fecha en que los Estados Unidos todavía no se encontraban en estado de guerra. Los precedentes a los que este documento se remontaba eran los 14 puntos de Wilson y el pacto Briand-Kellogg: de este último se retomaba la idea de «abandono del uso de la fuerza» en las relaciones internacionales, mientras que de los primeros derivaba la insistencia en la reafirmación del derecho de autodeterminación de todos los pueblos. La carta arrancaba con la afirmación de que sus firmantes «no aspiran a ampliaciones territoriales o de otro tipo» y se pronunciaba en favor de la restitución de «los derechos soberanos de autogobierno a los que han sido privados de ellos por la fuerza», afirmación que valía, además de, obviamente, para los territorios sometidos a la ocupación alemana, también para los anexionados por la Unión Soviética. Finalmente, se auspiciaba explícitamente «la definitiva destrucción de la tiranía nazi». Los artículos cuya redacción planteó mayores dificultades fueron los relativos a la economía: el principio de la plena libertad de navegación y de comercio, ya presente en los catorce puntos

de Wilson y ahora propuestos de nuevo y con decisión por parte norteamericana, chocaban, en efecto, con los intereses de Inglaterra, ya que su aplicación integral comportaría el desmantelamiento de las barreras de protección de la zona de libre comercio de la Commonwealth. El conflicto, aunque formalmente se solucionó con una formulación que no carecía de ambigüedad, persistía y volverá a presentarse después de la guerra. Era ésta una señal de que también dentro de la alianza anglo-americana existían diferencias y contrastes que en definitiva se remontaban a dos distintas *imagines mundi*: la concepción decimonónica e imperial de un Churchill, y el *grand design* de Roosevelt para un liderazgo norteamericano en un mundo plenamente integrado. Pero la animadversión al fascismo, la conciencia de la gravedad del momento y la comunidad de valores profundamente enraizados, eran más fuertes que esas divergencias.

19.4. EL GRAN VIRAJE

El 7 de noviembre de 1941, mientras los alemanes se encontraban a las afueras de la ciudad, el aniversario de la revolución de octubre no se celebró, como de costumbre, en la Plaza Roja, sino en una estación del metro de Moscú, donde la noche anterior Stalin, que se había quedado en la ciudad, pronunció un discurso. La nota predominante del discurso del dictador soviético no fue la de la defensa de las conquistas de la revolución y del socialismo, sino la apelación a los sentimientos patrióticos del pueblo ruso. A este fin, no dudó en evocar en su discurso las «sombras» de Alexander Nevsky, el vencedor de los caballeros teutónicos, de Dimitri Donskoi, el vencedor de los tártaros, y de Kutuzov, el vencedor de Napoleón, invocando su protección sobre los soldados del Ejército Rojo. Sólo en la conclusión de su discurso nombró a Lenin: «¡Bajo la bandera de Lenin, adelante hacia la victoria!» El llamamiento tuvo efecto: en los primeros días de diciembre, la ofensiva alemana estaba bloqueada y el Ejército Rojo, reforzado por la llegada de las unidades siberianas, pasaba a la contraofensiva. El sentimiento patriótico con el que había contado Stalin, se había revelado eficaz. La guerra en el frente oriental duraría todavía mucho y tendría fases alternas, pero la ilusión hitleriana de una campaña rápida y resolutiva ya se había desvanecido. Durante aquellos mismos días, como sabemos, los Estados Unidos entraban en guerra contra la coalición del Tripartito. La guerra había llegado a un nuevo hito y en el propio círculo de los colaboradores de Hitler había quien, como el ministro de Armas y Municiones, Fritz Todt, se daba cuenta de que ya estaba perdida.

Sin embargo, en el aspecto militar la iniciativa quedaba en manos de las potencias del Tripartito. En el escenario de guerra asiático, los japoneses se

habían adueñado del Pacífico meridional y de Birmania y de ahí amenazaban de cerca a la India, mientras que en África septentrional las tropas italianas, con las que se había juntado, en febrero de 1941, un cuerpo de expedición alemán encabezado por el general Rommel, en mayo pasaban a la ofensiva y en junio llegaban a la localidad de El Alamein, a pocas decenas de kilómetros de Alejandría. Al mismo tiempo, en el frente ruso, las divisiones alemanas de los frentes septentrional y meridional dieron comienzo a las operaciones previstas en la orden número 41 promulgada por Hitler en abril, con el objetivo de conquistar, respectivamente, Leningrado y los pozos petrolíferos de Bakú. El primero de esos objetivos fracasó: la ciudad, asediada y hambrienta, resistió heroicamente. Se calcula que durante el asedio, que terminó sólo en enero de 1944, perecieron seiscientas veinte mil personas. En el sur, en cambio, las tropas alemanas lograron penetrar en profundidad hasta llegar al Cáucaso. Parecía presentarse así la posibilidad de realizar aquella gran maniobra que en febrero de 1942 Hitler había planeado en su encuentro con el embajador japonés en Berlín, Oshima, es decir, la reunión en la India de las tropas del Eje que avanzaban desde África septentrional y Cáucaso con las japonesas procedentes de Extremo Oriente. Circunstancias imprevistas e imprevisibles en el momento de la elaboración del plan, parecían favorecer su realización. Precisamente en aquellos meses, la situación interna de India parecía muy inestable. En la primavera de 1942, el gobierno británico había rechazado la petición del Partido del Congreso de conceder la independencia a la India como condición para su apoyo a la causa de los Aliados. En agosto, Gandhi y Nehru habían sido arrestados, lo que había desencadenado una oleada de manifestaciones de protesta que se conocen bajo el nombre de «revuelta de agosto». En este momento los japoneses avanzaron la propuesta de hacer pública una declaración conjunta en favor de la independencia india, pero Hitler, coherentemente con su ideología racista, se negó, ignorando la opinión contraria de su ministro de Exteriores, así como anteriormente había evitado, a pesar de las repetidas peticiones que había recibido al respecto, cualquier forma de apoyo a los movimientos nacionalistas y antibritánicos árabes en Oriente Medio y en particular en Irak, donde en abril de 1941 un golpe de estado había derrocado al príncipe regente y a los representantes de la aristocracia local anglófila.

En varios frentes, pues, la suerte del conflicto parecía girar en favor de las potencias fascistas, pero esto no duraría mucho tiempo. Entre el 4 y el 6 de junio, en la batalla naval que tuvo lugar en las cercanías de las islas Midway, la armada norteamericana endosó pérdidas gravísimas a la japonesa, que perdió el control de los mares que hasta entonces había mantenido. Sucesivamente, a principios de noviembre, el general británico Montgomery derrotaba, en la batalla de El Alamein, a las tropas ítalo-alemanas. Comenzaba así la avanzada que terminaría con la expulsión de las fuerzas de

Rommel de toda el África septentrional. Finalmente, en noviembre, los soviéticos pasaron al contraataque en el frente meridional, logrando aislar y rodear al ejército del general Paulus en la ciudad de Stalingrado. Por orden de Hitler, los alemanes resistieron hasta febrero de 1943, cuando se vieron obligados a capitular. Era la primera batalla en la que el poderoso ejército alemán fue obligado a la rendición.

La batalla de Stalingrado marcó un hito no sólo en la andadura de las operaciones militares, sino también en la historia política de la segunda guerra mundial. En efecto, de esta victoria la Unión Soviética, de cuya capacidad de resistencia hasta el año anterior muchos habían dudado, salió con un prestigio enormemente aumentado y Stalin se convertía en un interlocutor obligado y muy exigente. A medida que la victoria de la coalición antifascista se perfilaba como la más probable, se imponía de manera cada vez más insoslayable el problema de las relaciones dentro de la coalición misma.

19.5. LAS RELACIONES ENTRE LOS ALIADOS Y LA CUESTIÓN DEL SEGUNDO FRENTE

Ya hemos visto cómo, en el período entre el pacto Ribbentrop-Molotov y la agresión nazi, la postura de Inglaterra y Estados Unidos para con la Unión Soviética estuvo caracterizada por una fuerte dosis de desconfianza. No se podía excluir, en efecto, que, dada su colaboración con Alemania, la URSS se convirtiese antes o después en un enemigo. Entre las cuestiones más controvertidas destacaba la de los territorios polacos, que la Unión Soviética se había anexionado sobre la base del protocolo secreto anejo al pacto de agosto de 1939; el gobierno de los exiliados polacos, que se había constituido en Londres bajo la presidencia del general Sikorski, no reconocía, naturalmente, este hecho consumado y el gobierno británico compartía esta posición. La agresión hitleriana del 22 de junio de 1941 determinó evidentemente una situación del todo inédita: de potencial enemigo, la URSS se convertía, si no en aliado, ciertamente en un cobeligerante.

Los primeros contactos, establecidos a través del embajador inglés en Moscú Stafford Cripps, conocido por ser un representante de la izquierda laborista, llevaron a la firma, el 30 de julio, de un acuerdo en el que la cuestión polaca se aplazaba y la Unión Soviética reconocía el gobierno en el exilio en Londres. En cuanto a los Estados Unidos, la toma de contacto se produjo a través de las misiones que dos hombres de confianza de Roosevelt, Harry Hopkins y Averell Harriman, efectuaron en Moscú en julio y diciembre de 1941, respectivamente. A todos ellos Stalin respondió pidiendo el envío de consistentes ayudas militares y la apertura de un segundo frente. La primera de esas peticiones fue parcialmente satisfecha con un acuerdo

firmado en octubre, mientras que la segunda no se tomó en ninguna consideración, entre otras cosas porque tanto en Londres como en Washington muy pocos apostaban por la capacidad de resistencia de la Rusia soviética. Fue sólo en noviembre de 1941 cuando Rusia fue incluida en las naciones beneficiarias de la ley de alquiler y préstamo. Mientras tanto, Stalin no perdía ocasión para solicitar la apertura de un segundo frente. Su argumentación de que la URSS sostenía el peso mayor del conflicto en curso era indiscutible, lo que hacía cada vez más difícil ignorarlo. Durante la conferencia «Arcadia», Churchill presentó un plan que preveía como primer paso un desembarque masivo en la costa norteafricana (operación Torch), mientras que del lado norteamericano se planteó la solución de un ataque que, partiendo de Inglaterra, apuntase al corazón del continente europeo mediante el desembarque en las costas francesas que debería producirse en el transcurso de 1943. El nombre en clave era el de operación Slaedgehammer, posteriormente modificado en Overlord. A mediados de abril, Roosevelt hacía llegar a Stalin un mensaje en el que le pedía que enviara a Molotov a Washington para debatir una «propuesta militar muy importante que preveía la utilización de fuerzas armadas con el objetivo de aliviar la crítica situación soviética en el frente oriental». A finales de mayo, el ministro de Exteriores estaba en Washington y Roosevelt le reiteró las garantías acerca de la apertura de un segundo frente en Francia antes de que terminara el año. Entonces fue Churchill, quien no había ocultado sus desconfianzas a Molotov, con ocasión del paso de éste por Londres camino de Washington, viajó a la capital norteamericana. El resultado de las conversaciones que mantuvo con Roosevelt se hizo evidente el 25 de julio con la decisión de los altos mandos militares británico y norteamericano de dar inicio a la operación Torch, cuya dirección fue confiada al general Eisenhower. De momento, pues, el proyecto de desembarque en las costas francesas quedaba aplazado y fue Churchill el que tuvo que comunicarlo a Stalin, con ocasión de su visita a Moscú, también en agosto. Como gesto de buena voluntad hacia Stalin, que se sentía decepcionado y molesto, Churchill se comprometió a efectuar una operación limitada de desembarque en la costa francesa. Ésta tuvo lugar el 19 de agosto, cuando un contingente de seis mil hombres, británicos y canadienses, desembarcó en Dieppe y fue casi totalmente aniquilado. Fue una acción suicida que sólo quería probar la imposibilidad de un desembarque en el continente.

El 11 de noviembre, las tropas al mando de Eisenhower daban comienzo a la operación Torch desembarcando cerca de Casablanca y ocupando rápidamente toda la región circundante hasta Argelia. Los fuerzas del Eje, sometidas a la presión conjunta de Montgomery desde el este y Eisenhower desde el oeste, no tuvieron más remedio que atrincherarse en Túnez. Se trataba de territorios que formaban parte del África francesa y que, como tales,

estaban bajo la jurisdicción del gobierno de Vichy, con el que los Estados Unidos continuaban manteniendo regulares relaciones diplomáticas. Se producía así una situación muy confusa de la que, tras una serie de intrigas e imprevistos, supo aprovecharse el general De Gaulle para que también los norteamericanos, que hasta entonces no habían ocultado su desconfianza, le otorgaran su legitimación. En junio de 1943, se constituirá el Comité de Liberación Francés, del que De Gaulle, tras la dimisión del general Giraud, quedó como líder indiscutible, mientras que el gobierno de Petain asumía cada vez más el aspecto de un gobierno fantoche, ya que, como reacción al desembarque aliado, las autoridades alemanas habían ampliado la zona de ocupación a todo el territorio de la madre patria.

El 14 de enero de 1943 se reunía en Casablanca una conferencia que duraría diez días y en la que participaron Roosevelt y Churchill. Stalin, que en aquel momento se encontraba en plena batalla de Stalingrado, había sido invitado, pero declinó la invitación. En el aspecto militar, la decisión más importante de la conferencia fue la decisión de proceder a un desembarque en Sicilia en breve plazo. Pero la principal decisión de la conferencia fue de carácter político, y consistió en la enunciación, por boca del presidente Roosevelt al final de las sesiones, del principio de rendición incondicional. Con esta solemne declaración, se pretendía sobre todo asegurar a Stalin que las postergaciones en la apertura de un segundo frente no escondían ninguna maniobra o segundo fin y que no habría pactos con ninguno de los estados enemigos. Pero de este modo se desanimaba a los opositores internos de los regímenes fascistas en sus intentos de derrocarlos o condicionar sus decisiones. Este era, en particular, el caso de Italia, donde, como veremos, ya se percibían señales de una posible e incluso inminente caída del fascismo; Italia que, en los planes de Churchill, debía ser, tras la ocupación de Sicilia, el siguiente objetivo de la estrategia aliada. Parece incluso que la decisión de anunciar el principio de rendición incondicional se tomó a sus espaldas y que él evitó desautorizarla para que no se produjera una ruptura pública y clamorosa.

Sacando las conclusiones de lo expuesto hasta aquí, me parece que se puede afirmar que la coalición antifascista o, si se prefiere, la «extraña alianza», en el aspecto militar consiguió establecer un cierto nivel de coordinación. De hecho, basta con leer la correspondencia entre Churchill, Roosevelt y Stalin para convencerse de ello: los tres grandes, a diferencia de lo que sucedía en el campo del Tripartito, se mantuvieron constantemente al corriente acerca de sus respectivas decisiones e iniciativas. Si el segundo frente no se abrió hasta junio de 1944, las ayudas que Inglaterra y Estados Unidos concedieron a la URSS fueron poderosas: 8.872 aviones, 3.724 tanques, 206.771 camiones y más de dos millones de toneladas de víveres.

Naturalmente, y por razones que, creo, está de más repetir, en el aspecto de la cooperación política las cosas eran mucho más complicadas. La que

se produjo entre Estados Unidos, Inglaterra y Unión Soviética era realmente una «extraña alianza», el fruto no ya de una elección, sino de las circunstancias, cuando no de la casualidad. La evocación de los valores de «defensa de la vida, de la libertad, de la independencia, de la libertad religiosa, y para la salvación de los derechos humanos», como se puede leer en la *Declaración de las Naciones Unidas* del primero de enero de 1942, que fue suscrita también por la URSS y China, sonaba genérica y ritual a los oídos de muchos, y podía generar en algunos la sospecha de que estas grandes palabras se utilizaran sólo para ocultar un desacuerdo de fondo. El único punto de convergencia concreto era el hecho de que las tres grandes potencias combatían al mismo enemigo. De ahí la insistencia con que el término «antifascismo» se repite en los documentos políticos comunes. Y sin embargo se trataba de una opción política que se definía en términos negativos, un contenedor de motivaciones y orientaciones distintas y en ciertos casos en conflicto entre ellas. No obstante, a la luz de los hechos el antifascismo se reveló como una idea fuerte y un poderoso factor de movilización. La prueba más palmaria de esta capacidad de movilización la constituye el movimiento de la Resistencia, un fenómeno que se produjo en la mayor parte de los países europeos, incluida la propia Alemania, y que –igual que el fenómeno especular del colaboracionismo– representa uno de los rasgos distintivos de la segunda guerra mundial. Es posible incluso afirmar que sin un análisis adecuado de la Resistencia, la reconstrucción de la segunda guerra mundial resultaría empobrecida en un elemento esencial.

19.6. LA RESISTENCIA

En nuestra exposición de los movimientos de Resistencia que se desarrollaron en los varios países europeos, concentraremos nuestra atención más en los aspectos políticos que en los militares. En el aspecto militar, en efecto, con la excepción de Yugoslavia y, en medida menor, de Polonia, la Resistencia tuvo un papel y una importancia que no hay que sobrestimar. En algunos países, como en Checoslovaquia y Francia, consistió sobre todo en acciones de saboteo, trabajo de inteligencia y actos demostrativos, especialmente atentados contra representantes nazis y colaboracionistas. Por esa misma razón, nos limitaremos sólo a una rápida mención del movimiento partisano que fue desarrollándose en la retaguardia alemana en la Unión Soviética. Se trató ciertamente de un fenómeno de vastas proporciones, especialmente en algunas zonas, como Bielorrusia: según las estimaciones de los historiadores soviéticos, ochocientos mil hombres en su fase final. Si desde un punto de vista militar, tuvo sin duda una importante función de soporte e integración respecto del ejército regular, desde el punto de vista político se caracteriza

esencialmente como un movimiento patriótico, una patria cuya imagen se identificaba con la del partido y de Stalin. De hecho, eran comunistas o miembros del Konsomol la mayoría de los cuadros y muchos partisanos.

El país europeo donde la Resistencia se desarrolló en su mayor plenitud y vigor fue sin lugar a dudas Yugoslavia, así que es justo comenzar con ella nuestra exposición. Como nos han recordado los acontecimientos recientes, se trata de una tierra donde los conflictos étnicos tienen raíces profundas. Los ocupantes italianos y alemanes eran muy conscientes de ello y por tanto se esforzaron en avivar los contrastes entre las varias etnias. Croacia fue constituida como estado independiente autónomo que incluía también una parte de Bosnia-Herzegovina, bajo la soberanía formal de un miembro de la casa de Saboya y el gobierno efectivo de Ante Pavelic, el jefe del movimiento fascista de los *ustacha*. La minoría serbia, que representaba un 30 % de la población, se vio sometida a una auténtica persecución, que generó, según una fuente alemana, 750.000 víctimas, «el mayor genocidio de la segunda guerra mundial, después del holocausto de los judíos» (Waldenberg, 1994, p. 273). El movimiento de resistencia que se fue desarrollando en Serbia contra los ocupantes italianos y alemanes y sus colaboradores, estuvo inicialmente encabezado por dos hombres, el general Draza Mijáilovic, ministro de Guerra del gobierno serbio en el exilio, y el comunista Josif Broz Tito. Los intentos de establecer una colaboración entre los *chétniks* de Mijáilovic y los partisanos de Tito no llegaron a ningún resultado, y es más, sus relaciones degeneraron en abierto conflicto. Finalmente, Tito consiguió prevalecer, no sólo por su mayor compromiso en la lucha partisana, sino también, y sobre todo, gracias a la estructura política que dio al movimiento que encabezaba. Mientras el serbio Mijáilovic consideraba a los croatas como enemigos, igual que los ocupantes e incluso más, Tito, él mismo croata, concebía la resistencia partisana como una lucha de liberación nacional que debía implicar y unir a todas las etnias del país. A este fin, en noviembre de 1942, constituyó un Frente de Liberación Nacional que integró a cientos de miles de combatientes de todas las nacionalidades, un auténtico ejército. Churchill, con su realismo, se conformó con esta realidad y no dudó en reconocer en Tito un interlocutor válido y en tratar con él. Yugoslavia fue el único país de Europa oriental cuya liberación y reunificación se llevaron a cabo casi completamente antes de la llegada de la Ejército Rojo soviético. Imagen análoga ofrece la Resistencia griega, también caracterizada por la hegemonía de los comunistas del Helas respecto de otras formaciones políticas.

Otro país donde el movimiento de Resistencia tuvo que lidiar con los problemas étnicos fue Checoslovaquia. A diferencia de Yugoslavia, aquí no se produjo ninguna relación estable entre las diversas etnias y en particular entre los grupos que operaban en Bohemia, Moravia y Eslovaquia, respectivamente. A los contrastes étnicos se superpusieron y se entremezclaron los

de carácter político entre los partidarios del presidente Masaryk y del gobierno Benes en el exilio en Londres, por un lado, y, por otro, un Partido Comunista de notable dimensión, pero encerrado en posiciones de intransigencia y reacio a colaborar con otras fuerzas políticas; por lo tanto, es comprensible que en Checoslovaquia la Resistencia no tuviera las proporciones que en cambio tuvo en otros países y no logró desarrollar una actividad militar eficaz. La más espectacular de las acciones militares, el asesinato del *Reichsprotektor* Heydrich (27 de mayo de 1942), fue obra de un comando de paracaidistas enviado desde Londres por el gobierno en el exilio. En cuanto a la insurrección eslovaca del verano de 1944, es decir, en un momento en que el Ejército Rojo ya estaba a las puertas del país, una de las razones de su fracaso fueron los contrastes que surgieron entre los partidarios del gobierno de Benes, que pedían la reconstrucción de un estado unitario, y los que luchaban por una Eslovaquia autónoma o incluso independiente. También se ha sostenido la hipótesis de que, como en el caso de la insurrección de Varsovia de la que nos ocuparemos en breve, ante un movimiento del que no tenía el pleno control, la URSS escatimó su apoyo militar.

Entre todos los estados de Europa del este, Polonia fue el primero que experimentó la dureza despiadada de la ocupación nazi. Parte de su territorio fue directamente anexionado al *Reich*, mientras que la parte resultante constituyó un gobernatorado general dirigido por uno de los más crueles jerarcas nazis, Hans Frank. Se calcula que en el marco del plan de desnacionalización y germanización puesto en marcha por el nazismo, un millón doscientos mil polacos fueron deportados, contando sólo los territorios anexionados. Otros tantos, según una estimación de los emigrados polacos, deportó la URSS desde las regiones orientales del país que se le habían asignado basándose en el pacto Ribbentrop-Molotov.

La primera iniciativa para organizar la Resistencia la tomó el gobierno en el exilio del general Sikorski ya en noviembre de 1939, constituyendo una Unión para la Lucha Armada (*Zwiazek Walky Zbrojnei*) que en febrero de 1942 asumió la denominación de *Armia Krajowa*. Ésta estaba dirigida por militares y la integraban todos los partidos políticos que se habían opuesto a la política de la *sanacja* del gobierno de los coroneles, con la excepción de los comunistas. El Partido Comunista polaco, en efecto, había sido disuelto en mayo de 1938 y sus dirigentes deportados, porque en Moscú y en el Comintern se le consideraba contaminado por elementos trotskistas. Fue reconstituido sólo en enero de 1942, tras la agresión de los alemanes a la Unión Soviética, con la denominación de Partido Obrero Polaco, recogiendo las sugerencias de Wladislaw Gomulka, uno de los pocos dirigentes que habían sobrevivido a las purgas estalinistas. También el Partido Obrero Polaco se dotó de una propia organización militar, la *Gwardia*, posteriormente *Armia Ludowa*.

Así pues, existían dos «ejércitos» separados por barreras políticas difícilmente franqueables. Las negociaciones entre una delegación del gobierno de Londres y una comunista, emprendidas en enero de 1943, no llegaron a nada. Entre las dos organizaciones, la más consistente era, con diferencia, la *Armia Krajowa*, que en 1944 llegó a contar cuatrocientos mil hombres, mientras que en el mismo período la *Armia Ludowa* no superaba los veinte mil. Pero la inferioridad de ésta estaba compensada en parte por su homogeneidad política y por el apoyo que recibía de las tropas soviéticas que avanzaban. Un tercer componente del movimiento de Resistencia polaco eran las organizaciones sionistas, cuyo bastión fue el Gueto de Varsovia, donde en noviembre de 1940 habían sido concentrados y segregados más de cuarenta mil judíos; en abril de 1943, sus habitantes se sublevaron, resistiendo heroicamente a los ataques alemanes durante cinco semanas. Se repetía así, en el corazón de la vieja Europa, la historia de Masada.

A medida que las divisiones del Ejército Rojo se acercaban, en su avanzada hacia occidente, a la frontera polaca, la actividad militar de las dos formaciones de la Resistencia polaca se fue intensificando hasta llegar a controlar zonas y territorios enteros. Pero también se intensificaban los roces y las tensiones entre los partidos que integraban la *Armia Krajowa* y los comunistas.

De nuevo en abril de 1943 los alemanes descubrieron en Katyn, en las cercanías de Smolensk, algunas fosas comunes en las que se encontraron los cuerpos de unas 4.500 víctimas, evidentemente, una masacre de la que el gobierno polaco en el exilio acusó a los soviéticos. Éstos reaccionaron rompiendo las relaciones diplomáticas con el gobierno en el exilio, mientras que Churchill, a pesar de que las pruebas de la responsabilidad soviética eran aplastantes, prefirió no pronunciarse. La tensión llegó a su cúspide en el verano de 1944, cuando la Unión Soviética, cuyas tropas ya habían penetrado en Polonia, instaló en la ciudad de Lublín un Comité de Liberación Nacional integrado por hombres de su confianza (22 de julio de 1944), que posteriormente reconoció como gobierno polaco legítimo. Hay buenos motivos para creer que esta decisión apuró, si no determinó, la iniciativa de los dirigentes de la Resistencia polaca vinculados al gobierno de Londres de hacer un llamamiento a la población de Varsovia para que se sublevara. Su llamamiento fue secundado y el primero de agosto comenzaba la insurrección. Su conclusión victoriosa hubiera comportado que al entrar en la capital, el Ejército Rojo, que ya se encontraba a pocas decenas de kilómetros, encontraría una autoridad constituida y fuerte por el prestigio conquistado con una victoria, pero esto Stalin no estaba dispuesto a aceptarlo. Por consiguiente, rechazó las peticiones de Mikolaiczyk, nuevo primer ministro del gobierno de Londres tras la muerte de Sikorski, quien había viajado a Moscú para solicitar una ayuda a los insurrectos por parte del Ejército Rojo. Éste,

en cambio, se detuvo en sus posiciones. Pero era demasiado tarde: el 3 de octubre la revuelta estaba domada y suprimida a sangre y fuego. Las tropas del Ejército Rojo entraron en una Varsovia destruida el mismo 17 de enero de 1945. Así pues, la intrincada cuestión polaca se complicaba cada vez más: su solución sólo se podía encontrar mediante negociaciones entre los tres grandes y de hecho, como veremos, estará muy presente en las mesas de Teherán y Yalta.

En Francia, como se ha visto, el llamamiento a la resistencia lanzado por el general De Gaulle desde los micrófonos de Radio Londres el 18 de junio de 1940 no había encontrado mucho eco dentro del país. También en los territorios coloniales, y en particular en Siria y en Líbano, los mandos militares habían permanecido leales al gobierno de Vichy. Existían, desde luego, núcleos y *réseaux* de resistentes, en gran medida vinculados a los partidos de la izquierda y existía una extensa prensa clandestina, pero fue sólo después del desembarque aliado en el África francesa y de la ocupación ítalo-alemana de la zona libre del país, cuando el movimiento de la Resistencia adquirió un relieve político importante. A este respecto, fue decisivo el papel del general De Gaulle. Éste era un militar y como tal estaba acostumbrado a ejercer el mando: en el Comité de Liberación Nacional, por él presidido, nunca se recurría al voto y era él mismo quien, tras escuchar la opinión de los demás miembros, tomaba las decisiones. Pero, a diferencia de su rival, el general Giraud, y de otros militares que habían estado entre los primeros en llegar a Londres tras él, De Gaulle no afectaba desdén hacia la política, sino que, por el contrario, poseía una gran capacidad política y sabía hacer uso de ella. Lo había demostrado en sus relaciones con los Aliados, logrando que le reconocieran como interlocutor no sólo Churchill, que lo había apoyado desde el primer momento, y los soviéticos, sino también, aunque a regañadientes, aquel Roosevelt que lo había calificado como «un fascista y un imperialista». Y también lo demostró en las relaciones con los partidos políticos y las organizaciones militares que a éstos se remontaban y que operaban dentro del territorio metropolitano, las *Forces françaises de l'Interieur*. Gracias a la obra y a la mediación del emisario de De Gaulle, Jean Moulin, que en junio de 1943 será capturado y morirá en la cárcel por las torturas a las que fue sometido, en mayo de aquel mismo año se constituyó en París un *Conseil National de la Résistance*, en el que estaban representados, además de los movimientos de resistencia locales, los partidos políticos –comunistas, socialistas, radicales, demócratas cristianos, Federación Republicana y Alianza Democrática– y las dos principales centrales sindicales, la CGT y la CFTC. En mayo de 1944, el Consejo celebró su primera reunión plenaria; en ella aprobó un programa en el que, entre otras peticiones, figuraban la de una «organización racional de la economía» y la «vuelta a manos de la nación de todos los grandes medios de producción monopo-

lista». Se realizaría así una «nueva república», no sólo, obviamente, respecto del régimen de Vichy, sino también de la Tercera República, que la corrupción y la traición había llevado a la capitulación. A diferencia de los países de la Europa del este, donde la unidad de las fuerzas organizadas para la Resistencia se realizó bajo la hegemonía comunista –como en Yugoslavia y en Grecia– o no se realizó en absoluto, la Resistencia francesa se había dotado de un organismo unitario y pudo así desplegar en la última fase de la guerra todo su potencial y al mismo tiempo echar las bases para la formación del gobierno de coalición que regiría a Francia en los primeros años de la posguerra.

Una solución análoga se adoptará también en Italia, con la constitución del *Comitato di Liberazione Nazionale*, al que se adhirieron todos los partidos políticos antifascistas, salvo el Republicano, y que durante la Resistencia desempeñó la función de organismo de coordinación y dirección política. En Italia no existía ninguna personalidad que gozara del mismo prestigio que De Gaulle en Francia, y que en virtud de ello pudiese funcionar de polo de atracción para los varios partidos, divididos a su vez por diferencias de programa, en primer lugar la de la cuestión institucional; mientras que la izquierda pedía con firmeza la abdicación del rey, los moderados y la derecha se oponían. Todo eso hacía, evidentemente, más difícil la colaboración. Si al final se llegó a un acuerdo, ello se debió sobre todo a la iniciativa del líder comunista Palmiro Togliatti, quien, a su vuelta a Italia en marzo de 1944, propuso que se aplazara cualquier decisión sobre la cuestión institucional y se constituyera un gobierno en el que estuviesen representados todos los partidos del CLN, con el objetivo primordial de liberar al país. Esta propuesta, conocida como «el giro de Salerno», entraba en las coordenadas de la política exterior soviética, y fue acordada con Stalin. Por otra parte, gracias a ella, en Italia central y septentrional pudo desarrollarse un poderoso movimiento de Resistencia contra los ocupantes alemanes y los colaboracionistas de la República social o de Saló. En diciembre de 1944, una delegación del Comité de Liberación de la Alta Italia (CLNAI) se encontró en Roma con las autoridades aliadas, que reconocían de esta manera en el movimiento partisano un interlocutor oficial al que se comprometían proporcionarle armas y ayudas. Por su parte, el CLNAI reconocía la función de mando de los Aliados y se comprometía a desarmar sus formaciones una vez conseguida la liberación.

Para completar nuestro resumen, queda por mencionar la resistencia en **Alemania**. Por razones que está de más explicar, se trató de una resistencia de élite. Élites obreras supervivientes a las masacres –decenas de miles de cuadros y activistas comunistas y socialdemócratas– llevadas a cabo por la *Gestapo*, como el grupo Saefkow-Jacob en Berlín, el grupo Poser en Jena, el Nuebauer en Göttingen, y otros. Élites intelectuales, como los miembros de la organización denominada *Rote Kapelle*, de la que formó parte, entre otros,

Arvid Harnak, o los del movimiento de la Rosa Blanca, del que fueron animadores dos estudiantes, Hans y Sophie Scholl. El más importante de estos círculos, por el prestigio de sus integrantes y el nivel del debate político y cultural que desarrolló, fue el que se reunió en Greisau alrededor de Halmut James von Moltke, descendiente del vencedor de Sedan, arrestado y ajusticiado en febrero de 1944. En contacto con este círculo estaban hombres como el ex alcalde de Leipzig Carl Gördeler, también ejecutado, y el ex embajador en Moscú, Werner von der Schulenburg. Élites religiosas, como los feligreses de la *Bekennende Kirche* (Iglesia de la confesión) y secuaces del pastor Martin Niemöller, quienes inspirándose en las doctrinas del teólogo suizo Karl Barth, se negaban a reconocerse en la Iglesia oficial de los cristiano-alemanes y rechazaban el llamado párrafo ario de la constitución del *Reich*, donde se excluía a los judíos de la vida pública. Por último, y sobre todo, élites militares. Una oposición militar a Hitler existía desde hacía tiempo y de ella ya hemos hecho mención en repetidas ocasiones. A medida que se iba perfilando la seguridad de la derrota dicha oposición se fue extendiendo, llegando a involucrar a un cierto número de los más altos oficiales. Nos limitamos, entre muchos, a mencionar al general Beck, el mariscal Rommel, al que Hitler impuso el suicidio tras el fracaso del atentado del 20 de julio de 1944, y al autor material del atentado, Claus Schenk von Stauffenberg. Finalmente, merece ser mencionado el Comité Nacional de la Libre Alemania que se constituyó en la URSS en julio de 1943, y estuvo presidido por el general Waltzer von Seydlitth, que ya había sido teniente general en Stalingrado.

Es natural que entre hombres y grupos tan dispares por procedencia social y orientación política existieran profundas divergencias. Algunos subordinaban la apertura de negociaciones con los Aliados a la retirada de la cláusula de rendición incondicional, otros, en cambio, se inclinaban por aceptarla. Algunos rechazaban el atentado como medio de acción política, otros lo consideraban lícito. Otros aspectos controvertidos eran las relaciones con los comunistas y los proyectos para la estructura futura de Alemania; unos, como Von Moltke, deseaban una Alemania federal en una Europa federal; otros volvían a proponer el modelo de la Alemania bismarckiana. El único punto de convergencia era la condena de la República de Weimar.

Estos grupos y estos hombres intentaron establecer contactos entre sí, y en algunos casos lo consiguieron, pero las condiciones de absoluta clandestinidad y aislamiento en las que estaban obligados a vivir, además de las detenciones de muchos de ellos, hacían muy difícil un intercambio de opiniones y un debate que les permitieran superar las divergencias políticas y concertar una acción común. De ahí que los militares decidieran, por fin, tomar la iniciativa y adoptar la forma de lucha más directa y desesperada, el atentado a la persona del *Führer* (operación Walkiria), que tendría que funcionar como señal para la toma del poder por parte del ejército. Entre marzo

de 1943 –cuando falló un primer atentado contra el avión que llevaba a Hitler desde el cuartel general del frente oriental, en Smolensk, a Berlín– y julio de 1944, se produjeron varios intentos fallidos a causa de diversos contratiempos. Cuando, el 20 de julio, en el cuartel general de Rastenberg, estalló la bolsa llena de explosivos que Von Stauffenberg había colocado personalmente debajo de la mesa de Hitler, los conjurados creyeron haber alcanzado su objetivo y se apresuraron a dar las órdenes para la puesta en marcha del plan acordado. Pero Hitler, que había salido ileso del atentado por pura casualidad, se presentó pocas horas después ante los micrófonos de la radio, prometiendo venganza; las comunicaciones previstas tampoco funcionaron plenamente, así que el único que se movió fue el comandante de la guarnición de París, Von Stülpnagel, quien, al enterarse del fracaso del atentado, intentó suicidarse y pocos meses después fue ejecutado.

Al término de esta exposición, cabe hacer algunas breves consideraciones. La primera es que el abanico de orientaciones y opciones políticas que confluyeron en la Resistencia es extremadamente amplio y por lo tanto no tiene fundamento el juicio de los que subrayan el papel predominante que en ella tuvieron los partidos comunistas y su uso instrumental en función de los intereses y de las ambiciones de la URSS. Una segunda consideración es que la diversidad de las orientaciones no excluía la existencia de un núcleo y de elementos comunes: no sólo, obviamente, la oposición al fascismo, sino también la aspiración a alguna forma de «nuevo orden» que rompiera definitivamente con un pasado próximo plagado de guerras, inestabilidad y desempleo. Tocaba a los líderes de las grandes potencias dar una respuesta a las expectativas de una humanidad que, a pesar de todo, no había dejado de alimentar la esperanza. En la prosecución y conclusión de este capítulo, centraremos, pues, nuestra atención en sus relaciones y sus encuentros.

19.7. DE LA CAMPAÑA DE ITALIA AL FINAL DE LA GUERRA EN EUROPA

En la primera mitad de 1943, la situación militar en los varios frentes se torció para las potencias del Eje. En mayo, las tropas ítalo-alemanas se rendían en Túnez, su último reducto africano, y a primeros de julio un intento de ofensiva por parte de los alemanes, llevado a cabo con gran despliegue de medios, en el sector central del frente ruso (operación *Zitadelle*) se estrelló contra la resistencia soviética. La que en esta ocasión se combatió cerca de Kursk fue la mayor batalla de tanques de la segunda guerra mundial. Finalmente, el 10 de julio, los anglo-americanos, tras haber ocupado anteriormente la isla de Pantelería, desembarcaban en Sicilia. La ocupación de la isla se llevó a cabo en seis semanas.

En los auspicios y en los planes de Churchill, la empresa de Sicilia tenía que ser el primer paso para una campaña dirigida a subir por toda la Península italiana y de ahí seguir hacia los Balcanes y la parte débil de Europa. A esta elección estratégica lo impulsaban varios motivos: en primer lugar, el interés geopolítico por asegurar la tradicional presencia e influencia británica en el área mediterránea; pero también el deseo de prevenir una eventual penetración soviética en el área balcánica. El primer ministro inglés, que en Casablanca había aceptado sin demasiado entusiasmo el principio de rendición incondicional, estaba, además, preocupado por la posibilidad de que la situación interna italiana se escapara del control de los elementos moderados, y en particular de la monarquía, que él consideraba, una vez desaparecido Mussolini y abatido el régimen fascista, como sus interlocutores naturales.

Pero esta opción estratégica no encontraba el favor de la parte norteamericana. Durante la conferencia de Trident, de mayo de 1943, y de la de Quebec en agosto, Roosevelt y sus colaboradores defendieron con energía la necesidad de abrir, en el transcurso de 1944, el segundo frente en la costa francesa que los soviéticos no cesaban de pedir. Su punto de vista acabó por imponerse y la decisión se comunicó a Stalin, que por otra parte no dejó de expresar su malestar por el nuevo aplazamiento de la operación.

Mientras tanto, en Italia la situación se precipitaba. La primera sacudida al régimen se produjo en marzo de 1943 a causa de una serie de huelgas en las grandes ciudades de la Italia del norte. Cuando, en julio, los Aliados desembarcaron en Sicilia y encontraron una resistencia más bien débil, quedó claro que Mussolini y el fascismo tenían los días contados. Los que asumieron la iniciativa fueron algunos representantes de la oposición interna del fascismo, encabezados por Galeazzo Ciano, ex ministro de Exteriores, y Dino Grandi, ex embajador en Londres, quienes en la sesión del Gran Consejo de la madrugada entre el 24 y el 25 de julio, hicieron aprobar por mayoría un orden del día en el que se pedía al rey que retomara la plenitud de poderes, desautorizando así, de hecho, a Mussolini. Al día siguiente se comunicó al *Duce*, de visita al rey, que su dimisión había sido aceptada y a la salida se le invitó a subir a una ambulancia y se le trasladó a un lugar secreto. El nuevo gobierno, presidido por el mariscal Badoglio, tomó contacto con los anglo-americanos, pero mientras tanto los alemanes, que –a pesar de las garantías de Badoglio de que la «guerra seguía»– habían intuido el rumbo que estaban tomando los acontecimientos, empezaron a enviar a Italia varias divisiones. El intento por parte del gobierno italiano de convencer a los mandos aliados para que realizaran un desembarque al norte de Roma y retrasar el anuncio de armisticio, que había sido firmado el 3 de septiembre, no tuvo éxito, así que, cuando la radio aliada difundió la noticia, al rey y al gobierno no le quedó otra alternativa que la de dejar de forma humillante Roma para llegar por vía marítima a Brindisi, en territorio controlado por los aliados,

que mientras tanto habían desembarcado en Salerno. Dejaban tras de sí un país desorientado y dividido entre dos ejércitos extranjeros listos para enfrentarse. En el norte, se constituyó la llamada República Social, encabezada por Mussolini, que había sido liberado por una unidad de paracaidistas alemanes.

Las cláusulas definitivas del armisticio –cuya preparación fue laboriosa y que sólo se formó íntegramente el 29 de septiembre– atribuían a la Administración Militar Aliada (AMG) plena tutela sobre cualquier acción del gobierno italiano, pero por eso mismo reconocía de hecho la continuidad de la monarquía y la legitimidad del gobierno, un aspecto que, como se ha visto, era especialmente importante para los ingleses. Además, estaba previsto que Italia sería reconocida como «cobeligerante» y su contribución sería tenida en cuenta a la hora de redactar el tratado de paz, en caso de que declarase la guerra a Alemania, lo que Badoglio se apresuró a hacer (13 de octubre de 1943). Se trataba, pues, de una «rendición incondicional» bastante anómala, de una anomalía que reflejaba las divergencias existentes entre las preocupaciones continuistas de los ingleses y el mayor crédito que los norteamericanos otorgaban al antifascismo.

Italia había sido el primer país enemigo en rendirse y el armisticio que había firmado podía constituir un precedente que, como tal, había que debatir de forma colegial entre todos los miembros de la coalición. En efecto, éste fue uno de los temas que afrontaron los tres ministros de exteriores reunidos en Moscú del 18 al 30 de octubre que, en lo tocante a este asunto, terminó con la decisión de formar una comisión de control aliada, integrada por anglo-americanos y con una presencia simbólica de soviéticos. De ahí el resentimiento de británicos y norteamericanos cuando, en marzo de 1944, el gobierno soviético reconoció al gobierno de Badoglio sin previa comunicación a los Aliados, con un acto, en opinión de éstos, de interferencia en una zona de su influencia. La coincidencia de esta iniciativa con el mencionado «giro de Salerno» de Togliatti, aumentó las sospechas de colusión entre comunistas italianos y gobierno soviético. De hecho, la influencia de la URSS en los asuntos internos italianos fue absolutamente marginal.

Los contrastes más sustanciales en relación con la situación italiana y sus perspectivas seguían siendo, en efecto, los que oponían a los ingleses, que todavía no habían renunciado a la idea de llevar a cabo la ocupación de Italia para luego dirigirse hacia Lubliana y Viena, con los norteamericanos. Otra prueba de ello se dará en diciembre de 1944, cuando el gobierno de Bonomi, que había sucedido al de Badoglio tras la liberación de Roma el 4 de junio de 1944, dimitió y los ingleses vetaron la candidatura de Carlo Sforza, cuyas convicciones republicanas eran bien conocidas.

Pero Italia no era el único terreno de ensayo para las relaciones entre los miembros de la coalición, y ni siquiera el más importante. Sin embargo fue

el primero y, como tal, funcionó como un posible modelo que los soviéticos no dejarían de tener en cuenta en los países que ocuparon posteriormente. Quedaban por debatir otros asuntos igualmente espinosos, como el de Polonia, los Balcanes y sobre todo Alemania. Especialmente sobre esta última, los miembros de la coalición parecían tener ideas bastante vagas y no fáciles de conciliar, así que en la conferencia de octubre entre los ministros de Exteriores se había decidido crear una Comisión Consultiva Europea (*European Advisory Commission*) con el cometido de elaborar las propuestas. De momento, el único acuerdo firme alcanzado en Moscú era la reconstitución de Austria con las fronteras de 1937. Por consiguiente, se hacía imprescindible una cumbre entre los jefes de estado, que hasta el momento no se había podido celebrar. Tras laboriosas negociaciones, se acordó convocarla en Teherán.

El comunicado final de la conferencia de Teherán (28 de noviembre-1 de diciembre de 1943) hacía mención explícita del compromiso por parte de los aliados a abrir el segundo frente en mayo de 1944, pero en lo que concernía a las varias cuestiones sobre la mesa, no contenía indicaciones precisas. Ello no significa que no se hubiesen tomado decisiones y no se hubieran elaborado unas orientaciones de máximos. En primer lugar, la de reconocer a Tito como interlocutor de los aliados en Yugoslavia; en segundo lugar, la cuestión de Polonia. Todos estuvieron de acuerdo en el principio según el cual Polonia iba a ser compensada en su parte occidental por las renuncias territoriales que tendría que aceptar de su parte oriental a favor de la URSS, a raíz del restablecimiento de la línea de Curzon. A petición de Roosevelt, preocupado por las reacciones del electorado polaco en las siguientes elecciones presidenciales, se acordó no hacer mención de tal orientación en el comunicado final. También se habló sobre las posibles soluciones del problema alemán y de los varios estados de Europa del este, además de contemplar la posibilidad de una intervención soviética contra Japón, aunque, también en este caso, sin llegar a decisiones formales.

La atención de los tres grandes se había centrado, pues, en Europa, pero la conferencia de Teherán no se limitó a esto. También fue la ocasión para una primera ronda de opiniones sobre los problemas mundiales. En efecto, fue en esta ocasión que Roosevelt expuso por vez primera su propuesta de constituir una Organización de las Naciones Unidas, en la que los Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra y China –los llamados «cuatro policías»– constituirían una suerte de directorio. La inclusión de la China de Chiang Kai-shek, con quien Churchill y Roosevelt se habían encontrado en El Cairo antes del comienzo de la conferencia, dejaba perplejos tanto a los soviéticos, que se habían negado a participar en el encuentro de El Cairo, como a los ingleses, que tras esta iniciativa del presidente norteamericano intuían sus orientaciones anticolonialistas. Ya desde entonces, pues, se perfilaba lo que será el carcoma de la gran coalición, su bomba de relojería: el

contraste entre el *grand design* rooseveltiano, con su perspectiva universal, y el talante tradicionalista, fiel a la lógica de las zonas de influencia, en el que quedaban anclados, a pesar de sus hondas diferencias, Churchill y Stalin.

19.8. DE TEHERÁN A LA VICTORIA EN EUROPA

A lo largo de 1944, la Alemania nazi pasó de una derrota a otra y poco a poco se vio obligada a retirarse de todos los territorios que había ocupado en los primeros años de guerra. En el frente italiano, los ejércitos anglo-americanos, tras liberar Roma en junio y Florencia en agosto, se asentaban en la línea gótica que costeaba el Apenino tosco-emiliano, donde el frente se estabilizó hasta la primavera; pero a esas alturas, las del desembarque en Normandía, el italiano se había convertido ya en un frente secundario. En el frente oriental, los rusos, una vez liberado Kiev, en agosto habían llegado hasta el Vístula. En octubre, los ingleses desembarcaban en Atenas y, con la colaboración de los partisanos griegos y yugoslavos, los ocupantes alemanes eran expulsados también de la Península balcánica. Pero el golpe final a las últimas esperanzas de Hitler llegó desde Occidente: el 6 de junio, un poderoso ejército aliado desembarcaba en las costas de Normandía, y abría el segundo frente tan esperado por los soviéticos. La ruptura de las líneas alemanas cerca de Avranches abrió para las tropas aliadas el camino de París, que fue liberada el 31 de julio. Mientras tanto, otro cuerpo de expedición desembarcaba cerca de Tolón, liberando toda la Francia meridional. Uno a uno, los satélites de Alemania abandonaban su campo: Rumania en agosto, Finlandia y Bulgaria en septiembre. A finales de 1944, de los territorios ocupados en su tiempo sólo quedaba bajo control alemán la Italia del norte. Pero Alemania conservaba un fuerte potencial bélico; a pesar de los bombardeos aliados, la producción de armamentos, dirigida por Albert Speer, era superior a la de los primeros años de guerra.

La reacción alemana a la ofensiva concéntrica de los aliados fue rabiosa y apuntó sobre todo al frente occidental. Desde junio, comenzaron los bombardeos de Londres y de la Inglaterra meridional, llevados a cabo con la nueva «arma secreta», los misiles V1 y V2. En diciembre, el mariscal Von Rundstedt lanzaba una contraofensiva en las Ardenas que en un principio tuvo éxito. Pero casi al mismo tiempo las tropas soviéticas pasaban a la ofensiva en el frente oriental, llegando en diciembre al río Oder, a cincuenta kilómetros de Berlín. La situación volvía así a ser favorable a los aliados y se desvanecía la última ilusión de Hitler, la de aprovecharse de las divergencias entre sus enemigos.

Mientras tanto, proseguía el trabajo comenzado en la conferencia de Moscú y en la cumbre de Teherán en busca de soluciones para las varias cues-

tiones pendientes. En lo tocante a la más espinosa de ellas, la cuestión alemana, la *European Advisory Commission* realizó progresos sustanciales. En efecto, las potencias se orientaron hacia el criterio de la subdivisión de Alemania en zonas de ocupación. Ello implicaba el reconocimiento de la unidad económica y política del país y por ende el redimensionamiento, cuando no el abandono, de los proyectos de «desmembración» que anteriormente se habían barajado. En los Estados Unidos el plan del ministro de Hacienda Morgenthau, que contemplaba la desindustrialización de Alemania y su reducción a país agrícola y ganadero, había sido definitivamente dejado al margen; en la URSS, en cambio, los informes verbales de las conversaciones mantenidas entre el líder comunista alemán Wilhelm Pieck y Stalin demuestran que éste estaba convencido de la necesidad de que Alemania permaneciese unida bajo un gobierno de coalición antifascista y que sólo a finales de 1948 aceptó la idea de una división del país (Loth, 1996).

Una cita importante fue la conferencia de Dumbarton Oaks, celebrada entre el 22 de agosto y el 28 de septiembre de 1944, en la que se perfeccionó el esquema de la futura Organización de las Naciones Unidas. Pero seguía abierta la cuestión principal, que concernía al derecho de veto, que la URSS quería que se extendiese a una gran cantidad de asuntos.

Pero mucho más importante y cargada de consecuencias fue la conversación que mantuvieron Churchill y Stalin con ocasión de su encuentro en Moscú el 9 de octubre y que pasó a la historia por el intercambio de notas que Churchill escribió de su puño y letra y que Stalin aprobó. En ellos se hacía referencia, en términos de porcentajes, al nivel de influencia que los dos países tendrían en algunos estados balcánicos: 90% por ciento de influencia soviética en Rumania, 9% de influencia inglesa en Grecia, 75% de influencia soviética en Bulgaria y 50% cada uno en Hungría y Yugoslavia. Algunos han querido ver en este episodio, narrado por Churchill en sus memorias, una primera manifestación de la lógica de repartición que posteriormente triunfaría en Yalta y acabaría en la guerra fría y el bipolarismo. A este propósito, cabe observar, en primer lugar, que la división propuesta por Churchill no hacía más que fotografiar la situación que había cristalizado en el campo de batalla: el 18 de septiembre, los soviéticos habían entrado en Sofía y el 25 del mismo mes se habían encontrado en Belgrado con los partisanos de Tito. Por su parte, los ingleses habían entrado el 15 de octubre en Atenas y el 4 de diciembre sofocaron a sangre y fuego una manifestación de protesta organizada por los comunistas. Si se tienen en cuenta estos hechos, la propuesta de Churchill puede incluso parecer un intento de proteger en lo posible el «cordón sanitario» que en el período entre las dos guerras había aislado a la Unión Soviética. Pero no es esto lo más importante. Lo más importante es, en efecto, aclarar qué es lo que se entiende por «esfera de influencia». Porque sería un error tomar esta expresión como equivalente a

«estado satélite», es decir, un estado en el que la potencia predominante no se limita a ejercer su «influencia», sino que exporta e impone –tal como suena una afirmación de Stalin relatada por Gilas– «su sistema social», como sucederá en los países de la Europa del este en la posguerra y como, en cambio, no sucedió en Finlandia, el primero de los países que capitularon en la guerra contra la URSS. Además, hay que observar que se trataba en todo caso de un acuerdo bilateral entre dos mandatarios que, pese a representar intereses y concepciones políticas totalmente opuestas, tenían en común una aproximación extremadamente realista a los problemas políticos. Finalmente, cabe reparar en que, durante el encuentro de Moscú, Churchill no dejó de subrayar repetidas veces que cualquier eventual acuerdo estaba subordinado a la aprobación norteamericana.

¿Cuál sería, pues, la reacción de Estados Unidos? El secretario de estado norteamericano, Cordell Hull, «internacionalista» convencido, quiso hacer constar su desacuerdo hasta llegar a la dimisión (27 de noviembre de 1944). Roosevelt, que estaba empeñado en las fases conclusivas de la campaña para su cuarta reelección, escribió a Stalin, el 25 de octubre, felicitándole por «el éxito obtenido por Usted y por el primer ministro en el camino de un acuerdo», y declarándose convencido de que «el éxito de sus conversaciones en Moscú facilitará y acelerará nuestro trabajo en el próximo encuentro, en el que deberemos llegar al acuerdo completo sobre nuestras acciones futuras, nuestra política y nuestros respectivos intereses». Cada palabra de este mensaje estaba medida; todo se dejaba, pues, para el inminente encuentro entre los tres grandes, en Yalta.

Cuando, el seis de febrero de 1945, los tres grandes se encontraron en Crimea, la capitulación de Alemania ya era inminente, cuestión de meses, quizá semanas. Las tropas soviéticas se encontraban a pocas decenas de kilómetros de Berlín e incluso se ha avanzado la hipótesis –en verdad, discutible– de que no prosiguieron su avanzada hasta llegar a ocupar la capital por orden de Stalin, preocupado por que esto pudiera endurecer las posturas de sus interlocutores.

Los trabajos de la conferencia se prolongaron hasta el 11 de febrero y, a diferencia de lo que había sucedido en Teherán, generaron un importante número de decisiones y documentos finales. Ante todo, se arreglaron las cuestiones pendientes de las anteriores cumbres, cuestiones cuya solución ya se encontraba en una fase avanzada, como la polaca, de la que se había discutido en Teherán, y la de la estructura de la Organización de las Naciones Unidas, abordada ya en Dumbarton Oaks. En cuanto a la primera, el problema de las fronteras quedó solucionado en sus puntos básicos, confirmando los planteamientos de Teherán, mientras que una novedad fue el acuerdo sobre la composición del gobierno: se decidió que estaría integrado por los hombres del comité filosoviético de Lublín, con la aportación de «represen-

tantes democráticos de Polonia procedentes de la emigración». A cambio de esta sustancial aceptación de su punto de vista, los soviéticos se comprometían a que se celebraran en Polonia elecciones libres «lo más pronto posible». También sobre el asunto de las Naciones Unidas se llegó a un acuerdo, aceptando la petición soviética para que el derecho de veto de los miembros del Consejo de Seguridad se extendiera a los casos en los que uno de ellos estuviese implicado en el asunto en discusión. En la Organización, que celebró su primera conferencia en San Francisco el 25 de abril, fueron admitidos todos los estados que habían declarado guerra a Alemania antes del 1 de marzo de aquel año (Turquía lo hizo el 23 de febrero). La Unión Soviética, que había solicitado que las seis repúblicas que la integraban estuviesen representadas, tuvo que conformarse con tres escaños (URSS, Ucrania y Bielorrusia). En cambio, no se registraron progresos en la cuestión alemana; antes bien, la inserción del término «desmembramiento» en uno de los documentos finales, representaba un paso atrás respecto del principio de las zonas de ocupación. A la cuestión alemana se añadía la de las reparaciones de guerra, que la URSS reclamaba, pero que encontraba la firme oposición de Estados Unidos e Inglaterra, que no querían repetir la experiencia de la primera posguerra. Por lo tanto, tampoco en este punto se llegó a un acuerdo. Será en la conferencia de Potsdam, que se celebró tras la rendición de Alemania (17 de julio-2 de agosto de 1945), cuando se restaurará el principio de la división en zonas de ocupación y por ende de la unidad económica y política del país y el problema de las reparaciones será solucionado, o más bien sorteado con una formulación ambigua. Entre las demás decisiones de la conferencia de Yalta, cabe señalar la relativa a la admisión de Francia en la *European Advisory Commission*, con la consiguiente asignación a Francia de una zona de ocupación en Alemania, obtenida con la cesión por parte de Estados Unidos e Inglaterra de una porción de sus zonas respectivas. Finalmente, al margen de la conferencia, se llegó a un acuerdo entre Roosevelt y Stalin para que la URSS se comprometiera a declarar guerra a Japón en dos o tres meses desde el final de la guerra con Alemania, recibiendo por ello como compensación la isla de Sachalin y las islas Kuriles.

Al trazar el balance de las decisiones de la conferencia, algunos estudiosos han extraído la conclusión de que en conjunto fueron los occidentales, y en particular Roosevelt, los que hicieron las mayores concesiones. Otros se limitan a subrayar su lógica de repartición. Si se comparten esos juicios, las palabras solemnes de la *Declaración de la Europa liberada*, en la que se hacía referencia explícitamente al compromiso de celebrar en todos los países «elecciones libres», o las del comunicado conjunto firmado por los tres grandes, en el que se invocaban los principios de la Carta Atlántica como garantía de «una paz segura y duradera» que «asegure a todos los hombres de todos los países una vida libre del miedo y de la necesidad», aparecen, a la luz

del desarrollo posterior de las relaciones internacionales, como meras fórmulas rituales. Pero no se puede olvidar que estas fórmulas expresaban el estado de ánimo y animaban las esperanzas de millones de hombres que habían vivido la guerra más sangrienta de todos los tiempos –cincuenta y cinco millones de muertos– y habían sido testigos de los bombardeos de arrasamiento sobre las ciudades, de las deportaciones masivas, del Holocausto, y que antes habían conocido, en Occidente, las privaciones de la gran depresión, y en la URSS, los horrores de las deportaciones y las purgas. Aquellas palabras se les debían y representaban un compromiso al que ningún gobernante podía sustraerse. Tras el encuentro de octubre de 1944 –el de las notitas y los porcentajes–, Churchill escribió a Stalin una carta –que nunca le envió– que terminaba con esas consideraciones: «Tenemos la impresión de que, vistas desde lejos y en su conjunto, las diferencias entre nuestros sistemas tenderán a disminuir y que el gran principio que tenemos en común –el de favorecer una vida más rica y feliz en beneficio de las masas populares– se irá afianzando cada año más. Probablemente, si hubiera cincuenta años de paz, las diferencias que ahora generarían en el mundo infinitas turbaciones, se convertirían en argumentos de meras discusiones académicas». Cincuenta años han pasado; en este tiempo «infinitas turbaciones» se han sucedido, pero las generaciones que las han vivido han conseguido –y no sólo en Occidente– una vida mejor y más larga que sus padres y abuelos. Por lo tanto, podemos mirar hacia los días de Yalta, si no «académicamente», sí con un mayor distanciamiento del que fue posible en los años de la guerra fría.

Entre la conferencia de Yalta y el fin de la guerra en Europa mediaron tres meses. *Motus in fine velocior*: el 8 de marzo, los ejércitos aliados forzaban el Rin y el 16 de abril se juntaban en Torgau, a orillas del Elba, con las vanguardias del ejército soviético; el 28 Mussolini era ajusticiado por los partisanos italianos y el 30 Hitler se suicidó con un tiro en la boca en el búnker de la Cancillería, mientras los rusos ya eran dueños de la capital. Finalmente, el 8 y el 9 de mayo el general Jodl firmaba el acta de rendición, respectivamente, con los aliados occidentales y con los rusos.

Roosevelt no pudo presenciar el día de la victoria. El presidente norteamericano, que ya en Yalta se mostró físicamente desmejorado, había fallecido el 12 de abril. Así, salía de escena, en un momento especialmente crítico, una de las mayores figuras de la historia contemporánea. La crítica que se le ha dirigido, especialmente en los años de la guerra fría, según la cual se mostró demasiado complaciente para con Stalin y se hizo ilusiones acerca de la evolución democrática de la URSS, es cuando menos discutible. Bastará con recordar que fue el hombre que no sólo había aprobado el «proyecto Manhattan» de construcción de la bomba atómica, sino que había seguido con atención su desarrollo, consciente del valor *político* que la posesión de la nueva arma, con la superioridad militar y tecnológica que de ello derivaría, ten-

dría en el mundo de la posguerra, tal y como él lo imaginaba: un sistema de relaciones internacionales en el que los Estados Unidos tendrían que dejar definitivamente a sus espaldas sus tentaciones aislacionistas y asumir, por contra, las responsabilidades y la carga de nivel planetario que competían a la gran potencia que eran. Parte fundamental de ese *grand design* era la liquidación gradual del colonialismo, lo que constituía uno de los mayores puntos de desacuerdo entre el presidente norteamericano y Winston Churchill. El de Roosevelt era, en definitiva, el proyecto de una ««hegemonía» planetaria, si con este término se entiende no sólo y no tanto la determinación a ejercer el mando, sino también, y sobre todo, la capacidad e incluso la moderación necesarias para su ejercicio, y la disponibilidad a aceptar compromisos con sus interlocutores. La historia de las modalidades con que este liderazgo fue gestionado por sus sucesores es, como veremos, extremadamente compleja y contradictoria. Nos limitaremos, pues, a adelantar que el abandono definitivo del aislacionismo ha quedado como una constante de la política exterior norteamericana durante toda la segunda mitad del siglo XX.

19.9. EL FINAL DE LA GUERRA EN EL PACÍFICO

Se ha visto cómo, tras la derrota en la batalla naval de las islas Midway, los japoneses habían perdido su superioridad marítima. A partir de aquel momento la iniciativa pasó a las manos de los norteamericanos y se desarrolló según la estrategia que se denominó de «los saltos de rana», es decir, de una isla a otra, comenzando por Guadalcanal, ocupada en febrero de 1943 al precio de tremendos combates, hasta Manila, donde desembarcaron en junio de 1945, llegando finalmente a Okinawa, ya en territorio japonés. Pero mientras los norteamericanos proseguían su marcha de acercamiento por vía marítima, los japoneses no se quedaban parados en los frentes terrestres. En marzo de 1944, un cuerpo del ejército japonés, reforzado por algunas unidades del «ejército nacional indio», partiendo de Birmania, lanzó una ofensiva en dirección de la India. El ejército indio había sido reclutado entre los prisioneros de guerra indios por el líder bengalí Subhas Chandra Bose, que había pasado del servicio de los alemanes al de los japoneses, y que apostaba por una insurrección popular india. En el frente chino las cosas fueron, en cambio, de otra manera; allí las tropas japonesas pasaron a la ofensiva en abril de 1944 y obtuvieron éxitos notables, logrando hacerse con la base aérea norteamericana de Henyang, de gran transcendencia estratégica. A finales de 1944, pues, la guerra en el Pacífico parecía estar lejos de su conclusión; los planes militares norteamericanos preveían que seguiría durante 1946. De ahí que, primero en Teherán y luego en Yalta, Roosevelt insistiera para que la URSS se sumase a la lucha contra los japoneses.

Naturalmente, la duración de la guerra dependía también de la evolución de la situación interna en Japón. Como siempre, ésta era difícilmente descifrable. El gobierno presidido por un general, Tojo, estaba formado por militares intransigentes y decididos a luchar hasta el final. A pesar de que en 1940 habían sido disueltos los partidos políticos, en los entresijos de la compleja vida política japonesa existían hombres influyentes y grupos que se daban cuenta de la inutilidad de seguir resistiendo y no cesaban de presionar discretamente al Emperador, del que conocían las dudas acerca de la prosecución de una guerra que ya estaba perdida. El principal exponente de esta tendencia era el príncipe Funimaro Konoe, miembro de una gran familia aristocrática, que había sido tres veces primer ministro. En junio de 1944, el gobierno de Tojo se vio obligado a la dimisión y el nuevo ministro de Exteriores, Shigemitsu, el mismo que había impulsado la Conferencia para la más grande Asia oriental, de la que ya se ha hecho mención, realizó unos tanteos en Moscú, que en aquel momento todavía era neutral, para solicitar una intervención en aras de una solución honrada del conflicto. Otros intentos en este sentido hizo el nuevo gobierno de Suzuki, que tomó posesión en abril de 1945, cuando la situación era ya desesperada: el 9 y el 10 de marzo, Toki había sufrido sendos bombardeos que habían provocado ochenta mil muertos. En la práctica, la única condición que los japoneses ponían para firmar era que se respetara la sacralidad que en la tradición japonesa rodeaba a la figura y la persona del Emperador. La respuesta a esos tanteos llegó el 26 de julio con un ultimátum conjunto chino y anglo-americano, en el que se fijaban las condiciones de la rendición: ocupación militar de las islas mayores hasta que fuese posible elegir «un gobierno pacífico y responsable»; castigo para los criminales de guerra, desarme de las fuerzas armadas japonesas y pago de las reparaciones. En caso de no aceptar, Japón debía esperarse la prosecución de la guerra a ultranza y la devastación de su territorio. No se trataba sólo de una amenaza para llevarlo a la rendición. En el momento en que se redactaba el ultimátum, Truman, el nuevo presidente norteamericano, había sido informado de que la experimentación de la primera bomba atómica, realizada en Alamogordo el 19 de julio, había tenido éxito.

En el documento aliado del 26 de julio no se hacía mención de la cuestión del Emperador y por tanto la primera reacción del gobierno de Suzuki fue favorable a la aceptación. Pero una vez más las presiones de los militares lograron impedir que esta orientación se hiciera pública. Se prefirió mantener el silencio, lo que fue interpretado por los aliados como una negativa. La guerra, pues, seguía.

Para los gobernantes norteamericanos y el nuevo presidente se planteaba ahora el dilema de si utilizar o no la nueva arma atómica que ya poseían los Estados Unidos. La decisión de emprender el «proyecto Manhattan» se remontaba a 1941, es decir, a una fecha en que se creía que también los ale-

manes estaban investigando sobre la escisión del átomo. En efecto, este había sido el principal argumento que, tras ser solicitado para ello por algunos científicos, entre ellos el húngaro Leo Szilard y el italiano Enrico Fermi (ambos emigrados a Estados Unidos), Einstein había dirigido al presidente Roosevelt para señalar este peligro y pedir que interviniera. Sin embargo, los documentos que, durante su avanzada en Francia en otoño de 1944, los norteamericanos encontraron entre los papeles del físico alemán Von Weiszächer en Estrasburgo demuestran que los alemanes no habían llegado a producir ninguna bomba atómica y que sus investigaciones, además, se habían dirigido hacia otros objetivos. Hoy sabemos que otro físico alemán, Von Heisenberg, en noviembre de 1941 intentó tranquilizar a sus colegas emigrados acerca de las investigaciones que se estaban realizando en Alemania, a través de Niels Böhr, que se encontraba en Dinamarca y que en 1943 emigró a los Estados Unidos; pero éstos no le dieron crédito. En todo caso, la capitulación de Alemania puso punto final a cualquier duda que se quedara.

En esta situación, algunos de los mismos científicos que habían pedido la puesta en marcha del «proyecto Manhattan», en junio de 1945 dirigieron un informe al ministro de Guerra Henry Stimson –el llamado informe Frank– en el que proponían que el lanzamiento de la bomba se efectuara sobre una isla desierta y en presencia de observadores internacionales, con fines demostrativos. Su opinión no fue compartida por otros físicos empeñados en el proyecto, como Enrico Fermi y Eric Openheimer, ni mucho menos encontró audiencia entre los políticos. Durante la conferencia de Potsdam Truman comunicó a Stalin que el test atómico de Alamogordo había tenido éxito. El dictador soviético no dio muestras de sorpresa y simplemente replicó haciendo votos para que los norteamericanos hicieran buen uso de la nueva arma. El 20 de agosto, quince días después de Hiroshima, Stalin creaba un comité especial para la bomba atómica dirigido por el siniestro burócrata Beria. El 6 de agosto, la primera bomba atómica fue lanzada sobre Hiroshima, provocando setenta mil muertos. Dos días después la Unión Soviética, cumpliendo lo acordado en Yalta, declaraba la guerra a Japón e invadía Manchuria. El día 9, le tocaba a Nagasaky ser sometida al bombardeo atómico. El 14 de agosto, en el transcurso de una dramática conferencia imperial, el Emperador se pronunciaba en favor de la aceptación de los términos de la rendición, que se firmó el 2 de septiembre a bordo del acorazado norteamericano *Missouri*. En el texto del acta de rendición, se leía que la orden de fin de las hostilidades había sido dada por el Emperador. Con este subterfugio, que implicaba el reconocimiento de la función del Emperador y la continuidad de su celeste mandato, fue posible superar el escollo en el que se habían encallado las negociaciones y acallar las últimas resistencias de los militares. Por otra parte, ello no impidió que durante la jornada del 15 de julio, Tokio fuese escenario de enfrentamientos entre las tropas fieles al

Emperador y unidades amotinadas y que algunos ministros prefiriesen el suicidio al deshonor.

Algunos estudiosos han sostenido que el lanzamiento de la bomba atómica no fue sólo el último acto de una guerra contra un enemigo ya derrotado, sino más bien el primero de la guerra fría, un aviso para la Unión Soviética. Semejante interpretación supone que en los dirigentes norteamericanos ya estuviesen consolidadas una previsión y una orientación acerca de la posterior evolución de las relaciones internacionales como oposición declarada entre dos bloques, lo que –como he tenido ocasión de subrayar– es cuando menos discutible. El espíritu de Yalta, en efecto, todavía no se había disuelto y si entre Estados Unidos y la Unión Soviética existían indudablemente puntos de fricción y de contraste, también se daban unas convergencias. Ambos, por ejemplo, eran favorables a la constitución de un gobierno de unión nacional en un país desde luego no secundario como era China; ambos se pronunciaban a favor de la independencia de la India y ambos votarán en la asamblea de las Naciones Unidas para la constitución y el reconocimiento de Israel.

Sea como fuere, la bomba atómica existía y, como avisaban los científicos que habían trabajado en su construcción, no quedaría secreta durante mucho tiempo. Ello representaba no sólo una novedad que levantaba en la comunidad científica y en la opinión pública delicados interrogantes acerca de la naturaleza de la guerra y el futuro de la humanidad, sino también una amonestación hacia todos.

Como Sarajevo, y más que Sarajevo, Hiroshima es, pues, un hito en la historia contemporánea. Después de Hiroshima el mundo no sería nunca más el mismo, los hombres no serían nunca más los mismos. Más de cincuenta años han pasado desde la explosión de la primera bomba atómica; durante ese tiempo, la historia ha seguido produciendo acontecimientos, se han consumado ideologías, han caído muros. Pero la amenaza y el toque de atención que Hiroshima ha representado y representa nunca han desaparecido; esta presencia y la creciente conciencia de ella pueden quizá ofrecer a quien quiera aprestarse a recorrer a la historia de la segunda mitad del siglo XX, una brújula, un hilo conductor. Quiero decir que es también, y sobre todo, mediante esta presencia y este temor que el género humano ha ido madurando una mayor conciencia de su propio destino común: la retama florece incluso en la lava.

Tercera parte

La era del bipolarismo y del desarrollo

20

El mundo después de la guerra

20.1. DESOLACIÓN Y ESPERANZAS DE POSGUERRA

Las operaciones militares de la segunda guerra mundial afectaron a una área mucho más amplia que la que había sido escenario de la primera, en su mayor parte europea. En Europa y en la cuenca del Mediterráneo, sólo Suecia, Suiza, los estados de la península Ibérica e Irlanda pudieron mantenerse neutrales, mientras que Turquía entró en guerra pocas semanas antes de la rendición alemana. Todos los demás estados no sólo participaron en el conflicto, sino que fueron campo de batalla. Fuera de Europa, se luchó en el área del Pacífico, en el sureste de Asia hasta casi las fronteras de la India, en África septentrional, en Oriente Medio. Los territorios que no se vieron directamente afectados por las operaciones militares fueron sólo el África subsahariana y el continente americano en su totalidad, lo que no significa, por otra parte, que este último quedara ajeno al conflicto. En efecto, en enero de 1942, en la conferencia panamericana de Rio de Janeiro, los Estados Unidos pidieron a los estados de América Latina que rompiesen sus relaciones diplomáticas con las potencias del Tripartito. Su recomendación fue seguida posteriormente por la declaración de guerra. El primer país que lo hizo fue México, en mayo de 1942, seguido por Brasil, que envió un cuerpo de expedición a Europa en agosto del mismo año; el último fue Argentina, cuyas relaciones con los Estados Unidos eran más bien complicadas y que se sumó en marzo de 1945. Como ya en la primera, participaron en la segunda guerra mundial también los dominios británicos, mediante el envío de tropas que lucharon en varios frentes.

Allí donde la guerra había pasado, había dejado detrás de sí un panorama de desolación. Ciudades enteras, como Coventry, Hamburgo, Dresden, Berlín, Varsovia, Hiroshima y Nagasaki, se habían convertido en un cúmu-

lo de escombros y regiones enteras habían quedado devastadas. La cifra total de las víctimas sólo se puede calcular de forma aproximada, pero con seguridad superó los cincuenta millones, casi de la mitad de ellos, a diferencia de lo que había sucedido en la primera guerra mundial, civiles. Entre los países extraeuropeos, los que pagaron el precio más alto fueron Japón, con cerca de dos millones y medio de víctimas, y China, donde la guerra había comenzado en 1937 con la invasión japonesa, con entre quince y veinte millones. En Europa, el país que pagó el precio más alto en cifras absolutas fue sin duda la Unión Soviética. En un discurso pronunciado inmediatamente después de la conclusión de conflicto, Stalin habló de siete millones de muertos. Se trataba de una mentira consciente. Hoy sabemos que fueron muchos más: veinte millones, o incluso veintisiete, según lo que afirmó Gorbachov en un discurso. Sólo en 1955 la Unión Soviética volverá a alcanzar el nivel de población prebélico. En términos de porcentajes, los países más azotados fueron Yugoslavia, con un millón y medio de muertos, y Polonia, con cinco millones, el 18-20 % de su población, de los que más de la mitad fueron judíos, víctimas del genocidio nazi. Entre los países de Europa occidental, el más afectado resultó, obviamente, Alemania, con cinco millones de muertos; en cambio, los demás lamentaron pérdidas mucho menores: cuatrocientos mil, Inglaterra; cerca de seiscientos mil, Francia; poco más de trescientos mil, Italia. Los Estados Unidos también tuvieron poco más de trescientos mil caídos. En los países más afectados se determinó, así, un fuerte desequilibrio entre los dos sexos: en Alemania, por ejemplo, todavía en 1950, por el grupo de edad comprendido ente los 24 y los 45 años, se contaban 77 varones por 100 mujeres. En la Unión Soviética, según los datos del censo, la población femenina superaba en 1959 la masculina en 18 millones.

Ahora la guerra había terminado, pero no habían terminado los sufrimientos que había generado. Éstos siguieron para millones de alemanes que fueron expulsados de Polonia, de Checoslovaquia y Hungría; para los doscientos mil refugiados italianos de Istria y los dieciséis millones de prófugos –polacos, ucranios, bálticos y judíos supervivientes del Holocausto– que en los varios campos de refugiados de Europa esperaron, a veces durante años, ser enviados a la destinación elegida para ellos. Además, millones de ciudadanos europeos vivían en un régimen de subalimentación y muchos de ellos lograron sobrevivir sólo gracias a las ayudas de la UNRRA, una agencia de las Naciones Unidas. La producción agrícola europea en 1946-47 representaba el 75 % de la de 1938 y se ha calculado que el consumo de alimentos *per cápita* en Alemania y Austria era el 60 % del normal, en Italia del 68 % y en Bélgica, Francia, Holanda, Finlandia o Checoslovaquia, el 75 %. No es sorprendente, pues, que en esas circunstancias, las medidas de racionamiento introducidas durante la guerra fueran mantenidas vigentes durante varios años y que por doquier prosperaba el mercado negro. Especialmente

grave era, una vez más, la situación en la URSS: la cosecha de 1946 fue desastrosa y la consecuencia fue una nueva carestía. Aquí ya no era cuestión de subalimentación, sino de hambre. Fuera de Europa, en los campos del mundo, la subalimentación era la regla y no la excepción, una condición humana y no la emergencia.

Si éstas eran las condiciones de la agricultura, las de la industria no eran mucho mejores. Con la excepción de Inglaterra, Suiza y los países escandinavos, la producción industrial de los países europeos al final del conflicto, en 1945-46, estaba ampliamente por debajo de nivel prebélico, aunque algunos de ellos, incluida Alemania, conservaban gran parte de su capacidad productiva. La ruina total de los transportes, el desorden y la imposibilidad de convertibilidad de las monedas, con los consiguientes efectos negativos en las importaciones y el comercio internacional, y la baja productividad de una mano de obra subalimentada, no permitían, en efecto, sino una utilización parcial de las infraestructuras. La economía, pues, encontraba dificultades para reponerse: con la única excepción, naturalmente, de Estados Unidos, el producto nacional de los países beligerantes era inferior al anterior a la guerra en un 10-20 %, en los países más afortunados, como Francia, Bélgica y Holanda, y de un 40-50 % en los más desafortunados.

Así pues, la humanidad había tocado fondo, y ahora quería volver a la vida. Se extendía la conciencia de que ello no sería posible mediante la mera vuelta a la «normalidad» de la anteguerra, sino sólo mediante un cambio en la organización en la sociedad y en las mismas relaciones internacionales. Las generaciones de los ancianos, que habían conocido dos guerras mundiales con en medio una depresión sin precedentes, no tenían ninguna nostalgia por el pasado y los jóvenes aspiraban a una vida y un futuro distintos de los que les habían tocado a sus padres. Quizá nunca en la historia de la edad contemporánea hubo en el mundo tanta esperanza y tanta voluntad de hacer *tabula rasa* del pasado y comenzar una vida nueva. Este era –por citar un caso extremo– el estado de ánimo de los miles de judíos supervivientes de los campos de exterminio que decidieron sumarse a sus correligionarios emigrados a Palestina antes de la guerra, para fundar con ellos un estado nuevo en una tierra nueva. Pero también era el estado de ánimo de los que, de vuelta a sus casas, exigían ser compensados por los sacrificios que habían hecho y aspiraban a una vida a la medida de sus necesidades y sus esperanzas. De ahí que no sea sorprendente el que en todas las elecciones que se celebraron en los años de la inmediata posguerra, y en las que en muchos países (como en Francia) las mujeres por primera vez pudieron ejercer su derecho al voto, los que tuvieron más éxito fueron los partidos que más abiertamente se pronunciaban en favor del cambio y de la ruptura con el pasado.

La primera y más clamorosa manifestación de esto llegó del más flemático y comedido entre los países europeos, Inglaterra. A diferencia de lo que había pasado al finalizar la primera guerra mundial, cuando los electores habían expresado su gratitud y su confianza hacia los partidos y los hombres que habían gobernado el país durante la guerra y hasta la victoria asegurando a éstos una amplia mayoría, en las elecciones de julio de 1945, al contrario, los electores se expresaron con una mayoría igualmente amplia en favor del partido laborista (393 escaños contra 213 de los conservadores) y de este modo despidieron al hombre que no sólo les había llevado a la victoria, sino que había encarnado su determinación a resistir y a luchar. Análoga voluntad de ruptura con el pasado se dio en Francia, donde después de la liberación comenzó un proceso laborioso y conflictivo que llevará al nacimiento de una nueva República –la Cuarta– y a la adopción de una nueva constitución, marcando así las distancias no sólo con el régimen de Vichy, sino también con la Tercera República. En las elecciones que se sucedieron en los años inmediatamente posteriores a la guerra, los partidos de la izquierda obtuvieron cerca del 50 % de los votos. Ya no se trataba, pues, como en la primera posguerra, de una representación parlamentaria *bleu horizon*, sino de una que se teñía de rojo. A la cabeza del gobierno se encontraba un hombre, Charles De Gaulle, que había sido el primero en exhortar a los franceses a la Resistencia y de su gabinete formaban parte ministros socialistas y comunistas. También en Italia, en las elecciones para la Asamblea Constituyente de junio de 1946, los electores votaron mayoritariamente por un nuevo partido, la Democracia Cristiana, que su líder, Alcide De Gasperi, un católico de firmes convicciones antifascistas, definía como «un partido de centro que mira hacia la izquierda», y por los partidos históricos de la izquierda –socialistas y comunistas– que alcanzaron el 40 % de los sufragios. Fue posible, así, formar un gobierno de coalición presidido por Ferruccio Parri, un representante del Partido de Acción y ex dirigente de la Resistencia, que se mantuvo en el cargo sólo hasta diciembre de 1945, cuando le sucedió un gabinete presidido por De Gasperi. Junto con las elecciones políticas de junio de 1946 se celebró un referéndum institucional mediante el cual Italia dejó de ser una monarquía y se convirtió en república.

El italiano no fue el único trono que cayó en los años de la posguerra: lo mismo sucedió en Rumania, Bulgaria, Yugoslavia y Albania. También en Checoslovaquia las primeras elecciones de la posguerra vieron el triunfo de la izquierda, con los comunistas en el 38 %, mientras que en Hungría, en noviembre de 1945, la mayoría absoluta de los votos –el 57 %– fue para el partido de los campesinos, que había sido el mayor impulsor de la reforma agraria llevada a cabo en la primavera de aquel año; los comunistas, en cambio, no fueron más allá del 17 %. En los demás países de Europa oriental, ya integrados en la esfera de influencia soviética, las primeras elecciones de la

posguerra supusieron la victoria de los «bloques» o «frentes» en los que el Partido Comunista tenía un papel predominante: éste fue el caso de las elecciones rumanas de noviembre de 1945 y de las búlgaras de noviembre de 1946. Pero sería un error atribuir estos resultados exclusivamente a la presencia y a la influencia soviética. Se trataba también del reflejo de la voluntad colectiva de renovación y participación en países que en los años de entreguerras no había sido en absoluto modelos de democracia. Asimismo, en Yugoslavia las elecciones de 1945 se celebraron con una lista única donde predominaban los comunistas, pero también fueron una suerte de plebiscito en favor de una nueva estructura, republicana y federal, de un país que había sido literalmente desgarrado y desangrado por los contrastes entre las etnias, además de un reconocimiento hacia el partido y el líder que habían sido protagonistas de la Resistencia.

Fuera de Europa, merece ser señalado el caso de Japón. Ahí, si en las elecciones de abril de 1946 los liberales del futuro primer ministro Shigeru Yoshida ganaron a los progresistas, en las de mayo de 1947 fueron los socialdemócratas los que obtuvieron el mayor número de escaños y que, en consecuencia, designaron al primer ministro. Finalmente, también en los Estados Unidos, donde en las elecciones de medio término de 1946 se había registrado un avance de los republicanos, en las presidenciales de 1948 el vencedor fue, contra todo pronóstico, el presidente saliente, Harry Truman. El variado bloque de consensos que se había formado alrededor del *New Deal* rooseveltiano seguía vigente.

Naturalmente, los programas con los que los partidos progresistas se ganaron el apoyo popular variaban según los países. En Europa occidental, su principal caballo de batalla fueron las nacionalizaciones, que se llevaron a cabo a gran escala tanto en la Inglaterra laborista como en Francia, en Austria y, en menor medida, en otros países; de ello volveremos a ocuparnos más adelante. En los países de la Europa oriental, también se procedió a nacionalizar amplios sectores de la economía, aunque en muchos casos se trató de una medida casi obligada, ya que muchas industrias habían sido requisadas durante la guerra por los ocupantes alemanes y en especial las de propiedad de los judíos. Pero en esta parte de Europa la reivindicación más importante era la de una reforma agraria y ésta se llevó a cabo en formas distintas según la estructura y las características de cada país: más radical en Hungría, donde las grandes propiedades habían permanecido muy extensas tras la primera guerra mundial, y en Polonia y Alemania oriental; más limitada y selectiva en Checoslovaquia, Rumania y Albania; marginal en Bulgaria y Yugoslavia, donde ya prevalecía la pequeña propiedad campesina. A este respecto merece la pena observar que, a diferencia de lo que había sucedido en los países bálticos y en los demás territorios anexionados a la URSS, en ninguno de esos países se adoptó, en los primeros años de la posguerra, el

modelo soviético de colectivización forzosa de los años treinta; antes bien, hay muchos indicios de que ésta se consideraba como un ejemplo negativo. En todo caso, nadie echó de menos el fin de los *Junker* alemanes, de los *Pan* polacos y de los magnates húngaros. En Polonia, en junio de 1946, la reforma agraria y las nacionalizaciones fueron aprobadas mediante un referéndum popular con una amplísima mayoría.

En el mundo colonial las aspiraciones de renovación pasaban obligatoriamente por el fin de la colonización y la conquista de la independencia. Ese era el objetivo declarado abiertamente en la *Quit India Resolution* aprobada con mayoría aplastante por el Comité Panindio del Partido del Congreso el 8 de agosto de 1942. Frente a esto, las autoridades británicas respondieron, como se ha visto, con la detención de Gandhi y la represión de las agitaciones populares que siguieron, pero también en Inglaterra había quien se daba cuenta de que la partida sólo estaba aplazada y su resultado estaba cantado. Las elecciones de diciembre de 1945, en efecto, vieron la clara afirmación de los partidos que defendían la independencia, respectivamente el Partido del Congreso en los estados de mayoría hindú y de la Liga de Jinnah, en los de mayoría musulmana. El afán de independencia se transmitía también a los demás países del Asia del sureste y en particular a Birmania, donde los dirigentes del movimiento nacionalista rompieron las relaciones de colaboración que habían mantenido con los japoneses durante la primera fase del conflicto, fundaron, en septiembre de 1944, una Liga Antifascista Popular y, en marzo de 1945, pasaron a la lucha armada contra los ocupantes nipones. Finalizada la guerra, la Liga Antifascista, vencedora de las elecciones de abril de 1947, en enero de 1948 proclamó la independencia del país y su salida de la Commonwealth británico. Un mes más tarde, Ceilán seguía su ejemplo.

En Vietnam, inmediatamente después del bombardeo de Hiroshima, el 7 de agosto de 1945, Ho Chi Minh constituía un Comité de Liberación del Pueblo Vietnamita y el 2 de septiembre proclamaba la independencia, con un documento que se hacía eco de la declaración de independencia norteamericana y de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución francesa. Casi al mismo tiempo, el 17 de agosto, Sukarno y Hatta, los dos mayores líderes del movimiento nacionalista en Indonesia, tras volver a Batavia, todavía ocupada por los japoneses, proclamaban ellos también la independencia de Indonesia. En cuanto a las Filipinas, una vez expulsados los ocupantes japoneses, entró en vigor el *Tyding McDuffie Act* de 1934, que les garantizaba la independencia en 1946.

En Oriente Medio, obtuvieron la independencia los mandatos franceses de Líbano y Siria, respectivamente en 1943 y 1946. En el primero, el traspaso de poderes se produjo sin derramamiento de sangre, pero no así en Si-

ria. Pese al compromiso asumido por De Gaulle de reconocer la independencia una vez terminada la guerra, y a pesar de que en las elecciones de 1943 el Partido Nacionalista había obtenido una importante afirmación, en mayo de 1945 Francia envió a Siria un nuevo contingente militar con el objetivo evidente de mantener el control del país y para doblegar la resistencia de los nacionalistas sirios no dudó, en mayo de 1945, en bombardear la capital, Damasco. Por fin, en abril de 1946 Francia se vio obligada, bajo la presión de Estados Unidos e Inglaterra, que habían reconocido la independencia de Siria, a renunciar a su mandato. En marzo de 1945, tanto Siria como Líbano, se asociaron con los demás estados libres de la región (Egipto, Irak, Yemen, Arabia Saudí y Transjordania) en la Liga Árabe, que se inspiraba en la ideología panárabe de la que, en la primera posguerra, había sido portavoz y defensor el rey jordano Hussein, pero en realidad, como veremos en su momento, su objetivo principal será la lucha contra la emigración judía a Palestina y contra el estado de Israel.

Entre los países del Magreb, Argelia fue el que manifestó de la manera más abierta sus instancias autonomistas o independentistas. En mayo de 1945, el territorio circundante de la ciudad de Constantina fue escenario de una rebelión encabezada por los militantes del *Mouvement pour el Triomphe des Libertés Democratiques* (MTLD) de Messali Hadji, rebelión que fue duramente reprimida.

Por lo que respecta a las colonias francesas en África, la conferencia de Brazzaville de enero-febrero de 1944, convocada por De Gaulle, se había comprometido a poner en marcha un proyecto de transformación del imperio colonial francés en una unión con igualdad de derechos entre la madre patria y los territorios de ultramar. La formulación con la que se formalizó este compromiso en el primer proyecto de Constitución de abril de 1946 –una «unión libremente aceptada»– dejaba vislumbrar una solución consensuada, pero en el nuevo texto que, a raíz del voto contrario al primero por parte de los electores, se aprobó en octubre de 1946, dicha solución se veía rebajada en sentido restrictivo. La decepción provocada en los ambientes de los *evolués* africanos por este paso atrás encontró su expresión en el *Rassemblement Démocratique Africain* (RDA), un partido que se constituyó tras un congreso celebrado en Bamako en octubre de 1946 con la participación de representantes de varias colonias, entre los cuales destacan los nombres del senegalés Léopold-Sédar Senghor, de Félix Houphouët-Boigny, de Costa de Marfil, y del guineano Sekou Touré. Punto de referencia político de la RDA en la madre patria era el Partido Comunista Francés. Por otra parte, no se registran en los países africanos de la unión francesa episodios de protesta de cierta consistencia. La única excepción es Madagascar, donde, en diciembre de 1947, un intento de insurrección impulsado por los partidos que habían ganado las elecciones administrativas de noviembre de 1946, acabó en un baño de sangre que provocó miles de víctimas.

20.2. NORTEAMÉRICA Y EL MUNDO

Así pues, existían grandes esperanzas y gran desorden en el mundo. La potencia a la que amplios sectores de la opinión pública miraban como a la que más que ninguna otra estaba en condiciones de asumir la gravosa tarea de árbitro y líder, eran los Estados Unidos. Pero no era tan seguro que la asumirían y que, al contrario, no cederían, como había sucedido tras la primera guerra mundial, a la tentación de volver a su política aislacionista. La reconversión de la economía de guerra en economía de paz comportaba, en efecto, bastantes dificultades incluso para un país rico como lo eran los Estados Unidos de América. Si el crecimiento de la demanda, que durante la guerra se había quedado estancada, evitó el riesgo, que muchos temían, de recaer en la recesión, este mismo crecimiento puso en marcha una espiral inflacionista. De ello derivó una oleada de huelgas y agitaciones sindicales que, sólo en 1946, implicó a 4.600.000 trabajadores y puso en alarma a amplios sectores de la opinión pública. En las elecciones de medio término de 1946, por primera vez desde la elección de Roosevelt en 1932, los republicanos conquistaron la mayoría tanto en el Congreso como en el Senado. Posteriormente, en junio de 1947, a petición de los republicanos Taft y Hartley, se aprobaba una ley que limitaba drásticamente las libertades sindicales. Contra esta involución, el presidente Truman reaccionó mediante el uso reiterado del derecho de veto –aunque la ley Taft-Hartley siguió vigente– e impulsando un programa de subidas salariales y medidas dirigidas a ampliar la asistencia pública, a la zaga de la tradición rooseveltiana: el *Fair Deal*. Fueron estas medidas y estas posturas las que le aseguraron, contra todas las previsiones, la victoria en las elecciones presidenciales de 1948 y que permitieron al Partido Demócrata reconquistar la mayoría en el Congreso y en el Senado. A diferencia de lo que había sucedido en la primera posguerra, el liderazgo del Partido Demócrata se veía confirmado. Pero este éxito había sido posible también gracias a la línea que la administración había seguido en la política exterior, una línea compartida no sólo por la gran mayoría de la opinión pública, sino también por el Partido Republicano, con la excepción de un puñado de aislacionistas puros y duros. El senador Vanderberg, un republicano muy influyente, formó parte de las delegaciones norteamericanas implicadas en las negociaciones de la posguerra, desempeñando un papel no secundario tanto en éstas como en el debate parlamentario que precedió a la firma del Pacto Atlántico.

La situación política estaba, así, estabilizada, y con ella también la económica. En efecto, el Producto Interior Bruto, que no había dejado de crecer en medida considerable en los años entre 1939 y 1945, siguió creciendo con un ritmo elevado. Así, se iniciaba un ciclo de expansión que, a pesar de breves pausas y hasta recesiones, durará mucho tiempo. El desempleo se ab-

sorbía gradualmente y el consumo no cesaban de aumentar. Circulaban cada vez más automóviles, se difundía el uso de los electrodomésticos y de las tarjetas de crédito y un número cada vez mayor de norteamericanos vivía en casas de su propiedad. Desde luego, existían todavía cuarenta millones de ciudadanos que vivían por debajo del nivel de pobreza, pero todo dejaba esperar que también para ellos pronto se abrirían las puertas de la sociedad de consumo. Por lo tanto, a las frustraciones de los años de la crisis y a las tensiones de los años de la guerra, sucedía un clima de seguridad e incluso de euforia. En número de bodas resultó duplicado y a partir de la posguerra y durante los años cincuenta, Estados Unidos registró un auténtico *boom* de nacimientos, con la consecuencia de que la población total del país resultó, al final de la década, aumentada en treinta millones. Esto, a pesar de que las prácticas anticonceptivas (pero no el aborto) no sólo se difundieron, sino que eran toleradas incluso por algunos grupos religiosos. Es de 1960 la producción y la puesta en comercio de la píldora anticonceptiva. Se calcula que cada familia norteamericana tenía en media 3,2 hijos.

Por consiguiente, existían las condiciones de equilibrio y de consenso interno para que los Estados Unidos asumieran aquel papel de liderazgo que únicamente ellos estaban en condiciones de desempeñar y para el cual disponían de todos los medios, comenzando por los militares. Su potencial se había demostrado a la hora de luchar victoriosamente en dos frentes. Su armada estaba formada por mil doscientas unidades principales y docenas de portaaviones y por eso podía intervenir en cualquier mar. La aviación contaba con más de dos mil bombarderos pesados y mil B29, el avión que había lanzado la infame atómica sobre Hiroshima. Además, Estados Unidos había construido a lo largo de la guerra un sistema de bases militares y de derechos de sobrevuelo y uso de aeropuertos que cubría casi todo el planeta. Finalmente, tenían el monopolio de la bomba atómica. Es cierto que inmediatamente después de la conclusión de la guerra, los efectivos de las fuerzas armadas habían quedado drásticamente reducidos de ocho millones a 1.850.000 y que también se redujeron los gastos militares. Pero, por otra parte, esto se acompañó con un empleo de los recursos disponibles para el gasto militar dirigido a favorecer la modernización del aparato bélico y su adecuación a los cambios de los armamentos y de la guerra. A fin de cuentas, de ser necesario, los Estados Unidos estaban perfectamente en condiciones, como de hecho sucederá, de aumentar nuevamente el gasto militar. Sus reservas de oro ascendían, en efecto, a veinte mil millones de dólares, casi dos terceras partes del total mundial, y el país producía él solo la mitad de las mercancías del mundo entero.

Pero los Estados Unidos no eran sólo el mayor arsenal existente en el mundo, sino también eran su mayor almacén. Gracias a la política de racionalización agrícola emprendida por Roosevelt y al empleo de fertilizantes y fitofármacos y aunque la población empleada en la agricultura se había redu-

cido de una quinta a una vigésima parte de la población total, eran con diferencia los mayores exportadores del mundo de arroz, semillas de soja, trigo y carne y los mayores contribuyentes de programa de ayudas alimentarias de la UNRRA.

Por otro lado, la fuerza de Estados Unidos no residía sólo en las armas y en la harina, y en el poder de condicionamiento e incluso chantaje que las unas y la otra le otorgaban; también residía en la superioridad de su tecnología y de la investigación científica que la sustentaba. Ellos acogían una concentración de cerebros y de competencias inmensamente mayor que la de cualquier otro país; para confirmarlo, basta con ojear la lista de los premios Nobel de Física, Química o Medicina concedidos desde los años cuarenta en adelante, y compararla con la de antes de la guerra. Muchos de esos cerebros habían encontrado cobijo y hospitalidad en Norteamérica antes y durante la guerra: entre ellos, algunos de los científicos que trabajaron en el «proyecto Manhattan», pero también filósofos, como Leo Strauss y Ernst Cassirer, historiadores, como Gaetano Salvemini y Georg Hallgarten, arquitectos, como Walter Gropius... en suma, lo mejor de la *intelligentsia* europea.

Finalmente, la fuerza y el prestigio de los Estados Unidos consistían en la fuerza de atracción que la imagen de sí mismos que proyectaban hacia el exterior –la imagen de una convivencia y de una sociedad libres, desinhibidas, optimistas– ejercía universalmente. Desde luego, la realidad sólo se identificaba en parte con esa imagen, pero ésta contenía un mensaje de confianza y de esperanza para millones de hombres que, después de tantos sufrimientos y tantos horrores, aspiraban a volver a vivir, y como tal se la percibía. En todos los rincones del mundo, se proyectaban películas norteamericanas y por doquier se bailaba al ritmo del *boogie-woogie*.

Existían, pues, las condiciones para que los Estados Unidos propusieran su candidatura al liderazgo al que habían renunciado después de la primera guerra mundial. Y así lo hicieron. Ahora, se trata de ver si estuvieron a la altura de esta ardua labor, y en qué medida.

20.3. LOS ACUERDOS DE BRETTON WOODS

A juicio del presidente Roosevelt y de muchos representantes del mundo político norteamericano, el segundo conflicto mundial había sido la directa consecuencia de la gran depresión, que a su vez era hija del desorden monetario y de las políticas proteccionistas y autárquicas practicadas por todas las mayores potencias a lo largo de los años treinta. Por lo tanto, lo que se auspiciaba era un mundo sin barreras aduaneras y sin proteccionismo, un mundo en el que las personas y las mercancías pudiesen circular libremente y las monedas fuesen convertibles, y en el que la cooperación entre los estados

sustituyera la vieja política de las esferas de influencia. En este mundo, el dólar cumpliría con la función que en su tiempo había sido de la libra esterlina, es decir, la de garante del equilibrio monetario, así como los Estados Unidos se sustituirían a Inglaterra en el papel de «directores de orquesta». Pero la comparación con el precedente inglés sólo funciona hasta cierto punto, ya que el gran designio rooseveltiano contemplaba, en perspectiva, la extensión del derecho de autodeterminación a los territorios coloniales, incluidos los del Imperio británico.

La aguja de la brújula de la *Weltpolitik* norteamericana volvía, pues, a ser el concepto de globalidad que en su tiempo había inspirado los catorce puntos de Wilson, con su esbozo de un nuevo orden mundial en el que los Estados Unidos asumirían el papel de árbitro y tutor. En esos principios y esas orientaciones se inspiraba la Carta Atlántica.

Sin embargo, entre la enunciación del principio y su realización concreta el camino estaba plagado de obstáculos, y Roosevelt y sus colaboradores ya habían podido percatarse de ello durante las negociaciones con los ingleses, que finalizaron con la publicación de la Carta Atlántica, como también durante las conferencias de Teherán, Yalta y Potsdam. Se trataba, por tanto, de construir las condiciones y aprestar los instrumentos que hicieran posible una gradual realización de este ambicioso programa en la mayor medida posible.

Fue con este fin que equipos de expertos, dirigidos por John M. Keynes en Inglaterra y Henry D. White en los Estados Unidos, respectivamente, elaboraron unos planes que tenían en común el objetivo de evitar que se volviera a producir la situación de los años treinta, cuando las grandes potencias habían intentado salir de la depresión contando, cada una por separado, con sus fuerzas sin interesarse demasiado por las consecuencias que sus decisiones tendrían en el sistema de relaciones internacionales. Keynes y White se proponían encontrar un punto de equilibrio entre la necesidad que cada estado tenía de impulsar el desarrollo de sus propias economías y la estabilidad de las relaciones entre las monedas y el flujo de los intercambios. Si éste era el objetivo común, las vías y los mecanismos de cada uno de los dos estudiosos para lograrlo, eran bien diferentes. El plan de Keynes preveía un sistema basado en la constitución de una *International Clearing Union* y la emisión de una moneda internacional –el *bancor*–, con el fin de asegurar a los países con una balanza comercial pasiva la concesión de créditos por parte de los socios más favorecidos; en cambio, el plan de White preveía un sistema monetario basado en cambios fijos entre las varias monedas ancladas al oro, lo que implicaba que los países con la balanza en déficit se verían obligados a mantener la paridad pagándola de su bolsillo, mediante medidas económicas rigurosas, de tipo deflacionista. En otras palabras, «Keynes daba prioridad a los objetivos nacionales respecto de los internacionales, mientras que las

prioridades de White eran exactamente opuestas» (Van Der Wee, 1989). Al término de los trabajos de la conferencia convocada en Bretton Woods en julio de 1944, la orientación que prevaleció se acercaba más a los planteamientos de la delegación norteamericana que a los de la inglesa. En efecto, su base era la fijación de tipos de cambio fijos entre las monedas y la convertibilidad de éstas para la transacción de las cuentas corrientes. Sin embargo, se preveía la creación de un Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya principal función sería la de acudir en ayuda de aquellos países que se encontrasen en una situación de desequilibrio «fundamental» de su balanza comercial, sin que éstos tuvieran que recurrir a devaluaciones que pudieran perturbar o alterar el libre flujo del comercio internacional. Los países adheridos al Fondo (inicialmente fueron cuarenta y cuatro y entre ellos no figuraba la Unión Soviética) concurrirían a financiarlo mediante una cuota proporcional calculada en base a su producto bruto y de su participación en el comercio internacional. Es palmario que esto aseguraba a Estados Unidos e Inglaterra una posición predominante. Además del FMI, se instituyó también un Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, con la tarea de financiar la reconstrucción en los países dañados o devastados por la guerra. En julio de 1945, tales acuerdos fueron aprobados por la Asamblea de la ONU. Los acuerdos de Bretton Woods preveían un período de cinco años antes de que la convertibilidad de las monedas se hiciera vinculante, como una suerte de período de rodaje. Además, los norteamericanos habían avanzado insistentemente la propuesta de instituir una Organización del Comercio Internacional (ITO), con la función de asegurar la libertad de los intercambios y de prevenir iniciativas de tipo proteccionista. Pero también en este caso se prefirió no acelerar el tiempo; habrá que esperar bastante, para que la idea se concrete en una forma distinta de la propuesta inicialmente por los norteamericanos: el *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT, «Acuerdo General de Aranceles y Comercio»), sellado en Ginebra en 1947 tras una conferencia en la que participaron veintitrés países, no era una «organización», sino un «acuerdo general», sometido a revisiones y actualizaciones que se realizarían mediante las varias «rondas» en que se articularía su actividad durante las décadas siguientes.

Con los acuerdos de Bretton Woods se delinearon, así, las coordenadas para una cooperación económica entre los estados miembros, pero era evidente para todos que tal cooperación no llegaría a funcionar sin estar acompañada por alguna forma de cooperación política. Y también en este caso, la experiencia de los años treinta, cuando había primado la doctrina de las esferas de influencia y de la compartimentación, representaba una amonestación.

El organismo principal al que se debería confiar la tarea de estimular y facilitar esta cooperación política era, obviamente, la ONU, cuya constitución había sido tan impulsada por Roosevelt. Al final de la guerra, se adhe-

rían a ella cincuenta y un estados y los Estados Unidos disponían de una cómoda mayoría tanto en el Consejo de Seguridad como en la asamblea, gracias al voto de sus aliados europeos y de la gran mayoría de los estados de América Latina. Pero nosotros sabemos que, en virtud de los acuerdos de Dumbarton Oaks y Yalta, cualquier decisión del Consejo de Seguridad podía ser bloqueada, como de hecho no tardará en suceder, por el voto de uno de sus miembros permanentes. Ello limitaba, e incluso anulaba, su capacidad de tomar decisiones políticas y arriesgaba con transformar –como sucedió durante la guerra fría– la asamblea en una arena o una tribuna de intercambios oratorios y de acusaciones mutuas.

El camino de la cooperación política volvía, pues, a pasar forzosamente por los canales de la diplomacia y de los acuerdos bilaterales o multilaterales. Este era el banco de pruebas en el que estaba llamado a medirse el liderazgo norteamericano.

20.4. LAS RELACIONES ANGLO-AMERICANAS EN LA INMEDIATA POSGUERRA

La forma de cooperación política que se presentaba como más practicable tras la conclusión victoriosa del conflicto era la de la prosecución y la consolidación de las relaciones de colaboración que durante la guerra se habían establecido entre los Estados Unidos y sus aliados. Naturalmente, esto era más fácil de llevar a cabo con el aliado que, política y culturalmente, era más afín a Estados Unidos, es decir, Inglaterra. Esta última se había beneficiado ampliamente de las ayudas concedidas gracias a la ley norteamericana de «alquiler y préstamo», pero en mayo de 1945, inmediatamente después del fin de la guerra en Europa, los Estados Unidos habían bruscamente decidido su suspensión. Una Inglaterra agotada por el largo y gravoso esfuerzo bélico, se veía obligada, así, a enfrentarse a la amenaza de la que Keynes calificó de «Dunquerque financiera». En esas condiciones, el ambicioso y costoso programa de reformas sociales y nacionalizaciones que el nuevo gobierno laborista se aprestaba a estrenar, no se podría realizar sin la colaboración del aliado norteamericano y, de hecho, a él se dirigieron los británicos para obtener un préstamo. El mayor obstáculo para la concesión de éste era el mismo con el que en su tiempo se habían topado los negociadores de la Carta Atlántica y de los acuerdos de Bretton Woods, es decir, el sistema de preferencias que estaba en vigor en el área de la libra esterlina, un sistema que perjudicaba seriamente las exportaciones norteamericanas a la muy extensa zona del Commomnwealth. Por lo tanto, su eliminación, o al menos una sustancial suavización, fue el precio que la delegación norteamericana encabezada por William Clayton pidió a su interlocutor inglés. Por fin, tras lar-

gas y difíciles conversaciones, en julio de 1946 la Cámara de los Representantes de Washington aprobó la concesión de un préstamo que ascendía a 3.750 millones de dólares, con un interés del 2 % y a condición de que las libras utilizadas para las transacciones corrientes se hicieran convertibles y se levantaran las vinculaciones impuestas a las importaciones procedentes de los Estados Unidos. Con todo, eso no valió a mejorar la situación de las finanzas y la economía inglesa, que, al contrario, fue rápida y gravemente empeorando hasta obligar al gobierno a suspender nuevamente, en agosto de 1947, la convertibilidad de la libra. Así, el gobierno laborista se encontró ante una dramática alternativa: o reducir su presencia y su política «imperial» o renunciar a su ambicioso y arduo programa de reformas. Algunos de sus miembros, como el ministro de Exteriores Ernest Bevin, estaban decididos a luchar para mantener la posición de prestigio imperial del país, pero otros, como sobre todo el primer ministro Clement Attlee, compartían sustancialmente la visión «internacional» de Wilson y Roosevelt. A juzgar por los hechos, esta última fue la orientación que acabó prevaleciendo. En febrero de 1947, Londres comunicaba a Washington su decisión de retirar sus tropas en Grecia y Turquía y el 15 de julio los Comunes aprobaban, tras tres votaciones, el *India Independence Bill*. Mientras tanto, en enero, también Birmania, como se ha visto, se había convertido en estado independiente, con el consentimiento de Inglaterra. Naturalmente, ésta mantenía aún una importante presencia en vastas áreas del planeta, como Oriente Medio, con sus yacimientos de petróleo, que siguió bajo su influencia también después de que en mayo de 1948 tuvo que renunciar a su mandato en Palestina; África y América Latina, donde, por lo demás, la presencia británica perdía terreno en favor de la norteamericana. Pero Inglaterra había dejado de ser el «director de orquesta» que había sido durante el siglo XIX y después, y había cedido su batuta a los Estados Unidos de América. A partir de entonces, como tendremos ocasión de constatar, su papel será el de un *junior*, socio vinculado por una «relación especial» a la potencia líder, aunque, como también se podrá constatar, en varias ocasiones supo sacar provecho de su gran experiencia en las gestiones de política exterior, desarrollando un papel eficaz ya de estímulo ya de moderación. Liberado de sus más gravosos compromisos internacionales, el gobierno laborista pudo así dedicarse a la realización del proyecto de reformas. Pero de esto ya hablaremos en su lugar.

20.5. LA URSS Y EL MUNDO

El otro gran aliado de la coalición antinazi era la Unión Soviética, un interlocutor mucho más difícil, ya que con ella el contencioso era bastante más considerable. Como sabemos, la URSS había salido desangrada y agotada

de la guerra. El país se encontraba en la necesidad de afrontar los problemas de la reconstrucción con una población diezmada y por eso necesitaba de todas las fuerzas disponibles. Por ello no es sorprendente si una de las primeras decisiones de sus gobernantes fue la de realizar, entre julio de 1945 y septiembre de 1946, una desmovilización masiva del Ejército Rojo, cuyos efectivos fueron reducidos desde once millones y medio a poco menos de tres millones. A lo largo de 1947 la Unión Soviética retiró sus tropas de Checoslovaquia, Yugoslavia y Bulgaria, mientras que las mantenía en Polonia, Hungría y Rumania; en 1948 también las tropas situadas en Corea fueron retiradas. Desde el punto de vista militar, pues, no representaba una amenaza y resulta de muchos testimonios que los más autorizados representantes de la política exterior norteamericana eran conscientes de ello y excluían la hipótesis de iniciativas militares agresivas por parte de la URSS (Leffler, 1994). Sin embargo, seguía tratándose de una gran potencia, gracias a la fuerza de atracción de sus orígenes revolucionarios y, sobre todo, al prestigio internacional que se había ganado durante la guerra. Lo atestiguan las victorias que los partidos comunistas cosecharon en las primeras elecciones de la posguerra, no sólo en Francia y en Italia, sino también en otros países europeos, como Suecia, Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda, donde superaron el nivel del 10 %, y en algunos países de Latinoamérica. Para sus miembros y sus simpatizantes, la Unión Soviética era el país de la Revolución de octubre y del socialismo, un símbolo y una esperanza. Pero ellos no eran los únicos en mirar con interés a la URSS: todos los que se habían volcado en la lucha antifascista y que se sentían agradecidos hacia la Unión Soviética por su papel en la segunda guerra mundial deseaban que la colaboración que se había producido durante la guerra entre las Naciones Unidas continuara y se desarrollara también en la tarea de defensa de la paz y de reconstrucción. Esta era la orientación mayoritaria de los partidos socialistas europeos y tales expectativas estaban presentes también en sectores de la propia opinión pública norteamericana. Pero estaba igualmente difundido el temor (o la pesadilla) de que la URSS estuviese trabajando para extender hacia Occidente su ya consolidada zona de influencia en Europa oriental, contando para ello con los partidos comunistas, a fin de exportar allí la revolución y así asegurarse el control de un área poderosa del mundo.

La realidad de la Unión Soviética estaba lejos de corresponder tanto a las esperanzas de los que miraban a ella como al país del socialismo como a los temores de los que en ella veían la amenaza inminente que quitaba el sueño a muchos europeos y norteamericanos. Se trataba de una realidad mucho más compleja y difícilmente descifrable.

Hay varios indicios y testimonios de que el fin de la guerra y la victoria había generado en varios estratos sociales –y en particular en la *intelligentsia*– unas expectativas y unas esperanzas en tiempos mejores. Pero pareja a

esta esperanza iba el temor de una recaída en los tiempos duros de los años treinta. Es imposible establecer cuál de estos dos estados de ánimo era el predominante, es más, es probable que ambos estuviesen presentes en cada ambiente e incluso en cada individuo. A los gobernantes les tocaba desatar este nudo, es decir, elegir entre la confianza en un pueblo que había soportado enormes sacrificios y hecho posible la victoria y que ahora se esperaba una recompensa en términos de mayor libertad y mayor bienestar, y la continuidad con un pasado de desconfianza y de sospecha. Desafortunadamente, esta última fue la opción elegida. En efecto, el poder de Stalin continuó manteniendo todo su carácter despótico. El Comité Central del partido se convocó una sola vez, en febrero de 1947, para debatir la cuestión de la agricultura; el primer Congreso de la posguerra, el XIX, se reunió en 1952, trece años después del XVIII, y sus trabajos se resolvieron en una glorificación del líder. Los campos de concentración continuaron existiendo e incluso su población se incrementó con los prisioneros de guerra sospechosos de haberse entregado al enemigo y con el cerca de millón y medio de personas pertenecientes a las minorías nacionales acusadas de haber colaborado con los alemanes: bálticos, alemanes de la región del Volga, tártaros de Crimea, ingushios y chechenos. La pena de muerte, abolida en 1947, volvió a ser instaurada en 1950. De 1948 es el turbio asunto de Leningrado, en el que se vio implicado también Nikolai Voznesensky, un joven y brillante economista que había desempeñado los cargos de vicepresidente del Consejo de ministros y responsable del *Gosplan*, fusilado en 1949. Es posible que la causa de su desgracia haya sido su toma de posición en favor de un incremento de las asignaciones para la industria de bienes de consumo.

En efecto, la reconstrucción se planteó y se llevó a cabo según los mismos criterios con los que se habían realizado los planes quinquenales antes de la guerra. Los resultados del cuarto plan quinquenal, estrenado en 1946, fueron imponentes por lo que respecta a la industria pesada, buena parte de la cual había sido trasladada, durante la guerra, a la región de los Urales y a Siberia para sustraerla a las destrucciones de los alemanes. Por contra, una vez más la producción de bienes de consumo resultó desfavorecida y la agricultura siguió siendo la cenicienta de la economía soviética, con la consecuencia de que el tren de vida de la población continuaba en el nivel de 1928, cuando no en el de antes de la primera guerra mundial.

Descifrar la trayectoria de un país tan complejo y de una realidad tan contradictoria no era una tarea fácil para los analistas políticos de la época y no lo es hoy para los estudiosos de historia. La documentación de la que disponemos acerca de la elaboración de la política exterior soviética durante la guerra e inmediatamente después está todavía muy incompleta, a pesar de los recientes hallazgos en los archivos. Por lo que respecta directamente a Stalin, su concepción de las relaciones internacionales –según resulta de su

escrito *Problemas económicos del socialismo*, de 1952, y de varias entrevistas que en estos años concedió a corresponsales extranjeros– no parece haber cambiado sustancialmente respecto de la de antes de la guerra y su concepción del papel de la URSS no se alejaba de la de tipo aislacionista de la anteguerra. De hecho, creía que también en el futuro las contradicciones internas del sistema capitalista generarían nuevas crisis y por consiguiente las guerras entre las grandes potencias imperialistas serían inevitables. Si estos eran los escenarios futuros, era interés de la Unión Soviética permanecer lo más posible apartada de los eventuales conflictos del futuro, a la espera de los acontecimientos. Su preocupación predominante seguía siendo, pues, la de su seguridad.

Sin embargo, dentro de esas coordenadas podían darse unas variantes en lo tocante a su traducción a la práctica y su puesta en marcha. Desde este punto de vista, es interesante analizar los documentos elaborados a lo largo de 1943 y 1944 por una comisión presidida por Maisky, quien había sido embajador en Londres, documentos encontrados y estudiados recientemente por el historiador ruso A.M. Filitov. La impresión general que se deduce de ellos es la de una visión del mundo vinculada a los viejos esquemas de la diplomacia prebélica. Dentro de esos límites, por otra parte, se puede observar una relativa flexibilidad y una igualmente relativa disponibilidad a colaborar con los aliados, y en especial con Inglaterra, sobre una serie de cuestiones. Por ejemplo, para el área balcánica, salvo Rumania, no se excluía la solución de sellar unos «pactos entre tres», es decir, entre Inglaterra, la Unión Soviética y el país interesado, una solución que volvía a proponer la «Locarno oriental» que había sido uno de los objetivos de la diplomacia soviética anterior a la guerra. Además, en el documento no había rastro del concepto de «exportación de la revolución»; la perspectiva de revoluciones socialistas en los países de la Europa occidental se aplazaba hasta un futuro tan remoto como improbable. El punto de vista de Maisky, como también el de Litvinov, el hombre que hasta 1938 había dirigido la política exterior soviética y había sido un ardiente defensor de la «seguridad colectiva» (ambos por entonces se encontraban desplazados a posiciones de segundo plano), no coincidía con los planteamientos del ministro de Exteriores Molotov y más aún con los de Stalin. Y tampoco se trataba de ideas que pudiesen configurar una alternativa poderosa a estos últimos. Ello no impide que, como veremos, las orientaciones soviéticas de la posguerra presenten variantes, incertidumbres e incluso contradicciones que se reflejaban en la conducta concreta de la política exterior.

Éste era –para retomar el hilo del discurso planteado al principio– el interlocutor con el que los Estados Unidos tenían que tratar, una gran potencia, desde luego, pero mucho menos segura de sí misma y de sus recursos que lo que dejaba suponer su imagen exterior, y por tanto difícilmente descifrable.

De todas formas, basándose en la consideración de los elementos y los datos expuestos hasta aquí, creo poder concluir que existían márgenes para la negociación. Nadie, ni al Oeste ni al Este, como se ha observado, «planificó la guerra fría» (Filitov, 1996).

Sin embargo, ésta se produjo y marcó todo un período de la historia contemporánea. La explicación de esta aparente anomalía sólo puede ofrecerla la reconstrucción de sus orígenes y su desarrollo, paso a paso.

21

La guerra fría

21.1. LA CUESTIÓN DE LA BOMBA

En el considerable contencioso entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la cuestión del monopolio atómico ocupaba obviamente un lugar destacado. A decir verdad, la bomba atómica todavía no representaba la amenaza apocalíptica de la que ya por entonces se hablaba en la prensa. Todavía a principios de 1947, en efecto, los Estados Unidos disponían sólo de catorce artefactos nucleares y no estaban en posesión de mapas puestos al día sobre la situación de los objetivos estratégicos soviéticos. Además, quedaba por demostrar que la bomba atómica pudiese ser un arma resolutiva en caso de un nuevo conflicto. De ello dudaban tanto los militares como algunos científicos, entre ellos el británico P.M.S. Blackett. El *Enola Gay* –argumentaban– no hubiese podido alcanzar su blanco si la aviación japonesa hubiera estado en condiciones de interceptarlo, y los efectos del bombardeo de Hiroshima no habrían sido superiores a los del bombardeo de Tokio efectuado pocas semanas antes con bombas convencionales. Pero algunos se daban cuenta de que el descubrimiento de la escisión del átomo a la larga modificaría la naturaleza misma de la guerra y abriría escenarios apocalípticos. De ello eran conscientes la mayoría de los científicos y en particular los colaboradores del *Atomic Scientists Bullettin*, un organismo creado especialmente para sensibilizar a la opinión pública. Por su parte, Albert Einstein, quien en 1939 había firmado la carta al presidente Roosevelt para pedirle que impulsara un programa de investigaciones sobre la escisión del átomo, defendía ahora la constitución de un «gobierno mundial», como único garante posible de la paz universal. Como veremos, también muchos responsables políticos se percatarían de los riesgos que entrañaba la construcción del arma atómica.

En la conferencia de los ministros de Exteriores que tuvo lugar en Moscú en diciembre de 1945, los representantes soviéticos se declararon favorables a la propuesta norteamericana de constituir una comisión, bajo la égida de la ONU, que se estrenó en enero de 1946. Ante esta comisión los Estados Unidos presentaron un plan, elaborado por David Lilienthal y por el viceministro del Departamento de Estado, Dean Acheson, y revisado por el financiero Bernard Baruch, con cuyo nombre se conoce dicho plan. El plan preveía la constitución de una Autoridad que, siempre bajo la égida de la ONU, debería inventariar todos los recursos de uranio y materiales físiles existentes en el mundo, y controlar, mediante inspecciones *in loco* que cada país utilizase dichos recursos sólo con fines pacíficos y sancionar las eventuales infracciones. En el momento en que este complejo organismo empezara a funcionar, los países que ya disponían de la bomba tendrían que proceder a la destrucción de sus reservas de artefactos nucleares. Finalmente, una cláusula introducida por Baruch en el texto originario del plan preveía que, en caso de que surgieran controversias en el seno de la comisión, quedaba excluido el recurso al derecho de veto. Ello implicaba que, de aprobarse el plan tal y como estaba planteado, los países que ya poseían la bomba mantendrían su monopolio durante un tiempo indefinido, mientras que los estados que, como la URSS, todavía estaban empeñados en la investigación y la experimentación se encontrarían obligatoriamente sometidos a los controles de la Agencia y de hecho tendrían que renunciar a sus programas de armamento. Se trataba de una condición a la que los soviéticos, que ya habían comenzado los experimentos para la construcción de la bomba, no querían en absoluto someterse. Por lo tanto, la delegación soviética, por boca de Andrei Gromyko, rechazó el plan de Baruch y lanzó la propuesta de destruir las bombas existentes y prohibir el arma atómica, una propuesta que era evidentemente inaceptable para los norteamericanos.

A perjudicar las esperanzas que aún se mantenían de un acuerdo contribuyeron también el experimento efectuado por los Estados Unidos en julio de 1946 en el islote de Bikini, en el que además estuvieron presentes observadores soviéticos, y el *Mac Mahon Act*, de agosto de 1946, con el que los Estados Unidos suspendieron cualquier intercambio de información sobre asuntos nucleares con los países extranjeros, incluida la propia Inglaterra. Todo esto fue percibido en Moscú como la prueba de que los Estados Unidos no sólo estaban decididos a mantener el monopolio del arma atómica, sino que no renunciaban a proseguir con la experimentación de artefactos más potentes y sofisticados. Se determinaba así una situación de estancamiento que duraría mucho tiempo y las discusiones sobre el desarme pasaban a ocupar muchas e inútiles sesiones de la Asamblea de la ONU. Pero mientras tanto la situación fue cambiando. El 20 de diciembre de 1946 el primer reactor atómico experimental soviético alcanzó su fase crítica y a partir de en-

tonces la investigación y la experimentación procedieron de forma acelerada hasta que, en junio de 1948, entró en funcionamiento el primer reactor no experimental. Ello permitió al ministro de exteriores soviético, Molotov, declarar públicamente, todavía en noviembre de 1947, que la bomba atómica ya no era un secreto. No pasaría mucho tiempo hasta que, como veremos, la URSS efectuara su primer test atómico en la atmósfera. Así, estaban sentadas las bases para la reanudación de la carrera armamentística, lo que no dejaría de repercutir en el conjunto de las relaciones internacionales.

Por otra parte, es evidente que esta carrera armamentística no era la causa, sino el efecto de la confrontación en la que estaban sumidas las dos grandes potencias, confrontación que, como nos aprestamos a ver, si irá extendiendo a todo el planeta. El área que ambas partes daban muestras de considerar decisiva continuaba siendo la vieja Europa, y de hecho fue allí donde prendieron las primeras chispas de la guerra fría.

21.2. PRIMEROS SÍNTOMAS EUROPEOS DE LA GUERRA FRÍA

La solución de las cuestiones relativas a Europa que había quedado en suspenso en la conferencia de Potsdam, había sido trasladada al consejo de los ministros de Exteriores de las potencias vencedoras. Éste se reunió por primera vez en Londres el 13 de septiembre de 1945 y sus sesiones se prolongaron hasta el 2 de octubre. El centro de la discusión eran los tratados de paz con los antiguos estados enemigos, y en particular con Italia, con la que los aliados se habían comprometido en varias ocasiones a garantizarle un tratado que no la castigara. Además, los occidentales plantearon la cuestión de la injerencia soviética en Rumania y Bulgaria, cuyos gobiernos ellos se negaban a reconocer. La conferencia terminó sin medidas concretas. El siguiente encuentro de los ministros de Exteriores tuvo lugar en Moscú en diciembre y resultó menos decepcionante que el celebrado en Londres. En efecto, lograron ponerse de acuerdo no sólo, como ya hemos dicho, sobre la constitución de una comisión de Naciones Unidas para la energía nuclear, sino también sobre los procedimientos y la fecha de una conferencia para debatir acerca de los tratados de paz con los países ex enemigos. Además, los soviéticos aceptaron hacer alguna que otra concesión sobre el asunto de la composición de los gobiernos búlgaro y rumano. Este último fue reconocido, en febrero de 1946, por Estados Unidos e Inglaterra.

En las posteriores reuniones de los ministros de Exteriores, en abril y en junio-julio, los acuerdos alcanzados en Moscú fueron perfeccionados y el 29 de julio de 1946 la conferencia de paz pudo por fin inaugurarse en París, con la participación de veintiuna naciones. El tratado más laborioso fue el

que se estipuló con Italia. La cuestión más espinosa, la relativa a la frontera oriental, fue solucionada trazando una línea fronteriza que dejaba para Italia la ciudad de Gorizia y proseguía a lo largo de la península istriana, dejando en la parte asignada a Yugoslavia a la minoría italiana que se había quedado allí tras la ocupación de Tito y a minorías eslovenas en la parte italiana. En cuanto a Trieste y a su provincia, que Tito, apoyado por la URSS, no había cesado de reivindicar, fueron organizados como territorio libre regido por un gobernador designado por la ONU. En cambio, Italia conservó la región de Alto Adigio, con el compromiso –que será cumplido gracias a los acuerdos entre De Gasperi y Gruber en 1946– de concederle una amplia autonomía, mientras que sus fronteras occidentales sufrieron pequeños retoques en favor de Francia y el archipiélago de Dodecaneso fue asignado a Grecia. Finalmente, Italia tuvo que hacerse cargo del pago de reparaciones por valor de 360.000 dólares y aceptar una limitación de sus fuerzas armadas. En cuanto a sus colonias, la cuestión fue sometida a la ONU, que en 1950 confiará a Italia un mandato sobre Somalia de diez años de duración, mientras que Libia, sobre la que en la conferencia de Londres la URSS había propuesto que se le concediera un mandato, obtuvo la independencia.

Por lo que respecta a los demás estados ex enemigos, Hungría tuvo que ceder Transilvania a Rumania, al tiempo que ésta cedía a la Unión Soviética Besarabia, Bucovina y Rutenia subcarpática, que a su vez ya había pertenecido a Checoslovaquia; Bulgaria mantuvo la posesión de Dobrugia, mientras que Finlandia tuvo que ceder a la URSS Carelia y la región de Petsamo. En su conjunto, el mapa político de Europa sufrió modificaciones menores que las que se produjeron tras la primera guerra mundial.

Pero quedaba abierto el problema más delicado, el de Alemania. A pesar de que en Potsdam se confirmó la decisión de considerar al país como una unidad económica, cada una de las potencias ocupantes gobernaba y administraba la zona que le correspondía de forma autónoma y con independencia de lo que se hacía en las demás. Es evidente que ello representaba un gran obstáculo para la reactivación económica del país. La única forma de cooperación entre las potencias ocupantes fue la realizada a raíz del proceso de Nuremberg contra los criminales de guerra nazis, que concluyó en octubre de 1946 con la condena a muerte o a largas detenciones de la mayor parte de los acusados.

Por consiguiente, y a diferencia de los otros países de Europa occidental y oriental, a finales de 1947 la producción industrial de Alemania, tanto en el oeste como en el este, no registró sino escasos avances y el nivel de consumo de la población, que había tenido que absorber a once millones de refugiados, quedó en el límite de supervivencia. Se determinaba así una situación gravosa y que no podría seguir durante mucho tiempo; de ello todos se daban cuenta, pero nadie parecía tener propuestas claras. El dilema principal era el de la división del país y el mantenimiento de su unidad. A este

propósito, los que parecían tener las ideas más claras eran los ingleses, orientados hacia una división «vertical» del país que asegurara a los occidentales el control de las regiones más industrializadas. También el general De Gaulle, en un discurso de 1944, había mencionado la posibilidad de una división. Lo más importante para la diplomacia francesa era asegurarse el control de una parte de Renania y del Sarre o, subordinadamente, obtener la internacionalización del Ruhr. Pero era evidente que el papel decisivo tocaría a las dos mayores potencias de la coalición, Estados Unidos y la URSS. Según el testimonio de Gilas, Stalin se había pronunciado por una Alemania unida, pero a condición de que se tratase de una Alemania comunista; en cambio, de las anotaciones redactadas por el representante comunista alemán Wilhelm Pieck acerca de sus conversaciones con Stalin, resulta que el dictador soviético se expresó repetidas veces en favor de la solución de una Alemania unificada, desnazificada y neutralizada, en forma no de «democracia popular» sino de «república democratico-parlamentaria». Es posible que uno de esos dos testimonios no tuviese fundamento, pero también lo es que ambos eran ciertos, lo que equivale a decir que en Moscú no se tenían ideas claras sobre el futuro de Alemania. Sea como fuere, si la solución preferida era la que resulta de las anotaciones de Pieck, su credibilidad se ve seriamente comprometida por la forma sistemática con la que las autoridades soviéticas practicaban, en concepto de reparaciones, el desmantelamiento de todo lo que fuese transportable. La unificación entre el partido socialista y el comunista, realizada en abril 1946 no sin el consentimiento soviético, fue considerada por muchos, especialmente por los socialdemócratas de Alemania occidental y su líder Kurt Schumacher, como una señal alarmante.

Por parte norteamericana, un intento de solucionar la cuestión alemana fue el plan que el secretario de estado James Byrnes presentó en febrero de 1946. En él se preveía que la firma de un tratado de paz con una Alemania unida se acompañara con un «tratado de garantía» entre las cuatro potencias ocupantes con el fin de prevenir la posible reconversión bélica de la industria y, más en general, de ejercer una acción de control y de vigilancia. A este respecto, se proponía que los contingentes militares en territorio alemán fuesen limitados. Finalmente, las decisiones que se derivaban del pacto de garantía se tendrían que tomar no por unanimidad, sino por mayoría. La respuesta soviética a estas propuestas buscó fundamentalmente un aplazamiento de la decisión. Así, la cuestión alemana continuaba siendo una llaga abierta en el corazón de Europa.

21.3. LA DOCTRINA TRUMAN

Hacia mediados de 1946 las relaciones entre los vencedores de la segunda guerra mundial parecían, pues, desgastadas, pero no definitivamente com-

prometidas. Los tratados de paz con los países derrotados habían sido suscritos, excepto con Alemania, y sus gobiernos habían sido reconocidos. En Checoslovaquia y en Hungría aún permanecían gobiernos escogidos de libres elecciones y en Francia e Italia, aun manteniendo sus reservas ideológicas y sus esperanzas revolucionarias, los partidos comunistas colaboraban de hecho en las tareas de gobierno. El secretario del Partido Comunista Francés, Maurice Thorez, bajó a una mina para decir a sus trabajadores que era preciso «saber poner fin a una huelga» y en Italia el PCI votó a favor de la inserción en la Constitución de una mención de los acuerdos Lateranenses que desde 1929 regulaban las relaciones entre el estado italiano y la Iglesia y se abstuvo en el voto de ratificación del tratado de paz, al que, en cambio, la derecha se oponía. En mayo, la URSS retiraba de Irán su contingente de ocupación, que residía allí desde 1941, a consecuencia de un acuerdo con ingleses y norteamericanos, renunciando así a apoyar el movimiento separatista que se había desarrollado en la zona septentrional del país y poniendo fin a una controversia con los norteamericanos que se arrastraba desde hacía tiempo y en los últimos tiempos se había recrudecido.

Pero un «cambio sustancial» (Di Nolfo, 1994) se iba perfilando en la opinión pública y en los círculos dirigentes norteamericanos. La primera sensación de dicho cambio se tuvo cuando la actuación del secretario de estado Byrnes en la conferencia de los ministros de Exteriores de 1945 en Moscú, fue criticada públicamente por el presidente Truman, por haber sido demasiado conciliadora con los soviéticos. A consecuencia de ello, en abril Byrnes reseñó su dimisión mediante una carta dirigida a Truman con la salvedad de que ésta se haría efectiva sólo después de la conclusión de la conferencia de paz. Su sucesor, el general Marshall, estaba ya designado y asumirá el cargo en enero de 1947. Una señal todavía más clamorosa fue el discurso que Winston Churchill pronunció en Fulton en presencia de Truman, que pasó a la historia como el discurso del «telón de acero» y que concluyó con el llamamiento a la prueba de fuerza, la única virtud –en su opinión– que los soviéticos respetaban. En el mismo período llegó a Washington un telegrama de dieciocho mil palabras firmado por el encargado de negocios norteamericano en Moscú, George Kennan, cuyo texto publicó en julio de 1947 la revista *Foreign Affairs* con la firma de *Mister X*. Partiendo de la premisa de que los Estados Unidos se estaban enfrentando a «una fuerza política fanáticamente agarrada al convencimiento de que con los Estados Unidos no se puede llegar a ningún *modus vivendi* permanente y que es deseable y necesario que la armonía interna de nuestra sociedad sea aniquilada y que nuestro estilo de vida (*way of life*) tradicional sea destruido», Kennan, pese a excluir la posibilidad de una iniciativa militar soviética hacia occidente, negaba asimismo la posibilidad de una cooperación y de un compromiso y por tanto recomendaba una política de «contención» dirigida

principalmente a prevenir cualquier subversión comunista en las áreas fuertes del mundo, es decir, Inglaterra, Japón y Europa central y occidental. Kennan se declaraba convencido de que el tiempo trabajaría a favor de las naciones democráticas y en detrimento del imperio soviético, cuyas contradicciones internas no cesarían de acentuarse. El autor del «largo telegrama» debía su confianza a la lectura de la obra del gran historiador Gibbon sobre la decadencia y la caída del Imperio romano. A la luz de los acontecimientos de 1989, este «largo telegrama» puede incluso parecer algo así como una profecía, pero si se coloca en su contexto, fue una pieza más en los orígenes de la guerra fría.

Las consecuencias de este endurecimiento de las coordenadas de la política exterior norteamericana no tardaron en manifestarse. Durante la primavera y el verano de 1947 fue tomando cuerpo, por impulso del general Lucius Clay, comandante de las tropas norteamericanas en Alemania, y del ministro de Exteriores inglés Bevin, un plan para la fusión de las zonas de ocupación inglesa y norteamericana. El secretario de estado Byrnes fue más allá y, en un discurso pronunciado en Stuttgart el 5 de septiembre, no sólo declaró que «el gobierno norteamericano quiere restituir el gobierno de Alemania al pueblo alemán», sino que volvió a plantear la cuestión de las fronteras occidentales de Polonia a lo largo de los ríos Oder y Neisse, que en la conferencia de Potsdam habían sido tácitamente aceptadas por los aliados occidentales. Se trataba de una rectificación considerable de las anteriores posiciones norteamericanas y así lo notó el secretario de comercio de la administración de Truman, Henry A. Wallace, que se había decantado por una línea más conciliadora para con la URSS y que, al ser desautorizado por su presidente, dimitió. En diciembre la «doble zona» estaba hecha y a ella se sumó más tarde, en marzo de 1948, también Francia. Una nueva sesión de la conferencia de los ministros de Exteriores tuvo lugar en Moscú en marzo de 1947 para debatir, entre otros, el tema de Alemania, pero no llegó a ningún resultado concreto. De las dos alternativas posibles, la unitaria y la de la división, la segunda ya parecía la más probable, cuando no la ya decidida.

Si Alemania seguía siendo la manzana de la discordia por antonomasia, fricciones y tensiones se manifestaban también en otras áreas y especialmente en la cuenca del Mediterráneo. Hacía tiempo, en efecto, que la Unión Soviética ejercía presiones sobre Turquía, reivindicando la restitución de los distritos de Kars y Ardahan y pidiendo la modificación a su favor de la convención de los Estrechos, firmada en Montreux en 1936. Mientras, en Grecia se había recrudecido la guerra civil entre los partisanos comunistas apoyados por la Yugoslavia de Tito (pero no por la URSS) y las fuerzas gubernamentales. Hasta entonces el gobierno griego había estado amparándose en la presencia de las fuerzas de ocupación británicas, pero, como ya se ha visto, en febrero el gobierno de Londres había decidido su retirada. El 12 de marzo de 1947, hablando ante el Congreso, el presidente Truman pidió la asignación

de cuatrocientos millones de dólares los gobiernos griego y turco para que se pusiesen en condiciones, respectivamente, de hacer frente a la guerrilla comunista y defender su integridad territorial. Por otra parte, el presidente no se limitó a esto: en su discurso enunció también un principio general, es decir, el compromiso de los Estados Unidos de defender a «los pueblos libres del mundo» de las amenazas y agresiones del «totalitarismo». Con la que ha pasado a la historia como la «doctrina Truman» se introducía en la guerra fría –como ya había comenzado a llamarse corrientemente esa situación de estancamiento y de tensión en las relaciones entre Estados Unidos y la URSS– un elemento ideológico que convertía el contraste entre las dos grandes potencias en un enfrentamiento entre dos concepciones del mundo opuestas e irreconciliables.

21.4. EL PLAN MARSHALL Y LA CONSTITUCIÓN DEL COMINFORM

Todas las iniciativas de Estados Unidos mencionadas hasta aquí –la doctrina de la «contención», la creación de la «doble zona» y la misma «doctrina Truman»– se pueden considerar como escaramuzas en un conflicto que se estaba produciendo en varios frentes o como reacciones contra el cada vez más evidente apretón de tuercas que los soviéticos llevaban a cabo inexorablemente en los países de la Europa oriental y especialmente en Polonia, donde en enero unas elecciones manipuladas habían otorgado el 90% de los votos al bloque demócrata controlado por los comunistas. Otras señales de endurecimiento se sucedieron entre la primavera y el verano de 1947: el proceso y la ejecución del líder del Partido Agrario Petkov en Bulgaria; la condena a cadena perpetua del jefe del Partido Nacional Campesino Juliu Maniu en Rumania; mientras que en Polonia, el ex vice primer ministro Mikolaiczik tomaba el camino del exilio.

Cualquier jugador de ajedrez sabe que los movimientos de la apertura son obligatorios y que la verdadera partida comienza cuando uno de los jugadores toma la iniciativa con una jugada dirigida a mejorar su posición y planear el ataque. Sabe también que cuanto más imprevista e imprevisible es esta jugada tanto más dificulta la posición de su adversario. Ahora bien, podemos decir que en el punto en que nos encontramos, todavía estamos en la apertura. Sin duda la doctrina Truman representaba una enfatización del contencioso en curso, pero se limitaba a trasladar al terreno de la diplomacia lo que desde hacía tiempo se estaba produciendo en el de la propaganda. La auténtica jugada de ataque todavía estaba por producirse y fue la del plan Marshall.

Este plan del que el nuevo secretario de estado expuso las líneas generales en el discurso que pronunció en la Universidad de Harvard el 5 de junio de 1947, preveía el compromiso de los Estados Unidos para sostener y fi-

nanciar «un proyecto común, fruto de un acuerdo, si no de todos, al menos de un cierto número de estados europeos». El plan había sido elaborado por un equipo de «internacionalistas» convencidos que se habían formado en los años y en la atmósfera del *New Deal* rooseveltiano, y como tal representaba una iniciativa que, por su novedad y su carácter positivo era una auténtica innovación intelectual. Se diferenciaba de los planes elaborados antes de la guerra por Dawes y por Young no sólo por implicar a una multitud de países, sino sobre todo por ser un «programa» y no una simple ayuda financiera: se trataba, en suma, de un salto de calidad, que, como tal, cogía desprevenida a la flemática diplomacia soviética.

El embarazo de ésta resulta evidente por lo contradictorio de sus reacciones. En un primer momento, Molotov parecía interesado en la propuesta norteamericana. Ya en vísperas de Yalta, había pedido a Estados Unidos un préstamo considerable, petición que, aunque reiterada repetidas veces, no había sido satisfecha a causa de las desconfianzas y las resistencias de la administración de Truman. Tal vez Molotov tuviese presente este precedente, pero cuando en el encuentro que celebró en París con sus colegas francés e inglés se dio cuenta de que el plan en discusión suponía una concertación entre los estados interesados en él y, en consecuencia, alguna forma de control y de gestión por parte de organismos especiales en los que el país que concedía las ayudas tendría un papel relevante o, por decirlo claramente, alguna forma de limitación de la soberanía de los estados beneficiarios, no tardó ni dudó en manifestar sus dudas. Así, mientras que Bevin y Bidault se declararon favorables a aceptar la idea de un plan común, Molotov defendió la tesis de acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y cada país europeo. Tras constatar su desacuerdo con sus interlocutores inglés y francés, Molotov abandonó la reunión, no sin haber antes denunciado el designio de «colonización» (*zakabalenie*) contenido en el plan Marshall. Así las cosas, Bevin y Bidault tomaron la decisión de convocar para el 12 de julio una conferencia a la que fueron invitados todos los países europeos. Entre los que aceptaron la invitación se encontraba también Checoslovaquia, que el 4 de julio comunicó su participación. Al día siguiente, Molotov enviaba a todos los líderes de los partidos comunistas de Europa oriental un telegrama en el que les pedía que participaran en la conferencia con el fin de denunciar el «plan anglo-francés» y que intentaran que otros países se sumaran a esta denuncia y se resolvieran a abandonar la conferencia junto con ellos. Pero pocas horas después llegó la contraorden y el 9 de julio Stalin en persona instaba abiertamente a Benes y Gottwald, que habían acudido a Moscú para hablar del asunto, que no participaran en la conferencia de París.

La explicación de este comportamiento contradictorio y de esta brusca marcha atrás –como resulta de recientes investigaciones– cabe buscarla principalmente en la preocupación y en el temor de Moscú ante la eventua-

lidad de que los países de Europa oriental viesen en el plan Marshall una ocasión para acelerar la labor de reconstrucción en la que estaban empeñados, reanimar sus economías y aflojar así los vínculos que tenían con la URSS. En efecto, no sólo en Checoslovaquia, sino también en Polonia y en otros países de Europa oriental, la propuesta norteamericana había despertado interés. También los grandes partidos comunistas de Europa occidental, como el italiano, el francés y el finlandés, se habían mostrado dispuestos a aceptar las ayudas norteamericanas. La negativa de Moscú, pues significaba una llamada al orden y no hubo que esperar mucho tiempo para que esto se hiciese explícito.

El 21 de septiembre se reunían en Szklarska Poreba, en Polonia, los representantes de todos los partidos comunistas de Europa oriental y de los partidos comunistas italiano y francés. La conferencia, de la que se hablaba desde hacía tiempo, debía limitarse, según lo acordado, a un intercambio de informaciones entre los participantes y así fue en su primera parte, cuando se debatió un informe de Malenkov. Pero esta primera sesión fue seguida por otra, no prevista en el orden del día establecido anteriormente, que se abrió con una exposición de Zhdanov sobre la situación internacional. Su *Leitmotiv* era la llamada teoría de la división del mundo en «dos campos», el del imperialismo, encabezado por Estados Unidos, y el del socialismo, liderado por la URSS. Si esta era la realidad ya consolidada, cada Partido Comunista debía tomar nota de ello y sacar sus conclusiones. Partiendo de esas premisas, Zhdanov criticaba abiertamente, por su oportunismo, las posiciones de los partidos francés e italiano porque no habían reaccionado con suficiente energía ante el hecho de haber sido apartados de los gobiernos de coalición de los que formaban parte. Otros participantes en el debate le hicieron eco y entre ellos destacó, por la contundencia de sus palabras el delegado yugoslavo Kardely, que llegó a reprochar a los comunistas italianos el no haber seguido el ejemplo de sus compañeros griegos, que estaban en guerra civil. Con estos precedentes, la decisión de la conferencia de dar vida a un organismo permanente de conexión entre los partidos comunistas que habían participado en ella –el Cominform– sonaba, como se ha dicho, como un llamamiento al orden y a la obediencia hacia la casa madre. En su informe, Zhdanov se refirió con frecuencia al plan Marshall, calificándolo de instrumento de la política y del programa imperialista de los Estados Unidos y llegando a establecer una comparación entre la política de Hitler y la actual de Estados Unidos. A este propósito, merece la pena observar que en la primera redacción de su análisis, el juicio sobre el plan Marshall aparecía como más matizado –se le comparaba con el plan de Dawes y se preveía su fracaso– y además no había en ella referencias a la teoría de los dos campos. Así, tenemos otra confirmación de las incertidumbres y las oscilaciones que caracterizaron la postura soviética ante la iniciativa norteamericana. Pero, al

final, la línea del endurecimiento había prevalecido. Entre las varias opciones que se presentaban a la política exterior soviética inmediatamente después de la guerra había acabado imponiéndose, pues, su tradicional talante aislacionista. A Maxim Litvinov no le quedaba más remedio que tomar tristemente nota de ello; en una entrevista de junio de 1946, hecha pública sólo después de su muerte, observaba que «en Rusia se ha producido un retorno a la ya superada concepción que mide la seguridad en términos de territorio». En una entrevista confidencial con Alexander Werth, en febrero de 1947, fue todavía más lejos: «Al final de la guerra, Rusia podía elegir entre dos políticas distintas: una consistía en aprovechar la benevolencia que se había ganado durante la guerra en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Pero ellos (evidentemente, Stalin y Molotov), por desgracia, habían elegido la otra política. Al no tener confianza en que la benevolencia pudiese constituir una base duradera para cualquier política, habían decidido que la seguridad era lo que más importaba y por tanto se habían llevado todo lo que podían, es decir, toda la Europa oriental y parte de la central».

Mientras tanto, la conferencia de París, en la que participaron quince países de Europa occidental más Turquía, y ninguno de Europa oriental, había concluido el 22 de septiembre con la aprobación de un documento final, en el que los países europeos aceptaban el principio de la coordinación y la cooperación en el ámbito del plan, y se comprometían a favorecer la convertibilidad de las respectivas monedas. El proceso de integración europea, que, como veremos, se irá desarrollando durante los años y las décadas siguientes, tiene, pues, en el plan Marshall su punto de partida. En abril de 1948, el Congreso dio el visto bueno al EREP (*European Recovery Program*), asignando para el primer año la cifra de 4.300 millones de dólares.

Si el objetivo del plan Marshall hubiese sido el de sustraer a los países satélites de la tutela soviética, entonces se debería concluir que fue un fracaso. En realidad, tal y como resulta de los documentos de preparación del plan, ese resultado negativo había sido previsto e incluso se daba por descontado. Por lo tanto, si por un lado es cierto que el plan Marshall formaba parte de la doctrina de la «contención» y de la doctrina Truman, por otro lado también es cierto que no se limitaba a esto. En efecto, el plan constituía la demostración de que las orientaciones generales contenidas en las dos doctrinas eran compatibles con iniciativas políticas audaces y dinámicas y que los Estados Unidos no sólo eran una gran potencia militar y económica, sino también una nación en condiciones de asumir los costes y las responsabilidades de la que ha sido definida como «una hegemonía consensuada» (Maier, 1994), un país, en definitiva, capaz de tener en cuenta los intereses y la dignidad de sus socios.

Por contra, la imagen de la URSS aparecía, a los ojos de la gran mayoría de los europeos, como la de un país recluido en su zona de influencia, impermeable –por utilizar un término de Zhdanov– a cualquier forma de

«cosmopolitismo». Fue en virtud de este peculiar concepto que, en el verano de 1947, se cerró el Instituto para la Economía Mundial, dirigido por Varga, al que se acusaba de haber teorizado que la crisis del capitalismo no era inevitable; y fue en virtud de este concepto que la poetisa Anna Ajmatova y otros escritores fueron objeto de la execración pública y, por contra, se exaltaron las absurdas teorías genéticas de Lisenko y se atribuyeron a científicos rusos los más importantes descubrimientos en el campo de la ciencia y de la tecnología.

A la luz de estos acontecimientos y como conclusión de la reconstrucción que se ha llevado a cabo de los eventos del año de 1947 no cabe duda, pues, de que las ventajas que los Estados Unidos obtuvieron del plan Marshall fueron harto mayores que sus costes económicos, a pesar de la importancia de éstos. La primera prueba de ello se dio en Italia, donde las elecciones del 18 de abril, dos semanas después de la aprobación del plan por parte del Congreso, vieron el triunfo rotundo de la Democracia Cristiana y la derrota de los partidos de la izquierda, que pocos meses antes habían sido apartados del gobierno. Dos años después, los democristianos conquistaban la mayoría absoluta también en el Parlamento belga y en 1951 los conservadores volvían al gobierno en Inglaterra. Finalmente, en las elecciones de septiembre de 1953, la CDU alemana y su apéndice bávaro obtenían la mayoría simple, mejorando sensiblemente, en detrimento de los socialdemócratas, el resultado obtenido en las elecciones de agosto de 1949. Esta fase de la guerra fría terminaba, así, con una clara victoria norteamericana.

22

Del bloqueo de Berlín a la guerra de Corea

22.1. EL BLOQUEO DE BERLÍN

En marzo de 1947 los ministros de Exteriores inglés y francés se encontraron en Dunquerque para suscribir un pacto que preveía el compromiso a apoyarse mutuamente en caso de iniciativas agresivas por parte de otros estados. Un año después, en marzo de 1948, el pacto de Dunquerque fue ampliado a los países de Benelux. Nació así el pacto de Bruselas, que luego será denominado Unión Occidental. En el contexto y en el clima caracterizado por el deterioro de la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, era evidente que la amenaza de la que esas iniciativas querían precaverse no era, como se afirmaba públicamente, la de un improbable revanchismo alemán, sino más bien la de un supuesto expansionismo soviético. El desarrollo de los acontecimientos confirmó y corroboró esos temores.

Hacia finales de 1947 los únicos estados de Europa oriental regidos por gobiernos elegidos regularmente eran Hungría y Checoslovaquia. En Hungría las elecciones de 1947 significaron la victoria de la coalición del Frente Nacional, impulsada por los comunistas. Dentro de esta coalición, estos últimos, por otra parte, seguían siendo minoritarios y fue sólo gracias al apoyo de las autoridades militares soviéticas que pudieron asegurarse el monopolio del poder, expulsando poco a poco de las posiciones de gobierno a los representantes del Partido Campesino (el último fue el presidente de la república Tildy, que tuvo que dejar el cargo en julio de 1948) y aplicando la fórmula, ya experimentada en Alemania oriental, de favorecer la fusión entre Partido Comunista y partido socialista, que prácticamente acababa en la anexión del segundo al primero. Esto se produjo por etapas sucesivas, a lo largo de 1948, también en Rumania, en Hungría, en Checoslovaquia y finalmente en Polonia.

En Checoslovaquia, tomando como pretexto el cese del ministro de Interior, que pertenecía a su partido, los comunistas dieron vida, en febrero de 1948, a manifestaciones populares que obligaron a dimitir a los ministros no comunistas e impusieron al presidente Benes la formación de un gobierno en el que ellos confiaban. El suicidio, en circunstancias misteriosas, del ministro de Exteriores Jan Masaryk, hijo de uno de los padres de la patria de la nación checa, contribuyó a arrojar una luz siniestra sobre estos acontecimientos. El único estado de Europa oriental que opuso resistencia a la normalización en curso fue Yugoslavia, pero el precio que tuvo que pagar por su valentía fue alto; en junio de 1948, una segunda conferencia del Cominform, convocada precisamente para este fin, decretó la expulsión de Yugoslavia y la consiguiente ruptura de sus relaciones con la Unión Soviética. Las motivaciones de esta condena eran tan ficticias que rozan lo absurdo, pero los contrastes entre los dos partidos y los dos países eran reales. En efecto, acerca de una serie de cuestiones –las relaciones económicas entre los dos países y el papel de las «sociedades mixtas», el apoyo a la guerrilla de los comunistas griegos, la constitución de una federación balcánica y la reivindicación yugoslava de Trieste– se habían ido enquistando divergencias no fáciles de subsanar e incompatibles con el reconocimiento del «estado guía» que la primera conferencia de la Cominform había otorgado a la URSS. Los yugoslavos, que habían sido su defensores más encendidos, sufrían ahora el castigo del contrapaso. El telón de acero del que había hablado Churchill en su discurso de febrero de 1948, realmente atravesaba y dividía Europa.

La impresión que los sucesos de febrero de 1948 en Praga suscitaron en Occidente fue fuerte y con seguridad contribuyó a acelerar el desarrollo posterior de los acontecimientos y a replantear la cuestión alemana. En noviembre de 1947, en un enésimo encuentro, el ministro de Exteriores había vuelto a hablar del tema sin llegar a ningún acuerdo. Sucesivamente, a principios de marzo, cuando todavía estaba viva la impresión por los recientes acontecimientos de Praga, se reunió en Londres una conferencia con la participación de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y los países de Benelux, cuyas sesiones terminaron el 6 de marzo con una declaración que manifestaba la disponibilidad de las potencias participantes a «asegurar la reconstrucción económica de la Europa occidental incluida Alemania y establecer una base para la participación de Alemania democrática en la comunidad de los pueblos libres». Para mayor claridad, en junio se celebró una segunda conferencia, que también tuvo lugar en Londres, cuyos trabajos concluyeron con la aprobación de un documento que ampliaba a las tres zonas de ocupación aliada los beneficios del plan Marshall, auspiciaba la convocatoria de una asamblea constituyente (que posteriormente se llamará Consejo Parlamentario) encargada de elaborar la Constitución de la República Federal y, aceptando las propuestas de Francia, creaba una Autoridad internacional para el

control del Ruhr, que, por otra parte, seguiría formando parte de Alemania. Dos semanas después, el 18 de junio, se promulgaba una reforma monetaria con la emisión de un único marco para las zonas de ocupación occidentales, aboliendo así la convertibilidad sobre bases de paridad del marco emitido por las autoridades soviéticas. El principal objetivo de la reforma y de su animador, el liberal Ludwig Ehrard, consistía en frenar la inflación y poder crear las condiciones para la recuperación económica alemana. Como veremos, dicho objetivo será alcanzado plenamente. La respuesta soviética no se hizo esperar y se llevó a cabo mediante el bloqueo de las vías de acceso a la ex capital, bloqueo que se inició el 23 de junio. Berlín se encontraba, en efecto, dentro de la zona de ocupación soviética y a su vez estaba dividida en cuatro sectores de ocupación. Con todo, el abastecimiento de la ciudad fue asegurado gracias a un gigantesco puente aéreo, haciendo así ineficaces las medidas tomadas por los soviéticos. Pocos días antes del bloqueo de Berlín, el 11 de junio, el Senado de Estados Unidos había aprobado una resolución presentada por el senador republicano Vandenbergh, que declaraba la disposición norteamericana para asociarse a aquellos acuerdos «regionales o colectivos» –el pacto de Bruselas– que concernieran a la seguridad de los Estados Unidos. Así, tomaba cuerpo la idea de una alianza que implicara a todos los países situados a orillas del Atlántico norte, del Portugal de Salazar hasta la socialdemócrata Noruega y, naturalmente, Estados Unidos y Canadá. En un segundo momento, principalmente por insistencia de Francia, la invitación fue dirigida también a Italia, que se sumó con un voto del Parlamento al que no se asociaron los partidos de la izquierda. La firma del Pacto Atlántico tuvo lugar en Washington el 4 de abril de 1949. En él, se preveía que, en caso de agresión a uno de los miembros, los demás emprenderían «la acción que considerarán oportuna, incluido el empleo de las fuerzas armadas». Éste, por tanto, no se entendía como automático: de momento, pues, el pacto tenía esencialmente un valor político.

El 12 de mayo de 1949, tras once meses, fue levantado el bloqueo de Berlín. Quince días después, el 23 de mayo, un consejo parlamentario reunido en Bonn aprobaba la Ley Básica (*Grundgesetz*) de la RFA. Ésta se diferenciaba de la constitución de la República de Weimar por el mayor nivel de autonomía que se concedía a las ocho regiones (*Länder*) que conformaban originariamente la República Federal. Pero la principal preocupación de sus autores había sido la de evitar la inestabilidad que había caracterizado a la República de Weimar y con este fin se establecía la preeminencia del Canciller, a quien correspondía el nombramiento de los ministros, respecto del gobierno. El *Grundgesetz* preveía, además, la institución de la «censura constructiva», por el cual el Canciller o el gobierno en funciones no podían ser obligados a dimitir si la oposición no estaba en condiciones de disponer de una mayoría e indicar una solución alternativa de gobierno. Por contra, a di-

ferencia de la constitución de Weimar, la elección del presidente de la república, que gozaba de poderes sustancialmente formales, no se producía por sufragio popular directo, sino que corría a cargo del Parlamento. Dos meses después, el 7 de septiembre, el Parlamento elegido en agosto, en el que la CDU tenía la mayoría, proclamaba en Bonn el nacimiento de la República Federal Alemana (RFA) y a continuación elegía a su Canciller, el cristiano-demócrata Konrad Adenauer, ex alcalde de Colonia. En noviembre, con el tratado de Petersberg, se ponía fin al desmantelamiento de la industria alemana comenzado tras el fin de la guerra y se anulaban las reparaciones. Anteriormente, el 7 de octubre, había nacido la República Democrática Alemana (RDA) en el territorio de la zona de ocupación soviética, que fue reconocida por la URSS. La división de Alemania era un hecho consumado. Un plan elaborado por George Kennan en los días del bloqueo preveía el mantenimiento de la unidad de país, pero no fue tomado en consideración y tampoco, como veremos en su lugar, tendrán éxito sucesivos intentos de reunificación.

Así pues, los complejos acontecimientos que hemos intentado esbozar terminaban con una nueva sustancial derrota de la URSS. Esto no significa que hubiese sido bloqueado su proyecto de expansión más allá de los confines de su zona de influencia, simplemente por que este proyecto nunca existió. La derrota del bloque soviético era esencialmente política y de imagen. La concomitancia entre el lanzamiento del plan Marshall y el golpe de estado de Praga había sido la demostración más palmaria de la diversidad de los talantes políticos y diplomáticos de Estados Unidos y la URSS, tanto en las cuestiones de política exterior como en las de política interna. El prestigio y la fuerza de atracción de los que gozaba la Unión Soviética tras la segunda guerra mundial habían quedado seriamente comprometidos y oscurecidos y esto vale también para los partidos comunistas de Europa occidental, cuyo papel corría el riesgo de meros aguafiestas.

La noticia de que el 23 de septiembre de 1949 la URSS había hecho explotar su primera bomba atómica no contribuía desde luego a modificar esta imagen. La sensación entonces predominante en Europa y en el mundo no fue que con el fin del monopolio atómico norteamericano y el restablecimiento del equilibrio nuclear se había alejado el peligro de la degeneración de la guerra fría en guerra abierta, sino todo lo contrario, que tal peligro se había hecho más inminente que nunca.

22.2. EL ÁREA DEL PACÍFICO EN LA POSGUERRA

A diferencia de lo que hemos constatado para Europa, los Estados Unidos gozaban de una posición de claro predominio en el área del Pacífico. Los in-

tentos soviéticos –hechos, por otra parte, sin demasiada convicción– para poder participar en la ocupación de Japón, fueron rechazados con firmeza por los Estados Unidos, y la URSS tuvo que conformarse con las concesiones que le había otorgado Roosevelt, al margen de la conferencia de Yalta, sobre las islas Kuriles y la parte meridional de la isla de Sajalin, además de con una presencia prácticamente simbólica en la comisión aliada para Japón. Al fin y al cabo, en la estrategia sustancialmente eurocéntrica de Stalin, el área del Pacífico ocupaba un lugar marginal.

Pero la posición predominante de los Estados Unidos no era sólo el fruto de su presencia militar, sino también del papel político que desarrollaron en la región y de las directrices que siguieron para su cumplimiento, comenzando por Japón. Éste había salido de la guerra duramente afectado: en 1946, su renta nacional se calculaba en un 57 % de la de 1934-36 y los salarios de la industria equivalían al 37 % de los de la anteguerra. La inflación estaba casi descontrolada. Los Estados Unidos, como única potencia ocupante con plenos poderes, no podían obviar la labor de emprender la reconstrucción. Comandante supremo del SCAP, el aparato político y militar de las fuerzas de ocupación, era el general Douglas MacArthur, un personaje con un carácter autoritario y firmes convicciones anticomunistas; pero entre sus colaboradores más cercanos se encontraban hombres que se habían formado en el clima del *New Deal* y estaban convencidos de que la reconstrucción del país suponía una democratización radical de sus instituciones y de la misma estructura social, y actuaron en conformidad con estas ideas.

En primer lugar, era preciso dar al país una nueva Constitución. Para este fin, en enero de 1946, comenzó a trabajar una comisión del gobierno japonés que presentó un esquema que sin embargo el SCAP consideró demasiado tibio e inadecuado; en consecuencia, este organismo decidió hacerse cargo él mismo de la redacción de la nueva Constitución. El esquema, elaborado por una comisión presidida por C. Whitney, un «rooseveltiano», fue el de una democracia parlamentaria de tipo bicameral en la que, como sonaba el primer artículo, la figura del Emperador se veía reducida a «símbolo de Estado y de la unidad del pueblo»; el derecho de voto se extendió a las mujeres. Además, la nueva Constitución contenía un artículo que decía que «el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio para resolver las controversias internacionales», la misma fórmula que se encuentra en la Constitución italiana. Tras ser aprobada por las dos Cámaras y el Emperador en junio de 1946, la nueva Constitución entró en vigor en mayo de 1947. Dentro de su ámbito podía así desarrollarse la confrontación entre los varios partidos políticos, que habían vuelto a la legalidad. Entre 1946 y 1949, los japoneses fueron llamados tres veces a las urnas y cada vuelta electoral dio resultados distintos: señal de la inestabilidad, pero también

de la vivacidad política del país. A ello había contribuido la amnistía que permitió la liberación y el retorno a la vida política de los opositores del viejo régimen, mientras que los principales representantes de éste, entre ellos el general Tojo, fueron condenados a muerte o a cadena perpetua como «criminales de guerra». La depuración afectó también a la burocracia y al ejército, con la expulsión de cerca de doscientas mil personas, en su gran mayoría militares.

En el marco de este nuevo sistema político se promulgaron una serie de reformas que tocaron prácticamente todos los aspectos de la vida asociativa: la escuela, con la prolongación de la obligatoriedad de estudios hasta los nueve años y el aumento del número de universidades de setenta a doscientas; la legislación del trabajo, con el pleno reconocimiento del derecho a la huelga, que dio paso a la proliferación de los sindicatos (formaron uno incluso las *geishas*); el campo, con una radical reforma agraria que transformó Japón en un país de campesinos propietarios o arrendatarios.

Ya hemos visto en la parte anterior que en el transcurso de la segunda guerra mundial Japón, utilizando la consigna «Asia para los asiáticos», buscó y encontró la colaboración de representantes anticolonialistas como el indonesio Sukarno y el indio Chandra Bose, por limitarnos a los nombres más conocidos. Las expectativas que de esta forma había contribuido a suscitar sobrevivían ahora a su derrota. Los Estados Unidos, que de hecho se habían convertido en la potencia predominante en el Pacífico y que habían cumplido con su compromiso de dar la independencia a las Filipinas, difícilmente podían asumir una postura de incomprensión ante los movimientos anticolonialistas existentes en la región, ya que esto supondría una traición al espíritu y los compromisos del «gran designio» de Roosevelt. Y, en efecto, cuando, en julio de 1947, Holanda intervino militarmente en Indonesia para reprimir el movimiento independentista de Sukarno, los norteamericanos presentaron al Consejo de Seguridad una moción en la que se invitaban las partes a que cesaran los combates y se nombraba una comisión para favorecer la reanudación de las negociaciones. Análogamente, en enero de 1949, a raíz de una segunda intervención militar holandesa, suspendieron las ayudas del plan Marshall a Holanda y votaron a favor de una resolución que prescribía la constitución de un gobierno provisional indonesio para el 15 de mayo de 1949. Indonesia se convertía así, de hecho y de derecho, en un país independiente.

Mayores problemas planteaba la definición de la postura norteamericana para con el movimiento de liberación de Vietnam, dirigido por los comunistas del Viet Minh. En la conferencia de Teherán Roosevelt se había pronunciado por la independencia de Indochina, pero posteriormente, en 1943, el secretario de estado norteamericano se había comprometido ante el

embajador francés en Washington a restablecer la dominación francesa. La reanudación de las hostilidades entre el ejército de liberación y las tropas francesas, a consecuencia del bombardeo de Haiphong en noviembre de 1946, ponía a la diplomacia norteamericana en una situación embarazosa. Pero se trataba de un foco periférico y circunscrito; estaba claro que la evolución de la situación en Indochina iba a depender en gran medida del camino que tomarían los acontecimientos en el mayor de los países asiáticos, China. Éste era el verdadero problema.

En el transcurso de la guerra, las relaciones entre los Estados Unidos y Chiang Kai-shek habían sido más turbulentas. El comandante supremo aliado en el frente chino, el lugarteniente general Joseph W. Stillwell, en la práctica un consejero militar, había tenido más de un roce con el Generalísimo acerca de la manera de conducir las operaciones militares y la colaboración con los comunistas, a la que Stillwell era favorable. Las relaciones entre los dos se hicieron tan tensas que en octubre de 1944 el norteamericano tuvo ser repatriado. Pero la idea de que una colaboración, en guerra y en paz, entre el Kuomintang y los comunistas representaría la solución más realista para el problema chino tomaba cada vez más cuerpo en Washington, donde no pocos estaban convencidos de que los comunistas chinos eran esencialmente unos nacionalistas y por ende distintos de los comunistas rusos. Para este fin, a lo largo de 1944 y 1945 fueron enviadas a China una serie de misiones que iban y venían entre Chongqing, la capital del Kuomintang, y Yenan, la fortaleza comunista. Como consecuencia de estos contactos, Mao Zedong y Zhou Enlai pidieron, en enero de 1945, que una misión no oficial de comunistas pudiese viajar a Washington para ilustrar su punto de vista sobre la cuestión china, petición que, por otra parte, no fue hecha por el representante personal de Roosevelt en China, el general Hurley. Todos esos intentos de mediación no llegaron a nada, debido principalmente a la intransigencia de Chiang Kai-shek.

Ahora bien, merece la pena observar que la posición soviética hacia China presentaba muchos puntos de convergencia con la norteamericana. En efecto, también los soviéticos, que en agosto de 1945 estipularon un tratado bilateral con el gobierno de Chongqing, eran favorables a la creación de una coalición que incluyese a nacionalistas del Kuomintang y comunistas, y también Stalin estaba convencido de que los comunistas chinos eran comunistas distintos de los rusos, unos comunistas «de mantequilla».

En cambio, los que no estaban de acuerdo con este planteamiento eran los chinos de los dos bandos, que tras la rendición de Japón, se aprestaban al enfrentamiento decisivo. Un nuevo intento de mediación norteamericana, confiado a una personalidad muy prestigiosa como el general Marshall, quien permaneció en China durante más de un año, desde diciembre de 1945 a enero de 1947, acabó en un enésimo fracaso. Lo que mermó la credibili-

dad de Marshall y de los Estados Unidos fue sobre todo el hecho de que éstos seguían abasteciendo de armas al ejército de Chiang Kai-shek, como, por otra parte, hacían los soviéticos con los comunistas. En diciembre de 1947, un análogo intento de la URSS para encontrar una mediación de última hora corrió la misma suerte que la misión de Marshall. La palabra ya había pasado a las armas: las hostilidades volvieron a estallar en julio de 1946 y en un primer momento la situación parecía favorable a las tropas del Kuomintang, que llegaron a tomar Yenan; sin embargo, a partir de julio de 1947, los comunistas pasaron al contraataque. A medida que éste se desarrollaba con cada vez más éxito, se hacía evidente que los días del corrupto régimen del Quomintang estaban contados. En la primavera de 1949 el ejército comunista cruzaba el Yang Tse y el 1 de octubre de 1949, en la plaza de Tienanmen en Pekín, Mao proclamaba la República Popular China, mientras que Chiang Kai-shek se refugiaba en la isla de Taiwan. Los comunistas chinos habían triunfado y Stalin se verá obligado a reconocer públicamente que se había equivocado.

Dos meses después, en diciembre, Mao Zedong viajaba en tren hacia Moscú, donde en enero llegó también Zhou Enlai. Las conversaciones y las negociaciones con Stalin y los máximos dirigentes soviéticos se prolongaron durante varias semanas, interrumpidos por pausas y en una atmósfera no exenta de mutua desconfianza; finalmente, el 4 de febrero, se anunció la firma de un tratado de alianza por el cual las dos partes se comprometían a oponerse a cualquier ataque por parte de Japón o en «cualquier otro estado que, directa o indirectamente, se una a Japón». La Unión Soviética, además, concedía a China un préstamo de trescientos millones de dólares y se comprometía a devolver Porth Arthur y el ferrocarril manchú en 1952.

La firma de la alianza chino-soviética representaba un tajante desmentido de las suposiciones que se habían hecho acerca de la diversidad entre comunistas chinos y soviéticos y fue percibida por gran parte de los círculos dirigentes y de la opinión pública norteamericanos como una grave derrota, hasta el punto que imponía una rectificación de la línea seguida en Extremo Oriente, comenzando por Japón. En octubre, cuando ya se perfilaba la victoria de la revolución china, el presidente había aprobado un documento elaborado por el *National Security Council* en base a una relación de George Kennan, fruto de su permanencia en Japón, en el que se recomendaba que se pusiese fin a la política de reformas perseguida hasta entonces y se apostara, en cambio, por la reconstrucción de la desastrosa economía del país. Ello implicaba, entre otras cosas, la renuncia a aquellas medidas de limitación del poder de los grandes *zaibatzu* que eran parte fundamental del programa reformador que había sido emprendido, y la limitación del papel de los sindicatos; en 1948 dejó de estar reconocido el derecho de huelga para los funcionarios públicos y en 1950 fue disuelta la central sindical filocomunista; la

depuración de elementos comprometidos por su pasado militarista fue interrumpida. Este nuevo curso político y económico no tardó en dejar sentir sus efectos en la vida política japonesa. En las elecciones de enero de 1949 el Partido Liberal obtuvo la mayoría absoluta de los escaños.

Todavía más radical fue la revisión de la política norteamericana con China. A diferencia de Inglaterra y la India, que reconocieron el nuevo gobierno comunista, los Estados Unidos no sólo se negaron a hacerlo, sino que como único representante de China y por tanto como titular del escaño en el Consejo de Seguridad de la ONU, en calidad de miembro permanente con derecho de veto, al gobierno de Chiang Kai-shek en Taiwan, decretaron el embargo contra Pekín y decidieron la vigilancia naval del estrecho entre Taiwan y el continente.

22.3. LA NUEVA REVISIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR NORTEAMERICANA Y EL PRINCIPIO DE LA CARRERA ARMAMENTÍSTICA

El sobresalto provocado por la revolución china y por el tratado de amistad chino-soviético fue sentido, como se ha visto, como una grave derrota por los Estados Unidos, lo que contribuyó a difundir y consolidar en la opinión pública y en el mundo político la sensación de que la amenaza comunista era inminente y por ende debía ser tratada con determinación. Es en este contexto que, en los primeros años cincuenta, fue tomando cuerpo el fenómeno del macarthismo. Los que fueron investigados por el Comité de Actividades Antiamericanas presidido por el hasta entonces desconocido senador de Wisconsin, Joseph McCarthy, porque eran sospechosos de nutrir o haber nutrido simpatías por el comunismo, no fueron sólo célebres actores y directores de Hollywood, sino también científicos, como Robert Oppenheimer, sindicalistas e incluso funcionarios del Departamento de Estado o ciudadanos comunes. El número de las condenas o de las destituciones dictadas por el tribunal fue limitado, pero las personas investigadas por motivos varios fueron en total quince millones. Para los pocos miles de comunistas auténticos, es decir de afiliados al Partido Comunista norteamericano, ya existía la ley McCarran que les conminaba a que se registraran como tales. Para sustraerse a la atmósfera de conformismo y de sospecha que reinaba en los ambientes intelectuales, personalidades como Charlie Chaplin, Losey o Brecht dejaron Estados Unidos.

El macarthismo fue un fenómeno pasajero, en buena medida alimentado por el descubrimiento de reales o presuntos casos de espionaje y en particular el del diplomático Alger Hiss y del matrimonio Rosenberg, detenidos en 1950 y ejecutados en 1953. En 1954, McCarthy ya había perdido

cualquier influencia efectiva. Pero el fenómeno fue también el indicio y la manifestación de un estado de ánimo difuso y enraizado. Me refiero al cambio de la percepción del comunismo y del país que era su personificación por parte de sectores considerables de la opinión pública y de los círculos dirigentes; la Unión Soviética, aliada de antaño, estaba considerada ahora no sólo como un peligro más o menos inminente, un peligro para «contener», sino también como un enemigo, *el enemigo*. En este sentido, el macarthismo dejó una huella profunda en la opinión pública norteamericana. A partir de entonces, el anticomunismo se convirtió para muchos norteamericanos en parte fundamental de su identidad nacional y para muchos inmigrantes recientes, como un pasaporte para su integración.

Este estado de ánimo y estas aprensiones no eran compartidas por los principales responsables de la política exterior norteamericana. El mismo Truman, que había dado la orden de lanzar la bomba sobre Hiroshima, en su discurso sobre el estado de la Unión de 1952, polemizaba con la afirmación de Stalin acerca de la imposibilidad de evitar la guerra, subrayando que Lenin, a cuya autoridad se acogía el dictador soviético, era «un hombre preatómico» y que «algo profundo había sucedido desde los tiempos en que él escribía. La guerra había cambiado, en su forma y en sus dimensiones». Por su parte, Winston Churchill, que en 1948, en los días del bloqueo de Berlín, había propuesto que se esgrimiera la amenaza atómica contra la URSS, al enterarse de los efectos de la explosión de la bomba H norteamericana en un islote donde había sido experimentada, pensó en las consecuencias que semejante explosión tendría sobre Londres, y expresó su angustia en una emotiva carta a Eisenhower.

No obstante, las presiones de una parte considerable de la opinión pública y del propio *establishment* no podían ser ignoradas, ni lo podían ser los hechos que las causaban. En este contexto, la administración de Truman procedió a una revisión de sus coordenadas militares y políticas, como en parte ya hemos constatado en lo tocante al área del Pacífico.

En enero de 1950 el presidente dio luz verde al programa de investigaciones destinado a la construcción de la bomba de hidrógeno. Tres meses después, en abril, el *National Security Council* le presentó un documento –el NSC 68, que él aprobó– en el que, partiendo de la premisa de que la URSS no sólo tenía como objetivo «la total sumisión de los pueblos puestos bajo su control», sino que también aspiraba a «imponer su autoridad sobre todo el resto del mundo», se llegaba a la conclusión de que los Estados Unidos se encontraban ante un «desafío mortal» y por tanto la prioridad absoluta era el «refuerzo del mundo libre». Sólo después de conseguir este objetivo se podía tomar en consideración la posibilidad de una negociación «con la esperanza de que ello pueda facilitar el proceso de adaptación del Kremlin a la nueva situación»; una hipótesis que, por lo demás, los autores del documento

no parecían considerar muy cercana. Por otra parte, también se daban cuenta de que una rearme basado en la energía nuclear y en la doctrina de la «represalia masiva» pondría a los Estados Unidos, en caso de una agresión comunista en cualquier parte del mundo, ante la alternativa de capitular o verse arrastrados a una guerra global. No por ello ponían en discusión la decisión del presidente de proceder al rearme atómico, sino más bien subrayaban la necesidad de incrementar el gasto para todo tipo de armamento, incluidos los convencionales, para poner al país en condiciones de afrontar cualquier eventualidad de guerra. Esta recomendación no dejó de ser secundada: entre 1951 y 1953, el gasto militar pasó de 22,3 a 50,4 mil millones de dólares. En noviembre de 1952, los Estados Unidos efectuaron su primera explosión de una bomba H. Antes de un año, el 12 de agosto de 1953, la URSS replicaba haciendo explotar en Semipalatinsk, en Kazajstán, una bomba H que, a diferencia de la norteamericana, ya era operativa. Pasaron pocos meses y en febrero de 1954 los Estados Unidos volvían a encabezar la carrera armamentística con la explosión de un artefacto nuclear de 15 megatones de potencia, muy superior a la de la bomba H soviética.

Se iniciaba así una nueva carrera armamentística. Al cabo de pocos años, de 1950 a 1953, los artefactos nucleares a disposición de Estados Unidos pasaron de 299 a 841, contra los 50 de los que disponía la URSS en los últimos años de Stalin. Además de un mayor número de bombas, los Estados Unidos tenían la ventaja, gracias a su sistema de bases, de poder fácilmente alcanzar y centrar con sus cabezas nucleares, los objetivos situados en el territorio soviético, mientras que la Unión Soviética no podía hacer otro tanto. Con todo, estaba claro que eran las dos superpotencias las que tenían en sus manos las llaves de la guerra y de la paz. Es lo que se entiende generalmente con el término de «bipolarismo».

22.4. LA GUERRA DE COREA

En la península coreana el paralelo 38 marcaba la línea de división entre la zona de ocupación soviética en el Norte y la norteamericana en el Sur. Esta delimitación artificial, que era el fruto de los acuerdos alcanzados por los aliados a lo largo de la guerra, se consideraba provisional tanto en Corea del Norte, donde con el apoyo de la URSS había tomado posesión un gobierno encabezado por el líder comunista Kim Il Sung, como en Corea del Sur, donde en mayo de 1948 había sido elegido un gobierno presidido por Sygman Rhee, hombre vinculado a los Estados Unidos tanto como su colega y antagonista del Norte lo estaba a la Unión Soviética. Ambos gobiernos proclamaban como su primer objetivo la reunificación del país; de ahí que a lo largo de la línea del paralelo 38 se producían con frecuencia incidentes. Tanto la

URSS como los Estados Unidos, que habían retirado sus tropas de ocupación en 1948 y 1949, respectivamente, dejando allí sólo contingentes reducidos, no parecían especialmente interesados en los asuntos coreanos y parecían inclinados a aceptar la división de la península por un tiempo indefinido.

Por lo tanto, cuando el 25 de junio de 1950 se difundió la noticia de nuevos enfrentamientos a lo largo del paralelo 38, el propio general MacArthur creyó que se trataba del enésimo incidente fronterizo; pero el desarrollo de los acontecimientos hizo evidente muy pronto que no se trataba de esto, sino de una auténtica guerra. La impresión en el mundo fue enorme: por primera vez desde el fin de la segunda guerra mundial se volvía a hacer uso de las armas. El riesgo de que la guerra fría se convirtiera en guerra, un conflicto que involucraría a las grandes potencias, parecía real.

Durante mucho tiempo se ha debatido sobre quién fue el principal responsable del inicio de las hostilidades. Documentos recientemente estudiados, también de procedencia china, permiten atribuir las mayores responsabilidades a líder norcoreano Kim Il Sung. Éste estaba convencido de que podía contar con el apoyo de la población del Sur, donde tres semanas antes del principio del conflicto se habían celebrado elecciones que habían visto la derrota de Sygman Rhee; además, también estaba convencido de que los Estados Unidos no intervendrían. Esta seguridad se sustentaba en las declaraciones del secretario de estado Dean Acheson, quien en enero había excluido a Corea del «perímetro defensivo» de los Estados Unidos en el Pacífico. En los encuentros que celebró primero con Stalin y luego, en abril, con Mao, Kim Il Sung jugó con astucia, dejando creer a cada uno de ellos que el otro compartía su punto de vista y logrando así vencer sus perplejidades y obtener el apoyo de ambos. Sin embargo, Stalin no dejó de manifestarle que, en caso de encontrarse en dificultad, no movería ni un dedo y Kim Il Sung tendría que acudir a los chinos. Por lo demás, el que la iniciativa se debía a Corea del Norte queda confirmado por la evolución de las operaciones militares: las tropas norcoreanas, gracias también al apoyo de unidades partisanas del Sur, ocuparon casi toda la península, obligando a los surcoreanos y al reducido contingente norteamericano a encerrarse en el extremo meridional, alrededor del puerto de Pusan.

Contrariamente a lo que se esperaba el líder norcoreano, la reacción de los Estados Unidos fue inmediata y contundente. El mismo día en el que se difundió la noticia del ataque, Truman convocó el Consejo de Seguridad para tratar el asunto; éste votó por mayoría una resolución que declaraba a Corea del Norte país agresor. Dos día después, el Consejo de Seguridad votaba, con una mayoría más restringida (votó en contra Yugoslavia y se abstuvieron la India y Egipto) una segunda resolución, presentada por los Estados Unidos, con la que se invitaba a las naciones representadas en la ONU a enviar sus contingentes militares a Corea. De este modo, el conflicto en cur-

so se convertía en un enfrentamiento entre un estado agresor y la comunidad internacional. Suscitaron sorpresa entonces, y todavía hoy parecen difícilmente explicables, las razones por las que en ambas ocasiones el delegado soviético no estuvo presente y por tanto no pudo, como sí había hecho tantas veces anteriormente, ejercer su derecho de veto. La explicación que se da generalmente de esta ausencia es que fue la consecuencia de la decisión soviética de abandonar las sesiones del Consejo de Seguridad en protesta por la negativa norteamericana a reconocer la República Popular China. Sin embargo, por las memorias de Andrei Gromyko se sabe que éste insistió varias veces a Stalin para que el delegado soviético, Jacob Malyk, volviese a ocupar su escaño con el fin de vetar la iniciativa norteamericana, pero no fue escuchado. Por consiguiente, se ha avanzado la hipótesis, que sin embargo queda por demostrar, de que el dictador soviético negaría su consentimiento basándose en la consideración de que la implicación de la ONU limitaría la libertad de acción de los Estados Unidos, lo que de hecho, como veremos en breve, sucederá.

En septiembre de 1950, las tropas norteamericanas, reforzadas por contingentes de otros países y encabezadas por el general MacArthur, efectuaron el desembarque en Inchon, cerca de Seúl, obligando así a los norcoreanos a retirarse, para no quedarse atrapados en el cerco del enemigo, y a establecer sus líneas nuevamente en el paralelo 38. Con esto la tarea confiada a los norteamericanos por la ONU podía considerarse cumplida ya que el agresor había sido rechazado hasta la línea de partida. Pero MacArthur insistía para que la contraofensiva se continuara más allá del paralelo 38 y ciertamente fue con satisfacción que el 26 de septiembre recibió desde Washington una orden que lo autorizaba a hacerlo, con la condición de que no se perfilara la amenaza de una intervención soviética o china. El 30 de septiembre, el ministro de Exteriores chino Zhou Enlai advertía que, en caso de cruzarse el paralelo 38, China reaccionaría. También Nehru se declaraba contrario al cruce del paralelo 38, mientras que franceses e ingleses manifestaban sus dudas. Amparado en la orden recibida y convencido de que los chinos no iban en serio, MacArthur decidió pasar a la acción. El 1 de octubre, por orden suya, unidades surcoreanas, seguidas pocos días después por el grueso de las fuerzas norteamericanas, cruzaron el paralelo 38. Se trataba de un evidente forzamiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad, forzamiento que de alguna manera fue subsanado por una votación de la Asamblea de las Naciones Unidas, que el 7 de octubre aprobó una resolución que, aunque redactada en términos ambiguos, sonaba como una aprobación del hecho consumado. A finales de noviembre, las tropas al mando de MacArthur ya habían llegado al río Yalu, que marcaba la frontera con China, y la conclusión de la campaña norcoreana parecía próxima. Sin embargo, esta vez había sido MacArthur el que se había equivocado en los cálculos. Des-

de que las tropas norteamericanas habían cruzado el paralelo 38, Stalin no había cesado de presionar sobre Mao para que interviniera en el conflicto enviando a Corea algunas unidades de «voluntarios». Mao, que temía un ataque norteamericano desde el estrecho de Taiwan, donde se encontraba la séptima flota, se mostró muy dudoso e incluso, al parecer, pasó algunas noches de insomnio. Al final tomó la decisión y el 26 de noviembre los «voluntarios» chinos aparecieron en el frente coreano y lanzaron una ofensiva que obligó a las tropas norteamericanas y surcoreanas a replegarse por debajo del paralelo 38.

Con la intervención china, la guerra de Corea había llegado a un punto crítico. MacArthur no echaba el freno y hacía repetidas declaraciones belicosas, llegando hasta el punto de amenazar con el uso del arma atómica contra los «santuarios» chinos. Le hacían eco, dentro de país, los «halcones» del Partido Republicano, que en las elecciones de medio término había obtenido una significativa victoria. Una iniciativa dirigida a suavizar la situación llegó entonces desde Inglaterra, que mantenía, como se ha dicho, regulares relaciones diplomáticas con China. Entre el 4 y el 8 de diciembre, el primer ministro inglés Clement Attlee celebró en Washington una serie de conversaciones con Truman durante las cuales, aunque se hizo intérprete del punto de vista de los gobiernos indio, canadiense y francés, intentó disuadir a su interlocutor de recurrir a medidas extremas y convencerlo para que aceptara que la Asamblea de la ONU tomara de nuevo las riendas de todas las cuestiones relacionadas con el conflicto en curso, incluida la del reconocimiento de la China popular. Presionado por sus opositores internos y una parte considerable de la opinión pública, por un lado, y el Congreso y sus aliados, por otro, Truman y su subsecretario de estado, Acheson, alternaban las demostraciones de fuerza con declaraciones más conciliadoras, dejando la puerta abierta a las gestiones diplomáticas que llevaban a cabo algunos países, en particular la India, en busca de una solución pacífica. Mientras tanto, en enero de 1951, las tropas de las Naciones Unidas habían conseguido volver de nuevo a la línea del paralelo 38. La guerra, pues, volvía al mismo punto en el que había comenzado, y eran muchos, incluso en los Estados Unidos, los que se preguntaban si merecía la pena continuarla. Sin embargo, no era de esa opinión el general MacArthur, quien tomó la iniciativa de amenazar a China con extender el conflicto hasta su territorio si el asunto coreano no se acometía «sin condiciones que no tienen relación con Corea, como Formosa o el escaño chino en la ONU». Pocos días después, el 5 de abril, el diputado republicano J. W. Martin hacía pública una carta del general, en la que se afirmaba que no existían alternativas a la victoria. Esto rebasaba todos los límites, y el 11 de abril, Truman se disponía a destituir al belicoso general, que a su vuelta fue acogido con manifestaciones triunfales. La decisión del presidente norteamericano allanaba de hecho el camino de

las negociaciones y Stalin no tardó en darse cuenta de ello y en aprovechar la ocasión. El 23 de junio, el delegado soviético en la ONU proponía un alto el fuego que fue aceptado por los norteamericanos, y el 10 de julio, en Kaesong, cerca del paralelo 38, comenzaron las negociaciones entre las dos delegaciones coreanas. Las discusiones se prolongaron, con altibajos, hasta julio de 1953, cuando se cerró un acuerdo. Así pues, terminaba una guerra en la que habían encontrado la muerte 33.600 norteamericanos, 52.000 surcoreanos, entre militares y civiles, y casi un millón de norcoreanos y chinos; una guerra que, a causa de los errores de percepción y de cálculo de uno y otro bando, había amenazado con hacer estallar un conflicto generalizado. Pero este peligro había sido evitado y se había constatado que una guerra podía ser circunscrita. El riesgo de que el paralelo 38 pudiese convertirse en un nuevo Sarajevo o una nueva Danzig había sido conjurado y la bomba atómica no sólo no había sido empleada, pese a que tal hipótesis había sido tomada en consideración, sino que quedaba claro que difícilmente podía serlo en una guerra de tipo convencional. Se trataba de un precedente y de una lección que, a lo largo de las décadas siguientes, no se olvidarían, pero de momento la guerra de Corea sólo contribuyó a un mayor deterioro de las relaciones internacionales. La guerra fría, que hasta entonces había afectado sobre todo a Europa, ahora se extendía a todo el planeta.

22.5. REPERCUSIONES INTERNACIONALES DE LA GUERRA DE COREA

Los años a caballo de la guerra de Corea fueron quizá los más oscuros de la historia de la segunda mitad de este siglo. Nunca como entonces la guerra fría mereció este nombre y nunca como entonces asumió los caracteres de un conflicto irreconciliable entre ideologías contrapuestas. Este proceso de radicalización y polarización de las opciones ideológicas hasta el extremo, no sólo repercutió, como veremos, en las relaciones entre los estados y en sus opuestas propagandas, sino también dentro de cada estado. Son los años en que, en la Unión Soviética, pareció que la pesadilla de un nuevo 1937 podía hacerse realidad, los años de los grandes procesos en las democracias populares (véase cap. 22), los años del macarthismo en los Estados Unidos.

Fue en este clima envenenado que, en enero de 1951, durante una conferencia con el estado mayor y los ministros de Defensa de los estados satélites, Stalin afirmó que la guerra podía evitarse sólo durante tres o cuatro años; en esta circunstancia se estipuló un acuerdo secreto que preveía, en caso de guerra, la constitución de un ejército único bajo mando soviético.

En lo que respecta a los Estados Unidos, la experiencia de la guerra de Corea representó una confirmación más, y muy persuasiva, de la necesidad

de la revisión efectuada con el NSC 68. Se trataba ahora de pasar de la enunciación de los principios a su concreta aplicación. En las relaciones norteamericanas con Japón, las primeras señales de esta revisión ya se habían manifestado, como se ha visto, con anterioridad a la victoria de la revolución china y a la guerra de Corea, pero, a raíz de esos acontecimientos, fueron precisándose y adquiriendo una consistencia cada vez mayor. El objetivo era el de transformar la condición de Japón, de la de país ex enemigo y derrotado a la de aliado y bastión de la presencia norteamericana en el Pacífico. Una etapa obligada en este camino era la firma de un tratado de paz y con este fm John F. Dules, en calidad de representante del presidente, contactó con los gobernantes japoneses y con los demás estados interesados. Sus esfuerzos tuvieron éxito y, en septiembre de 1951, se reunía en San Francisco una conferencia en la que participaron cincuenta y dos de las cincuenta y cinco naciones interesadas, incluida la URSS. La India de Nehru, Yugoslavia y Birmania se negaron a participar, mientras que las dos Chinas no habían sido invitadas. La conferencia concluyó con la aprobación de un texto que se basaba sustancialmente en las propuestas norteamericanas. Sus cláusulas territoriales dejaban esencialmente inmutada la situación que se había determinado al final de la guerra; la carga de las reparaciones japonesas se veía recortada de forma importante y se reconocía a Japón el derecho de pedir su admisión en la ONU. Junto con el tratado de paz, que la Unión Soviética no suscribió, Estados Unidos y Japón firmaron un pacto de seguridad, en base al cual éste cedía a los Estados Unidos, en régimen de administración fiduciaria, un grupo de islas que serían utilizadas como bases militares, y consentía en que las tropas norteamericanas permanecieran en territorio japonés. Simultáneamente, y en el marco de la propia conferencia, se estipularon pactos de «mutua asistencia» con las Filipinas (30 de agosto de 1951), con Australia y Nueva Zelanda (Anzus, 1 de septiembre). Todos esos acuerdos confluirán, en 1954, en el tratado de Manila (SEATO), al que se sumaron también Inglaterra, Francia, Pakistán y Tailandia. Tratados de mutua asistencia se estipularon también con Corea del Sur y Taiwan.

Los Estados Unidos adquirían así el papel de garantes y guardianes de la estabilidad de toda la región y con ello se encontraban inevitablemente involucrados en todas las cuestiones y las controversias en curso y que pudiesen surgir. La más delicada de todas ellas era la de Indochina, donde hacía tiempo que se estaba librando una guerra entre el Viet Minh, que en 1950 fue reconocido por Moscú y Pekín, y el cuerpo de expedición francés. Estados Unidos, por su parte, si por un lado se echó encima el peso de la financiación y del armamento de las tropas francesas casi en su totalidad, por otro no cesaba de presionar al gobierno de París para que concediera la independencia al sector meridional del país, convencido de que un gobierno de nacionalistas estaría en condiciones de hacer frente con mayor determinación

y convicción a la amenaza comunista, como había sucedido en Corea. Su consejo fue parcialmente escuchado y, gracias a contactos y negociaciones que se prolongaron de 1947 a 1949, Francia reconoció la independencia de Laos, de Camboya y del propio Vietnam, cuyas regiones meridionales y centrales quedaron, sin embargo, bajo el control de las tropas francesas. El nuevo gobierno vietnamita del emperador Bao Dai fue reconocido por Estados Unidos en 1950, pero, como veremos, no debió pasar mucho tiempo para que se hiciera notoria la fragilidad de su hipótesis y su estrategia y para que los propios norteamericanos se encontraran involucrados en el quebradero de cabeza vietnamita.

En la otra vertiente de la guerra fría, la atlántica, la aplicación del NSC 68 implicaba, en primer lugar, la transformación de la OTAN de alianza esencialmente política en alianza militar, acogiendo así las peticiones que procedían de los mismos aliados europeos, que exigían, entre otras cosas, que la línea defensiva prevista, en caso de ataque desde el este, en la orilla del Rin, se desplazara a lo largo de la orilla del Elba. Fue así que, en abril de 1951, el general Eisenhower fue nombrado comandante supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa (SHAPE, en sus siglas en inglés) y cuatro nuevas divisiones norteamericanas fueron enviadas a Europa. En septiembre del mismo año, además, se constituyó el *Standing Group*, una especie de comité de crisis en el que estaban admitidos sólo Estados Unidos, Inglaterra y Francia.

El refuerzo militar de la alianza se persiguió mediante su extensión a los países que no formaban parte de ella. En el Consejo Atlántico de Lisboa, en febrero de 1952, se acordó así la admisión en la OTAN de Grecia y Turquía, dos países cuyo régimen interno no representaba desde luego un modelo de democracia. Entre los países europeos que estaban situados a orillas del Atlántico y del Mediterráneo, sólo la España de Franco no era miembro de la alianza. Sin embargo, tras cerrársele las puertas por una resolución de 1946, en 1955 se la admitía en la ONU (también en 1953 había suscrito un acuerdo militar con Estados Unidos por el que ponía a su disposición unas bases militares en su territorio). También la Yugoslavia de Tito recibió, en 1951, ayudas militares por parte de los Estados Unidos.

Con todo, era evidente que el refuerzo de la alianza planteaba el problema del papel que en ella podría jugar la recién constituida República Federal de Alemania. La cuestión había sido puesta por los Estados Unidos ya en el Consejo Atlántico de septiembre de 1950, en el que habían subordinado el envío a Europa de nuevos contingentes de tropas a la aceptación por parte de los europeos de la formación de una fuerza integrada de la que formasen parte diez divisiones alemanas. Pero el recuerdo de la segunda guerra mundial era demasiado reciente para que la perspectiva de un rearme de Alemania –cuya realización, por otra parte, estaba terminantemente prohibida por los acuerdos de Potsdam– pudiera ser recibida sin desconfianza por

los gobiernos europeos. El que se encontraba en mayores dificultades era, naturalmente, el gobierno francés y, en efecto, fue en Francia que, a lo largo de 1950, tomó cuerpo la idea de una Comunidad Europea de Defensa (CED). Su proyecto, presentado por el primer ministro René Pleven y aprobado por el Parlamento en octubre, preveía la constitución de un ejército conjunto de cien mil hombres, de los cuales cincuenta mil eran franceses, integrado por seis divisiones «internacionales» y la inserción en algunas de ellas de militares alemanes, de manera que su presencia resultara, por así decirlo, diluida. El plan de Pleven fue objeto de largas discusiones entre los socios europeos de la Alianza Atlántica y entre éstos y la República Federal Alemana, discusiones que se terminaron sólo a finales de mayo de 1952 con la firma del tratado fundacional de la CED. Anteriormente, en la conferencia del Consejo Atlántico que se había celebrado en Lisboa en febrero, se había acordado que Alemania entraría en la OTAN después de la constitución de la CED.

La situación seguía siendo inestable, desde el momento en que la entrada en vigor de la CED quedaba sometida a la ratificación de los varios parlamentos nacionales, ratificación que, como veremos en breve, no estaba en absoluto descontada. Lo que sí estaba claro era que el problema del rearme alemán ya no se podía soslayar y pronto se solucionaría en el sentido deseado por las potencias occidentales. Stalin, con su realismo, probablemente se daba cuenta de ello. En efecto, en la nota que envió el 10 de marzo de 1952 a las potencias occidentales, no se limitaba a reiterar la disponibilidad soviética a estipular un tratado de paz con una Alemania unificada, sino que, por vez primera, se consentía en que Alemania pudiese «disponer de las fuerzas armadas de tierra, de mar y de aire, necesarias para su defensa». La nota soviética no fue tomada en consideración por sus destinatarios, ya decididos a proceder al rearme alemán. Sólo quedaba por establecer en qué marco éste se llevaría a cabo, si en el de la CED o en el de la OTAN. La duda fue solucionada por el Parlamento francés, que el 30 de agosto de 1954 rechazó, con el voto conjunto de comunistas y gaullistas, la ratificación del tratado de la CED, anulando así la única alternativa posible a un rearme alemán en el marco de la Alianza Atlántica. Un mes después, los ministros de Exteriores de la alianza, reunidos en Londres, aprobaban un documento en el que estaba contemplado el restablecimiento de la soberanía de la RFA, su adhesión a la OTAN –a cuya fuerza militar contribuiría con doce divisiones– y la renuncia a producir armas atómicas, químicas y bacteriológicas. Esta decisión se hizo definitivamente operativa cuando, en febrero de 1955, el *Bundestag* ratificó el acuerdo de octubre de 1954, por el cual la República Federal Alemana entraba a formar parte de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea occidental. La firma del Pacto de Varsovia, en mayo de 1955, entre la URSS y los países de la Europa oriental, que comprometía a las partes firmantes a prestarse mutuamente asistencia –también pero no necesaria-

mente militar– en caso de agresión a uno de ellos, era, en realidad, una forma de aceptar que una situación de *impasse* se había consolidado. En septiembre, el canciller Adenauer era recibido en Moscú y la URSS, que ya tenía, obviamente, relaciones diplomáticas con la República Democrática Alemana, las estableció también con la RFA. Para evitar que este doble reconocimiento constituyera un precedente, al mismo tiempo la RFA formulaba la llamada «doctrina Hallstein», por la que se declaraba como la única representante del pueblo alemán y, por consiguiente, se comprometía a romper las relaciones diplomáticas con los estados que reconocieran a la RDA.

23

Los altibajos de la «distensión»

23.1. RELEVOS EN WASHINGTON Y EN MOSCÚ

Las elecciones presidenciales de noviembre de 1952 pusieron fin a veinte años de presidencias demócratas e instalaron en la Casa Blanca a un republicano, el general Dwight Eisenhower. Concurrieron a este resultado varios factores: la imposibilidad para Truman de volverse a presentar; el prestigio y la popularidad del candidato republicano y su mismo alejamiento de los ambientes políticos profesionales. De hecho, el nuevo presidente de los Estados Unidos era un militar de gran prestigio, pero ciertamente no un militarista; antes bien, precisamente por haber hecho la guerra, conocía sus horrores y no le gustaba. Tampoco era un extremista, un cruzado de la guerra fría, como lo había sido McCarthy. En el discurso que pronunció en diciembre de 1953 ante las Naciones Unidas para presentar su proyecto de autoridad internacional para el uso pacífico de la energía nuclear –el programa «átomos por la paz»– el presidente no dudó en afirmar que una guerra nuclear conllevaría «la probabilidad de la destrucción de la civilización y el aniquilamiento de la insustituible herencia que nos ha sido transmitida de generación en generación». Siete años más tarde, al final de su segundo mandato presidencial, denunciará «la influencia injustificada, consciente o no, del complejo militar industrial», inaugurando así una expresión destinada a hacerse corriente. El secretario de estado que eligió, John F. Dules, era conocido por su intransigente anticomunismo y a su nombre queda asociada la sustitución de la doctrina de la contención con la del *roll back*. Pero tampoco le faltaba un buena dosis de realismo y de sentido del límite. Es suya la fórmula de la «danza al borde del abismo», pero, si a veces lo rozó, nunca llegó mas allá de este borde, y en su conjunto, la política exterior estadounidense no se apartó sustancialmente, al menos en los primeros años

de la nueva administración republicana, de la línea de la contención. Dentro de ésta entraban los pactos firmados por iniciativa del dinámico secretario de estado: el ya mencionado pacto de Manila, el pacto de Bagdad y la misma doctrina Eisenhower para Oriente Medio; de todos ellos volveremos a ocuparnos. Esta forma de moderación queda confirmada también por el hecho de que, en los primeros cuatro años de la administración de Eisenhower, los gastos militares registraron un descenso, de 49,6 a 44,5 mil millones de dólares anuales.

El 27 de junio de 1953, en Pan Mun Jon, se firmaba un armisticio entre los dos Coreas: el riesgo de una reanudación del conflicto quedaba así conjurado. A este resultado había contribuido de manera decisiva el viaje que, cumpliendo una promesa hecha en el transcurso de la campaña electoral, el nuevo presidente había realizado a Corea y su compromiso para la búsqueda de una solución pacífica. Pero también se debió a otro acontecimiento.

A los dos meses de la toma de posesión del presidente norteamericano, el 5 de marzo de 1953, fallecía en Moscú Stalin. En este caso no se trataba de un simple relevo y un normal cambio de dirección, sino de una ruptura traumática. El ascenso al poder de una nueva clase dirigente comportó por tanto una revisión sustancial de las anteriores directrices de gobierno, no sólo, como veremos, en el terreno de la política interna, sino también en el de la política exterior.

Una primera señal llegó del nuevo presidente del Consejo, Georgi Malenkov, cuando, el 12 de marzo de 1954, declaró públicamente que una guerra implicaría «el fin de la civilización mundial». Posteriormente, el 25 de abril, el *Pravda*, órgano del PCUS, publicaba el texto íntegro del discurso de Eisenhower del 16 de abril, en el que el presidente norteamericano había manifestado su preocupación por los costes y los riesgos de la carrera armamentística y había apelado al Kremlin para que contribuyera en invertir esta tendencia. Pero no todos los miembros de la nueva «dirección colegial» soviética compartían la afirmación de Malenkov y la iniciativa del *Pravda*. Lo demuestra el hecho de que, en marzo de 1955, la revista teórica del PCUS –*Kommunist*– publicó un largo artículo en el que se confutaban, aunque sin nombrarlo, todas las afirmaciones de Malenkov, y se defendía, en cambio, la tesis de que una eventual guerra terminaría no con la civilización, sino con el capitalismo. Se trataba, evidentemente, de dos posturas irreconciliables y de una contradicción que tarde o temprano tendría que ser resuelta. De ello se encargó el nuevo secretario de partido, Nikita Kruschev, uno de los impulsores de la liquidación de Malenkov. Para ello eligió una ocasión especialmente solemne, el XX Congreso del partido, en febrero de 1956; ahí, el secretario general afirmó que no existía otra alternativa a una tercera y

devastadora guerra mundial sino la de la «coexistencia pacífica» entre los dos sistemas, coexistencia de la que el bando socialista saldría sin falta vencedor. En adelante, las referencias a la coexistencia pacífica recurrirán de forma ritual en todas las declaraciones públicas y en los documentos oficiales soviéticos, aunque cada vez en contextos y con significados diferentes y con amplios márgenes de ambigüedad. Para Kruschev, por ejemplo, el concepto de coexistencia no implicaba necesariamente el abandono del de inevitabilidad de la guerra, sino sólo implicaba el de «no inevitabilidad», una extraña doble negación. Por consiguiente, la hipótesis de una victoria del socialismo en una eventual tercera guerra mundial no quedaba descartada.

A pesar de esas ambigüedades, era evidente que un proceso de revisión de las coordenadas tradicionales de la política exterior soviética estaba en marcha. El primero en percatarse del cambio fue Winston Churchill, que el 20 de abril de 1953, a pocas semanas de la muerte de Stalin, pronunció un discurso en el que pedía la convocación de una conferencia «al más alto nivel». De momento pareció una voz aislada, pero en septiembre, concluido ya el armisticio en Corea, el propio Foster Dulles declaraba que había llegado el momento de realizar un «esfuerzo espectacular para suavizar las tensiones en el mundo». Tanto en Washington y Londres como en Moscú soplaba, pues, un viento nuevo. Pero era preciso pasar de esas premisas y esas señales a decisiones políticas concretas y ésta no era una tarea fácil ni de éxito seguro.

23.2. LA BREVE ESCAMPADA DE LA DISTENSIÓN

En la vertiente europea, como se ha visto, la situación aparecía ya consolidada y las respectivas esferas de influencia definitivamente delimitadas. Más inestable y cargada de peligros se presentaba, en cambio, la situación en el área del Pacífico, incluso después de desactivar la mina coreana. Si en mayo de 1955 los chinos habían suspendido el bombardeo de las islas de Quemoy y Matsu, en aguas de Taiwán, iniciado en septiembre de 1954, quedaba abierto el problema de Vietnam, donde todavía se estaba produciendo el enfrentamiento entre las tropas coloniales francesas y las del Viet Minh, apoyadas y abastecidas por China. Estas últimas, en marzo de 1954, habían llegado a sitiar el fuerte de Dien Bien Phu, cuya guarnición se encontraba en una situación casi desesperada. En esta coyuntura tomó consistencia la idea de una intervención aérea norteamericana –la llamada «operación buitre»– en cuyo ámbito se llegó a tomar en consideración incluso el empleo de armas atómicas tácticas. Apoyada por los ministros más intransigentes de gobierno francés y por algunos militares norteamericanos, la idea encontró la oposición decidida del gobierno inglés y, a título personal, de Churchill, y de la India y el movimiento de los países no alineados, y fue recibida con frial-

dad y finalmente descartada por Washington. El 7 de mayo, la fortaleza de Dien Bien Phu fue expugnada por los guerrilleros Viet Minh al mando del general Giap. Al día siguiente, en Ginebra, comenzaban las sesiones de una conferencia de los ministros de Exteriores, que tenía en su orden del día los asuntos de Corea y de Vietnam y en la que habían sido admitidos también la China popular, los dos Vietnam, Laos y Camboya. Su convocatoria era el fruto de una iniciativa del ministro de Exteriores soviético Molotov, quien había avanzado la propuesta en el transcurso de una enésima reunión de los ministros de Exteriores celebrada en Londres en enero. Las reacciones del gobierno francés ante la caída de Dien Bien Phu no parecían constituir una buena base para el resultado positivo de la conferencia. En efecto, en un primer momento, las conversaciones se arrastraron sin perspectivas de éxito, pero una circunstancia inesperada sobrevino para impulsarlas: en junio, el gobierno francés, presidido por Laniel, quedaba en minoría y se veía obligado a dimitir; le sucedía un gobierno encabezado por Pierre Mendès France, un ex partisano que había sido representante de Francia en el Fondo Monetario Internacional y que tenía una notoria inclinación por liberar a Francia de la trampa vietnamita. Así pues, se determinaba una situación más abierta, en la que tanto a Molotov como a Zhou Enlai les resultó fácil presionar al representante de Vietnam del Norte, Fam Van Dong, para que suavizara su intransigencia. Por lo tanto, fue posible, el 20 y 21 de julio, llegar a un acuerdo por el que se fijaba en el paralelo 17 la línea de demarcación entre los dos Vietnam y los firmantes se comprometían a convocar, para julio de 1956, elecciones libres en todo el país, cuya regularidad vigilarían los miembros de la comisión del armisticio (Polonia, Canadá y la India). La delegación norteamericana se limitó a tomar nota del acuerdo, para no tener que reconocer a la China popular, mientras que la de Vietnam del Sur se negó a reconocer su validez.

La conferencia de Ginebra terminaba, así, con el fracaso de hecho de los Estados Unidos, al que ellos reaccionaron de la misma manera en que los soviéticos lo habían hecho ante sus fracasos en Europa: el mencionado tratado que instituía la SEATO (*South East Asia Traty Organisation*) era, como el pacto de Varsovia, una forma de aceptar una situación, al menos temporalmente, estabilizada.

Por otra parte, la importancia de los acuerdos de Ginebra no se mide en términos de vencedores y vencidos, ya que no sólo consiste en que por primera vez, aunque en una posición irregular, China había sido admitida en una negociación internacional, sino sobre todo en que habían quedado restablecidos los contactos entre los representantes de las grandes potencias y éstos habían conseguido encontrar un acuerdo que pusiese fin, al menos temporalmente, a un conflicto extremamente sangriento. En efecto, en él habían muerto 92.000 hombres del contingente francés, de los cuales

15.000 eran africanos y 46.000 indochinos, y entre 400.000 y 500.000 vietnamitas, entre civiles y militares.

El éxito de la conferencia de Ginebra, además, no fue el único indicio del cambio del clima internacional. También en 1954, en octubre, tras la conclusión de las conversaciones entre Inglaterra, Italia y Yugoslavia, se llegaba en Londres a un acuerdo según el cual el Territorio Libre de Trieste quedaba repartido entre una zona italiana, que incluía la ciudad de Trieste, y una zona asignada a Yugoslavia: otra manzana de la discordia en el contencioso de la guerra fría quedaba así neutralizada y la frontera ítalo-yugoslava dejaba de ser una zona de fricción. Mucho más importante fue la firma, en mayo de 1955, de un tratado de estado con Austria que ponía punto y final al régimen de ocupación cuadripartita que ésta tenía en común con Alemania, y solucionaba un problema que se arrastraba desde hacía años sin llegar a resultado alguno. Con este tratado, Austria se comprometía a declarar y mantener permanentemente su neutralidad. Este resultado es tanto más significativo si se considera que la firma del tratado se llegó a pesar de la opinión contraria del ministro de Exteriores soviético Molotov.

Posteriormente, en diciembre, se llegó a un acuerdo por el que entraban a formar parte de la ONU algunos estados europeos –Italia, Bulgaria, Rumania, Hungría, Albania, Austria y España–, cuyo ingreso en la Organización se había visto impedido hasta entonces por los vetos cruzados de las dos superpotencias. Mientras tanto, como se ha visto, también el problema alemán se iba, si no resolviendo, sí estabilizando, en el sentido de que la división del país era ya un hecho consumado y, como tal, aceptado por ambas partes.

Se habían creado, así, las condiciones para que aquel encuentro «al más alto nivel» preconizado por Churchill ya en 1953, pudiese celebrarse. En julio de 1955, Kruschev con Bulganin, para la URSS, Eisenhower con Foster Dulles, para Estados Unidos, Eden con MacMillan, para Inglaterra, y Faure con Pinay, para Francia, se encontraron en Ginebra y debatieron una agenda especialmente cargada y complicada. La cumbre no produjo ningún resultado concreto, pero fue un útil intercambio de ideas y durante unos meses la expresión «espíritu de Ginebra» fue constante en la prensa internacional, aunque no duraría mucho. El hielo de la guerra fría no se había derretido, sino sólo agrietado.

23.3. EL XX CONGRESO DEL PCUS Y LA DESESTALINIZACIÓN

En el apartado anterior hemos mencionado los cambios que en la Unión Soviética siguieron a la muerte de Stalin, pero lo hemos hecho desde un en-

foque básicamente externo, es decir, desde el punto de vista de las repercusiones que las nuevas orientaciones de la política exterior soviética tuvieron en el sistema de las relaciones internacionales durante los años de la distensión. Claro está, sin embargo, que tales orientaciones forman parte de un proceso más general de revisión que concernió a la sociedad soviética en su conjunto y en su misma configuración interna. Por lo tanto, será necesario ahora dar un paso atrás, para volver a recorrer el desarrollo de esa fase de la historia soviética que suele conocerse con el nombre de «desestalinización».

El poder arbitrario y despótico de Stalin había borrado cualquier regla o distinción de competencias y de organismos del estado. La principal preocupación de sus hombres de confianza, que recogieron su sucesión, fue la de restaurar, como se dijo entonces, una «dirección colegial». Ello implicaba, ante todo, trazar, aunque aproximadamente, una línea de demarcación entre las funciones de partido y las del estado. La presidencia del consejo de ministros fue por tanto confiada a G. Malenkov, que dejaba así la secretaria de partido, y que estaría acompañado por cuatro vicepresidentes: Molotov, Beria, Kaganovich y Bulganin. Éstos formaban parte también del *Presidium* del partido, junto con el viejo general Voroshilov y con Nikita Kruschev, él también antiguo colaborador de Stalin. A pesar de no tener la calificación oficial de secretario del partido, Kruschev fue desempeñando las funciones propias de este cargo. Los dos organismos quedaban, pues, solapados y estaban integrados por el restringido círculo de los «compañeros de armas» de Stalin. Sin embargo, existía un poder que ningún organismo del partido o del gobierno estaba en condiciones, una vez muerto Stalin, de controlar, un auténtico estado en el estado. Me refiero a la policía política, que dependía de Beria. Si se quería, como se proclamaba, asegurar al país una «dirección colegial» y restablecer la «legalidad socialista», era preciso poner fin a esta anomalía. La amnistía que, en abril, fue concedida para los delitos castigados con un máximo de cinco años y el anuncio de la plena rehabilitación de un grupo de médicos, muchos de ellos judíos, que Stalin había culpado, sin ningún fundamento, de estar implicados en un complot y de ser los responsables de asesinatos políticos, fueron los primeros indicios de la voluntad de resolver este problema. Un indicio mucho más llamativo se produjo en junio, cuando, en una dramática reunión del *Presidium*, Beria fue detenido y, pocos meses después, ajusticiado. Consecuentemente, la policía política dejó de depender del ministerio de Interiores y fue sometida al control del Comité Central. A lo largo de 1953 y 1954 recuperaron la libertad algunos miles de reclusos en campos de concentración. El país se sentía así seguro de que los tiempos del terror indiscriminado y del arbitrio se habían terminado. Era desde luego un paso importante, pero insuficiente para sacudir la pasividad de un pueblo desorientado, que la guerra y los sacrificios de la reconstrucción habían llevado hasta un nivel de vida poco superior al de la

subsistencia. Hacía falta inyectarle una dosis de confianza, y esta fue la labor a la que se aprestó Malenkov.

En el discurso de agosto de 1953, en el que expuso su programa de gobierno, Malenkov se pronunció a favor de una sustancial rectificación de los criterios que habían presidido la elaboración de todos los anteriores planes quinquenales, incluido el quinto, lanzado en 1951, y en particular de la prioridad que éstos otorgaban a la industria pesada en detrimento de la ligera y de la agricultura. Con este fin, se revisaron los índices del plan, en favor de la producción de los bienes de consumo; se procedió a desgravaciones fiscales sobre las parcelas individuales de los cultivadores de los *koljoces* y a una considerable subida de los precios que el estado pagaba a los mismos *koljoces*. Al mismo tiempo, por iniciativa de Kruschev, se lanzaba un llamamiento para la valorización de las tierras vírgenes de Kazajstán, Siberia y de la orilla oriental del Volga, llamamiento al que respondieron cientos de miles de jóvenes voluntarios. En cuanto a la industria, la medida más contundente fue la abrogación de la prohibición para los obreros de despedirse y optar por otro puesto de trabajo, en vigor desde la época de la guerra. Tras los grandes desajustes de los años treinta, el mercado del trabajo comenzaba a salir de una era de rigidez y de esclerosis.

Sin embargo, en febrero de 1955 Malenkov era destituido de su cargo y su lugar era ocupado por Bulganin. La motivación oficial fue el papel que había desempeñado, junto con Beria, en el oscuro asunto de Leningrado (véase cap. 20), pero lo más probable es que lo que motivó su desgracia política fueron las posiciones innovadoras que él había defendido no sólo en la política interna, sino también, como se ha visto, en la exterior, y las resistencias que tales posiciones encontraron entre los ambientes más conservadores de la clase dirigente soviética.

En su calidad de secretario del partido, Kruschev había tenido un papel no secundario en la destitución de Malenkov. Pero él también era consciente de la necesidad y la urgencia de una reforma y de una renovación del sistema político estalinista y estaba decidido a franquear los obstáculos y doblegar las resistencias que encontraba en su camino.

En el discurso que leyó desde la tribuna del XX Congreso en febrero de 1956, el apartado que concernía a la situación internacional contenía muchas novedades. Como hemos visto, por primera vez la coexistencia pacífica entre los dos sistemas era asumida como principio inspirador de la política exterior soviética y, aunque no sin ambigüedades, se retomaba la idea, ya expresada por Malenkov, de la inviabilidad de la guerra atómica. Además, por primera vez se reconocía la posibilidad de distintas vías de transición al socialismo, incluida la parlamentaria. La exposición de Kruschev, en cambio, era más reticente y genérica en el apartado relativo a los problemas del país. Se hablaba de un «democratismo soviético» y se subrayaba la necesidad

de volver a la «dirección colegial». La referencia a Stalin estaba implícita, pero nunca se nombraba al dictador. El que rompió este silencio fue Anastas Mikoyan, quien, aunque tampoco nombraba explícitamente a Stalin, se refirió abiertamente al «culto de la personalidad» del que el dictador había sido objeto durante dos décadas y a las falsificaciones de la historia contenidas en el breve manual del que Stalin había sido el principal autor y que hasta entonces había sido una lectura obligatoria, casi un texto sagrado, para todos los comunistas, dentro y fuera de la URSS. Así pues, el camino estaba abierto para la denuncia de los crímenes de Stalin que, concluidos ya los trabajos del Congreso, Kruschev pronunció ante una audiencia atónita.

Su informe, que debía mantenerse en secreto, se difundió rápidamente y fue publicada por la prensa extranjera, ocasionando una enorme revuelo. En Tiblisi, capital de Georgia y patria chica de Stalin, se produjeron manifestaciones en favor del dictador fallecido, durante las cuales la policía usó las armas y causó algunos muertos. En realidad, la relación secreta de Kruschev se parecía más a un desahogo que a un análisis; sin embargo, representaba un indicio de ruptura con el pasado. La pregunta que ahora todos se hacían era si a las palabras seguirían los hechos. La decisión de proceder con rapidez a la revisión de las acusaciones dirigidas en su tiempo contra los reclusos en los campos de concentración y la liberación de un gran número de éstos, parecen proporcionar una primera respuesta positiva a este interrogante. Entre los presos liberados y devueltos a la sociedad y a sus familias se encontraba Alexander Solzhenitsyn, quien en 1962 publicará su *Un día en la vida de Ivan Denissovich*, un texto de alto valor literario y un testimonio estremecedor.

Sin embargo, lo que el país se esperaba no era sólo una reparación de los crímenes del pasado, sino también, y sobre todo, una mejora de sus condiciones de vida. Pero para ello era necesario encontrar recursos, lo cual era posible sólo mediante una reducción del gasto militar. Malenkov, como se ha visto, de alguna manera se había percatado de ello. En el transcurso de su breve presidencia, los gastos militares registraron un incremento limitado, de 25,5 a 27,6 mil millones de dólares, inferior al que se había registrado durante los últimos años de Stalin y del que conocerían en los años sesenta. Es evidente que una reducción del gasto militar implicaba también una revisión de las coordenadas de la política exterior.

El ascenso de Kruschev a la secretaría del partido marca una ruptura con la política aislacionista de Stalin. En efecto, el nuevo secretario dio a la política exterior soviética una dimensión distinta y más dinámica. Superando la oposición de su ministro de Exteriores Molotov, insistió para que se llegara a la firma del tratado de estado con Austria (véase cap. 22) y, al mismo tiempo, para que se pusiera fin a la larga y agria diatriba ideológica con la Yugoslavia de Tito, que se arrastraba desde 1948, incluso a costa de admitir las

responsabilidades soviéticas. Para este fin, no dudó, en mayo de 1955, en viajar a Belgrado y sellar con esta iniciativa espectacular la reconciliación. La consecuencia lógica fue la disolución del Cominform, en abril de 1956. En lo que respecta a la vertiente asiática, en octubre de 1956 la Unión Soviética y Japón hicieron pública una declaración conjunta con la que aceptaban el fin de la guerra y establecían relaciones diplomáticas. En noviembre y diciembre del mismo año, Kruschev y Bulganin visitaron la India, Birmania y Afganistán. A pocos meses de la conferencia de Bandung, este viaje quería ser una demostración del interés de la Unión Soviética hacia el movimiento de los países no alineados (véase cap. 25). Otra señal en este sentido fue la revalorización, con ocasión de ese viaje, de la figura y de la obra de Gandhi.

Todas estas iniciativas de distensión por parte de Kruschev y de su ministro de exteriores, Seipov, formaban parte de una concepción global, sin exclusiones, de la política exterior soviética. Su presupuesto era la conciencia de que la URSS, tras la victoria en la segunda guerra mundial y el consiguiente fin del «cerco capitalista», se había convertido en una gran potencia, lo que implicaba que se hiciera cargo de los costes elevados que una política de gran potencia necesariamente conlleva. A partir de 1957, los gastos militares gravaron en una medida siempre creciente en el balance del estado soviético; al mismo tiempo, aumentaron también las ayudas a los países en vías de desarrollo, que en 1964 llegarán a tocar la cifra de 998 millones de dólares. Eran todos recursos sustraídos a las inversiones internas y eran obstáculos en el camino de la reconversión de la economía en el sentido del aumento del consumo interno, auspiciado por Malenkov. Ahí está, en este círculo vicioso entre política interna y política exterior, la mayor limitación del nuevo curso de Kruschev y de la política de desestalinización. Los hechos no tardarían en demostrarlo.

23.4. LOS PAÍSES SATÉLITES Y LA INSURRECCIÓN DE HUNGRÍA

Ya hemos tenido ocasión de observar cómo, en los años inmediatamente siguientes al final de la segunda guerra mundial, la Europa centro-oriental no presentaba un panorama político y social homogéneo. La transformación de las «democracias populares» en «estados satélites» de la Unión Soviética se produce, en efecto, en un segundo momento y por etapas sucesivas. Las principales fueron las elecciones polacas de enero de 1947, las húngaras de agosto, la creación del Cominform en septiembre y finalmente la toma del poder por parte de los comunistas en Checoslovaquia en febrero de 1948, todos episodios que ya hemos analizado. Ahí se inicia el proceso de homologación.

De hecho, entre 1948 y 1953, en todos los estados de Europa centroriental se dieron unas constituciones modeladas en la soviética y todos adoptaron unos planes quinquenales que remedaban los mismos objetivos y los mismos desequilibrios entre los varios sectores económicos, típicos de los precedentes soviéticos. También en este caso, el sector más descuidado fue el agrícola, aunque el proceso de colectivización se llevó a cabo con mayor gradualidad y con formas distintas a las de la colectivización forzosa de la URSS. Es el caso, sobre todo, de Polonia, cuyo líder, Wladislaw Gomulka, en su tiempo no había ocultado su contrariedad a la solución colectivista que, en su opinión, para Polonia sería «económica y políticamente dañina».

El único estado que se libró de este proceso de homologación fue, como también hemos visto, la Yugoslavia de Tito. Tras su exclusión del Cominform, el Partido Comunista Yugoslavo no se limitó a cambiar su nombre por el de Liga de los Comunistas yugoslavos, sino que emprendió un nuevo curso de política económica que preveía el abandono de la colectivización del campo, la formación de consejos obreros a los que se confiaba la propiedad y la autogestión de las fábricas, y finalmente la elaboración de una propia plataforma ideológica basada en la recuperación de la doctrina original del marxismo-leninismo, contrapuesta a su deformación estalinista. También en política exterior, Yugoslavia fue asumiendo una posición cada vez más autónoma al situarse, como único país europeo, en el campo de los países no alineados. Los teóricos de esta revisión antiestalinista fueron Eduard Kardely, Vladimir Dedijer y Milovan Gilas. Este último fue más allá en la crítica al sistema estalinista, publicando en 1957, en el extranjero, un libro titulado *La nueva clase*, en el que compendiaba las ideas que había expresado en sus obras anteriores. El título se refería a la que, en opinión de su autor, era la burocracia de los funcionarios del partido, los *apparatciki*, que detentaban el poder en la URSS. Esto le acarreó la expulsión del partido y siete años de prisión.

Visto desde Moscú, el «titismo» cobraba la dimensión de la herejía, algo parecido a lo que había sido el trotskismo en los años treinta, objeto de una auténtica caza de brujas. La connivencia con Tito constituyó el principal cargo en los procesos contra los dirigentes comunistas que se celebraron en los varios países satélites durante los últimos años de Stalin. En efecto, la atmósfera siniestra que reinaba en Moscú se extendió a los países de la Europa del este. Entre 1948 y 1952, una serie de procesos se promovieron contra representantes comunistas acusados de simpatizar con las posiciones de Tito: el albanés Xoxe, el búlgaro Kostov, el húngaro Rajk y finamente el más clamoroso de todos, el que vio como imputado al secretario general del Partido Comunista Checoslovaco, Rudolf Slansky, en 1952. En Polonia, el secretario del partido, Wladislaw Gomulka, ya había sido destituido en 1949. Víctimas de esta oleada de persecuciones fueron también los mayores

representantes de la Iglesia católica, como el arzobispo de Praga, monseñor Beran, el húngaro, Mindtsenty y el polaco, Wyszinski.

El desarrollo que conocieron en estos años los países de la Europa del este fue en muchos aspectos un desarrollo desequilibrado. Los más retrasados procedieron con un ritmo más acelerado que los que ya poseían una base industrial y dentro de cada país los progresos de la industria se acompañaban con el estancamiento de la agricultura; en fin, los incrementos de los índices de producción no se correspondían con los de la renta *per capita* y del consumo, quedando estos últimos constante y sensiblemente inferiores a los primeros. Además, por lo que respecta a los países derrotados en la guerra –Hungría, Bulgaria y Rumania– cabe tener en cuenta el peso exorbitante de las reparaciones. Sin embargo, pese a ser desequilibrado, sí hubo desarrollo y con él, un cierto proceso de modernización. Se ha calculado que, desde 1950 a 1961, los trabajadores de la agricultura pasaron del 56,3 al 38,6 % en Checoslovaquia; del 57 al 47 % en Polonia; del 73,9 a 65,9 % en Rumania; y del 42,2 al 27,9 % en Hungría. Esta disminución de trabajadores del campo, se correspondió con un incremento de los del sector industrial: 400.000 obreros más en Bulgaria; 465.000 en Yugoslavia; 600.000 en Checoslovaquia; 750.000 en Hungría; 825.000 en Rumania; 1.900.000 en Polonia, es decir, un aumento de cerca de un 33 % entre 1948 y 1953. Progresos importantes se realizaron también en la escolarización de masas. En muchos países se introdujo un sistema de cupos de acceso a la universidad que favorecía a los hijos de obreros y campesinos. Todo ello, salvo en el caso de Checoslovaquia, representaba una ruptura con un pasado de dejadez y atraso. «El área, a pesar de todas sus carencias y sus problemas, nacía para la era industrial» (Brezinky, 1975).

Sin embargo, el consenso que el desarrollo había generado en su fase inicial, iba poco a poco disminuyendo, a medida que los desequilibrios y las distorsiones que él mismo entrañaba, se iban manifestando. Paradójicamente, aunque no tanto, se puede decir que cuanto más avanzaba el proceso de modernización, tanto más generaba a críticos y opositores. Los primeros síntomas de malestar e impaciencia, en efecto, no llegaron del campo y de los campesinos hostiles y desconfiados hacia las medidas de colectivización, sino de las ciudades y de la nueva clase obrera y, en un segundo momento, de la universidad y la *intelligentsia* que allí se había formado. La primera manifestación de este malestar fue la revuelta obrera que se produjo en 1953 en la zona este de Berlín, de la que volveremos a ocuparnos. Casi al mismo tiempo, en el verano de 1953, también la ciudad checa de Pilsen fue escenario de manifestaciones de protesta análogas.

Estas señales revelaban un malestar extenso y profundo y no dejaron de suscitar preocupación en Moscú. De la necesidad de una revisión de las relaciones entre la URSS y los países satélites era consciente, como veremos,

el propio Beria, pero lo era también Malenkov al asumir el cargo de primer ministro. El objetivo que éste perseguía con los países satélites era el mismo que el de su política interna, es decir, una reforma de la planificación que favoreciera la producción de bienes de consumo y una política económica dirigida a elevar las rentas y, en consecuencia, ampliar el consumo.

El país donde estos nuevos planteamientos encontraron mayor audiencia fue Hungría. Ahí, en junio de 1953, Imre Nagy, un hombre de confianza de Malenkov, había sucedido en el cargo de presidente del consejo de ministros a Matyas Rakosi, un estalinista irreductible. En el discurso que pronunció en el Parlamento el 4 de julio, el nuevo presidente del consejo se declaró favorable a una política económica basada en la prioridad de la industria productora de bienes de consumo y en la reducción de las medidas de colectivización en el campo; más en general, abogó por la supresión de los campos de concentración y la democratización de la vida pública. Pero tuvo que enfrentarse al sabotaje de Rakosi, que conservaba el cargo de secretario del partido, al aparato y a la brevedad del tiempo del que disponía. La exoneración de Malenkov en febrero de 1955 marcó también el fin del experimento de Nagy y el triunfo de Rakosi.

El «efecto Malenkov» no se limitó sólo a Hungría, sino que fue sentido, en distinta medida, en todos los países satélites. Pero sus consecuencias prácticas no fueron más allá, en su conjunto, de algunas rectificaciones en la política económica y algunos relevos en las cúpulas del partido y del estado. Así, en Rumania, Gheorghiu Dej dejó temporalmente su puesto de secretario del partido a Gheorghe Apostol, aunque lo recobró tras la caída de Malenkov; en Checoslovaquia, tras la muerte de Clement Gottwald, el cargo de presidente de la república fue otorgado a Antonin Zapotocki, él también, como Nagy, protegido por Malenkov. Además, se procedió a la rehabilitación de algunos de los dirigentes víctimas de los procesos de los años 1948-1952. Más allá no se pudo ir, debido a las discusiones que en cada país oponían a los renovadores y los conservadores, discusiones que a su vez reflejaban el agrio enfrentamiento político en el seno del grupo dirigente soviético. De todas maneras, en todas partes se produjo una relajación de los frenos, lo que contribuyó a estimular reflexiones críticas y alimentar expectativas y esperanzas. A finales de 1955 se constituyó en Budapest el círculo Petofi, que recogía a intelectuales que estarían entre los protagonistas de la insurrección de octubre.

Los acontecimientos posteriores a la desgracia política de Malenkov concurrieron en hacer subir el nivel de la agitación política e intelectual. La espectacular e inesperada reconciliación con aquel Tito que hasta el día anterior había sido el blanco de todas las posibles críticas e injurias; la rehabilitación, anunciada en Moscú en febrero de 1956, del Partido Comunista Polaco, que había sido disuelto en 1938; y, sobre todo, la denuncia del culto

de Stalin, que hizo Kruschev en su informe secreto, convirtieron una situación ya tensa en explosiva.

La primera chispa prendió el 28 de junio de 1956 en Poznan, en Polonia, donde una manifestación obrera en protesta por unas reducciones salariales, muy pronto adquirió las dimensiones de una insurrección, que la policía reprimió a sangre y fuego: al final del día, se contaron cincuenta y cuatro muertos y trescientos heridos. En agosto, un millón de personas se reunieron en la llanura del santuario de la Virgen negra de Chestocowa, lugar histórico del patriotismo polaco. En los meses siguientes, la tensión fue aumentando cada vez más hasta llegar a su cúspide en octubre. Esta oleada de protestas cogió al partido en un momento especialmente delicado. A la muerte de Boleslaw Bierut, en abril de 1956, le había sucedido en el cargo de secretario Eduard Ochab, un hombre del aparato que se vio obligado a ejercer sus funciones presionado tanto por los conservadores como por los renovadores. Al fondo, seguía presente la figura del más prestigioso dirigente comunista polaco, W. Gomulka, que en 1949 había sido destituido de la secretaría del partido y sucesivamente enviado a prisión. Ochab, al darse cuenta de que Gomulka, con su prestigio, era la única carta de la que el partido disponía para mantener el movimiento de protesta dentro de los límites del marco político e institucional existente, se apresuró a liberarlo. El 13 de octubre, la oficina política del partido aupaba a Gomulka al cargo de primer secretario y convocaba para el día 19 el pleno del partido, al que tocaba tomar esta decisión. Se sucedieron días convulsionados, durante los cuales se temió que el ejército, a cuya cabeza estaba el general ruso Rokossowsky, interviniera para reprimir la movilización popular. Pocas horas antes de la apertura del pleno se presentó en Varsovia, absolutamente inesperada, una delegación soviética encabezaba por Kruschev en persona y de la que formaban parte nada menos que once generales. Las negociaciones entre las dos partes fueron extremamente directas y tensas, pero al final Kruschev tuvo que aceptar la elección de Gomulka al tiempo que éste se comprometía a que Polonia permaneciera en el Pacto de Varsovia. Así, la crisis quedaba superada y un nuevo y más tolerante liderazgo se instalaba en el gobierno del país. En las elecciones de febrero de 1957, Gomulka obtuvo un notable éxito personal.

Los acontecimientos del octubre polaco se acababan de terminar, cuando la crisis política en Hungría entraba en su fase más aguda y dramática. Entre los países satélites, Hungría fue, en efecto, donde la denuncia del «culto de la personalidad» y de los crímenes de Stalin, hecha por Kruschev, ocasionó una protesta abierta contra el gobierno y contra la injerencia soviética. Durante todo el mes de octubre, Budapest y otras ciudades del país fueron escenario de manifestaciones estudiantiles y populares cada vez más imponentes. Lo que exigían los manifestantes era la revisión del proceso a

Lazlo Rajk y su rehabilitación, además del retorno al gobierno de Nagy, el comunista reformador que, como se ha visto, ya había desempeñado el cargo de presidente del consejo de junio de 1953 a marzo de 1955 y que, tras la caída en desgracia de su protector en Moscú, Malenkov, había sido sustituido por Erno Gero, un estalinista intransigente. Posteriormente, Nagy había sido incluso expulsado del partido. Con el paso de los días, la situación se hacía cada vez más insostenible. La tensión alcanzó su techo en la jornada del 23 de octubre, cuando una manifestación de protesta en la que participaban cientos de miles de ciudadanos tomó el centro de Budapest. En esta circunstancia, el Comité Central del partido se vio obligado a devolver a Nagy, quien mientras tanto había sido readmitido en el seno de partido, el cargo de presidente del consejo, mientras que Gero conservaba el de secretario del partido. Las tropas soviéticas de ocupación fueron puestas en estado de alarma y en la jornada del 24 los tanques soviéticos hicieron acto de presencia en las calles de la capital. Esto se había producido con el aval del propio Nagy, convencido de que la protesta estaba alimentada por elementos provocadores y que por tanto era posible restablecer la calma. Fue un grave error de valoración: en los días siguientes, la protesta fue convirtiéndose en una auténtica insurrección armada, que provocó muertos y heridos en ambos lados. Los insurrectos pedían la dimisión de Gero y la retirada de las tropas soviéticas. Fue en esta atmósfera candente cuando Anastas Mikoyan y Mijail Suslov legaron a Budapest para discutir con Nagy sobre la posibilidad de una solución política *in extremis*. El resultado de estos contactos fue que Gero fue sustituido en la secretaría del partido por Janos Kadar, un comunista que, a pesar de haber sido compañero de prisión de Rajk y de haber sufrido la tortura, no estaba dispuesto a la ruptura con la URSS; el 28 de octubre se anunció la retirada de las tropas soviéticas, que efectivamente se produjo en los días inmediatamente siguientes. Pero tampoco este anuncio sirvió para tranquilizar los ánimos de los insurrectos, que en la jornada del 30 asaltaron y expugnaron la sede de la Federación Comunista, matando a sus ocupantes. El mismo día, Nagy anunciaba la formación de un nuevo gobierno, con la participación de los partidos democráticos existentes en el país en el momento de la liberación y en el que el jefe militar de los insurrectos, Pal Maleter, asumía el cargo de ministro de defensa. Dos días después, el 31 de octubre, el nuevo gobierno proclamaba la salida de Hungría del pacto de Varsovia.

Mientras tanto, en Estados Unidos la campaña electoral estaba en su recta final y, a pesar de que la confirmación de Eisenhower parecía descontada, el momento no era propicio para decisiones radicales. El 30 de octubre, Foster Dulles, autorizado por el presidente, declaraba públicamente que los Estados Unidos «aun deseando la independencia de los países satélites no tenían más propósitos» y que «no contarían con estas naciones como

potenciales aliados». Pese a su ambigüedad, el mensaje era tranquilizador y como tal fue recibido en Moscú. A partir de este momento, los acontecimientos precipitaron. Al amanecer del 4 de noviembre, las tropas soviéticas entraban en Budapest e instalaban un nuevo gobierno «obrero y campesino» presidido por Janos Kadar, mientras que Imre Nagy se refugiaba en la embajada yugoslava. Capturado el 22 de noviembre mientras intentaba salir del país con un salvoconducto yugoslavo, será condenado a muerte en junio de 1958.

La última semana de octubre de 1956 representa un momento crucial en la historia de las relaciones internacionales de la posguerra. La insurrección húngara, en efecto, coincidió y se mezcló con la crisis causada por la intervención franco-inglesa en Suez, de la que hablaremos en breve. Esta coincidencia, que implicaba directa o indirectamente a una pluralidad de estados, hubiera podido ocasionar, en un distinto contexto internacional, una crisis más larga y de mayores proporciones; pero no fue así. El sistema y el orden bipolar estaban tan consolidados que se habían convertido en una especie de rutina, y aguantaron la prueba.

Por otra parte, ello no debe entenderse en el sentido de que el escenario del gran teatro del mundo había permanecido invariado. Si el marco seguía siendo el mismo, habían cambiado los paisajes y los personajes retratados en el cuadro. Es precisamente de esos cambios de los que nos ocuparemos en las páginas que siguen.

24

Europa occidental y Japón en los años cincuenta

24.1. LA RECONSTRUCCIÓN EN EUROPA OCCIDENTAL

La labor a la que tenían que enfrentarse todos los estados europeos tras la conclusión de la guerra era, obviamente, la de la reconstrucción. Para un continente que había sido el principal escenario de batalla en el transcurso de la segunda guerra mundial, se trataba de una tarea ardua y plagada de incógnitas y dificultades. Pero, a diferencia de lo que había sucedido en la primera posguerra, la reactivación económica que se registró en la mayoría de los países ex beligerantes inmediatamente después del fin de las hostilidades, no fue seguida por una recesión similar a la que se había producido en 1920, sino que continuó en expansión. En 1947, es decir, en una fecha en la que el flujo de las ayudas del plan Marshall todavía no había llegado, la producción industrial en algunos países europeos, como Inglaterra, había superado el nivel prebélico, y en otros, entre ellos Francia e Italia, no estaba lejos de alcanzarlo. La excepción es Alemania, pero ello no fue a consecuencia de una opción política, sino simplemente del hecho de que era un país dividido en cuatro zonas de ocupación y de que no existía un gobierno alemán. En su conjunto, la producción de los países que se adherirán a la OECE era, a finales de 1947, igual al 87 % de la de 1938.

Esta reanimación de la producción se debió esencialmente a que el flujo de las inversiones no quedó interrumpido, gracias también a la acción de estímulo y de propulsión ejercida por parte del estado. En efecto, en todos los grandes países europeos la intervención del estado se realizó en formas distintas, pero todas ellas pueden remontarse a la fórmula de la «economía mixta» o, como otros prefieren llamarla, «neocolectivista».

En Inglaterra el gobierno laborista procedió, entre 1945 y 1951, a poner en marcha un vasto programa de nacionalizaciones que afectó a todos los

sectores básicos, como la industria del carbón, el sistema de transportes, la industria eléctrica y el propio Banco de Inglaterra. En Francia, el Parlamento aprobó, en 1946, un plan cuadrienal de modernización y de infraestructuras (*equipment*), más conocido por el nombre de su principal impulsor, el *Plan Monnet*. Dicho plan se proponía modernizar el aparato de producción del país, caracterizado por el predominio y la ubicuidad de la pequeña y mediana empresa, apostando por la gran empresa tecnológicamente avanzada. Fue en este contexto en el que se procedió a un vasto programa de nacionalizaciones, que implicó al sector bancario, al de los seguros, de los transportes y a las fábricas automovilísticas de Renault y Berliet. También en Italia, donde el estado había heredado del fascismo un sistema bancario y un aparato industrial en los que el sector con participación del estado ocupaba un lugar preeminente y una posición estratégica, la idea de un plan que apostara, como el de Monnet, por los sectores de la industria mecánica, petroquímica y siderúrgica, era defendida por autorizados economistas y compartida por algunos políticos, aunque chocaba con las orientaciones liberalistas predominantes en los gobiernos. Los planes elaborados en su momento en el ámbito del Instituto para la Reconstrucción Industrial (IRI), que se inspiraban en esos criterios, no comenzarán a encontrar su aplicación sino al final de los años cuarenta, por el impulso de factores y vinculaciones externos, acarreados por el plan Marshall. De hecho, en 1948 se sometió a la OECE el plan de desarrollo elaborado por un grupo dirigido por el economista Pasquale Saraceno.

Sin embargo, cabe tener en cuenta que, si el objetivo prioritario de la intervención del estado era obviamente el de la reactivación de la economía y de la reconstrucción, éste, por otra parte, no podía ignorar la demanda apremiante de una mayor equidad y justicia social que procedía del mundo del trabajo y de sus organizaciones, que contaban con millones de afiliados y se habían reconstituido sobre bases unitarias. En la CGT francesa, igual que en la CGIL italiana y en la FGTB belga, habían confluido, en efecto, todas les centrales sindicales –católicas, socialistas y comunistas– que existían en la anteguerra y en el caso de Italia, antes del fascismo, mientras que en Inglaterra el TUC contaba con diez millones de afilados. Para los gobiernos eran interlocutores obligatorios y exigentes, que no se conformaban con pedir aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo para los trabajadores ocupados, sino que presionaban para que se empeñaran en la lucha contra el paro y en la puesta en marcha de un sistema generalizado de protección y seguridad social. Era ésta una exigencia de la que, en el clima de la posguerra, ningún gobierno podía librarse y, de hecho, ninguno se libró de ella.

En Inglaterra se puso en marcha un ambicioso programa dirigido a realizar aquel objetivo del pleno empleo que el liberal William Beveridge, en su célebre informe de 1942, había indicado como prioritario, y a asegurar para

cada ciudadano una protección social adecuada, «de la cuna al ataúd». En este contexto se sitúa la entrada en funcionamiento, en 1948, de un servicio sanitario nacional, que el ministro de Sanidad, Aneurin Bevan, un ex minero y sindicalista, logró llevar a cabo a pesar de las resistencias de la poderosa *British Medical Association*; también en este contexto se produjo la potenciación del sistema de seguros. Un esfuerzo considerable se hizo para impulsar la reanimación de las áreas deprimidas del país, favoreciendo la instalación de nuevos asentamientos industriales, y para promover un programa de edificación popular. Pero este últimos sufrió retrasos y limitaciones, un punto débil que los conservadores no dejaron de aprovechar con éxito en la campaña electoral de 1951. El coste, económico y político, de estas reformas fue elevado, pero éstas contribuyeron a reducir las distancias sociales de la anteguerra e hicieron de Inglaterra un país más justo, un dechado de *welfare state*.

En Francia, con dos sucesivas actas legislativas, respectivamente de 1945 y 1946 (leyes Croizat), el sistema de protección y de *sécurité sciale* se extendió a todo el trabajo dependiente. Su financiación quedaba asegurada en una cuarta parte con la contribución de los trabajadores, y en el resto por los empresarios y su gestión estaba en manos de consejos electivos mixtos. En Italia, el artículo 138 de la Constitución estableció el principio de la distinción entre la asistencia debida a cada ciudadano y la seguridad social, debida a cada trabajador. Pero no hubo innovaciones sustanciales respecto de la anteguerra. Durante todos los años cincuenta y después, el trabajador italiano siguió estando no sólo peor pagado, sino también menos protegido que sus compañeros europeos.

Sin embargo, un gasto público tan considerable entrañaba para cada país el riesgo de la inflación y el consiguiente reflejo negativo que la subida de los precios tenía en el nivel de los salarios y de las retribuciones. Naturalmente, el poder adquisitivo de estas últimas podía ser defendido mediante el mecanismo de la escala móvil, adoptado en varios países, pero esto repercutía en una mayor inflación. Para salir de este círculo vicioso, los estados recurrieron a distintas medidas y recetas, que surtieron distintos efectos.

El país que libró con mayor éxito la lucha contra la inflación fue Bélgica, mediante la emisión de una nueva moneda y el bloqueo temporal de los depósitos bancarios, con la consiguiente reducción drástica de la moneda en circulación. Estas medidas deflacionarias preservaron el poder adquisitivo de los salarios y el nivel de los consumos y acabaron, pues, por favorecer la reactivación de la producción. También en Inglaterra, la lucha contra la inflación tuvo éxito, gracias a una fuerte subida de la presión fiscal y a la política de «austeridad» emprendida por el Gabinete de Guerra y continuada por el ministro de Hacienda, Stafford Cripps, ex embajador en Moscú y líder en los años treinta de la *Socialist League*. Inglaterra fue el ultimo país de Europa en abolir el racionamiento. En cambio, en Holanda la lucha contra la in-

flación registró un sustancial fracaso, a pesar de que allí también se realizó el cambio de moneda, y en Francia, donde la propuesta de cambio de moneda, conjugado con la introducción de un impuesto progresivo, presentada por el ministro de Economía, Pierre Mendès-France, fue dejada de lado. Por lo tanto, la carrera de la inflación continuó y habrá que esperar a los años cincuenta para que frene y finalmente se detenga. Tampoco en Italia, una propuesta análoga, avanzada desde la izquierda, fue aceptada por los demás partidos de la coalición de gobierno. La inflación se detuvo sólo en mayo de 1947, cuando el cuarto gobierno de De Gasperi, del que ya no formaban parte los partidos de la izquierda, adoptó una rigurosa política deflacionaria. En un primer momento, esta medida tuvo efectos negativos en la producción y el empleo, pero aseguró una relativa estabilidad monetaria y favoreció la reactivación de las exportaciones.

A pesar de los progresos realizados, Europa en su conjunto seguía siendo un convaleciente necesitado de cuidados. Sus recursos en monedas fuertes eran limitados, sus balanzas comerciales, deficitarias, su economía, constantemente en vilo entre inflación y deflación y, por consiguiente, su equilibrio político, inestable.

24.2. EL NACIMIENTO DE LA CEE Y EL PRINCIPIO DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA EUROPEA

No cabe duda de que las ayudas del plan Marshall contribuyeron de manera considerable a la reactivación de la economía europea. Entre abril de 1948 y diciembre de 1951 nada menos que doce mil millones de dólares, mayoritariamente en forma de materias primas, fluyeron de Norteamérica a Europa. El país que más se benefició de ellas fue Inglaterra, con un 26 %, seguida por Francia, con el 20 %, Italia, con el 10 % y otros países, con cuotas menores. Se trata indudablemente de cifras considerables, pero el impacto del plan Marshall en la economía de los países europeos no se mide sólo en términos cuantitativos, sino también cualitativos.

El objetivo final, la meta que se proponía era, en efecto, la creación de un área de libre intercambio que incluyera a los dieciséis países beneficiarios de las ayudas norteamericanas, de manera que Europa pudiese incorporarse al sistema esbozado en los acuerdos de Bretton Woods. Una Europa, en suma, sin barreras aduaneras u otras medidas proteccionistas, tanto en su interior como hacia el exterior. Un paso en esta dirección pareció ser la constitución, en 1949, del Consejo de Europa, formado por 142 miembros designados por los parlamentos nacionales, un objetivo por el que habían luchado los movimientos federalistas existentes en varios países europeos. Sin embargo este organismo no ejercía ningún papel político eficaz, ya que

estaba dotado sólo de poderes consultivos y no tenía ninguna competencia en materias económicas; además, la RFA no estaba representada en él. Un paso hacia adelante más importante lo representó el tratado que, no sin presiones por parte de los Estados Unidos, instituyó, en septiembre de 1950, la Unión Europea de los Pagos (UEP), mediante la cual las monedas de los varios países europeos, incluida la RFA, se hacían parcialmente convertibles, posibilitando así el paso de un sistema de intercambios basado en la bilateralidad a uno basado en la multilateralidad. Pero seguían vigentes los aranceles y las medidas de tipo proteccionista que, como se ha visto, cada uno de los países europeos había adoptado, aunque en distinta medida. La única unión aduanera realizada en los años de la posguerra era la que se produjo entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo (BENELUX), que entró en vigor el 1 de enero de 1948. El proyecto de extenderla a Francia e Italia (FRITALUX) no llegó a buen fin. En resumen, todos los grandes estados europeos continuaban persiguiendo sus objetivos de reconstrucción y de desarrollo dentro de un ámbito estrictamente nacional.

Éste es el caso, en primer lugar, de la que después de la derrota alemana se había convertido en la mayor potencia de la Europa continental: Francia. El plan Monnet, ya mencionado, no sólo no contemplaba una integración de la economía francesa en el contexto más amplio de una economía europea, sino que estaba en la línea de las directrices de la política exterior francesa, que reivindicaba la internacionalización de la cuenca del Ruhr y del Sarre. Fue sólo después de la conferencia de Londres del verano de 1948, en un contexto político dominado ya por la guerra fría y en una fecha en que la constitución de la RFA en estado soberano aparecía como inminente, cuando Francia, y el propio Jean Monnet, operaron una revisión radical de sus anteriores planteamientos de política económica y exterior. Esta revisión consistió en abandonar el camino recorrido sin éxito tras la primera guerra mundial, fundado en el convencimiento de que la fuerza política y económica de Francia implicaba una Alemania débil (Dedman, 1996, p. 59), y en adquirir, en cambio, la conciencia de que una colaboración con la RFA no sólo no era incompatible con las exigencias de planificación nacional, sino que constituía un presupuesto de ésta (Milward). En esta intuición cabe buscar los orígenes del tratado de París, con el que, en abril de 1951, Francia, la Alemania federal, Italia y los países del Benelux fundaron la Comunidad Europea para el Carbón y el Acero (CECA). Con este tratado, regiones como Renania, Sarre, Lorena y la Valonia belga, que pertenecían a estados distintos y que por dos veces en medio siglo habían sido campos de batalla, se convertían en un área económica integrada y por primera vez seis estados europeos aceptaban delegar una parte, aunque limitada, de su soberanía a un organismo supranacional dotado con poderes efectivos, como lo era la Alta Autoridad de la CECA. La transcendencia del acuerdo alcanzado

no consistía sólo en sus cláusulas económicas, sino también, y sobre todo, en sus implicaciones políticas. En efecto, se trataba de un primer paso hacia la colaboración entre dos estados –Francia y Alemania– cuya histórica rivalidad había sido una de las causas de los dos conflictos mundiales. No es una casualidad que los «padres» fundadores de la Comunidad hayan sido el francés Robert Schumann, un alsaciano que en la primera guerra mundial había militado en el ejército alemán, el italiano Alcide De Gasperi, que había sido diputado en el Parlamento austríaco, y el «renano» Konrad Adenauer: tres hombres de frontera que, como tales, eran ajenos a cualquier forma de revanchismo.

La CECA fue un éxito. Quedaba probado, así, que el designio de aquella federación europea que las mociones de los congresos federalistas y del Consejo de Europa preconizaban sin encontrar audiencia, podía hacerse realidad en el terreno de la integración económica, sin ningún perjuicio de los intereses nacionales de cada socio.

El paso siguiente y más importante fue el Tratado de Roma de 1957, con el que, al final de una negociación que había comenzado con la conferencia de Mesina en 1955 y se había prolongado durante dos años, se instituyó la Comunidad Económica Europea (CEE). El tratado preveía la abolición, por etapas sucesivas, de las barreras aduaneras dentro de la Comunidad, con la excepción de los productos de la agricultura; la libre circulación de la mano de obra y de los capitales; la armonización de la legislación social, y la creación de una organización europea para la investigación y la experimentación nuclear (EURATOM), con el objetivo de limitar las importaciones de petróleo de los países árabes (acababa de producirse la crisis de Suez) y asegurar, en perspectiva, la autosuficiencia energética de la Comunidad. La tarea de hacer efectivos estos planteamientos fue confiada a un comisionado de nueve miembros presidido por Walter Hallstein, cuyas decisiones, por otra parte, quedaban sometidas a la aprobación de un comité de ministros, en el que valía la regla de la unanimidad. El comisionado iba acompañado por un Parlamento cuyos miembros eran elegidos por cada Parlamento nacional y cuyos poderes, por lo demás, se limitaban a funciones de control de la actuación del comisionado.

Los comienzos de la Comunidad fueron muy brillantes: al cabo de pocos años, el volumen de los intercambios en su seno se incrementó en una medida más que considerable, desde 6,7 mil millones de dólares en 1958 a 24,5 en 1967. En julio de 1968, con un adelanto de dieciocho meses respecto de la fecha prevista en el Tratado de Roma, se llevará a cabo la abolición de los derechos aduaneros dentro de la Comunidad y se establecerá el arancel externo. Europa ascendía así al rango de gran potencia comercial; entre 1953 y 1962, el volumen de sus intercambios con el resto del mundo conoció un incremento del 144%, alcanzando una cuota correspondiente al

24% de todo el comercio mundial y, una vez alcanzada la plena convertibilidad de las monedas, adquiriendo una fuerte posición en el sistema de Bretton Woods. Fortalecida por los éxitos conseguidos, la Comunidad Europea ejercía un notable poder de atracción hacia los países europeos que no se había adherido a ella: en 1961 y 1963, respectivamente, fueron acogidas las peticiones de «asociación» de Grecia y Turquía.

Pero, tal y como se había ido constituyendo, la CEE era algo distinto al área de libre intercambio extendida a toda la Europa occidental que los artífices del plan Marshall habían imaginado. En primer lugar, era una «pequeña Europa» de la que quedaban excluidos los países escandinavos e Inglaterra, que no se había adherido ni a la CECA ni a la CEE. Sobre las motivaciones de esta falta de adhesión volveremos más adelante; de momento, limitémonos a observar que éstas eran tanto de orden económico (las relaciones comerciales con la Commonwealth eran mucho más consistentes que las que Inglaterra mantenía con los países europeos) como de orden político: el mantenimiento de una relación especial con los Estados Unidos representaba para Inglaterra una prioridad absoluta y la constitución de un eje franco-alemán en el ámbito de la CEE era para ella una alteración del equilibrio continental del que históricamente se consideraba como un baluarte. Todo ello la impulsaba a ver en la CEE un socio poco fiable.

En segundo lugar, la nueva pequeña Europa estaba protegida por un arancel externo y se había dado una estructura excluyente. En efecto, a tenor del Tratado de Roma, la admisión de nuevos miembros estaba subordinada a la aceptación de las reglas de la Comunidad. Además, el Tratado de Roma, a diferencia de otros, no contemplaba ninguna fecha de caducidad, excluyendo así la posibilidad de su revisión.

Por consiguiente, se había creado una situación anómala: si en el plano militar la Europa comunitaria, tras el fracaso de la CED, estaba integrada en la Alianza Atlántica, en el plano económico era independiente. En resumidas cuentas, era al mismo tiempo un aliado y un competidor de los Estados Unidos y de Inglaterra. Como se verá en las páginas siguientes, las consecuencias de esta anomalía no tardarían en manifestarse.

24.3. JAPÓN EN LOS AÑOS CINCUENTA

Fue la guerra de Corea la que marcó el arranque de aquel ininterrumpido desarrollo económico que ha llevado a Japón a convertirse en la segunda potencia industrial del mundo. Gracias a los abastecimientos para el ejército de las Naciones Unidas empeñado en la guerra, la industria nipona, que hasta entonces se había quedado muy por debajo de los niveles de anteguerra, pudo reactivar sus motores y comenzar un período de ascenso constan-

te. En 1953 el índice de la producción industrial había subido ya en un 155 % respecto del de 1936, para alcanzar la cuota del 410 % en 1960. Gran parte de los productos de la industria japonesa eran exportados; de 1951 a 1961, el volumen de las exportaciones resultó más que duplicado. A este propósito, hay que subrayar que el flujo de las exportaciones se diferenciaba del tradicional no sólo por su cantidad, sino, y sobre todo, por la calidad de las mercancías exportadas; ya no se trataba de productos de la industria textil, que ya había entrado en una fase de declive irreversible, sino de máquinas, motos y sobre todo navíos, sector en el que la industria nipona se convirtió en la primera del mundo. Además de la calidad de las mercancías, había cambiado también el destino de las exportaciones, que ya no se dirigían hacia China y los países asiáticos, sino hacia los Estados Unidos, que se convirtieron en el mayor importador de productos japoneses.

Un desarrollo tan vertiginoso es tanto más sorprendente en cuanto que Japón no era totalmente autosuficiente en lo tocante a su abastecimiento alimentario y no disponía de grandes recursos de materias primas, viéndose por eso obligado a importar el carbón y el petróleo necesarios para sus fábricas. Entre 1951 y 1961, sus importaciones resultaron, en efecto, más que duplicadas, de un equivalente de 1.995 millones de dólares a uno de 5.810.

Para hacer realidad semejante *performance*, que no tiene comparación ni siquiera con los «milagros» alemán e italiano, concurrieron una serie de factores: el bajo nivel del gasto militar, que no superaba el 1 % del Producto Nacional Bruto; la calidad y preparación de los *managers*, formados en un sistema escolar extremadamente eficiente y selectivo; el espíritu emprendedor y la audacia de algunos industriales (Honda, cuyas motocicletas se impusieron en los mercados y en las pistas de todo el mundo, era hijo de un herrero de pueblo). El factor principal, sin embargo, fue el flujo constante de las inversiones por parte de los bancos, que, dada la escasa viabilidad de otros tipos de inversiones –el coste de las viviendas, por ejemplo, era elevadísimo–, atraían una ingente masa de ahorro, lo que les permitía practicar unos tipos de interés muy bajos. Otro factor que contribuyó de manera relevante al logro de objetivos tan importantes, cabe encontrarlo en el papel que la intervención del estado, y en particular del todopoderoso Ministerio para el comercio exterior y la industria (MITI), desempeñó en la obra de incentivo y coordinación de la economía del país. No en vano ésta fue definida como «la más dirigista de las economías liberales» (Bergère, 1979). La orientación principal de esta intervención fue la de asegurar a la industria nacional el pleno control del mercado interno, mediante un sistema de aranceles.

Pero todo esto todavía no es suficiente para explicar el «milagro» japonés, si no se tiene en cuenta la peculiar estructura de la economía y de la sociedad niponas. Como los Estados Unidos y Francia, también Japón experimentó un fuerte incremento demográfico en la posguerra. Su población, que en

1940 era de 73 millones, alcanzó en 1960 los 93, a pesar de que en 1948 se procedió a la legalización del aborto y desde 1949 se había autorizado la venta anticonceptivos. Este incremento demográfico, sumado al constante desplazamiento del campo a la ciudad, hacía que estuviese disponible en el mercado del trabajo una gran cantidad de mano de obra a bajo coste y por consiguiente se hiciera practicable un régimen de salarios bajos. Estos últimos eran la regla en las pequeñas empresas, en las que estaba ocupado el 70 % de la fuerza de trabajo total, y que contribuían en un 45 % a la producción. En las empresas de dimensiones mayores, en cambio, las retribuciones, calculadas según un sistema basado en la veteranía del trabajador (sistema *Densan*), eran sensiblemente más elevadas. En la realidad industrial japonesa los trabajadores empleados en ellas recibían un salario que, medianamente, era el doble del de sus compañeros de las pequeñas empresas. Además, a diferencia de éstos, se les garantizaba la estabilidad del puesto de trabajo; por lo tanto, se configuraban como una suerte de aristocracia obrera. Y si a esta diferenciación salarial entre pequeña y gran empresa se añade la que mediaba entre los salarios masculinos y femeninos, y se tiene en cuenta también la duración de la semana laboral, que todavía hoy sigue siendo notablemente más larga que la vigente en Norteamérica o en los países europeos, la conclusión a la que se llega es que el bajo coste del trabajo constituyó un factor muy importante para el desarrollo de la economía japonesa a lo largo de los años cincuenta.

Además de los factores económicos que hemos venido indicando, cabe reparar, para comprender las razones del *boom* japonés, también en los factores políticos. Es indudable que la mayor novedad de la vida política japonesa en la posguerra fue el fin de la presión que sobre ella ejercían los militares y el papel que en su lugar fueron asumiendo los partidos políticos, lo cual constituyó un paso importante en el camino de la democratización de la vida pública. Pero también es verdad que, una vez pasada la efervescencia de los años de posguerra, el principal rasgo distintivo de la vida política japonesa fue su estabilidad, cuando no su inmovilismo. En efecto, el escenario político fue dominado por el Partido Liberaldemócrata, nacido en 1955 de la fusión entre liberales y demócratas. No se trataba de un partido en el sentido propio del término, sino de un conjunto de caciques locales, cada uno de los cuales disponía en su colegio de una clientela fiel. El único punto firme de su orientación era la relación privilegiada con los Estados Unidos. En las elecciones que se celebraron a lo largo de la segunda mitad de los años cincuenta, el Partido Liberaldemócrata siempre obtuvo una mayoría más o menos amplia, y en cualquier caso suficiente para permitirle constituir gobiernos de su expresión y confianza. En efecto, el partido se beneficiaba de un sistema electoral que privilegiaba los colegios rurales, donde obtenía la mayoría absoluta, respecto de los colegios urbanos, donde generalmente

no la alcanzaba. Pero no era ésta la única ventaja de la que gozaba. Su fuerza consistía sobre todo en la vinculación muy estrecha que tenía con los dirigentes de los grandes *zakai* (como se llamaron los antiguos *zaibatsu* de la anteguerra) y de la *Keidanren*, una asociación de las grandes empresas fundada en 1956; ambas entidades garantizaban su apoyo a los liberaldemócratas, hasta el punto que, más que de vinculación, se trataba de una «ósmosis» (Bèrgere, 1979). No era raro el caso de miembros de la Dieta que, al vencer su mandato, asumían cargos en el gran empresariado. Sobra añadir que esto no ayudaba en absoluto a eliminar la vieja lacra de la corrupción, sino todo lo contrario.

Otro punto a favor del partido Liberaldemócrata era la ausencia de una alternativa creíble a su hegemonía. En efecto, los partidos de la oposición nunca lograron dotarse de una plataforma unitaria, e incluso cuando lo hicieron, ello sólo se dio a un nivel local, permitiéndoles obtener la administración de algunas grandes ciudades, incluida la capital, pero nunca a nivel nacional. Una rápida reconstrucción de la trayectoria de esos partidos y de sus relaciones mutuas, nos permitirá aclarar este punto.

Entre los partidos de la oposición, el que tenía el mayor consenso electoral era el socialista. Pero éste contaba con un número reducido de afiliados, no disponía de un órgano de prensa propio y, sobre todo, estaba dividido en su seno entre una corriente moderada y una intransigente. En 1960, su ala moderada se escindió del partido para constituir un Partido Socialdemócrata, que en las elecciones de noviembre obtuvo, con el 8,7 % de los votos, una notable afirmación. Por contra, el Partido Comunista tenía un número de afiliados mayor, y disponía de un periódico con una considerable difusión, pero su consenso electoral era mucho más limitado. Además, su línea política sufrió numerosas rectificaciones; en los años de la inmediata posguerra, bajo la dirección de Nosaka Sanzo, que durante la guerra había encontrado cobijo en Yenan, el cuartel general de los comunistas chinos, el partido adoptó una línea moderada y de colaboración con las autoridades de ocupación; pero, a partir de la guerra de Corea, debido también a las críticas que llegaron desde Moscú, esta línea fue abandonada. Los comunistas japoneses pagaron cara esta repentina inversión de tendencia: en efecto, perdieron la considerable influencia que tenían en las organizaciones sindicales, y en las elecciones de 1952 no obtuvieron ningún escaño, en las de 1953, sólo uno y en las 1955, dos. Tras la ruptura entre el PCUS y el Partido Comunista Chino, basculó entre Moscú y Pekín, para acabar adoptando una postura de autonomía ante ambas grandes potencias comunistas, lo que le permitirá, durante los años sesenta, recuperar una parte del consenso perdido. Para mayor fraccionamiento de la oposición, en 1955 entró en escena un nuevo partido, el Komeito, emanación de la secta religiosa Sokka Gokai y expresión del malestar de los estratos sociales que se habían beneficiado poco

o nada de los progresos realizados por la economía de país. Un papel importante y combativo en la oposición a los varios gobiernos liberaldemócratas lo tuvo la mayor organización sindical del país, la Sohyo, fundada en 1950. Pero sus tres millones y medio de afiliados eran mayoritariamente trabajadores del estado y de algunas grandes empresas privadas, donde sufría la competencia de los sindicatos del sector, que se agrupaban todos en otra central sindical, el Domei, mientras que su presencia en la pequeña empresa era insignificante. Finalmente, cabe mencionar el movimiento de los estudiantes universitarios, cuyo número, entre 1953 y 1967, casi se había triplicado; su principal organización se llamaba Zengakuren y se había constituido en 1948; sus dirigentes y muchos de sus seguidores se habían formado en los textos del marxismo, que circulaban ampliamente entre la juventud que estudiaba y entre los profesores, lo cual puede explicar su orientación ideológica y su radicalismo.

El principal aglutinante de ese variopinto frente de opositores era el antiamericanismo y, de hecho, en este punto se alcanzaron momentos de convergencia entre sus distintos componentes. Desde que, en marzo de 1954, un grupo de pescadores japoneses en la isla de Bikini resultó contaminado por un experimento nuclear norteamericano, la reunión conmemorativa que se celebraba en Hiroshima cada seis de agosto, aniversario del lanzamiento de la primera bomba atómica, se convirtió en una cita para todas las fuerzas de la oposición. Las manifestaciones de antiamericanismo llegaron a su cúspide en la primavera y en el verano de 1960, coincidiendo con el debate parlamentario sobre la ratificación del nuevo tratado de amistad y cooperación entre Japón y Estados Unidos estipulado en enero y que venía a sustituir y poner al día el antiguo tratado de 1951 (véase cap. 22). En esta ocasión, las manifestaciones fueron tan intensas que obligaron al primer ministro a dimitir y disuadieron a Eisenhower de efectuar la visita a Japón que estaba programada desde hacía tiempo. Pero al esfumarse esos momentos y esas ocasiones, las divergencias volvían a primar, permitiendo al Partido Liberaldemócrata y a las fuerzas que lo sostenían, mantener bien firmes las riendas del gobierno y del poder.

La que hemos ilustrado en estos párrafos es la trayectoria de una transformación que no tiene precedentes en la historia contemporánea. Al cabo de treinta años, un país que, como Italia y Alemania, había sido derrotado en una guerra de la que había salido postrado, se había convertido en la segunda potencia industrial del planeta y había recuperado la confianza en sí mismo y el respeto del mundo. En 1955 Japón entraba a formar parte del GATT y al año siguiente era admitido en la ONU. En 1964 Tokio organizaba los Juegos Olímpicos, ocasión que Japón no dejó de aprovechar para enseñar al mundo los logros de su economía y de su tecnología. Queda por preguntarse en qué medida este proceso de industrialización y este desarro-

llo se hayan correspondido con una modificación igualmente radical de los tradicionales valores confucianos propios de la sociedad japonesa, de sus costumbres y de su misma identidad. A primera vista, la respuesta a este interrogante sería afirmativa: el sintoísmo ya no es religión del estado, los movimientos abiertamente nacionalistas tienen un espacio reducido, los estudiantes tienen las mismas lecturas que sus compañeros norteamericanos u occidentales, el béisbol y el fútbol compiten en popularidad con el *sumo*, el consumo se va alineando con el de Occidente... Sin embargo, quien lea las novelas de Mishima y de Tanizaki o vea las películas de Nagisa Oshima o de Kenij Mizogouschi, se preguntará si tras este mimetismo no se esconda la permanencia de los antiguos valores y la profundidad de sus raíces.

25

Nuevos protagonistas y países emergentes

25.1. CHINA Y LA INDIA: CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS

De los 601.938.035 chinos registrados en el censo de junio de 1953, el primero de la historia de la China contemporánea, la casi totalidad (un 94 %) eran de estirpe Han y sólo un 6 % pertenecían a minorías nacionales. Éstas estaban en gran medida asentadas en regiones periféricas, como Sing Kiang y Tíbet, que China se había anexionado en 1950. Sobre esta unidad étnica se habían mantenido las dinastías imperiales que se habían sucedido durante siglos, y sobre esta misma base el Partido Comunista vertebró su poder. La Constitución que, tras un largo trabajo de preparación, China se dio en 1954, reproducía sustancialmente la estructura centralista de la tradición imperial. Las provincias y prefecturas (*Hsien*) en que se subdividía el inmenso territorio chino, con exclusión de las regiones autónomas, eran entidades meramente administrativas, y todas dependían de Pekín. La única esencial diferencia con el pasado consistía en que lo que garantizaba y simbolizaba esta unidad ya no era el emperador, sino un partido que se definía comunista y un ejército templado y disciplinado por una larga lucha.

Por contra, la India era un mosaico de etnias y de religiones, cuya unidad estaba asegurada sólo por la dominación colonial, el raj *inglés*. Cesado éste, faltaron también las condiciones de la unidad. La ruptura principal fue, como se sabe, la que, a pesar de los constantes intentos de mediación por parte de los británicos, se produjo entre hindúes y musulmanes, ruptura que acabó, en 1947, en la constitución de dos estados separados, la India y Pakistán, ocasionando un éxodo masivo en los dos sentidos, que implicó a diez millones de personas. Pero esto estaba lejos de solucionar los problemas étnicos de ambos países. En Pakistán el único vínculo entre la parte occiden-

tal del país y la oriental (el actual Bangladesh) consistía en la religión musulmana; en lo demás, las dos partes, además de estar divididas por la geografía, lo estaban también por la lengua, la cultura y las tradiciones. En 1954 los bengaleses resistieron con éxito al intento de imponerles como lengua oficial el urdu, que se hablaba sólo en el Pakistán occidental. Por otra parte, es sabido que el propio término «Pakistán» es una combinación verbal derivada de las denominaciones de las varias etnias del país (P por Pendjab; A por los provincias afganas; K por Kachemira; S por Sind y Tan por Beluchistán), fraguada en Londres en los años treinta por algunos estudiantes que dieron vida precisamente a un *Pakistan National Movement*.

En cuanto a la India, algunos de sus grandes estados, como Panjab, Bihar o Assam, tenían una población pluriétnica, que hablaba idiomas distintos y practicaba distintas religiones: hindúes, musulmanes, sijs y parsis. Los meses que se sucedieron a la proclamación de la independencia vieron enfrentamientos sangrientos entre la comunidad hindú y la de los musulmanes que se habían quedado en la India, especialmente en Bengala. La víctima más ilustre fue el Mahatma Gandhi, que había luchado con ahínco para la pacificación de los fieles de las dos religiones, hasta llegar a rezar en público versículos del Corán. El 30 de enero de 1948, fue asesinado en Calcuta por un fanático hindú.

Para mayor complicación, estaba la multitud de principados grandes y pequeños que habían constituido uno de los pilares de la dominación inglesa. El comisionado para la reorganización de los estados, instituido en 1953, se esforzó por delinear un mapa del país que asegurara a cada uno de los estados que lo componían la mayor unidad étnica posible, pero era un trabajo ímprobo. Las fronteras de los estados tuvieron que ser trazadas una y otra vez y nuevos estados tuvieron que ser instituidos. En 1960, por ejemplo, a raíz de las violentas manifestaciones y de los enfrentamientos que lo sacudían, el estado de Bombay tuvo que ser dividido en dos –Maharashtra y Gujarat–, según un criterio lingüístico. Finalmente, cabe mencionar el caso de Kachemira, con población mayoritariamente musulmana, pero cuyo *maharaja*, un hindú, eligió adherirse a la Unión India; desde entonces, es objeto de disputa entre Pakistán y la India. El caso inverso es el de Andhra Pradesh, cuyo príncipe, el *nizam* de la ciudad de Hyderabad, era un musulmán, pero cuya población era en su mayoría hindú; el caso se solucionó *manu militari*, con la destitución del *nizam* y la anexión a la India. Si no se tuviera en cuenta esta variedad y estos contrastes étnicos, no se comprendería la razón por la que la lengua inglesa, que según la Constitución debería haber sido reemplazada por el hindi en 1965, siga siendo hoy en día una de las lenguas oficiales y los principales periódicos del país se impriman en esta lengua. Con estos presupuestos, la opción federalista estaba obligada. La Constitución de 1950 dividía el país en tres partes: una parte A, que incluía las

nueve provincias de la India británica, que se convertían en estados dotados de amplia autonomía; una parte B, que estaba integrada por los principados mayores y una serie de principados menores que fueron agrupados en cinco estados; y una parte C, que reunía 61 zonas menores y atrasadas, agrupadas en 10 estados.

China y la India, pues, eran realidades profundamente distintas, pero tenían en común lo más importante, es decir, la misma ardua tarea de salir de la condición de atraso en la que se encontraban. Se ha calculado que el consumo de calorías por habitante en la India y China era inferior al mínimo indispensable y que la tasa de analfabetismo superaba en ambos países el 70 %. Todavía en 1960 la esperanza de vida en la India era de 32 años y en China, en 1949, de 35. Las carestías eran un fenómeno frecuente, casi normal, en ambos países. La elevada tasa de incremento demográfico de los dos países contribuía a perpetuar e incluso a agravar estas condiciones de atraso: en la India, la población pasó de 361 millones, en 1951, a 475 en 1965; en China, de 600 millones, en 1949, a cerca de 700, en 1962. De ello derivaba que el aumento de la ocupación en las actividades no agrícolas no conseguía mantener el ritmo del incremento demográfico. Para salir de este punto muerto, hacía falta modificar en profundidad las estructuras y la mentalidad del mundo campesino, pero los obstáculos que se interponían en este camino eran enormes. En China, la familia patriarcal, formada por varias generaciones, unida en el culto de los antepasados, constituía la principal garantía que los campesinos tenían para asegurar la supervivencia económica de la comunidad y la principal defensa contra la elevada tasa de mortalidad. En esta estructura familiar tenían su origen prácticas como el matrimonio o el noviazgo entre adolescentes, el concubinato, la bigamia e incluso el infanticidio. En la India, un obstáculo más para la modernización del campo era el sistema de castas, mediante el cual las clases superiores ejercían una presión de tipo paternalista sobre la población campesina. En ambos casos, las principales víctimas de esta situación eran las mujeres, obligadas a vivir en condiciones de inferioridad y sumisión, cuando no de esclavitud: la conocida costumbre china de vendar los pies de las niñas es uno de los símbolos de esta condición de inferioridad.

La India y China eran, pues, países profundamente distintos, pero que tenían en común el problema fundamental de salir de su condición de atraso. Por tanto, es natural que su historia presente divergencias y al mismo tiempo convergencias.

En un primer momento, fueron las segundas las que prevalecieron. Una de las primeras medidas del nuevo gobierno chino fue la de promulgar, en abril de 1950, una ley matrimonial que prohibía los matrimonios concertados, el concubinato, la bigamia y el infanticidio, fijaba la edad mínima para el matrimonio en los dieciocho años para las mujeres y veinte para los hom-

bres e introducía el divorcio; se trataba de medidas todas dirigidas a modificar la estructura tradicional de la familia. En la India, se aprobaba en 1949 un *Hindu Marriage Valdity Act*, que abolía la prohibición de contraer matrimonio entre miembros de castas distintas; esta medida fue seguida por otra de 1955, que introducía el divorcio. En ambos países el derecho de voto fue extendido a las mujeres.

Dos meses después de la ley sobre el matrimonio, en junio de 1950, entraba en vigor en China una ley de reforma agraria que garantizaba a cada campesino de edad superior a los dieciséis años, la propiedad de entre dos y tres *mu* de tierra, según la región. Esta redistribución de la tierra se producía en detrimento de las varias comunidades religiosas y de los campesinos ricos, pero no afectaba a los campesinos medianos; 46 millones de hectáreas, de un total de 108 millones, cambiaban así de dueño. A fin de cuentas, se trataba de una ley moderada, pero, como veremos, no fue sino el primer paso en el camino de una colectivización que fue llevada a cabo desde las altas esferas y con el recurso a la violencia contra los opositores.

También en la India, el problema de la reforma agraria representaba una prioridad indiscutible, pero las leyes promulgadas por los estados con el objetivo de abolir o limitar el poder de los *zamindari*, que en su doble calidad de propietarios y de recaudadores de impuestos controlaban la vida de las aldeas, y de redistribuir las tierras de forma más equitativa, encontraron no pocas resistencias por parte de los caciques locales, dando pie a controversias legales que se arrastraron durante años en los tribunales y limitando así el alcance de las medidas adoptadas. Por su parte, el gobierno federal puso en marcha, en 1952, un programa de desarrollo para proporcionar asistencia técnica a las cinco mil comunidades en las que había quedado subdividido el territorio indio y favorecer de esta forma la modernización de la agricultura. Las limitaciones de las iniciativas tomadas por los poderes constituidos fueron paliadas en cierta medida por los movimientos populares; entre ellos, merece ser señalado el que impulsó un discípulo de Gandhi, Vinoba Bhave, que presionó –con buenos resultados– a los grandes propietarios para que cedieran una parte de sus tierras a los campesinos.

Pero tanto los gobernantes indios como los chinos eran conscientes de que los problemas de la agricultura no se solucionarían sin la aportación de un sector industrial que proporcionara las herramientas, las máquinarias, los fertilizantes y la energía eléctrica que permitirían una más racional explotación de los recursos. El único modelo disponible era el de la planificación soviética y a éste ambas naciones acudieron. La primera que promulgó un plan quinquenal fue la India, en 1951; China la siguió en 1953. Pero, mientras la primera destinó un cupo considerable –cerca del 40 %– a la agricultura y a los sectores vinculados con ella (irrigación, control de las aluviones, electrificación), China, ciñéndose más al modelo soviético, dio la

prioridad a la industria pesada. Los resultados se correspondieron con esas opciones: India registró un aumento de la producción agrícola mayor que el de la industrial; en China sucedió lo contrario.

Por último, una analogía más entre la nueva China y la nueva India está en el impulso que ambas dieron a la escolarización. En China, los matriculados en la escuela primaria pasaron de 24 millones en 1949 a 51 en 1952; en la India, el número de niños que frecuentaban la escuela pasó del 42 % al 61 % entre 1951 y 1959. Para facilitar el acceso de las masas a la instrucción, China adoptó en 1955 una reforma de la escritura que consistía en la reducción del número de los caracteres ideográficos y en la simplificación de los de uso corriente.

A pesar de esta poderosa inyección de modernidad, China y la India seguían siendo dos países sobre los que pesaba la losa del atraso. En la India, el sistema de castas sobrevivía, como también sobrevivía la intocabilidad, pese a que legalmente había sido abolida; en China, por otra parte, la familia campesina tradicional seguía oponiendo una velada resistencia a los cambios y a las innovaciones. La tasa de incremento demográfico se mantenía en ambos países en niveles elevados. Los gobernantes de los dos países eran conscientes de esta afinidad de condiciones, lo cual no dejó de reflejarse en las relaciones entre ellos. Como veremos, China, a pesar de ser un país comunista, fue invitada a participar en la conferencia de Bandung y tuvo un papel activo en el movimiento de los no alineados. Por su parte, como se ha visto, Nehru fue de los primeros en reconocer el nuevo gobierno de Pekín y no le regateó su apoyo en los momentos más difíciles de la guerra de Corea. Además, en 1954, China y la India estipularon un tratado de amistad.

Claro está que para afrontar los enormes problemas con los que los dos gigantes tenían que lidiar, otras y más radicales decisiones se hacían necesarias y está claro también que esas decisiones dependían en amplia medida de los sujetos políticos que estaban llamados a tomarlas y que disponían del poder necesario para que fuesen operativas. Estos sujetos eran, en China, el Partido Comunista y en la India, el Partido del Congreso. El primero, fortalecido por el prestigio adquirido con la victoria en la guerra civil, había instaurado un sistema político basado en un sustancial monopartidismo y fundado en el modelo soviético. El segundo gobernaba según las reglas de la democracia sancionadas por la Constitución, pero, de hecho, era la única fuerza y representación política del país organizada a escala nacional. En las elecciones que se sucedieron en 1951-1952, en 1957 y en 1962, el Partido del Congreso siempre obtuvo una mayoría aplastante. Ni la fundación, en 1959, de un Partido Conservador –el *Swatantra*– ni los avances electorales del Partido Comunista, alteraron los equilibrios políticos existentes. La influencia de los movimientos y de los partidos de la oposición, en efecto, no iba más allá del ámbito de los estados particulares. Así sucedió, por ejemplo,

en Kerala, donde se afirmó el Partido Comunista. Así pues, tanto los comunistas chinos como el Partido de Congreso indio, tenían firmemente en sus manos las riendas del poder.

Sin embargo, incluso está de más subrayar que se trataba de dos sujetos políticos profundamente distintos. El Partido Comunista Chino y el Partido del Congreso eran diferentes no sólo en sus orientaciones y sus referencias ideales, sino también por su composición social. El primero, que en 1956 sumaba 10.700.000 afiliados, era un partido de masas, en el que la representación campesina –el 69%– y obrera –el 14%– era ampliamente mayoritaria; estaba organizado en su seno sobre la base de una relación entre las bases y los dirigentes muy parecida a la disciplina vigente en el ejército, del que, por lo demás, procedía la mayor parte de sus militantes. En cambio, los cuadros del Partido del Congreso, cuya vida interna estaba regulada según los principios de la democracia, procedían en su mayoría de las clases medias y altas. A diferencia de los comunistas chinos, celebraba con regularidad sus congresos, lo que hacía posible para sus afiliados ejercer un control y un freno sobre su grupo dirigente, especialmente si consideraba que las orientaciones y las medidas de éste eran demasiado innovadoras. Finalmente, distinta era la cúpula de los dos partidos: es difícil imaginar personalidades más diferentes que las de Mao, quien antes de su viaje a Moscú en 1950 nunca había salido de China y cuya formación cultural se basaba en los clásicos de la literatura china, y la de Nehru, quien se había formado en Inglaterra, hablaba corrientemente inglés y había permanecido durante largas temporadas en Europa. Ambos se remontaban a los principios del socialismo, pero es diáfano que su concepción de éste y de su relación con la democracia no era la misma. Direcciones políticas, organización y liderazgo distintos, implicaban opciones distintas. Por consiguiente, examinaremos por separado el camino que recorrieron los dos países.

El objetivo que el *Pandit* Nehru había declarado perseguir repetidas veces y de forma explícita era el de transformar la India en un país socialista. Ello no significa en absoluto que se refiriera a la experiencia de la Unión Soviética, que en su tiempo había visitado, como a un modelo; se lo impedían, no sólo su formación cultural, sino también su realismo político. En efecto, Nehru se daba cuenta de que la compleja realidad del país que estaba llamado a gobernar no toleraría forzamientos o medidas radicales. Las nacionalizaciones previstas en el programa del Congreso, quedaron limitadas, pues, a los sectores estratégicos de la industria de las municiones, de la energía atómica y a los ferrocarriles; todos los demás sectores quedaron en manos de la industria privada. Además, como se ha visto, el primer plan quinquenal apostó con decisión por la agricultura, sin echar mano de medidas coercitivas y menos aún de la colectivización. Fue sólo en 1954 cuando Nehru, de vuelta de un viaje a China que le había impresionado fuerte y fa-

vorablemente, dio un giro a las directrices de la política económica que había seguido hasta entonces. La «opción hacia el socialismo» que sostuvo, fue aprobada por el Congreso del partido que se celebró en Avadi en enero de 1955. Coherentemente con este nuevo planteamiento, se procedió a la nacionalización del Banco Imperial Indio y a la ampliación del grupo de industrias nacionalizadas o sometidas al control del estado. Además, se les quitó a los tribunales y se trasladó a los poderes legislativos el poder de determinar la cifra de las indemnizaciones por los bienes expropiados. Pero la iniciativa más ardua fue la promulgación de un segundo plan quinquenal, mucho más ambicioso y más orientado hacia la industria que el anterior. Los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas. A causa de las condiciones atmosféricas desfavorables que se produjeron en el otoño de 1956 y en el invierno de 1957, el incremento de la producción agrícola, que estaba previsto en una media de un 28%, resultó ser la mitad, provocando un encarecimiento de los productos y la amenaza de inflación. Ello obligó al gobierno a rebajar las previsiones iniciales y recurrir a severas medidas fiscales, lo que, sin embargo, no valió para subsanar una situación financiera comprometida. Por lo tanto, fue necesario pedir préstamos en el extranjero, en especial por parte de los Estados Unidos, un recurso con el que la China comunista no podía contar. No obstante, también se alcanzaron resultados importantes: la producción de energía eléctrica se duplicó y la de material metálico casi se triplicó. Pero el problema fundamental seguía siendo el de la relación entre crecimiento económico e incremento demográfico. Se intentó paliar el problema emprendiendo una política de planificación familiar, pero de momento ésta no encontró una respuesta adecuada por parte de la población.

La reconstrucción de la historia de la China comunista no es una tarea fácil. En efecto, no disponemos de estadísticas fidedignas de procedencia china, y algunos documentos políticos, aun prescindiendo del estilo alusivo y proverbial en el que están escritos, son difíciles de interpretar, en tanto que se hicieron públicos bastante tiempo después de su promulgación y con frecuencia en una nueva redacción. Algunos de ellos, como por ejemplo las *Diez Disposiciones* de Mao, de 1963, tienen hasta tres redacciones. En general, lo que se puede decir es que la historia de China, en los veinte años que median entre la instauración del poder comunista y la revolución cultural, está lejos de ser lineal y su andadura conflictiva testimonia la existencia, en el seno de una clase dirigente y de un partido en apariencia monolíticos, de fuertes divergencias, cuando no de diversas líneas de actuación, cuyos orígenes se pueden remontar a las personalidades de sus dos fundadores, Li Dazhao y Chen Duxiu. El primer componente se basa en la convicción de que

un gran país, como lo es China, puede resolver sus problemas «contando con sus propias fuerzas», las fuerzas de cientos de millones de hombres, y confiando en su dedicación al trabajo y su entusiasmo. Desde este punto de vista, el problema de la superpoblación –como afirmaba Chen Boda, uno de los futuros líderes de la revolución cultural– no se planteaba siquiera, sino que, al contrario, ésta constituía un recurso. Partiendo de esas premisas, se propugnaba una política interna de desarrollo acelerado a golpe de movilizaciones y «campañas» y, en política exterior, se mantenía una postura de desconfianza hacia aquellos países occidentales que durante décadas habían explotado China, y más en general hacia todos los extranjeros, incluido, en caso de que surgiesen controversias, el «gran hermano» soviético. Por contra, el otro componente se caracterizaba por la conciencia que tenía del atraso y de la superpoblación de la sociedad china. Por tanto, apostaba por un desarrollo gradual y equilibrado, por la planificación familiar y la apertura hacia el mundo externo, con el objetivo de su propia modernización y democratización. El contraste, por usar una fórmula sugerente, estaba entre los defensores de la energía revolucionaria y los de la energía eléctrica (Leys, 1998).

Es difícil, e incluso imposible, indicar a los defensores de uno u otro planteamiento, sobre todo porque la orientación de cada uno cambió con frecuencia según las circunstancias. Con todo, parece verosímil definir a personajes como Lin Biao, Chen Boda y la intrigante y ambiciosa esposa de Mao, Ciang Ching –una actriz de cine que se había formado en el Shanghai de los años treinta– todos futuros abanderados de la revolución cultural, como representantes del primer componente; mientras que hombres como el general Peng Dehuai, Liu Shaoqi y Deng Xiaoping representan el segundo componente. En cuanto a Mao, por su formación cultural y su experiencia de líder de un gran movimiento campesino, estuvo indudablemente más cerca del primero que del segundo de esos planteamientos políticos y culturales, quizá debido también, en los últimos tiempos, a la nefasta influencia de su consorte. Por lo que respecta a sus planteamientos de política exterior, Mao seguía aferrado a la vieja concepción leninista y estalinista de la guerra. Según el testimonio de las memorias de Kruschev, con ocasión de su visita a Moscú para la celebración del 40º aniversario de la revolución de octubre y la Conferencia de sesenta y cuatro partidos comunistas, Mao declaró que el bando socialista saldría vencedor de cualquier conflicto e incluso si China sufriera trescientos millones de víctimas, los millones de supervivientes, al ser tan prolíficos, no tardarían en llenar el vacío causado por la guerra. Con todo, si existió un «gran timonel», éste no fue Mao, sino Zhou Enlai en su papel de atento y experimentado navegante. En efecto, fue sobre todo gracias a él que el grupo dirigente chino pudo evitar las rupturas sangrientas que marcaron la trayectoria del grupo dirigente soviético. Des-

de luego, se produjeron exclusiones del poder, detenciones y acusaciones públicas de dirigentes prestigiosos, pero también hubo rehabilitaciones (y no *post mortem*) y vueltas al escenario político de los que habían quedado excluidos de él. Quizá el mismo culto de Mao, del que ningún dirigente chino se libró, ni siquiera el propio Zhou Enlai, y que llegó en los últimos años al límite de la deificación, fue una manera para alejarlo de las luchas internas y neutralizar su incómoda omnipresencia: embalsamarlo en vida. Tanto es así, que después de su muerte el culto permaneció y no hubo en China denuncias a lo Kruschev. A la luz de estas consideraciones y de estas hipótesis, recorramos ahora rápidamente la historia de China desde el punto en que la habíamos dejado.

En el ámbito del primer plan quinquenal, la industria, que, como se ha visto, tenía la prioridad, fue casi totalmente nacionalizada y la agricultura fue progresivamente colectivizada; en 1956, todas las familias campesinas trabajaban en los varios tipos de cooperativas agrícolas. Esto no se había producido sin constricciones y sin violencias. Es imposible cuantificar el número de víctimas y de deportaciones, pero sin duda se trató de cifras muy importantes. La presión que se ejerció sobre el conjunto de la población no perdonó ni siquiera a los intelectuales, a los que se exigía un empeño militante y al servicio del pueblo. Los que expresaron críticas o salvedades pagaron caro su atrevimiento. El más conocido entre ellos es Hu Feng, un discípulo del gran escritor Lu Xun y militante comunista, que fue apartado de su cargo, expulsado de la Federación de las Artes y de las Letras y encarcelado.

La denuncia del estalinismo en el XX Congreso del PCUS llevó también a China el viento de la liberalización. Pero el movimiento denominado «de las cien flores», que nació en las universidades, tuvo breve vida. Preocupado por las críticas, en ocasiones radicales, vertidas en su contra y por los acontecimientos de Hungría y Polonia (véase cap. 23), el Partido Comunista impulsó una campaña de rectificación y las «cien flores» se secaron rápidamente.

Los avances en la producción industrial realizados gracias al primer plan quinquenal habían sido mucho más considerables que los que se consiguieron en la producción agrícola. En el VIII Congreso del partido, en septiembre de 1956, el ponente, Liu Shaoqi –que durante la revolución cultural será acusado de haber expresado en esta ocasión reservas hacia la colectivización– no había dejado de subrayarlo y de recomendar un desarrollo más equilibrado. Pero el camino elegido o, mejor dicho, impuesto por Mao, fue otro, antes bien, el opuesto, es decir, un «gran salto hacia adelante», tanto en la industria como en la agricultura, «gran salto» que se realizaría apelando a todos los recursos de energía y de espíritu de sacrificio de la población china. El objetivo era el de alcanzar el nivel de Inglaterra en un plazo de quince años. Durante algunos meses se trabajó en el inmenso país con un ritmo descomunal, se improvisaron por doquier altos hornos para producir acero,

mientras que en los campos las cooperativas se agrupaban en comunas, concebidas como unidades económicamente autosuficientes y equipadas con servicios colectivos. Cada una de ellas comprendía a un promedio de cinco mil familias y tenía una extensión de cuatro mil quinientas hectáreas. Es en este contexto que debe colocarse la retirada de los técnicos soviéticos, que no habían ocultado sus perplejidades acerca de este nuevo curso, y la ruptura con el Partido Comunista de la Unión Soviética (véase cap. 28). Y también es en este contexto que debe situarse a ruptura de las relaciones comerciales con Japón, a raíz de un incidente ocurrido en Nagasaky, en el que se quemó una bandera china, y el estado de tensión que se produjo en la frontera con la India, que acabará en el conflicto de 1962. Más que nunca, China estaba decidida a «contar con sus propias fuerzas». Es más: se erigía en campeona de todos los pueblos oprimidos por el imperialismo y de los ideales del comunismo contra el «revisionismo moderno».

El resultado del «gran salto hacia adelante» fueron el caos y el desastre económico. La cosecha de 1959 fue inferior a la de 1958, y la de 1960 fue inferior no sólo a la de 1959, sino a la de 1952, así que el país conoció una nueva y devastadora carestía que causó millones de víctimas. El acero producido en los altos hornos improvisados resultó inutilizable. El comercio exterior experimentó un bajón llamativo, tanto en las exportaciones como en las importaciones. En el umbral de los años sesenta, el país sufría una crisis de consecuencias imprevisibles.

25.2. LA CONFERENCIA DE BANDUNG

Entre el 23 de marzo y el 2 de abril de 1947, en una fecha en que la India aún no había sido reconocida como estado independiente, se celebró en Nueva Delhi una conferencia sobre las relaciones asiáticas en la que participaron representantes de veintisiete países, entre ellos Birmania, Ceilán, China, Egipto, Indonesia, Irán, Malaisia, Filipinas y las repúblicas asiáticas de la Unión Soviética. En el transcurso de sus sesiones se debatieron los problemas de la transición de una economía colonial a una economía nacional, de la reforma agraria y del desarrollo industrial, y se acordó dar vida a un organismo permanente, la Organización de las Relaciones Asiáticas. Pero el principal argumento de discusión fue la denuncia del colonialismo y del imperialismo y a este propósito merece ser señalado cómo, en la resolución final, se volvía a aquella fórmula de «Asia para los asiáticos» que, como sabemos, había sido introducida por Japón durante la guerra. Dos años después, en enero de 1949, se reunía, otra vez en Nueva Delhi, una segunda conferencia, en la que participaron, además de Afganistán, Birmania, Ceilán, India, Pakistán y Filipinas, también varios países independientes de Oriente

Medio, Etiopía y Australia. Entre las ausencias, respecto de la anterior conferencia, destacan la de China, donde la lucha entre comunistas y nacionalistas había entrado ya en su tramo final, la de Malaisia, donde arreciaba la guerrilla entre las fuerzas de ocupación inglesas y los combatientes filochinos y filocomunistas, y la de Vietnam, donde se estaba produciendo el enfrentamiento entre el Viet Minh y el cuerpo de expedición francés. Esta vez el orden del día se limitaba a un solo punto: la condena de la intervención inglesa en Indonesia y la reivindicación del derecho de autodeterminación y de independencia para los habitantes de todo el archipiélago indonesio. El objetivo fue alcanzado en diciembre de 1949, cuando, al final de la conferencia de la mesa redonda, Holanda renunció a su soberanía sobre Indonesia y ésta se convirtió en una república independiente. Hasta este momento, pues, la solidaridad y las convergencias entre los participantes en las dos conferencias de Nueva Delhi habían funcionado. Sin embargo, a complicar la situación llegaron la revolución china y la guerra de Corea. En efecto, si algunos estados asiáticos, y en primer lugar la India, reconocieron enseguida el nuevo gobierno de Pekín y, como se ha visto, desempeñaron con éxito un papel activo de mediación en el conflicto coreano, otros países prefirieron alinearse con las posiciones de los Estados Unidos, y algunos de ellos, como Tailandia, Filipinas y Etiopía, se sumaron con pequeños contingentes al cuerpo de expedición de las Naciones Unidas. Por su parte, Pakistán tomaba distancias de las iniciativas indias, convocando en 1949 y 1950, respectivamente en Karachi y Teherán, sendos congresos en los que fueron invitados a participar sólo los estados islámicos. Mientras tanto, como sabemos, China se vinculaba a la URSS con un pacto de amistad y Japón estipulaba un tratado de paz con los Estados Unidos y autorizaba la instalación de bases militares norteamericanas en su territorio.

Pero la lógica de la guerra fría y del bipolarismo no cortó del todo los vínculos que se habían establecido entre los países que habían participado en las dos conferencias de Nueva Delhi. En las varias sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas, los países del grupo afro-asiático que se había constituido en ellas, encontraron con frecuencia puntos de convergencia. Esto sucedió, por ejemplo, en todas las ocasiones en las que la Asamblea tuvo que pronunciarse sobre asuntos como el *apartheid* en Suráfrica, las reivindicaciones de independencia de Libia, Túnez o Marruecos y la institución de un organismo –el *Sunfed*– que debería desempeñar para con los países pobres una función parecida a la que el plan Marshall había desempeñado en Europa, organismo que, por otra parte, nunca llegó a ser realidad. A algunas de esas propuestas se sumaron también algunos países de América Latina, que generalmente solían votar al arrimo de la delegación norteamericana.

El armisticio coreano marcó una relajación de las tensiones que se habían acumulado en el continente asiático, pero quedaba abierto el asunto de

Vietnam. Con el objetivo de encontrar una solución, el gobierno de Ceilán, a petición de Inglaterra, convocó para abril de 1954 en su capital, Colombo, una conferencia de los países del sureste asiático que se pronunció a favor de la independencia de Indochina, anticipándose así a las que serían las decisiones de la conferencia de Ginebra (véase cap. 23). En la conferencia de Colombo, con todo, no se habló sólo de Indochina, sino que se reiteró la condena del colonialismo ya expresada en las conferencias de Nueva Delhi, se abogó por el destierro de las armas atómicas y, pese a las desconfianzas de Pakistán, se expresó el deseo de que el escaño reservado a China en el Consejo de Seguridad de la ONU fuese destinado a Pekín. La orientación política que presuponía este posicionamiento no podía dejar de preocupar a un personaje como Foster Duiles, para quien la neutralidad era «inmoral». Así pues, fue también como respuesta a la conferencia de Colombo que, en 1954, fue constituida la SEATO (*South East Asia Treaty Organisation*), una alianza político-militar modelada sobre la OTAN de la que formaban parte, además de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña y Francia, también algunos estados asiáticos: Filipinas, Tailandia y Pakistán. En este contexto contradictorio cabe situar el proyecto de una nueva conferencia afroasiática bajo el lema de la no alineación. En la realización de este proyecto, un papel pionero fue el que desempeñó Indonesia, un país en el que la gran mayoría de la población era de religión islámica, pero que, a diferencia de Pakistán, no formaba parte de la SEATO y por ende se ofrecía como interlocutor más creíble para los países islámicos no alineados de Oriente Medio. Además Indonesia daba garantías de imparcialidad también en lo referente a su ordenamiento interno; en efecto, era gobernada por una coalición de la que formaban parte todos los grandes partidos del país: el nacionalista (PNI), el comunista y los dos partidos islámicos. Por lo tanto, fue el ministro de Exteriores indonesio el que en diciembre de 1954 tomó la iniciativa de volver a convocar en Bogor a los países que habían participado en la conferencia de Colombo. La labor principal de esta reunión consistió en compilar la lista de los países que estarían invitados en una conferencia posterior y más amplia, que se celebraría en Bandung, y de los que estarían excluidos de ella. Entre los primeros figuraban la China popular, Japón, Vietnam y los estados de Oriente Medio y africanos que ya habían alcanzado la independencia o que, como Ghana o Sudán, estuviesen a punto de alcanzarla. Entre los excluidos se encontraban la China nacionalista, las dos Coreas e Israel. Por su parte, la Unión Soviética sería admitida sólo en calidad de «observador».

La conferencia «afroasiática» de Bandung comenzó sus sesiones el 18 de abril de 1955 y se prolongó hasta el día 24. El comunicado aprobado por unanimidad al final de las reuniones no se conformaba con reiterar la condena del colonialismo, que era definido como «flagelo» del que era preciso li-

berarse «lo más pronto posible», sino que en su parte fina contenía una declaración solemne sobre «la paz y la cooperación en el mundo» inspirada en los principios de las cinco virtudes arias del Pancha Sila –no matar, no robar, no mentir, no emborracharse y no ser corrupto–, tal y como habían sido reelaborados y aplicados al derecho internacional por las diplomacias india e indonesia. Traducidos a términos políticos, esos principios implicaban el respeto a los derechos humanos y de la relativa Carta de la ONU, el respeto a la soberanía e integridad nacional de cada estado, el reconocimiento de la igualdad de las razas, la renuncia a cualquier interferencia en los asuntos internos de otros países, el compromiso a no participar en acuerdos de defensa colectiva en beneficio de los intereses de una gran potencia, la disuasión de cualquier acción o amenaza de agresión y de cualquier forma de recurso a la fuerza en detrimento de la integridad política y territorial de cada nación y la regulación de las controversias internacionales por medios pacíficos. Son éstos los principios básicos de los conceptos de «coexistencia pacífica» y no alineación.

A diferencia de lo que había sucedido en la conferencia de Colombo, el comunicado final de Bandung no mencionaba el problema de la representación en la ONU de China, sino que se limitaba a sortearlo remitiendo al principio de la «universalidad». Quedaba, en cambio, el llamamiento al desarme y a la prohibición de la producción, la experimentación y el uso de los armamentos nucleares y termonucleares, desarme que, por otra parte, debería realizarse, como había previsto en su momento el plan Lilienthal, bajo el control internacional. En cuanto a la prohibición de participar en acuerdos de defensa dirigidos a los intereses de una gran potencia, la formulación era lo suficientemente vaga como para ser aceptada también por los países adheridos a la SEATO, ya que, entre otras cosas, no se hacía mención de las bases existentes en los territorios de estos países.

La solemnidad de esta declaración se acompañaba, pues, de una indeterminación y generalidad de los compromisos asumidos, lo cual no debe sorprender, dada la diferencia de opciones de los países participantes, no sólo en el terreno de la política exterior, sino también en el de la política interna. China era una dictadura comunista, mientras que la India era una democracia parlamentaria y Pakistán se iba a dar, en 1956, una Constitución en la que se definía como una república islámica, para convertirse poco después, en 1958, con el ascenso a poder de Ayub Khan, en una dictadura militar. En Indonesia, por otra parte, el líder Sukarno calificaba la occidental de «democracia de importación» y ajena a la tradición islámica, y declaraba que prefería una «democracia guiada», como la realizada por la coalición de gobierno entre nacionalistas, comunistas y partidos islámicos (el *NASAKOM*), que él mismo encabezaba. Desde luego, tanto la India como China, Pakistán o Indonesia estaban empeñados en un esfuerzo común de moderniza-

ción y de planificación, pero las formas y los instrumentos que utilizaban para realizar su desarrollo diferían notablemente entre sí. Por ejemplo, la reforma agraria realizada en Pakistán por Ayub Khan fue menos radical que la que realizó la India (véase cap. 25) y que la indonesia de 1960, por no hablar de la de China. Observaciones análogas pueden hacerse en lo que concierne a la relación entre intervención estatal e intervención privada en la planificación industrial. El «milagro económico» de Pakistán a lo largo de los años sesenta se debió, en lo que refiere al sector industrial, en gran medida a los grandes grupos privados, las llamadas «veintidós familias».

Esas diferencias institucionales entre los países asiáticos presentes en Bandung, eran el reflejo de sus aproximaciones culturales y sus tradiciones, profundamente distintas y arraigadas. A este propósito, una piedra de toque es la condición de la mujer; mientras que, como se ha visto, China y la India adoptaron medidas dirigidas a favorecer su emancipación, Pakistán se limitó a promulgar en 1961 una ley que limitaba la poligamia; en cambio, el *parda*, es decir, la prohibición para la mujer de salir de casa sin ser acompañada, todavía hoy es practicado por algunos sectores de la sociedad pakistaní.

También había diferencias notables entre los países islámicos de Oriente Medio presentes en Bandung: regímenes de tipo feudal, como el de Yemen; monarquías, más o menos absolutas o constitucionales, como la de Irán; repúblicas que se inspiraban en los principios de la democracia occidental, como Turquía, o que adoptaron, en cambio, el sistema monopartidista soviético, como la Siria baathista. Y distintas eran también sus opciones en política exterior: Pakistán, el Irán del sha, Turquía e Irak, se adhirieron en 1955 al pacto de Bagdad, una alianza que se constituyó a instancias de Estados Unidos e Inglaterra. En fin, subsistían todavía diferencias históricas en la interpretación y la práctica de la religión musulmana, entre los seguidores del credo chií y los sunitas, diferencias que no carecían de repercusiones en las relaciones entre los estados y dentro de cada uno de ellos. Por último, al grupo de los países representados en Bandung, se sumó –único estado europeo– la Yugoslavia de Tito, quien en 1956 acogió en su residencia de Brioni a Nehru, Nasser, Sukarno y Nkrumah. De este encuentro se originó el movimiento de los países no alineados, cuya primera conferencia se celebró en 1961 en Belgrado.

Un frente tan variado y diferenciado difícilmente podría elaborar una plataforma que hiciera posible una iniciativa y una acción política concertada y unitaria y fuese capaz de influir de manera significativa sobre el conjunto de las relaciones internacionales, tal y como se proponía. Pero en su seno existía un nucleo bastante compacto de estados y de líderes que no estaban comprometidos en ninguna alianza y estaban decididos a utilizar esta equidistancia respecto de los dos bloques contrapuestos como un instrumento de presión sobre los dos, con el objetivo de acelerar el proceso de descoloni-

zación y de emancipación, que eran los objetivos principales del movimiento del que habían sido los impulsores. De este grupo líder, formaban parte la India de Nehru, la Indonesia de Sukarno, la Yugoslavia de Tito y el Egipto de Nasser, que desempeñará el papel predominante dentro del movimiento de los no alineados. Si su voz encontró mayor audiencia en el Moscú de Kruschev que en el Washington de Eisenhower y de Foster Dulles, ello se debió a las reacciones de sus interlocutores, más que a una opción de fondo.

25.3. LA GUERRA DE SUEZ Y LA DESCOLONIZACIÓN

Entre los países árabes, Egipto era el que más había contribuido a la elaboración de la ideología panárabe y que en el pasado, ya desde el siglo XIX, había ejercido en varias ocasiones un papel de estímulo y de liderazgo político e intelectual respecto de los países de Oriente Medio. En Egipto se encontraba la prestigiosa Universidad islámica de El Azhar; además, su territorio era atravesado por el canal de Suez y estaba situado en una región del planeta de gran importancia económica, ya que allí se encontraban los mayores yacimientos de petróleo por entonces disponibles, un recurso vital para Occidente, cuya creciente necesidad energética, tras el cierre de gran parte de sus obsoletas minas de carbón, dependía casi totalmente del petróleo. Los intentos de los estados de la región por sustraer este recurso al control de las grandes compañías inglesas y norteamericanas y de recobrar su titularidad, hasta entonces habían fracasado. El último de esos fracasos había sido el del primer ministro iraní, Mossadegh, quien en 1951 había nacionalizado la industria petrolífera, obligando al sha a dejar el país. Sin embargo, en 1953 fue destituido mediante una misión secreta organizada por la CIA y los servicios secretos ingleses.

A calentar todavía más la región contribuía el estado de tensión permanente que existía entre Israel y los países que en 1945 habían formado la Liga Árabe: Egipto, Irak, Arabia Saudí, Transjordania, Yemen, Siria y Líbano. Un primer enfrentamiento entre las dos partes ya se había producido en mayo de 1948, cuando, a consecuencia de la decisión inglesa de poner fin a su mandato sobre Palestina, Israel había proclamado su independencia. Tras un año de enfrentamientos, el conflicto había terminado con la victoria militar de los israelíes, pero sin ninguna solución política; los estados árabes seguían sin reconocer Israel y la tensión entre los dos bandos seguía inalterada. El resentimiento hacia el Occidente capitalista, que se enriquecía con el petróleo árabe y sostenía el sionismo, estaba pues muy arraigado en la región.

Por tanto, se comprende, a la luz de todo esto, cómo la integración de Egipto en el sistema de relaciones internacionales y los planteamientos de sus gobernantes cobraban una importancia trascendental y eran objeto de una

atención continua por parte de las grandes potencias. Así que, cuando en la madrugada entre el 22 y el 23 de julio de 1952, un grupo de «libres oficiales» egipcios depuso al corrupto y desautorizado rey Faruk, se adueñó del poder y proclamó la república, el acontecimiento no pasó desapercibido.

La cultura política de estos libres oficiales estaba marcada por el eclecticismo, una mezcla de nacionalismo egipcio, panarabismo y marxismo. Uno de ellos, Anwar Sadat, simpatizaba con los Hermanos Musulmanes y Nasser vio reprochadas sus simpatías juveniles por los movimientos fascistas. Sin embargo, estaban decididos a actuar y no tardaron en demostrarlo. En abril de 1954, apartado del poder el general Neguib, quien hasta entonces había desempeñado el cargo de presidente, las riendas del poder pasaron a las manos enérgicas de Gamal Abdel Nasser. Una de sus primeras medidas fue la promulgación de una reforma agraria que redujo tajantemente la influencia que los grandes propietarios de terrenos ejercían en la vida política egipcia y en el partido Wafd. Pero sus iniciativas no se limitaron a la política interna, sino que se desarrollaron principalmente en el terreno de la política exterior. En abril de 1955, Nasser encabezó la delegación egipcia en la conferencia de Bandung; en septiembre del mismo año cerró un acuerdo con Checoslovaquia para una importante venta de armas, y en la primavera de 1956 reconoció la China popular. Se trataba de decisiones que no podían por menos de poner en alarma a los miembros del Pacto de Bagdad. Se comprende, pues, por qué los Estados Unidos, que en un primer momento se habían declarado dispuestos a contribuir en la financiación de las obras para la construcción de una gran presa en el Nilo, en Assuán, se echaron rápidamente atrás, ofreciendo así a la URSS la ocasión de sustituirles, como de hecho sucedió. Este apoyo cada vez más descubierto a Egipto y a la causa árabe por parte de la Unión Soviética, implicaba inevitablemente el deterioro de las relaciones entre ésta y el estado de Israel, a pesar de haber sido uno de los primeros países en reconcerlo, y en la vertiente opuesta, una consolidación de las relaciones, ya muy buenas, entre Israel y Estados Unidos. Así, ambas superpotencias se encontraban indirectamente involucradas en el atolladero mediorientaI.

El 26 de julio de 1956, Nasser anunciaba su decisión de nacionalizar el canal de Suez. Semajante iniciativa no podía no suscitar la alarma de Occidente, y especialmente de aquellos países, como Francia e Inglaterra, que tenían intereses en la región y dependían en mayor medida de las importaciones de petróleo mediorientaI. Por otra parte, ello no dejaba de aumentar la tensión que ya existía entre los estados de la Liga Árabe e Israel. Por consiguiente, a lo largo de la segunda mitad de 1956, las diplomacias francesa, inglesa e israelí se volcaron en un sinfín de contactos y encuentros, cuyo objetivo era el de preparar una acción conjunta contra el Egipto de Nasser. El resultado al que llegaron y que naturalmente se mantuvo secreto, fue un ma-

quiavélico plan articulado en tres fases: primero, un ataque israelí a Egipto; segundo, un ultimátum franco-inglés a Egipto e Israel para conminarles a que retiraran sus tropas; tercero y último –dando por descontado el rechazo del ultimátum por parte de Egipto, país agredido– la intervención militar de unidades inglesas y francesas en la zona del canal, «para separar a los dos contendientes», pero en realidad para retomar el control del canal y asestar un golpe mortal al prestigio de Nasser. Tanto en Londres como en París y en Tel Aviv, se contaba con el hecho de que la reacción de la Unión Soviética, involucrada como estaba en el asunto húngaro, no iría más allá de las habituales protestas de tipo propagandístico, y que los Estados Unidos, donde estaba en pleno desarrollo la campaña electoral para las elecciones presidenciales, no tendrían ninguna reacción. La fecha prevista para el comienzo del ataque israelí era el 29 de octubre y la del ultimátum, el 30, y con ambas se cumplió.

Se pidió la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU, pero la iniciativa del secretario de la Organización de convocar el Consejo se topó con el veto de Inglaterra y Francia. Por lo tanto, valiéndose de una norma de procedimiento ya adoptada en ocasión de la guerra de Corea, la delegación norteamericana pidió la suspensión de todas las operaciones militares y la retirada de las tropas por detrás de las líneas de armisticio, una invitación que de hecho valía sólo para Israel, cuya tropas habían invadido gran parte del Sinaí y ya se encontraban cerca del canal. Esta resolución fue aprobada al día siguiente con sesenta y cuatro votos favorables, entre ellos el de la URSS, seis abstenciones y cinco votos en contra, Australia, Francia, Inglaterra, Israel y Nueva Zelanda. Mientras tanto, la VI flota norteamericana permanecía en las aguas del Mediterráneo oriental.

El 4 de noviembre, unidades de paracaidistas ingleses y franceses aterrizaban en la zona de Puerto Said y asumían su control; el día 5, el primer ministro ruso, Bulganin, enviaba a los gobiernos de Londres, París y Tel Aviv una nota en la que se llegaba a amenazar una represalia con misiles. Se trataba probablemente de un bluff que se quedaría sin consecuencias si, por su parte, Washington no hubiese aumentado las presiones, tanto en lo financiero, con la venta masiva de libras esterlinas, como en lo diplomático, intimidando sin contemplaciones al embajador francés para que se retiraran de Egipto. El 6 de noviembre entraba en vigor la tregua, y el 24 de diciembre los cuerpos de expedición inglés y francés volvían a sus bases.

Así pues, Francia e Inglaterra salían humilladas de este acontecimiento. La dimisión del primer ministro inglés, Eden, gravemente enfermo, en enero de 1957, selló este jaque. A medida que su influencia en la región medioriental iba disminuyendo, se insinuaba la norteamericana; el 5 de enero de 1957, Eisenhower explicaba al Congreso la doctrina que tomará su nombre y según la cual los Estados Unidos se comprometían a proporcionar

asistencia económica y militar, incluido el empleo de las fuerzas armadas norteamericanas, a los países de Oriente Medio cuya seguridad se viese amenazada por el «comunismo internacional» y que lo pidieran expresamente. Para el líder egipcio, en cambio, la crisis de octubre de 1956 representó una brillante victoria, que aumentó su prestigio no sólo en Egipto, sino en todo Oriente Medio y el mundo árabe en general. En febrero de 1958, Siria decidía unirse a Egipto, dando vida a la República Árabe Unida; en julio de 1958, un golpe de estado en Bagdad derrocaba a la dinastía hachemita, baluarte de la influencia inglesa en la región, y el mismo mes el derrocamiento del gobierno filooccidental libanés, presidido por el cristiano maronita Camille Chamoun y por régimen del rey Hussein en Jordania, fueron frustrados sólo gracias a la intervención, respectivamente, de los marines norteamericanos y de un contingente inglés.

Por otra parte, las consecuencias de la crisis de Suez no afectaron sólo a los países de Oriente Medio y no fueron una victoria exclusivamente de Egipto, sino que redundaron en beneficio de todos los países no alineados. Incluso se puede decir que a partir de ahí, el proceso de descolonización entra en una fase de rápida aceleración, al extenderse a los países del Magreb y de toda África. En 1956 alcanzaron la independencia Sudán, Túnez y Marruecos; en 1957 tocaba al Ghana de Nkrumah; en 1958 a Guinea, cuyo líder, Sekou Touré, fue el único entre los jefes de estado africanos de la Unión Francesa que optó por la independencia en un referéndum convocado por De Gaulle. En 1960, un año que ha pasado a la historia como el año de África, alcanzaron la independencia las ex colonias francesas de Senegal, Mali, Alto Volta, Costa de Marfil, Dahomey, Nigeria, Chad, Congo-Brazzaville, Gabón, Madagascar, Camerún y Togo; en 1961 lo hicieron las colonias ex inglesas de Sierra Leona y Tanganika, además de Somalia, al vencer el mandato italiano. En 1963 fue el momento de Zanzíbar y Kenia, que entre 1952 y 1956 había sido escenario de la revuelta de los campesinos de la etnia kikuyu, reprimida duramente por los ingleses. En cuanto al Congo belga, la más rica de las colonias africanas, también se había hecho independiente en 1960, pero la secesión de la región minera de Katanga y la subsiguiente intervención de las tropas de la ONU y belgas, precipitaron al país en una guerra civil que duraría mucho tiempo y que, en febrero de 1961, provocaría el asesinato del líder nacionalista Patrice Lumumba. Pero el país que pagó más cara la independencia fue Argelia. Desde el verano de 1955, cuando una rebelión de musulmanes y las represalias de los colonos franceses en la región de Constantina habían causado centenares de muertos, la situación se había ido deteriorando rápidamente, hasta convertirse en una auténtica guerra entre los patriotas del Frente de Liberación Nacional (FLN) y un cuerpo de expedición francés que llegó a contar en sus filas con cuatrocientos mil hombres. Fue sólo después de la vuelta al poder de De

Gaulle, en 1958, cuando comenzaron las negociaciones entre los representantes del Frente y el gobierno francés, para prolongarse durante cuatro años y con fases alternas, hasta que, en julio de 1962 Argelia consiguió la independencia. El de Argelia, donde existía una considerable presencia de colonos franceses, es uno de los pocos casos en que el proceso de descolonización se produjo de forma traumática y dio lugar a un grave derramamiento de sangre.

En efecto, gran parte de los estados africanos que adquirieron la independencia a lo largo de los años cincuenta y sesenta, lo hicieron de forma pacífica y consensuada. En 1963, en Addis Abeba, se reunieron por primera vez en una conferencia en la que nació la Organización para la Unidad Africana. A finales de los años sesenta, las únicas colonias que quedaban en África eran las portuguesas de Angola, Guinea-Bissau y Mozambique. En Rhodesia la minoría blanca, para evitar una descolonización a la que Londres ya estaba resignada, en 1965 recurrió al subterfugio de proclamarse independiente, quedando fuera, de esta manera, de la Commonwealth. Un caso aparte, en fin, es el de Suráfrica, que también había salido de la Commonwealth en 1961 y donde una minoría blanca de 3,7 millones de personas imponía un régimen de *apartheid* a una población negra de 15 millones. Liderado por el *African National Congress*, también aquí el movimiento de liberación iba aumentando; la primera gran huelga de los trabajadores de las minas de oro se remonta a 1946 y en marzo de 1960 se produjo la masacre de Sharpeville, en la que encontraron la muerte 69 africanos y 180 resultaron heridos.

25.4. AMÉRICA LATINA EN LOS AÑOS CINCUENTA

Existe una forma de considerar la realidad sudamericana de una manera indiferenciada, tan trillada como convencional. Porque cada país de América Latina presenta sus propias características e idiosincrasias, comenzando por la composición étnica: la hispano-italiana de Argentina no es lo mismo que la multirracial de Brasil o las de los estados andinos o de México, con una considerable presencia de indios. Esta diversidad no puede, evidentemente, dejar de reflejarse en el terreno político y de las relaciones entre estados. Así se explica cómo los continuos llamamientos de Simón Bolívar a los ideales panamericanos formaban parte de la ritualidad del lenguaje político. Sólo a partir de los años sesenta los estados sudamericanos comenzaron a recorrer el camino de la integración económica, con la constitución de una asociación de libre intercambio y posteriormente con el acuerdo de Asunción, en agosto de 1967, mientras que en el camino de la cooperación política marcó un hito el tratado de Tlatelolco, en abril del mismo año, según el cual los estados suscriptores se comprometían a prohibir la instalación de armas atómicas en el subcontinente.

No obstante, no significa que no existan elementos comunes a todos los países sudamericanos. El más evidente es el relativo a la alta tasa de incremento demográfico, hoy como ayer. Entre 1950 y 1980, la población de Brasil ha subido de 52 a 121 millones; la de Argentina, de 17 a 28; la de Chile, de 6 a 11; la de Colombia, de 11 a 25; la de Venezuela nada menos que de 5 a 15. En todos los demás estados menores se registran aumentos de la misma magnitud. Paralelamente a este proceso de crecimiento demográfico acelerado, procedía el de la urbanización, de forma que las grandes ciudades del continente se convertían en megalópolis rodeadas por un cinturón de chabolas.

Otro dato común es el alto nivel de analfabetismo, con las consecuencias de carácter político que éste comportaba. Con la excepción de México y Argentina, en ningún país de América Latina los analfabetos podían votar, lo cual provocaba que, a pesar de que entre 1945 y 1961 en la mayoría de los estados el derecho a voto había sido extendido a las mujeres, los que realmente lo ejercían eran una parte restringida de la población. La más amplia era la de Chile, un 15-20%. A pesar de ello –y este es otro rasgo común a todos los países del subcontinente– su vida política, con la excepción de México, donde el liderazgo del Partido Revolucionario Institucional era indiscutible, se caracterizaba por un alto nivel de inestabilidad. De ahí el papel político que el ejército, como veremos a lo largo de esta exposición, asumió y desempeñó como tutor del orden y de la estabilidad en varias y distintas circunstancias y en los momentos de crisis.

El término atraso es el que con mayor aproximación compendia este conjunto de datos. Así que podemos decir que otro rasgo común de la historia de los países latinoamericanos en la segunda posguerra es la búsqueda del camino que les permitiera salir de esta condición de atraso.

Desde la época de la Gran Depresión, los países de América Latina, y en particular los mayores entre ellos, estaban empeñados en una labor de reconversión de las orientaciones de la política económica que hasta entonces habían practicado, basadas esencialmente en la exportación de las materias primas de las que eran productores y cuyos precios estaban expuestos a las fluctuaciones del mercado mundial. El objetivo que perseguían era el que se resumía usualmente en la fórmula «sustitución de las importaciones»: se trataba de producir aquellos bienes que hasta entonces habían sido importados de los países industrializados y en consecuencia dar vida a una producción industrial nacional. Con este propósito el estado asumía él mismo, sustrayéndolo a las oligarquías tradicionales, el control y la reglamentación de toda o parte de la producción y de la exportación, mediante la constitución de organismos apropiados similares a la mexicana PEMEX, creada en 1937 tras la nacionalización de la industria petrolífera, y de la chilena CORFO («Corporación de Fomento de la Producción»), un orga-

nismo instituido en 1939 para impulsar la iniciativa industrial. Entre 1930 y 1950 se fue desarrollando, así, un sector industrial de una cierta importancia. Este proceso de reconversión continuó a lo largo de los años cincuenta, pero encontró en su camino no pocos obstáculos. Las actividades industriales que habían ido surgiendo operaban en su mayoría en el sector de la industria ligera y de los bienes de consumo. Sus productos no podían aguantar la competencia internacional y por ende no podían encontrar más mercado que el suyo interno, restringido y débil. Además existía el problema del coste del trabajo; la nueva clase obrera que se había ido formando en las grandes agrupaciones urbanas y los sindicatos que la representaban no habían tardado en presentar sus reivindicaciones y los gobiernos, que necesitaban su apoyo para contrarrestar las oligarquías tradicionales, no podían eximirse de satisfacerlas. Finalmente, la maquinaria necesaria para que las industrias funcionaran debía ser importada del extranjero. Todo ello hacía muy cara la operación de sustitución de las importaciones.

Pasados los años de la guerra y de la inmediata posguerra, hasta la guerra de Corea, años en que, como había sucedido durante el primer conflicto mundial, las exportaciones de los estados latinoamericanos hacia Europa y Estados Unidos habían registrado una importante expansión y se habían beneficiado de precios remunerativos, la balanza comercial volvió a ser deficitaria y la inflación, ese fenómeno recurrente de la historia económica de América Latina contemporánea, volvió a correr. Se hacía necesario, así, acudir al préstamo y al capital extranjero, especialmente norteamericano. Aunque es obvia la variedad de soluciones y resultados, es a partir de esos presupuestos comunes que se desenvuelve el hilo conductor de la historia de los países latinoamericanos en los años cincuenta. Sigámoslo, pues, comenzando con el mayor de ellos.

Brasil fue el único estado de Latinoamérica que envió un contingente a luchar en los campos de batalla europeos y precisamente a Italia. Los soldados que formaban parte de él, sus familias y amplios sectores de la opinión pública, se preguntaban qué sentido tenía luchar por la democracia en Europa si ésta no existía en su patria. En el contexto político e intelectual de la posguerra, el *Estado Novo* de Vargas y el modelo corporativista y fascista en el que éste se inspiraba se percibían, pues, como, una anomalía o un anacronismo. El propio Vargas se daba cuenta de ello, cuando decidió convocar las elecciones de una Asamblea Constituyente para diciembre de 1945. En el temor que, como ya había hecho anteriormente, alcanzara su celebración, en octubre los militares le obligaron a dimitir y las elecciones pudieron así celebrarse en la fecha prevista. Resultó elegido para la presidencia de la República el general Enrique Dutra, apoyado por el Partido Socialdemócrata (PSD), que también resultó el más votado en las elecciones para la Asamblea Constituyente. A lo largo de 1946, ésta elaboró y aprobó una nueva Cons-

titución que en algunos aspectos, y en particular por lo que concernía a las relaciones entre los poderes del gobierno federal y los de los estados, representaba una vuelta al modelo liberal del período anterior a Vargas. Pero diez años de *Estado Novo* no habían transcurrido en vano y la popularidad del ex presidente seguía siendo alta. Muy pronto se dio la prueba de ello: tras su retirada a su rancho de Rio Grande do Sul, fue reelegido senador y en la campaña electoral de 1950 presentó su candidatura a la presidencia con el apoyo del *Partido Trabailhista Brasileiro* (PTB), obteniendo una mayoría del 48,7% de los votos. De nuevo en el poder, Vargas practicó una línea de gobierno dirigida a compaginar una política de expansión económica y de incremento del gasto público, valiéndose también de capitales extranjeros, con la inspiración populista que había hecho su fortuna política. Fue suya la primera iniciativa para constituir, con la aportación de dinero público y capital privado, la compañía petrolífera *Petrobras*, y suya fue la decisión de elevar el salario mínimo. Se trataba de una política costosa, y puntuales hicieron su aparición la inflación y el déficit de la balanza comercial. Objeto de críticas desde la derecha, por su demagogia populista, y desde la izquierda, por sus concesiones al capital extranjero; poco amado en Washington, Vargas se encontró así cada vez más aislado. El asesinato del periodista Carlos Lacerda, que había conducido una poderosa campaña de prensa en su contra, acusándolo de corrupción, asesinato en el que resultaron implicados los miembros de su escolta, proporcionó a los militares el pretexto para destituirlo nuevamente. Esta vez, no sobrevivió a su derrota política: el 24 de agosto de 1954 se quitó la vida de un tiro, dejando un testamento político en el que acusaba a «grupos internacionales e internos», hostiles a su política en favor del pueblo, de ser los responsables de su muerte, y concluía afirmando que salía «de la vida para entrar en la historia». A los millones de brasileños que rindieron homenaje a su memoria, estas palabras no les parecieron retóricas.

A tenor de la Constitución de 1946, su sucesor fue el vicepresidente Café Filho, quien confió los principales cargos de gobierno a la *Uniao Democratica Nacional* (UDN), un partido de inspiración liberal y contrario al populismo de Vargas. Pero las elecciones de 1955 marcaron una nueva inversión de la trayectoria política, al ser elegido para la presidencia el socialdemócrata Juscelino Kubitschek, gobernador del estado de Minas Gerais, y para la vicepresidencia João Goulart, ex ministro de Trabajo de Vargas, del que compartía las ideas políticas.

Durante la presidencia de Kubitschek, Brasil reanudó a gran escala la política de «sustitución de las importaciones», impulsada por los jóvenes economistas del *Instituto Superior de Estudos brasileiros* y conoció un desarrollo económico tumultuoso, con un índice de crecimiento tres veces superior al de los demás países del subcontinente. Fue en estos años, entre 1957 y 1960, cuando se culminaron, bajo la dirección del gran arquitecto Oscar

Niemeyer, los trabajos para la construcción de la nueva capital, Brasilia, que se situaba en el centro del inmenso país, casi encarnando sus ambiciones de expansión en el espacio, hacia una nueva frontera interna y, con su urbanismo racional y futurista, en el tiempo, hacia un futuro de «orden y progreso», el lema que luce en la bandera nacional.

Y también esta vez, el precio de esta política de desarrollo y gasto público fueron la inflación y la deuda. Kubitschek, pues, dejó a su sucesor, J. da Silva Quadros, vencedor de las elecciones de 1960, una situación económicamente difícil y políticamente inestable.

Entre los políticos sudamericanos, el vicepresidente de Argentina, Juan Perón, sin duda era el que había manifestado la mayor simpatía hacia las potencias del Eje y, por ende, el peor visto en Washington. Es más: él mismo no ocultaba su antiamericanismo e incluso éste fue uno de sus caballos de batalla en la campaña para las elecciones presidenciales de febrero de 1946, en las que obtuvo una victoria aplastante, asegurándose también una amplia mayoría en el Congreso. Envalentonado por su éxito, en mayo disolvió los partidos políticos que lo habían sostenido durante la campaña para unificarlos en el «Partido único de la Revolución» o, más comúnmente, «peronista» o «justicialista», y en mayo de 1948 pidió y obtuvo del Congreso la modificación de un artículo de la Constitución que le hubiera impedido volver a presentar su candidatura a la presidencia. En las elecciones de noviembre de 1951 fue reelegido por una amplia mayoría, 4,7 millones de votos contra los 2,4 de su oponente, el radical Balbin.

Durante casi diez años, de 1946 hasta su desgracia política el 1955, Perón fue, pues, el árbitro indiscutible de la vida política argentina. Su principal punto de apoyo consistía en el soporte de la gran mayoría de la clase obrera y de su poderosa organización sindical, la CGT, con la cual fue generoso en concesiones, hasta el punto de que se hizo él mismo sugeridor de reivindicaciones e indirectamente promotor de agitaciones. En 1948, los salarios de los obreros cualificados aumentaron en un 27 % respecto de 1943, y los de los obreros no cualificados, en un 37 %. El consenso así cosechado le permitió seguir una línea de política económica de sustitución de las importaciones que, por su radicalidad, no tiene comparación con ningún otro país de Latinoamérica. En el ámbito del plan quinquenal puesto en marcha en 1946, el monopolio de las exportaciones y del comercio exterior fue asignado a un organismo estatal, el IAPI; el Banco Central y algunas compañías extranjeras fueron nacionalizadas, al tiempo que se animaba la iniciativa del empresariado nacional. Los resultados no faltaron: el PIB registró un notable crecimiento y se alcanzó la meta de la plena ocupación. Con orgullo, y una pizca de provincianismo, Perón podía definir su régimen

como una «tercera posición» en la que –como se leía en la nueva Constitución– la propiedad privada dejó de ser calificada, como en la Constitución de 1853, de «inviolable», y pasó a ser una «función social».

Pero lo que contribuyó en una medida relevante a la consecución de estos objetivos fue la coyuntura favorable de la inmediata posguerra, cuando las exportaciones argentinas conocieron un importante incremento. Sin embargo, cuando, a partir de 1948-1949, esta coyuntura cambió y las ayudas del plan Marshall comenzaron a llegar a Europa, la Argentina peronista se vio obligada a afrontar los problemas de déficit de la balanza comercial y de inflación que, como se ha visto, constituían para todos los países de Latinoamérica el precio de una política de desarrollo basada en la sustitución de las importaciones.

Con la falta de escrúpulos que le caracterizaba, Perón no dudó en modificar, e incluso invertir, el rumbo de su política. Su principal colaborador económico, Miguel Miranda, fue bruscamente cesado y el nuevo plan quinquenal estrenado en 1952 preveía un recurso notable a las inversiones extranjeras. Para suavizar el peso de las importaciones de petróleo sobre la economía del país y alentar la búsqueda y la valorización de los yacimientos internos, en 1954 se estipuló un contrato con la *Standard Oil*, que los opositores de Perón consideraron una liquidación. A medida que la inflación anulaba los aumentos salariales, las bases del consenso popular de las que gozaba el régimen se iban reduciendo y mermando. Perón era consciente de ello y no dudó en acudir a otros instrumentos. El primero consistió en aprovechar de forma demagógica la popularidad de la que su mujer, Evita Duarte, una ex actriz de radio, gozaba entre los más desfavorecidos –los llamados «descamisados»– y entre el electorado femenino, hasta el punto de que llegó a proponer, aunque sin éxito, su candidatura a la vicepresidencia en las elecciones de 1951. La enfermedad de Evita y su muerte en julio de 1952, convirtieron su popularidad en auténtico culto. El otro instrumento del que se valió Perón fue el del giro autoritario y la intimidación. La prensa, comenzando por el más prestigioso diario de país, *La Prensa*, fue normalizada y en abril de 1952 el Jockey Club, punto de encuentro tradicional de la oligarquía, fue invadido y saqueado por la muchedumbre de los «descamisados». La oleada de represión no se detuvo ni siquiera ante la Iglesia, cuando ésta dejó oír su protesta por la introducción del divorcio (1954) y las limitaciones impuestas a las escuelas católicas privadas. En esta situación de tensión pujante eran cada vez más numerosos –no sólo en la oligarquía del Jockey Club, sino en las clases medias y en el propio ejército que había favorecido el ascenso de Perón– los que sentían la necesidad y la urgencia de intervenir para restaurar la legalidad y la democracia. Un primer intento de derrocar el régimen se produjo el 16 de junio de 1955, pero fracasó. En respuesta, una muchedumbre de manifestantes peronistas quemó algunas iglesias de Buenos Aires, lo que provocó que desde

Roma llegara la excomunión para Perón. Para un país católico como Argentina, era demasiado: pocos meses después, en septiembre, una nueva rebelión militar, encabezada por altos mandos del ejército y de la armada, obligaba al dictador a dimitir y a dejar el país.

Si Perón había salido de la escena política, el peronismo seguía estando muy arraigado en las clases populares, que veían, con alguna razón, en la vuelta a la «legalidad democrática» nada más que la revancha de la oligarquía, así como para los sindicatos ésta representaba una amenaza para las conquistas sociales que habían alcanzado y estaban decididos a defender. Así se explica que la historia de Argentina en las décadas siguientes se caracterizara por su alto nivel de inestabilidad y aparece como una sucesión de golpes de efecto en la que militares y civiles se alternan en el poder, con los peronistas siempre en el trasfondo.

No es posible, si se quiere evitar el riesgo de una exposición demasiado prolija y dispersa, hablar de los demás países del subcontinente con el mismo detenimiento que hemos dedicado a los mayores. Volveremos más adelante sobre algunos de ellos.

En el contexto político y social que hemos esbozado, era natural que los intelectuales latinoamericanos se interrogasen sobre las razones por las que el proceso de reconversión y desarrollo de la economía y de la sociedad de sus respectivos países encontraba tantas dificultades y obstáculos y continuaba estando sometido al ciclo de las fluctuaciones del mercado internacional. La sede principal de esta investigación fue el CEPAL («Comisionado Económico para América Latina»), un organismo instituido en 1948 en las Naciones Unidas y cuyo principal animador fue el economista argentino Raúl Prebisch. El debate que se desarrolló dentro y fuera del CEPAL durante los años cincuenta y, con mayor intensidad, en los sesenta fue extremadamente complejo. Esquematizando, se puede resumir que giró en torno al concepto de «dependencia» de los países de las «periferias» del mundo respecto de los del «centro». Se mirara por donde se mirara, este concepto remitía en primer lugar a la relación con los Estados Unidos.

Como se ha visto, el gobierno norteamericano estaba empeñado en un considerable esfuerzo financiero en favor de Europa, y la posibilidad de extender el plan Marshall a otras zonas del planeta no entraba desde luego en sus planes. Pero la vasta zona de América Latina quedaba abierta al flujo de las inversiones privadas, que de hecho, entre 1950 y 1957, aumentaron de manera espectacular. Incluso en Argentina, país donde los intereses y la presencia económica estaban muy consolidados y cuyas relaciones con los Estados Unidos eran bastante tensas, las inversiones norteamericanas, en 1950, superaban a las inglesas.

Este crecimiento de la penetración económica se correspondía, naturalmente, con una intensificación de las relaciones políticas entre las dos partes del continente. En 1947 se celebraba, en Rio de Janeiro, una conferencia de todos los estados americanos que concluyó con la firma de un pacto que comprometía a cada uno de los miembros a considerar cada agresión contra uno de ellos, desde el exterior o desde el interior, como una agresión a toda la comunidad americana. Se establecían así las bases para la constitución de la OAS (*Organization of the American States*), cuya estructura y estatuto fueron aprobados en una posterior conferencia que se celebró en Bogotá en marzo de 1948.

La nueva organización nacía en el clima de la guerra fría y, como tal, implicaba la alineación, cuando no la subordinación, de los estados de Latinoamérica a las directrices de la política exterior norteamericana. En efecto, en las sesiones de la Asamblea de la ONU, las delegaciones de los estados centro y sudamericanos se sumaron, salvo contadas excepciones, al voto de la delegación norteamericana; al mismo tiempo, las presiones por parte de Washington obligaban a muchos de ellos a suscribir con Estados Unidos pactos bilaterales de asistencia militar –Colombia llegó a enviar un contingente de su ejército a Corea– y aceptar la reducción de sus ya limitados intercambios con los países del bloque comunista. En 1947 los dos mayores partidos comunistas del subcontinente, el brasileño y el chileno, fueron ilegalizados.

Con la llegada de la administración republicana de Eisenhower, estos planteamientos inspirados en la lógica y en el espíritu de la guerra fría se hicieron más radicales. En marzo de 1954 la conferencia de la OAS de Caracas aprobó un documento que afirmaba que la actividad comunista en América Latina constituía una ingerencia en los asuntos internos del continente. En consecuencia y en aplicación de ello, en junio un contingente de mercenarios organizados por la CIA cruzó la frontera de Guatemala y derrocó el gobierno de Arbenz Guzmán que había sido elegido en elecciones libres y estaba llevando a cabo una reforma agraria radical. El pretexto para justificar esta intervención fue la compra por parte de Guatemala de un lote de armas procedente de Checoslovaquia, pero no resultó suficiente para disipar en la opinión pública latinoamericana su arraigado sentido de frustración y de rencor contra los «gringos». Su intensidad se midió cuando, en 1958, el vicepresidente Nixon, de viaje por las siete capitales sudamericanas, fue recibido en todas ellas con manifestaciones ciudadanas de hostilidad.

Una de las formas tradicionales de la protesta popular contra las oligarquías era la de la rebelión urbana y de la guerrilla campesina. El ejemplo más reciente de la primera era el de la capital de Colombia, precisamente en los días de la conferencia de la OAS, el llamado *bogotazo* en el que fue asesinado el líder progresista Jorge Gaitán.

En cuanto a la «violencia» rural, se trataba de un fenómeno recurrente en la historia latinoamericana. Pero ninguna de estas insurrecciones había tenido éxito, hasta que en Cuba, el 1 de enero de 1959, los guerrilleros de Fidel Castro entraban en La Habana y derrocaban la corrupta dictadura de Fulgencio Batista.

Se iniciaba así el experimento revolucionario cubano, que entre sus primeras medidas realizó una radical reforma agraria. Muchos vieron, o creyeron ver, en la experiencia de Cuba la única salida posible a la condición de dependencia. Entre ellos, también una parte no despreciable del clero católico, que había hecho suyos los nuevos planteamientos del Concilio Vaticano II y del papado de Juan XXIII hasta sus últimas consecuencias; me refiero a los exponentes de la teología de la liberación, como los brasileños Leonardo y Clodovis Boff, el argentino Enrique Dussel o el colombiano Camilo Torres, cura y guerrillero. Más adelante podremos constatar que muchas de las esperanzas alimentadas por la revolución castrista resultaron frustradas y que la opción de la guerrilla se reveló perdedora; pero su impacto en América Latina y en el mundo no se mide en términos estrictamente políticos; antes bien, probablemente a este impacto contribuyeron tanto sus éxitos como sus fracasos. Una generación entera conserva en la memoria la imagen de un vencido, Ernesto *Che* Guevara, como si fuera la de un vencedor.

26

De la crisis de Berlín a la crisis de Cuba

26.1. EL *SPUTNIK* Y LA NUEVA FASE DE LA CARRERA ARMAMENTÍSTICA

El 4 de octubre de 1957 se difundió en el mundo la noticia de que la Unión Soviética había puesto en órbita un satélite artificial, el Sputnik. Era el primer paso en el camino hacia una revolución tecnológica cuyos avances y retrocesos forman parte hoy en día de nuestra cotidianidad. Pero también era un nuevo paso en la carrera del rearme. De hecho, en agosto del mismo año se supo que la URSS había efectuado el lanzamiento de su primer misil balístico intercontinental. La sensación que los dos acontecimientos causaron en el mundo fue enorme. En Estados Unidos, en concreto, determinaron un estado anímico de alarma basado en la convicción de que entre las dos superpotencias se había producido un desequilibrio, el llamado *missile gap*, por supuesto a favor de la URSS. Era la primera vez que se cuestionaba la invulnerabilidad de la «fortaleza América».

Es en el clima de alarma de los años del *missile gap* donde se sitúa la elaboración por parte de organismos subordinados de un proyecto delirante como el del SIOP (*Single Integrated Operation Plan*) que disponía, en caso de que se considerara inminente un ataque soviético, el uso preventivo de todas las bombas atómicas disponibles no sólo contra la URSS y China, sino también contra Europa Oriental, Corea del Norte y Vietnam del Norte. La previsión era de trescientos sesenta a cuatrocientos millones de muertos. La perspectiva de una apocalipsis nuclear o, para usar la fórmula del secretario de Defensa de la administración Kennedy, Robert MacNamara, de «destrucción asegurada», es más, como se llamaría más tarde, «mutua destrucción asegurada» (*mad*, es decir, «locura»), evidentemente no podía ser tomada en consideración por gobernantes responsables como el presidente

Eisenhower y, a pesar de su ferviente anticomunismo, el secretario de estado Foster Dulles. En realidad la psicosis del *missile gap* se basaba en una sobrevaloración. En 1958 la URSS sólo disponía de cuatro misiles intercontinentales y de un número comprendido entre diez y veinticinco en 1961. Estados Unidos fue muy pronto capaz de comprobarlo mediante el uso de aviones espía, los U2 (el primer reconocimiento sobre Leningrado y Moscú había tenido lugar en 1956), y sucesivamente mediante satélites espía. Por otra parte esto no les impidió proseguir en la carrera del rearme de misiles. El primer misil intercontinental americano operativo fue el Atlas, en 1958, y a éste siguieron en los años inmediatamente sucesivos los Titan, los Minuteman y los Polaris, estos últimos instalados en submarinos difícilmente localizables y extremadamente móviles. En 1964 los Estados Unidos disponían de ochocientos treinta y cuatro misiles intercontinentales (ICBM) contra los ciento noventa de la URSS, de cuatrocientos dieciséis misiles instalados en submarinos contra ciento siete y de seiscientos treinta bombarderos estratégicos contra ciento setenta y cinco. Este catalizador del gasto militar puede en parte atribuirse a un proceso de automatismo producido y alimentado, como había ocurrido en la Alemania de Guillermo II, por la rivalidad insurrecta entre los distintos ejércitos en la tentativa de aventajarse en la repartición de las asignaciones disponibles. Pero es evidente que no se trata de una explicación suficiente. Tuvieron mayor peso los continuos cambios tecnológicos, por lo que en cuestión de pocos años cada sistema de arma quedaba obsoleto. En los años y décadas siguientes esta nueva y alucinante fase de la carrera armamentística prosiguió ininterrumpidamente y la panoplia de las dos superpotencias se enriqueció con sistemas de armas cada vez más sofisticados. La suspensión de los experimentos nucleares anunciada en marzo de 1958 por la Unión Soviética, a la que de hecho se asociaron en noviembre también Estados Unidos e Inglaterra, no interrumpió la carrera del armamento. Esto duró tan sólo hasta el 31 de agosto de 1960, cuando la Unión Soviética decidió ponerle fin e inició una serie de pruebas nucleares de potencia aterradora.

Pero al mismo tiempo se difundía y se arraigaba la toma de conciencia de los riesgos que la carrera del armamento conllevaba. Si el lanzamiento de la primera bomba atómica en Hiroshima había turbado profundamente a la comunidad científica internacional, incluso a los que habían colaborado en el proyecto Manhattan, el de la bomba de hidrógeno había suscitado una gran consternación en los que asistieron a su experimentación. Se ha destacado la analogía entre las reacciones de los que asistieron al primer experimento americano en noviembre de 1952 y las de Andrei Sajarov, que había colaborado en la puesta a punto de la bomba y que asistió al experimento de Semipalatinsk: impactó a ambos observar que en la zona afectada por la explosión los pájaros no conseguían alzar el vuelo. Lo que se cuestionaba, por

lo tanto, no eran sólo los millones de víctimas que una posible guerra atómica podía ocasionar, sino la posibilidad misma de la supervivencia del género humano en un ambiente degradado y contaminado. Ello abría angustiosos interrogantes acerca de la responsabilidad y los límites de la ciencia. En Estados Unidos Robert Oppenheimer se opuso abiertamente a la construcción de la bomba H y fue llamado a responder de sus anteriores informes con miembros del Partido Comunista ante el comité presidido por McCarthy, mientras en la URSS Igor Kurchatov, el padre de la primera bomba soviética, abandonó la investigación en el campo nuclear. En 1958 Albert Einstein y Bertrand Russell lanzaron un llamamiento con el que invitaban a los hombres a pensar exclusivamente en la suerte de la humanidad y a «olvidar todo lo demás», la nacionalidad, las opiniones políticas o las distintas religiones. En estos principios se inspiró el trabajo de los científicos pertenecientes al grupo de Pugwash, así llamado por el nombre de la localidad en la que se reunieron por primera vez en 1957. También formaron parte de este grupo acreditados científicos soviéticos.

Esta preocupación y abatimiento abarcaron no sólo al restringido círculo de los científicos y al mundillo de las élites intelectuales, sino que acabaron haciendo mella en numerosas capas de la opinión pública en las que el recuerdo de la guerra y de sus horrores estaba vivo y presente. Desde luego las campañas pacifistas llevadas a cabo por los «partidarios de la paz» y de hecho impulsadas por la URSS y los partidos comunistas de principios de los años cincuenta, tenían su límite en su carácter instrumental, pero de todas formas incidieron sobre la opinión pública llegando a suscitar preocupación e irritación en un personaje como Henry Kissinger. A finales de los cincuenta nacieron movimientos pacifistas tanto en Alemania, con el movimiento contra la «muerte atómica» y contra el rearme alemán, como en Inglaterra con las marchas de Aldermarston. A partir de ahí la presencia de movimientos pacifistas será una constante en el panorama político europeo y norteamericano. Una contribución eficaz a su difusión se debió a la asunción del tema de la guerra nuclear por parte de los medios de comunicación: la película de Stanley Kramer *La última playa* es de 1958 y de 1963 *El Doctor Strangelove* de Stanley Kubrick. En ese mismo año se alzaba la voz del papa Juan XXIII para amonestar a la humanidad con la encíclica *Pacem in Terris* acerca de las «consecuencias fatales para la vida en la tierra» de los experimentos nucleares en curso.

26.2. LA CRISIS DE BERLÍN

Naturalmente no es de extrañar que, en el contexto de la psicosis alarmista del *missile gap* y del nuevo arranque en la carrera armamentística, el enfren-

tamiento entre las dos superpotencias atravesara una fase de recrudecimiento. Una vez más el epicentro fue Alemania. Si, como se ha visto, la cuestión alemana estaba definitivamente aparcada, quedaba abierta sin embargo la de Berlín. Según los acuerdos firmados en su tiempo entre la República Federal y los aliados, la ex capital del Reich no formaba parte de la República Federal. Situada en el interior de la RFA y dividida en cuatro sectores de ocupación, era la vía de salida obligada para todos los que decidieran abandonar la RDA y refugiarse en el Oeste. Durante los primeros meses de 1953 más de ciento veinte mil alemanes orientales habían abandonado la RDA para refugiarse, a través de la parte occidental de la ciudad, en el territorio de la Alemania Federal. Se determinaba así una situación difícilmente sostenible para la RDA y para el prestigio del campo socialista y en Moscú había quien se daba cuenta. El 27 de mayo de 1953, a dos meses de la muerte de Stalin, Laurenti Beria, el más que temido jefe de la seguridad, se pronunció en una reunión del Politburó para la solución de una Alemania unificada y neutral sin poner, a diferencia de la nota de marzo de 1952, ninguna condición acerca de su ordenación política. Esto equivalía en la práctica a una liquidación de la RDA y por ello se comprende que una propuesta tal encontrara la reacción negativa de Walter Ullbricht y de algunos miembros del propio Politburó soviético. Pocos días después, el 16 y el 17 de junio, la ciudad de Berlín era el escenario de una revolución obrera que se extendió también a otras ciudades del país. A la luz de este hecho nuevo e inesperado, el recibimiento de la propuesta de Berlín equivalió si no a una rendición, sí a un desprestigio. Por ello, no sólo no se formalizó, sino que se asumirá como uno de los cargos de acusación contra Beria en el ajuste de cuentas que, como se vio, llevó a su liquidación y a su ejecución.

La cuestión de Berlín era por tanto una espina para la Unión Soviética. El 27 de noviembre de 1958 esta última dirigía a las potencias occidentales una nota en la que comunicaba su propósito de firmar un tratado de paz con la RDA y les daba seis meses de tiempo para encontrar un *modus vivendi* para el *status* de la ciudad, transcurrido el cual dichas potencias deberían tratar directamente con el régimen de Ullbricht.

Se han avanzado varias hipótesis acerca de las razones que indujeron a Kruschev a decidir el envío de esta nota. Una explicación ampliamente aceptada es que dicha iniciativa se debía a las presiones ejercidas por parte de los gobernantes de la RDA, preocupados por la situación insostenible que se determinó a raíz del auténtico éxodo que tenía lugar en la RDA hacia Occidente (entre 1949 y 1958, más de dos millones doscientos mil prófugos), y por parte de China, que en agosto había reiniciado los bombardeos sobre las islas Quemoy y Matsu y que no cesaba de ejercer presiones sobre Moscú para disuadirla de perseverar en una actitud para con Estados Unidos que aquélla tildaba de demasiado conciliador.

El del 27 de noviembre no era por otra parte un ultimátum: a principios de 1959, después de un encuentro entre Foster Dulles y Mikoyan, el plazo de seis meses que había previsto la nota del 27 de noviembre quedó anulado por parte soviética. De esta manera se atenuó la tensión hasta tal punto que en julio de 1959 Kruschev fue invitado a visitar Estados Unidos. Llegó el 15 de septiembre y permaneció allí hasta el 27 del mismo mes, viajando por el país y proporcionando a cada etapa nuevas pinceladas de color a los periodistas que seguían este acontecimiento espectacular. El comunicado último que se redactó al final de su viaje en un encuentro en el Camp David era de lo más genérico que pueda imaginarse, pero no contenía alusión alguna a la cuestión de Berlín. Todo parecía indicar que las relaciones entre las dos superpotencias se mantenían correctas hasta que, el 1 de mayo de 1960, llegó la noticia de que un avión espía norteamericano había sido abatido en el espacio aéreo de la Unión Soviética. En un primer momento el departamento de estado negó que se tratara de un avión espía, pero ante la evidencia de las pruebas aducidas por los soviéticos acabó por admitirlo. Se trataba de un pésimo viático para la cumbre entre Eisenhower y Kruschev, cuya convocatoria se había acordado durante la estancia americana de este último y efectivamente el encuentro, que tuvo lugar en París el 16 de mayo, resultó un fracaso. Durante su transcurso Kruschev no supo renunciar a la tentación de una perorata respecto a un Eisenhower incómodo. En septiembre un Kruschev cada vez más extrovertido estaba de nuevo en Nueva York, donde se reunió con Fidel Castro y animó con su cólera una sesión de la Asamblea de la ONU, dos gestos que desde luego no contribuían a mejorar las relaciones con Estados Unidos. Tampoco en la conferencia cumbre de junio de 1961, en la que se encontró en Viena con el nuevo presidente norteamericano, se llegó a resultado alguno.

Mientras tanto en Berlín el éxodo hacia el lado occidental de la ciudad había alcanzado proporciones bíblicas y por parte del gobierno de la RDA se renovaban las presiones sobre la URSS para que las medidas previstas en la nota del 27 de noviembre de 1958 se aplicaran al fin, pero las dudas de los soviéticos persistían. La solución a la que se llegó fue la de erigir el muro de Berlín, el 13 de agosto de 1961. Este último ha pasado a la historia como el símbolo de la división de Europa, como el muro de la vergüenza, y así fue. Pero también es cierto que su construcción, dejando indemnes los derechos de los aliados occidentales sobre los sectores de la sociedad que ellos controlaban, representaba un claro paso hacia atrás respecto a la nota del 27 de noviembre y sobre todo respecto a las demandas de los gobernantes de la RDA. La firma de un tratado de paz por separado con esta última se aplazó de hecho para tiempos mejores. El mismo Kennedy confesó a sus colaboradores que «no es una buena solución, pero un muro es tremendamente (*hell a lot*) mejor que una guerra». La cuestión de Berlín, pues, no estaba «resuel-

ta», sino «hibernada» (Di Nolfo, 1994). Pero también una hibernación, es decir, dejar pasar tiempo, puede ser una solución y los hechos así lo han demostrado.

26.3. LA «NUEVA FRONTERA» DE J. F. KENNEDY

La campaña electoral para las elecciones a la presidencia de noviembre de 1960, en las que J. F. Kennedy obtuvo la victoria por muy poco sobre su antagonista Richard Nixon, la llevó a cabo el candidato demócrata con la consigna de «una nueva frontera». Se trataba ahora de pasar de las palabras a los hechos y el nuevo presidente y los «cabeza de huevo» de los que se había rodeado estaban dispuestos a mantenerse fieles a los compromisos asumidos.

En el ámbito de la política interna, la política de la «nueva frontera» consistió esencialmente en una reducción de la carga fiscal, a fin de favorecer las inversiones y de impulsar el consumo, acompañada de un aumento sustancial del gasto público. En 1961 se presentó un arduo programa de construcción (el *Housing Act*) y asignaciones conspicuas destinadas a impulsar la investigación en el campo de las nuevas tecnologías, empezando por la espacial. No faltaron resultados: el desarrollo económico iniciado durante la guerra y proseguido casi ininterrumpidamente a lo largo de los años cincuenta no sólo continuó, sino que conoció una ulterior aceleración y la competición en la carrera hacia el espacio entablada con los soviéticos a lo largo de los años sesenta a favor de Norteamérica: en la noche del 21 de julio de 1969 dos astronautas norteamericanos pisaban la Luna.

La parte más grande de las inversiones fue, por otro lado, la que se destinó al gasto militar que gozó de un auténtico impulso. Entre 1960 y 1968 el gasto militar de Estados Unidos se vio prácticamente doblado. Por otra parte, es difícil hacer una neta distinción entre las inversiones en alta tecnología y las de armamento: las primeras estaban en gran parte en función de las segundas y los beneficios de sus realizaciones y conquistas encontraban aplicación en la producción de bienes de consumo. Un satélite podía ser utilizado tanto como espía como central de comunicaciones telefónicas. Aquel «complejo militar industrial» en relación al cual el presidente Eisenhower había expresado su aprensión poco antes de dejar su cargo, era más que nunca operante.

Por lo que concierne al enfoque de los problemas internacionales, la política de la nueva frontera se distingue del enfoque cauteloso y sustancialmente inspirado en el concepto de contención de la administración republicana que la había precedido, en especial por la amplitud y la ambición de los objetivos que se proponía. Se trataba ante todo de repasar todo el capítulo de las relaciones con los aliados y en particular con Europa, que ya no era la

Europa hambrienta y deprimida de la posguerra, sino que se había convertido en una comunidad y en una gran potencia económica y comercial. En esta dirección iban también la transformación, en abril de 1960, de la OECE (Organización Europea para la Cooperación Económica) en un organismo más amplio extendido a Estados Unidos y Canadá, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), y la iniciativa de la nueva administración de dar salida a una nueva ronda de negociaciones en el ámbito del GATT, el *Kennedy round*. Por otra parte, la política de la nueva frontera no se limitó a Europa y al mundo de los países desarrollados. Ésta implicó también una revisión de la política norteamericana en Oriente Medio, en el sentido de una superación de la doctrina de Eisenhower y una iniciativa de gran envergadura en dirección a los países de América Latina, la Alianza para el progreso, que abordaremos más tarde. Por último, cabe señalar que fue durante los años de la presidencia de Kennedy cuando el compromiso norteamericano en Vietnam fue adquiriendo consistencia. Pero sobre todo esto volveremos más tarde. De momento nos limitamos a subrayar cómo este enfoque global, de 360 grados, se movió a la zaga de la tradición de los grandes presidentes demócratas, de Wilson a Roosevelt, lo que supuso un nuevo impulso.

Una revisión radical de las coordenadas de la política exterior norteamericana de estas características requería, sin embargo, la correspondiente revisión de las «doctrinas» militares y de las consiguientes elecciones en el campo del armamento.

Hasta entonces la doctrina propuesta públicamente había sido la de la *massive retaliation*. Elaborada en el transcurso de la campaña electoral de 1952, que concluyó con la elección de Eisenhower y el retorno de los republicanos a la Casa Blanca, y puesta a punto por un documento del *National Security Council* de octubre de 1953, fue anunciada públicamente por el secretario de estado Foster Dulles en un discurso del 12 de enero de 1954. Dicha doctrina preveía que a cualquier acción agresiva por parte soviética se respondiera, precisamente, con una represalia violenta. Además de constituir una advertencia y una disuasión para la parte contraria, esto permitiría una dispersión menor del gasto militar en el interior y en el exterior y por consiguiente una reducción de su gravamen, y, como se ha visto, así fue durante algún tiempo. En las nuevas condiciones maduradas a finales de los años cincuenta esta doctrina parecía haberse superado y requería ser revisada. La experiencia de las guerras de Corea y de Vietnam había demostrado que el empleo de las bombas atómicas tácticas, que incluso se había tomado en consideración, resultaba impracticable y que por lo tanto la doctrina de la represalia violenta era en realidad poco creíble.

La solución que más se consideró fue la que propuso el general Maxwell D. Taylor, un crítico convencido de la doctrina de la represalia violenta

y de su eficacia disuasiva e igualmente defensor acérrimo de la teoría de la guerra limitada. Ésta última se basaba en la convicción de que la situación más probable a la que Estados Unidos debía hacer frente era la de una guerra local.

El abandono de la doctrina de la represalia masiva y la adopción de la de la respuesta flexible se basaba en el supuesto de que el problema no fuera sólo el de estar preparados para un enfrentamiento directo con la Unión Soviética, que después de la solución de Berlín parecía menos probable, sino también, y sobre todo, de bloquear la estrategia envolvente llevada a cabo por la URSS después del XX Congreso y de bloquear o, mejor todavía, prevenir sus tentativas de ampliar su radio de influencia dondequiera que se produjeran, ya fuere en el Medio Oriente, en el Vietnam o en Cuba.

En cualquier caso, la parte contraria debía saber no sólo que cualquier acción agresiva, dondequiera que se produjese, recibiría la respuesta pertinente, sino que además Estados Unidos estaba dispuesto a recorrer todos los peldaños de una posible escalada, desde el uso de las armas convencionales al de las bombas atómicas tácticas hasta las estratégicas. La primera prueba para esta nueva orientación política y militar fue la de la crisis de Cuba.

26.4. LA CRISIS DE CUBA

El 1 de enero de 1959 los guerrilleros de Fidel Castro derrocaron la dictadura de Fulgencio Batista y establecieron en la isla de Cuba un nuevo gobierno revolucionario. Su ascenso al poder fue acogido favorablemente por un amplio sector de la opinión pública norteamericana y Fidel Castro celebró una rueda de prensa en Estados Unidos en la que aseguró que no contaría con ministros comunistas en su gobierno, el cual incluso fue reconocido por Washington. La visita que Anastas Mikoyan efectuó a Cuba en febrero de 1960 y el acuerdo que en esta ocasión se estipuló para la compra por parte de la Unión Soviética de la cosecha de azúcar cubano suscitaron la alarma en la capital norteamericana, y en junio el Congreso aprobó la propuesta de la administración de decretar el embargo sobre las importaciones de azúcar de Cuba, una medida que cerraba a la isla el principal mercado de su mayor, por no decir único, recurso. En los meses que siguieron las relaciones entre los dos países fueron deteriorándose cada vez más. En enero de 1961 Estados Unidos rompía las relaciones diplomáticas con Cuba y en abril del mismo año un millar de prófugos cubanos ejercitados por la CIA desembarcaban en la isla por la bahía de Cochinos, pero fueron rápidamente derrotados por las milicias castristas. Era un típico ejemplo de «acción encubierta», que se resolvió en un clamoroso fiasco y en una pérdida de prestigio de la administración, a pesar de que Kennedy sostuviera que no se le había puesto al corriente.

Es comprensible que en Cuba la tentativa de la bahía de Cochinos suscitara el temor de que ésta podría volverse a repetir y que la próxima vez sería de manera menos *amateur*, y que en consecuencia se dirigiera a Moscú para pedir protección. En febrero de 1962 Raúl Castro, hermano de Fidel, viajó hasta Moscú y fue en esta ocasión cuando se decidió el envío de misiles de medio y largo alcance, de aviones y de un contingente de cuarenta y dos mil hombres a la isla caribeña. La operación se llevó a cabo con el máximo secreto y ni al propio embajador soviético en Washington, Anatoli Dobrinin, se le puso al corriente. Cuáles eran los objetivos que Kruschev pretendía conseguir con esta aventurada jugada son sólo suposiciones, pero es probable que no sólo se propusiera disuadir a los norteamericanos de efectuar un segundo intento de invasión de la isla, sino además, y sobre todo, nivelar la inferioridad de la Unión Soviética en el campo del armamento de misiles, inferioridad de la cual era muy consciente, instalando rampas de lanzamiento a pocas millas de las costas americanas.

No tuvo que pasar mucho tiempo para que los aviones espía y los satélites norteamericanos detectaran sin lugar a dudas la presencia de las instalaciones de misiles soviéticas en Cuba. El 22 de octubre el presidente Kennedy en un dramático discurso lo anunciaba al país y comunicaba su decisión de poner a la isla en «cuarentena» impidiendo, si era necesario recurriendo a la fuerza, el tránsito de barcos soviéticos con carga de armamento hacia Cuba.

Por primera vez desde el fin de la segunda guerra mundial se barajaba la posibilidad de un enfrentamiento atómico directo entre las dos superpotencias, y el mundo contenía la respiración. La sensación que entonces prevalecía en la opinión pública mundial de que durante la crisis de Cuba se corría el riesgo de llegar a una guerra termonuclear y hasta qué punto este riesgo se habría evitado hasta el extremo ha sido retomada como materia de estudio y corroborada también por gran parte de la historiografía sobre el tema. En realidad, a través de la documentación más reciente se llega a la conclusión de que por ambas partes se mantuvo el control de la situación y que ninguna de ellas nunca consideró la posibilidad de recurrir a las armas atómicas. Sabemos, en efecto, que después de haber decretado la «cuarentena», el presidente Kennedy no sólo resistió a las presiones de los distintos «halcones» que solicitaban una acción contra Cuba, sino que también buscó en todo momento el compromiso al que finalmente se llegó. Sabemos además que el 27 de octubre, después de que un U2 violara la frontera espacial soviética, despegó una formación de Mig soviéticos para interceptarlo y que de los F-102A norteamericanos dotados de armas atómicas abandonaron sus bases de Alaska para interceptarlos a su vez. El mismo día un misil soviético abatió otro U2 norteamericano en el cielo de Cuba. Pero en ambos casos se evitó el riesgo de una guerra por error.

Durante esta misma jornada del 27 de octubre, después de varios días de frenéticas consultas y carteo entre Moscú y Washington, en un coloquio entre Robert Kennedy y Dobrinin se llegó a un acuerdo, que por otro lado no se hizo público. Dicho acuerdo establecía el compromiso soviético de retirar los misiles de la isla y el americano de no invadir Cuba. Por parte americana se declaraba además la disposición para considerar la posibilidad de una reducción de «otros armamentos». Se hacía referencia a los misiles Júpiter que Estados Unidos había instalado en Turquía a principios de 1962 y que Kruschev había solicitado que fueran retirados. Se respetó el acuerdo por ambas partes: los misiles soviéticos se retiraron inmediatamente y algunos meses después los norteamericanos en Turquía, que por otra parte ya eran obsoletos cuando se instalaron.

La crisis de Cuba terminaba de este modo con un compromiso. Pero no cabe duda de que gracias a la determinación que había demostrado, el presidente Kennedy salía de ella con un prestigio aumentado, mientras Kruschev, ya fuera porque se le echara en cara su imprudencia al instalar los misiles o por todo lo contrario, como hacían los cubanos y los chinos, por su rendición al sacarlos, quedaba como un perdedor. En Moscú, como veremos, muy pronto saldrían a la luz las consecuencias.

La conciencia del riesgo que se había corrido durante la crisis de Cuba tuvo sus efectos en las relaciones entre las dos superpotencias. En junio de 1963 los dos países llegaron a un acuerdo por el que entró en funcionamiento una línea telefónica directa, la llamada línea roja, que unía el Kremlin con la Casa Blanca. En agosto los ministros de Asuntos Exteriores de la URSS, de Estados Unidos y de Gran Bretaña firmaban un tratado en el que se comprometían a poner fin a los experimentos nucleares en la atmósfera. Pocos meses después de la firma –el 22 de noviembre de 1963– el presidente Kennedy, de visita en la ciudad tejana de Dallas, moría víctima de un atentado sobre el que continúa pesando un gran misterio. Aproximadamente un año más tarde –el 14 de octubre de 1964– Nikita Kruschev, como veremos, era destituido de su cargo. Sin embargo, a pesar de este doble cambio de la guardia en los máximos dirigentes, el diálogo entre las dos superpotencias continuará y producirá más resultados: en enero de 1967 Estados Unidos, la Unión Soviética e Inglaterra estipulaban un tratado que prohibía el uso de artefactos nucleares en el espacio, y en junio del mismo año tuvo lugar en Glasgow una conferencia cumbre entre el nuevo primer ministro soviético Kosygin y el presidente Johnson. Por último, en junio de 1968, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobaba con noventa y cinco votos a favor, cuatro en contra y veintiuna abstenciones el Tratado de No Proliferación de Armamento Nuclear según el cual los estados firmantes provistos de armas atómicas se comprometían a no transferirlas a otros y los que no las poseían a no iniciar su producción. Cabe decir que a este tratado se ad-

hirió un número limitado de países. De hecho, no lo firmaron, entre otros, Suráfrica, Israel, la India, España, Francia, que desde 1960 disponía de la bomba atómica, y China, que disponía de ella desde 1964. El arsenal del que estas dos últimas potencias disponían era por otra parte exiguo comparado con el de las dos superpotencias. Eran estas dos últimas las que tenían las llaves del templo de Jano. La competición por la conquista del espacio que habían emprendido constituía para la opinión pública mundial la demostración de su dominio sobre el planeta Tierra.

Desde luego se producirán conflictos locales también durante los años sesenta: el más largo fue el de Vietnam, el más breve la llamada guerra de los seis días entre los países árabes e Israel, en 1967. Ya tendremos ocasión de volver a hablar de ellos; por el momento nos limitaremos a destacar cómo ambas potencias invertirían su prestigio respectivamente a favor de uno de los dos bandos en lucha, pero cómo en ambos casos los conflictos quedarían localizados. Desde el punto de vista estrictamente militar, el mundo continuaba siendo bipolar.

En cambio, había dejado de serlo –o lo era menos– desde el punto de vista político, no sólo porque, como hemos visto, nuevos sujetos –los no alineados, China, y la mayor parte de América Latina– tendían cada vez más a discrepar de la lógica de los dos bloques contrapuestos, sino sobre todo porque estos últimos sólo conservaban parte de la fuerza de atracción política e ideal que habían tenido durante los años de la guerra fría. Esto es muy evidente, como veremos, en lo que se refiere al bloque que encabezaba la Unión Soviética, pero también dentro de la alianza atlántica empezaban a manifestarse las primeras grietas. Atravesada la primera etapa de los años cincuenta y superada la crisis de Cuba, se nos encaminaba hacia un mundo bipolar.

27

Europa occidental en los años sesenta

Un viajante que hubiera visitado Europa occidental en la anteguerra o en la inmediata posguerra y hubiera vuelto a finales de los sesenta, le habría resultado difícil reconocerla. El viejo continente estaba atravesando realmente una fase de desarrollo tumultuosa. Se adopte el indicador económico que se adopte, evidencian todos ellos el progreso y, más aún, la transformación. Limitémonos a los datos más significativos y sinópticos: la producción registró entre 1950 y 1969 un incremento medio anual del 4,6 %. El crecimiento medio anual de la renta *per capita* entre 1950 y 1970 ha sido valorada por Paul Bairoch del 4,5 %, el doble de la de Estados Unidos en el período correspondiente. En estas dos décadas la cuota europea en la producción mundial de bienes y servicios pasó del 37 % al 41 %. La desocupación había disminuido drásticamente en casi todos los países. Regiones cuyos recursos habían sido hasta entonces los de una agricultura subdesarrollada se habían transformado en zonas industriales y, en consecuencia, la composición social de la población se había modificado radicalmente: a un número cada vez más decreciente de campesinos correspondía exactamente un número cada vez más creciente de obreros y de empleados en el sector de servicios. El campo cada vez más despoblado contrastaba con las ciudades cada vez más atestadas de gente. Incluso el paisaje y el aspecto del viejo continente había cambiado.

Había contribuido mucho a promover esta transformación, como hemos visto, el proceso de integración que se inició con el tratado de Roma y que continuó durante los años sesenta. Por supuesto este proceso encontraba obstáculos en su trayectoria: el proyecto gaullista de la «Europa europea» o de las «patrias», basado como estaba en una relación privilegiada entre Francia y la RFA, encontraba la oposición de los países menores y en particular de los del Benelux. Las disensiones más acusadas se produjeron con la

cuestión de la atribución a los organismos de la Comunidad de «recursos propios» que la capacitaran para gestionar una política agraria común. Se alcanzó el punto más álgido de la tensión en junio de 1965, cuando Francia anunció su decisión de no participar más en las tareas de los órganos comunitarios. Pero el proceso de integración económica ya había avanzado demasiado como para suspenderlo y a finales de enero de 1966 se llegó a un compromiso basado en la división de poderes entre la Comisión y el Consejo de ministros (y por tanto de cada estado) que hizo posible a partir de 1970 la puesta en marcha de una política agrícola comunitaria.

Los años comprendidos entre 1950 y 1960 fueron, pues, un período de alta coyuntura para toda Europa occidental.

Pero si desglosamos por cada país las cifras relativas al desarrollo económico en su conjunto, enseguida salta a la vista que algunos países avanzaron con paso más decidido que otros. Por ello es necesario examinar de manera diferenciada los hechos y la evolución.

27.1. LOS PAÍSES VENCIDOS

Aunque parezca sorprendente, fueron los países que salieron derrotados de la segunda guerra mundial los que realizaron las mejores actuaciones. Es este el caso por excelencia de la República Federal Alemana.

A pesar de haber empezado con retraso (en 1948 su producción industrial era la mitad de la de 1936), recuperó rápidamente el tiempo perdido. Entre 1950 y 1960 experimentó un crecimiento del 7,26 % anual y entre el período que va desde 1950 a 1970 el índice de producción industrial supuso un incremento medio anual del 6,2 %. Se trata de resultados tanto más notables si se tiene en cuenta que mientras había ido aumentando sensiblemente el peso del gasto militar, que en 1970 se verá más que triplicado con respecto al de 1955. Entre los factores que contribuyeron a hacer posible este «milagro» económico tuvo un peso destacado la gran disponibilidad de la mano de obra de bajo coste gracias a la afluencia de millones de refugiados procedentes de la zona oriental del país en la inmediata posguerra y posteriormente a la inmigración de trabajadores extranjeros (*Gastarbeiter*) provenientes de los países de Europa meridional.

Por otro lado, todo esto no bastaría para explicarse el «milagro» alemán si además no se tuviera en cuenta el cuadro político en el que tuvo lugar. La vida política de la República de Weimar se había caracterizado por la polarización de amplios sectores de la opinión pública y del electorado hacia los extremos de las distintas opciones políticas, comunistas y partidos de extrema derecha. Por cuanto concierne a los primeros, su presencia en la vida política de la RFA fue totalmente marginal y ello es todavía más digno de con-

sideración si se tiene en cuenta que durante la República de Weimar el KPD había sido una fuerza política considerable y más arraigada que cuanto pudieran estarlo los demás partidos comunistas de Europa occidental. Pero el tratamiento extremadamente severo por parte de las fuerzas de ocupación soviética en la parte oriental del país había alienado los limitados acuerdos que este partido había conseguido durante los primeros años de la posguerra. En 1956 el Partido Comunista (KPD) quedó desautorizado tras una sentencia dictaminada por la Corte constitucional. En la derecha, un potencial considerable de votos lo representaban los millones de prófugos que venían del este. Pero éste quedó reabsorbido y neutralizado por los democristianos de la CDU y de su apéndice bávaro de la CSU. La dialéctica política se limitaba así al enfrentamiento entre democristianos y socialdemócratas del SPD. El sistema de las relaciones que se fueron estableciendo entre las asociaciones de los empresarios y las de los trabajadores, además de las normas contenidas en el *Grundgesetz* a fin de asegurar la estabilidad política (véase el cap. 22) contribuyó a conferir un mayor equilibrio al sistema político alemán. A este respecto cabe destacar que, a diferencia de otros países de Europa continental, en la RFA había una única central sindical, la DGB (*Deuscher Gewerkschaft Verband*) y que ello contribuía a simplificar y a facilitar las relaciones entre las partes sociales. En 1951 se pusieron en marcha los primeros experimentos de cogestión (*Mitbestimmung*) limitados a la industria del sector minero y siderúrgico. Así se explica que la RFA registre al mismo tiempo una de las tasas más altas de sindicalismo (33, 8% en 1988) y con mucho el índice más bajo de conflictividad de Europa, (una media anual de noventa y dos trabajadores en huelga por diez mil ocupados entre 1946 y 1976).

Durante toda la década de los cincuenta la CDU, bajo la guía prestigiosa de Konrad Adenauer, supo mantener firmemente la situación. Conseguida la victoria en las elecciones del 6 de septiembre de 1953, obtuvo la mayoría absoluta en las de 1957. Pero las relaciones de fuerza entre los dos grandes partidos antagónicos se fueron modificando a partir de que en noviembre de 1959 los socialdemócratas, reunidos en un congreso en Bad Godesberg, decidieran sustituir su antiguo programa, que requería la tradición marxista y clasista del partido, con un nuevo documento programático en donde se reconocía el papel de la libre competencia «dentro de los posibles» y se limitaba el de la planificación «en la medida de lo posible». También en lo concerniente a la orientación de la política exterior, el congreso de Bad Godesberg representó un viraje: marcó el abandono por parte de la socialdemocracia alemana de la perspectiva de una Alemania unificada y neutralizada y la aceptación de la inserción de la RFA en la Alianza Occidental. Por otra parte, ya en 1957 el SPD se había asociado a la CDU en el voto favorable a la ratificación del tratado de Roma. El SPD dejaba de

este modo de ser la representación política de la clase obrera como prevalecientemente había sido hasta el momento, para convertirse en una fuerza política capaz de atraer las simpatías de las clases medias, como se hizo patente en las convocatorias electorales de los años 60. Sus electores pasaron, efectivamente, del 31,8% en 1957 al 36,2% en 1961, y al 39,3% en 1965 hasta obtener la mayoría relativa en 1969. En 1963 Adenauer se retiró de la vida política. Después de una breve cancillería de Ehrard, que había sido el principal colaborador económico de Adenauer y al que en general se le consideraba el principal artífice del «milagro económico alemán», se constituyó en 1966 un gobierno de «gran coalición» (*grosse Koalition*) en el que el socialdemócrata Willy Brandt asumió el cargo de ministro de Asuntos Exteriores.

Como conclusión de esta reconstrucción sumaria, podemos decir que el cuadro político de la RFA desde el momento en que se constituyó hasta después de los años sesenta se caracteriza por un alto grado de estabilidad y, dentro de ella, por un alto grado de flexibilidad. Es dentro de este marco donde tiene lugar el «milagro» económico alemán.

Otro «milagro económico» fue el que se produjo en Italia. No es mi intención abrumar con más cifras y por ello me limitaré a recordar que después del de la RFA el índice de crecimiento del PIB italiano en los años cincuenta –del 5,9%– es el más alto de Europa. A este respecto escribió una economista que «si la renta real por habitante se triplicó en su totalidad de 1861 a 1960, más de la mitad del incremento se obtuvo en el período relativamente breve comprendido entre 1951 y 1960» (Caffè, 1979). El ritmo acelerado de este desarrollo puede parecer más sorprendente aún si se tiene en cuenta la desventaja del retraso del país y en particular de los desequilibrios regionales que siguieron caracterizando la estructura durante los años de la posguerra. No será hasta 1950 cuando, bajo el impulso de los movimientos campesinos que se desencadenaron en el sur del país, se inicie una reforma agraria que abarcará un total de setecientas mil hectáreas de terreno concentradas en algunas zonas del país en donde los desequilibrios sociales eran mayores. También en 1950 se constituyó la Banca del Sur, con el objetivo de promover el desarrollo de las regiones meridionales.

En otros aspectos, sin embargo, este retraso constituía una ventaja. Como la RFA, e incluso en mayor medida, Italia disponía de una vasta reserva de mano de obra económica en sus regiones meridionales. Ésta fue en gran parte absorbida por la industria de las regiones del norte y en parte por Europa septentrional y en especial por la RFA. Se calcula que entre 1946 y 1976 cuatro millones de italianos dejaron el sur de Italia para emigrar a las ciudades del norte o al extranjero. A diferencia de la RFA, cabe destacar que la carga del gasto militar pesaba sólo de manera marginal en la balanza del estado italiano y por tanto dejará disponibles mayores recursos para una política de desarrollo. Por último destacaremos el papel que, a diferencia de la

RFA, las industrias con participación estatal y la intervención del estado tuvieron en el fomento del desarrollo.

Pero la diferencia principal y más evidente en comparación con la RFA consiste en la diversidad del marco político en la que se sitúan los dos «milagros». Si, como hemos visto, el alemán se caracterizaba por su estabilidad, el italiano, en cambio, se caracterizó por su, al menos aparente, inestabilidad. Entre 1947 y finales de los 60 se cuentan reiteradas crisis de gobierno y por lo menos nueve presidentes del Consejo se alternaron en las riendas del gobierno. Pero hay que saber ir más allá de las apariencias.

El eje del equilibrio político era de hecho el Partido de la Democracia Cristiana, que ganó las elecciones de 1948 y al cual pertenecían todos los presidentes del consejo de los distintos gobiernos. La tentativa de prolongar y consolidar esta posición de predominio mediante una ley electoral mayoritaria análoga a la francesa de 1951 no fue secundada por los votantes en las elecciones de junio de 1953. Ello no impidió que en el transcurso de los años cincuenta el PCI, si bien conservaba intacto su electorado, quedara al margen de la vida política italiana. En 1956, a continuación de la sublevación húngara, el PSI revocó el pacto de unidad de acción que desde hacía treinta años lo vinculaba a los comunistas. Pero un posterior intento de decantar el eje político hacia la derecha quedó totalmente frustrado tras la enérgica reacción popular (se contaron catorce muertos entre los manifestantes) que en julio de 1960 llevó a la caída del gobierno Tambroni, que se había ganado la confianza en el Parlamento gracias al voto determinante de los monárquicos y de los fascistas. Se daba paso así a la constitución en 1963 del primer gobierno de centro izquierda, presidido por Aldo Moro y en el cual el líder socialista Pietro Nenni asumió el cargo de vicepresidente del Consejo. De este modo empezaba un nuevo ciclo de la vida política italiana. El objetivo que ahora se perseguía era el de una política de reformas y de una distribución más ecuánime de la riqueza fruto del desarrollo y del «milagro» económico. Con este fin el exponente republicano Ugo La Malfa presentó en 1962 una nota adjunta de la relación sobre la situación económica en la que hacía alusión a estos principios. En un primer momento el gobierno de Moro-Nenni acogió estas reivindicaciones y es en este contexto de voluntad reformadora donde tiene lugar la decisión de extender la escolarización obligatoria hasta los catorce años y de proceder a la nacionalización de la industria eléctrica. Sin embargo, las funciones del nuevo ente para la energía instituido después de la nacionalización (ENEL), sufrieron una reestructuración. El profesor Felice Ippolito (consejero del ENEL y secretario del Comité Nacional para la Energía Nuclear), que habría querido extenderlas a todo el sector energético y equilibrar, a través de la nuclear, los riesgos de la dependencia petrolífera, fue procesado y condenado sobre la base de acusaciones poco fundamentadas. Análogamente, se desestimó un

proyecto de reforma urbanística que había elaborado el ministro democristiano Fiorentino Sullo.

Después del trauma de 1960 el cuadro político quedaba de este modo estabilizado: a una serie de gobiernos «centristas» sucedía una serie de gobiernos de «centro-izquierda». Hubo tentativas de subversión desde el interior y desde el exterior, pero ninguno de ellos fue más allá del proyecto veleidoso, por no decir de aficionados. A pesar de haber recuperado la estabilidad, Italia continuaba siendo el país con mayor nivel de conflictos industriales en Europa: una media anual de dos mil trescientos trece trabajadores en huelga sobre diez mil trabajadores en activo entre 1946 y 1976. Se llegó a cotas especialmente altas a principios de los años sesenta, pero esto no debe sorprendernos dado el bajo nivel inicial de los salarios. Sin embargo cabe destacar aquí que los sindicatos italianos no se limitaban a sus obligaciones institucionales de tutela del nivel de vida de los trabajadores en activo, sino que se esforzaron en elaborar propuestas y estrategias destinadas a promover la lucha contra el desempleo y una programación del desarrollo que tuviera como objetivo superar el desequilibrio existente entre las distintas clases sociales y las distintas partes del país, ejecutando de este modo una función de estímulo. Con este espíritu el sindicato más grande de los italianos –la CGIL– había elaborado ya en 1949 su propio «Plan del trabajo». Análogas observaciones se pueden hacer para el mayor partido de la oposición: bajo la guía de Palmiro Togliatti, el PCI, que contra los gobiernos centristas había conducido una batalla frontal, frente a los gobiernos de centro-izquierda no adoptó una postura de oposición perjudicial, sino más bien de condicionamiento y de estímulo. Los vínculos que el PCI había mantenido con la Unión Soviética impedían que en Italia se pudiera realizar una rotación de los dos partidos de mayor importancia en el gobierno del país. Por ello la relación que se instituyó entre ellos se ha definido de «bipolarismo imperfecto». Fue este carácter imperfecto lo que llevó a asegurar esa estabilidad y esa flexibilidad necesarias para garantizar el funcionamiento del sistema político. Lo que sirvió de aglutinante fue la matriz común antifascista de los principales partidos políticos. No fue hasta la segunda mitad de los años sesenta, cuando el impulso reformista de los gobiernos de centro-izquierda había ido perdiendo fuerza, que el sistema político italiano atravesó una nueva crisis y el «bipolarismo imperfecto» mostró sus limitaciones.

27.2. LOS PAÍSES VENCEDORES

Lo mismo que la italiana, la vida política en Francia se caracteriza por una alta tasa de inestabilidad. La amplia base de consenso sobre la que se apoyaban los gobiernos de la liberación se había ido erosionando y restringien-

do. A ello habían contribuido la dimisión como jefe de gobierno del general De Gaulle en enero de 1946 y su retirada de la vida política activa y, a continuación, en mayo de 1947, la exclusión del gobierno del Partido Comunista y posteriormente su marginación gradual. Su representación parlamentaria se redujo drásticamente en las elecciones de junio de 1951 tras aprobarse una nueva ley electoral, que modificaba mediante la institución de las alianzas el sistema electoral en vigor basado en la representación proporcional. No obstante, como se verá por los resultados de todas las convocatorias electorales, el PCF conservaba su ascensión hacia alrededor de un cuarto de la población francesa y la organización sindical a éste unida –la CGT– mantenía, a pesar de las escisiones que sindicalistas católicos y socialistas provocaron, una posición de preeminencia en el mundo sindical y conservaba intacta su combatividad. El índice de conflictividad industrial francesa, calculado entre los años comprendidos entre 1946 y 1976 (una media anual de mil trescientos sesenta y siete huelguistas por diez mil trabajadores en activo), es el más alto de Europa después del italiano. Tomaron parte en la huelga general del verano de 1953 cuatro millones de trabajadores.

Los gobiernos que se sucedieron desde 1947 a 1958 se regían, pues, por una mayoría constituida por una coalición heterogénea de «tercera fuerza», para colmo dividida en su propio seno en lo que concierne a las cuestiones más importantes, desde la guerra del Vietnam a las cuestiones magrebíes y la adhesión a la CED (véase cap. 22). Los socialistas, que eran parte integrante, fueron marginándose del gobierno y quedaron definitivamente excluidos cuando en febrero de 1952 se constituyó, con la aportación determinante de una parte de los gaullistas del *Rassemblement du Peuple Français*, un gobierno presidido por el moderado Antoine Pinay. El breve paréntesis del gobierno Mendès France (junio de 1954-febrero 1955), fruto de la conmoción que provocó la derrota de Dien Bien Phu (véase cap. 22), se cerró rápidamente una vez zanjada la cuestión vietnamita. A aumentar la tasa de inestabilidad contribuía además el malestar de las capas medias –en particular pequeños comerciantes y artesanos– cuya renta había disminuido tras la modernización del sistema distributivo. No se explicarían de otra manera los triunfos efímeros del movimiento que lleva el nombre de su fundador Pierre Poujade, el poujadismo, y que, nacido como protesta fiscal, fue adquiriendo un difuso carácter contestatario. En las elecciones de 1956 los poujadistas obtuvieron el 13 % de los votos.

Una nueva fase de la vida política francesa pareció trazarse con el triunfo de las izquierdas en las elecciones de enero de 1956, tras las cuales se confió el encargo de formar gobierno al líder socialista Guy Mollet. El gobierno que constituyó, al que también votaron a favor los comunistas, adoptó una serie de medidas (la concesión de una tercera semana de vacaciones pagadas, mejoras en el sistema de pensiones y de previsión) que recuperaban

la tradición del Frente Popular. En cuanto a la política exterior, las decisiones más relevantes fueron el cierre de las negociaciones iniciadas desde hacía tiempo con los representantes marroquíes y tunecinos, con el reconocimiento de la independencia de los dos países. En cambio quedaba abierta la cuestión argelina, de difícil solución a causa de la presencia en este país, a diferencia de Túnez y Marruecos, de una minoría fuerte y combativa de colonos franceses. Fue justamente éste el obstáculo con que tropezó el gobierno de Mollet. Fallidas las tentativas de una solución pacífica, se optó por la vía de la prueba de fuerza, no sólo con los miembros de la resistencia argelina, sino también con los estados del mundo árabe que apoyaban su causa. Aquí se sitúa la empresa de Suez de octubre de 1956 dirigida contra el Egipto de Nasser (véase cap. 25). Su fracaso abrió más brechas no sólo en la opinión pública sino en la mayoría gubernamental y en el propio gobierno, obligando a éste último a dimitir en diciembre de 1957. A medida que la cuestión argelina iba gangrenándose, la inestabilidad se transformaba en crisis, la crisis de la Cuarta República. El 13 de mayo de 1958 los militares tomaban el poder en Argel desautorizando de hecho al gobierno de París y una semana más tarde se apoderaban de Córcega. Francia sólo salió de esta dramática situación con el retorno a la vida pública del general De Gaulle de su desdeñoso, pero vigilante retiro que se remontaba al ya lejano 1946. Éste elaboró el proyecto de una nueva Constitución que preveía la elección del presidente de la república ya no por parte del Parlamento, sino por parte de un comité de notables y dejaba en manos del propio presidente de la república el poder para deshacer la Asamblea Nacional y convocar los referéndums modificando de este modo la relación preexistente entre poder ejecutivo y legislativo a favor del primero. También se modificó la ley electoral, con el paso del sistema proporcional al mayoritario en dos vueltas. En septiembre de 1958 la nueva Constitución se sometió a referéndum popular y se aprobó por mayoría casi absoluta y De Gaulle, que en febrero había asumido el cargo de presidente del consejo de ministros, fue elegido para la presidencia de la República. Así nacía la Quinta República y Francia recuperaba por fin la estabilidad del cuadro político que por otro lado, a la vista de los resultados, fue relativa. Los años comprendidos entre 1958 y 1962 fueron de hecho agitados: al fracaso en abril de 1961 de un *Putsch* militar por parte de altos oficiales residentes en Argel siguió una oleada de atentados terroristas perpetrados por la OAS, una organización de extrema derecha contraria a cualquier concesión a la resistencia argelina. Sin embargo, esto no disuadió a De Gaulle de continuar las negociaciones con los representantes del FLN argelino, negociaciones que se cerraron en abril de 1962 con los acuerdos de Evian y con el reconocimiento de la independencia de Argel. Dichos acuerdos fueron sometidos a un referéndum popular y aprobados por una mayoría casi absoluta. En agosto de 1962 el general De Gaulle salió indemne de un atentado

de la OAS. A raíz de la conmoción que suscitó este acontecimiento, anunció un nuevo referéndum en el que apelaba a los ciudadanos para que se pronunciaran sobre la propuesta de la elección del presidente de la República por sufragio popular directo y obteniendo también esta vez una aplastante mayoría. Pero la luna de miel entre De Gaulle y la opinión pública no duraría mucho: las elecciones de 1965 y de 1967 marcaron una progresiva erosión de los consensos en las formaciones políticas que él había apoyado. Seguirá después la protesta obrera y estudiantil de 1968, que en ningún otro país europeo tuvo, como veremos, la magnitud y el impacto político que tuvo en Francia. Tampoco el curso que siguió la Quinta República fue precisamente tranquilo.

Sin embargo, si analizamos el período 1950-1970 por entero, la trayectoria de Francia, si bien fue inferior a la de Alemania e Italia, resulta brillante, especialmente si se tiene en cuenta el gravamen del coste militar por las guerras coloniales y la constitución de la *force de frappe*. Su tasa de crecimiento medio anual fue, en efecto, del 4,92% (4,3 Berstein 211, Droz 335 5,9 por 60-70), superior con mucho al registrado en las décadas de entre guerras. También propulsó este proceso de crecimiento de Francia el desarrollo de la industria y del terciario, lo que supuso profundas modificaciones en el tejido social del país: en 1970 el porcentaje de los empleados sobre la población activa era del 48,3 %, claramente superior a la obrera, con el 35,3 %, y entre 1955 y 1980 cuatro millones de franceses abandonaron la agricultura.

Como en el caso de Italia, no debemos quedarnos en la superficie sino intentar analizar por separado los factores que, en un contexto de inestabilidad política, aseguraron la continuidad del desarrollo y del proceso de modernización. A ello contribuyeron sin duda el acusado sentimiento de identidad nacional que unía, más allá de las divisiones y contraposiciones, a todos los partidos políticos franceses y la eficacia y competencia de un órgano estatal y administrativo avalado por los siglos y al resguardo de las contingencias y de las convulsiones de la vida política. Si los gobiernos (y también las repúblicas) pasaban, los altos cargos salidos de las grandes escuelas permanecían y mantenían firme la barra del timón. Seguían la ruta que en su momento se trazó, como hemos visto, con la adhesión a la CECA y basada en el hecho de conjugar la elección de la planificación en ámbito nacional llevada a cabo desde la liberación con la de la integración europea y de la colaboración con la RFA. En el marco de esta elección tiene lugar el tratado de amistad entre los dos países que firmaron De Gaulle y Adenauer en 1963. Jean Monnet, comisario del plan que lleva su nombre, fue realmente representativo de esta tecnocracia, europeísta convencido y primer presidente de la CECA y uno de los que la idearon. Esta misma asociación entre un fuerte sentido de la identidad nacional y apertura europeísta en pro

de la modernización la encontramos también en hombres como Pierre Mendès France y en el propio Charles De Gaulle. Es cierto que entre la Cuarta y la Quinta República se produce una fractura política; pero a pesar de ello hay una continuidad sustancial en cuanto a las estructuras estatales, la orientación política en general y en la mentalidad. Es quizá en esta continuidad en donde hay que buscar la clave de lectura de la trayectoria francesa que nos hemos esforzado en reconstruir sumariamente.

Entre los países de Europa occidental el que menos rápidamente avanzó en las vías del desarrollo fue sin duda Inglaterra. De hecho, la tasa media anual de crecimiento de la economía inglesa fue del 2,2 %, menos de la mitad de la alemana e italiana, y la participación inglesa en el comercio internacional se redujo durante los años cincuenta del 25 % al 17 %. No cabe duda de que los costes que acarreó dotar al país de una disuasión atómica (la primera bomba A inglesa es de 1952 y la bomba de hidrógeno, de 1957) y el mantenimiento de las bases militares que Inglaterra tenía en Asia suroriental, en el Pacífico y en Oriente Medio (cuarenta mil hombres sólo en Egipto en el año 1952) constituían una pesada carga, calculada en un 28 % del presupuesto total del estado en 1953, y en un 8,2 % del Producto Nacional Bruto, en 1955. Sólo después del fracaso de la empresa de Suez se procedió al desmantelamiento de muchas bases militares y la reducción de los reclutas con la abolición del servicio militar obligatorio.

De todas formas el presupuesto militar no es ni el único ni el principal motivo de la dificultad que la economía inglesa tenía en seguir el ritmo de las economías de la Europa continental. Ante todo hay que subrayar que Inglaterra, a diferencia de Alemania e Italia, no disponía de una reserva de mano de obra económica que consintiera un bajo nivel de los salarios. Estos últimos en el transcurso de los años 50 incluso registraron un incremento superior al del coste de la vida, lo que hizo posible un incremento sustancial del consumo. En un discurso de julio de 1957, el primer ministro conservador MacMillan podía afirmar que «nunca nuestra gente se lo ha pasado tan bien». Los sindicatos eran los guardianes naturales de esta prosperidad. Si el índice de conflictividad industrial inglés (una media anual de cuatrocientos treinta y dos trabajadores en huelga sobre diez mil ocupados entre 1946 y 1976) era con mucho inferior al de los países latinos, también era netamente superior al alemán, y el sistema de las relaciones industriales se caracterizaba por su rigidez y por la persistencia de una organización sindical que si bien era unitaria, estaba estructurada en el propio seno según criterios corporativos. El problema con el que cada gobierno, prescindiendo de su color político, debía enfrentarse era, pues, el de encontrar un punto de equilibrio entre una política de rigor monetario y una política de ampliación presu-

puestaria y por consiguiente tenía que ejercer un control eficaz sobre el constante riesgo de inflación. Un ejercicio tan difícil como, por decirlo una vez más como el primer ministro MacMillan, «ir en bicicleta por una cuerda floja». Por ello se comprende, dadas estas premisas, cómo la política económica inglesa se configuró como una sucesión de *stop and go.*

Un primer frenazo se dio en 1961-1962, pero frente a la impopularidad de las medidas adoptadas, el gobierno conservador del *premier* MacMillan no dudó en hacer marcha atrás. Dadas las circunstancias fue tomando cuerpo la idea de que una forma de salir de los problemas internos podía ser la de la adhesión al Tratado de Roma, del que hasta el momento Inglaterra se había mantenido al margen. Incluso había propuesto en 1959 la creación de una zona de libre intercambio (EFTA) a la que se adhirieron los países escandinavos, Austria, Portugal y Suiza. Pero los resultados de la operación se ajustaron sólo en parte a lo esperado, por lo que el 9 de agosto de 1961 MacMillan cursó la solicitud formal para iniciar las negociaciones de la adhesión inglesa a la CEE, con la condición, por otro lado, de que el Reino Unido y los países de la EFTA pudieran continuar beneficiándose de la importación de productos agrícolas de los países de la Commonwealth a un precio inferior al que tendrían que pagar si hubiesen formado parte plenamente de la Comunidad y por tanto hubiesen estado sometidos al arancel que la rodeaba. Pero, como veremos, la iniciativa se encontró con la firme oposición del general De Gaulle que en enero de 1963 defendió su negativa basándose en la «insularidad» de Inglaterra y sus relaciones especiales con Estados Unidos. Por otra parte hay que añadir que la misma opinión pública inglesa mostraba verdadera desconfianza ante la posibilidad de adhesión al Tratado de Roma y que por lo tanto el gobierno carecía del apoyo y del consenso con que contaban los gobiernos de Europa continental. La imagen de «insularidad» y de «espléndido aislamiento» todavía funcionaba.

El gobierno laborista que se había formado después de las elecciones de 1964 se vio obligado a enfrentarse con los mismos problemas con los que había topado el gobierno conservador y las soluciones que adoptó no fueron en esencia tan distintas a las de su predecesor. También la política del gabinete Wilson fue en efecto un continuo *stop and go*, entre medidas destinadas a promover el consumo y a aumentar el poder adquisitivo de las clases populares y medidas restrictivas, entre inflación y devaluación. Para un gobierno laborista, más vinculado que el gobierno conservador a las *Trade Unions* era mucho más difícil no sucumbir a las presiones que éstas ejercían y, en menor grado, a un sistema de relaciones industriales poco flexibles. La tentativa llevada a cabo *in extremis* en 1967 de modificar el sistema de las relaciones industriales mediante una mejora de la concertación salarial y de la contratación colectiva y de una reglamentación del derecho a huelga se encontró con la enérgica oposición de los sindicatos. Tal y como había hecho

MacMillan, Wilson intentó encontrar el modo de salvar los obstáculos con los que se debatía la economía inglesa volviendo a proponer en 1967 la entrada en la CEE. Pero también en esta ocasión la Francia gaullista se opuso. En conjunto la experiencia del gobierno laborista de los años 60 no pudo corresponder a las esperanzas que la vuelta del *Labour* a las riendas del gobierno había cobijado y preparó el camino al éxito de los conservadores en las elecciones de 1970 con su regreso al gobierno.

27.3. LOS DEMÁS PAÍSES DE EUROPA OCCIDENTAL

El proceso de desarrollo y de transformación no abarcó tan sólo los países de la Europa continental de los que hemos hablado hasta ahora, sino que se extendió, de manera distinta, por todos los países europeos, incluidos los que no eran miembros de la Comunidad. Si analizamos los principales indicadores económicos del resto de países europeos, constataremos que no se alejan de la media de los principales países de Europa continental. Esto vale para Bélgica, los Países Bajos, Suiza y los países Escandinavos. Estos últimos fueron los únicos en los que el *liderazgo* político se mantuvo firmemente en manos de los partidos de la izquierda socialdemócrata, con lo que el desarrollo económico y la llegada de la sociedad de consumo encontró el consenso para una concertación entre gobierno, sindicatos y asociaciones empresariales, con la consiguiente extensión y consolidación del *wellfare state* y la plena ocupación. Ejemplar a este respecto es el proceso que experimentó Suiza en el transcurso de los años cincuenta.

Vale la pena destacar, a modo de conclusión de esta reseña, que el tumultuoso desarrollo del que Europa fuera escenario durante los años 50 y sesenta se sitúa en un marco político de democracias experimentadas (como es el caso de Francia, Inglaterra y los Países Escandinavos) o de democracias «recuperadas» y reconquistadas, como la alemana y la italiana. A excepción de la España franquista, cuyo arranque, si bien con retraso, no fue menos tangible que el de los demás países europeos. Fue en efecto en los años 60 que, gracias a la ayuda financiera de Estados Unidos, tomó fuerza un vigoroso proceso de industrialización, dirigido por los tecnócratas del *Opus Dei*. Ello permitió al país salir del subdesarrollo que había caracterizado hasta entonces su estructura social. En los años 60 y 70 alrededor de dos millones de campesinos abandonaron el campo y la población agrícola descendió del 50 al 29%. En realidad el caso de España no es una excepción, sino una corroboración del nexo dialéctico entre desarrollo y democracia. El despegue de la economía española coincide en efecto con el inicio de su proceso de transición hacia la democracia. Así, las primeras manifestaciones estudiantiles se remontan a finales de los años cincuenta y las primeras huelgas ile-

gales a principios de esta década. En los años posteriores tanto las unas como las otras fueron intensificándose, en Cataluña, en Asturias y en otras zonas del país hasta que en 1962 el gobierno franquista se vio obligado a reconocer la legitimidad de las huelgas económicas. Los partidos de la izquierda que actuaban en la clandestinidad dieron todo su apoyo a los movimientos de la época y lo mismo hicieron las organizaciones sindicales, la socialista UGT y las incipientes Comisiones Obreras fruto de la iniciativa de comunistas militantes. Una ulterior confirmación de la conexión entre desarrollo económico y democratización de la vida pública se da en el país vecino, Portugal, en donde a la inamovilidad política del régimen de Salazar corresponde un sustancial estancamiento económico. O incluso en Grecia, en donde a un *boom* de las actividades especulativas, en particular en el sector de la construcción turística, se correspondió un anquilosamiento de las actividades productivas en la industria y en la agricultura. La instauración de la dictadura de los coroneles en abril de 1967 fue la salida a esta crisis.

28

Europa oriental en los años sesenta

28.1. EL FRACASO DEL EXPERIMENTO KRUSCHEVIANO Y LA RUPTURA CON CHINA

Después de los éxitos del *Sputnik* y de Suez, el grupo dirigente soviético ostentaba seguridad, por no decir euforia. Al menos era ésta la sensación que se tenía a juzgar por las repetidas y coloridas apariciones públicas de su nuevo líder. La impulsividad era el mérito principal de Nikita Kruschev y, a la vez, lo que desmerecía sus actuaciones: sin esa impulsividad no habría tenido fuerzas para denunciar los crímenes de Stalin, pero sin ella tampoco habría instalado los misiles en Cuba. Prescindiendo de estos rasgos de su temperamento, las razones de esta seguridad y de esta euforia pueden llegar a comprenderse si nos ponemos bajo el punto de vista de un comunista convencido como sin duda lo era Kruschev; que a la larga el socialismo se revelaría como un sistema superior al capitalista y los países del Tercer Mundo tendrían como referente natural a la URSS, y en definitiva que el viento de la historia soplaría en las velas del socialismo internacional, eran, para él y para muchos de sus compatriotas, certezas indudables. Tal y como se desarrollaron, los acontecimientos en Asia suroriental, en Oriente Medio y en Cuba parecían, por otra parte, confirmar esta convicción.

Una política global, como la que Kruschev perseguía tenía un alto precio: entre 1960 y 1968 acrecentó, como hemos visto, su presupuesto militar en una proporción análoga al estadounidense.

En realidad esta sensación de seguridad era tan injustificada y sin motivo como lo era el alarmismo norteamericano de los años del *missile gap*. La solidez del campo socialista distaba mucho de aquella de la que se hacía alarde en las declaraciones oficiales, y el arsenal soviético de misiles de cabeza nuclear era con mucho inferior al de Estados Unidos, y

Kruschev, a pesar de sus ostentaciones de fuerza, era totalmente consciente de ello.

Ya hemos tenido ocasión de destacar que el principal problema del nuevo trazado político enunciado en el XX Congreso consistía precisamente en la dificultad de conciliar una política exterior global y costosa con la exigencia improrrogable de activar las reformas que permitieran una mejora de las condiciones de vida de la población soviética. Entre política interior y política exterior se establecía así una especie de círculo vicioso en donde los desatinos de una reverberaban negativamente sobre la otra.

Los acontecimientos de Polonia en el verano de 1956 y sobre todo los de Hungría en octubre del mismo año, en los que ya nos hemos detenido ampliamente, no sólo suscitaron reacciones negativas, como es obvio, en Hungría, en los demás países satélites y en los principales partidos comunistas de Europa occidental y en particular del italiano, sino que debilitaron en la propia Unión Soviética las posiciones de aquellos que habían visto en el XX Congreso el principio de una nueva etapa de reformas y de liberalización y por el contrario reforzaron las de aquellos que presagiaban una vuelta a los métodos probados en el pasado. Estos últimos, mientras Kruschev se encontraba de visita en Finlandia, convocaron, sin que le fuera comunicado, el *Presidium* del PCS donde decidieron por mayoría su destitución. La maniobra se vio frustrada gracias a la intervención de algunos de los miembros del nuevo Comité Central elegido en el XX Congreso los cuales, al verla acercarse, con la ayuda de los máximos dirigentes del ejército hicieron entrar en Moscú a sus colegas e impusieron, en conformidad con el estatuto, la convocatoria del órgano del que eran miembros, haciendo posible de este modo dar la vuelta a la situación. Efectivamente, se pronunciaron a favor de Kruschev 215 de los 309 miembros del Comité Central. Los principales responsables de la tentativa de eliminar a Kruschev, Molotov, Malenkov, Kaganovich y el nuevo ministro de exteriores Scepilov, definidos para la ocasión como «grupo antipartido», fueron destituidos a su vez de los cargos que ocupaban. Si bien resultaba fácil desembarazarse de algunos hombres, era mucho más difícil desembarazarse de las convicciones arraigadas de las que también algunos de los miembros del *Presidium* que apoyaban a Kruschev, como el ideólogo Mijail Suslov, estaban imbuidos y todavía más de las estructuras de un sistema reputado. Kruschev, que había crecido en ese sistema, lo sabía y ello explica el curso fluctuante y contradictorio que, tras el *exploit* del XX Congreso, caracterizó su dirección política.

Para colmar las aspiraciones a una mejora del nivel de vida de las grandes masas y las de la *intelligentsia* a una mayor libertad no podían ciertamente bastar los éxitos en la conquista del espacio iniciados en octubre de 1957 con el lanzamiento del Sputnik y que prosiguieron con el del primer hombre en el espacio en abril de 1961 y el sentimiento legítimo de orgullo

nacional que éstos generaron. Hacían falta reformas profundas y las que Kruschev había intentado no sólo no habían dado resultados satisfactorios, sino que habían acabado en fracasos estrepitosos. Tal es el caso de la reestructuración del aparato de dirección de la industria de base territorial centralizada, iniciada en 1957 con la creación de los *sovnarchozy*, de la devolución a los *koljoces* del parque automovilístico en dotación a las MTS en 1958 y de la misma reforma escolar cuyo proyecto inicial sufrió una reestructuración. Pero el fracaso que conllevó peores consecuencias fue el de la política agraria. Las tierras vírgenes, cuya conversión en tierras de cultivo impulsó Kruschev y a lo cual iba unido su prestigio personal, después de los alentadores resultados iniciales, dieron cosechas cada vez más decepcionantes y lo mismo sucedió con la campaña a favor del cultivo de maíz. En 1963 la Unión Soviética registró una de las peores cosechas de su historia y desde entonces el país que una vez fue gran exportador de grano se convirtió en importador. Por otro lado, como méritos de la política kruscheviana podemos apuntar el impulso que se dio a partir de 1958 a la extracción de gas natural y a la construcción de gasoductos y el notable desarrollo de la construcción de viviendas con la edificación de cientos de miles de alojamientos prefabricados y un consiguiente aumento de la superficie media por habitante de alrededor del 20 % entre 1955 y 1960. Esto permitió resolver parcialmente el viejo problema de las viviendas comunitarias. También la relación con la intelectualidad fue deteriorándose progresivamente. La reactivación del antiestalinismo del XXII Congreso de octubre de 1961 no produjo efectos concretos, exceptuando el de trasladar la sepultura del dictador fuera de los muros del Kremlin, y la tentativa de recuperar la figura de Bujarin no obtuvo ningún resultado. Las expectativas de los círculos intelectuales como consecuencia de la relajación de las medidas de censura que hicieron posible la publicación del cuento de Solzhnitsyn, se vieron también frustradas y hechas trizas por los ataques de Kruschev contra los artistas abstractos y por el clima cada vez más enrarecido de la vida cultural. Tampoco faltaban señales de alarma entre la población obrera: en 1962 tuvieron lugar movimientos de protesta en Novocerkask tras una reducción salarial.

A los desatinos internos se unieron los del exterior. La derrota más grave fue la ruptura con China. Las relaciones entre estos dos países se habían ido deteriorando tras la iniciativa china de bombardear las islas Quemoy y Matsu, iniciativa que los soviéticos dispuestos a dialogar con Estados Unidos no se tomaron a bien. Pero esto era sólo el comienzo. En junio de 1959 Moscú comunicaba oficialmente a Pekín la suspensión de la entrega de un prototipo de bomba atómica a la que se había comprometido en octubre de 1957. No es de extrañar que, dados estos precedentes, Kruschev, saliendo de Estados Unidos, fuera fríamente acogido cuando visitó Pekín en sep-

tiembre de 1959. Lo que hasta entonces había sido una controversia entre partidos comunistas, de la que al exterior sólo llegaban rumores, se hizo pública bajo la forma de un auténtico manifiesto ideológico en abril de 1960, con ocasión del aniversario del nacimiento de Lenin, cuando se publicó en Pekín un texto en donde el «leninismo» se contraponía al «moderno revisionismo». Para atenuar el tono de la polémica se recorrió durante algún tiempo a orientar los golpes contra blancos ficticios: así, mientras los chinos atacaban la Yugoslavia de Tito como un país que había vuelto a instaurar el capitalismo, los soviéticos replicaban polemizando con los albaneses alineados a las posiciones de Pekín. Pero esta táctica no podía durar mucho.

En julio de 1960 la URSS retiró a sus técnicos de China. La ruptura ya se había consumado y los chinos no se abstuvieron de expresar su desaprobación, por no decir su condena a los actos significativos de la política exterior de la URSS: por su conducta aventurada y remisiva en las crisis de Berlín y de Cuba, por la posición a los ojos de Pekín demasiado conciliadora que asumió en relación con los incidentes chino-indios de octubre-noviembre de 1962 (véase cap. 30) y por último por la firma del tratado para la proscripción de las pruebas nucleares en la atmósfera en agosto de 1963. Al mismo tiempo no cesaban de alimentar la polémica incluso en el ámbito de la ideología: si en la conferencia que reunió en Moscú en otoño de 1960 a los representantes de sesenta y cuatro partidos comunistas el delegado chino Liu Shaoqi añadió su firma en el tratado conclusivo, en diciembre de 1962 se hacía público un ataque al Partido Comunista Italiano y a su líder Palmiro Togliatti y en junio de 1963, como respuesta a una carta abierta del Comité Central del PCUS, se daba a conocer un documento que constaba de 25 puntos y que contenía la suma de las posiciones políticas y teóricas de los comunistas chinos. En él podía leerse entre otras cosas que «no se puede afirmar que con la aparición de las armas nucleares la posibilidad o la necesidad de emprender revoluciones sociales o nacionales disminuya o que los principios fundamentales del marxismo-leninismo, y en particular sus teorías sobre la revolución proletaria, sobre la guerra y sobre la paz, se hayan superado y se hayan transformado en dogmas caducos». Eran en esencia las mismas posiciones del escrito de Stalin de 1952 y no por casualidad el retrato del dictador soviético continuó apareciendo en las manifestaciones oficiales. La polémica entre los partidos acabó por afectar a las relaciones entre los estados hasta producir, en marzo de 1969 incidentes en la frontera a lo largo del río Ussuri y en el Sing Kiang. La unidad del campo socialista era ya un recuerdo del pasado. La crisis de Berlín y a continuación la de Cuba no contribuyeron, por supuesto, a ensalzar la autoridad del líder soviético, sino, al contrario, la repercusión en el plano interno contribuyó a disminuir todavía más su prestigio. Kruschev, que en 1958 asumió también el cargo de presidente del consejo de ministros, aparecía como el principal,

es más, como el único responsable del deterioro de la situación y en consecuencia como el chivo expiatorio. Los contactos que se establecieron entre los miembros del Comité Central desde abril de 1964 llegaron a su conclusión en la sesión del 13 de octubre de 1964, en la cual se decidió exonerarlo. A diferencia de lo sucedido en 1957, Kruschev, que se encontraba en Crimea, no reaccionó y pasó los últimos años de su vida escribiendo sus memorias que se publicarían en el extranjero en 1970. En ellas reflejará su amargura, pero también su autocrítica.

Los once años que transcurrieron desde la muerte de Stalin a la destitución de Kruschev fueron, de todas formas, si los comparamos con la década de terror y de guerra que los había precedido, años de normalidad y, en cuanto tales, de relativo progreso. A pesar de la carga que suponía la inversión en armamento cada vez más alta y de que los sucesivos planes quinquenales y septenales, con pocas variantes, continuaran dando prioridad a la industria pesada, la economía del país había experimentado en conjunto un desarrollo que, aunque cualitativamente, dado el bajo índice de productividad y el retraso tecnológico, no sea comparable al de los países de Europa occidental y Japón, desde el punto de vista cuantitativo fue de todas formas relevante. Los mayores logros, como en el pasado, se consiguieron en el campo de la industria pesada y en el sector energético, haciendo posible de este modo que el abastecimiento eléctrico llegara a muchas poblaciones que hasta entonces no disponían de energía eléctrica. También se experimentaron progresos en el campo de la industria productora de bienes de consumo, si bien la calidad de los productos estaba muy por debajo del estándar internacional. También se registraron mejoras en lo que concierne al nivel de los salarios y en el nivel de vida de los ciudadanos. Entre 1961 y 1965 el índice total del consumo obtuvo un crecimiento medio anual del 2,6 % y el de los bienes de consumo duraderos del 8,3 %. El sistema de pensiones se extendió a todos los trabajadores y la edad de jubilación era a los sesenta años para los hombres y a los cincuenta y cinco para las mujeres. También a los campesinos –los parias de la sociedad soviética– se les concedió finalmente una pensión y el pasaporte interior y con éste la posibilidad de trasladarse de manera legal a la ciudad, legalizando así el éxodo del campo que se venía produciendo desde hacía tiempo: entre 1959 y 1965 la población agrícola activa había disminuido cuatro millones.

Lo que se le criticó a Kruschev era precisamente el haber turbado con su personalismo o «subjetivismo» el desarrollo regular y fisiológico de la sociedad socialista. Por ello lo que el nuevo *equipo* en el poder –con Brezhnev como secretario del partido y Kosygin en la presidencia del consejo– prometía era ante todo estabilidad, por otra parte entendida básicamente como una continuidad del pasado.

En estos términos se puede decir que la promesa de estabilidad se mantuvo tanto en el terreno de la política exterior como en el de la interior.

Por lo que a la primera se refiere, su eje principal lo constituía una interpretación estrictamente diplomático-militar y bipolar del concepto de coexistencia. El interlocutor privilegiado continuaba siendo Estados Unidos, pero las relaciones entre las dos superpotencias tenían como premisa por un lado obtener y mantener una «paridad estratégica» en el campo del armamento y por otro preservar la propia identidad ideológica de posibles influencias exteriores. Se trataba de una concepción de la coexistencia muy distinta, si no opuesta, de aquella que en 1968 formuló Andrei Sajarov en su escrito *Progreso, coexistencia y libertad intelectual.* Para el que había sido uno de los padres de la bomba de hidrógeno soviética la coexistencia era de hecho cooperación política e intelectual entre los dos sistemas hasta conseguir un estado de ósmosis. Por supuesto había incompatibilidad entre estas dos concepciones y el escrito de Sajarov nunca llegó a publicarse. Si la coexistencia pacífica era la norma de las relaciones con los países del campo capitalista, en el interior del socialista estaba en vigencia otra norma, la del «internacionalismo proletario». En la práctica esto se traducía en la doctrina de la «soberanía limitada» que ha pasado a la historia como la «doctrina Brezhnev». Sobre esta base se justificó la intervención de las tropas del pacto de Varsovia en Checoslovaquia en agosto de 1968, que reservamos para más adelante.

La destitución de Kruschev no conllevó cambios destacables, incluido en lo referente a la situación interna. De hecho continuó la tendencia a una lenta mejora de las condiciones de vida. Entre 1965 y 1975 las familias que poseían televisores pasaron a ser de un 32 a un 86 sobre 100 en las ciudades y del 15 al 67 sobre 100 en el campo y las que poseían frigoríficos del 17 al 87 y del 3 al 45 sobre 100 respectivamente. Se destaca que los principales beneficiarios de estas mejoras fueron los sectores obreros que trabajaban en lo que se dio en llamar «ciudades cerradas», mayoritariamente los encargados de la industria del armamento o de las de producción relacionadas con ésta. El poder tenía su principal punto de apoyo y de consenso en esta «aristocracia obrera». De todas formas la mejora fue general y particularmente visible en las repúblicas asiáticas, también gracias a los beneficios que propiciaron los canales de la «economía sumergida».

Sin embargo, a pesar de todo esto los años de Brezhnev han quedado en la memoria de muchos ciudadanos soviéticos como los años del estancamiento, de la *zastoja.* Y de hecho así fueron desde el momento en que se marcó el abandono definitivo de aquellos proyectos de reforma del aparato productivo del país sobre el que se discutía desde hacía años. La reforma anunciada por Kosygin en septiembre de 1955, que pretendía llevar a cabo un traslado gradual de la gestión de la economía nacional de los órganos cen-

trales de planificación a cada una de las empresas, quedó en la práctica en papel mojado y sólo encontró aplicación en algunas empresas aisladas. Por lo demás el mecanismo de la planificación centralizada permaneció prácticamente inalterado y con él su complejidad y su cada vez mayor ineficacia. En sus intersticios se insertaba, ocupando un espacio cada vez mayor, la llamada economía paralela o economía en la sombra, con la inevitable corrupción tras de sí. Las autoridades constituidas no tenían otra alternativa que la de fingir no darse cuenta o bien la de la complicidad.

Si en las relaciones económicas la norma era la de una mezcla de rigidez y de laxitud, en la vida política y cultural era la rigidez la que prevalecía, y por consiguiente la relación entre el poder y la intelectualidad se fue deteriorando cada vez más: en 1965-1966 Andrei Siniavski y Yuri Daniel fueron arrestados y condenados, imputándoles el haber publicado en el extranjero escritos que ultrajaban el prestigio de la Unión Soviética, y en 1967 fue expulsado del partido el historiador Alexandr Nekrich, autor de un libro en el que salían a la luz las responsabilidades de Stalin por la desprevención en que la agresión hitleriana sorprendió a la Unión Soviética. Estas medidas represivas no sirvieron, sin embargo, para impedir que el fenómeno de las discrepancias adquiriera cada vez más consistencia mediante la difusión y la circulación de una rica literatura clandestina (*samizdat*). El primer análisis del fenómeno del estalinismo, el de Roy Medvedev, se publicó en Estados Unidos en 1972.

Así, la movilidad social y los fermentos renovadores a los que llevaba la mejora del nivel de vida contrastaban con la rigidez de las instituciones y el inmovilismo de las gerontocracias en el poder. Cuando empiecen a faltar las causas internas y externas que habían contribuido a crear una coyuntura favorable, pero pasajera, la situación se hará insostenible. Pero antes de que esto sucediera, tuvieron que pasar muchos años, lo que hará improbable, por no decir imposible, cualquier tentativa de reforma.

28.2. LOS PAÍSES SATÉLITES DE 1956 A LA PRIMAVERA DE PRAGA

También en el período comprendido entre la insurrección húngara de 1956 y finales de los años sesenta, la historia de los países satélites está estrechamente unida a la de la Unión Soviética. Esto no significa, por otra parte, que se trate de dos historias paralelas.

Los acontecimientos del verano y de octubre de 1956 marcaron de hecho el comienzo de una nueva fase en la historia de todos los países satélites, en el transcurso de la cual consiguieron, unos con mayor éxito que otros, procurarse un cierto margen de autonomía con respecto al protecto-

rado soviético. No sólo se puso fin al sistema de las «sociedades mixtas», una forma de explotación enmascarada, sino que además se experimentaron, o al menos se intentó hacerlo, los modelos de planificación flexible y descentralizada y la posibilidad de que se confiriera responsabilidad a cada empresa, lo que, como se ha visto, la Unión Soviética no había conseguido poner en práctica. Si es cierto que, especialmente a lo largo de los años sesenta, los indicadores del desarrollo económico atestiguan una disminución del ritmo comparado con el de los años anteriores a 1956, también es cierto que se trató de un desarrollo más equilibrado. Disminuye en efecto la distancia entre los índices relativos a la producción y los relativos a los salarios y al consumo. El país que más rápidamente avanzó en esta nueva trayectoria fue la Hungría de Kadar, que entre 1956 y 1960 registró un aumento del consumo valorado entre el 20 % y el 35 %. A esta mejora económica se correspondió un proceso de relativa liberalización política en el ámbito del sistema existente. En la elección de los cuadros dirigentes el criterio de la competencia prevaleció sobre el de su fiabilidad política y se abolió el sistema de tasas por clases sociales para el acceso a las universidades. La indignación que causó la ejecución de Nagy, la cual Kadar no pudo evitar a causa de las presiones soviéticas, se mitigó en parte con la rehabilitación de Rajk y con la expulsión de Rakosi del partido. En general las relaciones entre el poder y la intelectualidad se hicieron más distendidas.

De entre los países del bloque soviético la Polonia de Gomulka era la más abierta hacia Occidente. Desde finales de la década de los cincuenta mantenía buena parte de su comercio exterior con los países de economía de mercado y su ministro de Exteriores, Adam Rapacki, elaboró en 1957 un plan que preveía la desmilitarización de toda Europa central. Tal iniciativa no se llevó a cabo. Sin embargo, representaba testimonialmente una relativa autonomía en el delicado sector de la política exterior que no hallaba parangón en los demás países satélites.

Por lo que concierne a la política interna, la mayor beneficiaria del nuevo curso fue la agricultura que, liberada de los últimos vínculos colectivistas, se basaba ahora totalmente en la propiedad individual y familiar de la tierra. Por el contrario, en la industria las propuestas de reforma del Consejo Económico instituido tras los acontecimientos de 1956 y presidido por el economista Oskar Lange se resistían a traducirse en realidades. La general mejora del nivel de vida no iba acompañada, no obstante, de una mejora similar de las relaciones con la opinión pública y en particular con la *intelligentsia*. Si Polonia era, de entre los países satélites, aquel cuya vida intelectual era la más vivaz, quizá precisamente por ello los contrastes y las incompatibilidades seguían siendo más acentuados. La perspectiva de un socialismo en libertad que había animado a los manifestantes de octubre se iba empañando cada vez más.

Checoslovaquia era, de entre los países del bloque soviético, aquel que disponía de una base industrial de partida más sólida, pero precisamente por ello era el que más se resentía de su inserción en este bloque. Si en un primer momento había podido exportar los productos de su industria a los demás países de Europa oriental, ahora que los estados importadores se habían construido una estructura industrial propia y que las relaciones políticas y comerciales con China se habían interrumpido, su economía atravesaba un momento difícil. Las propuestas de reforma del aparato productivo contenidas en las *Tesis sobre algunas directrices del cambio en el modelo económico* de abril de 1957 tuvieron una aplicación sólo parcial. También en la RDA se procedió a revisar la planificación centralizada con la introducción en 1963 de un «Nuevo Sistema Económico» (NES). No obstante, continuaba siendo el país cuyo sistema político y aparatos burocráticos mantenían inalterada su rigidez y ello no dejó de tener reflejos negativos en la gestión misma de la economía. Un caso contrario es el de Yugoslavia, donde la liberalización económica emprendida con la reforma de 1965, cuya manifestación más evidente fue la apertura de las fronteras con vistas a la llegada de un turismo masivo y a la emigración de trabajadores al extranjero, estuvo acompañada de una minimización del papel de la policía secreta y del alejamiento de su omnipotente jefe, el serbio Alexandr Rankovic, y también de una nueva dirección reformadora que llegó a afectar a la estructura misma del partido. En Bulgaria la sustitución de Valko Cervenkov por el más aperturista Todor Zivkov, hombre de confianza de Kruschev, en el cargo de secretario general del partido no aportó cambios sustanciales. Bulgaria continuaba siendo el más ligado a la URSS de los países del bloque soviético. Un caso aparte fue, como veremos, el de Rumania.

Se esperaría que aquellos criterios de planificación que estaban vigentes en el interior de cada estado lo fueran también a nivel interestatal, y que el proceso de homologación que se desarrolló en todos los países satélites hubiese dado lugar a un correspondiente proceso de integración de las economías de los diferentes estados basado en la división del trabajo, pero no fue así. Un organismo que debería haber asumido estas funciones –el COMECON– se instituyó en 1949, pero las relaciones económicas entre los diferentes países satélites continuaron siendo reguladas por una plétora de acuerdo bilaterales. Habrá que esperar hasta 1959 para que, estimulado por el ejemplo de la CEE, el COMECON adoptase un estatuto y el principio de la división internacional del trabajo fuese tomado seriamente en consideración. Las propuestas avanzadas por Moscú en este sentido a principios de los años 60 hallaron una acogida favorable por parte de los estados más industrializados y en particular de la RDA y de Checoslovaquia, además de la fiel Bulgaria, pero se encontraron con la firme oposición de Rumania. Su líder Gheorghiu Dej y su sucesor Nicolae Ceaucescu tendieron más bien a marcar la

propia autonomía también en el campo de la política exterior asumiendo una posición de equidistancia en el conflicto ideológico entre Moscú y Pekín y con una serie de aperturas hacia Occidente, y sin dudar en recurrir a un nacionalismo enraizado. Hay que decir, sin embargo, que esta nueva tendencia y estas aperturas no condujeron a modificar en un sentido más liberal el régimen interno rumano, sino aún a acentuar su autoritarismo. Dada la oposición de Rumania y la desconfianza de los demás países, el COMECON continuó muy lejos de asumir aquella función de estímulo y de multiplicador que en cambio tuvo la CEE. Sus logros más importantes fueron la construcción del gasoducto de la amistad a través del cual el gas soviético alcanzaba a los países del bloque y el centro de investigación científica de Dubno en la Unión Soviética.

Como compendio de cuanto hemos venido exponiendo hasta ahora, me parece que se puede afirmar que la aspiración a una mayor autonomía en relación con la URSS y a una mayor articulación interna representa un rasgo común de todos los países satélites y constituye el hilo rojo de su historia. Si bien es cierto que después de 1956 consiguieron recortarse mayores márgenes de autonomía, también es cierto que las estructuras fundamentales del sistema en el que estaban insertos –la dependencia de la URSS en el exterior y el sistema unipartidista en el interior– permanecieron sustancialmente inalteradas. Por ello se iba haciendo camino y maduraba la convicción de que una reforma del sistema no podía limitarse a la organización de la economía, sino que debía implicar también al orden político: el pluralismo económico postulaba en definitiva el pluralismo político y éste último a su vez postulaba la apertura hacia Occidente. De esto estaban convencidos intelectuales como el polaco Leszek Kolakowski, el checo Vaclav Havel, los alemanes Wolfgang Harich y Ernst Bloch y los estudiantes que en junio de 1968 ocuparon la Universidad de Belgrado.

El país en que estas aspiraciones hallaron una abierta expresión política fue Checoslovaquia, donde en diciembre de 1967 el Comité Central del partido eligió a Aleksander Dubchek como secretario general sustituyendo a Antonin Novotny, que conservó por otra parte el cargo de presidente de la República hasta que en marzo de 1968 le sucedió el general Svoboda, un veterano del antifascismo. Por impulso de este nuevo liderazgo y de la mayoría que había expresado, el Comité Central aprobó en abril un «programa de acción» en el que se podía leer que «el Partido Comunista ... no quiere ejercer su papel dirigente haciendo presión sobre la sociedad, sino sirviéndola con devoción con vistas a su desarrollo libre, progresivo y socialista. El partido no puede imponer su autoridad, debe ganársela continuamente a través de su acción». Eran afirmaciones inéditas y llenas de coraje, un auténtico salto cualitativo. Pero lo que más cuenta éstas se hallaron confirmadas en los hechos: el mismo día –el 27 de junio– en que fue anunciada la total aboli-

ción de la censura fue publicado el manifiesto de las dos mil palabras, en el que los intelectuales más prestigiosos del país exponían sus propuestas para una democratización plena. El nuevo curso fue acogido con entusiasmo no sólo por parte de la *intelligentsia* sino también de la mayoría de la clase obrera y de la población, mientras que suscitó preocupación y alarma en los ambientes conservadores, tanto en Praga como en Moscú. Si los primeros aguardaban con esperanza el Congreso del partido, que había sido convocado para septiembre, los segundos lo veían con aprensión y temor. Las presiones más fuertes para invertir el nuevo curso político que se había iniciado venían naturalmente de Moscú. Pareció que podría llegarse a un compromiso a raíz de un encuentro entre los nuevos dirigentes checos y los soviéticos en Cierna, en la ribera del Tisza, a finales de julio. Pocas semanas después, el 21 de agosto, unidades de las tropas del Pacto de Varsovia entraban en Praga y procedían al arresto de Dubchek y sus principales colaboradores. El intento de instaurar, como habían hecho en Hungría en 1956, un gobierno de su confianza fracasó y responsables de ello fueron la resistencia pasiva de la población y la iniciativa del Partido Comunista de celebrar clandestinamente su congreso eligiendo a un nuevo Comité Central. Los dirigentes soviéticos tuvieron que replegarse e intentar un nuevo compromiso y Dubchek y sus colaboradores, que habían sido trasladados a Moscú por la fuerza, pudieron volver a su país y retomar sus cargos. Sin embargo, no los ocuparon por mucho tiempo: las cláusulas del compromiso alcanzado, por lo que se sabe, eran las de un «*diktat* apenas atenuado» (Fejtö 1971). En abril de 1969 Dubchek debía ceder el puesto a Gustav Husak. Una de las primeras actuaciones del nuevo secretario fue el reconocimiento de la legitimidad de la intervención de las tropas del Pacto de Varsovia en agosto de 1968. Terminaba así la «primavera de Praga» y se marchitaba la esperanza de poder alcanzar un «socialismo de rostro humano». En Checoslovaquia, así como en los demás países satélites, dominaría todavía durante veinte años más el gris «socialismo real».

29

Los años de Vietnam

29.1. LOS ESTADOS UNIDOS DE LA *GREAT SOCIETY*

El desarrollo de la economía norteamericana iniciado durante la segunda guerra mundial continuó, como hemos visto, prácticamente sin interrupción en el transcurso de los años 50, si bien, como también hemos visto, a un ritmo inferior al que se registró en Japón y en los países de Europa occidental. La sociedad norteamericana se volvía, pues, «opulenta», tal como rezaba el título del libro que el economista Galbraith publicó en 1958. Pero una sociedad «opulenta» –y Galbraith era consciente de ello– no significa necesariamente que no sufra fuertes desigualdades. Y cuando, como es el caso norteamericano, las desigualdades existen, estas aparecen tanto más insoportables cuanto más visible y arrogante resulta la opulencia.

En el curso de los años 50 se habían producido cambios profundos en el tejido social del país y en el mercado laboral. Movimientos migratorios consistentes, que en su mayor parte protagonizó la población negra, se dieron del campo a las ciudades y de las regiones más pobres del país hacia aquellas en las que el ritmo de desarrollo era más intenso, como Texas, Florida y California. Al imponente traspaso de fuerza de trabajo del sector primario al secundario se correspondió un traspaso igualmente masivo de este último al terciario: en 1956 el número de empleados superó por primera vez el de los obreros. A consecuencia de ello el desempleo se redujo por debajo del 5 %. Un incremento consistente lo registró en particular la ocupación femenina, que durante los años cincuenta creció a un ritmo cuatro veces superior al masculino: ya en 1950 el 31 % de mujeres desarrollaba una actividad laboral, por lo general en sectores ocupacionales no cualificados o en trabajos a tiempo parcial. Pero la rapidez de este incremento también se explica por el hecho de que las retribuciones femeninas, equiparables a la cua-

lificación, eran por lo general más bajas que las masculinas. Por último hay que destacar el incremento de la población estudiantil: entre 1950 y 1960 el número de estudiantes universitarios se duplica.

Pero a esta movilidad social no correspondía un dinamismo parecido en la vida política e intelectual. A la pasajera oleada macarthista le había seguido «una larga etapa de ordenación y estancamiento» (Romero, 1996). La conflictividad sindical, tan aguda en los años inmediatos a la posguerra y el debate sobre la ley Taft-Harley, fue aplacándose progresivamente: la reunificación que aconteció en 1955 entre el AFL más tradicional y el más combativo CIO marcó el abandono por parte del sindicalismo norteamericano del papel militante y propulsor que había tenido en los años del *New Deal* y en los años inmediatos a la posguerra. Quizá pueda afirmarse que, tal como había sucedido en los años 20, los brotes innovadores maduraron y quedaron postergados en el ámbito de las relaciones interpersonales, en la familia, en las comunidades de barrio, en las iglesias y en las sinagogas, que durante estos años volvían a estar muy visitadas, en las universidades. Sólo más tarde, como veremos, adquirirán una dimensión pública y se manifestarán, o más bien estallarán, públicamente. Por el momento la reacción ante el extendido conformismo permanecía relegada a círculos restringidos como el de los intelectuales *beatnik* a lo Jack Kerouac. Cuando se expresaba de manera pública y unánime, era exclusivamente en un plano emotivo, en el éxito del que gozó un cantante innovador como Elvis Presley o un actor fascinante como el malogrado James Dean. La aspiración a una renovación, que se manifestará en las elecciones de 1960 y que volverá a llevar a los demócratas a la Casa Blanca, permanecía por el momento bajo el agua, y la protesta políticamente consciente continuaba estando limitada a grupos y episodios aislados, si bien significativos. Recordemos a propósito de esto la protesta contra la discriminación en la admisión de estudiantes de color de la que en 1956 fue escenario la Universidad de Alabama y la lucha por la integración racial que en 1957 tuvo como epicentro y como símbolo la ciudad de Little Rock en Arkansas. Pero hay que destacar que ninguno de los dos episodios habría sido posible sin el visto bueno que había llegado de la administración Truman y del gobierno federal. Se había abolido la discriminación racial en el ejército por decisión del presidente desde 1944 y diez años más tarde una sentencia de la Corte Suprema declaraba inconstitucional la separación racial que se practicaba en las escuelas del Sur. Pero también es cierto que, como demuestran los episodios de la Universidad de Alabama y de Little Rock, esta sentencia encontró fuertes oposiciones y que la administración y el Congreso, sometidos como estaban a presiones continuas de los *lobbies* segregacionistas, no se esforzaron demasiado en imponer su aplicación. En el transcurso de los años 60 todas estas tensiones y estas frustraciones, después de una larga incubación, salieron a la luz.

La manifestación más evidente y llamativa de este nuevo clima social fue la contestación estudiantil. Los protagonistas eran los hijos del *baby boom* de los años 50, que ahora llenaban las universidades y cuya protesta respecto a los sistemas educativos no tardó en transformarse en protesta contra el «sistema» cobrando un cariz y una dimensión política más o menos acentuada según los casos. La manifestación más clamorosa de este movimiento estudiantil fue la ocupación de la Universidad de Berkeley en septiembre de 1964.

Un itinerario análogo fue el que llevaron a cabo los movimientos feministas que fueron desarrollándose y tomando consistencia durante los años 60. La fórmula «lo personal es político» refleja perfectamente su evolución de la privacidad de la familia o de la iglesia al compromiso civil y político. Gracias a este compromiso los movimientos feministas obtuvieron una victoria importante con la aprobación en 1963 del *Equal Pay Act*, que ponía fin a la discriminación salarial entre mujeres y hombres de igual cualificación laboral.

El movimiento más robusto y eficaz, por otra parte, fue el de los negros para acabar con la segregación racial, y la inscripción en las listas electorales. Puede fecharse su inicio en febrero de 1960 cuando en Grensboro, en el sur de California cuatro estudiantes de color requirieron en un restaurante segregacionista el mismo tratamiento que se reservaba a los blancos y no abandonaron hasta que su petición se vio satisfecha. Desde entonces fueron multiplicándose los *sit in* y los *freedom rides* en los lugares en los que se practicaba la segregación –autobuses, estaciones, hoteles–. En 1962, cuando una muchedumbre de blancos racistas intentó con el apoyo del gobernador del estado de Mississipi impedir el ingreso a la universidad de un estudiante negro, James Meredith, el presidente Kennedy no dudó en enviar a las tropas federales. Desde entonces el movimiento fue adquiriendo cada vez mayor consistencia y organización. Entre los líderes más significativos el de mayor autoridad fue el reverendo Martin Luther King, que en 1963 fue arrestado por haber participado en la lucha contra la segregación en la ciudad de Birmingham. El discurso que pronunció ha pasado a la historia como la conclusión de la marcha sobre Washington del 28 de agosto de 1963 en la que participaron doscientas cincuenta mil personas y que señaló el punto más alto al que había llegado el movimiento.

Exactamente dos meses después de la marcha sobre Washington –el 23 de octubre de 1963– fue asesinado en Dallas el presidente Kennedy y su sucesor, el vicepresidente Lyndon Johnson, tuvo que hacer frente a este multiforme movimiento de protesta. Como político consumado que era, advirtió la necesidad de hacer concesiones sustanciosas. El 2 de julio de 1964 el Congreso, bajo propuesta del presidente, aprobaba así el *Civil Rights Act*, con el que se ponía fin a la tácita tolerancia hasta el momento generalizada con respecto a las violaciones de la sentencia de la Corte Suprema de

1954 en los estados del Sur, lo que equivalía a poner fin a la segregación racial de manera definitiva. Al *Civil Rights Act* siguió en 1965 el *Voting Rights Act* que extendía y garantizaba a todos, sin distinción de color, el derecho a inscribirse en las listas electorales. La aprobación de estas dos medidas señala una fecha importante en la historia de la democracia norteamericana.

La campaña electoral para las elecciones presidenciales de noviembre de 1964 fue dirigida por Lyndon Johnson y el Partido Demócrata, con el eslogan de la *Great Society*, de una sociedad en la cual no sólo se garantizara la igualdad de derechos sino de la que también se erradicara la pobreza. La consigna fue un éxito: Lyndon Johnson fue elegido con el porcentaje de votos más alto desde principios de siglo, el 61 %, y sus promesas se mantuvieron en buena parte. Se destinaron cuotas ingentes del balance federal a la asistencia social con la introducción del *Medicare*, a los subsidios de paro, a la construcción de viviendas de titularidad pública, a las escuelas y a la formación profesional, a la investigación científica, a la red de transportes públicos, al medio ambiente. La guerra contra la pobreza se llevaba a cabo desde varios frentes y con resultados tangibles. Los ciudadanos norteamericanos que vivían por debajo de la línea de pobreza se redujeron en 1973 al 11 % y en los estados del Sur se inició el despegue industrial que continuaría en las décadas venideras.

Todo esto fue posible porque la situación económica del país continuaba siendo buena y la inflación era baja. El peso global del presupuesto militar para la guerra de Vietnam y del presupuesto civil para la realización del programa de la *Great Society* no tardó mucho en salir a la superficie. La balanza de pagos de los Estados Unidos ya empezaba a ser deficitaria en 1958, a consecuencia de la disminución de las exportaciones, pero durante los años 60 el déficit no cesó de aumentar. Simultáneamente, a partir de 1966, la inflación, alimentada por el aumento del gasto público militar y civil, para cuya cobertura se recurrió mayoritariamente a la emisión de papel moneda, volvía a levantar cabeza, después de veinte años prácticamente ausente, reduciendo, o más bien anulando, las ventajas de las que se habían beneficiado amplios sectores gracias a los subsidios y a las facilidades de la *Great Society*. De este modo se daba de nuevo una situación de tensión política y social que muy pronto sería explosiva. El detonante fue la guerra de Vietnam.

29.2. LA GUERRA DE VIETNAM

Una vez más es necesario en este punto dar un paso atrás, para volver a recorrer rápidamente la situación vietnamita en el punto en que la habíamos dejado (véase cap. 23).

Las elecciones previstas por los acuerdos de Ginebra de 1954, que deberían haber llevado a la unificación del país, nunca se dictaminaron y por consiguiente Vietnam continuaba siendo un país dividido. Tras la retirada del contingente francés, el conflicto entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur experimentó una relativa interrupción. Los intentos de los once mil consejeros norteamericanos –tantos eran a finales de 1962– de dar vida en la parte meridional del país a un organismo militarmente y políticamente eficaz no obtuvieron resultados apreciables, sino que fue con el apoyo norteamericano que en noviembre de 1963, el primer ministro Diem, un católico que se había ganado la impopularidad por su política vejatoria con relación a los budistas, fue destituido y posteriormente asesinado por elementos vietnamitas. Mientras, la situación sobre el territorio se había deteriorado y los guerrilleros del Viet Cong controlaban ya amplias zonas del país. En Washington eran cada vez más insistentes las voces de los que, partiendo del presupuesto carente de base de que una victoria comunista en Vietnam provocaría un «efecto dominó» en los países de Asia suroriental, exigían una respuesta apropiada. En los encuentros entre los responsables militares que tuvieron lugar en Honolulú en el verano de 1964 se llegó incluso a elaborar hipótesis sobre la posibilidad de emplear tácticas atómicas. Pero hacía falta encontrar una motivación o un pretexto válido para justificar una intervención más comprometida, y al final se encontró cuando en agosto de 1964 dos barcos de guerra norteamericanos chocaron en aguas territoriales norvietnamitas en el golfo de Tonkín, contra tres torpederos enemigos. El presidente Johnson solicitó al Congreso la autorización, que le fue concedida para recorrer al uso de la fuerza para defender Vietnam del Sur. En febrero de 1965 se iniciaban así los primeros bombardeos sobre Vietnam del Norte. A partir de este momento la escalada, a pesar de las dudas que políticos norteamericanos de autoridad habían manifestado, y en particular las expresadas por el secretario de Defensa MacNamara, que en octubre de 1967 decidirá abandonar su cargo, no tuvo tregua. En julio de 1965 el número de militares norteamericanos en Vietnam era de setenta y cinco mil, y en 1967 había ascendido a más de quinientos mil y el de las bombas lanzadas en territorio vietnamita superó al de las que se lanzaron durante la segunda guerra mundial. Las esperanzas ilusorias de que esta gigantesca empresa llegara a buen puerto, como parecía posible en 1967, se desvanecieron cuando el 31 de enero de 1968, día de fin de año vietnamita del Thet, los Viet Cong emprendieron una fuerte ofensiva mediante la cual consiguieron adueñarse de varias ciudades del país e incluso cerrar filas ante la embajada norteamericana en Saigón. La reacción por parte norteamericana fue violenta y desde el punto de vista militar vencedora. Pero estaba claro que la guerra duraría mucho todavía y que conllevaría no sólo un conspicuo compromiso financiero, sino que sobre todo costaría muchas vidas humanas. Al final del con-

flicto se contarán cincuenta y ocho mil caídos norteamericanos. No se ha obtenido un balance fiable de las pérdidas sufridas por parte vietnamita: se han calculado en ciento ochenta y ocho mil del ejército de Vietnam del Sur y de novecientos veinte mil del de Vietnam del Norte, pero seguramente se trata de cifras inferiores a las realidades y que no comprenden a las víctimas civiles.

La guerra del Vietnam causó obviamente un fuerte impacto en la opinión pública norteamericana: a medida que ésta se alargaba y que la televisión llevaba a los hogares de todos los norteamericanos las imágenes de la guerra y de sus horrores y que las esperanzas de una solución rápida del conflicto se alejaban, el índice de popularidad de la administración iba cayendo. Si antes de la ofensiva del Thet los norteamericanos a favor de la guerra representaban el 56 % ante el 28 % en contra, tras ella los primeros descendieron al 42 % y los segundos alcanzaron el 41 %.

En un contexto así los movimientos de protesta y contestatarios recobraron vigor, hasta llegar a la exasperación y al radicalismo. Alrededor de cincuenta mil estudiantes eligieron desertar y se refugiaron en Canadá o en Suecia. Pero la protesta más unánime y más fuerte fue la de la comunidad negra, que proporcionaba un contingente que superaba el millón ochocientos mil *boys* que enviaron a combatir en Vietnam. Fueron los miembros de dicha comunidad los protagonistas de las numerosas rebeliones urbanas que tuvieron como epicentro los guetos de las grandes metrópolis y en las cuales 189 personas encontraron la muerte y 7.614 fueron heridas. La más sangrienta fue la de Los Ángeles, en julio de 1965, con 34 muertos. En este clima de radicalismo exasperado nació en 1966 el movimiento del *Black Power* y el de las Panteras Negras. Ambos se remitían a la teoría de Malcolm X, un negro que se había convertido al islamismo y había sido asesinado en 1965, defensor convencido hasta el fanatismo de la independencia del movimiento negro y por tanto adversario acérrimo del «integracionista» Martin Luther King. Las manifestaciones de protesta llegaron a su culminación en octubre de 1967, con la marcha sobre el Pentágono en la que participaron cientos de miles de personas. La reacción ante esta oleada de extremismo no tardó en manifestarse. Las elecciones de medio término de 1966 registraron una relativa consolidación del Partido Republicano, mientras en el Sur el gobernador de Alabama George Wallace, defensor denodado del segregacionismo, presentaba su candidatura como independiente en la carrera a la Casa Blanca. En el mismo electorado democrático se daban síntomas cada vez más evidentes de desorientación y de distanciamiento. Estados Unidos, pues, atravesaba una crisis, cuya gravedad queda confirmada por la evolución que siguieron los acontecimientos. A finales de marzo de 1968 el presidente Johnson anunció la restricción de los bombardeos aéreos sobre Vietnam a las zonas al sur del paralelo veinte y su decisión de no volverse a

presentar a las inminentes elecciones a la presidencia. Así, en mayo se daba inicio en París a las negociaciones entre una delegación norteamericana y una norvietnamita. Antes de que concluyeran se dilataron durante mucho tiempo y mientras en el territorio continuaban los combates. El 31 de octubre Johnson anunciaba la suspensión de los bombardeos sobre Vietnam del Norte.

La larga campaña electoral de 1968 fue una de las más trágicas de toda la historia de los Estados Unidos. El 4 de abril Martin Luther King era asesinado en Memphis, en Tennesee, y el 5 de junio Robert Kennedy, el hermano del difunto presidente, corría la misma suerte el mismo día en que salía vencedor en las elecciones primarias de California. De este modo faltaría en el Partido Demócrata un candidato con oportunidades de éxito mayores de las que pudiera tener el que sería el candidato oficial, Hubert Humphrey.

En las elecciones de noviembre este último perdió por poco, obteniendo el 42,7 % de los votos contra los 43,4 % de su antagonista republicano, Richard Nixon. El 13,5 % restante fueron para el racista George Wallace. El veredicto de las urnas reflejaba fielmente la realidad de un país dividido y desorientado.

29.3. LA EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES INTERATLÁNTICAS EN LOS AÑOS SESENTA

La guerra de Vietnam tuvo serias consecuencias no tan sólo en la situación interna norteamericana sino también en el ámbito de la Alianza Atlántica, dejando al descubierto las fisuras y las contradicciones existentes desde hacía tiempo.

Hemos constatado a lo largo de nuestra exposición que Europa había llegado a un grado de integración y de desarrollo que le permitía estar presente de manera activa en el mercado internacional. Hemos visto igualmente cómo la tasa de crecimiento de los países europeos, a excepción de Inglaterra, era sensiblemente superior a la de Estados Unidos. Si en 1950 la producción de este último representaba el 52,5 % de la producción mundial, no cesó de decrecer hasta reducirse, en 1973, al 43 %. En el mismo período de tiempo la cuota de producción de Gran Bretaña sobre el total mundial también se reducía del 10,8 % al 7,6. Por el contrario, la cuota de la RFA aumentaba del 6,4 % al 7,2 % y la de Italia del 5,2 % al 6,4 %. Y básicamente invariable –alrededor del 14 %– se mantenía por último la cuota de los otros países de la OSCE (Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Noruega, Suecia y Suiza). Ello suponía modificaciones sustanciales en el flujo de intercambios en el mercado internacional y las cifras relativas a las exportaciones de manufacturados lo testifican. Mientras entre 1950 y 1970 la cuota de Estados Unidos sufre una reducción del

29,2 % al 18,4 y la de Gran Bretaña del 18 al 7,6 %, la de Alemania pasa del 5,7 al 17,4, la de Francia del 8,7 al 9,4 % y la de Italia del 3,4 al 5,7 %. En cuanto a los demás países de la OSCE su cuota de exportaciones se mantenía estable alrededor del 32 %.

Merece destacarse al respecto que una parte considerable de las exportaciones de los países europeos encontraba mercado en Norteamérica, al tiempo que se reducía la cuota de las exportaciones norteamericanas en Europa y en particular la de las agrícolas, tras constituirse la CEE y las medidas proteccionistas que ésta adoptó. De ello se derivaba un deterioro gradual de la balanza comercial y de los pagos de Estados Unidos con respecto a los socios políticos europeos. Eso explica que en el transcurso de los años 50, por parte de un Congreso republicano en su mayoría ya se hiciera presión sobre la administración, también republicana, para que se empleara en modificar este estado de cosas, adoptando a su vez medidas de tipo proteccionista si era necesario. Las tentativas de encontrar un punto de compromiso entre los intereses de la Comunidad Europea y los de Estados Unidos durante las negociaciones que entre 1957 y 1961 tuvieron lugar en el ámbito del GATT –el llamado *Dillon round*– no obtuvieron resultados significativos, sino que quedaron en punto muerto.

También bajo este aspecto la presidencia de Kennedy señaló un decidido cambio de rumbo. El nuevo impulso dado a las negociaciones en el ámbito del GATT fue, como bien hemos señalado, una de las principales iniciativas del nuevo presidente demócrata. El objetivo que se proponía alcanzar era el de conseguir una liberalización de los intercambios entre las dos costas atlánticas que fuera recíprocamente ventajosa, una especie de reedición en el ámbito intercontinental del tratado que Cobden negoció en 1860 entre Inglaterra y Francia. Las negociaciones del *Kennedy round* en el ámbito del GATT, que duraron desde 1963 a 1967, dieron también resultados sólo parciales. Los recortes de una media del 35 % que se aplicaron a los aranceles aduaneros entre Europa y Estados Unidos, que se acordaron en esta sede, se eludieron en gran parte o se sortearon mediante el levantamiento de barreras no aduaneras, tales como las primas y las ayudas que se daban a las exportaciones. El veto de la Francia de De Gaulle al ingreso de Inglaterra en la Comunidad Europea y la resistencia que opuso la propia Comunidad a revisar el proteccionismo de su política agrícola, limitaron los resultados a los que se había llegado en las negociaciones.

Un ulterior factor de tensión en las relaciones interatlánticas era el representado por la decisión de Estados Unidos de abandonar la doctrina de la *massive retaliation* para adoptar la de la respuesta flexible. Los aliados europeos no escondían de hecho la preocupación de que de una respuesta «masiva», es decir con el uso de la bomba atómica, se hubiera convertido en una respuesta que en un primer momento preveía el uso de armas únicamente convenciona-

les y que pudiera perjudicar la seguridad de Europa exponiéndola a los riesgos de un posible enfrentamiento. Esto valía en particular para Alemania, que en caso de estallar un conflicto sería la primera en ser atacada. Dichas preocupaciones aumentaron tras la crisis de Cuba y la posterior retirada de misiles Júpiter de Turquía: ¿cómo podía imaginarse –se preguntaba el propio canciller Adenauer– que los Estados Unidos, que no habían querido correr el riesgo de una guerra a pocas millas de sus costas, estuvieran dispuestos a hacerlo por países que estaban a cinco mil millas de distancia? Este tipo de preocupaciones indujeron a la Francia gaullista a emprender su *force de frappe*. Las inquietudes de orden político se entrelazaban pues con las de orden económico.

La administración de Kennedy, en su programa de enfoque de los problemas internacionales, no podía ignorar estas preocupaciones e inquietudes y debía una respuesta tranquilizadora a sus aliados europeos. En el encuentro del presidente norteamericano con el premier británico MacMillan en las Bahamas, en diciembre de 1962, se comprometió a dotar las unidades navales inglesas integrantes de la OTAN con misiles Polaris dando un primer paso hacia la vía de la constitución de una fuerza multilateral (MLF). Con este mismo fin Kennedy se declaró dispuesto a colaborar en el terreno del armamento nuclear entre Inglaterra y Francia con la condición de que esta última aceptara la solicitud de admisión de Inglaterra en la CEE que había cursado en agosto de 1961. La respuesta francesa a los llamados acuerdos de Nassau se dio a través de una rueda de prensa que el general De Gaulle celebró el 14 de enero de 1963 y en la cual rehusó la petición de admisión inglesa. Este rechazo no se debía sólo a razones económicas, como la incompatibilidad entre los vínculos de preferencia que Inglaterra mantenía con los países de la Commonwealth y la política agrícola comunitaria, sino también por razones políticas. Admitir en la CEE a un país que desde siempre tenía una «relación especial» con Estados Unidos hubiera equivalido a su modo de ver a reconocer en este último un papel dominante tanto desde el punto de vista político como militar. A los ojos del general, Inglaterra era una especie de caballo de Troya de la hegemonía norteamericana en Europa. Al diseño norteamericano de una «Europa atlántica» el general contraponía el de una «Europa europea», y tampoco estaba dispuesto a renunciar a su libertad de movimientos y a su autonomía.

Entre Europa y Estados Unidos había, pues, un contencioso que afectaba tanto a las relaciones económicas como a las políticas. La guerra de Vietnam fue, como hemos visto, la que lo hizo aflorar. Para financiarla la administración Johnson no había dudado, como se recordará, en recurrir a emisiones crecientes de papel moneda. La consecuencia, como también hemos visto, fue que se disparó la inflación que no tardó en extenderse fuera de Estados Unidos. El dólar se había convertido en una moneda débil, pero su cotización, anclada en el oro, permanecía inalterada. Los países europeos,

dado que continuaban convirtiendo dólares inflacionarios y sobrevalorados en las respectivas monedas sobre la base de cambios fijos a los que el sistema de Bretton Woods las vinculaba, acababan por «prestar dinero a Estados Unidos obteniendo una moneda inflacionaria» (Gilpin, 1990) y –como de manera más explícita lamentaba el general De Gaulle– financiar su costosa política interior y exterior. Por ello, a medida que Estados Unidos se implicaba cada vez más en la guerra del Vietnam, éste último irá acentuando su distanciamiento de la política exterior norteamericana. En enero de 1964 Francia restablecía las relaciones diplomáticas con China y en marzo de 1966 decidía salir de la organización militar de la OTAN, permaneciendo miembro de la Alianza. Poco después, en junio, De Gaulle iba en visita oficial a Moscú y en septiembre a Phnom Penh, en Camboya, donde pronunció un discurso en el que invitaba a Estados Unidos a repatriar las tropas desplegadas en Vietnam. En julio de 1967 el general aprovechó la ocasión que le brindó su visita al Canadá para pronunciarse a favor de la libertad del Québec y en noviembre del mismo año denegó de nuevo la demanda de apertura de negociaciones para la adhesión inglesa a la CEE presentada por el nuevo premier británico, el laborista Wilson. La dimisión del general De Gaulle en abril de 1969, tras el fracaso del referéndum que convocó para la reestructuración por regiones y la descentralización del estado, y la asunción del cargo de presidente de la república de Georges Pompidou marcaron el inicio de una nueva y más cauta trayectoria de la política francesa. Sin embargo permanecían los contrastes. La Francia de De Gaulle no fue el único país europeo en el que la guerra de Vietnam suscitó turbación y levantó protestas. En el párrafo que sigue constataremos que la protesta contra la guerra de Vietnam ocupa un lugar relevante en los movimientos contestatarios de 1968. La imagen y el prestigio de Estados Unidos en la opinión pública europea habían sufrido un serio deterioro. Para la generación de 1968 la imagen de Estados Unidos no era la misma que la que tenían sus padres: no era la América del Norte de Roosevelt ni del plan Marshall, sino la de Johnson y las bombas sobre Vietnam.

Si la solidaridad entre Estados Unidos y sus aliados resistió ante estas tensiones y si la propuesta de De Gaulle en 1965 de un retorno a un sistema monetario internacional basado en el oro no fue escuchada, fue debido a razones de orden esencialmente político y militar, es decir a la disposición de los países europeos para pagar un precio por el *liderazgo* político y la protección militar que Estados Unidos les aseguraba y a la determinación de éste último de continuar ejerciendo su papel de superpotencia y de asumir los daños que la sobrevaloración del dólar acarreaba en sus exportaciones y sobre su balanza comercial. Pero las premisas que llevarán a lo largo de los años setenta a la devaluación del dólar y al fin del sistema de Bretton Woods ya estaban todas ellas presentes.

Problemas análogos a los que habían surgido en las relaciones entre Estados Unidos y sus aliados europeos se daban también en las relaciones entre Japón y Estados Unidos. Durante los años 60 la expansión de la economía japonesa mantenía un buen ritmo: en 1968 el producto interior bruto japonés superaba al de la RFA. Las exportaciones crecían a una media anual del 20 %, hasta llegar a representar en 1973 el 9,5 % de la cuota mundial. El consiguiente activo de la balanza comercial consentía una exportación creciente de capitales. En 1965 Japón participó en la constitución del Asian Development Bank con una cuota de capital equiparable a la de Estados Unidos. Japón gozaba de una economía madura, cada vez más encaminada a la producción de alta tecnología, como la robótica y las biotecnologías, y como tal ya no necesitaba, como en los años cincuenta, la muleta de los salarios bajos. En el transcurso de los años sesenta los salarios se equipararon a los de los países europeos. También las rentas de la clase media y de los campesinos mejoraron sensiblemente, como demuestra el aumento del consumo. En 1962 cuatro de cada cinco familias en la ciudad y dos de cada cuatro en el campo poseían un televisor y el nivel de vida en general se acercaba al de los países europeos.

A medida que se avanzaba en el proceso de modernización del país, se modificaba también su panorama político. A la lenta erosión de los consensos del Partido Liberal y del Partido Socialdemócrata correspondía el crecimiento del Komeito, que en las elecciones de 1969 obtuvo el 11 % de los votos, y de los comunistas, que en las de 1972 alcanzaron el 10 %. En este contexto, a medida que se acercaba el fin de 1970, año en que terminaba el plazo del tratado de 1951, crecía también la intolerancia hacia Estados Unidos. A partir de 1965 se fue desarrollando una amplia campaña política entorno a la cuestión de la restauración de la soberanía japonesa en la isla de Okinawa, en donde Estados Unidos había instalado la base más importante de las que tenía en el Pacífico. La noticia, que se dio a conocer a través de un comunicado conjunto nipo-americano de noviembre de 1969, de que se restituiría la isla al Japón en un plazo de tiempo breve (como efectivamente se cumplió en mayo de 1972), consintió al Partido Liberal conservar la mayor parte de los escaños en la cámara de diputados en la elecciones de diciembre de 1969 y de diciembre de 1972. Si la crisis política quedaba de este modo superada, el contencioso económico entre los dos países permanecía abierto. Estados Unidos no había dejado de ejercer presión sobre su principal socio asiático para que revisara las medidas de carácter proteccionista, realizara «restricciones voluntarias» en las propias exportaciones en el mercado americano y contribuyera al gasto militar estadounidense en el área del Pacífico. Por su parte los japoneses reivindicaban que se diera fin a las limitaciones en sus relaciones comerciales con China que la alianza con los Estados Unidos conllevaba. Se trataba de un contencioso que no era de fácil solución y que todavía hoy permanece abierto.

29.4. EL SESENTA Y OCHO

Si en la historia del siglo XX hay un *annus mirabilis* comparable por su amplitud e intensidad al 48 del siglo anterior, este fue sin duda el de 1968. Igual que el 48, el 68 fue un movimiento y una conmoción transnacional y si el primero se limitó a Europa, el segundo alcanzó dimensiones planetarias. Estados Unidos y Europa occidental no fueron, en efecto, las únicas partes del mundo embestidas por la contestación juvenil. También abarcó Japón, México, donde el 2 de octubre de 1968 centenares de estudiantes cayeron víctimas de la represión, e incluso los países de Europa oriental, y en particular Yugoslavia y Checoslovaquia. En efecto, hay que situar en el contexto del 68 europeo la primavera de Praga.

La principal analogía con el 1848 europeo, sin embargo, es otra mucho más profunda. Como la «primavera de los pueblos» el 68 también evoca la imagen de una época de intensidad de sentimientos, de generosidad, de entusiasmo rayando la ingenuidad. Ello señala efectivamente la irrupción en la escena política de la primera generación que no había conocido los horrores de la guerra y las frustraciones de la posguerra más que a través de las historias que explicaban los ancianos, y para la cual aquel bienestar que para sus padres había sido una dura conquista era de hecho un derecho adquirido, una generación exigente y proyectada hacia el futuro. Cualquiera que fuese la ocupación, los jóvenes del 68 compartían la misma intolerancia hacia los valores en los que la generación de sus padres se había reconocido, la misma aspiración de cambiar el «sistema».

Pero sería un error tremendo reducir el movimiento del 68 a un hecho meramente generacional y aún menos a las transformaciones juveniles y lúdicas, cuando no goliárdicas, que sólo constituyeron el aspecto más llamativo. Ni tampoco puede reducirse la contestación del 68 a un fenómeno meramente político. A lo sumo podrá hablarse de un fenómeno prepolítico, cuyo común denominador eran la aversión y la condena de la guerra norteamericana en Vietnam junto con un extremismo genérico. Los líderes del movimiento estudiantil mostraban su intolerancia e incluso menosprecio hacia los partidos de la izquierda histórica y preferían remitirse a las experiencias de las revoluciones china y castrista. Los retratos de Mao y *Che* Guevara pegados en las paredes de las facultades o exhibidos en las manifestaciones no eran sino símbolos tomados en préstamo de las revoluciones reales por parte de una revolución imaginaria. Incluso hay algo de paradójico en los movimientos juveniles de 1968: la música que escuchaban los jóvenes que participaban en ellos, las canciones que cantaban, los tejanos que vestían venían de Norteamérica a la cual dirigían sus gritos de protesta en sus manifestaciones. Transformar la contestación en un proyecto político coherente siempre ha sido tarea ardua y también lo fue en el 68. A este respecto, el caso norteamericano, del que ya

nos hemos ocupado, es particularmente significativo. Pasado el punto más álgido y fraccionándose el movimiento, se extinguió rápidamente.

De manera parcial, el caso de los países de Europa occidental, en donde la contestación del 68 adquirió (o intentó adquirir) una dimensión política más consistente, es distinto. Iniciado en las universidades como protesta contra modelos pedagógicos anticuados, el movimiento se proyectó rápidamente al exterior, también gracias a los medios de comunicación, adquiriendo dimensiones públicas e inmiscuyendo no sólo a estudiantes de cursos superiores, sino también a amplios sectores de la clase media que lo veían con una mezcla de ternura y de participación. Más complejas y diferenciadas fueron, como veremos, las relaciones con la clase obrera. Es más, estas últimas nos proporcionan una piedra de toque para una comparación entre las distintas situaciones nacionales.

En la RFA el movimiento de los estudiantes se inició con las manifestaciones contra la visita del sha de Persia a Berlín en 1967 y pronto alcanzó proporciones considerables. Pero quedó reducido al mundo juvenil y estudiantil. La actitud de las organizaciones sindicales y del propio mundo obrero fue de desconfianza e incluso de hostilidad hacia ellos. En abril de 1968 fue asesinado el líder estudiantil Rudi Dutschke y desde entonces empezó el declive. Poco a poco muchos militantes se reincorporaron a la militancia de los partidos históricos de izquierda unos, y a la del «sistema» los otros. Algunos optarán por la vía desesperada del terrorismo.

La situación en los países latinos, en cambio, se presenta de manera distinta. En mayo de 1968 París y las principales ciudades de Francia fueron escenario de manifestaciones estudiantiles imponentes. A diferencia de lo acontecido en Alemania, el movimiento estudiantil llegó también a los obreros e implicó a sus organizaciones históricas y en particular a la CGT, mientras que el PCF mantenía una actitud reservada. Durante días Francia quedó paralizada a causa de una huelga general e interminables desfiles de manifestantes recorrieron los bulevares parisinos. Parecía que el gobierno hubiera perdido el control de la situación hasta que, en la jornada del 30 de mayo, el general De Gaulle, recién llegado del viaje a Alemania donde se había reunido con el general Massu, ya entonces comandante de las tropas francesas en Argel, anunció por radio que no nombraría a un nuevo ministro así como su decisión de disolver el Parlamento y convocar de nuevo elecciones. Las manifestaciones estudiantiles cesaron de golpe y los obreros, cuyas reivindicaciones habían sido en gran parte acogidas tras el acuerdo de la CGT con el gobierno en la jornada del 27 de mayo, fueron poco a poco reincorporándose a las fábricas. En las elecciones convocadas pocas semanas después, los comunistas registraron un descenso y el cuadro político no experimentó cambios sustanciales. En términos estrictamente políticos, también el 68 francés acababa con un fracaso.

En Italia esa sinergia entre movimiento estudiantil y movimiento obrero que en Francia no había durado más que unos pocos días tomó más cuerpo y duró más, dado que encontró el apoyo no tan sólo de las organizaciones sindicales sino también del PCI. Este último, que ya había incrementado sus votos en las elecciones de 1963, obtuvo un nuevo éxito en las de 1968. El punto culminante de este período de luchas se alcanzó durante el otoño «caliente» de 1969 con la huelga de los metalúrgicos que acabó victoriosamente consiguiendo la semana de 40 horas y aumentos salariales iguales para todos.

La contestación general de 1968 también fue para Italia una fiesta de despedida a los años del «milagro» económico y de la estabilidad política. Tiempos difíciles, como veremos, aguardaban al país. La primera señal de alarma sonó el 12 de diciembre de 1969 en la plaza Fontana de Milán, cuando una bomba colocada en un banco causó 17 muertos y 90 heridos. Este atentado, del que todavía hoy no se conocen los responsables, determina el comienzo de un período nuevo y oscuro, el que se ha dado en llamar el período de la *estrategia de la tensión*. Fue en este contexto cuando sectores extremistas optaron por la vía del terrorismo también en Italia.

El único país europeo en el que la sinergia entre movimiento estudiantil y movimiento obrero se realizó con mayor éxito fue la España franquista. A diferencia de lo ocurrido en Francia y en Italia, en España no se quedó en un breve período. Como hemos podido constatar, ya había empezado a finales de los años 50 y duraría hasta la transición a la democracia.

Si la contestación del 68 hubiera sido un movimiento político, su balance general podría considerarse decepcionante, especialmente por lo que respecta a las esperanzas y a las expectativas de sus propulsores. Pero, como se ha dicho, no fue tal. Fue algo más, una *Erlebnis* colectiva y libertadora, que mediaba en lo más profundo de las conciencias y de la sociedad y sólo en un segundo momento arremetía contra el orden político en la superficie. Una especie de bomba con efectos retardados. Sin el 68 no se comprendería, por ejemplo, que en el transcurso de los años 70 en un país católico como Italia los electores se pronunciaran a favor del divorcio y del aborto. Si bajo el perfil estrictamente político la contestación juvenil fue en su conjunto un fracaso y sus manifestaciones más vistosas y contingentes se apagaron tan rápidamente como se habían encendido, la huella que dejó en la sociedad y en las relaciones interpersonales ha permanecido y forma parte integrante de las costumbres y del patrimonio intelectual y moral de la sociedad en que vivimos.

30

Los países en vías de desarrollo en los años sesenta

30.1. LA REVOLUCIÓN CULTURAL CHINA

A fines de los años 50 el fracaso del gran salto hacia adelante que pretendía Mao (véase cap. 25) era del todo evidente y parecía urgente la necesidad de una revisión de la política económica que se había seguido hasta el momento. De esta exigencia se hizo portavoz el ministro de Defensa Peng Dehuai, el cual había comandado a los voluntarios chinos en la guerra de Corea, dirigiendo al presidente Mao una carta en la que expresaba sus críticas hasta el punto de afirmar que «si los campesinos chinos no fueran tan buenos, hace tiempo que habríamos conocido un conflicto húngaro». Pagó su acto de valor con su destitución, pero hay varios indicios que hacen suponer que también entre otros máximos dirigentes, entre los cuales Liu Shaoqi y tal vez el propio Zhou Enlai compartían su punto de vista e, implícitamente, las críticas que Peng Dehuai había dirigido al gran timonel. El hecho es que Mao tuvo que ceder el cargo de presidente de la República a Liu Shaoqi para conservar el del partido y sobre todo que en el transcurso de los primeros años sesenta se siguió y se practicó una política económica de «reajuste» dando prioridad a la agricultura. Ello permitió pasar de un cultivo de ciento cincuenta millones de toneladas en 1960 a las doscientas en 1965. Se aplicó una drástica reestructuración a las Comunas y al cabo de pocos años no se habló más de ellas. Pero se trataba sólo de una pausa. Los conflictos políticos en el seno del grupo dirigente estaban lejos de terminar.

Las primeras polémicas empezaron con sordina y tenían como objeto de discusión algunos textos literarios y teatrales y en particular una pieza de Wu Han, cuyo protagonista era un mandarín honesto que se rebelaba ante las vejaciones del emperador hacia los campesinos, al igual que Peng Dehuai –fue ésta la acusación que le lanzaron sus críticos– se había rebelado contra

Mao. Pero Wu Han no era sólo un literato, sino también el vicepresidente de Pekín: el ataque contra él iba dirigido a su superior directo Peng Zhen, que en mayo de 1966 fue criticado violentamente mediante una circular del Comité Central político y a continuación destituido del cargo y arrestado en diciembre. Hasta el momento la lucha política había tenido lugar en el seno del *establishment*, pero no tardó en trasladarse al exterior. El 25 de mayo una profesora de la Universidad de Peita de Pekín pegaba en las paredes de la universidad un *dazibao* invitando a los intelectuales revolucionarios a alzar «la bandera roja del pensamiento de Mao Zedong» y a destruir todos los elementos revisionistas «al estilo de Kruschev». Éste fue el inicio de la fase más crítica de la revolución cultural, un movimiento en el que se implicaron millones de jóvenes estudiantes en su mayoría. El 5 de agosto el presidente Mao en persona daba su apoyo al movimiento iniciado en las universidades pegando su *dazibao* en el que invitaba a concentrar las fuerzas en el «cuartel general». El blanco principal eran obviamente los dirigentes cuyas tendencias moderadas eran evidentes: Liu Shaoqi, definido como el «Kruschev chino», encarcelado en 1969 y que morirá en prisión, y Deng Xiaoping que, a pesar de que en octubre de 1966 hiciera pública autocrítica, fue arrestado y se le envió a trabajar a una fábrica. Hasta 1974 no volverá a la vida pública.

El movimiento de la guardia roja protagonista de la revolución cultural era extremadamente heterogéneo. Se remitía a la Comuna de París y a su partido libertario, pero ello no le impedía estigmatizar como contrarrevolucionario el lema *liberté, égalité, fraternité* de la revolución francesa y de profesar un culto hasta llegar al fanatismo por la figura del presidente Mao. Objeto de su iconoclasia era no sólo todo lo que recordaba a la China del pasado –textos literarios y teatrales, monumentos, reliquias–, sino también todo lo que consideraran occidental y extranjero –objetos, modos de vestir, gustos. El 22 de agosto de 1967 la guardia roja incendió la embajada inglesa en Pekín y se ensañaron con sus funcionarios. El único denominador común de este movimiento era una mezcla de agresividad, de ingenuidad, pero también de generosidad propia de una generación joven. No debe sorprendernos que algunos de sus exponentes se convirtieran después en disidentes. La revolución cultural quedó de todas formas reducida a un hecho casi exclusivamente urbano, que sólo llegó de manera marginal al campo y encontró la hostilidad de una buena parte de la clase obrera y en concreto de aquellos sectores de la misma que no tenían intención de renunciar, como pretendía la guardia roja, a la jornada laboral de ocho horas en nombre de la lucha contra el «economicismo» y que se oponían a la equiparación de los salarios de los obreros «permanentes» a los de los eventuales que venían del campo. En tales casos se llegó a los enfrentamientos físicos: como los del gran centro industrial de Wuhan en julio de 1967, en el Cantón, en donde se contaron cuatrocientos muertos. Y sobre todo en Shanghai, donde en 1966 fue proclamada una efí-

mera Comuna y en donde la mayoría de los obreros opuso una fuerte resistencia a la guardia roja.

Los efectos de este cataclismo en la economía del país fueron devastadores. La producción industrial en 1967 sufrió un descenso del 15 % y del 10 % en 1968 y el comercio exterior mermó de manera sensible. Las universidades permanecieron cerradas de 1966 a 1970, privando de este modo al país de una nueva generación de «expertos» que tanto necesitaba. China estaba al borde de una guerra civil y en el umbral de la anarquía.

Ante esta situación el papel del ejército era determinante. Una parte de éste había apoyado en un primer momento el movimiento de los estudiantes y esto no debe sorprendernos si se tiene en cuenta que desde 1959, tras la liquidación de Peng Dehuai, el cargo de ministro de Defensa lo cubría Lin Biao, el hombre al que se le definía habitualmente como «el compañero de armas más fiel de Mao». Sin embargo, una serie de disposiciones que venían desde lo alto y en concreto de Zhou Enlai restituyeron al ejército su papel de defensores del orden. En el comité central elegido en el IX Congreso los militares fueron ampliamente representados, por lo que hay que suponer que algo había cambiado en el equilibrio interno del grupo dirigente. Esta suposición no puede confirmarse de manera visible por lo que sabemos acerca de los trabajos del IX Congreso del partido, celebrado en abril de 1969. En él, Lin Biao fue declarado oficialmente sucesor de Mao y se le confió la tarea de elaborar el informe general en el que no se abstuvo de corroborar la condena del revisionismo de Liu Shaoqi ni de elogiar la revolución cultural. Pero más tarde, en septiembre de 1970, en el transcurso del segundo pleno del nuevo Comité Central, quedó claro que los principales partidarios de la revolución cultural, Chen Boda, Kang Sheng y la esposa de Mao, habían perdido parte de su influencia. En abril de 1971 Chen Boda hizo su última aparición pública y el verano del mismo año Lin Biao perecía en un accidente aéreo en el cielo de Mongolia. Lo que hay detrás de este episodio permanece todavía en la oscuridad. Pero es evidente que con ello se cerraba un período dramático de la historia de la China contemporánea.

30.2. AMÉRICA LATINA EN LOS AÑOS SESENTA

Ya hemos podido destacar que la política de la administración democrática por lo que respecta a Latinoamérica se caracterizó, a diferencia de las precedentes administraciones republicanas, por su mayor compromiso. De hecho fue el presidente Kennedy quien lanzó en 1961 un ambicioso programa de ayudas a los países de Latinoamérica por un total de veinte mil millones de dólares que deberían gastar en diez años, la *Alianza para el progreso*. La novedad respecto a las anteriores intervenciones consistía en el hecho de que

la distribución de los fondos estaba subordinada a la presentación, por parte de cada país interesado, de planes de desarrollo y de reforma de las estructuras económicas y a la aprobación de estos planes mediante un comité de expertos. La *Alianza para el progreso* pretendía de este modo estimular y propulsar una política de reformas y de renovación social y política, y fue bajo este espíritu y con este idealismo miles de jóvenes norteamericanos se adhirieron a los «cuerpos de la paz» (*peace corps*) invitados a verificar sobre el terreno la ejecución de los programas y para colaborar en ellos. En cuanto tal, la Alianza representaba una tentativa de dar una respuesta en positivo al desafío que suponía la revolución cubana de 1959 y al mensaje que ésta había lanzado a los países latinoamericanos.

El balance de este nuevo curso político presenta luces y sombras. Obtuvo éxitos allí donde encontró interlocutores dispuestos a colaborar. Éste es el caso de Venezuela donde en 1958 Rómulo Betancourt fue elegido para la presidencia, un exponente político con un pasado de simpatías filocomunistas y líder del partido que él mismo fundó, *Acción democrática*. Betancourt ya había sido elegido presidente en 1945 y durante los años de su mandato había puesto en marcha una reforma agraria. En 1948 fue derrocado por un golpe militar. Cuando en 1958 volvió al poder, pudo retomar, con la ayuda de la administración Kennedy, el proceso de democratización y modernización que se había interrumpido.

Otro país en el que la política de la Alianza dio muy buenos resultados fue Bolivia, en donde en abril de 1952 una insurrección popular había llevado al poder Víctor Paz Estenssoro, líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), del cual los mineros de las minas de estaño constituían el principal componente y el más combativo, pero en el que también habían confluido estudiantes y sectores de la pequeña burguesía urbana. Éstos últimos fueron asumiendo gradualmente el liderazgo del partido del movimiento, abandonando las corrientes más radicales y dándole un giro más moderado. De este modo Bolivia pudo beneficiarse considerablemente de las ayudas norteamericanas y ello le permitió desarrollar y modernizar la propia economía y en particular valorizar los yacimientos petrolíferos de reciente descubrimiento en la región de Vera Cruz.

La *Alianza para el progreso* obtuvo su mejor resultado en Chile, el país de Latinoamérica en el que, como en México, el cuadro político y las instituciones de la democracia parlamentaria contaban con algo más de experiencia y por tanto estaban más arraigadas. Pero México también compartía con sus compañeros del subcontinente los problemas de una economía en constante equilibrio entre inflación y deflación, crecimiento y escasez. Durante los años 50 e inicios de los 60, bajo las presidencias del general Ibáñez (1952-58) y de Jorge Alessandri (1958-64), hijo de Arturo Alessandri que había dominado la vida política chilena durante los años veinte, Chile tam-

bién tuvo que componérselas entre las presiones del Fondo Monetario Internacional, que requería una política de rigor y las de los partidos de izquierdas y de los sindicatos que se hacían portavoces de las de los obreros y reclamaban la nacionalización de las empresas extranjeras, en particular las mineras, que constituían el principal recurso de la economía del país.

Pero mientras tanto habían cambiado muchas cosas. El derecho a voto se había ampliado notablemente tras las reformas de los años 1958-1962 y por consiguiente también había cambiado el cuadro político. La novedad más importante fue la constitución y la consolidación de un nuevo partido que entonces no tenía equivalentes, a excepción de Venezuela, en los demás países de un continente en el que las tradiciones del anticlericalismo del siglo XIX eran radicales y en el cual a los curas incluso se les había negado el derecho a votar. Me refiero a la Democracia Cristiana, cuyo programa se remitía al mensaje de la encíclica *Pacem in Terris* y a las innovaciones del Concilio del Vaticano Segundo.

Fue en ella y en su líder, Eduardo Frei, donde la política de la *Alianza para el progreso* lanzada por Kennedy encontró al interlocutor que no había o no había querido encontrar en otra parte. En las elecciones a la presidencia de 1964 Frei presentó la propia candidatura y salió elegido con el 56% de votos contra el 39% del candidato de izquierdas, Salvador Allende. Habían sido determinantes las señales de apoyo que anteriormente habían llegado de Washington y los votos de las derechas que habían renunciado a apoyar su propia candidatura, pero ello no impidió al nuevo presidente comprometerse en la ejecución de aquel programa de «revolución en libertad» con el que se había presentado a los electores. Las minas de cobre, que pertenecían a compañías extranjeras, y en particular norteamericanas, no se nacionalizaron, como exigía la izquierda, pero se convirtieron en compañías mixtas en las cuales el estado mantenía una fuerte participación accionaria, en algunos casos mayoritaria; se llevó a cabo una reforma agraria que supuso la expropiación de mil doscientas sesenta y cuatro haciendas y la distribución entre los campesinos de casi tres millones y medio de hectáreas; la edad de escolarización obligatoria se aumentó hasta los ocho años de edad y se reformó y se hizo más accesible el sistema educativo en su conjunto. Por último, en 1970, el derecho a voto se extendió a los analfabetos. La política de la Alianza, pues, registró triunfos importantes.

Mientras tanto, como hemos visto, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se habían ido deteriorando progresivamente y ello incidió en la orientación de la opinión pública y de la propia administración con respecto a Estados Unidos. En la conferencia de la OAS de Punta del Este de principios de 1962 Estados Unidos consiguió la mayoría de los dos tercios necesarios para que Cuba fuera expulsada de la organización. A continuación, tras la crisis de los misiles de octubre de 1962, el consejo de ministros de Exte-

rior de los países integrantes de la OAS aprobó una resolución, con la abstención de Brasil, Chile, Bolivia y Ecuador, en la que se declaraba el uso de la fuerza como medida extrema para impedir que se enviara material militar a Cuba.

Con la llegada de la presidencia Johnson la línea política americana en relación con los países de Latinoamérica registró un ulterior recrudecimiento. En julio de 1964, a petición de Venezuela, todos los estados de América Central y del Sur, a excepción de México, rompieron las relaciones diplomáticas con Cuba. Pero a pesar de estar aislada, la revolución cubana continuaba ejerciendo su poder de atracción sobre los sectores más radicales de la opinión pública sudamericana. En una serie de países, especialmente en Venezuela, Colombia, Perú y Guatemala se fueron desarrollando durante los años 60 movimientos de guerrilla. El asesinato de Ernesto *Che* Guevara, el más popular de los compañeros de armas de Castro, en octubre de 1967, marcó el fin de éstos. Derrotada en el campo, la guerrilla se trasladó a la ciudad con el movimiento de los *Tupamaros* en Uruguay y de los *Montoneros* en Argentina, pero también en este caso sus promotores encontraron el fracaso. En la represión de las distintas guerrillas rurales y urbanas tuvieron un papel básico los cuadros formados e instruidos en las academias militares norteamericanas y los propios servicios secretos de Estados Unidos. Por otro lado éste último no se limitó a intervenciones indirectas y a las *cover actions*. Cuando en 1965 estalló en Santo Domingo una revuelta contra los militares que dos años antes habían depuesto al presidente Juan Bosch, ganador de las elecciones regulares, la administración Johnson no dudó en enviar veinte mil marines con el fin de reprimir la insurrección.

En este contexto las oligarquías tradicionales y los militares se reforzaron y pasaron a la ofensiva. El caso de Brasil es el que aporta la prueba más evidente.

El nuevo presidente J. Quadros había heredado de su predecesor Kubitschek, como hemos visto, una situación muy difícil. Al malestar y a las protestas de las clases urbanas se unían las combativas ligas campesinas del Nordeste que, bajo la enérgica guía de Francisco Julião, luchaban para que se llevara a cabo una reforma agraria.

La presidencia de Quadros fue breve y desconcertante. El hecho de ser paulista y pertenecer a la UDN, un partido tradicionalmente vinculado a la oligarquía, no le impidió condenar el desembarco de los mercenarios cubanos en la bahía de Cochinos así como de condecorar a *Che* Guevara con la orden de la Cruz del Sur, dos gestos que no podían sino suscitar las aprensiones de los militares y de amplios sectores de la opinión pública. Consciente del riesgo que corría y probablemente contando con ser reelegido con poderes más amplios, Quadros dimitió en agosto de 1961 tras apenas un año de mandato. Según la constitución, el vicepresidente Goulart, que se en-

contraba de viaje en China, debería haberle sucedido, pero su nombramiento encontró la firme oposición de los militares que veían en él a un radical, por no decir a un comunista. Al final entre los militares y Goulart se llegó a un acuerdo por el cual los poderes del presidente serían limitados, mientras que los del Parlamento serían ampliados. El Parlamento, dado el sistema electoral vigente que excluía del derecho a votar a los analfabetos, era la expresión de un cuerpo electoral en el que el voto de las zonas rurales, tradicionalmente más moderado, tenía un mayor peso del que tenía en las elecciones presidenciales, en el que, al contrario, prevalecía el voto urbano, y esto constituía una limitación más para el nuevo presidente. Pero Goulart no se resignó a ser un presidente bajo control parlamentario y en enero de 1963 convocó un referéndum que le restituyó la totalidad de sus poderes con una muy desahogada mayoría. Por lo que concierne a la política económica, Goulart tuvo que enfrentarse al dilema crónico entre la continuación de una política de desarrollo y de gasto público a la que aspiraban los sindicatos, que eran sus principales partidarios, y una política de contención y de deflación como la deseada por el Fondo Monetario Internacional. A raíz de esto siguió una línea oscilante y contradictoria, lo que comportó que entre 1961 y 1964 el cruzeiro se devaluara cinco veces respecto al dólar y que la inflación experimentara un crecimiento vertiginoso. En política exterior sus actuaciones más significativas fueron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los países de Europa oriental y la puesta en marcha de una colaboración con los países de independencia reciente de Asia y de África y con el movimiento de los países no alineados. Todo ello suscitó, obviamente, preocupación y desconcierto entre los militares, en amplios sectores de la opinión pública y en Washington. Pero Goulart decidió jugarse el todo por el todo y en febrero de 1964 presentó un paquete de propuestas que comprendían la legalización del Partido Comunista, la concesión del voto a los analfabetos y a los militares de rango inferior y de las tropas y por último el programa para una reforma agraria. Vale la pena destacar que se trataba de un paquete de reformas que tenía muchos puntos en común con el que presentó Frei en Chile. Si se hubieran llevado a cabo, tales medidas habrían cambiado radicalmente el aspecto político del país y los opositores del presidente no tardaron en darse cuenta de ello. En el mes de marzo la situación se precipitó: a una manifestación pro Goulart en Rio, en la que participaron ciento cincuenta mil personas, durante la jornada del 13, le respondió seis días después una «marcha de las familias con Dios y por la libertad» que se desarrolló en São Paulo y Goulart se vio obligado a exiliarse en México. A los militares que habían promovido y llevado a cabo el golpe les llegó un telegrama de felicitación de Lyndon Johnson y los elogios pronunciados en público del embajador americano en Brasil. Poco después Washington declaraba oficialmente a través del secretario adjunto de Asuntos Exterio-

res latinoamericanos Thomas Mann que los Estados Unidos no tendrían en cuenta a la hora de conceder ayudas los órdenes políticos en el interior de cada país. Pero hay que añadir también que no se opuso resistencia alguna al golpe: señal de la desorientación y del malestar en los que estaba sumido el país. El nuevo gobierno, de cuya presidencia tomó posesión el mariscal Castello Branco, se apresuró a deshacer los partidos políticos y las ligas campesinas. Se privó de los derechos civiles a personalidades tales como el economista Celso Furtado, consejero no demasiado escuchado de Goulart, y Josuè de Castro, autor de un libro en el que había denunciado las condiciones miserables en las que vivía la población del Noreste. Algunos dirigentes de ligas campesinas fueron asesinados. Con el paso de los años la dictadura que se había instaurado se fue haciendo cada vez más rígida, empeñada como estaba en la represión de manifestaciones de desacuerdo y de protesta, que llegaron a convertirse en guerrilla urbana, e incapaz, como los gobiernos democráticos que lo habían precedido, de salir del círculo vicioso entre efímeros y breves *milagros* económicos y vertiginosos despegues inflacionistas.

También durante 1964, en Bolivia, un golpe de estado dirigido por el general René Barrientos ponía fin a la experiencia reformadora de Paz Estenssoro y otorgaba a los militares el control total del país. Fueron ellos los que llevaron a cabo la represión durante los años 60 de la guerrilla en la que *Che* Guevara encontró la muerte. Pasados dos años, en Argentina, los militares bajo la tutela del general Onganía tomaron las riendas del poder poniendo fin a la alternancia entre gobiernos militares y gobiernos civiles que fueron sucediéndose tras la caída de Perón. Fueron estos militares golpistas los que más tarde decidirían permitir a Perón volver a su patria después de su exilio en España y su reelección en noviembre de 1974.

Pero hubo países que resistieron ante esta oleada de restauraciones. Un caso singular es el de Perú, donde en 1968 los militares, empeñados en la lucha contra la guerrilla, destituyeron al presidente Belaúnde Terry, un moderado, y promovieron una política de modernización llevando a cabo una reforma agraria radical y nacionalizando muchas compañías extranjeras.

El caso de Chile es totalmente distinto. El coste de las reformas realizadas desde la presidencia de Frei había sido elevado y por consiguiente en los últimos años de la década la situación económica fue deteriorándose y la inflación, esta espada de Damocles que siempre pendía encima de los gobiernos de los estados de Latinoamérica, volvió a aparecer. Pero el epílogo fue distinto al de Brasil. En las elecciones presidenciales de 1970 Salvador Allende, candidato en la lista de izquierdas (Unidad Popular) en la cual convergían los democristianos de izquierda del MAPU, resultó vencedor por mucho, obteniendo el 36,5 % de los votos contra el 34,9 % de Alessandri y el 27,8 del democristiano Tomic.

De acuerdo con la constitución, Allende fue elegido para la presidencia, pero no disponía de la mayoría en el Congreso y además debía ponerse de acuerdo con la heterogeneidad de la coalición que lo apoyaba. Especialmente, a diferencia de Frei, no contaba con el apoyo de Washington y esto acabó siendo decisivo. El curso y el fin de la experiencia del gobierno de Unidad Popular no pertenecen al ámbito cronológico de este capítulo, pero es bien conocido por todos.

30.3. LA CRISIS DEL MOVIMIENTO DE LOS NO ALINEADOS Y LA APARICIÓN DE LAS DIFERENCIAS NORTE-SUR

Tras los buenos resultados obtenidos durante los años 50 el movimiento de los no alineados vivió durante el curso de la década siguiente una pausa y una crisis. Las razones de una y de otra hay que buscarlas en las respectivas dificultades internas de cada país. Este es especialmente el caso de la India, un país que, como hemos visto, había desempeñado la función de nexo en la constitución del movimiento y ocupaba un puesto especialmente relevante.

El tercer plan quinquenal presentado en 1961 era más ambicioso que el precedente. Sus resultados, especialmente en el sector industrial, fueron imponentes, pero ni siquiera éstos sirvieron para asegurar a una población en crecimiento constante esa autosuficiencia alimentaria que era el principal objetivo de la planificación. Acabó por complicar más la situación el deterioro de las relaciones con China, culminando en septiembre-octubre de 1962 con enfrentamientos de los que el ejército indio no sólo salió derrotado, sino también humillado. De hecho, sólo la decisión china de retirarse de los territorios conquistados evitó a la India el peligro de una invasión. El impacto que provocó esta derrota fue fuerte y debido a ello el gobierno se vio obligado a aumentar los gastos militares, restando de este modo más recursos a la política de desarrollo. En 1964-1965, junto con las inundaciones provocadas por el monzón, la India atravesó, a pesar de las grandes importaciones de grano americano, una nueva y devastadora carestía. Mientras, la crisis económica se había convertido en crisis política: el 27 de mayo de 1964 había expirado el Pandit Nehru, privando a la nación de un guía indiscutible, y su sucesor Lal Bahadur Shastri se encontró enseguida con dificultades para imponer su autoridad a los gobiernos de los estados y al Partido del Congreso. A su vez, las relaciones con Pakistán, que siempre habían sido tensas, degeneraron en un conflicto abierto, al que puso fin en enero de 1966 la mediación del primer ministro soviético Kosygin. Pocos días después moría el primer ministro Shastri y el Congreso designaba como sucesora a Indira Gandhi, hija de Nehru. Ésta tuvo que enfrentarse a una com-

pleja situación tanto por las dificultades como por las tensiones étnicas que se manifestaban en algunos estados y en particular en Punjab. En las elecciones de febrero de 1967 el Partido del Congreso sufrió por vez primera una auténtica derrota. Gracias a la energía y a la habilidad política de la nueva líder, la India, al igual que China, conseguirá salir de la crisis económica y política en la que había caído, pero por el momento los dos gigantes asiáticos ya no eran capaces de ejercitar la función de *liderazgo* que habían ejercido en tiempos de Bandung.

A esto se añada que también Indonesia, el país que más que ningún otro había contribuido al nacimiento del movimiento de los no alineados, atravesó en la segunda mitad de los años 60 una grave crisis económica y política. El deterioro de la situación económica y una inflación galopante habían comprometido la estabilidad política asegurada por el liderazgo de Sukarno y por el gobierno de coalición que éste presidía. Sirviéndole de pretexto un *Putsch* de militares, cuya responsabilidad se atribuyó a los comunistas, el 30 de septiembre de 1965 el general Suharto desencadenó una masacre sin precedentes en la que cayeron centenares de miles de comunistas, en su mayor parte campesinos de la isla de Java que habían ocupado las tierras de grandes propietarios. Convertido en árbitro del país, Suharto en marzo de 1966 rodeó el palacio presidencial y obligó a Sukarno a abandonar el poder. De este modo Indonesia había dejado de ser un país no alineado. A partir de este momento se irá integrando cada vez más en la zona de influencia norteamericana.

En el transcurso de los años sesenta se registraron también en Oriente Medio modificaciones considerables en el orden político. La nueva administración norteamericana democrática había abandonado progresivamente la línea intransigente ante los movimientos anticolonialistas y de los nacionalistas árabes que había caracterizado a la administración republicana y que se había expresado en la enunciación de la doctrina Eisenhower y en la estipulación del Pacto de Bagdad. En particular mejoraron las relaciones con el Egipto de Nasser, al que Estados Unidos abasteció entre 1958 y 1964 de considerables ayudas y préstamos. Por el contrario se fueron deteriorando progresivamente las relaciones entre los países árabes. La República Árabe Unida entre Siria y Egipto (a la que también debería haberse unido Iraq) se disolvió en septiembre de 1961 por iniciativa Siria. La llegada al poder en Damasco y en Bagdad de gobiernos de orientación antioccidental liderados por el partido Baath contribuyó a un ulterior empeoramiento de las relaciones interárabes. El Baath, que de hecho también se declaraba defensor de la causa panárabe, se disputaba con Nasser el liderazgo del movimiento panárabe. La consiguiente rivalidad se reflejó también en el interior de la inmigración palestina dividida entre la OLP, una organización nacida en 1964 bajo el patrocinio egipcio y de directrices nasserianas, y la más autónoma Al

Fatah de Yaser Arafat. Por su parte los gobiernos de los estados árabes más vinculados a la ortodoxia islámica, como Arabia Saudí o Yemen, denunciaban la Carta de Acción Nacional que Nasser había aprobado en 1962, como un abandono, por no decir una traición, de los principios del islamismo. El líder egipcio se limitó a anunciar su intención de abandonar la Liga Árabe y se lanzó a una guerra, que resultó larga y costosa, contra el Imán yemenita. Por su parte Iraq reivindicaba la posesión de Kuwait, encontrando la oposición de la Liga Árabe. El único elemento en común era la aversión hacia el estado de Israel y sobre esta base Siria y Egipto, Iraq y Jordania reencontraron temporalmente el entendimiento. Durante 1967 se produjeron en las fronteras de Israel una serie de incidentes y de escaramuzas que determinaron una tensión que en julio acabó en un nuevo conflicto. La tercera guerra árabo-israelí fue muy breve, mejor dicho fulminante: un total de seis días bastaron a Israel para infligir una humillante derrota de los ejércitos egipcio, sirio y jordano aliados que dejaron sobre el terreno buena parte del armamento que la Unión Soviética y los países del Pacto de Varsovia les habían suministrado. Tras esta victoria Israel ocupó el Sinaí, Cisjordania y la parte oriental de la ciudad de Jerusalén y una nueva oleada de prófugos palestinos se refugió en Jordania y en otros países árabes. La aprobación por parte del Consejo de seguridad con voto unánime de una resolución –la 242– con la que se invitaba a las partes a retirarse de los territorios ocupados, no puso fin al estado crónico de tensión existente en la región. De hecho esta resolución la aprobaron Egipto y Jordania, pero no lo hicieron ni Siria ni Iraq, mientras que Israel adoptó una actitud evasiva y dilatoria.

Las consecuencias que sufrieron los países árabes derrotados en la guerra de los seis días y la caída del prestigio que aquélla supuso para el líder egipcio no tardaron en manifestarse y afectaron a toda la región. En septiembre de 1970 los *fedayn* de Yaser Arafat, que desde los territorios ocupados por Israel se habían refugiado en Jordania, fueron atacados por la legión árabe del rey Hussein y obligados a abandonar el país para refugiarse en el Líbano. Fue el llamado «septiembre negro», una auténtica masacre. Nasser no sobrevivió por mucho tiempo a esta nueva derrota: murió el 28 de septiembre de 1970. Con su muerte se desvanecía el espejismo de la unidad panárabe de la que había sido el principal artífice.

De manera análoga, en África, el deseo de una unificación política del continente conjeturado en la conferencia de Addis Abeba de 1963, no tardó en revelarse inalcanzable. La propia organización de los estados africanos tuvo que tomar buena nota de ello, puesto que para evitar conflictos entre los estados del continente y asegurar la paz, premisa necesaria para todo proyecto de unificación, tuvo incluso que aprobar el principio de la conservación de las fronteras existentes. Éstos últimos eran los que en su tiempo se habían trazado en Londres o en París sin tener demasiado en cuenta los

criterios étnicos. A consecuencia de ello, en muchos países africanos no tardaron en desencadenarse conflictos interétnicos y tribales. Este fue el caso del Congo Belga, donde las rivalidades tribales propiciaron la intervención extranjera. Pero también de Camerún, de Ruanda, donde en 1957 parte de la comunidad watusi fue exterminada por los hutu, y por último del mayor de los estados africanos de independencia reciente, Nigeria, donde en 1964 se habían descubierto importantes yacimientos petrolíferos. Entre 1967 y 1970 el país fue escenario de una despiadada guerra civil entre secesionistas ibo de Biafra y el gobierno central de Lagos, en el curso de la cual un millón de seres humanos perdió la vida. La alternativa, si así se la puede llamar, a esta conflictividad interna a la que recurrieron muchos estados africanos fue la de la dictadura militar: en el transcurso de los años sesenta se cuentan unos treinta golpes de estado, por lo general efectuados por militares, a lo largo de todo el continente. El más conocido es el de 1965 que llevó al poder al general Mobutu en el Congo.

De cuanto hemos visto hasta aquí creo que podemos concluir que los lazos políticos e ideales que hasta el momento habían asegurado una cierta unidad al heterogéneo movimiento que había nacido en Bandung se habían aflojado, si no deshecho, y que por el contrario surgían cada vez más las divergencias y las contradicciones de naturaleza étnica, política y social existentes entre sus varios componentes. El golpe más grave contra la unidad del movimiento se había asestado con la ruptura de las relaciones de amistad que hasta finales de los años 50 se habían mantenido entre China y la India, y por la vuelta al conflicto crónico entre India y Pakistán. También la ruptura entre la Unión Soviética y China había contribuido a la crisis del movimiento, provocando escisiones y fisuras, con el resultado de la disminución del prestigio e incluso de la credibilidad de ambas potencias comunistas y el fomento de ulteriores rivalidades.

Por supuesto los congresos de los no alineados continuaron llevándose a cabo de manera regular, en Belgrado en 1961, en El Cairo en 1964 y en Lusaka en 1970. Cada vez contaban con más asistencia a medida que nuevos estados de adherían al movimiento. Si en Belgrado había veinticinco estados representados, en Lusaka habían llegado a los setenta y cinco. Sin embargo, con el incremento del número de participantes aumentaba también la heterogeneidad de intereses así como la orientación de cada una de sus representaciones. La concepción de la no alianza de los líderes indios o egipcios difícilmente podía conciliarse con la de Fidel Castro, quien también se había adherido al movimiento.

Una convergencia en lo referente a estrategias y objetivos políticos comunes, como se había llevado a cabo en los años de la descolonización, parecía, por tanto, cada vez más impracticable. Pero continuaba subsistiendo una solidaridad más profunda y más amplia que aunaba no sólo a los países

asiáticos y africanos, sino también a los de Latinoamérica: todos pertenecían al Sur del mundo y todos tenían en común el mismo problema, el de salir de una condición de dependencia y de avanzar por la vía del desarrollo.

Sin duda, durante los años 50 y 60 se había avanzado sobre este terreno. Los datos relativos a la esperanza de vida y a la mortalidad infantil de los que disponemos sobre la base de las estadísticas de la ONU constatan un progreso generalizado y la consiguiente atenuación del desequilibrio en relación con los países industrializados. Más diferenciados son los datos y las cifras relativas a la tasa de alfabetización: mientras entre 1960 y 1970 se registra un aumento notable en Latinoamérica, en el norte de África y en Extremo Oriente, sufre un ligero descenso en Asia meridional y en el África subsahariana. Por lo que concierne a los datos relativos al consumo de calorías constatamos durante esta década una estabilidad substancial. Pero hay que tener en cuenta en la valoración de estos datos la alta tasa de incremento demográfico propio de los países en vías de desarrollo. Sin embargo, si a partir de estos datos, que podríamos llamar de base, pasamos a aquellos relativos a la renta *per capita* constatamos por el contrario que el desequilibrio se ha acentuado. Entre 1950 y 1970 la renta *per capita* de los países en vías de desarrollo aumentó, en su conjunto, a una media anual del 2,8%, que es inferior a la de los países industrializados (Van der Wee, 1989). Esto se debía en gran parte al hecho de que la participación de los países en vías de desarrollo en el comercio internacional estaba en disminución constante también en relación con el nivel prebélico de 1928 que se situaba en el 18%, y al hecho de que las razones de intercambio, es decir la relación entre los precios de las exportaciones, fueron perdiendo valor progresivamente, desfavoreciendo a los países en vías de desarrollo. Los precios de las materias primas, que continuaban siendo su principal riqueza, tendían en efecto a decrecer, mientras que los de los productos manufacturados de los países industrializados tendían a subir. Así pues, si por un lado el desarrollo había resuelto problemas, por otro creaba otros nuevos, si había cicatrizado heridas y eliminado contradicciones, abría y producía otras. A media que eran menos pobres, los países en vías de desarrollo también se volvían más exigentes y más conscientes de que el problema ya no era únicamente el de asegurarles la supervivencia, sino más bien el de favorecer su desarrollo y su integración en el mercado internacional. Por eso ya no bastaba una política de ayudas alimentarias o de otro tipo como la que hasta entonces habían practicado los países del Norte, sino que se hacía necesaria una política de asistencia y de cooperación al desarrollo que favoreciera la integración sobre una base de paridad en el circuito económico internacional. Es decir, algo parecido a lo que en su momento se hizo para los países europeos con el plan Marshall o a lo que pretendía ser, pero no fue (o lo fue sólo en parte), la *Alianza para el progreso* para América Latina.

Ésta era una reivindicación que, como hemos visto, habían presentado repetidamente en la sede de la ONU varios países asiáticos, africanos y latinoamericanos y que hasta entonces se había eludido sistemáticamente. A fin de atender estas exigencias la Asamblea de las Naciones Unidas, en la que tras el proceso de descolonización los países del Tercer Mundo disponían de un bloque consistente de votos, se comprometió con una declaración solemne en hacer de los años 60 una «década del desarrollo» y más tarde, en 1962, aprobó una resolución en la cual se presentaba una primera explicación acerca de los criterios generales a seguir, compendiándolos en la fórmula «no ayudas, sino comercio» (*not aid, but trade*). Se trata efectivamente de una filosofía distinta a aquella asistencialista que había prevalecido hasta el momento, pero quedaba por precisar de qué tipo de comercio se trataría y cuáles serían las condiciones de intercambio. Con este propósito las Naciones Unidas convocaron en 1964 la primera conferencia de la UNCTAD (*United Nations Conference for Trade and Development*), en la cual participaron ciento veinte países. La tarea de presentar el informe introductorio se confió a un personaje acreditado, cuyo nombre ya nos había aparecido anteriormente, el economista argentino Raúl Prebisch. Éste se expresó en términos críticos en relación a políticas de tipo proteccionista como las que se basaban en el principio de la sustitución de las importaciones que, como sabemos, habían sido practicadas por varios países del Tercer Mundo y en particular en Latinoamérica. Por el contrario, Prebisch se pronunció a favor de una política de integración de las economías de los países en vías de desarrollo en el mercado internacional. Pero para que ello fuera posible era necesario, a su juicio, que los países industrializados garantizaran la estabilidad de los precios de las materias primas que éstos exportaban y acordaran dar preferencia a los productos industriales que exportaran los países en vías de desarrollo. Los progresos que se llevaron a cabo mediante las pautas indicadas en el documento Prebisch fueron sin embargo muy limitados y ello indujo a una serie de países a constituirse en una representación propia, el grupo de los 77, que dio su primera conferencia en Argel en octubre de 1967. Como respuesta a las solicitudes presentadas por los 77 países, tras concluir la segunda conferencia UNCTAD celebrada en Nueva Dehli en 1968 los países industrializados decidieron destinar durante 1980 el 0,7 % de su producto interior bruto a la ayudas, una decisión que proponía de nuevo una lógica sustancialmente asistencial y que además fue ampliamente desatendida. En 1970 la contribución global de los países de la OCDE equivalía al 0,4 % de su producto interior bruto. Destacamos además que la distribución de ayudas y préstamos se efectuaban a partir de criterios básicamente discriminatorios, favoreciendo a aquellos países que se consideraban más fiables políticamente o más interesantes desde el punto de vista geopolítico. De este modo resultaba que el mayor beneficiario de

las ayudas norteamericanas era Israel y de las ayudas soviéticas Cuba y Corea del Norte.

El desequilibrio entre el Norte y el Sur del planeta no sólo permanecía inalterado, sino que el terreno ya estaba preparado para un ulterior empeoramiento. En 1970 la deuda contraída por los países del Tercer Mundo con los países industrializados era ya de sesenta y siete mil millones de dólares. A finales de los años 70 la cifra se verá prácticamente duplicada.

30.4. LA EDAD DEL ORO Y DEL BIPOLARISMO

Si recorremos en sentido inverso el camino andado hasta ahora e intentamos un resumen, se impone una primera constatación, por más obvia que resulte: el mundo a finales de los años sesenta aparece radicalmente transformado si se lo compara con el de la inmediata posguerra. Tanto si se define como «30 años de gloria» (Fourastié) o como «edad del oro» (Hobsbawm), el período histórico que nos hemos esforzado en reconstruir ha conocido un proceso de transformación que no encuentra comparación con otros períodos de la historia contemporánea o quizás en toda la historia de la humanidad. Todos los indicadores son a este respecto tan convergentes que la elección resulta embarazosa. Por nuestra parte nos limitaremos a modo de recapitulación a señalar algunos datos esenciales y evidentes, porque quisiera evitar cargar la exposición con datos y cifras que a menudo son archisabidos y porque ya hemos proporcionado una serie de datos en las páginas precedentes.

El mundo de finales de los años 60 es ante todo un mundo más poblado. En 1950 habitaban sobre la tierra 2.476 millones de hombres y mujeres; en 1960 la cifra había aumentado a 2.995 millones y a 3.610 en 1970. En veinte años, pues, la humanidad había aumentado un tercio, un incremento jamás registrado anteriormente en un intervalo tan breve de tiempo. ¡Nada de siglo de la muerte, como afirmó una autoridad en la materia! Es cierto que, siguiendo una tendencia ya iniciada a principios de siglo, el mayor incremento se registra en los países del Tercer Mundo. Sólo China y la India, como hemos visto, contribuyen de manera preponderante a este aumento. Pero también hemos constatado que algunos países industrializados tuvieron, si bien de manera distinta, su *baby boom*: desde 1950 a 1973 la población de Estados Unidos pasó de 153 a 212 millones, la de Japón de 84 a 109, la de Francia de 42 a 52. Si añadimos los incrementos registrados en los otros países industrializados, tenemos un total de 496 millones para 1950 y de 640 para 1973, con un incremento de alrededor de un cuarto. Sólo a partir de la mitad de los años sesenta se dibujará una tendencia inversa hasta el límite del crecimiento cero. Es superfluo decir que a este impetuoso crecimiento demográfico contribuyeron los progresos efectua-

dos en el campo de la Medicina: se remonta a la posguerra inmediata el uso a gran escala de la penicilina, y el descubrimiento de la vacuna contra la poliomielitis es de 1953. En todas partes, incluso en los países más desamparados, se reduce la mortalidad infantil.

Es evidente, por no decir obvio, que un incremento demográfico de estas proporciones no habría sido posible sin el correspondiente aumento de los recursos alimentarios. Entre 1950 y 1959 la tasa media anual del aumento de la producción alimentaria fue del 3,27 % y entre 1960 y 1969 del 2,66 %. La mayor contribución a este aumento procede de Estados Unidos, en donde la utilización a gran escala de abonos, fertilizantes y fitofármacos permitió a una población agrícola extremamente reducida duplicar los índices de productividad. Se ha hablado al respecto de una «segunda revolución agrícola». También la Comunidad Económica Europea, si bien sus progresos fueron inferiores a los de los americanos y fueron posibles gracias a una política agraria sustancialmente proteccionista, alcanzó en estas últimas décadas una condición de autosuficiencia alimentaria. Los resultados más decepcionantes son, como hemos visto, los de la Unión Soviética y los países de su bloque. Por lo que concierne a los países del «Tercer Mundo» cabe señalar que las tasas de crecimiento tanto de la producción alimentaria global como en la per cápita fueron ligeramente superiores a las de la media mundial, si bien muy inferiores a los objetivos de las distintas planificaciones nacionales. A ello contribuyó la llamada «revolución verde» impulsada por la FAO y algunas fundaciones americanas, lo que permitió mediante una serie de innovaciones y el recurso de la hibridación incrementar, y en algunos casos duplicar, el rendimiento de algunas simientes. Uno de sus mayores promotores, sir John Boyd Orr, director general de la FAO de 1945 a 1948, fue condecorado en 1949 con el Nobel de la Paz. Los países que más se beneficiaron de la revolución verde fueron México, Filipinas, la India, Pakistán y Nepal. Por supuesto existía y todavía existe el problema del «hambre en el mundo». Es particularmente agudo en algunas zonas más desfavorecidas, como la de Sahel, a causa del proceso de desertización, pero también estuvo y está todavía trágicamente presente en otras áreas geográficas. Ya nos las hemos visto más de una vez a lo largo de nuestra exposición con fenómenos de carestía, en la India a mitad de los años 60, en China en el «gran salto hacia delante». Pero ello es la consecuencia de factores de orden social y político y no de insuficiencia de recursos y atañe al sector de la distribución más que al de la producción.

Merece la pena destacar que a este aumento de la producción alimentaria se corresponden una drástica reducción de la población agrícola y un proceso especular de urbanización. El fenómeno, como hemos visto, es evidente especialmente en Estados Unidos y en Europa, incluyendo la oriental, pero también comprende los países del Tercer Mundo. Las masa humanas

que se condensan en las *bidonvilles* de las metrópolis de Asia, África y América Latina.

Las transformaciones más impresionantes que tuvieron lugar en esta década pertenecen al sector secundario. A lo largo de nuestra exposición nos hemos topado con varios «milagros económicos». Algunos de ellos, como el alemán, el italiano y el japonés fueron de larga duración y autosustentados; otros, como el de algunos países asiáticos y latinoamericanos, más efímeros. Los países del bloque soviético también tuvieron su propio desarrollo a pesar del aislamiento. Pero quizá sea más exacto decir que fue gracias a este aislamiento. Su ciclo decreciente se iniciará justamente a partir de que este aislamiento se vaya rompiendo y entren en el círculo de la economía mundial. También los países en vías de desarrollo registraron elevados índices de incremento de la producción industrial. Se han calculado equivalentes al 7 % anual en la década 1950-60 y del 8 % para la década siguiente. La cuota de participación en la producción mundial de los países en vías de desarrollo pasó del 6,5 % de 1953 al 9,9 % de 1973. Pero hay que tener en cuenta el bajo nivel de salida y del hecho que dicho incremento se concentró en unos pocos países y, dentro de cada uno de ellos, en algunas regiones y áreas urbanas.

Así pues, se trata de un desarrollo industrial generalizado, sustentado por una continua innovación tecnológica. Considero superfluo suministrar datos y ejemplos: los frutos de esta innovación forman parte, de hecho, de nuestra cotidianidad. Me limito a recordar que es de 1946 la puesta a punto por parte de la IBM del primer prototipo de ordenador, de 1948 la invención del transistor y de 1962 el lanzamiento del primer satélite de telecomunicaciones.

Por supuesto durante estas décadas se registraron pausas y recesiones, pero nada comparable con la gran crisis de los años treinta. Si tomamos el indicador más global, el relativo al volumen del comercio mundial, constatamos que entre 1948 y 1971 se multiplicó por cinco y que entre 1953 y 1973 los intercambios (exportaciones) de manufacturados de los principales países industrializados incluso se duplicaron. Esto significa que si se compara con el período anterior a la guerra el volumen de los intercambios conoció no sólo un incremento cuantitativo sin precedentes, sino que además experimentó un cambio cualitativo. En el período previo a la guerra la mayor cuota de los intercambios la constituían las materias primas contra los productos manufacturados.

Es obvio que la intensificación de los intercambios contribuía a estrechar las redes de la interdependencia. Pero a esto contribuían también y quizá en mayor medida las modificaciones en la propia organización de la producción. Se da por descontado la referencia a las sociedades multinacionales operantes en varios países y gestionadas según un criterio de división del trabajo a nivel mundial. De 1950 a 1970 las inversiones norteamericanas en la industria exterior, excluyendo la petrolífera, casi se multiplicaron por diez

pasando de 3.831 billones de dólares a 32.261. Los principales beneficiarios de esta lluvia de billones fueron Europa y Canadá, mientras que América Latina, Asia, África y Oceanía se beneficiaron de cuotas mucho más reducidas. Buena parte de estas inversiones son obra de sociedades multinacionales: según una encuesta de 1967 relativa a las quinientas sociedades americanas más grandes, setenta y siete producían en el extranjero más del 25 % del propio volumen de negocios y siete más del 50 %. Sólo la General Motors tenía en 1970 establecimientos en diecisiete países y junto con la Ford y la Chrysler controlaba el 30 % del mercado europeo. A finales de los años sesenta sólo las multinacionales norteamericanas producían bienes por un valor de alrededor de los ciento cuarenta billones de dólares. No continuaron siendo las únicas por mucho más tiempo: su ejemplo lo imitaron japoneses y europeos.

Un proceso de expansión productiva de estas dimensiones implica necesariamente una aceleración drástica de la movilidad social. El aspecto más visible es sin duda el de la urbanización: entre 1950 y 1960 la población de Tokio pasó de poco más de 5 millones a 10, la de São Paulo de 2 millones a 3.700.000, la de Kinshasa de los 40.000 de 1939 a 402.000 en 1959 y podríamos continuar fácilmente. Me parece superfluo volver a destacar que este proceso de poblamiento urbano comportara transformaciones radicales en la composición y en la estructura de la población. Son decenas, quizá centenares de millones, los campesinos que se convirtieron en obreros o que confluyeron en la masa del subproletariado urbano de las grandes metrópolis.

La movilidad no queda reducida a las fronteras de cada país o de las distintas regiones de mundo. Sólo entre 1960 y 1969 Estados Unidos absorbió 1,6 millones de inmigrantes de los países en vías de desarrollo, 1,5 Alemania, Inglaterra 900.000 provenientes de la India Oriental y Occidental y en menor proporción de Europa, 600.000 Canadá y 100.000 Australia. A estas cifras hay que añadir las relativas a las emigraciones en el interior de Europa del Sur hacia el Norte a las que ya hemos hecho referencia en su momento y las de los países de Asia Oriental a los estados de Oriente Medio productores de petróleo. Estas inmigraciones masivas no dejaron de provocar tensiones interétnicas en los países destinatarios. Los primeros enfrentamientos en este sentido se dieron desde principios de los años 60 en Blackpool y Londres y la campaña racista del diputado conservador Enoch Powell. En adelante, el fenómeno se extendería también por los países de Europa continental.

Otra forma muy distinta de movilidad en el espacio es la representada por los turistas que cada año dejan temporalmente sus casas para visitar otros países o en busca de vacaciones exóticas. Por último, pero sobre todo, viajan las noticias: si en el período histórico objeto de este volumen el uso de la televisión todavía se limita a franjas relativamente reducidas y privile-

giadas de la población mundial, la radio consigue ya un público mucho más amplio: en 1970 sus oyentes ascienden a 123 millones en Asia, 16 en África y 26 en Latinoamérica. Son pocos, pero en un mundo en el que el analfabetismo estaba todavía muy extendido, escuchar la radio, a menudo en colectividad, se convertía en un instrumento potente de propaganda y de movilización. Fue a través de la radio que los *fellahs* de Oriente Medio escucharon el discurso de Nasser en el que se anunciaba la nacionalización del canal de Suez y a través también de las emisiones de Radio Free Europe la propaganda occidental llegó a los países de Europa del este contribuyendo considerablemente a alimentar las corrientes de oposición al sistema.

No hay que sorprenderse pues de que en un mundo tan interdependiente las ideas y los movimientos que éstas generan se difundan con una rapidez que podríamos definir como epidémica. El ejemplo más significativo al respecto y del que ya hemos hablado a lo largo de nuestra exposición es el de la contestación estudiantil de los años 60. Observaciones análogas pueden hacerse con los movimientos feministas y ecologistas: éstos también nacieron en Estados Unidos y se extendieron por Europa y por el mundo.

El mundo de finales de los años sesenta es pues un mundo más poblado, más nutrido, más instruido y más urbanizado. Pero es ante todo no sólo un mundo más interdependiente, sino también más consciente de serlo. Podemos adoptar como primer testimonio reputado de esta toma de conciencia el informe sobre los límites del desarrollo que a petición del Club de Roma elaboró en 1971 el *Massachusetts Institute of Technology*. Prescindiendo de la validez de las previsiones el informe e incluso de su título, representa la primera valoración documentada de la globalización de los problemas que la humanidad contemporánea debe afrontar y, posiblemente, resolver. Desde entonces los problemas «transversales» de la explosión demográfica, del hambre en el mundo y de la contaminación del medio ambiente se han ido imponiendo cada vez más a la atención de la opinión pública y de los gobiernos.

Naturalmente nos preguntamos cuáles han sido los factores que han contribuido a hacer que una transformación tan radical se haya cumplido en un plazo de tiempo tan breve. Evidentemente a una pregunta tan complicada no es posible dar una respuesta unívoca, puesto que representaría una simplificación. Considero de todas formas que hay que tener en cuenta el cuadro internacional en el que se coloca este proceso de transformación. Como hemos visto, ha sido durante casi dos décadas, si no más, un cuadro sustancialmente estable. Es cierto que a lo largo de esta reconstrucción nos hemos encontrado con muchas Sarajevo o Danzig, en Corea, en Vietnam, en Oriente Medio, en Berlín, en Cuba. Pero en ninguna de estas coyunturas se traspasó el umbral de un conflicto localizado y nunca se llegó al enfrentamiento directo entre las dos superpotencias. Por otro lado es una evidencia que a esta estabilidad no se llegó mediante la cooperación y ni siquiera

con el concierto y el equilibrio entre las grandes potencias, sino con la forma inédita e impropia de la bipolarización y de una carrera ininterrumpida del armamento.

Por supuesto es legítimo preguntarse cuántos hospitales y cuántas escuelas habrían podido construirse si no se hubieran derrochado torrentes de dinero en arsenales cada vez más aterradores. Pero también es legitimo preguntarse por qué, a diferencia de lo que había sucedido en los años que precedieron la primera y la segunda guerra mundial, el resultado final de la carrera de rearme no ha sido un nuevo conflicto mundial. A este respecto el historiador norteamericano John L. Gaddis en su reciente síntesis sobre la guerra fría observa que «el objetivo del armamento en el pasado fue el de hacer la guerra, su nuevo papel era el de suscitar un horror de la guerra hasta tal punto que nadie desee iniciarla». Las armas nucleares –destaca Gaddis– «producen un notable efecto de teatralidad» y por consiguiente «exigen a los hombres de estado que se transformen en actores cuyo éxito o fracaso depende, o así parecía, no de lo que realmente hacían, sino de lo que parecía que hicieran» (Gaddis, 1997, p. 258), en otras palabras, más de la imagen que daban que de sus actos en sí. El Kruschev que se apresuró a retirar los misiles de Cuba era el mismo que poco antes había increpado a los norteamericanos amenazándolos con «sepultarlos». Ello por otro lado no equivale a decir que la teatralidad en cuestión fuera la de una comedia de enredo. No sólo porque, aunque remota e improbable, la posibilidad de una guerra por error como la que Kubrick imagina en su película *Doctor Strangelove* existía, sino que ante todo los dos actores que intervenían estaban totalmente metidos en su personaje. Con esto quiero decir que ambos estaban convencidos de que un posible peligro de guerra venía desde la otra parte y que por tanto era necesario continuar en la carrera del armamento y hacer ostentación de la propia potencia. En este contexto estaban convencidos de la superioridad del sistema social y político respectivo y por consiguiente de la necesidad histórica de que el enfrentamiento al que se libraban se resolviera a la larga de manera pacífica a su favor. Evidentemente una de las dos previsiones excluía la otra. Correspondería a la historia decidir.

Juicios y observaciones como estos son fruto, evidentemente, de la reflexión posterior y no es casualidad que el libro de Gaddis tenga por título *Ahora lo sabemos*. Efectivamente, «ahora lo sabemos». La historia no ha terminado, pero la guerra fría y la bipolarización sí, con un vencedor y con un vencido. Y el historiador es tal porque dispone de la reflexión posterior.

Sin embargo hay que añadir que observaciones de este tipo sólo tienen validez en el ámbito de su campo específico de indagación que en el caso del trabajo de Gaddis y de otros estudiosos es el de las relaciones internacionales en los años de la guerra fría y del bipolarismo. Pero la historia del cuarto de siglo comprendido entre el final de la segunda guerra mundial y las pos-

trimerías de los años 60 no se acaba y aún menos se identifica con la de la guerra fría y del bipolarismo: es ante todo, como hemos visto, la historia de una nueva «gran transformación». Si esto es cierto, de aquí se deriva que, si realmente la estabilidad relativa del cuadro internacional ha favorecido este proceso de desarrollo y de transformación que ha cambiado la faz de la tierra, también debemos preguntarnos si es cierto también a la inversa, es decir si entre bipolarismo y transformación no hay tan sólo una relación de coexistencia, sino también de interacción. La experiencia del pasado nos enseña que sobresaltos y oleadas nacionalistas y belicistas pueden producirse en un mundo convulsionado por la crisis como lo estuvo en los años 30, pero resulta mucho más difícil en un mundo que, además de conservar la memoria del pasado, ha conseguido la prosperidad o vislumbra la posibilidad de conseguirla, en un mundo, por usar una expresión actual, de «expectativas crecientes».

Por otra parte hay un punto que merece ser destacado. La estabilidad de la que estamos hablando no debe entenderse como un *status quo*, una congelación de las relaciones internacionales. Dicha estabilidad no excluye, sino que implica, un quantum de elasticidad, de articulación y también de dinamismo. En efecto, como hemos podido constatar a lo largo de nuestro análisis, el mundo bipolar no fue un mundo anquilosado o enyesado: baste con pensar en el proceso de descolonización y sus consecuencias.

Pero es evidente que este círculo virtuoso entre la estabilidad del cuadro político y el proceso de transformación no podía durar indefinidamente. Antes o después tenía que llegar el momento en que el cuadro internacional ya no se correspondiese, por más amplios que fueran sus márgenes de flexibilidad, con las mutaciones que el proceso de transformación había provocado en su interior. Llegados a este punto el círculo se rompe. Y es justo lo que iremos constatando en las páginas que vienen a continuación.

Cuarta parte

Interdependencia y multipolarización

31

Estados Unidos, de la presidencia de Nixon a la presidencia de Carter

31.1. EL FINAL DE LOS ACUERDOS DE BRETTON WOODS

El sistema de Bretton Woods basado en los cambios fijos de las distintas divisas y en la fijación del dólar en el oro, había funcionado magníficamente mientras la economía norteamericana conservó una posición dominante en los mercados internacionales y el dólar era una moneda fuerte. Pero ahora, como hemos visto, la situación había cambiado. Estados Unidos tenía que hacer frente a una competencia cada vez mayor de los países europeos y de Japón y su moneda estaba cada vez más deteriorada por la inflación a causa del dispendio en la guerra de Vietnam y por el programa de la *Great Society*. A una economía debilitada correspondía una moneda también debilitada. Una onza de oro valía de hecho más de los treinta y cinco dólares fijados en Bretton Woods. De ahí la tendencia de los socios europeos y japoneses de Estados Unidos a convertir su creciente disponibilidad de dólares en oro y la consiguiente reducción de las reservas de oro norteamericanas. Se daba así una situación que a la larga se haría insostenible. Naturalmente cada una de las partes hacía su análisis y tenían una percepción distinta de esta situación. Si los estados europeos y Japón estaban resueltos a individuar las causas en el proceso de inflación derivado de los gastos militares en la guerra de Vietnam y por la *Great Society*, Estados Unidos apuntaban con el dedo la competencia no siempre leal de las exportaciones europeas y japonesas, centrando en esto la causa principal del déficit de su balanza comercial, y en la renuencia de los aliados de hacerse cargo de los gravámenes relacionados con la política común de defensa, una de las causas del déficit de su balanza de pagos.

El economista belga Trifflin proyectó una solución que, retomando una propuesta presentada en su tiempo por Keynes (véase cap. 20), preveía la

transformación del Fondo Monetario Internacional en un banco central y la emisión de una moneda única en sustitución de las distintas monedas nacionales; pero por razones fáciles de intuir, no encontró buena acogida en los gobiernos, cada uno de ellos celoso de la propia soberanía y dispuesto a no ceder su parte a un organismo supranacional.

Con el paso del tiempo la situación se hacía cada vez más insostenible, a medida que la desconfianza en el dólar se propagaba y aumentaba, y acabó siéndolo del todo cuando en 1971, por primera vez desde el lejano 1893, también la balanza comercial de Estados Unidos resultó deficitaria.

De este modo se llegó al desenlace: el 15 de agosto de 1971 Nixon anunciaba al mundo su decisión de suspender la convertibilidad del dólar en oro asumiendo de manera realista la situación. Por otra parte, para obligar a los socios europeos y a Japón a revalorizar sus monedas, decidía someter a un arancel del 10 % todas las importaciones en Estados Unidos. En este contexto, a fin de bloquear la inflación interna, se procedía a congelar los precios y los salarios. Si a corto plazo estas medidas tuvieron, como veremos, un efecto tonificante en la situación económica norteamericana, constituían sin embargo el primer paso hacia el desmantelamiento del sistema de Bretton Woods. Pasos sucesivos se hicieron por esta vía en diciembre de 1971, con un acuerdo por el cual se procedió a una nueva devaluación del dólar y a una revalorización del marco y del yen en febrero de 1973, con una tercera devaluación del dólar del 10 %. El fin del sistema Bretton Woods basado en los cambios fijos entre las distintas monedas se confirmó con la conferencia que tuvo lugar en Kingston, en Jamaica, en 1976 con la participación de los principales miembros del FMI. Como resultado de las decisiones que se tomaron en esta ocasión «la autonomía nacional había triunfado sobre las reglas internacionales, las naciones se liberaban de los vínculos de un sistema de cambios fijos para poder perseguir uno u otro los propios objetivos económicos: aumentar las exportaciones, estimular las actividades económicas o impedir la importación de tensiones inflacionistas» (Gilpin, 1990). En otras palabras, a la multipolarización política correspondía ahora una multipolarización económica.

Pero la integración económica del planeta había recorrido un largo camino como para que se pudiera perfilar el peligro de una recaída en el proteccionismo y de una recesión análogas a las de los años 30. Si el sistema de Bretton Woods pertenecía ya al pasado, el cuadro de los acuerdos del GATT permanecía en vigor, dentro del cual entre 1973 y 1979 se negociaron acuerdos que consintieron una nueva reducción de los aranceles aduaneros (*Tokio round*). Esto no impide que los años setenta marquen el final de la «edad del oro» y el comienzo de un nuevo y más fluctuante ciclo económico durante el cual se alternaron fases expansivas durante toda la década e incluso después y fases de recesión, y el volumen de los intercambios internacionales regis-

tró una disminución equivalente al 3 % con respecto a la década precedente. En el mismo período las tasas de crecimiento del PIB registraron índices decrecientes en todos los principales países industrializados si se los compara con los de los años 60, mientras que los índices relativos a las tasas de inflación y al desempleo, normalmente divergentes en situaciones de coyuntura favorable, presentaron un ritmo paralelo en sentido ascendente, dando lugar al fenómeno inédito de la estagflación. A esto hay que añadir los efectos desestabilizadores del brusco despegue que el precio del petróleo experimentó en dos tiempos, en 1973 y en 1979.

El punto que merece ser destacado a fin de cumplir con nuestros objetivos de exposición es cómo estas tendencias y fluctuaciones presentan una asimetría notable según las distintas regiones y los varios países. Ello equivale a decir que los desequilibrios que, como hemos visto, se habían ido configurando en la década anterior, se acentuarán: desequilibrios entre Este y Oeste, entre Norte y Sur, desequilibrios entre los distintos países industrializados y entre los propios países en vías de desarrollo. Un mundo, pues, más seccionado.

En semejante contexto de inestabilidad y de rivalidad tienen lugar los acontecimientos y los desarrollos de los que nos ocuparemos en las páginas que siguen.

31.2. LA PRESIDENCIA DE NIXON Y LA DISTENSIÓN

El presidente que ganó las elecciones de noviembre de 1968 –Richard Nixon– no era ciertamente un hombre nuevo en el escenario político norteamericano. En realidad había colaborado en su tiempo con el comité de McCarthy y había desempeñado un papel no secundario en el asunto Alger Hiss (véase cap. 22). Derrotado con mucho por Kennedy en las elecciones de 1960, no dio su brazo a torcer y ahora tenía su revancha. Sus convicciones políticas continuaban siendo las de un convencido opositor a todo aquello que fuera «liberal-aborto», medidas dirigidas a promover la integración racial en las escuelas (*busing*) o a favorecer la integración en el trabajo de las mujeres y de individuos pertenecientes a minorías (*affirmative action*). Pero a éstas se les unía una notable capacidad de análisis y un «pragmatismo político» (Gaddis, 1990) que tenía algo más y distinto a la despreocupación picaresca que le echaban en cara sus adversarios.

Su colaborador principal, bajo el cargo de consejero de la seguridad nacional y desde 1973 secretario de estado, fue Henry Kissinger, un judío alemán que se había trasladado en Estados Unidos en 1938, profesor en Harvard desde 1962 y admirador de Metternich, un personaje con el que había coincidido durante la preparación de su estudio sobre la *Diplomacia de la Res-*

tauración que publicó en 1957. Hasta qué punto esta experiencia académica influyó en sus concepciones políticas y si efectivamente vio en el «concierto» existente entre las grandes potencias durante el siglo XIX un modelo de relaciones internacionales válido para el presente, es una cuestión que ha dado lugar a interpretaciones distintas y que por otra parte no es especialmente relevante. Lo que de todas formas es cierto es que Kissinger se daba perfecta cuenta de que una aproximación global a los problemas internacionales, como había sido la de Kennedy, pertenecía ya al pasado y que ahora se trataba de un mundo «multipolar» en el que, si las dos superpotencias mantenían una aplastante supremacía militar, había que contar con la presencia y la influencia de otros sujetos políticos –la Comunidad Europea, Japón, China. Pero desde el momento en que en un mundo de estas características el sistema de las relaciones internacionales continuaba siendo a pesar de todo interdependiente, se derivaba que, haciendo el debido uso de las artes diplomáticas y compensando las concesiones que se hacían en una mesa de negociaciones con las ventajas que se conseguían en otra, era posible debilitar la Unión Soviética, que continuaba siendo el principal interlocutor, y asegurar así el equilibrio de las relaciones internacionales. En esto consistía la teoría del *linkage* en la que Kissinger se inspiraba. Pero en la enredada madeja del contencioso internacional había cuestiones que constituían, por su urgencia y por su incidencia en la opinión pública nacional e internacional, prioridades ineludibles. Era el caso de la guerra en Vietnam y sobre ella, de hecho, se concentraron la atención y el activismo de la nueva administración.

Nixon se daba cuenta de que una solución victoriosa del conflicto vietnamita ya no era posible dada la situación en el terreno, pero tampoco estaba dispuesto a pasar a la historia como el único presidente norteamericano que hubiera perdido una guerra. El objetivo que perseguía era por lo tanto el de una solución honorable para ambas partes y el método para conseguirlo, tal como expuso en el discurso que pronunció en Guam el 25 de julio de 1969, era el de la «vietnamización» del conflicto. Básicamente se trataba de efectuar una retirada gradual del cuerpo de expedición norteamericano, de reforzar las capacidades de combate del ejército survietnamita y de mantener la presencia de las fuerzas aéreas norteamericanas para proteger a este último. Mientras, las negociaciones iniciadas en París continuarían su curso. En general se respetó este programa. A comienzos de junio de 1969 se procedió a la retirada progresiva de efectivos del Vietnam hasta reducir el cuerpo de expedición de los 543.000 de 1969 a sólo 25.000 en 1972. Pero mientras tanto continuaban, con algunas treguas, los bombardeos aéreos no sólo en Vietnam del Norte, sino también sobre los «santuarios» vietnamitas en Camboya, donde en marzo de 1970 un golpe de estado dirigido por los norteamericanos destronó al rey Norodom Sihanouk y lo sustituyó con su primer ministro Lon Nol. Los bombardeos se extendieron hasta Laos a tra-

vés del cual se suponía que pasaba el «sendero de Ho Chi Minh». En marzo de 1972 los norteamericanos efectuaron una nueva serie de bombardeos intensos en el Norte y después minaron el puerto de Haiphong en respuesta a una nueva ofensiva vietnamita. En París, mientras, se prolongaban sin resultado las negociaciones entre las delegaciones oficiales de las distintas partes interesadas, y a partir de enero de 1970 se iniciaron contactos secretos entre Kissinger y el representante norvietnamita Le Duc To. Tras laboriosas y agotadoras discusiones, en octubre de 1972 llegaron a un mutuo acuerdo cuyos puntos principales consistían en renunciar por parte norvietnamita a pedir la dimisión del premier Thieu y la formación de un gobierno de coalición, y por parte norteamericana en la retirada de las tropas norvietnamitas del sur del país. Pero pasaron varios meses, durante los cuales nuevas rondas de negociaciones se alternaron, en una secuencia convulsa, con nuevos ataques de combate y bombardeos, antes de que, el 27 de enero de 1973, se firmaran formalmente los acuerdos. Lo que Nixon definió como «una paz con honor» era en realidad una victoria de los comunistas norvietnamitas. De hecho, la reunificación del país bajo su dirección sólo se había retrasado, como veremos, dos años. A esta reunificación no pudo asistir el que había sido su principal artífice: Ho Chi Minh había muerto el 2 de septiembre de 1969.

Las negociaciones que llevaron al fin de la guerra de Vietnam sólo son una parte de la compleja y sofisticada acción diplomática que la administración Nixon llevó a cabo entre 1969 y 1972. La idea guía en la que se basó era la de aprovechar y volver en su favor el deterioro cada vez manifiesto de las relaciones entre la Unión Soviética y China, que alcanzó el cenit con los incidentes de frontera en el río Ussuri en marzo de 1969. Según la opinión del nuevo consejero de seguridad «la hostilidad entre China y la Unión Soviética es más útil para nuestros objetivos si mantenemos con cada una de ellas relaciones más estrechas de cuanto ambos países mantengan entre sí». A partir de este análisis se fue desarrollando la iniciativa diplomática del tándem Nixon-Kissinger. El primer movimiento se hizo en dirección a Pekín, acogiendo en abril de 1971 la invitación dirigida a la representación norteamericana de tenis de mesa a jugar con la china en Pekín. A esta insólita «diplomacia del ping pong» no tardó en seguirla la auténtica: el 15 de julio de 1971 Washington y Pekín daban a conocer la noticia de que entre el 9 y el 11 del mismo mes Kissinger había efectuado una visita a China durante la cual se había reunido con Zhou Enlai y se habían puesto las bases para una visita de Nixon a China prevista para mayo de 1972. La sorpresa fue aún mayor no sólo porque la iniciativa se había mantenido estrictamente en secreto, sino sobre todo porque entre China y Estados Unidos no existían relaciones diplomáticas regulares desde el momento en que Estados Unidos continuaba sin reconocer el gobierno de Pekín. Incluso cuando en octubre

de 1971 la cuestión china se debatió por enésima vez en la ONU, el representante norteamericano, el futuro presidente George Bush, no se unió al voto ampliamente mayoritario (76 votos contra 35) con el que la asamblea se pronunció no sólo a favor de la admisión de China en la ONU, sino también de que se le restituyera un puesto en el consejo de seguridad, a consecuencia de lo cual Taiwan quedaba expulsado. No será hasta 1978 que Estados Unidos reconocerá formalmente la República Popular China. De todos modos estaba claro que esta resistencia no era sino un combate de retaguardia y que incluso la anunciada visita de Nixon a Pekín equivalía a un reconocimiento *de facto*. Dicha visita se efectuó entre los días 21 y 28 de febrero de 1972 y concluyó con un comunicado que confirmaba el abandono definitivo por parte estadounidense, que había sido el principal partidario desde los tiempos de la guerra de Corea, de la llamada teoría de las «dos Chinas» y el compromiso por ambas partes a «oponerse a cualquier tentativa que perpetrara una tercera potencia para consolidar la propia hegemonía en el área del Pacífico». La «tercera potencia» a la que se refería este punto del comunicado era evidentemente la Unión Soviética y no hay que sorprenderse si el acercamiento chino-norteamericano suscitó en Moscú preocupación y alarma. En Washington estaban al corriente de ello, pero al mismo tiempo estaban ocupados en tranquilizar a la Unión Soviética.

En enero de 1967 el presidente Johnson había lanzado la idea de un tratado para la limitación de las armas estratégicas (SALT) y desde junio de 1969 tenían lugar en Helsinki negociaciones entre expertos norteamericanos y soviéticos que se alargaban sin llegar a resultados concretos. La impresión que produjeron en la opinión pública occidental los hechos ocurridos en Checoslovaquia en agosto de 1968 (véase cap. 28) era demasiado reciente para que pudiera ignorarse. Desbloquear las negociaciones llevó su tiempo, per al fin ocurrió. A una visita secreta de Kissinger a Moscú en abril de 1972 siguió en mayo una visita oficial de Nixon que terminó con la firma del tratado SALT. Con dicho tratado ambas partes se comprometían a mantener en el transcurso de los cinco años siguientes (después de los cuales el tratado sería sometido a revisión) sus sistemas de armamento dentro de determinados límites: para los vectores de misiles balísticos intercontinentales las cuotas se fijaron en 1.054 para Estados Unidos y 1.618 para la Unión Soviética; para los misiles en dotación a los submarinos en 656 y 740 respectivamente, y para los bombarderos estratégicos en 455 y 140. Además estaba previsto limitar a dos los sistemas de defensa antimisiles (ABM) que las dos superpotencias tenían autorización para construir. Si es cierto que no se trataba de una limitación ni de una interrupción en la carrera de rearme, sino sólo de una reglamentación, también lo era el hecho de que el tratado SALT era el primer acuerdo que se refería a la delicada cuestión de la carrera de rearme y que, como tal, tenía el valor político de una innovación.

Además, la cumbre de Moscú en mayo de 1972 hizo una declaración solemne «sobre los principios fundamentales de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética» en la que recurría a la fórmula de la «coexistencia pacífica» que, como hemos visto, era muy apreciada por los políticos y los militares soviéticos y que finalmente impulsó a las relaciones comerciales entre los dos países y dio paso a la proposición que se presentó en octubre de 1972 de conceder a la URSS la cláusula de la nación más favorecida, que se había suspendido en 1951.

De este modo iba perfilándose, tras estas iniciativas estadounidenses, un nuevo orden en las relaciones internacionales, que habían dejado de ser bipolares y se basaban ahora en un «concierto» entre las grandes potencias del que cada una de ellas obtenía ventajas y seguros. China recuperaba su escaño en el Consejo de Seguridad y entraba con la cabeza bien alta en la comunidad internacional; la Unión Soviética, transcurridos sólo tres años desde la represión de la primavera de Praga, recibía una nueva garantía acerca del *status quo* en Europa y veía cada vez más próximo el objetivo de «paridad estratégica» que perseguía; y por último Estados Unidos conseguía no sólo librarse de la intrincada contienda de Vietnam, sino que además conservaba su influencia y su libertad de movimiento en Oriente Medio y en Latinoamérica. Como se ha visto en el caso de Chile, y como veremos en otras circunstancias, no olvidaron hacer uso de ellas. Por eso Nixon estaba completamente equivocado cuando consideraba satisfactoria la solución que se dio al problema vietnamita.

Así, a la cita de las elecciones presidenciales de noviembre de 1972 la administración Nixon se presentaba con un muy buenos resultados: los *boys* de Vietnam de regreso a casa, la inflación y la desempleo estaban disminuyendo a raíz de las decisiones de agosto de 1971 y las relaciones con la URSS y China se habían regularizado de tal manera que hacían suponer que la estabilidad y la paz estaban aseguradas durante largo tiempo. El resultado de las urnas confirmó ampliamente las previsiones de la vigilia: Nixon prevaleció netamente sobre su antagonista demócrata, el senador MacGovern, con una mayoría del 61 % asegurándose la victoria en todos los estados, con la única excepción del dominio demócrata de Massachusetts.

A esta reelección triunfal no siguió por otro lado un segundo mandato presidencial tranquilo. Mientras en Vietnam continuaban los combates cuyo final a favor de los norvietnamitas parecía cada día más probable, otro foco de tensión se fraguaba en la zona de riesgo de Oriente Medio, donde en octubre de 1973 daba lugar a un nuevo conflicto entre los estados árabes e Israel –la llamada guerra del *Yom Kippur*– que, como veremos, implicó a la diplomacia norteamericana en una difícil tarea mediadora. El golpe más grave para el presidente recién reelegido y para su equipo de colaboradores no fue sin embargo a causa de la situación internacional sino que fue asestado desde el interior del país.

El 17 de junio de 1972 fueron arrestados cinco hombres –los llamados «fontaneros» (*plumbers*)– que durante la campaña electoral se habían introducido de noche en el palacio del Watergate, sede del cuartel general del Partido Demócrata, con el propósito de instalar micrófonos-espía. Gracias a la campaña de prensa cada vez más tenaz que promovía el periódico *Washington Post*, quedó claro que no sólo los *plumbers* habían actuado bajo las órdenes de la Casa Blanca, sino que ésta última, una vez se había descubierto, había hecho lo imposible para obstaculizar el curso de la justicia. En julio de 1973 el procurador Cox conminó a Nixon a entregarle las grabaciones de las conversaciones con sus colaboradores. Por toda respuesta el Presidente lo cesó de su cargo. A partir de este momento llegaban cada vez de más partes las peticiones de posición (*impeachment*). Así pues, en abril de 1974 Nixon se vio obligado a entregar a la magistratura las grabaciones de las conversaciones con sus colaboradores. Éstas revelaron un tejemaneje de llamadas telefónicas interceptadas, de vulgaridades y de mentiras. La oleada de indignación que había ido creciendo cada vez más alcanzó tales dimensiones que el 9 de agosto de 1974 el presidente se vio obligado a dimitir para evitar un *impeachment* inminente. No se trataba de un tropiezo en el camino. El escándalo del Watergate era en realidad fruto de la concepción «imperial» que Nixon tenía desde su despacho y de la gestión autoritaria y personalista con la que él y sus colaboradores habían llevado los asuntos de estado, a menudo ocultando sus iniciativas al Departamento de Estado y al Congreso. Éste había sido el caso de la decisión que se tomó en marzo de extender los bombardeos sobre Camboya así como la de iniciar en 1970 las negociaciones secretas que se desarrollaron en París entre Kissinger y Le Duc To, sin que ni siquiera se hubiera informado al embajador norteamericano en la capital francesa.

El senador republicano de Michigan, Gerald Ford, fue quien sucedió a Nixon, desde el momento en que, para colmo del escándalo, también el vicepresidente Spiro Agnew se había visto obligado anteriormente, en octubre de 1973, a dimitir por estar implicado en un asunto de corrupción. El nuevo presidente no gozaba del mismo favor que su predecesor y además tenía que enfrentarse a un Congreso decidido a tomarse la revancha de las humillaciones sufridas. Fue por iniciativa suya, por ejemplo, que el reconocimiento de la cláusula de nación más favorecida a la URSS se subordinara a la liberación por parte de ésta última de la emigración judía hacia Israel. Los dos años de la presidencia Ford transcurrieron, por consiguiente, sin grandes novedades en el campo de la política exterior. El borrador del tratado SALT II, elaborado en el transcurso de la cumbre de 1974 en Vladivostok, deberá esperar cinco años para que se le dé la forma definitiva. El acontecimiento de este bienio que más impacto causó en la opinión pública norteamericana y mundial fue desde luego el fin de la guerra de Vietnam en abril

de 1975, con la entrada victoriosa de las tropas norvietnamitas en Saigón. Las imágenes del embajador norteamericano obligado a abandonar la ca pital survietnamita llevando consigo la bandera de barras y estrellas doblada y los altercados alrededor de los últimos helicópteros saliendo de Danag, reabrían heridas que por otro lado nunca se habían cicatrizado del todo y aumentaban la sensación de desconfianza de buena parte de la opinión pública hacia toda la clase política.

31.3. LA PRESIDENCIA DE CARTER

En las elecciones de noviembre de 1976 el porcentaje de votantes, que fue del 52%, conoció en efecto un ulterior descenso respecto al ya bajo de 1972. La victoria del demócrata James Carter, que superó con mucho a Ford, se debió también al hecho de que fuera un *outsider* hasta entonces poco conocido fuera de los límites de Georgia, en donde había sido gobernador. La tarea que ahora le esperaba no estaba exenta de dificultades.

El ritmo del ciclo económico que, después del despegue expansivo seguido de la devaluación del dólar se había resentido de los efectos negativos de la crisis petrolífera, experimentó entre los años 1975-1979 una fase de recuperación.

Si bien por una parte se habían superado las dificultades coyunturales, por otra continuaban las de naturaleza estructural vinculadas al proceso general de reconversión económica y social en el que se encontraba la sociedad norteamericana, y a las alteraciones y los desequilibrios que ello comportaba. Si en el Norte, en lo que se dará en llamar «cinturón de óxido» (*Rust belt*), se estaba experimentando un deterioro gradual de las zonas de vieja industrialización, nuevas industrias punteras y de alta tecnología se estaban desarrollando en el Sur y en el Oeste, en el llamado «cinturón del sol» (*Sun belt*). Si disminuía la ocupación en el sector secundario, se registraba en cambio un fuerte incremento en el terciario, con la creación entre 1973 y 1983 de trece millones de nuevos puestos de trabajo que en buena parte los cubrieron las mujeres. Si el nivel de vida medio se mantenía estable, aumentaban las diferencias entre las rentas del trabajo cualificado y las del trabajo no cualificado, o las de los parados. Los ciudadanos norteamericanos que se beneficiaban del programa de ayudas para familias necesitadas pasaron en efecto de los 3 millones de 1950 a los 11 de 1980. Estos constituían la que con un término de nueva cuña se llamó la *underclass*. Una sociedad, pues, repleta de desigualdades y de contradicciones que puntualmente se reflejaban en el hábito y en los comportamientos colectivos. En tanto que millones de norteamericanos se dedicaban al cuidado del propio cuerpo mediante la práctica del *fitness* o del *jogging*, había otros muchos que buscaban en la dro-

ga una vía de escape a las frustraciones de una cotidianidad mortificadora. Una sociedad atravesada por la búsqueda de nuevos estímulos y valores religiosos y a la vez violenta; es más, a menudo ambas cosas coincidían, como en el caso del suicidio de masas perpetrado en 1978 por los seguidores del *People's Temple* en Guyana. Y por último quedaba aún la herida sin cicatrizar de Vietnam, de la cual eran testimonio los supervivientes acogidos con indiferencia por el país por el cual habían luchado. No era, pues, una tarea fácil la que esperaba a la nueva administración demócrata.

En tiempos de inflación creciente, alimentada en parte por el encarecimiento del petróleo, las tradicionales recetas keynesianas tan apreciadas por los demócratas difícilmente podían funcionar. La administración incluso se vio obligada a subir la tasa de interés hasta rayar el 15 % y tuvo que tomar buena nota de la revuelta de la *middle class* contra el aumento de la carga fiscal, después de que en dos referendos celebrados en California en el transcurso de 1978 los electores aprobaran con amplia mayoría la *Proposition 13* que reducía la tasación sobre las propiedades. Una acogida igualmente desfavorable recibían las medidas adoptadas para el desarrollo posterior de la Welfare, como la práctica del *busing* y de la *affirmative action*, un conjunto de disposiciones con el fin de procurar un mayor grado de igualdad de trato entre los dos sexos y entre las distintas etnias. Tampoco el *Equal Rights Amendment* (ERA), que descartaba cualquier discriminación basada en el sexo, consiguió obtener la aprobación del suficiente número de estados para que pudiera hacerse operativo. Viéndose obligada a renunciar a la propia política y a hacer concesiones continuamente a sus opositores, la administración en cargo fue perdiendo gradualmente el apoyo popular que había tenido hasta entonces el Partido Demócrata. A la cita electoral de 1980, la administración no podía sino llegar muy desgastada.

Si Norteamérica era difícilmente gobernable, el mundo todavía más. Focos de tensión y de conflictividad estaban latentes o se habían abierto un poco por todas partes: en el eterno Oriente Medio; en Chipre, donde en 1975 los militares turcos habían ocupado la parte norte de la isla; en el Cuerno de África, donde en 1974 el emperador Haile Selassie había sido destituido y había enfrentamientos entre somalíes y etíopes, estos últimos bajo el apoyo soviético; en Angola y en Mozambique, donde movimientos de liberación apoyados por la Unión Soviética –y a partir de 1975 por un contingente cubano de 23.000 hombres en Angola– luchaban contra el dominio colonial portugués; en la frontera indo-pakistaní; en Camboya, donde en abril de 1975 se había instaurado el régimen sanguinario de los Jemeres rojos. La brújula a la que la administración Carter se confió para la difícil navegación por este mar agitado fue la de los «derechos humanos». El nombramiento de un colaborador de Martin Luther King, Andrew Young, como representante norteamericano en la ONU, quiso ser una señal en esta dirección. Ello

comportaba la revisión de las orientaciones que habían prevalecido durante la presidencia Nixon en una serie de regiones y de países. Los países con regímenes dictatoriales de América del Sur vieron reducirse, así, la cuota de ayudas norteamericanas, y con Panamá se firmó en septiembre de 1977 un acuerdo según el cual los Estados Unidos se comprometían a restituir la soberanía en el canal al final del año 2000. En África, si la administración de Carter por un lado se opuso a la penetración soviética por del Cuerno de África, en Angola y en Mozambique, por otro lado, se opuso también a los regímenes racistas de Sudáfrica y de Rhodesia, en relación a los cuales se adoptaron medidas de sanción económica. El objetivo que se perseguía en Oriente Medio era también el de contener y restringir el área de influencia soviética y en este contexto se colocan los acuerdos firmados en Camp David en septiembre de 1978 entre Israel y Egipto (véase cap. 35) que representaron un éxito indudable para la administración Carter.

En la concepción de Andrew Young o del secretario de estado Cyrus Vance el concepto de derechos humanos estaba pensado sobre todo en función de los países del Tercer Mundo, y se refería en esencia a los derechos primarios de la comida, la casa, la educación y la salud. En la del nuevo consejero para la seguridad, Zbigniew Brzezinsky, de origen polaco, dicho concepto estaba pensado básicamente en función de Europa y por consiguiente afectaba al ámbito de los derechos civiles como la libertad de movimiento y de expresión e incluía a aquellos países, esencialmente los del bloque soviético, en los que tales derechos fueran limitados o se violaran. Fue, como veremos, esta concepción de los derechos humanos la que se codificó en la conferencia de Helsinki de 1975, que instituyó la CSCE y a ésta se remitió el presidente Carter cuando en febrero de 1977 dirigió una carta abierta al disidente soviético Andrei Sajarov.

Evidentemente se trataba de un acercamiento distinto al privado de ideología y estrictamente diplomático que Kissinger había adoptado en las relaciones con la Unión Soviética, y esto incidió en el curso de las negociaciones iniciadas sobre el tema del control de los armamentos, haciéndolas más difíciles y más laboriosas. Pero hay que añadir, como veremos en el próximo capítulo, que el bando soviético contribuyó en buena parte a aumentar estas dificultades, con su rigidez y su determinación de intervenir, también militarmente, dondequiera que se presentara la ocasión de consolidar su papel de «gran potencia», en el Cuerno de África, en Angola, en Mozambique o en Afganistán.

En junio de 1979 se firmó el tratado SALT II, que introducía nuevas limitaciones en el armamento de las dos superpotencias. Pero dicho tratado ya no tenía sentido en una situación gravemente comprometida. Durante la segunda mitad del año, efectivamente, los hechos lo demostraron: en Irán, convertido en una «república islámica» tras la revolución jomeinista (véase

cap. 35), en noviembre, estudiantes fundamentalistas ocuparon la embajada americana en Teherán clamando contra el «Gran Satanás» que eran los Estados Unidos de América. La tentativa de recuperar el control y de evacuar a los rehenes que se efectuó en abril de 1980 con un despliegue de helicópteros acabó en un estrepitoso fracaso. En diciembre tenía comienzo la invasión soviética de Afganistán, motivada por la necesidad de prevenir un derrocamiento del gobierno revolucionario y filomarxista que se había instalado en el poder desde 1978. Un área geográfica entera –el llamado arco de la crisis– se unía de este modo a la lista de las zonas de riesgo del mundo. Mientras, en Europa cada vez alcanzaba proporciones mayores la controversia, sobre la que ya tendremos ocasión de volver, producida por la instalación soviética de los misiles de guerra SS20. La administración Carter, que anteriormente había renunciado al proyecto de construcción de una bomba de neutrón, y los países de la OTAN se dispusieron a actuar: en diciembre de 1979 el consejo de ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de la Alianza Atlántica reunido en Guadalupe, decidía desplegar a lo largo de 1983 en Europa 108 misiles Pershing y 464 Cruise en contraposición a los SS 20 instalados en los países del Pacto de Varsovia, a la vez que se declaraba dispuesto a abrir nuevas negociaciones para la reducción del arsenal de misiles en Europa. En enero de 1980 Carter solicitó al Senado que no se procediera a la ratificación del tratado SALT II, bloqueó la venta de tecnologías avanzadas a la URSS y anunció que Estados Unidos no participaría en las olimpiadas de Moscú. Mientras tanto se concedían ayudas cada vez más considerables a los muyaidines afganos que luchaban en la resistencia contra la invasión soviética. Hubo, por tanto, reacción, pero muchos la consideraron tardía. Si la década se había abierto con una perspectiva de distensión y de paz, se cerraba ahora con una recaída en la guerra fría. La sensación de desorientación y de desilusión que de ello se derivaba no constituía desde luego un buen viático para la inminente campaña electoral.

32

Los países del socialismo real

32.1. LA UNIÓN SOVIÉTICA

En 1970 el disidente soviético Andrei Amalrik publicó en Estados Unidos un libro que, citando el título de un famoso escrito de Orwell, se titulaba *¿Sobrevivirá la unión Soviética hasta 1984?* Por supuesto no eran muchos los que en la primera mitad de los años 70 estaban dispuestos a aceptar la apuesta que sugería Amalrik, es decir que la Unión Soviética no habría sobrevivido a 1984. Parecía en efecto una realidad consolidada y plenamente integrada en la urdimbre de las relaciones internacionales.

Sus relaciones con Estados Unidos se habían regularizado recientemente con el tratado SALT I sobre la base del principio de igualdad estratégica que tanto le interesaba y los vínculos que mantenía con la mayor potencia europea, Alemania, también lo habían hecho con el tratado que se estipuló en Moscú en agosto de 1970 con ocasión de la visita del nuevo ministro de Asuntos Exteriores alemán, Willy Brandt, en la capital soviética. Dicho tratado preveía el reconocimiento de los límites establecidos al término de la segunda guerra mundial, incluidos los de Polonia, con la cual la RFA en diciembre de 1970 firmó un tratado, y los de la RDA, con la cual en diciembre de 1972 ésta estipuló otro acuerdo reconociendo así su existencia y como consecuencia de ello renunciando a la doctrina Hallstein (véase cap. 22). Por último, en septiembre de 1971 se estipuló entre las potencias ocupantes un acuerdo cuatripartito sobre el *status* de la ciudad de Berlín. El tratado germano-soviético de 1970 preveía además el compromiso de las dos partes de trabajar para la convocatoria de una conferencia para la seguridad y la cooperación en Europa. Esta última, tras arduas negociaciones, inició sus actividades en noviembre de 1972 con la participación de todos los estados europeos –con la única excepción de Albania–, de Estados Unidos y de Ca-

nadá, y concluyó en 1975 en Helsinki con la aprobación de un acto final articulado en tres «cestas»: la primera, la política, reafirmaba el principio de la intangibilidad de los límites europeos, la segunda preveía una serie de medidas, entre ellas la de la máxima extensión del principio de la nación más favorecida, en beneficio de la cooperación económica europea, y la tercera confirmaba en el cuadro de la cooperación cultural el compromiso, por parte de todos los firmantes, de respetar los derechos humanos. Este último punto fue aceptado de mala gana por la Unión Soviética y, como veremos, *pour cause*, pero el reconocimiento de la RDA y la estabilización de los límites europeos, un objetivo histórico de la diplomacia soviética, compensaban (o parecían compensar) ampliamente esta concesión y constituían para ella un indudable éxito. En el resto del mundo, si la Unión Soviética había perdido su influencia en Egipto, de donde en julio de 1972 se expulsó a sus consejeros militares, en el transcurso de la década se irá extendiendo en el Cuerno de África y en las colonias portuguesas. Barcos con el emblema de la hoz y el martillo cruzaban el Mediterráneo, el océano Índico y el Atlántico. Comparada con la de Estados Unidos en lo referente a la crisis Watergate y de la guerra de Vietnam, la posición de la URSS en el sistema de las relaciones internacionales parecía en general reforzada.

También la crisis petrolífera contribuiría más tarde a consolidarla y reforzarla. El despegue de los precios del petróleo y del gas natural, de los que la Unión Soviética era uno de los mayores productores mundiales, hizo más remunerativas sus exportaciones masivas y como consecuencia pudo obtener recursos que le permitían no sólo pagar las ya crónicas exportaciones de grano de los países occidentales, sino también invertir en el interior del país y favorecer, así, el aumento del consumo. Si bien el nivel de vida de los ciudadanos soviéticos continuaba siendo netamente inferior no sólo al de los países occidentales sino también al de algunos países satélite, la tendencia a la mejora que, como hemos visto, se había perfilado durante los años sesenta continuó también en la primera mitad de la década siguiente. A pesar de que la meta del comunismo parecía cada vez más inalcanzable, el objetivo del «socialismo desarrollado» o «socialismo maduro» se había conseguido. Y era esto en lo que se apoyaban la doctrina y la propaganda oficial.

Un grupo dirigente dotado de alguna capacidad de iniciativa quizá habría podido aprovechar la oportunidad de esta coyuntura favorable y pasajera para poner en marcha alguna reforma del sistema económico y político. Pero este no era el caso de los hombres que entonces estaban en el poder en la Unión Soviética: a su cabeza tenían un personaje –Leonid Brezhnev– cuya principal característica era la mediocridad, y con el paso de los años y el avance de la enfermedad que padecía era cada vez menos capaz de ejercer sus funciones. Pero no por ello consintió en ceder una parte de su poder, sino que por el contrario, cuando en 1977 se aprobó una nueva constitución,

aprovechó la ocasión, como había hecho en su tiempo Kruschev, para acumular en su persona los cargos de secretario del partido y de cabeza de estado, cesando de este último cargo a Nikolai Podgorny. Ni supo ni quiso renunciar a las gratificaciones de un culto también mediocre a su persona publicando un volumen de memorias en las que se atribuía discutibles méritos militares y promoviendo su difusión dentro y fuera del país.

Sus colaboradores era todos coetáneos suyos. La media de edad de los miembros del *Politburó* en 1980 era de 69 años. Sobretodo compartían con su líder la misma formación política y la misma mentalidad. Esto se hacía extensivo a los miembros del Comité Central, compuesto en gran parte por secretarios de *obkom*, y del aparato central. Si se presentaba en la escena algún elemento incómodo, se apresuraban a librarse de él. Es el caso de Alexander Yakovlev, subjefe del sector propagandístico del Comité Central, que en 1972 fue destituido y nombrado embajador en Canadá. Excepciones aparte, la rotación dentro de la *nomenklatura* era muy limitada. La regla era la estabilidad, o incluso la inamovilidad. De un grupo dirigente con estas características no podían esperarse, obviamente, innovaciones y, en efecto, no las hubo, bajo ningún punto de vista, empezando por el institucional. La nueva Constitución aprobada en 1977 definía la URSS como un estado de «todo el pueblo», pero el papel dirigente del Partido Comunista no solo se corroboraba, sino que quedaba reforzado y más explícito con respecto a la constitución de 1936. El titular de esta función dirigente era un organismo mastodóntico (en 1981 llegó a más de 17 millones de afiliados), pero falto de cualquier vitalidad política y escasamente motivado. Los congresos que se celebraron en 1971, 1976 y 1981 no fueron más que «exhibiciones triunfalistas» (Boffa, 1995, p.103). Las tareas de la dirección política resultaban de este modo concentradas en el *Politburó*, un organismo de quince miembros efectivos y seis suplentes. La presencia como miembro permanente del ministro de Defensa, el mariscal Greckho, constituyó un hecho nuevo e importante. De este modo se producía una soldadura entre las cumbres políticas y las cumbres militares que tendría sus efectos no sólo en lo concerniente a las elecciones en cuestión de política exterior, sino también en las de política interna y en las propias orientaciones de la planificación.

Una evidencia de ello es que durante los años 70 los criterios para la asignación de los recursos en el ámbito del plan se modificaron en beneficio de los sectores hasta entonces desfavorecidos de la industria productora de bienes de consumo y de la agricultura. Ésta última en particular se benefició de una cuota del 27 % sobre el total de las inversiones, una cifra muy superior a las asignadas anteriormente, y ello permitió obtener algún resultado. El producto bruto agrícola de 1980 superaba el 21 % del de la media de los años 1966-1970. A pesar de esto la URSS tuvo que continuar impor-

tando grano y a finales de la década los abastecimientos en las ciudades se hicieron más difíciles hasta obligar al gobierno a poner en marcha en 1982 un «plan alimentario» con escasos resultados. También los incrementos de producción que se registraron en la industria productora de bienes de consumo permanecieron por debajo de los registrados en la industria productora de bienes capitales. Esto, por otra parte, no es de extrañar si se tiene en cuenta que en la tentativa de estar a la altura con Estados Unidos en la carrera de armamento, el presupuesto militar, una parte considerable del cual se destinó a potenciar la flota –hasta entonces la hermana pobre de las fuerzas armadas soviéticas– no dejó nunca de aumentar. Se puede calcular aproximadamente que la asignación para armamento absorbió una cuota del producto interior bruto equivalente al doble de la que Estados Unidos destinaba al mismo fin. El Estado Mayor elaboró un proyecto de congelación entre 1975 y 1976 que el ministro de Defensa desestimó. También la Unión Soviética tenía, pues, su «complejo militar-industrial», cuya importancia e influencia no se medían únicamente en términos cuantitativos, de asignación de recursos o de cuotas de producción, sino ante todo cualitativos. El sector de la industria armamentística era efectivamente el más avanzado tecnológicamente y, como tal, habría podido desempeñar la función de empuje de todo el aparato productivo. Pero dicho sector estaba también protegido por una concepción obsesiva del secreto militar. A consecuencia de ello, y a diferencia de lo que ocurría en países industrializados de Occidente, las repercusiones en sectores productivos no relacionados con la producción de armamento eran muy limitadas. Así se explica que la tentativa de aplicar a todo el sector industrial los métodos de una planificación racional basada en las tecnologías de vanguardia acabara fracasando. ¿Cómo hubiera sido posible esta aclamada «revolución técnico-científica» en un país en el que incluso los *walky-talky* y las fotocopiadoras se consideraban sospechosos y en el que no había listines telefónicos? La falta de innovación tecnológica se paliaba con una explotación intensiva de los recursos y de las maquinarias disponibles, hasta límites irracionales. El desastre ecológico del mar de Aral, consecuencia de la explotación intensiva del cultivo del algodón en Uzbekistán, representa el testimonio más evidente y dramático de los daños que comportaba un enfoque semejante de los problemas de la producción.

En este cuadro de estancamiento y de inmovilismo, el fenómeno del desacuerdo adquiría gradualmente mayor consistencia e incidencia. Su manifestación más palpable es la de la emigración masiva de soviéticos pertenecientes a la minoría judía. Se calcula que en los años de Breznev doscientos cincuenta mil miembros de dicha comunidad abandonaron el país para trasladarse a Israel o América, aprovechando de la oportunidad que se les había concedido por la aceptación soviética de la enmienda Jackson (véase cap. 31).

Con los judíos la Unión Soviética perdía un capital humano preciosos, de técnicos, profesionales, de artistas. A los que tenían perdidas de antemano las posibilidades de inmigrar o que las rechazaban, el compromiso que la Unión Soviética había contraído en Helsinki de respetar los derechos humanos, les procuraba un punto de referencia y un argumento válido con relación a los poderes constituidos. La evolución política del exponente más inminente del desacuerdo soviético, el académico Andrei Sajarov, es significativa a este respecto. Si en 1971 dirigiendo personalmente a Brezhnev un memorándum en el que, recuperando y desarrollando las ideas expuestas en su opúsculo de 1968 (véase cap. 28), proponía la institución de un «concilio internacional de expertos en problemas de paz, del desarme, de la ayuda económica a los países necesitados, de los derechos humanos y de la protección del medio ambiente», demostraba albergar todavía la esperanza en una reforma desde lo alto, fue asumiendo posiciones contestatarias cada vez más radicales. La reacción del *establishment* a las iniciativas de los disidentes fue a lo largo de la década un *crescendo* de medidas represivas. Tras el exilio de Solzhenitsyn en 1974 siguieron en 1978 los procesos del físico Orlov, de Anatoli Sharansky, de Alexandr Ginsburg y del general Grigorienko, culpable de haber patrocinado la causa de los tártaros de Crimea, por limitarnos a los episodios más importantes. La represión, por otra parte, no se limitó a los que abiertamente hacían profesión de su desacuerdo, sino que se extendió también a cualquier manifestación de pensamiento que no se considerara en la línea. Este fue, entre muchos, el caso de Aleksandr Tvardoskiy, al que se alejó de la dirección de la revista *Novyj Mir* porque su orientación no contaba con la aprobación de las autoridades constituidas.

El fenómeno del desacuerdo alcanzó proporciones relevantes (de forma aproximada las personas implicadas se han calculado en medio millón), pero no hay que sobrestimar la relevancia y el impacto que tuvo. Además de quedar reducido a una minoría, dicho fenómeno presentaba orientaciones muy dispersas. Entre las posiciones filooccidentales de un Sajarov y de los que se remitían a los derechos humanos aprobados en el acuerdo de Helsinki y las posiciones paneslavas de un Solzenitsyn, no sólo había una gran distancia, sino una absoluta incompatibilidad. La mayor insidia para la Unión Soviética estaba en otro sitio y era mucho más potente. Ésta arremetía contra la estructura e incluso la propia identidad del país.

Me refiero a la composición étnica de la Unión Soviética y a las modificaciones que en ella tuvieron lugar durante décadas a favor de las nacionalidades no rusas. Entre 1959 y 1979 la población rusa, según los datos de los censos, había bajado del 55 % al 52 % de la población total. Lo que más cuenta es que también la composición de los grupos dirigentes en las distintas repúblicas de la URSS había ido modificándose a favor de la etnia local. Si los cargos de comandante de las guarniciones locales, de responsable de la

seguridad y de segundo secretario del partido continuaban siendo prerrogativa de los ciudadanos rusos, los demás cargos, incluido el de primer secretario del partido, salvo contadas excepciones, los cubrían elementos locales que gobernaban con la ayuda de una élite intelectual que también era indígena. En el centro, en cambio, los altos cargos del partido y del estado los ocupaban rusos o ucranianos, la única nacionalidad admitida para participar en la dirección del estado. Es evidente que una situación así a la larga provocaría tensiones y que éstas podían degenerar en episodios de abierta conflictividad. Es lo que sucedió en 1978 en Tbilisi en Georgia, cuando las protestas populares y la intervención del secretario del partido, Eduard Shevardnadze, impusieron la revocación de la decisión adoptada en Moscú de no reconocer al georgiano el *status* de «lengua oficial» de la república. El sentimiento de pertenecer a una identidad común «soviética», que había existido y que incluso había sido motivo de orgullo, se iba pues debilitando gradualmente y eran cada vez más numerosos los que descubrían una nueva identidad, lituana, ucraniana, georgiana, uzbeja u otras. Al contrario, y paralelamente, eran cada vez más numerosos los que reivindicaban y hacían alarde de su identidad rusa, cuando no «gran rusa». El nacionalismo volvía de este modo a levantar cabeza por todas partes y con él la intolerancia se abría paso. Esto sucedía en las repúblicas en relación no sólo a los rusos que vivían en ellas de manera estable, sino también en las distintas minorías presentes en cada una de ellas, abjazos en Georgia, armenios en Azerbaiyán y todos aquellos que no eran rusos en la RFSR. Por otra parte, el recelo hacia los extranjeros y el resentimiento hacia los chinos era general. El contagio de este recrudecimiento nacionalista y «gran ruso» acabó por embestir también al propio Partido Comunista. En particular se hizo intérprete el órgano oficial del Konsomol, la *Molodaja Gvardjia*, que acogió numerosos artículos en los cuales los valores de la tradición rusa se contraponían a los valores negativos del consumismo occidental, y que debido a ello obtuvo una inesperada apreciación por parte de Solzhenitsyn. Es en este contexto de desorientación donde fenómenos sólo en apariencia incompatibles tienen lugar, como las tentativas de rehabilitación de la figura de Stalin, el redescubrimiento de los valores y de los rituales de la religión ortodoxa en Rusia y de la musulmana en las repúblicas de Asia central, el retorno a la tierra y al mundo campesino que constituye el *Leitmotiv* del prolífico grupo de escritores *derevensciki*.

A finales de los años 70 los efectos de esta crisis profunda ya eran visibles: la zastoja se había convertido en recesión y por primera vez los índices de la producción industrial y de las inversiones registraban un signo negativo. Los indicios de la desorientación y de la inercia en la que había caído gran parte de la población eran cada vez más evidentes. La Unión Soviética continuaba siendo por supuesto una superpotencia militar, pero era la úni-

ca carta de la que podía disponer. Sus dirigentes no dudaron en jugársela ni en «enseñar los dientes», tanto en Europa, con la instalación de misiles SS20, como en Asia, con la invasión de Afganistán en diciembre de 1979. Pero tuvieron que pagar en términos de aislamiento las consecuencias de estas iniciativas desatinadas. Además del deterioro de las relaciones con Estados Unidos a las que ya hemos hecho referencia, también el proceso de distensión y de integración puesto en funcionamiento en Europa tras la conferencia de Helsinki sufrió un brusco parón. El decurso de la guerra afgana no tardaría por otra parte en desilusionar y desmentir a los que habían considerado que la ostentación de fuerza y la exhortación al nacionalismo de la «gran Rusia» podían representar una compensación o incluso una solución a la gravísima crisis que atravesaba el país.

El 8 de noviembre de 1982 moría Breznev. Su sucesor, Yuri Andropov, era el responsable de la KGB. A través de las antenas de su organización dentro y fuera del país, era el más capacitado de sus colegas del *Politburó* para valorar el calibre de la crisis y tenía intención de ponerle remedio. Con este propósito se rodeó de colaboradores más jóvenes y cuyas propensiones reformadoras eran bien conocidas, como Mijail Gorbachov, Igor Ligachov y Nikolai Rizhkov que entraron a formar parte de su secretaría. Andropov apostó por un incremento del consumo que se obtuviera a través de un aumento de la productividad y de un refuerzo de la disciplina de trabajo. Se consiguieron algunos resultados: en 1983 la producción industrial registró un aumento del 5 % respecto al año anterior y por primera vez en muchos años la cosecha fue buena. Andropov se daba cuenta de que esto suponía tan sólo un primer paso, pero la difícil coyuntura internacional (las relaciones con los Estados Unidos de la nueva administración de Reagan fueron, como veremos, muy difíciles) y sobre todo sus graves condiciones de salud le impidieron proseguir en el camino iniciado. En efecto, murió el 9 de febrero de 1984. Parece ser que como sucesor había designado a Mijail Gorbachov, pero la elección del *Politburó* fue unánime en designar a Gorbachov para el cargo de secretario general del partido. Su ascenso al poder marcó, como veremos, el final del estancamiento de veinte años que siguieron a la expulsión de Kruschev y el comienzo de una aceleración convulsa del transcurso de los acontecimientos.

32.2. LOS PAÍSES SATÉLITES

La distensión en las relaciones entre las dos superpotencias que tuvo lugar a principios de los años setenta produjo sus efectos también en las relaciones intereuropeas, entre los países de la Europa occidental y los del bloque soviético apartando, como hemos visto, los grandes obstáculos que se interpo-

nían en el camino hacia una normalización de las relaciones entre los estados y en particular entre las dos Alemanias y favoreciendo la intensificación de los intercambios comerciales entre los países de la CEE y los del COMECON. No sólo se derogaron algunas de las normas establecidas en los años de la guerra fría con el objetivo de limitar al máximo las exportaciones en los países comunistas, sino que estos últimos tuvieron un acceso más rápido al crédito internacional. Todos, si bien en distinta medida, recurrieron a él depositando la confianza en el aumento de las exportaciones para extinguir las deudas contraídas. Un cálculo que, como veremos, no se realizará.

Para los países del bloque soviético, se imponía más que nunca, si querían hacer frente con éxito al proceso de integración que se estaba llevando a cabo la tarea de hacer más eficaz y competitivo su sistema económico y de afrontar las expectativas desde hacía demasiado tiempo reprimidas de una población cada vez más informada y consciente del desequilibrio entre el propio nivel de vida y el de los países occidentales. Ello requería, como ya hemos tenido ocasión de destacar, una reestructuración no sólo de los mecanismos económicos sino también una cierta dosis de liberación política y en particular una aplicación efectiva de la cláusula de los «derechos humanos» prevista en la tercera «cesta» de los acuerdos de Helsinki. Pero se trataba de una vía repleta de incógnitas y por ello es comprensible que los que poseían el poder la enfocaran con mayor o menor determinación según las distintas situaciones nacionales y de los condicionantes externos e internos a que estaban sometidos.

El caso más contradictorio es el de la RDA. Su líder Walter Ullbricht se había mostrado muy poco dispuesto, mejor dicho recalcitrante, en lo referente a la política de apertura hacia los países del bloque soviético, la RDA incluida, que Willy Brandt había iniciado con su *Ostpolitik* (véase cap. 33). La firma del tratado soviético-alemán de 1970 hacía insostenible su postura de cerrazón orgullosa y por ello fue sustituido por Erich Honecker. Desde entonces los intercambios comerciales con la RFA fueron intensificándose cada vez más, también gracias a la decisión de Bonn de abolir los aranceles aduaneros para las mercancías exportadas de la RDA y de este modo se intensificaron también los viajes de ciudadanos alemanes en ambas direcciones. A esta apertura en el plano de las relaciones económicas y humanas no se correspondió por otra parte una apertura análoga en el plano de las relaciones políticas, sino al contrario, el nuevo líder Honecker siguió una línea dirigida a remarcar la identidad socialista de la RDA en la insignia de la «demarcación» (*Abrenzung*) con respecto a la Alemania Federal. Las bases que sustentaban la economía planificada no sufrieron, por consiguiente, cambios relevantes, y mucho menos las políticas. El muro de Berlín continuaba vigilado muy de cerca y severamente, y entre los países satélite la RDA era uno de los más intolerantes ante cualquier manifestación de desacuerdo,

aunque apenas atisbada. De este modo se determinaba una situación en la cual cuanto más se intensificaban los contactos humanos entre las dos Alemanias y cuanto más el modelo de vida occidental ejercía su fuerza de atracción sobre los ciudadanos de la RDA, más estos últimos advertían insostenible su condición.

La situación de Rumania presenta algunas analogías con la de la RDA,. También aquí la política de apertura comercial e incluso política iniciada con Occidente, como hemos visto, desde los años 60, de hecho un régimen interno no sólo represivo (prueba de la amarga experiencia fueron los mineros del valle del Jiu con ocasión de su huelga de 1977), sino también con acentuados rasgos nepotistas. La mujer del líder Nicolae Ceaucescu era miembro del Ejecutivo del Comité Central, el hijo Nicu estaba al mando de la organización juvenil comunista y un enjambre de parientes ocupaba puestos de responsabilidad a varios niveles. La diferencia con la RDA consistía en la relación distinta con la Unión Soviética, de oposición –como hemos visto– en el caso rumano y de estrecha alineación en el caso alemán oriental.

Tampoco en Bulgaria y en Checoslovaquia registramos durante los años 70 cambios e innovaciones significativos tanto en lo referente a el rumbo de las planificaciones y de la política económica como, con mayor razón, en los órdenes político-institucionales. En el caso de Checoslovaquia no se trataba de inmovilismo, sino de agotamiento tras la traumática experiencia de 1968 (véase cap. 28) y la «normalización» que le había seguido. En realidad la solución de recambio ya estaba madura: el movimiento Charta 77 era algo más que una manifestación de desacuerdo; de hecho dicho movimiento presentaba las características y tenía la autoridad de un gobierno en la sombra.

Es distinto en cambio el caso de Hungría. La introducción en 1968 del «Nuevo Mecanismo Económico» (NEM) basado en la concesión de amplios márgenes de autonomía a las empresas, y la consiguiente reestructuración de la planificación centralizada en beneficio del mercado, produjo resultados esperanzadores y una notable mejora del nivel de consumo. Ello a su vez permitió un relajamiento de la presión y del control político sobre la intelectualidad y sobre el conjunto de la población. En Hungría la transición de una economía planificada a una economía de mercado y de la «democracia popular» a la democracia sin adjetivos había comenzado mucho antes del 1998. Cuando llegue a su madurez definitiva, el traspaso se hará de manera suave.

El país en el que esta misma transición se desarrolló durante los años 70 de forma más convulsa y dramática fue Polonia. Todo empezó en Danzig y en las ciudades de la costa báltica donde en diciembre de 1970, los obreros, que dos años antes habían asistido sin reaccionar a la oleada de represión de que habían sido objeto estudiantes e intelectuales, respondieron ante la

amenaza de reducciones salariales yendo en masa a la huelga. La respuesta del gobierno fue la más brutal de las represiones: se contaron cincuenta y seis muertos y centenares de heridos y arrestados. En diciembre Wladislaw Gomulka, el hombre que en 1956 había encarnado las esperanzas de millones de polacos, se vio obligado a dimitir. Le sucedió Edward Gierek, un silesiano con un pasado en la emigración en Francia, donde había participado en la Resistencia. Éste negoció un acuerdo con los obreros del Báltico acogiendo gran parte de sus reivindicaciones y puso en marcha un ambicioso programa de activación de la economía, cuyo objetivo final era la edificación de una «segunda Polonia». Pero para ello era indispensable hallar los recursos necesarios, por lo que se recurrió mucho a los préstamos extranjeros. Pero no sólo se trataba de hallar los recursos financieros necesarios. También era menester poder contar con la aprobación de la opinión pública o por los menos de una buena parte de ella, y esto en la Polonia católica sólo podía conseguirse con el apoyo de la Iglesia. Fue justamente en esta dirección en la que se movió el gobierno con una serie de exenciones fiscales en beneficio de los bienes eclesiásticos y con la puesta en marcha de negociaciones para reanudar las relaciones con el Vaticano, interrumpidas desde los años de la guerra fría. Encontraron en el papa Montini y en el secretario de estado Casaroli interlocutores más dispuestos de lo que lo había estado el primado polaco, el cardenal Wyszinski. De este modo fue posible la institución en julio de 1974 de una «comisión de contactos permanentes» hasta llegar en octubre de 1977 a un encuentro en el Vaticano entre el pontífice y Gierek.

Pero mientras la situación económica había vuelto a deteriorarse. A pesar de la aportación del capital y de la tecnología extranjera, el ambicioso plan de desarrollo económico que Gierek deseaba, encontraba cada vez mayores dificultades y Polonia se convertía de este modo en el país más endeudado con diferencia de los países del bloque soviético. En junio de 1976 en las ciudades de Radom, Ursus y Plock los obreros fueron a la huelga para protestar contra la subida de precios prevista. Se retiró esta alza, pero centenares de obreros fueron arrestados y procesados. Como muestra de solidaridad hacia ellos se constituyó en septiembre un comité –*el Kor*– del cual formaban parte algunos intelectuales prestigiosos, que estarán entre los dirigentes del movimiento *Solidarnosc*. Mientras tanto en el Vaticano moría el papa Montini y le sucedía, tras un breve pontificado del papa Luciani, el cardenal polaco Karol Wojtyla (16 de octubre de 1978). Unos de sus primeros actos fue en julio de 1979 un viaje a su patria, donde una inmensa multitud le recibió con entusiasmo.

La situación volvía por lo tanto a escapársele de las manos al gobierno y al partido. En agosto de 1980 los obreros de Danzig volvían de nuevo a la huelga. Ante la magnitud y la unanimidad del movimiento el gobierno no pudo limitarse, como había sucedido diez años antes, a las concesiones de

orden económico, sino que tuvo que reconocer el principio de la independencia sindical. Así nacía el sindicato Solidaridad al que se adhirieron diez millones de trabajadores. En febrero de 1981 Gierek se vio obligado a dimitir, pero su sucesor, Stanislaw Kania, tuvo que enfrentarse a una nueva oleada de huelgas y una demanda cada vez más insistente de elecciones libres. La asunción de los poderes por parte del general Jaruzelski y la proclamación del estado de sitio en diciembre de 1981 pusieron temporalmente fin a esta situación, pero el ciclo histórico de la democracia popular en Polonia ya había tocado a su fin. Sólo era cuestión de tiempo.

Entre las reformas económicas que se llevaron a cabo en los países de Europa central y oriental, la yugoslava de 1965 fue la que provocó la descentralización más radical del aparato productivo. Pero sus efectos quedaron lejos de corresponderse a las esperanzas que en ella habían depositado. La inflación y la desocupación crecían y la drástica reestructuración de la planificación centralizada favorecía una serie de fuerzas centrífugas por parte de las distintas nacionalidades y etnias del país. La primera señal de alarma llegó desde Kosovo donde, en noviembre de 1968, estalló la protesta de la población albanesa, protesta que fue duramente reprimida. En 1971 fue Croacia quien tomó el relevo: con el apoyo de una parte de la liga de los comunistas, presentó un proyecto de Constitución que preveía una declaración de soberanía, una moneda propia y la prácticamente total disponibilidad de las entradas provenientes del turismo de la costa dálmata. Un grupo de intelectuales daba apoyo a estas reivindicaciones elaborando una revisión de la historia croata en clave nacionalista y defendía la «pureza» de la lengua croata y su consiguiente distinción del serbio. Por su parte, en Eslovenia se quejaban de que las autoridades federales se opusieran a la construcción de una autopista entre Lubiana y la frontera italiana. Todos –eslovenos, croatas y serbios– toleraban a duras penas la utilización de recursos federales a favor de las zonas deprimidas del país como Macedonia y Kosovo. Tras la muerte de Tito en mayo de 1980 las tensiones interétnicas, pues, había alcanzado un nivel de peligro. Cuando, tras la caída del muro de Berlín y en el transcurso de los años 90, a estas tensiones se añadían las presiones y los estímulos ejercidos desde el exterior por parte de Alemania unificada y del Vaticano, éstas superarán el nivel dando lugar a un conflicto sanguinario y lleno de episodios de barbarie cuya salida final será la disgregación del país.

La brusca recaída en un clima de guerra fría que, como hemos visto, se registró a finales de la década tuvo sus efectos, como veremos, tanto en los países de Europa occidental como en los de Europa central y oriental. Sin embargo, el proceso de integración entre las dos partes del continente ya iniciado tiempo atrás y ratificado por los acuerdos de Helsinki había ido demasiado lejos para que pudiese pararse. Por un lado había contribuido a profundizar la crisis económica de los países satélites, encontrándose expues-

tos y faltos de preparación para el impacto con la estructura más fuerte de la CEE. Por otro, sin embargo, el paraguas de los «derechos humanos» había ejercido un función protectora más o menos eficaz según los casos en relación al fenómeno del desacuerdo y había hecho más incisiva su presencia. En una serie de países, tales como Polonia, Hungría y Checoslovaquia, ya eran bien visibles las fuerzas y los grupos que asegurarían la transición a la democracia. Esta última era sólo una cuestión de tiempo.

33

Europa occidental en los años setenta

También para Europa occidental los años 70 fueron una década difícil. El final del sistema de Bretton Woods, la devaluación del dólar y la revalorización del marco habían modificado a su favor los términos de intercambio en el mercado internacional. A empeorarlos ulteriormente, dada la casi total dependencia del viejo continente de las importaciones de Oriente Medio, contribuiría el vertiginoso encarecimiento del petróleo que pasó de los 3 dólares en junio de 1973 a los 32,5 en diciembre de 1980. Todos los síntomas y las manifestaciones de la crisis que ya hemos repasado en Estados Unidos los encontramos de nuevo en Europa. Sólo varía, como veremos, la intensidad de país en país.

Esto también vale para el estado que entre todos los de Europa mejor supo sortear las dificultades de la coyuntura económica, la RFA. Durante los primeros años de la década y del nuevo gobierno socialdemócrata-liberal, los principales indicadores económicos continuaban siendo alentadores, a pesar de manifestar una tendencia a la baja: la tasa de crecimiento pasó del 7,4% de 1969 al 4,7% de 1973, la relativa a la inflación del 2,1% al 7%, mientras el desempleo se mantenía a un nivel bajo. A pesar de disponer de una estrecha mayoría (en abril de 1972 una moción de censura constructiva presentada por la oposición se desestimó por sólo dos votos) la coalición gubernativa fue capaz de hacer aprobar una serie de medidas encaminadas a satisfacer las reivindicaciones de los sindicatos, y ampliaban notablemente las competencias del *welfare state*. Las dificultades empezaron en 1973, tras la primera crisis petrolífera. En 1975, después de tantos años, el índice relativo al crecimiento fue negativo en un –1,1% y el número de desocupados superó el millón. Pero el nuevo gobierno del canciller Schmidt consiguió superar, aunque con dificultad y no obstante la disminución registrada por el Partido Socialdemócrata, la prueba de las elecciones de noviembre de 1976 y puso en marcha con éxito una política anticoyuntural basada en la concer-

tación con los sindicatos. Los años comprendidos entre 1976 y 1979 fueron pues, en conjunto, años positivos para la economía alemana.

Lo que se dio en llamar el «modelo alemán» funcionaba y era objeto de admiración en toda Europa.

Pero estos mismos años también fueron aquellos en los que el fenómeno del terrorismo se manifestó en sus formas más extremas, los «años de plomo». Fue en septiembre de 1977 el secuestro y el asesinato del presidente de los industriales alemanes Hans Martin Schleyer, y de octubre del mismo año el supuesto suicidio en la cárcel de los fundadores del grupo terrorista Baader-Meinhof. Se trató de una forma de protesta desesperada, sectaria y fanática que, como tal, no encontró apoyo alguno en la opinión pública y se aisló y derrotó rápidamente. Pero había amplios sectores de la opinión pública y reputados representantes de la izquierda socialdemócrata y de los sindicatos que, a pesar de condenar firmemente el terrorismo, a la fórmula Modell Deutschland contraponían la de la «sociedad de los dos tercios» y solicitaban por consiguiente una implicación más decidida del gobierno en la política social y en particular la extensión y el fomento del instituto de la cogestión (Mibestimmung). Pero de esto resultaban aguzados los desacuerdos existentes en el seno de la mayoría parlamentaria y del partido socialdemócrata y debilitada la propia coalición de gobierno. Cuando, tras la segunda crisis petrolífera de 1979, la coyuntura económica volvió a empeorar y el número de desocupados aumentó de nuevo llegando en 1981 al millón 200.000, tales desacuerdos se manifestaron cada vez más abiertamente. Si en las elecciones de octubre de 1980 la coalición salió reafirmada, se debió a la escasa capacidad de atracción del candidato de la CDU-CSU, el bávaro Franz Joseph Strauss, y a la notable consolidación de los liberales que superaron el umbral del 10 %. Fortalecidos por este triunfo, éstos últimos reivindicaron para un hombre suyo –el conde Lambsdorff– el cargo de ministro de economía y cada vez fueron distanciándose más de su socio socialdemócrata. En septiembre de 1982 presentaron una moción de «censura constructiva» que se aprobó con 256 votos contra 235. Como canciller del nuevo gobierno, apoyado por una mayoría de democristianos y liberales, Helmut Kohl tomaba posesión de su cargo, en el que permanecerá hasta 1998.

Francia, a lo largo de toda la década de los 70, tuvo en el poder mayorías constituidas por los gaullistas de la UDR y por los demás partidos de la derecha moderada, que habían salido vencedores en las elecciones de 1968. Las sucesivas convocatorias electorales de marzo de 1973 y de marzo de 1978 no modificaron de manera sustancial el cuadro político y de gobierno. Si hubo alternancias en la cumbre, éstas se verificaron en el seno de la mayoría gubernamental. Así, en la presidencia de la república, el republicano

independiente Valéry Giscard d'Estaing sucedió a Georges Pompidou, delfín del general De Gaulle, elegido en 1969 y fallecido en 1974, y en la presidencia del consejo se sucedieron varios primeros ministros (en este orden: Chaban Delmas, Messmer, Chirac y Barre) bajo la dirección de coordinaciones gubernamentales muy variadas. Las izquierdas conservaban una amplia cuota de consensos (41 % en las elecciones de 1973), pero las discrepancias que los desunían les impidieron cruzar el umbral de la mayoría absoluta. En 1972, en la vigilia de la campaña electoral, socialistas y comunistas habían convenido un programa común, pero en 1977 estos últimos, preocupados por la pérdida de consensos registrada a favor de los socialistas, volvieron a alejarse y a denunciar el «giro hacia la derecha» de sus primos. El resultado fue que, en las elecciones de marzo de 1978, los partidos de la izquierda que en la primera vuelta habían obtenido el 49,8 % de los votos perdieron en el escrutinio.

Pero a esta estabilidad política no se correspondió una estabilidad económica. El ciclo de la economía francesa a lo largo de la década registra, de hecho con notable sincronía, las mismas oscilaciones y los mismos altibajos que hemos señalado o que señalaremos en los demás países europeos.

También en Francia los primeros años de la década fueron años de vacas gordas y ello permitió al gobierno presidido por Chaban Delmas lanzar, valiéndose de la estrecha concertación con los sindicatos, un ambicioso programa de «nueva sociedad» en cuyo cuadro se introdujeron una serie de medidas y de innovaciones dirigidas a extender el campo de actuación y las competencias del *Welfare*. Como en la RFA, también en Francia a los tiempos de las vacas gordas siguieron los de las vacas flacas. A partir de 1973 todos los grandes indicadores a nuestra disposición registran un curso negativo ininterrumpido: desde el del crecimiento que pasa de una media anual del 5,8 % en el quinquenio 1968-1973 al 1,7 % de 1981, al de la inflación que pasa del 8,1 % de 1973 al 14,1 % de 1981, y por último el de la desocupación de 420.000 en 1974 a dos millones en 1981. Para afrontar esta situación el primer ministro Raymond Barre, un economista de formación liberal , no recurrió, como había hecho su colega alemán Schmidt, a la concertación sino que, de acuerdo con sus convicciones, depositó su confianza en los recursos y los automatismos del mercado. De hecho, el plan que presentó en el acto de su investidura en otoño de 1976 se inspiraba en estos criterios. Los resultados, como hemos visto, no se correspondieron a lo esperado y Francia, a diferencia de la RFA, llegó así a la cita de la segunda crisis petrolífera de 1979 con una economía ya agotada. La amarga experiencia de las elecciones de 1978, sin embargo, había servido de lección a las izquierdas: en las elecciones presidenciales de mayo de 1981, los mecanismos de «desistimiento» entre socialistas y comunistas funcionaron y consintieron la elección del líder socialista François Mitterrand. Un mes después, en las elecciones legislativas, las izquierdas obtenían una amplia mayoría. El encargo de cons-

tituir el nuevo gobierno se confió al socialista Pierre Mauroy que llamó a formar parte de él también a cuatro ministros comunistas.

La evolución política de Francia en los años 70 sigue, pues, un curso contrario no sólo con respecto al de Alemania sino también, como veremos, al de Inglaterra y de Italia: de derecha a izquierda en lugar que de izquierda a derecha. Paradójicamente, las razones y las causas de estas distintas salidas son, sin embargo, las mismas en gran parte. Ello se debe fundamentalmente a las dificultades con que ambos gobiernos se encontraron al hacer frente al deterioro de la coyuntura económica.

Hay varios hechos nuevos en el escenario político de la Gran Bretaña de los años 70. El más relevante es el representado por el recrudecimiento de la cuestión de Irlanda del Norte. En enero de 1972, en Londonderry un reparto del cuerpo de expedición enviado al Ulster en 1969 como fuerza de interposición entre las formaciones paramilitares del IRA y de los unionistas orangistas abría el fuego ante una multitud de manifestantes católicos causando 13 muertos. A partir de este «domingo de sangre» los enfrentamientos entre las dos facciones en lucha y entre éstas y los militares ingleses no cesaron de sucederse, y las tentativas del gobierno de Londres para encontrar una vía de conciliación no llegaron a resultados duraderos. La cuestión irlandesa, pues, continuará durante mucho tiempo siendo una llaga abierta. Fermentos autonómicos y nacionalistas empezaron a manifestarse también en Gales y en Escocia, donde en las elecciones de 1974 el *Scotish National Party* (SNP) obtuvo el 30% de los votos quedando como segundo partido después de los laboristas. El descubrimiento de yacimientos petrolíferos en el mar del Norte contribuyó también a alimentar el nacionalismo escocés. «Este es nuestro petróleo» rezaba un eslogan electoral del SNP.

Pero los temas dominantes del debate político inglés continuaban siendo la adhesión a la CEE y las relaciones entre gobierno y sindicatos. Si en la cuestión sindical coincidía la línea de demarcación, si bien con matices y diferenciaciones no poco relevantes en el interior de las dos formaciones, con la que tradicionalmente, mejor dicho históricamente, se contraponían los dos grandes partidos del país, en la cuestión europea ésta pasaba al interior de cada uno de ellos dando lugar a formaciones transversales. Eran euroescépticos, si no antieuropeístas, hombres como Enoch Powell, el paladín de la campaña contra la inmigración de color, y el exponente de la izquierda laborista Tony Benn. Cada gobierno se encontraba, pues, moviéndose en un terreno resbaladizo y poco seguro.

La primera experiencia fue la del gobierno conservador encabezado por Edward Heath. La aprobación por parte del parlamento en agosto de 1971 de un *Industrial Relations Act* que, remitiéndose al precedente america-

no del *Taft-Hartley*, introducía una reglamentación del derecho a huelga, provocó una fuerte reacción por parte de los sindicatos que culminó con la huelga de mineros de enero de 1972. El gobierno se vio obligado a conceder los elevados aumentos salariales requeridos, pero esto no sirvió para mejorar las relaciones entre el gobierno y los sindicatos. En enero de 1974, en el punto más álgido de la crisis energética, los mineros iban de nuevo a la huelga. A este nuevo desafío Heath respondió con la decisión de anticipar las elecciones recurriendo a la opinión pública para que fuera ésta la que decidiera –como rezaba el eslogan de la campaña electoral de los *tories*– «quién manda en Inglaterra», si el gobierno o las *Unions*. El veredicto de las urnas no dio una respuesta clara a este interrogante: de hecho resultaron elegidos 296 conservadores, 301 laboristas y 14 liberales. El líder de éstos últimos, Jeremy Thorpe, rehusó contribuir con los propios votos a la formación de una arriesgada mayoría gubernamental con los conservadores y fue el líder laborista Harold Wilson quien tuvo que encargarse de constituir un nuevo gabinete. Su primera actuación fue negociar con los sindicatos un «contrato social», una especie de versión inglesa de la «concertación» continental que preveía aumentos salariales considerables. Fortalecido por este triunfo, Wilson convocó de nuevo elecciones en octubre que aseguraron a los laboristas 319 escaños contra los 276 de los conservadores y los 13 de los liberales, una mayoría todavía muy escasa pero que de todas formas permitiría gobernar con una cierta tranquilidad si en el seno del Partido Laborista no hubiera habido fuertes discrepancias sobre cuestiones de gran importancia.

Ante todo estaba el problema de las relaciones con la Comunidad Europea de la cual, desde enero de 1973, Inglaterra había entrado a formar parte. La izquierda del partido, como hemos visto, estaba en contra desde hacía tiempo del ingreso en una comunidad que aquélla consideraba dominada por los capitalistas franceses y alemanes, por lo que solicitaba que la cuestión se sometiera a un referéndum popular, petición que Wilson acabó acogiéndo. El referéndum se celebró en junio de 1975 y su resultado no dejó, como hemos visto, lugar a dudas: el 67% de los votantes se pronunció a favor de la permanencia de Inglaterra en la Comunidad. Para la izquierda laborista y su líder Tony Benn se trataba de una derrota inapelable.

De este modo, la cuestión europea quedaba, si no resuelta, aparcada, pero continuaba estando abierto el problema crónico de la política económica y de las relaciones con los sindicatos, cuya solución era tanto más difícil cuanto más dura era la condición de la economía del país. La tasa de crecimiento medio anual entre 1974 y 1979 –del 1,4%– se había reducido posteriormente con respecto a la, por otra parte poco brillante, de los años 60, la inflación era de dos cifras, la balanza de los pagos enormemente deficitaria y había más de un millón de desocupados. En perspectiva estaba la esperanza del petróleo del mar del Norte, pero por el momento los costes de

las inversiones eran mayores que los beneficios. Se tocó fondo en septiembre de 1976, cuando el primer ministro Callaghan, que había sucedido a Wilson en abril, tuvo que recurrir al FMI para obtener un préstamo con el fin de evitar la crisis de la libra esterlina. La concesión del préstamo no tuvo efectos duraderos. La depresión continuaba y como consecuencia las relaciones entre gobierno y sindicatos, apoyadas por la izquierda del Partido Laborista que exigía una reactivación de la política de nacionalizaciones, volvieron a ser tensas; el país se vio de nuevo inmerso en una oleada de huelgas que llegó a su ápice en el invierno 1978-79, el *winter of discontent*. En este mismo contexto el índice de consenso en el gobierno según lo demostraban los sondeos era cada vez más bajo. El golpe de gracia vino con el resultado negativo en el referéndum que convocó el gobierno sobre el proyecto de devolución que preveía formas de autogobierno para Gales y Escocia. Dicho proyecto fue rechazado por una mayoría aplastante en Gales, y aprobado por muy poco en Escocia por el exiguo tercio de los electores que acudieron a las urnas. El 28 de marzo de 1979 el gobierno Callaghan quedaba en minoría y se vio obligado a dimitir. En las elecciones del 3 de mayo los conservadores, con Margaret Thatcher a la cabeza, obtenían una cómoda mayoría.

También para Inglaterra los años 70 habían sido, pues, una década infausta. Sectores enteros de su aparato productivo, en particular la industria automovilística, habían entrado en una crisis profunda o incluso habían dejado de existir, y su tasa de crecimiento acumulaba un retraso cada vez mayor en relación con los países de la Europa comunitaria. Su Producto Interior Bruto era inferior no sólo al alemán y francés sino también al italiano. Pero es necesario añadir que la desindustrialización, que constituye el aspecto más visible del panorama de la sociedad inglesa de los años 70, no significa forzosamente decadencia, sino que también puede tratarse de reconversión.

En Italia, el ciclo de la economía en los años 70 presenta fluctuaciones análogas a las que hemos hallado en los demás países. Dicho ciclo llegó a su punto más bajo hacia 1975, cuando el índice del PIB por vez primera después de muchos años resultó negativo y el de la inflación rozó el 20 %.

A diferencia de los otros grandes países europeos, la de Italia no fue sólo una recesión económica, sino también y sobre todo una profunda crisis social y política.

La masacre de plaza Fontana en diciembre de 1969 (véase cap. 29) marca el comienzo del período de la historia de la Italia contemporánea que se acostumbra a definir como los «años de plomo» o de la «estrategia de la tensión». A aquél siguieron el atentado de Piazza della Loggia en Brescia en 1974, el del tren Italicus en el mismo año y, por último, el de la estación de Bolonia, de 1980, que causó 85 muertos.

Ninguno de estos episodios criminales fue reivindicado por ninguna organización o sigla, y todavía hoy en día no se ha llegado a esclarecer los hechos. Por el contrario, la organización terrorista de las Brigadas Rojas y otras siglas reivindicaron una serie de atentados contra magistrados, hombres políticos, periodistas y simples ciudadanos. Eran los años en que una revista alemana publicaba en portada un plato de espagueti con una pistola encima. Se trataba, desde luego, de sensacionalismo, pero también es cierto que, a diferencia de lo que sucedió en Alemania, el terrorismo de las Brigadas Rojas pudo desarrollarse porque estaba rodeado, por no decir protegido, por un halo de maximalismo profundamente arraigado en la tradición de la izquierda italiana.

No obstante la situación política italiana se mantenía estable: las elecciones de 1972 introdujeron cambios poco relevantes en el cuadro político. La Democracia Cristiana conservaba la mayoría relativa y sus exponentes continuaban sucediéndose a la cabeza de los distintos gobiernos. Bajo esta aparente costra de inmovilidad continuaban produciéndose sin embargo los fermentos de renovación y de modernización que se habían originado en la contestación de 1968. Esto se vio en 1974 cuando se convocó a los electores, por iniciativa de la Democracia Cristiana, para que se pronunciaran en un referéndum en pro o en contra de la derogación de una ley que había introducido el divorcio. Se pronunciaron con una mayoría del 59% a favor de que se mantuviera esta ley. Cinco años después, en 1979, un segundo referéndum aprobaba una ley de legalización del aborto.

Algo profundo había cambiado en el universo mental y en los comportamientos de los italianos. Italia, que hasta entonces había sido el país más prolífico de Europa, se disponía a compartir con Alemania la tasa más baja de natalidad.

Los efectos de esta transformación no tardaron en reflejarse también en el ámbito político. En las elecciones administrativas de junio de 1975 y en las políticas de 1976 el Partido Comunista registró un aumento importante de votos recuperando la confianza de un tercio de los electores. No cabe duda de que este éxito fue debido también al progresivo distanciamiento de la Unión Soviética que tuvo lugar tras la represión de la primavera de Praga. En la vigilia de las elecciones de 1976, el nuevo secretario del partido, Enrico Berlinguer, declaró que se sentía más a salvo en un país integrado en la OTAN. Los comunistas se convertían así en un interlocutor creíble para una coalición de gobierno. Era éste el sentido de la fórmula del «compromiso histórico» al que el nombre de Berlinguer queda vinculado.

Esta propuesta se tuvo en cuenta. Al día siguiente de las elecciones se constituyó un gobierno presidido por Giulio Andreotti, en relación al cual los comunistas asumieron una actitud de «no desconfianza» y en febrero de 1978 se estableció un segundo gobierno Andreotti con el apoyo de una mayoría parlamentaria de la que el PCI formaba parte integrante.

El mismo día de su investidura sacudió al país la escalofriante noticia de que las Brigadas Rojas habían secuestrado al presidente de la DC, Aldo Moro, es decir al hombre que más había procurado la apertura con los comunistas, y habían asesinado a los hombres de su escolta. El 9 de mayo se encontró el cadáver de Moro en el maletero de un automóvil aparcado en el centro de Roma. Cincuenta y cinco días dramáticos habían pasado así en cuyo transcurso la policía y los servicios secretos dieron prueba de absoluta ineficacia. Durante esos días las fuerzas políticas se dividieron entre los defensores de la negociación y los de la «firmeza», es decir del rechazo a aceptar la violencia y el rescate como medios de lucha política en un país democrático. Fue esta segunda línea, en favor de la cual se erigieron los dirigentes de la Democracia Cristiana y del Partido Comunista, la que prevaleció. De este modo los brigadistas se tuvieron que elegir entre la capitulación y la coherencia de la desesperación. Escogieron este segundo camino, pero el sacrificio de Moro impidió que se llevara a cabo un proceso de degeneración y de embrutecimiento.

A pesar de haberse celebrado cuatro procesos, todavía hoy no se ha podido determinar quién asesinó a Moro. Sólo podemos objetar que este hecho forma parte de lo que se dará en llamar la «segunda guerra fría». Una Italia fuera de la lógica bipolar no gustaba a nadie, ni a Oeste ni a Este.

La mayoría de la unidad nacional no soportó la prueba. En los dos años que duró había desarrollado, también gracias a la colaboración y al sentido de responsabilidad de los sindicatos, un trabajo ingrato pero útil, dirigido a evitar un deterioro ulterior de una coyuntura en su nadir en aquel momento. Una vez ésta dejó atrás su función de taponamiento, en enero de 1979, bajo la presión de una parte considerable de su base, el Partido Comunista retiró su apoyo al gobierno y una vez más se hizo necesario recurrir anticipadamente a las urnas. En las elecciones de 1979 los comunistas registraron un sensible descenso de votos y desde entonces volvieron a atrincherarse en la oposición. También en Italia, como en Alemania y en Inglaterra, la década se cerraba pues bajo el signo de la vuelta a los equilibrios preexistentes.

También para los estados de la Comunidad los años 70 fueron una década difícil y en aquéllos encontramos también la confirmación del nexo existente entre inestabilidad coyuntural e inestabilidad política. Este es el caso de Bélgica, donde las dificultades de la economía contribuyeron a agudizar los contrastes entre la comunidad flamenca y la francófona de Valón con efectos desestabilizadores para el sistema político del país, y de Holanda donde en 1977, tras agravarse la crisis económica, los laboristas fueron excluidos de la coalición gubernamental de la que hasta entonces habían estado al mando. Fuera de la Comunidad es el caso de Suecia, donde en las elecciones de 1976

los socialdemócratas en poder desde hacía décadas quedaron en minoría, y de Noruega, donde las elecciones de 1981 vieron la consolidación de los conservadores. Es una excepción el caso de Austria, donde el partido socialista (SPOE) llevó ininterrumpidamente y en solitario las riendas del gobierno desde 1971 a 1983, consiguiendo mediante una prudente política económica centrar el doble y difícil objetivo del mantenimiento del nivel de ocupación y de la contención de la inflación. Austria, que era un país neutral, también fue el que más esfuerzos dedicó en mantener una política exterior desvinculada de la lógica bipolar: su canciller Bruno Kreisky, un judío, fue el primer hombre político europeo en recibir en 1979 al líder de la OLP Yaser Arafat.

Un caso aparte lo forman los países de la península Ibérica y Grecia, los únicos en Europa con regímenes autoritarios. En ellos las dificultades coyunturales actuaron como aceleradores de la transición a la democracia. En España, tras la muerte de Franco en noviembre de 1975, y ya bajo la monarquía del rey Juan Carlos, designado por Franco su sucesor en 1969, y del presidente del gobierno, el líder de la Unión del Centro Democrático (UCD) Adolfo Suárez, se procedió paso a paso a un desmantelamiento de las estructuras autoritarias y a la construcción de un estado democrático, un proceso que se coronó con el referéndum de diciembre de 1978, que aprobó con una amplia mayoría la nueva Constitución. En febrero de 1981 un confuso intento de golpe militar encabezado por el coronel Tejero, fracasó miserablemente. Si la española fue una «ruptura negociada», el proceso de transición a la democracia en Portugal fue, en cambio, más conflictivo. Dieron comienzo a este proceso un grupo de jóvenes oficiales, reductos del campo contra los movimientos de liberación en Angola y Mozambique y que en esta experiencia suya habían madurado convicciones anticolonialistas y radicales, si no extremistas. En abril de 1974 aquéllos destituyeron al sucesor de Salazar y en septiembre del mismo año obligaron a dimitir al nuevo presidente de la República, el general Spinola, por considerarlo demasiado moderado. Los meses y los años que siguieron fueron de gran agitación con intentos de golpes de estado desde la derecha y desde la izquierda, todo ello en una situación económica en vías de deterioro progresivo. Esencialmente los principales protagonistas del enfrentamiento eran por un lado los elementos más radicales de las fuerzas armadas, con el apoyo del Partido Comunista, y por el otro los partidos políticos que habían vuelto a constituirse y que, como parecían evidenciar los resultados de los sondeos electorales, gozaban del apoyo de la gran mayoría de la opinión pública. Finalmente fueron éstos últimos los que prevalecieron: en las elecciones de 1975 y de 1976 el partido más votado fue el socialista de Mario Soares, pero en las de 1979 la mayoría de los votos fue para un formación moderada, la *Aliança democratica*. Así, a finales de la década también en Portugal el péndulo del equilibrio político se inclinaba hacia la derecha.

La depresión económica que siguió a la primera crisis petrolífera de 1973 debilitó más aún, en Grecia, las ya frágiles bases de consenso sobre las que se erigía la dictadura que instauraron los coroneles en 1967. Como es costumbre de los gobiernos dictatoriales en dificultades, los coroneles buscaron una distracción y una salida en una iniciativa de política exterior, fomentando un golpe de estado en Chipre, del que esperaban lograr la unión (*enosis*) con Grecia. La reacción turca no se hizo esperar y en julio de 1974 un cuerpo de expedición desembarcaba en la isla y ocupaba la parte norte. Esta humillante derrota marcó el final de la dictadura de los coroneles y el regreso a la patria y a la vida política del hombre político que gozaba de mayor popularidad por haber ocupado autorizadamente el cargo de primer ministro desde 1955 a 1963, Kostantinos Karamanlis. Éste era un moderado y había sido monárquico, pero no dudó en convocar un referéndum popular para la abolición de la monarquía, obteniendo una respuesta casi plebiscitaria. En enero de 1981 Grecia obtenía la admisión en la Comunidad Europea.

Podemos decir como conclusión a este resumen que todos los países europeos tuvieron que enfrentarse durante los años 70 a una coyuntura particularmente inestable y difícil, y que las soluciones y los instrumentos a los que recurrieron para hacerle frente presentan tanto analogías como contrastes. De hecho, es evidente que en un contexto así las conquistas que se realizaron durante la edad del oro y la estructura misma del *welfare state* se cuestionaban y las experimentadas recetas keynesianas ya no funcionaban como antes.

Existía el riesgo de que los países europeos intentaran, por cuenta propia, como había sucedido en los años 30, la vía de una salida unilateral de la depresión atendiendo a la siempre recurrente sirena del proteccionismo. En efecto, hubo indicios e iniciativas en este sentido tanto en los países ajenos a la Comunidad, y en particular de Japón, como en su interior, recurriendo a varios expedientes como la financiación de industrias en crisis, la institución de barreras exentas de aranceles de distintos tipos, el recurso a la devaluación para favorecer las exportaciones, las limitaciones a la inmigración de mano de obra extranjera. Aún así, el edificio de la CEE soportó la difícil prueba. Su eje principal, la colaboración franco-alemana llevada a cabo desde los tiempos de la CECA, estaba ya consolidada y el nuevo presidente francés Georges Pompidou no albergaba respecto a Inglaterra el rencoroso resentimiento que su predecesor le había profesado. Al contrario, fue por iniciativa suya que en diciembre de 1969 tuvo lugar en La Haya un encuentro cumbre de los jefes de estado que, además de poner fin a la controvertida cuestión de la política agrícola comunitaria, tomó la decisión de entablar negociaciones para la adhesión a la Comunidad de Inglaterra, Irlanda, Noruega y Dinamarca, negociaciones que se cerraron positivamente en enero de 1973. Sólo

Noruega retiró su adhesión tras los resultados de un referéndum en el que la mayoría de los votantes se pronunció en contra. Por el contrario, en Inglaterra, un país que sólo cuatro años antes había adoptado el sistema decimal, en el referéndum que convocó el nuevo gobierno laborista de Harold Wilson en el verano de 1975, la gran mayoría de votantes se declaró, como hemos visto, a favor de la adhesión a la Comunidad. De esta forma se resolvía una cuestión que se había arrastrado durante años.

Mientras tanto la estructura de la Comunidad se había ido consolidando, tras la decisión adoptada en 1974 de institucionalizar los encuentros entre los jefes de gobierno en el Consejo de Europa. A partir de esta fecha las reuniones de este organismo se sucedieron a un ritmo cada vez más intenso. Fue en una de estas reuniones, la cumbre europea de Bremen de 1978, cuando se elaboró la propuesta de instituir a partir del 1 de enero de 1979 un sistema monetario europeo con el fin de regularizar las relaciones entre las distintas monedas fijando una línea de oscilación que cada estado debía respetar, y limitando así el recurso a medidas de devaluación dirigidas a favorecer las exportaciones de un solo país. Al SME, que entró en funcionamiento en marzo de 1979, se adhirieron todos los países de la Comunidad a excepción de Inglaterra, comprendidos Italia e Irlanda, cuyas reservas iniciales sólo se desvanecieron cuando los demás socios convinieron en ampliar la línea de oscilación entre las distintas monedas.

En el ámbito de la integración política el acontecimiento más destacado de la década fue sin duda la primera elección con sufragio universal directo del Parlamento europeo en junio de 1979. Sus poderes continuaban limitándose al asesoramiento y al control, y la innovación de la elección directa no modificó por tanto el orden de las instituciones comunitarias. De todos modos a través de ella la opinión pública y el electorado de toda la Europa comunitaria participaba por vez primera en el proceso de integración europea. Pero aún así se trataba de un *una tantum* y de un voto que era más el deseo que la expresión de una identidad común.

La Europa política estaba, de hecho, por construir. El intento más coherente y serio de conferirle una identidad fue el que se emprendió con la *Ostpolitik* del nuevo gobierno de coalición entre socialdemócratas y liberales que se formó en la RFA tras las elecciones de septiembre de 1969 y reafirmado en las de noviembre de 1972 bajo la dirección de Willy Brandt. El objetivo hacia el que miraba era el de asignar a Europa un papel activo no sólo en la consolidación de la distensión, sino sobre todo en la promoción de una auténtica cooperación entre las dos partes del continente. Las etapas de este curso político fueron los tratados con la Unión Soviética, con Polonia y con la RDA ya mencionados, el acuerdo sobre Berlín, la apertura en Viena en octubre de 1973 de una mesa de negociaciones para la reducción equilibrada del armamento en el escenario europeo (MBFR) con la

participación de Estados Unidos y Canadá y, por último, a guisa de coronamiento, la conferencia de Helsinki. Ya hemos visto cómo el compromiso de respetar los «derechos humanos» firmado en esta última conferencia por parte de todos proporcionaba un sólido apoyo a los movimientos de oposición o de disidencia operantes en los países satélites. Pero hay que añadir también que esta presión desde el interior se ejerció no sólo en relación con los países comunistas, sino también con los estados gobernados por regímenes autoritarios de derechas. El papel que la Internacional Socialista, de la que Brandt era el presidente, y la socialdemocracia alemana, el mayor apoyo y el mayor financiero, tuvo en la transición a la democracia en España y en Portugal fue en efecto relevante.

Pero eran muchos los obstáculos y fuertes las resistencias que se interponían en el camino de la *Ostpolitik*. Si la diplomacia norteamericana y en particular Kissinger, aun con muchas reservas, se abstuvieron de poner trabas, en Berlín Este, a pesar de los acuerdos realizados, se continuaba razonando con la lógica de la guerra fría y en términos de *Abgrenzung* (véase cap. 32). Esto lo experimentó el propio canciller Brandt, que en abril de 1974 se vio obligado a dimitir y a ceder el puesto a Helmut Schmidt cuando se descubrió que su colaborador más íntimo, Günter Guillaume, trabajaba para los servicios secretos de la RDA.

La sucesiva evolución del sistema de las relaciones internacionales y en particular el planteamiento de la cuestión de los euromisiles (véase cap. 31) no favorecieron desde luego un desarrollo posterior de la *Ostpolitik* sino todo lo contrario, lo perjudicaron gravemente. El canciller Schmidt, que desde 1977 había puesto encima de la mesa el asunto del desequilibrio de los armamentos en el escenario europeo tras la instalación de los SS 20, logró en la cumbre de Guadalupe (véase cap. 31) que, a la decisión de proceder al despliegue de misiles Pershing y Cruise en Europa occidental, se adjuntara una declaración acerca de la disponibilidad de entablar negociaciones sobre el desarme bilateral (la llamada «doble decisión» o «cláusula de la disolución»).

La invasión soviética de Afganistán y el consiguiente deterioro de las relaciones entre las dos superpotencias acabaron por hacer cada vez más insostenible esta postura y contribuyeron a debilitar la coalición de gobierno. Ésta última, como hemos visto, no duró mucho tiempo.

Considerada desde el punto de vista de su coalición en el sistema de las relaciones internacionales, la historia del continente europeo en el transcurso de los años setenta presenta la trayectoria de una parábola. La perspectiva de una integración gradual del viejo continente desde el Atlántico hasta el Vístola fue difuminándose cada vez más hasta desaparecer a finales de la década, cuando la lógica del enfrentamiento bipolar volvió a imponerse. El año de 1979, el de los euromisiles y de Afganistán, puede considerarse, con justo título, una línea de demarcación.

34

El área del Pacífico en los años setenta

Las fluctuaciones y el deterioro que la coyuntura experimentó a lo largo de los años setenta se dejaron sentir también en el área del Pacífico. El estado que resultó más directamente afectado fue, obviamente, el más industrializado de los países de la zona, Japón. En efecto, el país del sol naciente dependía casi totalmente de las importaciones de Oriente Medio para su abastecimiento energético. El impacto de la primera crisis petrolífera de 1973 azotó, pues, su economía de manera más severa que como lo había hecho con la norteamericana e incluso la europea. Las consecuencias del alza del precio del petróleo no dejaron de hacerse sentir; el índice del Producto Interior Bruto anual, que a lo largo de los años sesenta se había mantenido alrededor del 10 %, en 1974 bajó hasta el 1,2 % y la inflación tocó el 24 %. Las exportaciones disminuyeron y el yen fue devaluado. También hizo acto de presencia el fenómeno, hasta entonces desconocido, del desempleo.

La reacción japonesa ante estas dificultades fue mucho más eficaz que las norteamericana y la europea. En 1975-1976 el índice del PIB ya había subido hasta el 5 % y desde entonces la economía nipona comenzó un ciclo ascendente que se prolongará sin interrupciones durante los años ochenta. Los factores que permitieron a Japón superar esta difícil coyuntura fueron los mismos que en los años cincuenta habían hecho posible su despegue económico: el bajo nivel de gasto militar, anclado en el 1 % del PIB; un sistema de relaciones industriales basado en las contratación empresarial y por ende mucho más flexible que el europeo; y la incombustible estabilidad de la situación política. A pesar de los frecuentes escándalos –el más clamoroso fue el de la sociedad Lokheed, que en 1974 obligó a la dimisión al primer ministro Tanaka– el Partido Liberaldemócrata, pese al descenso registrado en las elecciones de 1976 pero contando por otro lado con la fragmentación de los partidos de la oposición, mantuvo una mayoría que le permitió desig-

nar al primer ministro de todos los gobiernos que se sucedieron. Pero a estos factores, por así decirlo, orgánicos, cabe añadir otro, esto es, la capacidad que demostraron las empresas, en colaboración con los organismos estatales de control y orientación de la política económica, de llevar a cabo una reconversión en profundidad del aparato industrial, en su conjunto dirigida a potenciar los sectores productivos con menor consumo energético y mayor contenido tecnológico, muy en especial el electrónico y el de la robótica. En esta labor de reconversión se tuvo en cuenta también el aspecto ecológico: Japón, que era uno de los países más contaminados del mundo, fue el que en los años setenta consiguió los mayores éxitos en la lucha contra la contaminación.

A medida que se acrecentaba su capacidad productiva, Japón se iba integrando cada vez más en el mercado mundial. Incluso puede decirse que estaba «condenado» a exportar, si quería mantener el nivel de vida de tipo occidental del que ahora, al precio de un duro trabajo y de grandes sacrificios, gozaba la mayoría de su población. Pero para operar en el mercado era necesario medirse con los demás socios, lo que, naturalmente, planteaba problemas.

El mayor de estos socios eran los Estados Unidos, a los que, como sabemos, Japón estaba vinculado por un pacto de amistad y cuyas tropas acogía en su territorio. Pero por ser aliado, no era menos un competidor. Al contrario, el mercado norteamericano constituía el principal destino de sus exportaciones. Desde el momento en que el mercado japonés seguía en gran medida protegido por barreras arancelarias y no arancelarias, era lógico que la balanza comercial se hiciera cada vez más favorable para Japón. Esto dio lugar a un contencioso entre los dos países que, de retorsión en retorsión, se prolongó durante años y persiste todavía hoy. En el contexto de este contencioso se sitúa, entre otras cosas, la decisión de Nixon de proceder a la devaluación del dólar en agosto de 1971 (véase cap. 31). En la controversia se involucró también la opinión pública de los dos países: si en los Estados Unidos los obreros del *Rust Belt* señalaban a los japoneses como a los responsables de su situación de desempleo, muchos japoneses lamentaban la renuencia de los empresarios norteamericanos a aprender su idioma, a diferencia de lo que hacían sus colegas nipones con el inglés, además de la escasa atención que prestaban a los gustos de los consumidores extranjeros: en una palabra, su arrogancia. A lo largo de los años setenta el déficit de la balanza comercial norteamericana no dejó de crecer, a pesar de que por parte de los japoneses se procedió a un gradual desmantelamiento de las barreras de protección, y por ende los roces monetarios y comerciales entre los dos países siguieron y siguen todavía. Sin embargo, no hubiesen seguido si las dos partes no hubiesen tenido un interés común en superar cada vez las fricciones y las divergencias con concesiones mutuas o compromisos, y continuar así en una alianza de la que, en definitiva, ambas se benefician.

La evolución de las relaciones políticas funciona como contraprueba. En efecto, una vez solucionado el asunto de Okinawa (véase cap. 29), dichas relaciones fueron estabilizándose. En noviembre de 1974, por primera vez un presidente de Estados Unidos, en esa ocasión Gerald Ford, realizó una visita de estado a Japón y el año siguiente el emperador y la emperatriz devolvieron la visita a los Estados Unidos.

La Comunidad Europea también constituía un mercado interesante para las exportaciones japonesas, pero el cinturón arancelario que la protegía dificultaba la entrada de sus productos. No quedaba más remedio que burlarlo a través de los países que no formaban parte de la Comunidad o desplazando las empresas japonesas a su interior. Ambas opciones fueron llevadas a cabo con éxito. Pero vale también para Europa la observación hecha para Estados Unidos: la existencia de un contencioso no excluye un proceso de integración. En 1973, Japón fue invitado a participar en la Trilateral, una asociación que se proponía promover la colaboración entre las áreas fuertes del mundo, y en 1975 participó, junto con Estados Unidos, Inglaterra, la RFA, Francia e Italia, en la primera cumbre de las mayores potencias industrializadas, que se celebró en la población francesa de Rambouillet. Así, quedaba oficialmente establecida la pertenencia y la inclusión en «Occidente» de un país que la geografía situaba en el «Extremo Oriente». Economía y política primaban sobre la geografía.

Pero, por razones naturales e históricas, el área de referencia para la economía japonesa era la que en otro tiempo se había definido como la gran área de «prosperidad asiática», que incluía Corea del Sur, Taiwan y los países del Pacífico Sur que en 1967 se habían asociado en la ASEAN –Malaisia, Tailandia, Singapur, Indonesia y Filipinas–, con los que Japón mantenía desde hacía tiempo buenas relaciones y a los que proporcionaba ayudas significativas, superiores a las que les concedían los Estados Unidos; pero sobre todo incluía China, un país con el que, incluso después de que ésta fue admitida en la ONU, Japón no mantenía relaciones diplomáticas. En efecto, un eventual reconocimiento era incompatible con la alianza norteamericana. Por consiguiente, también las relaciones comerciales seguían siendo limitadas y las perspectivas de su desarrollo eran inciertas.

China, en efecto, seguía siendo, por ahora, una gran incógnita. ¿Entraría en el vivaz circuito económico que implicaba a toda el área del Pacífico o continuaría «contando con sus propias fuerzas»? Esto equivale a preguntarse cuál de los dos planteamientos que, como se ha visto, estaban presentes en el Partido Comunista desde los años cincuenta, cuando no desde el principio, prevalecería. Por lo tanto, se hace necesario en este punto dirigir nuestra atención hacia el desarrollo de la situación interna china a lo largo de los años setenta, una vez pasada la tormenta de la revolución cultural.

Tras la misteriosa muerte de Lin Biao (véase cap. 30), el contraste político dentro del grupo dirigente del Partido Comunista Chino había continuado. El debate político al que dio lugar es difícil de descifrar, lleno como está de alusiones y referencias notoriamente instrumentales y fácilmente reversibles. Por ejemplo, la acusación de «revisionismo», cuando no de «confucianismo», podía dirigirse –y lo fue– contra cualquier dirigente, según las circunstancias. Los extremos del dilema, sin embargo, están claros. Se trataba de elegir entre un desarrollo acelerado, posibilitado por la movilización de las masas populares, y un desarrollo gradual y sostenible; entre una política agraria orientada hacia el colectivismo y una orientada hacia la relajación o el abandono de las vinculaciones colectivistas; entre una política industrial basada en el igualitarismo salarial y otra, respetuosa de las calificaciones y de las especializaciones; entre una elección de cuadros basándose en sus orígenes de «clase» o en su experiencia; entre una escuela en la que el criterio del adoctrinamiento político primase sobre el de la formación, o viceversa; entre una relación con los intelectuales basada en la intransigencia ideológica o en la tolerancia. Evidentemente, entre los polos de esas alternativas existían unas soluciones intermedias o posibilidades de compromiso, pero la aguja tenía que inclinarse por un lado o por otro.

El enfrentamiento no estaba limitado al grupo dirigente y a los cuadros del partido. Aunque de forma confusa, amplios sectores de la población se daban cuenta de los términos de la cuestión y sabían interpretar el lenguaje sibilino y alusivo de las consignas que se lanzaban y de las columnas publicadas en grandes caracteres en los periódicos. En más de una ocasión, las masas incluso llegaron a hacer oír su voz con huelgas, manifestaciones u otras formas de protesta. Esto sucedió, en particular, en marzo de 1976, cuando una multitud de manifestantes se reunió en la plaza de Tienanmen para deponer coronas de flores en la tumba de Zhou Enlai, fallecido en enero; era un gesto de claro valor político. Cuando, en los días siguientes, se difundió la noticia de que las flores habían sido quitadas, se formó en la plaza una nueva y más numerosa aglomeración y la manifestación adquirió carácter de protesta.

Los avatares de esta batalla política ocupan los años entre 1971 y 1978 y su andadura fue muy conflictiva y compleja, a consecuencia también del vacío de poder que se había producido tras la muerte de Zhou Enlai y la del presidente Mao, en septiembre del mismo año 1976. El sucesor de Zhou Enlai a la cabeza del gobierno, Hua Guofeng, era un oscuro funcionario de la provincia y no tenía una fuerte personalidad política. Su comportamiento inseguro y contradictorio hacia las partes empeñadas en la agria confrontación en curso, acabaron minando su poder y su influencia en la conducción de los asuntos de estado. Por contra, se afirmaba la personalidad emergente de Deng Xiaoping, quien, como se ha visto, había sido uno de los principales blancos y de las principales víctimas de la revolución cultural.

Las vicisitudes de su carrera política pueden ser asumidas como espejo de las complejas circunstancias de la vida política china en estos años, una suerte de sismógrafo de los movimientos profundos que agitaban el cuerpo del partido y de la sociedad; reincorporado a la actividad política en 1973 por voluntad de Zhou Enlai con el cargo de vice primer ministro, volvió a ser apartado tras la muerte de éste y las manifestaciones de abril en Tienanmen, para ser nuevamente integrado por el mismo Hua Guofeng que lo había hecho dimitir en 1977. Desde entonces, su carrera política fue un ascenso ininterrumpido. A medida que subía la estrella de Deng, declinaba la de sus opositores y perseguidores: en octubre de 1976, los mismos miembros de la «banda de los cuatro», incluida la esposa de Mao, eran detenidos y en noviembre de 1980 sometidos a un proceso que terminó con su condena a muerte, aunque no fue ejecutada.

Así pues, la línea de las «cuatro modernizaciones» –industria, agricultura, ciencia y técnica, y defensa–, enunciada por primera vez por Zhou Enlai en enero de 1975, había prevalecido. Pero ninguna modernización era posible sin la aportación del capital y las tecnologías de los países industrializados, lo cual planteaba el problema de reconsiderar las coordenadas de la política exterior y definir la posición de China en el sistema de las relaciones internacionales. El resultado de esta reelaboración se puede resumir en el concepto de «hegemonismo», un término cada vez más recurrente en los documentos y las declaraciones oficiales. Con él se entendía algo distinto de lo que anteriormente había significado el término «imperialismo»; no todos los estados que habían sido y aún eran definidos como «imperialistas», como Japón o los países de la Comunidad Europea, practicaban el «hegemonismo», sino sólo las dos «superpotencias». Eran estas últimas, pues, las que constituían la mayor amenaza para la integridad y la seguridad de China y a su arrogancia China, como país líder del «tercer mundo», se sentía llamada a oponerse. Pero en el momento actual la más peligrosa y agresiva de las dos superpotencias era la URSS. De hecho, la Unión Soviética había invadido Checoslovaquia, actuación que Pekín, que en cambio había apoyado la intervención soviética en Hungría, condenó públicamente; ella era la responsable de los incidentes fronterizos en el Uxuri y en Sing Kiang; ella era la que buscaba atraer a Vietnam en su esfera de influencia y que sostenía la India en su disputa con Pakistán; la URSS, en suma, era la que llevaba a cabo una política dirigida a aislar, burlar y debilitar a China. En cuanto a los Estados Unidos, ya se daban señales suficientes como para pensar que deseaba liberarse de la aventura vietnamita y poner fin a su agresión. Seguían siendo una superpotencia, pero era posible un acuerdo, o al menos una tregua.

Fue tomando como base estos elementos y estos análisis como, entre octubre de 1970 y abril de 1971, al parecer por iniciativa de Zhou Enlai, se emprendieron negociaciones secretas con un representante norteamericano.

La señal fue recibida en Washington y en febrero de 1972 la visita del presidente Nixon a Pekín culminaba, como se ha visto, con un comunicado cuyo meollo político consistía en el abandono por parte norteamericana de la teoría de las «dos Chinas». El evento era histórico: no se trataba sólo de la eliminación de un obstáculo, sino del fin de un estado de conflicto potencial que duraba desde la época de la guerra de Corea. Los gobernantes japoneses, que la diplomacia norteamericana había mantenido apartados de sus iniciativas de apertura hacia China, no tardaron en darse cuenta y decidieron ir más allá, dando un paso más largo que el que habían dado los Estados Unidos. En julio de 1972, el primer ministro japonés Sato declaró públicamente que Taiwan era parte integrante de China y ordenó la clausura de la embajada japonesa en Taipei y la de la China nacionalista en Tokio. El reconocimiento formal de la República Popular China no fue más que la consecuencia lógica de estas decisiones. Por otra parte, ello no impidió que Japón siguiera manteniendo rentables relaciones comerciales con Taiwan.

El ejemplo japonés fue seguido por los estados de la ASEAN, que, uno tras otro, procedieron al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con China. La única excepción fue la de Indonesia, cuyos gobernantes no estaban dispuestos a mantener relaciones con un estado comunista al que acusaban de haber fomentado la intentona revolucionaria de 1965.

Tras el *break trough* de mayo de 1972, las relaciones chino-americanas dejaron de avanzar. La guerra seguía en Vietnam y China no podía, a pesar de sus desacuerdos con la Unión Soviética, negar su apoyo a un pueblo agredido y bombardeado. Los Estados Unidos, por su parte, continuaban negando a China el reconocimiento formal. Habría que esperar a la presidencia de Carter para que se produjera un nuevo avance. En diciembre de 1978, los Estados Unidos rompían a su vez sus relaciones diplomáticas con Taiwan, retiraban sus instalaciones militares de la isla y reconocían a la República Popular China. Poco después, en febrero de 1979, como culminación de la normalización de las relaciones entre los dos estados, Deng Xiaoping, que en octubre de 1978 ya había viajado a Tokio, era recibido en Washington. Mientras tanto, en agosto de 1978, Japón y China habían firmado un nuevo tratado de paz y amistad en el que estaba incluida una cláusula que comprometía a las dos partes a contrastar cualquier intento de «hegemonismo». También en 1978, la Comunidad Europea y China suscribían un acuerdo comercial.

Al final de la década, la única región del área del Pacífico que todavía no estaba estabilizada era la península de Indochina. En enero de 1979, el ejército vietnamita, que ya en mayo de 1975 había intervenido en Laos en apoyo de los comunistas de Pathet Laos y había asumido de hecho el control del país, entraba en la capital de Camboya, Phnom Phen, poniendo fin al régimen sanguinario de Pol Pot. Se calcula que, de una población de siete u

ocho millones de camboyanos, entre 1,2 y 3,1 millones fueron las víctimas del terror sembrado por los Jemeres Rojos. La reacción china no se hizo esperar: en febrero de 1979, unidades chinas cruzaban la frontera de Vietnam con el propósito declarado de «dar un toque» al gobierno vietnamita. Los combates, que vieron al poco entrenado ejército chino perder alrededor de cincuenta mil hombres entre muertos y heridos, se prolongaron hasta el 5 de marzo y en abril comenzaron las negociaciones entre las partes. A partir de este momento, la tensión causada por la iniciativa vietnamita en Camboya fue perdiendo poco a poco de intensidad. Y es que Vietnam había dejado de ser el «ombligo del mundo» (Pinzani, 1998) que había sido durante años: un test y una piedra de toque en el contexto del enfrentamiento entre las grandes potencias. Ahora, la cuestión vietnamita se percibía como una reliquia de una fase histórica ya terminada. Su último y trágico epílogo fue el éxodo del llamado *boat people*, cerca de un millón de personas, entre vietnamitas, laosianos y camboyanos.

A diferencia de lo que hemos constatado en Europa, a lo largo de la década se habían ido estableciendo y consolidando los presupuestos para el desarrollo de la cooperación económica y política entre los países del Pacífico. También en el aspecto militar la situación se presentaba distinta de la europea. Las cifras que los varios estados destinaban al gasto militar eran ampliamente inferiores no sólo a las de las dos superpotencias, sino también a las de los países de la Comunidad Europea. Por lo que concernía a los armamentos nucleares, Japón había firmado el tratado de no proliferación de 1968 y se ceñía a los principios enunciados por su primer ministro Sato en 1971 de no producir, no poseer y no importar armas nucleares. En este mismo principio de inspirará el tratado de Rarotonga suscrito, tras largas negociaciones, en 1985 por trece países del pacífico meridional y modelado sobre el de los países latinoamericanos firmado en Tlatetolco en 1967. El único estado del área del pacífico que poseía la bomba atómica era China.

En términos de desarrollo económico, los frutos de esta cooperación y esta ausencia de conflictividad no tardaron en manifestarse. El crecimiento fue especialmente espectacular –el 10% del PIB en la segunda mitad de los años setenta– no sólo en las ciudades estado de Hong Kong y Singapur, que en 1965 se había separado de Malaisia, sino también en estados de dimensiones bastante mayores, como Taiwan y Corea del Sur.

Un desarrollo económico tan llamativo y tan orientado hacia la exportación conllevaba necesariamente el surgimiento de relaciones de competencia, pero también de integración entre los varios polos, y eso es lo que sucedió. En particular, aumentó el volumen de los intercambios entre Japón y China, hasta igualar el de Japón y Taiwan. En 1984, el volumen total de los intercambios en el área del Pacífico superó por primera vez al del área atlántica.

Bajo el perfil económico, la característica común de estos «tigres» asiáticos fue el rechazo del modelo de desarrollo basado en la sustitución de las importaciones, que, como se ha visto, había dado resultados decepcionantes, cuando no desastrosos, en muchos países en vía de desarrollo, y la adopción, por contra, del modelo japonés basado en la integración en el mercado internacional y en el papel propulsor de las exportaciones, todo ello posibilitado por un régimen de bajos salarios. Pero, a diferencia de Japón, el marco político en el que se situaba este proceso de desarrollo era el de regímenes autoritarios. Es el caso de Corea del Sur, donde el general Clark instauró, con la reforma de la constitución en 1972, una dictadura personal que se terminó sólo con su asesinato en 1979; y de Taiwan, donde el poder estaba monopolizado por el grupo restringido de los cuadros del Kuomintang emigrados de la China continental tras la toma del poder por parte de los comunistas, lo cual comportaba la exclusión de los elementos locales. Y, aunque en un distinto contexto económico y social, también es el caso de la China popular. Las manifestaciones que tuvieron lugar en varias ciudades chinas en el invierno de 1978-1979, con la consigna de la «quinta modernización», esto es, de la democratización del sistema político, no fueron toleradas sino por unos pocos meses; luego, se recurrió a las medidas represivas. Las reformas se quedaron en la reducción del culto de Mao y en la rehabilitación de su principal opositor, Liu Shaoqi. Se trataba, por otra parte, de una política de la que es fácil comprender las motivaciones. En efecto, es legítimo preguntarse si el auténtico «salto hacia adelante» que –a diferencia del de 1958– China realmente realizó a lo largo de los años ochenta y después, hubiese sido posible en un contexto político distinto.

35

Los países del Sur en los años setenta

Es palmario que el término «Sur», según se utiliza corrientemente en el lenguaje político y sociológico, no cabe entenderlo en un sentido estrictamente geográfico. En efecto, existen países situados al sur de la ecuatorial, como Australia y Nueva Zelanda, que no forman parte del Sur; mientras que otros, situados al norte de esta línea, en Asia, en África y Latinoamérica, sí forman parte de él. En general, con el término Sur se quiere designar una condición de subdesarrollo que afecta a una muy amplia área geográfica donde viven miles de millones de seres humanos.

Pero es igualmente evidente que es difícil ofrecer una definición satisfactoria de lo que significa con precisión «Sur del mundo», ya que esta inmensa área se caracteriza por un gran variedad de situaciones. Sin embargo, existen unos rasgos y unos elementos comunes. El primero y el más importante es la explosión demográfica y por ende la dificultad de que el desarrollo económico mantenga el paso del crecimiento de la población. Un segundo elemento, cuya conexión con el primero es evidente, es la gran inestabilidad que caracteriza la vida social y política de estos países y sus relaciones dentro de cada área. Es el caso de subcontinente indio, donde la tensión entre la India y Pakistán y los contrastes étnicos dentro de la región en su conjunto, constituyen un dato permanente, pero también de África, de Oriente Medio y, en parte, de América Latina.

En el análisis, forzosamente rápido, que nos aprestamos a llevar a cabo, nos esforzaremos por ceñirnos al mismo criterio y los mismos parámetros que hemos seguido en el capítulo anterior. Intentaremos, pues, investigar, a partir de estos datos básicos, cómo cada una de las entidades geográficas y sociales que tomaremos en consideración, reaccionó a las fluctuaciones coyunturales de los difíciles años setenta y si éstas favorecieron o no un proceso de modernización y de integración económica y política.

35.1. EL SUBCONTINENTE INDIO

Los estados del subcontinente indio –India y Pakistán– tenían en 1970 una población de 667 millones de personas. En 1976 esta cifra había llegado a 744 millones. Una tasa de natalidad tan elevada representaba una amenaza constante para la autosuficiencia alimentaria que, como ya hemos podido constatar, los dos países habían logrado alcanzar, gracias a los progresos sustanciales realizados en el sector de la producción agrícola.

Sólo en la India, a finales de los años setenta, el hijo de Indira Gandhi, Saniay, quien en 1980 perderá a vida en un accidente aéreo, lanzó un programa de esterilización forzosa, que por otra parte encontró enormes resistencias.

Para que los países del subcontinente quedaran al menos parcialmente inmunes de los efectos devastadores de la explosión demográfica y para que gozaran de un desarrollo ordenado, hubiese sido necesario no sólo un nivel de crecimiento mucho más ingente que el que nos arrojan los índices de los que disponemos, sino también una mayor estabilidad política en toda la región. Las tensiones étnicas y religiosas que habían marcado el nacimiento de la India independiente, en efecto, no se habían extinguido, sino al contrario, continuaban alimentando el conflicto, ora solapado, ora abierto, entre la India y Pakistán. Incluso las mismas decisiones de política exterior de los dos estados se tomaban en función de esta conflictividad. Si en agosto de 1971 la India estipuló un tratado de paz, amistad y cooperación de veinte años de duración con la Unión Soviética, Pakistán, por su parte, mantenía estrechas relaciones con Washington y con Pekín. Su diplomacia y sus servicios secretos tuvieron un papel relevante en los contactos secretos que precedieron la visita de Kissinger a Pekín en febrero de 1972.

Tensiones de naturaleza étnica y religiosa existían, además, en el seno de los dos estados. Hacia finales de los años sesenta, éstas se manifestaron de forma particularmente aguda entre la parte occidental y la parte oriental de Pakistán. En esta última, bajo la guía de Mugib al Rahman, se había ido desarrollando un movimiento llamado Liga Awami, que en las elecciones de 1970 y 1971 resultó ampliamente mayoritario y en marzo de 1971 proclamó la independencia del estado de Bangladesh. La reacción de ejército pakistaní y del nuevo hombre fuerte del país, el general Yahia Han, fue feroz; cientos de miles de bengaleses se vieron obligados a refugiarse en el Bengala indio. Fue entonces, en noviembre de 1971, cuando la India se decidió a intervenir. En diciembre el ejército pakistaní se veía obligado a capitular, y en marzo de 1972 Bangladesh se convertía oficialmente en un estado independiente.

A raíz de la derrota sufrida en el conflicto con la India, el general Yahia Han fue obligado a dimitir; le sucedió Zulfiqar Alí Bhutto, quien emprendió un experimento de reestructuración de las instituciones del país, inspirándose en una ideología que trataba de conciliar socialismo e islamismo.

Muchas empresas fueron nacionalizadas y en política exterior Pakistán se mantuvo en una línea de mayor equidistancia entre los dos bloques. Sin embargo, el deterioro de la coyuntura tras la primera crisis petrolífera perjudicó el experimento de Bhutto y rebajó el nivel de su popularidad. Las elecciones de 1977 sólo pudo ganarlas recurriendo a manipulaciones y fraudes sin precedentes, así que en julio fue destituido por un golpe militar, procesado y condenado a muerte por ahorcamiento en 1979. Su sucesor, el general Zia al Haq, se mantuvo en el poder durante dieciocho años, hasta su muerte en 1988 por un incidente aéreo, y gobernó el país con mano de hierro y favoreciendo la islamización, lo que, por otro lado, no le impidió estrechar los ya muy fuertes lazos con los Estados Unidos y China.

También en Bangladesh los años posteriores a la guerra fueron turbulentos; en los cinco años que siguieron a la proclamación de la independencia, excepto breves pausas, el país fue sometido a dictaduras militares y dos presidentes resultaron asesinados en el transcurso de sendos golpes de estado, con un país desastrado a causa de la guerra y de una condición de retraso absoluto. En las raíces de esta conflictividad constante se encontraban ciertamente las rivalidades personales, pero también el contraste entre los planteamientos laicos y proindios de una parte de la clase dirigente y los propakistaníes e islámicos de la otra parte.

Con el ascenso al poder en 1976 de general Zia al Rahman, estos últimos prevalecieron. Bangladesh cada vez más fue distanciándose de la India y acercándose a los países islámicos, y la Constitución del país fue modificada en el espíritu de una «fe y dedicación total al todopoderoso Alá». En 1981, también Zia caía víctima de un atentado.

Si la derrota sufrida en la guerra de 1971 había tenido efectos desestabilizadores para Pakistán, para Indira Gandhi, en cambio, la victoria significó la confirmación de un liderazgo que estaba en tela de juicio. En efecto, en 1969 se había producido una escisión en el Partido del Congreso entre los partidarios de Indira y los de Morarji Desai, a raíz de la cual ella había perdido la mayoría parlamentaria y se había visto obligada a formar un gobierno de coalición con la participación de los dos partidos comunistas –el prosoviético y el prochino– y de algunas agrupaciones regionales. La línea de división entre los dos bandos era la aceptación o el rechazo del programa económico que Indira había expuesto en el último congreso del partido, un programa que preveía la nacionalización de los bancos, un nuevo impulso a la reforma agraria y una política de la renta que afectaba a las clases privilegiadas. La cuestión quedó solucionada con el resultado de las elecciones de 1971 que otorgaron al Nuevo Congreso de Indira una mayoría de 350 escaños de los 515 que formaban el Parlamento o *Lok Sabha*. Las elecciones locales que se celebraron en 1972 en 21 estados confirmaron este resultado.

El año de 1974 fue para la India un año muy importante, puesto que se efectuó con éxito el primer experimento nuclear y se promulgó el quinto plan quinquenal. Pero su puesta en marcha coincidió con la crisis energética desatada por el encarecimiento del precio del petróleo, lo que determinó una brusca subida de la inflación y el deterioro de las condiciones de vida de las masas. Las manifestaciones de protesta que se produjeron en varios estados encontraron su punto de encuentro en la formación de una coalición que reunía a un abanico de movimientos y partidos diversos, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. En junio de 1975, Indira Gandhi fue acusada por la Alta Corte de Allahabad de presuntos delitos electorales y la oposición no dejó pasar la ocasión para pedir con insistencia su dimisión. Su respuesta fue la proclamación del estado de emergencia, la detención de miles de representantes de la oposición, la disolución de varias organizaciones de derechas y de izquierdas y finalmente la reanudación de su programa de reformas y modernización. El reto tuvo éxito: las huelgas y los desórdenes cesaron y entre 1975 y 1977 la inflación fue eliminada, la producción industrial registró incrementos considerables y la economía se reanimó. Si embargo, cuando, en enero de 1977, Indira revocó el estado de emergencia, las tensiones y la agitación que habían quedado sepultadas durante casi dos años volvieron a aflorar y ella nuevamente tuvo que enfrentarse a una oposición muy variada, pero decidida a tomarse una revancha. Su formación más importante, el *Jana Sangh*, estaba ampliamente infiltrado, cuando no dominado, por los cuadros de la *Rashtriya Swayamsevak Sangh* (RSS), un movimiento con un claro carácter fundamentalista que se inspiraba en los valores del hinduismo y por ello era profundamente antimusulmán. Sus orígenes se remontaban a los años veinte y en 1948 había sido ilegalizado por Nehru. Sin embargo, a pesar de haber sido nuevamente confinado en la clandestinidad por el decreto de emergencia de 1975, había ido adquiriendo una influencia cada vez más marcada entre la juventud estudiantil y los sindicatos.

En las elecciones de 1977 el Nuevo Congreso registró una tremenda derrota y el *Jana Sangh* obtuvo 93 diputados. Por consiguiente, Indira tuvo que dejar las riendas del poder en manos de su rival Desai, quien constituyó un gabinete de amplia coalición. Pero ésta tuvo una vida breve, ya que las disensiones internas no dejaron que mantuviera ninguna de sus promesas electorales. En enero de 1980, pues, se convocaron nuevas elecciones y el partido de Indira salió vencedor, obteniendo 351 de los 542 escaños del *Lok Sabha*.

La década concluía, así, con la confirmación del liderazgo del Nuevo Congreso y de los principios que estaban en la base de su programa y de su acción de gobierno. A diferencia de Pakistán y de Bangladesh, la India seguía siendo un estado laico y, al menos de momento, la reviviscencia del fundamentalismo había sido frenada.

35.2. LOS PAÍSES DE ORIENTE MEDIO Y DEL MAGREB

El 6 de octubre de 1973, día de la festividad hebrea del *Yom Kippur*, el presidente egipcio, Sadat, ordenaba a sus tropas que pasaran a la ofensiva contra Israel. Pocos días después, el 17 de octubre, los estados árabes suspendían los abastecimientos de petróleo a los países occidentales. En un primer momento, las operaciones militares fueron favorables al ejército egipcio, que logró obligar al enemigo a abandonar sus posiciones en la orilla derecha del canal de Suez; pero muy pronto Israel pasó a la contraofensiva, hasta llegar a amenazar de cerca la capital egipcia. Así pues, se determinaba una nueva situación de tensión que involucraba tanto a los Estados Unidos, que habían proporcionado armas a Israel y lo sostenían desde el punto de vista diplomático, como a la URSS, que había hecho otro tanto con Egipto. A finales de enero de 1974, tras laboriosas negociaciones en las que se empeñó particularmente Henry Kissinger, viajando entre Moscú, El Cairo y Tel Aviv, se llegó a un acuerdo de tregua que posteriormente fue perfeccionado en una conferencia convocada en Ginebra en mayo.

Prescindiendo de la valoración de su resultado final, la guerra del *Kippur* había permitido a los estados árabes experimentar la eficacia del arma del petróleo contra las vulnerables economías occidentales y especialmente europeas. El experimento fue todo un éxito. En efecto, los países árabes productores de petróleo fueron los principales beneficiarios del aumento que el precio de esta materia prima experimentó a consecuencia de la decisión del embargo. Dentro de la OPEP, la organización fundada en 1960 a la que se adherían también países africanos y latinoamericanos, ellos eran mayoría y por tanto estaban en condiciones de influenciar y orientar sus decisiones, además estaban unidos por sólidos vínculos de naturaleza tanto religiosa como económica. En septiembre de 1969, por decisión de los jefes de estado islámicos reunidos en una cumbre celebrada en Rabat, había nacido la Organización de la Conferencia Islámica y en 1973-74 se fundaba, por iniciativa de esta organización, el Banco Islámico de Desarrollo. Mediante estos organismos y estos instrumentos también los países islámicos que no eran productores de petróleo podían participar en los beneficios de los países productores. Y se trataba de beneficios realmente ingentes: por ejemplo, sólo en 1970, en un año en que el precio del petróleo era todavía bajo, las entradas de Arabia Saudí fueron de 1.214 millones de dólares y las de Libia, de 1.351 millones; después de 1973, las entradas de Arabia saudí pasaron de los 2.700 millones de dólares de 1972 a los casi 25.000 de 1975. Su reservas financieras superaron a las de Estados Unidos y Japón juntos y el país se convirtió en un miembro autorizado del Fondo Monetario Internacional.

Una parte importante de estos beneficios se invirtieron en el extranjero, con frecuencia en negocios o especulaciones prestigiosos. Piénsese en la

compra de los almacenes Harrods en Londres por el millonario Mohamed al Fayed. Otra parte relevante fue absorbida por los gastos en armamento: de 1972-75 a 1980-83, el gasto militar de los países islámicos aumentó de los 28.041 a 69.691 millones de dólares y el área de Oriente Medio se convirtió en una de las más militarizadas del planeta. Finalmente, inversiones conspicuas se realizaron en cada país para la construcción de infraestructuras, obras de urbanización y actividades productivas en las que se utilizó mano de obra procedente de los países más poblados y menos ricos. En 1970, se encontraban en Arabia Saudí 225.000 trabajadores yemenitas, 40.000 sirios, 50.000 jordanos y palestinos, 30.000 libaneses. También Kuwait y Libia acogían, respectivamente, a 121.000 y 80.000 trabajadores inmigrantes. En su conjunto, éstos eran, en 1975, 1.295.000.

Pero esta solidaridad entre los países islámicos tenía sus límites y sus contradicciones. A diferencia de los países con gran densidad demográfica, como Irak, Argelia o Irán, los países productores de petróleo menos poblados, como Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos Árabes, podían permitirse escalonar la producción para mantener elevado el nivel de los precios o reducirlos manteniendo inalterada la producción. La segunda fue la solución que adoptó la OPEC en 1974 tras la guerra del *Yom Kippur*. La consecuencia fue que la economía de todos los países del área entró en una fase de recesión más o menos acentuada.

Los países que resultaron más afectados fueron obviamente los que padecían una mayor presión demográfica, como Egipto, Irán y Argelia. Esta última, al haber escogido un modelo de desarrollo basado en la planificación de tipo socialista, tuvo que enfrentarse a la disminución de las remesas de sus inmigrantes en Francia, a la reducción de los beneficios derivados del petróleo y al fracaso de la reforma agraria, por lo que se vio obligada a recurrir a los préstamos del extranjero, quedando gravemente endeudada. Irán, por su parte, se había volcado en un programa faraónico de obras públicas, industrialización y gasto militar. El sha había declarado en repetidas ocasiones que su objetivo era el de convertir a Irán en la sexta potencia industrial del mundo, y en 1975 convocó y recibió en el solar de la antigua Persépolis a todos los grandes de la Tierra para celebrar los dos mil quinientos años de la dinastía del Pavón, de la que presumía de ser el heredero. Cuanto más megalómanas fueron sus ambiciones, tanto más precipitada fue, como veremos, su caída. Distinto es el caso de Egipto: al surgir las primeras dificultades económicas, el nuevo líder, Anwar Sadat, reaccionó por una lado abandonando la política de reformas, incluida la agraria, y de subsidios a las clases más desfavorecidas, que había emprendido Nasser, y por otro lado, abriendo el país al capital extranjero, en particular norteamericano y saudí. Ello contribuyó a profundizar en la diferencia que existía entre un grupo restringido de privilegiados y de nuevos ricos y las grandes masas

populares, lo que a su vez aumentó el nivel de la tensión social. En enero de 1977 El Cairo fue escenario de manifestaciones de tintes insurreccionales ocasionadas por el aumento del precio de los artículos de primera necesidad, durante las cuales se produjeron numerosas muertes.

Los cambios de Sadat no se limitaban a las opciones de política económica, sino que sobre todo afectaban el terreno de la política exterior. Tras la expulsión de los consejeros soviéticos en julio de 1972 y las guerra del *Kippur*, Sadat fue suavizando cada vez más su posición hacia Israel al tiempo que se acercaba a los Estados Unidos. En noviembre de 1977, sin comunicar su decisión a los demás estados árabes, viajó a Jerusalén y pronunció en la *Knesset* (el Parlamento israelí) un discurso de tono conciliador. Así, Egipto se convertía en el primero y único estado árabe que reconocía la existencia de Israel y establecía con él relaciones diplomáticas. Como se ha visto, se llegó a los acuerdos de Camp David de septiembre de 1978, según los cuales Egipto –único estado árabe– reconocía formalmente Israel, que a su vez se comprometía a retirar gradualmente sus tropas de ocupación en Sinaí. Estos acuerdos marcaron la ruptura definitiva de Egipto con la URSS.

La consecuencia del golpe de efecto de Sadat fue que las relaciones entre los estados de la Liga Árabe fueron deteriorándose rápidamente, ya que el principal motivo de desacuerdo consistía precisamente en el problema de las relaciones con Israel. En noviembre de 1978 el cuartel general de la Liga Árabe fue trasladado de El Cairo a Túnez y en marzo de 1979 todos los estados miembros rompieron sus relaciones diplomáticas con Egipto. Pero a su vez los países del «frente de la firmeza» estaban muy lejos de formar un grupo compacto. En Irak, que en 1972 había procedido a la nacionalización del petróleo, desde 1968 el poder estaba en manos de un gobierno de representantes o simpatizantes del partido laico Baath, como también en Siria, donde en 1970 un *Putsch* había otorgado la conducción del estado a Hafez el Assad. Por contra, Arabia Saudí seguía siendo un baluarte del integrismo islámico. Pero la línea de división no pasaba sólo por los varios estados de la región, sino también dentro de cada uno de ellos, entre los que se inspiraban en el mensaje panárabe y reformador de Nasser y los que privilegiaban los valores de la tradición islámica.

En efecto, como en Pakistán, en Bangladesh y en la propia India, también en el mundo árabe el nacimiento y el desarrollo de movimientos fundamentalistas constituye la mayor novedad de los años setenta, ya que, de modo más o menos radical, afectó a muchos estados islámicos. Entre ellos la Libia del coronel Gadafi, donde en 1972 la *saria* se convirtió en parte integrante de la legislación del estado; Argelia, cuya carta magna nacional de 1976 indicaba en la fe islámica un soporte indispensable en la lucha para lograr una sociedad socialista y donde las manifestaciones políticas, incluida la del primero de mayo, se abrían con la invocación a Alá «clemente y mise-

ricordioso»; Egipto, donde el mensaje fundamentalista, que procedía de la universidad islámica de Al Azhar, cundió no sólo en la juventud estudiantil, sino en el estamento militar; Irán, donde, como veremos pronto, la oleada fundamentalista iba a producir efectos impresionantes. Pero el país que más experimento los efectos devastadores de la lucha entre integrismos opuestos fue Líbano. De 1975 a 1977 fue escenario de una lucha sin cuartel entre los extremistas cristiano-maronitas de la Falange, los refugiados palestinos, los milicianos chiíes y el ejército israelí, que en 1978 había ocupado la parte meridional del país. Fue una guerra de todos contra todos en la que se contaron cincuenta mil muertos. El episodio más cruento fue la masacre perpetrada en el campo de refugiados palestinos de Tell al Zatar por obra de los milicianos cristianos en agosto de 1976. La oleada de intransigencia extremista acabó contagiándose al estado de Israel, donde a las fricciones desacuerdos entre ashkenazíes y sefardíes se añadieron los causados por la emigración masiva de judíos procedentes de la Unión Soviética. Los votos de estos últimos resultaron determinantes en las elecciones de marzo de 1977, que vieron el triunfo del partido del Likud y la derrota de los laboristas que habían gobernado el país sin interrupción desde su constitución como estado.

El año de 1979 se correspondía con el 1399 de la era islámica y coincidía pues con un final de siglo que, como todos los finales de siglo, estaba cargado de expectativas y de presagios. Unas y otros no quedaron frustrados. Durante aquel año, en Irán se habían ido sucediendo, con cada vez mayor participación, manifestaciones masivas contra el régimen del Sha. Desde París, donde se había refugiado tras ser exiliado, el *ayatolá* Jomeini, la más alta autoridad religiosa del país, no cesaba de echar leña a fuego, apelando a los valores del islamismo y de la fe chiíta en la que se reconocía la gran mayoría de la población iraní, en contraposición a los falsos valores de la civilización consumista de Occidente. El 16 de enero, el sha se veía obligado a abandonar el país y dos semanas después el *ayatolá* volvía triunfalmente. El 31 de marzo un referéndum popular aprobaba casi por unanimidad la nueva Constitución; el reino del Pavón se convertía, así, en una República islámica.

Comenzado en Teherán con la revolución islámica, el fatídico año de 1399 se cerró con otro evento excepcional: la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética. En este contexto de emoción y milenarismo suscitados por tales acontecimientos en todo el mundo islámico, se sitúa un episodio que no tiene precedentes en la historia del Islam: la ocupación de la Meca, máximo lugar sagrado de esta religión, por parte de un grupo de fanáticos musulmanes que se atrincheraron dentro de los edificios que rodean la Piedra Negra. Fue necesario llamar al ejército, para lograr, después de dos semanas, que se rindieran.

A principios de los años ochenta, pues, el mundo islámico estaba profundamente dividido. El *boom* petrolífero ya se había terminado, pero las armas, en cuya compra se había despilfarrado una parte importante de sus beneficios, desde luego no faltaban. En principio, hubieran tenido que emplearse contra Israel, pero, después de Camp David, la guerra contra el enemigo sionista ya no era una opción viable. Sin embargo, como veremos, tampoco quedaron inutilizadas.

35.3. LOS PAÍSES AFRICANOS

Entre los países del África negra los únicos productores de petróleo eran Gabón y Nigeria. Ésta, recién salida de una sangrienta guerra civil (véase cap. 30) y todavía marcada por las rivalidades étnicas y tribales que la habían provocado, con una población de ciento diez millones de personas y una tasa de natalidad entre las más altas del mundo, no aprovechó mucho este recurso; antes bien, al final de la década, se encontraba entre los países más endeudados de la Tierra. Sin embargo, es evidente que los países africanos que no disponían del petróleo, pero tenían en común con Nigeria el problema de la superpoblación y del subdesarrollo, se encontraban en una situación todavía peor.

Ellos tenían que enfrentarse no sólo con unos gastos energéticos que se habían multiplicado por cuatro, sino también con la inflexión que, a partir de los años setenta, experimentaron los precios de las materias primas que exportaban y que, para muchos de ellos, constituían la única entrada, lo cual provocaba más deterioro en términos de intercambios con los países desarrollados. En la mayoría de ellos, además, el incremento de los recursos agrícolas ya no conseguía mantener el ritmo del crecimiento demográfico, lo que provocaba la pérdida de la autosuficiencia alimentaria, donde ésta existía, y la necesidad de recurrir a las importaciones. El momento más crítico fue en los años 1972-1973, pero el problema del hambre continuó estando, para muchos países africanos, dramáticamente presente durante toda la década y después. En los países del Sahel, se añadieron a las dificultades coyunturales, las derivadas de la sequía y el proceso de desertización.

Por tanto, no es sorprendente si en semejante contexto el nivel de conflictividad entre sus varios estados y dentro de cada uno de ellos, que ya se había delineado durante la década anterior (véase cap. 30), conoció un salto hacia adelante y se acompañó con la instauración de regímenes militares. La lista de los golpes de estado efectuados por generales o coroneles a lo largo de los años setenta es demasiado larga para poder relatarla caso por caso. En 1972 le tocó a Ghana y Dahomey; en 1973, a Ruanda; en 1974, Níger y Etiopía; en 1975, a Madagascar, Chad y Nigeria; en 1976, a Burundi; en

1977, a Congo, otra vez Etiopía y las islas Seychelles; en 1978, a las Comores, nuevamente a Ghana y a Mauritania; en 1979, al Congo, Uganda –con la deposición del tristemente famoso Idi Amín Dada, gracias a la intervención militar de Tanzania– y por tercera vez a Ghana; y finalmente, en 1980 le tocó a Guinea Ecuatorial y a la República Centroafricana, con la destitución de otro personaje singular y controvertido (especialmente para sus protectores de París), el autoproclamado emperador Bokassa I.

La lista de los enfrentamientos que ensangrentaron África durante esta década y que la convirtieron en la parte del mundo más conflictiva, también es muy larga. Especialmente ásperas y sangrientas fueron las guerrillas en Angola y Mozambique, después de su liberación del dominio portugués en 1974. En el primero de esos dos países, las partes en lucha eran por un lado los partidarios del Movimiento para la Liberación de Angola (MPLA), encabezado por Agostinho Neto y apoyado por los soviéticos y por un contingente cubano; por otro lado, los de la UNITA, que contaban con el apoyo de Suráfrica; en Mozambique, por su parte, se enfrentaban los partidarios del movimiento de liberación FRELIMO, también sostenidos por los soviéticos y por la RDA, y los de RENAMO, financiados y armados por Rhodesia y Suráfrica. Entre los estados y las regiones desgarrados por conflictos internos, cabe señalar los casos de Chad, donde la guerra enfrentaba a las poblaciones del norte, apoyadas por la Libia de Gadafi, y del sur, sostenidas militarmente por Francia; del Cuerno de África, donde luchaban somalíes y eritreos contra el ejército etíope del coronel Menghistu, quien en 1977 se había hecho con el poder mediante un golpe de estado; y finalmente, de Sudán, escenario de un enfrentamiento entre las poblaciones árabo-islámicas del norte y las cristianas y animistas del sur.

El único rayo de luz en este cuadro desolador fue el acuerdo, suscrito en diciembre de 1979 en Londres, que ponía fin a la discriminación racista en Rhodesia del Sur, que en 1980 se convertía en estado independiente con el nombre de Zimbabwe. En el vecino Suráfrica, bajo la presidencia de John Vorster, el régimen de *apartheid* seguía en vigor, a pesar de las presiones de la comunidad internacional y de la ONU. Del 16 al 22 de junio de 1976, en la *township* de Soweto, el barrio negro cerca de Johannesburg, la policía abrió fuego contra una multitud de manifestantes, causando un millar de muertos.

35.4. LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

A lo largo de la década, también los países de América Latina experimentaron un sustancial aumento demográfico, pasando de los 247 millones de 1965 a los 333 de 1976, con una tasa de natalidad de un 38 %, superada sólo,

y por poco, por la de África. Sin embargo, un cierto desarrollo, aunque contradictorio y efímero, sí se produjo y en algunos países e incluso fue de notables proporciones. Los más brillantes fueron México y Brasil, con una tasa de crecimiento del PIB anual de, respectivamente, un 6,5 % y 9 % entre 1965 y 1980. En ambos países el flujo de las inversiones privadas y públicas, nacionales y extranjeras, amén de los índices de la producción industrial, registraron una auténtica aceleración. En el caso de México, una aportación considerable a este tumultuoso proceso de crecimiento se debió al descubrimiento y la valorización de grandes yacimientos de petróleo. Con todo, ambos «milagros» tuvieron su revés de la moneda (y por consiguiente su limitación) en la estructura «dual» que todavía caracterizaba a la economía de los dos países. En 1980, el porcentaje de la población ocupada en el sector primario todavía se situaba en un 37 % en Brasil y un 31 % en México, y ello a pesar de que desde hacía tiempo se estaba produciendo un éxodo masivo del campo a los poblados de chabolas que rodeaban a las grandes ciudades. El proceso de desarrollo y de modernización, en efecto, no tocaba al sector agrícola y los proyectos de reforma agraria que se intentaba poner en marcha, se quedaban en papel mojado. En México la producción agrícola, y en especial la de productos de consumo de masas, experimentó una sensible disminución, contribuyendo a agravar una balanza comercial ya abrumada por las importaciones de bienes capitales necesarios para el desarrollo industrial, lo que a su vez causó la devaluación del peso mexicano, que en 1976, a consecuencia de una fuga de capitales masiva, tuvo que ser depreciado en un 60 %. Por tanto, los «milagros» brasileño y mexicano tuvieron una vida breve y ambos países se encontraron nuevamente en la necesidad de afrontar la devaluación de sus monedas, una inflación creciente y una deuda externa muy elevada, y ambos tuvieron que acudir al Fondo Monetario Internacional y aceptar sus severas imposiciones.

Un proceso de transformación tan intenso y desequilibrado generaba inevitablemente fuertes tensiones sociales. Tanto en México como en Brasil, éstas encontraron su forma de expresión más llamativa, aunque desde luego no la más eficaz políticamente, en la guerrilla, llevada a cabo básicamente mediante el secuestro de diplomáticos y funcionarios norteamericanos. Y mientras que la consolidada estructura política mexicana aguantó la prueba, en Brasil se reaccionó mediante el endurecimiento de la dictadura militar instaurada con el golpe de 1964 (véase cap. 30), lo que se llevó a cabo quitando al Parlamento los limitados poderes que le quedaban y otorgando plenos poderes –incluidos los de disolver cualquier tipo de asamblea electiva y privar a los opositores de sus derechos políticos por un período de diez años– al presidente, que así venía a asumir el aspecto de un dictador. Pero cabe añadir que los varios presidentes-generales que se sucedieron a la cabeza del estado –fueron cinco entre 1964 y 1980– evitaron recurrir a me-

didas extremas de represión, lo que, como veremos, sí se produjo en otros estados del subcontinente; al contrario, a partir de 1974, año en el que se convocaron nuevas elecciones que se desarrollaron en un clima de relativa libertad, el régimen emprendió el camino de la vuelta a la democracia.

En Argentina el gobierno del general Onganía, que había llegado al poder tras un golpe de estado militar en 1966 (véase cap. 30), no logró estabilizar la economía, gravemente deteriorada, y asegurar el orden que había prometido al tomar posesión de su cargo. Si las severas medidas represivas consiguieron poner fin a la serie de atentados terroristas de los varios grupos de extrema izquierda, menos eficaces se revelaron en relación con las huelgas organizadas por los sindicatos, todavía dominados por los peronistas, en protesta por la congelación de los salarios impuesta por el gobierno. El conflicto sindical tuvo su epicentro en la ciudad de Córdoba, foco principal de la industria automovilística argentina, y llegó a su cúspide en 1969, cuando el ejército abrió fuego contra una multitud de manifestantes, causando decenas de muertos. A raíz de este episodio, que despertó gran emoción, el gobierno se vio obligado a cesar al ministro de Economía Vasena, y Onganía tuvo que dejar paso a otro general, Roberto Levingston. Éste tampoco tuvo más éxito y al año siguiente fue desplazado por otro golpe impulsado por el también general Alejandro Lanusse. Éste, presionado por la persistencia y la gravedad de las dificultades económicas, no encontró otra solución que la de hacer volver a Juan Domingo Perón de su exilio. En marzo de 1973 se celebraron las elecciones parlamentarias, que otorgaron al Partido Peronista una mayoría relativa del 49 % de los votos; en septiembre, en las presidenciales, Perón resultaba elegido con el 62 % de los sufragios e Isabelita accedía a la vicepresidencia. Cuando, en julio de 1974, su esposo falleció repentinamente, ella se encontró, según la Constitución, investida del más alto cargo del estado. Pero no lo fue durante mucho tiempo: en marzo de 1976, con la economía del país ya fuera de control, un enésimo golpe desautorizaba a Isabelita e instalaba en el poder a una junta militar encabezada por el general Jorge Rafael Videla. Los años que siguieron fueron los peores de la historia del país; las organizaciones sindicales y políticas quedaron disueltas y una represión brutal e indiscriminada se desató contra opositores o incluso simples sospechosos. Se cifra entre quince y treinta mil el número de «desaparecidos».

La evolución económica y los acontecimientos políticos de la mayor parte de los demás estados principales del subcontinente durante la década de los setenta presentan más de una analogía con los de Brasil y Argentina: en todos ellos, una crisis económica ya crónica, paliada con las medicinas amargas del Fondo Monetario Internacional y de los *Chicago Boys*; en todos

ellos, regímenes políticos militares y en todos ellos, la represión de los movimientos de guerrilla y de cualquier forma de oposición. El caso más notorio es el de Chile, donde en septiembre de 1973 un golpe de estado encabezado por el general Augusto Pinochet derrocó al gobierno de Unidad Popular presidido por Salvador Allende (véase cap. 30), que se negó a rendirse y se quitó la vida. Desde entonces, comenzó un régimen dictatorial que duraría dieciséis años y provocó cincuenta mil víctimas. Pero también es el caso de Uruguay, el país de América latina de más arraigadas instituciones y tradiciones democráticas, donde de 1971 a 1984 gobernó una dictadura apoyada por los militares, o de Bolivia, donde en 1964 el presidente Paz Estenssoro fue destituido por un golpe militar. Y finalmente, es el caso también de varios pequeños países caribeños y de América central: Honduras, Guatemala, Haití, El Salvador, donde en marzo de 1980 el arzobispo Romero, que desde el púlpito había expresado su solidaridad hacia los campesinos y sus reivindicaciones, fue asesinado en su catedral y en diciembre del mismo año los escuadrones de paramilitares asesinaron a cuatro monjas. La única excepción a esta regla es la de Nicaragua, donde en julio de 1979 el movimiento guerrillero sandinista puso fin a la larga tiranía de la familia Somoza y formó un gobierno revolucionario que fue reconocido por el presidente Carter y recibió de Washington ayuda humanitaria. Pero no pasaría mucho tiempo hasta que, como en su tiempo Cuba, también los sandinistas constatasen que el precio de su victoria era el aislamiento.

35.5. EL PROBLEMA NORTE-SUR

Al intentar sintetizar lo que hemos venido relatando hasta aquí, un dato aparece claro: a lo largo de los años setenta las distancias entre las áreas fuertes y las áreas débiles se habían ido ensanchando. Al mismo tiempo, también se habían ido difundiendo la conciencia y la preocupación por esta diferencia.

De esta conciencia y preocupación es expresión el informe elaborado por una comisión presidida por Willy Brandt y publicado, después de tres años de trabajo, en 1980. El informe partía de la convicción de que «volver a plasmar la relación Norte-Sur era una exigencia crucial para el futuro de la humanidad, de igual magnitud que la necesidad de oponerse a los peligros de la carrera armamentística»; ello constituía «el reto supremo que la humanidad debe afrontar antes del final de este siglo»; en las páginas finales, se terminaba planteando una serie de prioridades. Entre ellas, figuraban la estabilización de los precios de los productos básicos y de las materias primas exportadas por los países del Sur; la renuncia por parte del Norte a proteger sus producciones manufactureras; la fijación de tipos de cambio más

estables entre las varias monedas; nuevas formas de financiación destinadas al desarrollo alcanzadas mediante una reforma del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

Varia eran las sedes donde era posible afrontar y debatir los asuntos relacionados con el problema Norte-Sur: el FMI, las sesiones del GATT, donde los países en vía de desarrollo estaban escasamente representados, y la Asamblea de las Naciones Unidas, donde, por contra, eran mayoría. Por tanto es comprensible que los países del grupo de los 77 insistieran para que la ONU fuese el principal foro de debate.

En mayo de 1974 la VI sesión especial de la Asamblea de la ONU aprobó, superando las resistencias de los países desarrollados con la excepción de Suecia, una declaración sobre la instauración de un Nuevo Orden Económico Mundial (NOEM). En ésta se expresaba el deseo de que se establecieran, entre otras cosas, unas «relaciones equitativas y correctas» entre los precios de las exportaciones de los países en vías de desarrollo y los de las importaciones por parte de los países desarrollados, incluso en el caso de que los bienes importados estuvieran en competencia con los que éstos producían; una disminución de los alquileres marítimos y por fin una reforma del sistema internacional de divisas.

Pero entre la enunciación y la puesta en marcha de esta agenda, mediaba un abismo. El obstáculo mayor estribaba en el contraste entre los países desarrollados, que, apelando al principio de la absoluta libertad de mercado, se oponían a una reglamentación del flujo de los intercambios por parte de los farragosos organismos internacionales, y los países en vías de desarrollo, que en esta reglamentación, en cambio, estaban muy interesados. Pero también entre los propios países en vías de desarrollo subsistían motivos de desconfianza y conflictos de intereses.

A este propósito merece subrayarse que en los documentos y en los textos mencionados no aparece ya la expresión «Tercer Mundo», que implicaba el concepto de una cierta homogeneidad en la estructura social de los varios países, sino que aparece la definición de «Sur», indicación meramente geográfica y aséptica. En efecto, formaban parte del Sur tanto los países productores de petróleo como los importadores, tanto los países endeudados como los deudores, tanto países en una fase relativamente avanzada de industrialización como los que tenían la agricultura como principal o único recurso: en suma, países en vías de desarrollo, países pobres y países muy pobres. La casuística es muy variada.

El primer debate sobre los problemas relacionados con la construcción de un nuevo fondo internacional se celebró en Nairobi en 1976 en el transcurso de la cuarta Conferencia de UNCTAD. El punto principal del orden del día fue el proyecto de un programa global y articulado para los productos básicos dirigido a asegurarse la estabilización de sus precios en el mercado in-

ternacional y por ende de las entradas de los países exportadores. Se dio algún paso hacia adelante y en los años siguientes se sellaron «acuerdos de producto» relativos al cacao, al estaño y al azúcar. En la misma dirección había ido la Comunidad Europea, al firmar con una serie de países de África, el Caribe y el Pacífico (los llamados países ACP), que en un pasado habían formado parte de la *Union française*, la convención de Lomé, que preveía la construcción de un fondo –el STABEX– para a estabilización de los precios de doce productos.

Pero el contencioso Norte-Sur contemplaba también otros y más controvertidos problemas. La prueba se dio en la siguiente conferencia de la UNCTAD que se celebró en Manila en mayo de 1979. Ahí, en efecto, salieron a la luz no sólo contrastes entre los países desarrollados del Norte y países del Sur, sino también entre éstos y los estados del bloque soviético, a los que se reprochaba la escasez de su contribución a las ayudas para el desarrollo, y en fin, también dentro del propio grupo de los 77, en particular entre países productores y países importadores de petróleo. Así pues, la sesión se cerró con pobres resultados e igual suerte corrieron la conferencia de la UNIDO (*United Nations Industrial Development Organisation*) que se celebró en Nueva Dehli en enero de 1980, y la asamblea especial de la ONU sobre estrategias para el desarrollo de los años ochenta. Pero el fracaso más clamoroso fue el de la cumbre celebrada en Cancún, en México, en diciembre de 1981, con la participación de doce jefes de estado de países en vías de desarrollo (cuatro para cada continente), además de Estados Unidos, la RFA, Francia, Austria, Suecia, Canadá, Inglaterra, Yugoslavia y China.

El nuevo orden económico, pues, seguía siendo un deseo, cuando no un espejismo y cada vez se hacía más claro que una efectiva cooperación económica sólo sería posible en el marco de una mayor cooperación política.

36

Estados Unidos y Europa occidental en los años ochenta y noventa: convergencias y divergencias

36.1. LA PRESIDENCIA DE REAGAN Y LA SEGUNDA GUERRA FRÍA

En las elecciones presidenciales de noviembre de 1980 resultó elegido el republicano Ronald Reagan, un ex actor de Hollywood que desde 1966 a 1975 había sido gobernador de California. La suya fue una victoria por la mínima, ya que los votantes fueron el 52 % del total y Reagan obtuvo el 52 % de los votos contra el 41 % del presidente saliente, Carter, y el 8 % de un candidato independiente. En las siguientes elecciones, en 1984, Reagan ganó en todos los estados con excepción de Minnesota y fue reelegido con una amplia mayoría, el 59 % contra el 41 de su oponente demócrata, Walter Mondale; una victoria, pues, abrumadora, a la que contribuyeron electores de ambos sexos, de todas las edades y de todas las clases sociales. En las elecciones de 1988 será elegido, con una cómoda mayoría, otro republicano, George Bush, quien durante las administraciones de Reagan había desempeñado el cargo de vicepresidente. Una década, pues, toda republicana, como en los años veinte.

Semejante estabilidad parece tanto más sorprendente en un contexto caracterizado por un alto nivel de movilidad social, como lo era el que el país estaba viviendo, y que, como tal, podría influir en los movimientos de un electorado de por sí variable. En efecto, estaba en pleno desarrollo aquel proceso de reconversión de la economía y de la sociedad norteamericanas que, como se ha visto, ya se había ido perfilando durante los años setenta.

La forma más evidente de movilidad social consistía en el importante flujo de nuevos inmigrantes procedentes de América central, África y Asia: coreanos, filipinos, *boat people* vietnamitas. A lo largo de los años setenta los inmigrantes legales fueron cuatro millones y seis millones durante los años ochenta, pero la cifra aumentaría sustancialmente si se dispusiera de los da-

tos relativos a los ilegales. A consecuencia de esta oleada migratoria la composición étnica de la población residente sufrió sensibles modificaciones: entre 1980 y 1990, la población blanca aumentó en un 6 %, pero la negra en un 13,2, la hispana en un 53% y la asiática llegó hasta en 107,8 %. En algunas de las grandes ciudades la población de color ya superaba la blanca y algunas de ellas tuvieron o tienen un alcalde de color, incluida la capital federal. Es evidente que ello contribuía a alimentar las tensiones ya existentes entre las varias comunidades y etnias, especialmente en los estados donde la llegada de inmigrantes había sido masiva. Es el caso de California, donde en noviembre de 1984 una propuesta de ley por referéndum dirigida a excluir a los inmigrantes de la escuela pública y la asistencia médica gratuita –la llamada *Proposition 187*– fue aprobada con un 59 % de los votos.

Pero además de la inmigración, también había otros factores que concurrían a alimentar la movilidad social. Me refiero en primer lugar, al proceso de reestructuración y desplazamiento industrial que iba modificando la geografía económica del país, del *Rust Belt* del Norte al *Sun Belt* del Sur y del Oeste (véase cap. 31). Pero también me refiero a la constante expansión del sector terciario, al creciente empleo de mano de obra femenina, y finalmente a las mutaciones introducidas en el mercado del trabajo por la innovación tecnológica. Ésta, en efecto, favorecía la creación de nuevas figuras profesionales con alta calificación y altas retribuciones, mientras que tanto los trabajadores inmigrantes como la mayoría de las mujeres trabajadoras encontraban ocupación en los empleos de baja calificación o en el trabajo negro. Así pues, resultaba modificado el mercado laboral en el sentido de una mayor movilidad y flexibilidad y en consecuencia en el sentido de una ampliación de las distancias entre las retribuciones, según el diverso grado de calificación.

Todo ello no podía por menos de introducir cambios profundos en la propia configuración de la sociedad norteamericana, comenzando por su institución básica, la familia. El aumento de los divorcios que se registró entre 1960 y 1983 hizo que se duplicaran las familias en las que los hijos vivían sólo con la madre y creciera de forma espectacular el número de adolescentes que abandonaban sus casas para vivir en la calle. La misma institución familiar estaba en tela de juicio y eran cada vez más numerosos los que buscaban una vida de *single*.

La que en 1988 eligió a Bush o que en 1984 había reelegido a Reagan con una amplia mayoría era, pues, una nación distinta de la que había elegido a Carter en 1976 o al propio Reagan en 1980. Se plantea, pues, el problema de explicar los motivos por los que esta movilidad social coincidió con una estabilidad política superior a diez años.

Lo más natural es buscar la respuesta a este interrogante en primer lugar en la andadura de la coyuntura económica. En el momento de su elección,

Reagan heredó una situación complicada: había ocho millones de parados y la inflación se situaba en el 13,5%. Uno de los instrumentos a los que acudió para dar impulso a las inversiones y reactivar la actividad económica consistió en una política de considerables rebajas fiscales a favor de las empresas y de las rentas más elevadas. Las primeras se beneficiaron de ellas en una medida que rondaba el 20% y las segundas hasta un límite del 70%. Al mismo tiempo, la administración se empeñó en contener el nivel de los salarios y el gasto en asistencia social. Se ha calculado que entre 1979 y 1993, mientras que el índice de las retribuciones de los trabajadores cualificados experimentó una ligera subida (de 100 a 103), el de los trabajadores no cualificados sufrió un importante descenso (de 100 a 79). En conjunto, la renta media familiar permaneció, pues, sustancialmente invariable. Para impedir aumentos, en su opinión injustificados, de los niveles salariales, la administración no dudó en recurrir a las maneras fuertes, como en el caso de los 11.5000 controladores de vuelo afiliados al sindicato PATCO, que fueron todos despedidos. En lo que se refiere a la asistencia social, las conquistas de los años sesenta no se tocaron y el gasto total experimentó incluso un incremento, aunque inferior al del gasto militar. No obstante, el sistema norteamericano de seguridad social seguía estando muy por debajo del europeo y no cubría a la totalidad de la población. El porcentaje de parados que recibían el subsidio había bajado, por ejemplo, del 81% de 1975 al 26% de 1987. En particular, la asistencia sanitaria tuvo que afrontar, con medios inadecuados, aquel auténtico flagelo que fue la epidemia de SIDA. A principios de los años noventa eran dieciocho millones las personas afectadas.

Así pues, las directrices de política económica adoptadas por la nueva administración tenían un precio y quienes lo pagaban eran las clases sociales más desfavorecidas: en 1990, el porcentaje de ciudadanos norteamericanos que vivían por debajo del nivel de pobreza era del 14,2%. Los topes se encontraban, naturalmente, en las comunidades de color, hispanos y negros. En cambio, bastante mejores eran las condiciones de la comunidad asiática y en particular de los coreanos, que disponían de una red de pequeñas actividades comerciales.

En un primer momento, sin embargo, la medicina amarga de la administración de Reagan funcionó. Al cabo de pocos años, la inflación quedó reducida y bajo control y el nivel de desempleo, rebajado en casi la mitad. Entre 1979 y 1989, el PIB experimentó un crecimiento medio de un 2,6% anual, una situación no excepcional pero sí tranquilizadora. Pero también en este caso, había un revés de la moneda que consistía en el déficit de un presupuesto del estado (283 mil millones de dólares en 1986) sobre el que pesaba, como veremos, un gasto militar cada vez más oneroso, y de una balanza comercial (ciento sesenta mil millones de dólares en 1987) que se hacía cada vez más grave a causa de la sobrevaloración del dólar respecto a las monedas

de los competidores extranjeros. Estos últimos, especialmente árabes y japoneses, atraídos por los altos tipos de interés, invertían una parte de sus beneficios en los Estados Unidos.

Un contradicción tan flagrante no podía durar mucho tiempo. Una primera señal de alarma sonó en octubre de 1987, cuando la bolsa de Wall Street experimentó una caída del 25 % en pocos días. Desde entonces la andadura de la coyuntura entró en una fase declinante: el índice de la producción fue bajando gradualmente, hasta tocar en 1991 el nivel negativo del 0,7 %, y en cambio el del paro pasó del 5,5 al 7,1 % a principios de 1992. Por lo tanto, volvieron a ser actuales los discursos y los razonamientos de los setenta sobre el «declive relativo» de los Estados Unidos.

Por todo lo dicho hasta aquí, me parece que resulta apropiada la caracterización de la era reaganiana que da Federico Romero, al definirla como «una compleja transformación económica en la que coincidían crecimiento y decadencia, innovación e inmovilismo, enriquecimiento y miseria». Por otra parte, y para retomar el hilo de nuestro discurso, ello implica que las motivaciones de la estabilidad política de la que gozaron los Estados Unidos en los años ochenta y del éxito republicano no cabe buscarlas –o por lo menos no sólo– en el terreno de la política económica. Es necesario también acudir a otros elementos, elementos de carácter político y también psicológico.

El ciudadano medio norteamericano, que había vivido con angustia los días oscuros de Vietnam y de la humillante ocupación de su embajada en Teherán por parte de los estudiantes islámicos, era consciente de las dificultades y contradicciones de la sociedad en la que vivía. Conocía sus desigualdades y por ello no se atrevía a adentrarse en los guetos negros de las grandes metrópolis. También sabía que vivía en un país endeudado y se lo recordaban las fábricas y los rascacielos comprados por jeques árabes, empresarios y especuladores japoneses o los cada vez más numerosos automóviles japoneses en circulación, que cada día veía con sus propios ojos. Tenía, pues, muchas razones para sentirse desorientado y deprimido. Por lo tanto, se trataba de devolverle la conciencia de ser, a pesar de todo, el ciudadano de la mayor potencia del mundo. La tarea no era fácil, pero Reagan lo logró. No me refiero sólo a sus celebradas dotes de «gran comunicador» y al uso que, como actor consumado que era, supo hacer de los medios de comunicación. Para ser un «gran comunicador» hay que tener algo para comunicar. Lo importante es, pues, el contenido de su mensaje.

Como las administraciones republicanas de los años veinte, Reagan supo apelar a sentimientos y reflejos profundamente enraizados en la tradición nativista y conservadora norteamericana: el individualismo del *self made man*, que consigue construir su vida y su bienestar con sus propias fuerzas y rechaza la ayuda del estado y de la asistencia pública; la desconfianza hacia todo lo que no es norteamericano y en particular, y sobre todo, el aborreci-

miento y el miedo del comunismo, entendido como fenómeno internacional y omnímodo. Todos los que en el mundo se oponían a América o cuyos comportamientos se consideraran como una amenaza para su seguridad, eran comunistas o, en la hipótesis más benévola, instrumentos inconscientes de Moscú. Así pues, fue basándose en la vuelta a la lógica y al espíritu de los años de la guerra fría como Reagan pudo construir el consenso del que su persona y su administración gozaron.

Para dar cuerpo a esta línea política se rodeó de colaboradores que compartían sus coordenadas y sus planteamientos. Tales eran el secretario de estado de Defensa, Caspar Weinberger, y la embajadora ante la ONU, Jeane Kirkpatrick. Una formación y una aproximación a los problemas más profesionales tenía, en cambio, el secretario de estado, Alexander Haig. Por eso no tardó en encontrarse en desacuerdo con el presidente y sus más directos colaboradores, a propósito de la negociación sobre los euromisiles y otras cuestiones, y en junio de 1982 presentó su dimisión. En sustitución fue llamado George Schultz.

Una política de «enseñar los dientes» como la que Reagan quería perseguir, no era concebible sin una adecuada fuerza militar con el consiguiente aumento de los gastos en el sector. En efecto, éstos experimentaron, entre 1980 y 1987, un incremento que consistió en pasar del 22,7 al 28,8 % del gasto público total. Así, nuevos sistemas de armamento se añadieron al ya tremendo potencial bélico norteamericano: los misiles intercontinentales MX, los bombarderos B1, los misiles de los submarinos Trident. Pero la iniciativa más revolucionaria fue la que el presidente anunció en marzo de 1983, cuando se dirigió a la comunidad científica para pedirle que pusiera a punto un sistema de defensa que protegiera a la humanidad de la amenaza de la bomba atómica, que la propia comunidad científica en su tiempo había realizado.

Nació así la Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI, en sus siglas en inglés), un proyecto faraónico en el que se invirtieron cifras enormes y que tendría que asegurar a Estados Unidos una condición de invulnerabilidad y en consecuencia desanimar cualquier posible tentación de disparar el primer misil. Al impulsar esta primera fase de la carrera de rearme, Reagan y sus colaboradores eran conscientes de que la Unión Soviética, si quería mantener el paso y conservar aquella «paridad estratégica» que con tanto esfuerzo había conseguido, debería someter su economía a una presión que no estaba en condiciones de soportar sin imponer más sacrificios a una población ya my afectada. Y no sólo eran conscientes de ello, sino también estaban decididos a provocar la «bancarrota» de la URSS.

En vistas y con la perspectiva de este objetivo, la iniciativa de la política exterior norteamericana se desplegó en toda su amplitud. En primer lugar, como es obvio, lo hizo en el «patio de casa», es decir, en el Caribe y en Amé-

rica central. En octubre de 1983, unidades de marines desembarcaban en la pequeña e inocua isla de Granada, a cuyo gobierno libremente elegido, Washington acusaba de connivencia con Cuba y con la Unión Soviética. En realidad, lo que pedía era poder construir una pista de aeropuerto, para poder incrementar el turismo. Pero la ocasión era favorable para «enseñar los dientes» y exaltar a la opinión pública sin correr mayores riesgos. Mucho más complejo era el asunto de la postura a mantener hacia el gobierno sandinista de Nicaragua, también acusado de ser una avanzadilla comunista en el continente americano. En diciembre de 1982 el Congreso, en el que los demócratas conservaban la mayoría, se opuso a la asignación de fondos en favor de la guerrilla antisandinista de los *contras*. Para sortear el obstáculo se recurrió al subterfugio de financiar a los contras con los beneficios de las ventas de armas, también clandestinas, a Irán, un país contra el que formalmente estaba vigente el embargo. Esta «acción encubierta», que fue llevada a cabo por la CIA y que, naturalmente debería quedar en secreto, fue divulgada y denunciada por la prensa, lo que creó no poco embarazo en la administración. No obstante, su postura y su comportamiento para con el gobierno de Managua no sufrieron, como veremos, sustanciales modificaciones.

En Oriente Medio la línea política de la administración de Reagan fue la de incrementar las ayudas económicas y militares a los estados considerados fiables, como Egipto, Jordania, Arabia Saudí y Kuwait. Pero los mayores beneficiarios de suministros de armas fueron los muyaidines afganos, empeñados en la lucha contra la invasión soviética. Con los países considerados poco fiables, especialmente si eran responsables de acciones de terrorismo, la lógica fue la de la represalia. Así lo experimentó la Libia del coronel Gadafi, cuya capital fue sometida en abril de 1986 a un bombardeo aéreo: otra vez «enseñaba los dientes». Sin embargo, en el complicado y cambiante escenario mediorientaI, un punto firme de la política de la administración de Reagan consistía en su empeño y su soporte en favor de Israel, que se mantuvo sustancialmente también cuando, a partir de 1987, se fue desarrollando en los territorios palestinos ocupados por el estado de Israel el movimiento denominado como la *intifada* («la rebelión de las piedras») y la cuestión palestina se impuso en el escenario internacional. En efecto, la postura de los Estados Unidos se diferenció de la de los mayores estados europeos, que reconocían en la OLP un interlocutor válido, por una mayor dosis de tibieza hacia las reivindicaciones palestinas y por el apoyo, discreto y prudente, a las posiciones israelíes. Pero ya tendremos ocasión de volver sobre este argumento.

Finalmente, por lo que respecta a las relaciones con China, durante su campaña electoral Reagan se había pronunciado contra el *Taean Relations Act*, denunciándolo como una traición a un viejo y experimentado aliado; pero, una vez asumida la presidencia, las relaciones chino-americanas, tras un período inicial de frialdad, volvieron a ser cordiales y así seguirían

mientras continuara el estado de tensión existente entre China y la Unión Soviética.

En efecto ésta, que en un discurso de marzo de 1983 Reagan había definido como «el imperio del mal», seguía siendo el enemigo principal. El discurso mencionado fue seguido por el anuncio del proyecto SDI. Así, en las relaciones entre las dos superpotencias comenzaba una nueva fase de tensión, que llegó a su cúspide cuando, el 1 de septiembre de 1983, un avión civil surcoreano con 269 personas a bordo fue abatido por un misil en el espacio aéreo soviético por haber sido confundido con un bombardero norteamericano. Pero el asunto predominante seguía siendo, como se ha visto, el de los euromisiles. En la víspera de la apertura de las negociaciones de Ginebra que debían afrontar la cuestión, en noviembre de 1981, Reagan propuso la fórmula de la «opción cero»: los Estados Unidos renunciaban a instalar los misiles en Europa occidental a condición de que los soviéticos retiraran los que ya habían desplegado en la Europa oriental. Pero quedaba abierto el problema de los misiles franceses e ingleses, que los soviéticos pedían que se desmantelaran, petición que los occidentales no estaban dispuestos a aceptar. Las negociaciones se prolongaron durante mucho tiempo y en un momento dado pareció que se había alcanzado un acuerdo informal entre el negociador norteamericano, Paul Nitze, y el soviético, Kvitinsky, durante un encuentro que fue llamado «el paseo en el bosque». También en noviembre, el Parlamento federal alemán autorizaba el despliegue de los misiles Pershing y Cruise en su territorio y los primeros misiles se instalaban en Inglaterra. La cuestión, por tanto, estaba cerrada y a los soviéticos no les quedaba más remedio que tomar nota, abandonando tanto la mesa de las negociaciones sobre los euromisiles como la del tratado START. Además, devolviendo el feo del boicot de las Olimpiadas de Moscú de 1980, decidieron no acudir a las de Los Angeles de 1984. La ausencia de los atletas soviéticos y de los países satélites permitió al equipo norteamericano ganar gran parte de las competiciones, y las Olimpiadas se convirtieron así en una celebración de la potencia y del orgullo de la América reaganiana.

Pero mientras tanto en Moscú llegaban a su madurez importantes novedades. Muchas señales evidenciaban que la designación de Mijail Gorbachov como secretario general del Partido Comunista en marzo de 1985 (véase cap. 32), comportaría una radical revisión de las orientaciones de la política interior y exterior soviética. Con el paso de los meses, se veía con cada vez mayor claridad que el nuevo equipo en el poder en Moscú era plenamente consciente de la crisis que hacía tiempo afectaba al país y para salir de ella estaba decidido a liberarse del peso de la carrera armamentística. Por lo tanto, un nuevo escenario internacional se iba perfilando y también en Washington y en las capitales europeas se presentaba el problema de revisar las coordenadas de las respectivas políticas exteriores. En octubre de

1985, Reagan y Gorbachov se encontraron en Ginebra. La cumbre no produjo resultados concretos, pero otros, mucho más productivos, llegarían. El sistema de las relaciones internacionales entraba en una fase de movimiento y de fermentación que se terminaría sólo en octubre de 1989 con la caída del muro de Berlín. El papel que los Estados Unidos tuvieron en esta nueva constelación internacional fue, naturalmente, relevante, pero forma parte de un complejo cruce de acontecimientos y factores de diversa naturaleza. Por consiguiente, nos ha parecido justo aplazar su exposición al capítulo en el que relataremos los avatares que llevaron al desmembramiento del bloque soviético y de la propia Unión Soviética.

36.2. LA COMUNIDAD EUROPEA

En su conjunto, los indicadores relativos al nivel de crecimiento del Producto Interior Bruto, a la ocupación y a las inversiones en la Europa de los años ochenta evidencian un moderado aumento en comparación con los de la década anterior. Sin embargo, cabe analizar estos elementos uno por uno, tanto en términos de tiempo como en términos de espacio. En primer lugar constatemos que en los primeros cinco años la tasa de crecimiento se queda estancada y la inflación sube, causando el fenómeno de la estagflación; en la segunda mitad de la década, en cambio, se experimenta el fenómeno inverso: a una tasa de crecimiento más vivaz se corresponde un descenso de la inflación. El único índice que sigue invariado o experimenta modificaciones poco relevantes es el del paro: en 1990 había aumentado en Francia, Irlanda, Italia y España; disminuido, en Bélgica, Dinamarca, la RFA, Holanda e Inglaterra. Pero en la mayoría de esos países se mantenía en un porcentaje elevado, desde un mínimo de 5,9 % en Alemania federal al 15,6 % de España, en 1982.

A esta inversión de tendencia entre el primero y el segundo quinquenio contribuyó ciertamente la bajada del precio del petróleo, que pasó de un máximo de 36 dólares por barril en 1981 a 11 dólares en 1986; pero es evidente que también otros factores, como la andadura positiva de las exportaciones, facilitada por la sobrevaloración del dólar, concurrieron a hacer posible esta reactivación. Porque lo que se perdía al adquirir petróleo en dólares, podía recuperarse mediante los beneficios de las exportaciones al mercado norteamericano.

Pero los problemas de la Comunidad Europea y de los estados miembros no dependían sólo de factores coyunturales. En efecto, también la sociedad europea, como la norteamericana, estaba atravesando una fase de reconversión y reestructuración muy compleja. El mercado del trabajo resultaba el más directamente afectado; la innovación tecnológica y el proce-

so de terciarización producían, aunque en una medida menos llamativa que en los Estados Unidos, fenómenos análogos a los que hemos observado en este país. Dondequiera, aunque de formas distintas, se ampliaba la tijera entre trabajo cualificado y no cualificado, entre trabajo fijo y trabajo negro y entre trabajo de dedicación exclusiva y trabajo a tiempo parcial; dondequiera aumentaba el porcentaje de ocupación femenina: en Inglaterra el número de mujeres ocupadas en 1990, muchas de ellas a tiempo parcial, era poco inferior al de los hombres y en Italia creció en un 44% entre 1972 y 1985; dondequiera en fin, se recurría a la mano de obra inmigrante para las ocupaciones menos cualificadas. También países como Italia o España, que en los años sesenta habían exportado mano de obra, ahora se habían convertido en meta del flujo creciente de inmigrantes procedentes en gran medida de los países extracomunitarios. En Italia, a lo largo de la década, fueron más de seiscientas mil. Esto provocó, incluso en países que hasta entonces habían permanecido inmunes a formas de xenofobia, el nacimiento y el desarrollo de partidos y movimientos cuya principal reivindicación era la de bloquear la inmigración, cuando no expulsar a los inmigrantes. Tales fueron, en Francia, el *Front National* de Jean Marie Le Pen, que en las elecciones de 1986 cosechó casi un 10% de los votos, y en Alemania los *Republikaner*, que en las elecciones europeas de 1989 obtuvieron el 7,1%. En Inglaterra, donde hacía tiempo que se anidaba la tensión, se produjeron episodios de rebeliones raciales, en particular en el barrio londinense de Brixton y en de Toxteth, en Liverpool.

Las transformaciones que se habían producido en el mercado de trabajo no carecieron de efectos, tanto en Europa como en Norteamérica, sobre la estructura de la familia clásica; aumentaban los divorcios en Inglaterra, tras la aprobación en 1970 de una ley que abolía el delito de adulterio, se duplicaron en pocos años; se elevaba para ambos sexos la edad considerada apta para el matrimonio; crecía el número de hijos ilegítimos o nacidos fuera del matrimonio y el de los solteros. Sobre todo, disminuía la tasa de natalidad. La más baja era la de Italia, que hasta los años sesenta había estado entre los países más prolíficos de Europa.

Otro problema con carácter estructural, que a lo largo de los años ochenta fue cobrando cada vez más importancia, era el del medio ambiente. Lo testimonia la proliferación de grupos ecologistas o «verdes» en casi todos los países europeos. En la RFA, como veremos, el movimiento ecologista llegó a dar vida a una fuerza política considerable. El objetivo principal de estos movimientos era el de la renuncia definitiva a la energía nuclear y el cierre de las centrales existentes. La oleada de emoción que provocó el desastre de Chernóbil contribuyó mucho a sensibilizar a amplios sectores de la opinión pública sobre los problemas ambientales. En noviembre de 1987, los ciudadanos italianos se pronunciaron, mediante referéndum, en favor de la re-

nuncia a la energía nuclear y el cierre de las pocas centrales existentes. El ejemplo, por lo demás, no fue seguido por los demás grandes países europeos.

Los problemas coyunturales y estructurales que los países de la Comunidad Europea se veían obligados a afrontar, presentaban, pues, muchas analogías y es evidente que las transformaciones que se habían producido en la composición de la fuerza de trabajo y en las relaciones sociales imponían un replanteamiento y una adecuación de las aproximaciones, de los instrumentos y de las políticas adoptados con anterioridad y en particular una reforma del *welfare state*. Pero es igualmente evidente que los intentos de solución que se experimentaron fueron distintos según las diversas situaciones nacionales.

El caso que se señala por su mayor nivel de radicalismo es el de Inglaterra.

36.3. LA INGLATERRA DE MARGARET THATCHER

Gracias a la victoria obtenida en las elecciones de mayo de 1979 (véase cap. 33), el cargo de primer ministro fue asumido por Margaret Thatcher, quien desde 1975 encabezaba el Partido Conservador. Dotada de un fuerte carácter y acostumbrada a avanzar en un partido de tradición machista, desde el principio la Thatcher imprimó en su gobierno la marca de su personalidad, tanto en la elección de los ministros y de los colaboradores, la mayoría de los cuales fue escogida por su fidelidad a ella y a sus convicciones, como en la formulación de las directrices de gobierno. Éstas consistían esencialmente en el abandono de los planteamientos keynesianos a los que se habían ceñido, desde el plan Beveridge en adelante, los gobiernos laboristas, y que los gobiernos conservadores nunca se habían atrevido a poner seriamente en discusión; a ello se añadía la adopción de una política económica de tipo monetarista y liberalista. En la práctica, estas opciones no diferían de las de la política económica reaganiana: considerables desgravaciones de la carga fiscal para las rentas más altas y recortes del gasto público con el objetivo de hacer bajar la inflación y reactivar las inversiones y la ocupación. Una medida de apoyo de semejante política económica consistía en la reducción del poder de contratación de los sindicatos, lo que se llevó a cabo mediante una ley adecuada, el *Tibbit Act* de 1982, que introducía una serie de limitaciones.

Los resultados de estas medidas no fueron los esperados. Entre 1979 y 1981 el Producto Interior Bruto sufrió una reducción del 5,5 % y la renta *per capita*, del 2 %; el paro alcanzó la cifra de 3.200.000 personas en septiembre de 1982, concentradas en gran medida en las regiones de norte, las menos desarrolladas del país, y la balanza de pagos quedó ampliamente deficitaria. El único resultado conseguido fue la reducción de la inflación. Pero el balance total fue decepcionante.

Pero la personalidad de la primera ministra no se limitaba a sus convicciones de política económica. Margaret Thatcher poseía un fuerte instinto político y conocía bien el estado de ánimo y las reacciones de su pueblo. Cuando en abril de 1982, el sanguinario régimen argentino envió un cuerpo de expedición a las Islas Falkland-Malvinas, reivindicando su soberanía, ella supo apelar a una opinión pública cuyo orgullo nacional e imperial convivía con un arraigado y genuino sentimiento democrático, aquella misma opinión pública que un año antes había aclamado la boda entre el príncipe de Gales y la veinteañera Diana Spencer, la futura «princesa del pueblo».

La Thatcher no dudó en despedir a su ministro de Exteriores, lord Carrington, obligado a dimitir al ser acusado de imprevisión, y en decidir el envío de un cuerpo de expedición de 28.000 hombres que en junio llevó a cabo la reconquista de este archipiélago perdido en el hemisferio sur, a 15.000 kilómetros de Londres. Anteriormente, en mayo de 1980, ella había cosechado otro éxito, al obtener una considerable rebaja de la contribución inglesa a las arcas de la Comunidad, un resultado que gustaba a los «euroescépticos», tanto conservadores como laboristas.

Así pues, las decepciones de la política interna resultaban compensadas por la recuperación de la identidad y del prestigio fundamentados en valores seguros, aquellos valores victorianos evocados delicadamente en las películas de James Ivory. Margaret Thatcher supo aprovechar y capitalizar este momento y este estado de ánimo y en mayo de 1983 convocó nuevas elecciones, en las que su partido resultó vencedor con el 42 % de los votos contra el 28 % de los laboristas y 400 escaños contra 207. El voto a favor de los *tories* fue especialmente compacto en Londres y en las más ricas regiones meridionales del país. Pero cabe añadir que esta victoria fue propiciada también por las divisiones entre sus adversarios. En el congreso laborista de noviembre de 1980, el candidato de la izquierda, Michael Foot, autor de una biografía de Bevan, había ganado al candidato moderado, Denis Haley, y posteriormente se había ido reforzando en el partido la corriente extremista que pedía la salida de Inglaterra de la TAN y de la Comunidad Europea y el desarme unilateral. Era bastante para que algunos prestigiosos representantes europeístas decidieran abandonar el partido y formar en marzo de 1981 un Partido Socialdemócrata que se presentó a las elecciones aliado con los liberales, obteniendo por otra parte escasos resultados. A causa del sistema electoral uninominal, en efecto, la alianza obtuvo sólo veintitrés escaños, a pesar de haber cosechado el 25 % de los votos.

Fortalecida por el éxito obtenido, Thatcher volvió a lanzar su política de desgravaciones fiscales y recortes del gasto público. Por otra parte, el servicio sanitario nacional, joya del reformismo de la posguerra, fue tocado sólo marginalmente. La mayor novedad de este nuevo curso político la constituyeron una serie de privatizaciones de industrias nacionalizadas, tales como British Airways, British Steel, British Telecom e incluso la prestigiosa Roll

Royce. El precio de venta a los empresarios privados era con frecuencia inferior a su valor real, así que los que habían comprado sus acciones realizaron importantes ganancias cuando éstas se revalorizaron. Y eran muchos los que habían comprado: a lo largo de la década el número de inversores en la Bolsa aumentó de tres a nueve millones.

Una parte de los beneficios obtenidos se invirtió en la compra de una vivienda, que fue alentada dando la oportunidad a los inquilinos de casas de titularidad pública de comprar a un precio rebajado y proporcional a la duración de su contrato. Así, el número de ciudadanos propietarios de una vivienda llegó al porcentaje del 58 %.

Todo ello sirvió para reanimar el mercado y elevar el tono de la economía; la inflación continuó bajando, el paro se redujo, la balanza comercial se benefició de la valorización de los yacimientos petrolíferos del mar del Norte y la tasa de crecimiento fue del 3,7 % en los años entre 1984 y 1988. Pero, como en los Estados Unidos, también existían las víctimas de esta clase de economía de mercado: en 1989 los que vivían por debajo del límite de la pobreza eran 1.600.000. Y había derrotados. Tales eran los mineros, que en 1984 comenzaron una huelga contra la clausura de los pozos que se prolongó durante un año y terminó con su derrota total; a raíz de ésta, la mitad de los mineros no renovó su afiliación a su histórico sindicato. Otra categoría derrotada fue la de los tipógrafos de periódicos que intentaron oponerse sin éxito a la introducción de las tecnologías computerizadas defendida por el magnate de las comunicaciones Rupert Murdoch. Mineros y tipógrafos eran de los sectores más aguerridos del sindicalismo inglés y su derrota no pudo dejar de reflejarse en el mundo del trabajo en su conjunto. Al final de la década, sólo uno de cada tres trabajadores estaba afiliado a las *Unions*.

Las elecciones de junio de 1987, en las que los conservadores, a pesar de registrar un pequeño descenso, mantuvieron una cómoda mayoría y los laboristas ganaron una veintena de escaños, marcaron la culminación de la carrera política de la Thatcher. A partir de entonces, el viento de la coyuntura favorable que había soplado en sus velas, se aplacó y fue invirtiendo su recorrido. A partir de 1988, los índices de la inflación y del paro volvieron a subir, la balanza comercial volvió a estar ampliamente en déficit y el tipo de interés tuvo que ser aumentado repetidas veces, hasta tocar el 15%. En semejante contexto, la iniciativa de la Thatcher de sustituir los impuestos locales con uno que afectaba a todos los ciudadanos sin distinción y no únicamente a los propietarios de inmuebles –la famosa *poll tax*– no podía no encontrar una fuerte oposición y desde luego no contribuyó a la popularidad de la primera ministra, que se había impuesto a pesar de las desconfianzas de su ministro de Hacienda, Nigel Lawson. La prueba se dio en las elecciones europeas de junio de 1989, en las que los laboristas, con el 40 % de los votos, sobrepasaron a los conservadores, que se quedaron en un 34 %.

Sin embargo, la *poll tax* no era el único asunto controvertido en el seno del gobierno. Un problema de gran importancia era el de la inserción o no de la libra esterlina en la banda de fluctuación prevista en el Sistema Monetario Europeo (véase cap. 33). Al final prevaleció la decisión de adherirse, pero no sin provocar agrias discusiones entre la primera ministra, que era contraria, y los ministros de Exteriores, Howe, y de Hacienda, Lawson, que eran favorables y acabaron ambos dimitiendo. La autoridad de la Thatcher estaba cuestionada y ello se vio cuando, en el congreso del Partido Conservador de noviembre de 1990, al haber obtenido sólo 204 votos contra los 152 de su antagonista Heseltine, se vio obligada a un segundo turno de votación. Ante este resultado, prefirió dimitir, dejando a la cabeza del gobierno a un hombre de su confianza, John Major.

Terminaba así la etapa (la palabra *era* me parece demasiado comprometedora) de Margaret Thatcher. La marca que había dejado en la sociedad británica era bien visible. Había creado sin duda menos igualdad y mayor injusticia social, pero también menor rigidez y mayor movilidad social. La «dama de hierro», como se la llamó, era constitucionalmente una conservadora, pero su conservadurismo no era el de muchos de sus compañeros de partido, el *quieta non movere* y la navegación a vista. En efecto, ella se daba cuenta de que su país no podía seguir viviendo sentado en los laureles y navegando de cabotaje, como lo había hecho en las últimas décadas. Lo que ella perseguía no era el *statu quo*, sino una restauración, lo cual también es una forma de cambio.

El proceso de transformación al que dio impulso y que intentó orientar resultará irreversible, pero no lo era la dirección hacia la que ella quería encarrilarlo.

36.4. LA EUROPA CONTINENTAL

En la República Federal de Alemania (RFA) la formación en octubre de 1982 del gobierno de coalición entre CDU y liberales presidido por Helmut Kohl (véase cap. 33) coincidió, como se ha visto, con una situación coyuntural difícil. Para hacerle frente, el nuevo gobierno no disponía más que de una exigua minoría, ya que algunos diputados liberales no habían aprobado la ruptura de la alianza con los socialdemócratas. Para salir de este punto muerto, Kohl, aunque sin estar constitucionalmente obligado a ello, decidió convocar nuevas elecciones para marzo de 1983. La jugada se reveló ganadora: la CDU y su aliada bávara, la CSU, rozaron la mayoría absoluta con el 48,8 % de los votos, mientras que los socialdemócratas experimentaban una flexión del 4,7 % en beneficio de los verdes, que al obtener el 5,6 % lograban superar el umbral del 5 % necesario para acceder al Parlamento federal.

Los instrumentos que utilizó el nuevo gobierno para superar la coyuntura desfavorable fueron los mismos que había empleado la Inglaterra de Margaret Thatcher: desgravaciones fiscales a favor de las empresas y recorte del gasto público. Pero a diferencia de su colega inglesa, Kohl, una vez más, buscó y pudo contar con una postura comprensiva por parte de los sindicatos, que limitaron sus reivindicaciones, otorgando la prioridad al problema del paro. Con todo, la mayor aportación a la superación de las dificultades llegó del incremento de las exportaciones, hecho posible por la sobrevaloración del dólar en relación con el marco. A partir de 1985, también las inversiones de las empresas privadas volvieron a subir y la recuperación, ya en marcha, su fue consolidando. La producción se mantuvo en una tasa de crecimiento sostenida, el índice de la inflación descendió por debajo del 2% y la presión fiscal también disminuyó. El único dato negativo era el índice de paro, que permaneció alrededor de la cifra de 2.200.000 personas. Ello influyó en los resultados de las elecciones de enero de 1987, en las que la CDU-CSU experimentó un descenso del 4,5%, en parte compensado por el aumento en un 2,7% de su aliado liberal. Por otra parte, los tradicionales antagonistas socialdemócratas también experimentaron una disminución, aunque ligera, en esta caso en beneficio de los verdes, que alcanzaron el porcentaje del 8,3% gracias a la notable fuerza de atracción que ejercían sobre las jóvenes generaciones. En general, el liderazgo democristiano y el prestigio del canciller salían reforzados de esta prueba y la economía alemana pudo seguir su carrera. En efecto, los años de 1989 y 1990 fueron los mejores de la década. La tasa de crecimiento fue del 4,2 en 1989 y del 5,5% en 1990 y el número de desempleados, por primera vez en diez años, también bajó a poco menos de dos millones. Estos resultados aparecen como tanto más brillantes en cuanto que el alemán fue, entre los gobiernos europeos, el que se mostró más receptivo hacia la nueva sensibilidad de la opinión pública por los problemas ecológicos y el que se empeñó en mayor medida en la política de defensa del medioambiente, logrando resultados visibles y sin renunciar, como sí hizo el italiano, a producir energía nuclear.

Por lo que respecta a la política exterior, el asunto predominante, desde el principio de la década, era, como sabemos, el de los euromisiles. Entre 1981 y 1983, la RFA fue escenario de imponentes manifestaciones pacifistas, en las que participaron miles y miles de personas, manifestaciones generalmente impulsadas por organizaciones juveniles, como los socialdemócratas de los Jusos y la juventud protestante. El propio Partido Socialdemócrata, en 1983, durante una conferencia que se celebró en Colonia, abandonó la fórmula de la «doble decisión» y se pronunció, con sólo trece votos en contra incluido el del ex canciller Schmidt, contra la instalación de los misiles en el territorio alemán. No obstante, esto no sirvió para impedir que en noviembre de 1983, al llegar el vencimiento de los términos previstos en el en-

cuentro de Guadalupe (véase cap. 32), la decisión definitiva del *Bundestag* fuese sin fisuras a favor de la instalación.

Con todo, la RFA seguía siendo el estado europeo más interesado en la mejora de las relaciones con Moscú y entre las opciones el gobierno de Kohl no figuraba el abandono de la *Ostpolitik*; la meta de la reunificación del país, constante y ritualmente confirmada, parecía todavía lejana y nadie podía imaginar la vertiginosa aceleración de los acontecimientos que se produciría dentro de pocos meses. En octubre de 1988, el canciller viajó a la capital soviética para encontrar a Gorbachov; allí negoció la concesión de un préstamo a la Unión Soviética de tres mil millones de marcos. Pero a partir de entonces el desarrollo de la política exterior alemana se convierte en parte de una trama de acontecimientos que culminará con la caída del muro de Berlín y la disgregación de lo que había sido el «bando socialista» y de la propia Unión Soviética. Por tanto, será oportuno, tal y como hemos hecho con la política exterior de la administración de Reagan, considerar todos esos acontecimientos dentro del contexto de una reconstrucción específica de esta compleja página de historia.

En Francia, la elección de François Mitterrand como presidente de la república y la formación del gobierno presidido por el socialista Pierre Mauroy (véase cap. 31) fueron percibidos por el electorado que había votado por la izquierda y por gran parte de la opinión pública como una vuelta al clima y las esperanzas de los años del Frente Popular y de la Liberación. El gobierno era consciente de ello y para corresponder a este clima se volcó en un amplio programa de reformas. Con una ley de febrero de 1982, se nacionalizaron cinco importantes grupos industriales, dos compañías financieras y cuarenta y dos bancos. Dos semanas después, siguieron la reducción de la semana laboral de 40 a 39 horas, la concesión de una quinta semana de vacaciones retribuidas, la bajada del límite de edad para jubilarse a los sesenta años y el aumento del salario mínimo. Este aluvión de reformas afectó también al aparato estatal y administrativo, que fue descentralizado; al mundo escolar, con la reforma de la enseñanza superior en diciembre de 1983 y la ley Savary sobre la reglamentación de la escuela privada, en mayo de 1984; y finalmente, a la administración de la justicia, con la abolición de la pena de muerte ya desde octubre de 1981.

Como en los demás países europeos esta estación de reformas vino a coincidir con una fase de baja coyuntura. El objetivo al que apuntaba el gobierno, el de la recuperación económica obtenida mediante la bajada del tipo de interés, la reducción del paro y el aumento del poder adquisitivo de la renta del trabajo, muy pronto se demostró inviable e incluso sus efectos fueron contrarios a los deseados y esperados. La inflación volvió, las empresas,

agobiadas como estaban por el peso fiscal y el coste del trabajo, perdían competitividad en el mercado internacional, lo que provocó el déficit de la balanza comercial, y el paro no daba muestras de disminución. La situación llegó a ser tan grave que obligó al gobierno a proceder tres veces entre el otoño de 1981 y el marzo de 1983 a la devaluación del franco y a decretar en otoño el bloqueo de precios y salarios.

A una política de expansión sucedía, pues, una política de austeridad. La desilusión y la frustración de los que habían esperado en un nuevo Frente Popular empujará, como veremos, a muchos electores de la izquierda a refugiarse en el abstencionismo o a depositar su voto en las listas ecologistas, cuando no incluso a votar para el *Front National* de Le Pen, como hicieron muchos electores comunistas. En el frente opuesto, estallaba el descontento de las corporaciones cuyos intereses se habían visto afectados : médicos, docentes de universidad, defensores de la escuela privada, que en junio de 1984 organizaron en París una gran manifestación de protesta. En las elecciones europeas de junio de 1984, los partidos de la mayoría de gobierno no fueron más allá del 33 % de los votos.

Se imponía un cambio en la conducción política y a ello proveyó el presidente Mitterand, designando a un nuevo primer ministro, Laurent Fabius, quien constituyó un gobierno del que los comunistas ya no formaban parte. Si el gobierno de Mauroy había naufragado en los escollos de una coyuntura desfavorable, el que presidió Fabius se valió de la fase ascendiente del ciclo, que se venía perfilando ya a partir del momento de su constitución, así que pudo estabilizar la situación económica y mejorar el nivel de la popularidad del gobierno. En las elecciones de 1986, celebradas con el sistema proporcional que se había vuelto a introducir en 1985, los socialistas se afianzaron como primer partido con el 32,6 %, pero los partidos de la derecha (UDF, RPR y otros) juntos alcanzaban el 45 % y se aseguraban la mayoría de los escaños. En los extremos del abanico político, los comunistas y el *Front National* de Le Pen obtuvieron el mismo porcentaje, poco superior al 9 %.

El encargado de formar el nuevo gobierno fue el gaullista Jacques Chirac, que en su trayectoria se apresuró a liberarse de una parte de lo que él consideraba el lastre generado por el celo reformador de Mauroy, volviendo a privatizar varias empresas y bancos que habían sido nacionalizados y aboliendo el impuesto sobre los grandes patrimonios. La «cohabitación» entre un presidente de izquierdas y un jefe del gobierno de derechas no duró mucho. En abril de 1998 Mitterrand, recién reelegido para la jefatura del estado con una cómoda mayoría, encargó al socialista Michel Rocard que formara el nuevo gobierno. Al no disponer éste de una mayoría fiable, se convocaron nuevas elecciones que otorgaron al Partido Socialista sólo una mayoría relativa, lo que obligaba al primer ministro a buscar el apoyo de los partidos centristas o de los comunistas, según las circunstancias. Pero a esta inestabi-

lidad política no se correspondía una análoga inestabilidad económica. La coyuntura seguía siendo favorable y el gobierno de Rocard se limitó esencialmente a secundarla hasta que duró. De hecho, cuando, en mayo de 1991, erosionado por los desacuerdos y las rivalidades intestinas, en parte alimentados por el propio presidente de la república, presentó su dimisión, el ciclo ya había comenzado a invertirse.

La andadura del ciclo económico en Italia a lo largo de los años ochenta es análoga a la de otros países europeos. También en la Península, los primeros años de la década fueron años difíciles: en 1980 la inflación llegó a un tope del 21,1 %, el índice del PIB estaba estancado y la producción industrial disminuía; paralelamente, aumentaba el número de los trabajadores que recibían el subsidio de paro. Incluso la mayor empresa del país, la FIAT, recurrió a este expediente. En consecuencia, en noviembre de 1980, se produjo un duro conflicto sindical del que los trabajadores salieron sustancialmente derrotados. A ello se añadían, para mayor zozobra, las secuelas del terrorismo y la agresividad cada vez más manifiesta de las asociaciones mafiosas: en septiembre de 1982 el general Carlo Alberto Dalla Chiesa, que había recibido el encargo de dirigir la lucha contra la mafia en Palermo, fue asesinado en Palermo junto con su esposa.

Los gobiernos que se sucedieron tras el fin de la época de la unidad nacional (véase cap. 33) estuvieron todos apoyados por mayorías heterogéneas formadas por la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y los partidos laicos menores, y se limitaron a una política de normal administración y de navegación a vista. Las elecciones de 1983 le dieron un vuelco a la vida política italiana, ya que la Democracia Cristiana experimentó una sangría de votos (del 38,3 al 32,9 %), el PCI se mantuvo en sus posiciones y los socialistas mejoraron algo las suyas.

Por tanto el encargo de formar el nuevo gobierno fue confiado al líder socialista, Bettino Craxi, quien había asumido la secretaría del partido en 1979, hombre tan dotado de instinto político como falto de escrúpulos. Éste permaneció en el cargo hasta marzo de 1987 –una duración poco habitual, cuando no excepcional, para un gobierno italiano– , lo que le permitió beneficiarse del cambio de coyuntura que también en Italia se fue perfilando a partir de 1983 y se consolidó en los años siguientes. La inflación fue poco a poco bajando, hasta llegar al 4,7% en 1987 , mientras que los índices del PIB y de la producción industrial se mantenían en niveles bastante altos. La marcha de la Bolsa reflejaba la euforia que reinaba entre los operadores económicos y, más en general, en la opinión pública. La prueba de ello se dio cuando, en un referéndum propuesto por el PCI para abrogar la ley que congelaba parcialmente la escala móvil, los electores se pronunciaron en fa-

vor del mantenimiento de la medida gubernamental. Otra prueba se dio en las elecciones de junio de 1987, en las que los comunistas experimentaron un importante descenso, mientras que los socialistas pasaron del 11,4% al 14,3%; también la Democracia Cristiana recuperó parte de los votos que había perdido en 1983 y pudo así reivindicar y obtener la presidencia del gobierno. Entre 1987 y 1992 se sucedieron en el cargo de presidente del consejo de ministros, a la cabeza de gobiernos de coalición basados en la alianza entre socialistas y democristianos, Giovanni Goria, Ciriaco de Mita y Giulio Andreotti, todos ellos miembros de la DC.

Lo que se calificó de «segundo milagro italiano» tenía, sin embargo, su revés de la moneda. En su búsqueda del consenso electoral, los partidos de la coalición, y especialmente los dos mayores, competían en copar los puestos de responsabilidad, tanto en las empresas públicas, como en la televisión, en los bancos, en la prensa, y rivalizaban en otorgar favores a sus respectivas clientelas, concediendo pensiones de ancianidad e invalidez u otras prebendas asistenciales a diestro y siniestro, pero sobre todo en el Sur. Todo esto tenía un coste, que fue asumido mediante un recurso masivo a la deuda pública que no tiene comparación con ningún otro país industrializado. En 1985 su importe total correspondía al 84,6% del PIB y en 1989, por primera vez, lo superó. El fruto de esta mezcla de dejadez democristiana y arribismo socialista no podía ser otro que una corrupción cada vez más generalizada que, si podía ser tolerada mientras la economía funcionaba, se hizo intolerable a partir de 1990, cuando comenzaron a dejarse sentir los efectos de una nueva recesión. La bomba estalló en la primavera de 1992, con los primeros escándalos y los procesos de *Tangentopoli* –término que definía el tráfico político de *tangenti*, «comisiones ilegales»–, que se llevarían por delante a una clase política entera. Pocos meses después, en septiembre, el gobierno presidido por el socialista Giuliano Amato se veía obligado a devaluar drásticamente la lira y en consecuencia salir del Sistema Monetario Europeo.

Comenzó entonces una política de saneamiento financiero que, con más o menos coherencia y competencia, fue llevada a cabo por las varias mayorías y coaliciones que se sucedieron en el gobierno, con el objetivo de cumplir con los parámetros del tratado de Maastricht y entrar a formar parte de la Unión Europea. Este objetivo fue alcanzado en marzo de 1998 por el gobierno de Romano Prodi.

La historia de la Europa occidental a lo largo de los años ochenta no termina, naturalmente, con la de los países de los que nos hemos ocupado hasta ahora, no sólo porque incluye la de los países menores, sino también porque es la historia de la Comunidad Europea, es decir, de un organismo cuya identidad e historia no se resumen en las de los países que forman parte de

él. Ello es tanto más cierto para la década de los ochenta, en cuanto que en esta época la Comunidad conoció transformaciones importantes.

En primer lugar, la Comunidad se amplió, incluyendo una serie de nuevos países. El primero en ser admitido en su seno fue Grecia, en enero de 1981. Al ser un país con escaso peso económico, su integración no planteaba las dificultades que, en cambio, sí planteaban las candidaturas, presentadas ya desde 1977, de los dos países de la península Ibérica, y especialmente la de España, cuya economía (el país detenía el récord europeo del desempleo, con casi el 20 %) y cuya agricultura suponían serios problemas de compatibilidad con la Política Agrícola de la Comunidad (PAC). La victoria del Partido Socialista en las elecciones de 1982 y la consiguiente formación de un gobierno encabezado por el dinámico Felipe González, aceleraron las negociaciones en curso. Así, en enero de 1986, España y Portugal entraron a formar parte de la Comunidad. En marzo del mismo año, mediante un referéndum popular, España se adhirió también a la OTAN, a la que Portugal pertenecía desde su fundación, integrándose en la Europa comunitaria también en el aspecto político y militar. En los años siguientes, España desempeñó un papel especialmente activo dentro de la Comunidad, defendiendo la necesidad de destinar mayores recursos a los países y las regiones menos desarrolladas.

Pero el acontecimiento más importante de la historia comunitaria durante la década fue el Acta Única firmada en febrero de 1986 como culminación de un largo trabajo de preparación desarrollado por la Comisión encabezada desde enero de 1985 por el socialista francés Jacques Delors. El Acta contenía el compromiso de transformar antes de 1992 la Comunidad en un «espacio sin fronteras internas en el que estará asegurada la libre circulación de mercancías, personas y capitales», abatiendo por ende todos las barreras, arancelarias y no arancelarias, además de una serie de vinculaciones jurídicas, fiscales y sanitarias. Pero la innovación más relevante consistía en la extensión del voto por mayoría cualificada a algunas decisiones relativas al funcionamiento del mercado interno, decisiones que antes se tomaban por unanimidad. De tal manera la Comunidad adquiría poderes propios en detrimento de la soberanía de los estados.

El Acta Única preveía también un cierto refuerzo de los poderes del Parlamento europeo, pero en lo que se refiere a la cooperación política, sus formulaciones eran harto genéricas y estaban muy lejos de asumir el espíritu y las instancias federalistas presentes en el Proyecto para el Tratado de la Unión Europea, que el diputado italiano Altiero Spinelli leyó en el Parlamento de Estrasburgo en 1982. En efecto, numerosos eran los obstáculos que se interponían en el camino de una cooperación política y de una Europa federal. Destacaba, entre otros factores, la falta de disposición por parte del gobierno inglés a incluir en las competencias de la Comunidad los

problemas relativos a las relaciones de trabajo, en el temor de que el ejemplo continental pudiera poner en peligro la «paz social» lograda en la isla tras las derrotas de los mineros y los tipógrafos (véase cap. 36). Pero el mayor obstáculo consistía en la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y en especial en la aplicación a esta de la regla de la mayoría cualificada. Aquí se enfrentaban dos planteamientos distintos: el de los «atlantistas», sobre todo Inglaterra y Holanda, que eran partidarios de una estrecha relación con la OTAN, y el de los «europeístas», en particular Francia y Alemania, que proponían revitalizar la vieja UEO y eran favorables a la constitución de una fuerza europea de defensa autónoma. La constitución de una brigada franco-alemana en enero de 1988 quiso ser un primer paso en esta dirección.

Es evidente que estas dos opciones implicaban una concepción distinta de las relaciones con los Estados Unidos. A este propósito no cabe duda de que la Alianza Atlántica se había reforzado gracias a la instalación de los misiles norteamericanos en Europa, pero tampoco hay duda de que persistían divergencias y fricciones que no dejaron de manifestarse, por ejemplo, en la postura ante el proyecto SDI de defensa misilística o en el distinto enfoque del asunto árabe-israelí, especialmente en relación con la OLP y su líder Yaser Arafat, que los europeos reconocían como interlocutor fiable, mientras que Washington insistía en considerarla como una organización terrorista. Las relaciones entre Italia y los Estados Unidos experimentaron un momento de tensión aguda en octubre de 1985, cuando el gobierno de Craxi se negó a entregar a los norteamericanos unos terroristas árabes capturados a bordo de un barco italiano. Otro asunto controvertido era el de la participación europea en la construcción de un gasoducto que unía Europa a la Unión Soviética.

La exigencia de una mayor cooperación política y militar seguía existiendo y los problemas relacionados con ella, incluido el de la PESC, volvieron a presentarse en las conferencias intergubernamentales que precedieron la cumbre que se celebró en Maastricht en febrero de 1992. Allí, como es sabido, se aprobó el tratado fundacional de la Unión Europea y se fijaron los plazos y los parámetros de convergencia para la adopción de la moneda única, prevista para el 1 de enero de 1999, plazo que ha sido respetado. En 1992 el Tratado de Maastricht fue ratificado, por este orden, por los Parlamentos de Luxemburgo, Grecia, Italia, Bélgica, España, Portugal y Holanda; en 1993 lo hicieron Inglaterra y Alemania. En cambio, se lo sometió a referéndum en Dinamarca, donde los electores se pronunciaron en contra, y en Francia, donde el sí prevaleció por un estrecho margen.

Sin embargo, en el terreno de la cooperación política los progresos logrados con el Tratado fueron menores. La fórmula de una Europa «con vocación federal», que figuraba en el mensaje que en diciembre de 1990 Kohl y Mitterrand enviaron a sus homólogos en vistas del Consejo de Europa de

Roma, no se encuentra en el texto de Tratado. En lo que se refiere a la PESC, se recurrió a una fórmula de compromiso bastante ambigua. De hecho, una política exterior y de seguridad de la Unión Europea no existía y ello se pudo comprobar ante la crisis que llevó a Yugoslavia a la disolución. El reconocimiento de Eslovenia y Croacia por parte de Alemania fue una decisión unilateral a la que los demás estados europeos se sumaron en un segundo momento y de mala gana. El desarrollo posterior de los acontecimientos en Bosnia proporcionó una nueva prueba de la incapacidad de los europeos para coordinar sus iniciativas. En efecto, fue sólo la decidida intervención norteamericana en agosto de 1995 la que detuvo el goteo de masacres que hacía tres años que se venían produciendo en la desventurada región.

En junio de 1997 el Consejo Europeo, reunido en Amsterdam, sometía a revisión el texto del Tratado de Maastricht al introducir en él unas importantes integraciones relativas, en particular, a la libertad de circulación de la mano de obra, ya regulada por los acuerdos de Schengen de 1985, a la inmigración y el derecho de asilo. Pero tampoco en esta ocasión se realizó progreso alguno en lo tocante a la política de seguridad y de coordinación de la política exterior. La única convergencia que existe en este aspecto entre los países europeos sigue siendo la que se produce bajo los auspicios de la ONU, como en el caso de la guerra del Golfo (véase cap. 38), o en el ámbito de la OTAN. Pero en este último caso, como se ha comprobado en los recientes acontecimientos de Kosovo, no sin fricciones y tensiones internas.

37

El fracaso de la *perestroika*

37.1. EL ASCENSO DE GORBACHOV Y LA *PERESTROIKA*

Al asumir el cargo de secretario general del PCUS, Mijail Gorbachov tenía 54 años, una edad poco habitual para un miembro del *Politburó* y más aún para un secretario general, en un país acostumbrado a ser gobernado por una gerontocracia. Pero no era sólo una cuestión de edad: su carrera se distinguía de la de muchos de sus compañeros en el aparato del partido por su rapidez, al haber pasado de ser responsable de la organización del partido en su ciudad natal, Stavropol, a miembro del Comité Central en 1971, miembro candidato del *Politburó* en 1979 y miembro efectivo en 1980; pero más aún se distinguía de sus colegas por su amplitud de horizontes. Se consideraba y era un marxista, pero su marxismo no era el esclerótico de la doctrina oficial, sino que, al contrario, estaba abierto al intercambio con otros enfoques y otras concepciones del mundo y, como tal, era susceptible de revisión. En efecto, quien siga la evolución de Gorbachov a través de sus escritos y, lo que más importa, sus actuaciones, puede constatar fácilmente que dicha revisión se produjo y que está en gran medida en deuda con las ideas expuestas por Andrei Sajarov en un opúsculo de 1968 (véase cap. 28). Me refiero, en particular, a su concepción de la «coexistencia pacífica», entendida no ya como convivencia entre dos sistemas opuestos e incluso contrapuestos, sino como cooperación entre ellos hasta la convergencia. Traducida a términos políticos, esta amplitud de horizontes implicaba ante todo una conciencia de la gravedad de la crisis de la sociedad soviética y de la contundencia de las decisiones que se imponían para intentar superarla.

El primer paso fue la elección de sus colaboradores: en pocos meses la composición del *Politburó* resultó radicalmente renovada. Salieron personajes destacados como el ministro de exteriores Andrei Gromyko, el mismo

que había propuesto la designación de Gorbachov y que fue compensado con el cargo honorífico de presidente del Soviet Supremo; Victor Grinscin, él también candidato a la secretaría general, y Grigori Romanov, jefe de la poderosa organización de Leningrado y adversario de Gorbachov. Por contra, entraron Boris Yeltsin, jefe de la organización de Sverdlosk; el georgiano Eduard Shevardnadze, quien sustituyó a Gromyko en el ministerio de exteriores; Nikolai Rizhkov, Alexander Yakovlev, que desde 1972 era embajador en Canadá, e Igor Ligachov, todos hombres de confianza del secretario general. El Comité Central y el aparato periférico de partido también fueron ampliamente renovados. Entre 1985 y 1986 el 60 % de los secretarios de *obkom* y *rajkom* fueron sustituidos.

Por otra parte, estos cambios no hubiesen sido suficientes para sacudir a la opinión pública del entumecimiento en el que había caído y para restituir credibilidad al partido y a las instituciones, si las directrices políticas y de gobierno no hubiesen también evolucionado. Gorbachov era consciente de ello y tampoco en este caso se tardó en vislumbrar los indicios de su determinación a cambiar. En junio de 1986 el *Glavit*, la oficina que presidía la censura, recibió instrucciones para relajar los controles, lo que permitió el nacimiento de una serie de nuevos periódicos y revistas que no estaban alineados en las posiciones oficiales, sino, al contrario, eran cada vez más críticos hacia éstas, y favoreció la publicación de textos literarios e históricos anteriormente prohibidos, entre ellos *Doctor Zivago* de Boris Pasternak y *Vida y destino* de Vasili Grossmann. Con todo, la medida más significativa fue la de hacer volver de su confinamiento de Gorky, en diciembre de 1986, al científico Andrei Sajarov. No se trataba de un acto de clemencia, sino de una reparación, como el propio Gorbachov reconoció cuando, pocas semanas después, llamó por teléfono al académico.

Pero ni siquiera estas y otras señales eran suficientes para restituir la confianza a la opinión pública. En efecto, era común la sensación de que las causas más profundas de la crisis se tenían que buscar en el sistema político e institucional vigente y en el papel de monopolio que en él ejercía el Partido Comunista.

En el informe que Gorbachov leyó en el XXVII Congreso del partido en febrero de 1986, se encuentran por primera vez las consignas a las que ha quedado vinculado su nombre: *perestroika* («reestructuración»); *glasnost* («transparencia») y democratización. El secretario volvió a insistir en ellas en su discurso ante el pleno del Comité Central de enero de 1987, añadiendo propuestas concretas acerca de los procedimientos electoral a seguir dentro del partido y en los soviets de todos los niveles, procedimientos que deberían basarse en el secreto del voto y la pluralidad de las candidaturas. Pero no tardaron en manifestarse fuertes resistencias a llevar a la práctica estas propuestas, no sólo por parte de los sectores más conservadores del partido, sino también en el seno del propio círculo de colaboradores directos de

Gorbachov y en particular por parte del responsable de la ideología, Igor Ligachov. A éste se le encargó la elaboración del informe de apertura del pleno que se celebró en febrero de 1988 y él no dejó de aprovechar la ocasión para avisar al partido de los riesgos que la *glasnost* podría conllevar, obligando a Gorbachov a ponerse a la defensiva. De nuevo Ligachov sería el inspirador de un artículo que apareció en marzo en un periódico de Leningrado, firmado por una desconocida profesora llamada Nina Andreeva y titulado «Sobre los principios no puedo transigir»; los «principios», como se leía claramente en el texto, eran los de la ortodoxia oficial. En esta ocasión Gorbachov tuvo que constatar que algunos de los miembros del *Politburó* compartían las preocupaciones expresadas en el artículo. Fue sólo en la XIX Conferencia del partido, que se celebró en junio de 198, cuando el secretario logró que se aceptara su propuesta de constituir un Congreso de diputados del pueblo compuesto por 2.250 miembros, una tercera parte de los cuales serían personalidades designadas por «organizaciones públicas», entre ellas obviamente el PCUS, mientras dos tercios serían los candidatos que obtuvieran el mayor número de votos en cada colegio, en caso de que se presentaran más candidaturas. Este Congreso, a su vez, debería elegir al Soviet Supremo. No se trataba sólo de una innovación respecto del sistema electoral vigente, que de hecho excluía la posibilidad de múltiples candidaturas, sino también, y sobre todo, de una «reforma del sistema político», como reza la expresión que figura en el informe introductorio. En efecto, el papel del partido en el sistema soviético se rebajaba y el eje del poder venía a desplazarse, en perspectiva, del partido al estado. Esto se confirmó en las elecciones que se celebraron con este sistema en marzo de 1989. Muchos representantes locales del partido fueron rechazados por los electores, y si bien el 80 % de los elegidos eran miembros del Partido Comunista, éstos sin embargo, como los hechos demostrarán, no sentían su pertenencia como un freno a la libre expresión de sus convicciones. Ello fue claro ya desde a primera sesión del Congreso, que se celebró del 25 de mayo al 9 de junio, y fue seguida en televisión por decenas de millones de ciudadanos.

Pero incluso tras la aprobación del nuevo sistema electoral, el ordenamiento institucional seguía siendo incierto e híbrido y la línea divisoria entre las competencias del partido y las del estado seguía sin estar clara. En efecto, el papel de dirección del partido estaba sancionado por el artículo 6 de la Constitución de 1977. La propuesta de abolir este artículo, avanzada por Sajarov y algunos diputados durante la segunda sesión del Congreso, fue rechazada por una mayoría de 1.138 votos contra 839 y será sólo en febrero de 1990 cuando, por iniciativa de Gorbachov, será aprobada por el Comité Centra y ratificada por el Congreso. De momento, el «estado de derecho» que el secretario aspiraba a construir todavía estaba por alcanzar, lo cual no significa que las instituciones democráticas que hoy en día existen

en Rusia no tengan su origen en el período que precedió a la disolución de la Unión Soviética.

37.2. HACIA EL FINAL DE LA SEGUNDA GUERRA FRÍA

Gorbachov era totalmente consciente de que el experimento reformador con el que se había comprometido no tendría ninguna posibilidad de éxito si la Unión Soviética no conseguía aliviar el gravamen que constituían el gasto militar y los compromisos asumidos en varias partes del mundo, en primer lugar en Afganistán, donde hacía ya seis años que se luchaba en una guerra sin perspectivas de solución negociada y mucho menos de victoria. Ya en el pleno del Comité Central de abril de 1985, el primero tras la lección de Gorbachov, se tomó en consideración el problema de la retirada de las tropas de Afganistán. Una decisión definitiva en este sentido fue tomada por el *Politburó* en noviembre de 1986, pero de momento permaneció secreta y se hizo pública sólo en abril de 1988. Por otra parte, en septiembre de 1987 había sido comunicada a los norteamericanos, en ocasión de un encuentro entre el ministro de Exteriores Shevarnadze y el secretario de estado Schultz, lo que no evitó que Reagan siguiera enviando ayudas militares a los muyaidines afganos. La retirada de las tropas comenzó en mayo de 1988. En la misma fecha, en ocasión de la cumbre de Moscú, Gorbachov comunicaba a Reagan la disposición por parte soviética para la retirada de las tropas cubanas de Angola. Posteriormente, en mayo de 1989, comunicaba al nuevo presidente norteamericano Bush, la suspensión de los envíos de armas al gobierno sandinista de Nicaragua.

Una parte considerable del gasto militar soviético consistía en el mantenimiento de un importante contingente a lo largo de la frontera con China, cerca de la cual estaban instalados, desde 1983, 279 misiles de medio alcance. La disposición manifestada por Gorbachov de reducir el número de tropas acuarteladas en Mongolia, el desmantelamiento en diciembre de 1987, en el ámbito del tratado INF, de los misiles desplegados en Asia y el anuncio de la retirada de Afganistán, hicieron posible una normalización de las relaciones entre los dos países, que se ratificó con la visita que Gorbachov hizo a Pekín en mayo de 1989. Finalmente, en lo referente a los países satélites de Europa oriental y central, ya desde noviembre de 1986 los líderes de los respectivos partidos comunistas habían sido avisados que no contaran con una intervención soviética para mantenerse en el poder. Ello equivalía a abandonar la doctrina Breznev sobre la soberanía limitada (véase cap. 2) y los norteamericanos ciertamente lo sabían.

Por otra parte, es obvio que en el camino hacia una política de desarme el nudo principal consistía en las relaciones entre las dos superpotencias y es igualmente obvio que se trataba de un nudo extremadamente complejo.

El contencioso, en efecto, estaba bien repleto de cuestiones: contemplaba, como se ha visto, el asunto todavía pendiente de los misiles de medio alcance (INF); el del tratado ABM de 1972 (véase cap. 31), con el que, en opinión de la parte norteamericana, los soviéticos no habían cumplido; el tratado SALT II, suspendido a la espera de su ratificación por parte del Senado norteamericano y al que, en mayo de 1986, Reagan había declarado no sentirse ya vinculado; las negociaciones para el tratado de reducción de las armas estratégicas (START), también pendientes desde 1982; las de Viena sobre la reducción equilibrada de las fuerzas de tierra en Europa (MBFR); y por último, y sobre todo, el proyecto reaganiano de la SDI (véase cap. 36) y de las llamadas «guerras de las galaxias». En suma: una mezcla de mesas y de siglas extremadamente intrincada.

Además, a las dificultades de carácter objetivo se añadían las de carácter subjetivo. La intransigencia de Reagan para con el «imperio de mal» estaba compartida por sus más directos colaboradores y en particular por los ambientes del *National Security Council* por el director de la CIA, William Casey, y por el secretario de Defensa, Caspar Weinberger hasta su sustitución en 1987 por Frank Carlucci. En cambio, el secretario de estado George Schultz tenía un enfoque más profesional y más realista. Pero también la Unión Soviética tenía sus «halcones» y no sólo entre los militares, cuya influencia política, como se ha visto, había ido creciendo durante la era de Breznev, sino también en el partido y en el propio *Politburó*. Contrario a excesivas concesiones a los norteamericanos era, naturalmente, Igor Ligachov, pero éste no era el único entre los miembros de *Politburó* y del Comité Central en albergar dudas. Por lo demás, ello no impidió que Gorbachov y su fiel ministro de Exteriores Eduard Shevarnadze avanzaran en el camino de la búsqueda de un acuerdo.

La agenda de las posibles negociaciones ya había sido puesta a punto en un encuentro entre Gromyko y el secretario de estado Schultz en Ginebra el 7 y 8 de enero de 1985. Se contemplaban tres mesas de negociación, respectivamente sobre las negociaciones INF, sobre el proyecto del tratado START y sobre la iniciativa de defensa estratégica y las armas espaciales. Entre enero y julio de 1985, las relaciones entre la URSS y Estados Unidos tuvieron varios altibajos: junto con declaraciones alentadoras por un lado y por otro se mezclaron momentos de tensión e incidentes diplomáticos, hasta que el 3 de julio Moscú y Washington anunciaron que la cumbre entre Reagan y Gorbachov se celebraría en Ginebra en los días 19 y 20 de noviembre. En el comunicado emitido al término de los trabajos las dos partes afirmaban su común voluntad de impedir que estallara una guerra cuya consecuencias serían desastrosas y reiteraban su compromiso mutuo de «no buscar la superioridad militar». Al margen de esas solemnes pero genéricas afirmaciones, el comunicado no registraba progresos significativos en ninguna de las

cuestiones controvertidas y se quedaba en declaraciones de buena voluntad. Sin embargo, la cumbre de Ginebra marcaba un hito importante en las relaciones entre las dos superpotencias: por primera vez desde la cumbre de Viena celebrada siete años atrás entre Breznev y Carter, y desde el principio de la segunda guerra fría, los líderes de los dos países se habían encontrado, se habían conocido y habían intercambiado invitaciones para visitar sus respectivas capitales. El diálogo, pues, había sido reanudado. En septiembre, Schultz y Shevarnadze volvieron a encontrarse en Washington y el 30 de septiembre se anunció un nuevo encuentro entre Reagan y Gorbachov, que se celebró en Reikiavik los días 11 y 12 de octubre. Esta vez se profundizó más en el valor de cada asunto y se registraron significativos acercamientos en lo referente a la negociación INF, la reducción de los misiles balísticos intercontinentales (ICBM) y la prórroga del tratado ABM, pedida por los soviéticos. Pero el escollo sobre el que se quedaron estancadas las negociaciones fue el de la SDI, sobre la que la parte norteamericana mantuvo una postura de intransigencia.

Para Gorbachov, quien había contado con un éxito para consolidar su posición en su patria, Reikiavik fue indudablemente un jaque. Esto no lo llevó a endurecer su postura, a pesar de las numerosas sugerencias en este sentido, sino, al contrario, reforzó su propósito de desarme aun a costa de más concesiones. En febrero de 1987, avanzó públicamente la propuesta de eliminar todos los misiles de medio alcance sin relacionarlo ni con el asunto de la SDI ni con el de los misiles franceses e ingleses, que había sido planteado en el pasado. En la práctica, era la aceptación de la opción cero propuesta por Reagan desde 1981 (véase cap. 36) y por tanto era una propuesta que difícilmente la delegación norteamericana podía rechazar. A lo largo del mes de noviembre, Schultz y Shevarnadze pusieron a punto los términos de un tratado que se firmó en Washington el 8 de diciembre en conclusión de una nueva cumbre, la tercera en un año, entre los dos líderes. En él se preveía la destrucción en un plazo de tres años de todos los misiles de corto y medio alcance y de sus bases de lanzamiento, por una y otra parte. Se trataba de una novedad en varios aspectos, incluso de una revolución mental en la concepción de las relaciones entre las dos superpotencias.

En efecto, por primera vez los dos países no se limitaban a frenar o reglamentar la carrera al rearme, sino que, con la decisión de destruir los misiles, se invertía su curso, consiguiendo un resultado inmediatamente perceptible por la opinión pública y que de hecho no dejó de ser percibido. Además, también por primera vez, los soviéticos habían aceptado el criterio de los controles *in situ* de las medidas tomadas para la puesta en ejecución del tratado, renunciando así al tabú del secreto de estado, que había constituido uno de los principales obstáculos en las relaciones entre las superpotencias. En la cumbre de Washington se realizaron progresos también en las negociaciones START.

Así pues, a un clima de mutua desconfianza lo había sucedido uno de relativa confianza; ello quedó confirmado en la siguiente cumbre que se celebró en Moscú entre finales de mayo y principios de junio de 1988. Este nuevo encuentro no generó resultados relevantes, pero se caracterizó por una atmósfera de especial cordialidad y mutuo respeto. Fue entonces cuando, al preguntarle si todavía consideraba la Unión Soviética «el imperio del mal», Reagan contestó: «No. Yo hablaba de otro tiempo, de otra época». Fuese o no sincera esta respuesta, la compartían gran parte de los ciudadanos norteamericanos y europeos. Los sondeos atribuían a Gorbachov unos índices de popularidad muy elevados y cada viaje suyo al extranjero daba lugar a un baño de masas. La revista *Time* lo proclamaba hombre del año y en 1990 le fue otorgado el premio Nobel de la Paz.

En diciembre viajó de nuevo a los Estados Unidos para pronunciar ante la Asamblea de la ONU un discurso en el que pretendía ilustrar los principios que estaban en la base de sus decisiones de política exterior y de su concepción del mundo. Ahí no había rastro de la tradicional y obsoleta teoría de la división del mundo en dos campos, condenados a coexistir hasta que el uno anulara al otro. Más bien, el elemento de continuidad con la tradición socialista consistía en el talante internacionalista que animaba el texto del discurso. Su *Leitmotiv*, en efecto, era el llamamiento a la cooperación entre los estados, no sólo para prevenir una guerra nuclear, sino sobre todo para afrontar los retos que un mundo cada vez más interdependiente planteaba a toda la humanidad: los retos del hambre, del subdesarrollo, del ambiente. Eran estos conceptos los que Gorbachov ya había expuesto en sus escritos y en particular en su volumen sobre la *perestroika*, pero al anunciarlos allí, en la más alta sede internacional, adquirían el valor de un compromiso político. La parte final del discurso anunciaba que la Unión Soviética retiraría en los dos años siguientes a quinientos mil soldados, incluidas seis divisiones acorazadas repartidas en Europa central: esto otorgaba credibilidad a su compromiso.

En el momento en que Gorbachov pronunciaba su discurso el muro de Berlín todavía existía, pero la suerte de la segunda guerra fría ya estaba escrita. La fuerza de negociación de la URSS en sus relaciones bilaterales con los Estados Unidos y en el conjunto de las relaciones internacionales, aparecía debilitada. De hecho, la Unión Soviética había tenido que hacer las concesiones más relevantes, mientras que los norteamericanos se habían limitado esencialmente a tomar buena nota de ellas: la opción cero, la retirada de las tropas del escenario europeo y sobre todo la evidente disponibilidad para otras concesiones, como en realidad sucederá, en otras mesas de negociación. No sólo el prestigio político de la URSS, sino también el prestigio militar del Ejército Rojo, estaban comprometidos tras la derrota de Afganistán.

De todo ello Gorbachov era consciente. Sin embargo, consideraba que tenía la autoridad y la fuerza suficientes para hacer creíble el gran designio

que iba exponiendo. Sería poco generoso leer su discurso como una tentativa de ocultar sus dificultades y una manera de cubrir su debilidad, o como un SOS. O, también, como una manifestación de ingenuo idealismo. Desde la perspectiva que da el tiempo, nos parece más justo considerarlo como su testamento político para una comunidad internacional libre, por fin, y gracias también a sus decisiones, tanto de los riesgos como de la red de protección del bipolarismo, y que comenzaba a navegar en un mar incógnito.

37.3. LA CRISIS DE LA *PERESTROIKA*

Que el farragoso aparato de la economía soviética había de ser reformado en el sentido de su agilización y su descentralización, era, como se ha visto, una convicción consolidada en los ambientes intelectuales y políticos de la Unión Soviética. Sin embargo, la conciencia de los riesgos que conllevaba esta operación había impedido, como también hemos observado, que se pasara de las palabras a los hechos. Pero el ascenso de Gorbachov a la secretaría marcó un punto de inflexión también en la política económica. Todos los miembros de su equipo, en efecto, estaban decididos a afrontar estos riesgos y determinados a poner en marcha la reforma. Un estímulo más en este sentido, lo recibieron de la catástrofe de la central nuclear de Chernóbil, el 26 de abril de 1986, no sólo por la gravedad del acontecimiento, sino también por la ineficacia, la desorganización y las complicidades que el desastre puso en evidencia. En efecto, pasaron varios días antes de que el gobierno lograse obtener informaciones exhaustivas de las autoridades locales y estuviese en condiciones de proporcionar un cuadro de la situación a una opinión pública internacional justamente alarmada.

Pero ni Gorbachov, que había cursado estudios jurídicos, ni la mayoría de sus colaboradores directos, salvo Rizhkov, poseían conocimientos específicos en materias económicas, por lo que no estaban a la altura de afrontar una tarea tan compleja. Porque se trataba de compaginar los criterios de eficiencia con las instancias de la participación, lo que nunca ha sido fácil.

Las principales reformas que pusieron en marcha entre 1987 y principios de 1988 fueron tres. La primera afectaba al sector industrial y estaba dirigida a conceder a las empresas un margen considerable de autonomía, tanto en las decisiones como en la financiación. Además se reconocía a los trabajadores la facultad de elegir a sus representantes. La segunda reforma concernía a la agricultura y preveía la concesión en alquiler de extensiones de terreno a particulares o asociaciones de campesinos, con el derecho a comercializar los productos. La tercera, en fin, autorizaba y alentaba la construcción de cooperativas en los sectores de los servicios y del comercio. Ninguna de esas reformas produjo los resultados esperados. En el sector industrial, el

principal efecto de la reforma consistió en un considerable aumento de los salarios, que sin embargo no se vio compensado por un proporcional aumento de la productividad. En el agrícola, los campesinos que dejaron sus *koljoces* para independizarse fueron una exigua minoría y la producción, tras la cosecha récord de 1983 continuó estancada, con la consecuencia de que una quinta parte del consumo de la población debía ser cubierta con las importaciones. Finalmente, en lo referente a las cooperativas, los resultados fueron todavía más decepcionantes, ya que éstas se convirtieron en el instrumento mediante el cual la economía sumergida y la especulación lograron extenderse en el mercado y por ahí alimentar los atisbos de un proceso de inflación.

Con el paso de los meses, la situación, en vez de mejorar, se deterioraba cada vez más. A partir de 1988 numerosos productos de consumo fueron racionados y los almacenes de las tiendas estaban cada vez más vacíos. El rublo comenzaba a perder valor y los taxistas de Moscú exigían ser pagados en moneda extranjera, como también, supongo, las cada vez más numerosas prostitutas.

A lo largo de 1989, por dos veces, en julio y en octubre, los mineros de Kusbass, de Donbass y de otras cuencas entraron en huelga, obteniendo considerables aumentos salariales. Sin embargo, el clima predominante en el país era de apatía y resignación. En cambio, señales de alarma llegaban de las repúblicas de la periferia.

La primera de estas señales se encendió en Azerbaiyán, donde en febrero de 1988 se produjeron violentos enfrentamientos entre la minoría armenia, que vivía en la región montañosa de Nagorny Karabak, y la mayoría azera, enfrentamientos que se saldaron con la muerte de muchos armenios. Se iniciaba así un conflicto que duraría mucho y provocaría mucho derramamiento de sangre. En verano, un conflicto análogo entre la mayoría uzbeka y la minoría de los turcos mesketas se producía en el valle de la Fergana, en Uzbekistán. Se trataba, en estos casos, de enfrentamientos entre etnias no rusas y no eslavas. Pero también había otras repúblicas donde los contrastes étnicos se daban entre una población indígena y los rusos residentes, así que acababan afectando a la relación entre cada república y el gobierno central de Moscú. Así sucedió en Georgia, en el extremo sur del país, donde en abril de 1989 la policía y el ejército abrieron fuego contra los manifestantes independentistas, causando veinte muertos. Desde entonces, la conflictividad fue la regla y no cesará ni siquiera cuando, en abril de 1991, Georgia verá reconocida su independencia, ya que los enfrentamientos continuaron entre la mayoría georgiana y la minoría abjaza.

En el extremo norte del país, otra área de conflictos era la del Báltico, cuya anexión a la Unión Soviética se remontaba a una fecha relativamente reciente, 1940. En agosto de 1987, en ocasión del aniversario del pacto Ribbentrop-Molotov de 1939, se produjeron en las tres repúblicas bálticas im-

ponentes manifestaciones de protesta y en junio de 1988 se constituía en Lituania el movimiento nacionalista Saljudis, mientras que en Estonia y Letonia se formaban sendos «frentes populares». En un primer momento ninguno de ellos presentó la reivindicación de la independencia, sino que se limitaron a pedir la retirada de las tropas soviéticas situadas en sus territorios, pero muy pronto, en la primavera de 1989, los tres estados bálticos proclamaron su «soberanía», esto es, la negativa a aplicar las leyes promulgadas por Moscú. De la «soberanía» a la independencia el camino, como veremos, será corto.

Pero tanto Georgia como los países bálticos, ambos situados en la periferia de la Unión, constituían unos casos límite. Ni las repúblicas de Asia central y mucho menos Ucrania y Bielorrusia daban de momento señales consistentes de querer despegarse de Moscú. En la primera mitad de 1989, pocos hubiesen podido prever que dentro de dos años la Unión Soviética se disgregaría. Pero el curso de los acontecimientos había entrado ya en una fase de brusca aceleración.

37.4. LA REUNIFICACIÓN ALEMANA

El 9 de noviembre de 1989 caía el muro de Berlín. Por su valor simbólico, el evento ha sido asumido, comprensiblemente, como un punto de inflexión histórico. En realidad, no sólo no marcó el fin de la segunda guerra fría, cuya mecha, como se ha visto, ya había sido en gran parte apagada, sino que tampoco significó la liberación de los países satélites; como mucho, fue el sello final. En noviembre de 1989, el proceso de emancipación de la URSS en los países de la Europa oriental y central ya se encontraba en una fase avanzada. Cuando cayó el muro, Polonia ya no tenía un gobierno comunista. En efecto, a raíz del resultado de las elecciones de junio, que vieron la afirmación de Solidaridad, se había instalado en el poder en agosto un gobierno de coalición encabezado por un representante de la oposición, Tadeusz Mosowiesky. En enero, Hungría había dejado de ser una «república popular» para convertirse en simple república y al régimen monopartidista lo había sucedido un sistema pluripartidista a la espera del veredicto electoral de 1990, que será favorable al bloque de los partidos de la oposición. También en Checoslovaquia el régimen comunista ya agonizaba e incluso en Bulgaria se tambaleaba. Sólo en Rumania el dictador Ceaucescu se mantuvo aferrado al poder hasta diciembre, cuando fue derrocado por una rebelión popular y ejecutado.

Así pues, si se excluye el caso rumano, en todos los ex países satélites la transición a la democracia se produjo con medios pacíficos. Ello fue posible por varios motivos. En primer lugar, porque sus economías habían alcanzado un notable nivel de integración en el mercado internacional, ya que to-

dos, con el fin de reactivarlas, habían acudido a los préstamos internacionales. En particular, Polonia figuraba entre los países más endeudados del mundo, sólo por detrás de los países latinoamericanos. Y ahora los acreedores, fuera el FMI o los bancos extranjeros, presionaban para que se abolieran los frenos de la economía planificada y se adoptara una política económica más rigurosa. El paso gradual a la economía de mercado se hacía, por tanto, casi obligado. Pero era necesario que lo gestionara un personal político y empresarial responsable, competente y preparado para afrontar la difícil tarea de la transición. Este personal existía y estaba formado tanto por representantes de la oposición y la emigración como por cuadros del *establishment*.

Por último, cabe añadir que esta transición se hubiese podido realizar pacíficamente, si Gorbachov no hubiese mantenido su compromiso de no interferir en los asuntos internos de cada uno de estos países.

La aplicación de este criterio de no intervención sobre la RDA planteaba a la URSS problemas muy graves. Se comprende, en efecto, cómo, para un país que había perdido al menos veinte millones de hombres en la guerra contra el agresor alemán, la perspectiva de una Alemania reunificada, que coherentemente con sus posiciones el canciller Kohl venía defendiendo con decisión desde siempre, se percibiera como una derrota e incluso una humillación. Además, si no sólo se alcanzaba este objetivo, sino que además la Alemania reunificada seguía formando parte de la OTAN, entonces la humillación sería todavía más amarga y la posición de Gorbachov se debilitaría aún más, y con ella la suerte de la *perestroika*. De ello se daba cuenta Margaret Thatcher, que de vuelta de un viaje a Extremo Oriente hizo una parada en Moscú para comunicar a Gorbachov sus preocupaciones y también se daba cuenta François Mitterrand, que quiso encontrarlo en Kiev. También el secretario de estado norteamericano estaba interesado en el éxito del intento reformador de Gorbachov, pero la perspectiva de una salida de la OTAN del aliado más fuerte en el continente europeo no podía ser aceptada por la nueva administración del presidente Bush.

La cuestión alemana constituyó uno de los temas de discusión en la cumbre de Malta del 2 y 3 de diciembre de 1989, que por lo demás concluyó sin que ni una parte ni otra asumieran compromisos precisos. Fue en la siguiente cumbre de Washington (31 de mayo-3 de junio de 1990) cuando la parte norteamericana descubrió sus cartas y se pronunció para la reunificación y la permanencia de Alemania en la OTAN, ofreciendo al mismo tiempo al interlocutor soviético una serie de garantías. Las principales eran la reiteración del compromiso alemán de renunciar a la posesión de armas nucleares, químicas y bacteriológicas; la aceptación de las fronteras existentes; el consenso a la permanencia de tropas soviéticas en el lado oriental del país por un período de algunos años y la promesa de contribuir a su financiación y de proveer a su alojamiento una vez que hubiesen vuelto a Ru-

sia. Estas propuestas estuvieron encima de la mesa de la conferencia «dos + cuatro», así denominada porque en ella participaron los cuatro vencedores de la segunda guerra mundial más los representantes de las dos Alemanias. La conferencia, convocada por iniciativa soviética, comenzó sus sesiones en mayo de 1990 y sus conclusiones fueron asumidas por la cumbre de los países de la OTAN que se reunieron en julio en Londres. El 16 de julio, Gorbachov comunicó a Kohl, de visita a la URSS, el consentimiento soviético a la permanencia de la Alemania unificada en la OTAN, recibiendo a cambio su compromiso, ratificado en el noviembre siguiente por la cumbre de la CSCE de París, de reducir sus efectivos militares en 370.000 para 1994. El 2 de diciembre se celebraron en Alemania unas elecciones generales que fueron un triunfo para Kohl. Los democristianos obtuvieron el 44,3 % de los votos en la parte occidental del país y el 41,8 % en la antigua RDA. Así, la unificación de Alemania era, también formalmente, un hecho consumado.

37.5. LA DISGREGACIÓN DE LA URSS

En un solo año, pues, el mapa político de Europa había sufrido modificaciones radicales, cuyas consecuencias en la Unión Soviéticas fueron que su prestigio, y con éste el de su líder, se veía todavía más mermado. Cuanto más popular era en el extranjero, tanto más impopular era Gorbachov en su patria. Sus críticos más severos eran algunos representantes de los ambientes militares, que por supuesto no compartían las concesiones hechas a aquella Alemania contra la que habían luchado, pero también en el partido y en el Congreso eran numerosos los que alimentaban desconfianzas o estaban en contra de la línea de política exterior del secretario.

A medida que la situación económica se hacía más pesada, también la política interna de Gorbachov se hacía cada vez más controvertida. Pero las motivaciones de las críticas que se le dirigían eran no sólo distintas, sino opuestas. Si Ligachov y sus partidarios se mostraban preocupados por el celo reformador, que ellos consideraban excesivo, muchos intelectuales y varios representantes políticos, por el contrario, criticaban al secretario general por la prudencia y la lentitud con que, en su opinión, procedía a la puesta en marcha de la *perestroika*. El debate en el seno del partido se puso de manifiesto con toda su dureza en el XVIII Congreso, el último, que se celebró en julio de 1990. A su conclusión, Gorbachov fue confirmado en su cargo con una mayoría muy amplia, pero su posición aparecía ya muy debilitada y más aún la del partido del que era el líder.

En marzo de 1991, los mineros entraron de nuevo en huelga y la situación económica llegó hasta tal punto de deterioro que al final del año la producción industrial había bajado en un 18 % y la agrícola en un 17 %. Un plan

elaborado fatigosamente en el otoño de 1990 para sanear la economía del país convirtiéndola al mercado en quinientos días, se dejó caer por veleidoso e irrealizable. Tampoco se podía contar con los préstamos extranjeros. Si la Alemania de Kohl se mostraba dispuesta, menos lo estaban los Estados Unidos. En marzo de 1990 habían bloqueado un préstamo a la URSS por parte del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (ERBD, en sus siglas inglesas) y en julio de 1991 la petición de un préstamo del FMI, avanzada por Gorbachov en ocasión de la cumbre del G7, sólo recibió promesas. En este momento, la URSS seguía sin gozar de la cláusula de nación más favorita, aunque hacía tiempo que le había sido prometida, y todavía estaban vigentes algunas limitaciones a las exportaciones previstas por el COCOM.

Es en el contexto de esta crisis que irrumpe en el escenario político la figura de Boris Yeltsin. Llamado a formar parte del *Politburó* en 1985, en su calidad de secretario del comité ciudadano del partido en Moscú, se había granjeado una notable popularidad gracias a la decisión con que había luchado contra la corrupción y muchos lo consideraban como el paladín de la *perestroika*. Su personalidad extrovertida no gustaba a muchos de sus colegas y en noviembre de 1987 fue obligado a dimitir de su cargo moscovita y en febrero de 1988 del *Politburó*. Pero no se rindió y se presentó como candidato en las elecciones para el Congreso de marzo de 1989, en las que resultó elegido de forma masiva por sus electores. Tras superar los obstáculos burocráticos y políticos que se interponían en la convalidación de su elección, no tardó en convertirse en una de las figuras preeminentes del llamado «grupo interregional», integrado por cerca de trescientos diputados. No tenía competencias económicas específicas y en su autobiografía no hay rastro de un pensamiento político consolidado. Pero poseía la ambición y el instinto de un auténtico animal político. La carta sobre la que lo apostó todo fue la del nacionalismo ruso y con esta brújula orientó todas sus posteriores decisiones en su gradual escalada hacia el poder.

En marzo de 1990 se presentó en las elecciones para el Parlamento de la República rusa, en el colegio de Sverdlovsk, su ciudad de origen y donde había comenzado su carrera política; también en este caso obtuvo una mayoría aplastante. Elegido para la presidencia de esta asamblea, en junio se hizo promotor de una declaración con la que Rusia proclamaba su soberanía, una fórmula que equivalía a decir que no reconocía más leyes que las suyas. En julio, al término del congreso comunista, anunció su dimisión del partido y por último, en marzo de 1991, hizo celebrar un referéndum para la elección popular directa del presidente de Rusia, en el que obtuvo el 70 % de consensos. Se trataba de un referéndum hecho a medida para su persona y de hecho, en las subsiguientes elecciones presidenciales, ganó a sus antagonistas con el 57 % de los votos. En la práctica, se comportaba ya como un

jefe de estado y en junio de 1991, con ocasión de su segundo viaje a los Estados Unidos, fue recibido en la Casa Blanca.

De esta forma, no sólo legitimaba, sino que alentaba, e incluso obligaba, a las otras repúblicas para que siguieran su estela. Y de hecho, así fue: entre junio y diciembre, se proclamaron «soberanas», por este orden, Uzbekistán, Moldavia, Ucrania, Bielorrusia y otras repúblicas de Asia central. En cuanto a los países bálticos, ya estaban en el camino de la independencia. Lo que imprimió una poderosa y decisiva aceleración a este proceso fueron los incidentes que se produjeron en la capital lituana, Vilnius, el 13 de enero de 1991, cuando trece manifestantes perdieron la vida bajo el fuego del ejército. En febrero y marzo, en las tres repúblicas bálticas se celebraron unos referendos en los que los electores se pronunciaron en su gran mayoría por la independencia. En abril, Kohl y Mitterrand, con el consentimiento norteamericano, escribieron al presidente lituano, Landbergis, que suspendiera la declaración de independencia. Su petición fue aceptada, pero, como veremos, sólo se trató de una dilación.

Ante este proceso de gradual disgregación, Gorbachov, que desde marzo de 1990 reunía el cargo de presidente de la URSS con el de secretario del partido, reaccionó, en marzo de 1991, convocando un referéndum en el que se pedía a los electores que se pronunciaran sobre «la preservación de la URSS como federación renovada de repúblicas iguales y soberanas». La respuesta de las urnas fue ampliamente afirmativa y en las repúblicas asiáticas incluso masiva. Animado por este éxito, en abril convocó Gorbachov, en la localidad de Novo Ogarevo, una reunión en la que participaron nueve presidentes de repúblicas, incluida Rusia, y faltaron los estados bálticos y Georgia, que no aceptaron la invitación. En la reunión se elaboró y se aprobó el proyecto de un tratado, que entraría en vigor el 20 de agosto, con el que se reconocía a las repúblicas autonomía e independencia, quedando para la Unión sólo las competencias en política exterior, defensa y coordinación económica.

Pero se trataba de un éxito sólo aparente. De hecho, no sólo el prestigio, sino la autoridad misma de Gorbachov estaban cada vez más en tela de juicio. Sus colaboradores más directos marcaban poco a poco distancias: en diciembre de 1990 Shevarnadze dimitió de su cargo de ministro de Exteriores y en febrero de 1991 hicieron lo mismo sus consejeros Alexander Yakovlev, Eugeni Primakov y Yuri Shatalin. En este mes, Shevarnadze y Yakovlev también abandonaban el partido.

Por contra, la ofensiva de sus adversarios se hacía cada vez más agobiante. Especialmente Yeltsin pidió en repetidas ocasiones su dimisión y el propio Gorbachov estuvo a punto de presentarla cuando, en el Comité Central del PCUS de finales de abril, tuvo que aguantar nuevos ataques por parte de los conservadores. Sólo un documento en su favor, firmado por Ba-

katin y otros sesenta y nueve miembros del Comité, logró disuadirlo. Pero los poderes del presidente de la URSS eran ya más virtuales que reales. El último acto relevante de Gorbachov en calidad de presidente fue la firma en Moscú, a finales de julio, del tratado START, por el que URSS y Estados Unidos se comprometían a reducir sus respectivos arsenales de armas estratégicas hasta aproximadamente el nivel de 1982. Como el de Novo Ogarevo, también éste era un tratado destinado a una breve vida. En efecto, una de las dos partes dejaría de existir dentro de poco.

El 18 de agosto, en la víspera de la entrada en vigor del tratado de Novo Ogarevo, Gorbachov, quien se encontraba de vacaciones con su familia en Crimea, recibió la visita de su ayudante personal, Valeri Boldin, y de otros personajes que le pidieron que entregara sus poderes a su vicepresidente, Yanaev, pero él opuso una firme negativa. Mientras tanto, en Moscú, el propio Yanaev, el primer ministro Pavlov, el ministro de Defensa, Yasov, el jefe del KGB, Kruschev y el ministro de interiores, Pugo, anunciaban que habían constituido un comité de emergencia. De hecho, se trataba de un golpe de estado, pero le faltaron los requisitos de tempestividad y radicalismo en las decisiones y en la ejecución, que la técnica del golpe exige. Los teléfonos y los faxes de Moscú no fueron puestos bajo control; las televisiones extranjeras pudieron seguir retransmitiendo y, sobre todo, los principales representantes de la oposición quedaron libres y estuvieron por ende en condiciones de organizar la resistencia. Una multitud de decenas de miles de moscovitas se reunió alrededor del edificio del Soviet Supremo –la llamada Casa Blanca– donde se habían atrincherado Yeltsin y los diputados radicales. Transcurrieron dos días de negociaciones frenéticas y de tensión extrema, pero al final los golpistas tuvieron tirar la toalla y quedaron detenidos. El 22 de agosto, Gorbachov podía volver a Moscú, pero su prestigio estaba por los suelos. Muchos le reprochaban haberse rodeado de colaboradores que, a la hora de la verdad, se habían revelado poco fiables, y al día siguiente de su retorno a Moscú, Yeltsin, que había tenido un papel de primera magnitud en la derrota del golpe y cuya popularidad estaba en su cenit, no dejó de echárselo en cara durante una dramática sesión del Soviet Supremo de la República rusa, infligiéndole una tremenda humillación ante millones de telespectadores.

En realidad, Gorbachov también había contribuido al fracaso del golpe ya que, como se ha visto, se había negado a ceder sus poderes. Pero también era verdad que el partido del que estaba a la cabeza había mantenido una postura ambigua en su ausencia y en los días del golpe, y de él formaban parte los golpistas. La decisión de Yeltsin de suspender a partir del 23 de agosto las actividades del Partido Comunista no carecía de motivaciones válidas y el propio Gorbachov tuvo que asumirlo al día siguiente, cuando dimitió de la secretaría general e invitó al Comité Central a disolverse. La

disolución definitiva del partido fue anunciada en la jornada del 6 de noviembre, en la víspera del aniversario de la revolución de octubre. Caía, así, una institución que, para bien y para mal, había sido el pilar que sostenía a la sociedad soviética.

Si bien Gorbachov ya no era secretario del PCUS, seguía siendo, de todos modos, presidente del Soviet Supremo de la URSS. De ella ya no formaban parte los países bálticos, que en las tormentosas jornadas del golpe se habían proclamado independientes y habían sido reconocidos por la Rusia de Yeltsin y por otros estados. Por lo que concierne a las otras repúblicas, la situación era extremadamente confusa. Algunas de ellas también se habían proclamado independientes, como Ucrania, que por otra parte había subordinado esta decisión al resultado de un referéndum convocado para el 1 de diciembre. Otras, entre ellas la propia Rusia y Kazajistán, las más compleja de las repúblicas soviéticas desde el punto de vista étnico, se habían abstenido de hacerlo. En Rusia, sin embargo, estaba en marcha un proceso, pilotado por Yeltsin, de gradual erosión y apropiación de las competencias y los poderes de los que disponía la presidencia de la Unión, desde los servicios de seguridad al Banco Central. Así, estaba abierta una partida cuya apuesta era la supervivencia o no de la Unión Soviética.

A primeros de septiembre se alcanzó un acuerdo para un nuevo tratado que preveía la transformación de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en la Unión de Estados Soberanos (SSG, en sus siglas rusas), pero el resultado del referéndum del 1 de diciembre en Ucrania, en el que el 90 % de los electores se pronunció por la independencia, proporcionó a Yeltsin, que hasta entonces había permanecido apartado, una ocasión que éste no desaprovechó. A espaldas de Gorbachov, el 7 y el 8 de diciembre se encontraba con el presidente ucranio, Kravchuk, y el bielorruso, Siskevich, en una floresta en los alrededores de Minsk. Al término de su encuentro, los tres anunciaron que consideraban disuelta la Unión Soviética y constituían una indefinida Comunidad de Estados Independientes (CSI) a la que, en un encuentro posterior, el 21 de diciembre en Alma Ata, se adhirieron también Kazajstán, Azerbaiyán y otras cuatro repúblicas de Asia central. El 25 de diciembre, la bandera de la Unión que ondeaba sobre el Kremlin fue arriada y sustituida por la bandera rusa, y Gorbachov volvía ser un ciudadano más.

Lo que no puede dejar de llamar la atención en estos acontecimientos es que un evento de esta envergadura histórica pudo producirse sin la implicación de grandes masas, sin «participación coral alguna» (Boffa, 1995, p. 334). Por supuesto, en cada república existían unos movimientos nacionalistas e independentistas, pero, con la excepción de los países bálticos, éstos no tenían una gran consistencia. Es más, da la impresión de que la gran mayoría de la población se limitó a asistir al desarrollo de los acontecimientos y a seguir el viento. Los electores ucranios que en marzo de 1991 votaron por la

permanencia de su país en la Unión Soviética, eran los mismos que seis meses más tarde optarían por la independencia.

Una parcial explicación de esta anomalía al menos aparente, puede derivarse de la constatación de que en la ex Unión Soviética no existía, al contrario que en Polonia, en Hungría y en Checoslovaquia, una clase política en condiciones de asegurar un cambio de dirección política. Entre los representantes de la oposición, los únicos que se empeñaron políticamente fueron Sajarov y Roy Medvedev. El primero murió en diciembre de 1989 y el segundo figura entre los que volvieron a fundar el partido Comunista después de su disolución. En cuanto a los emigrados, la mayoría de ellos prefirió no volver a Rusia. Quien volvió fue Solzhenitsyn, pero su mensaje nacionalista y «gran ruso» no encontró mucha audiencia.

La única clase política disponible seguía siendo la de los *apparatcik*. Una parte de ellos se empeñó a fondo en el experimento de la *perestroika* y compartieron sus responsabilidades y su fracaso, pero otros, sensibles desde siempre al reflejo condicionado del unanimismo, la secundaron con mayor o menor convicción o simplemente la sufrieron hasta que se hizo evidente que estaba destinada al fracaso. En este momento, el llamamiento del nacionalismo ruso, ucraniano, bielorruso o lo que fuese se convertía en la tabla de salvación que les permitiría salir a flote. A este respecto, los casos de Kravchuk en Ucrania y del conservador Siskevich en Bielorrusia son ejemplares, por no hablar del de Yeltsin y de sus colaboradores más próximos. Si el Partido Comunista había quedado disuelto y la URSS había dejado de existir, la *nomenklatura*, por su parte, estaba viva, coleando y decidida a quedarse en el poder. Predicaba la necesidad de una reforma radical de la economía, pero sus ideas al respecto eran tan confusas como las de Gorbachov y de sus colaboradores. En la práctica, la política económica que se realizó resultó ser un complicado e inestable compromiso entre los partidarios de la conversión total al mercado y los poderosos *lobbies* de las grandes concentraciones estatales. Los primeros tenían su representante estrella en el joven Igor Gaidar; los segundos, en Victor Chernomirdin, el todopoderoso jefe del Gazprom, un organismo que controlaba la producción y la exportación de gas y de petróleo, es decir, del mayor recurso de la desastrada economía rusa. Ambos desempeñaron, en fechas distintas, los cargos, respectivamente, de vice primer ministro y primer ministro, una alternancia que refleja las fluctuaciones y las incertidumbres de la línea de política económica seguida en aquellos años.

El resultado de esta navegación a tientas fue una acentuación del deterioro económico. En los años entre 1992 y 1996 el índice del PIB fue siempre negativo y sólo en 1997 se perfiló una primera, tímida, inversión de tendencia, mientras que el de la inflación, tras tocar en 1992 la cifra astronómica del 2.500 % fue poco a poco disminuyendo, aunque nunca por debajo del 10 %. Por contra, la deuda externa continuaba aumentando, pasando de los

ochenta y siete mil millones de dólares en 1992 a los 124,8 de 1995. La producción industrial sufrió un descenso del 40 % de 1988 a 1995 y el poder adquisitivo del salario medio en 1995 era inferior en un 60 % al de 1991. En consecuencia, el nivel de vida de la población experimentó una severa contracción. No sólo se vivía peor, sino que se vivía menos: la esperanza de vida, en efecto, se iba recortando. Para mayor frustración de muchos, aparecieron los nuevos ricos, los especuladores, los mafiosos, con su ostentación y su lujo chillón. El Congreso de los diputados elegido en 1989 intentó hacerse portavoz del malestar y de las frustraciones crecientes, pero no gozaba de un apoyo real por parte de una opinión desorientada y trastornada, ni Yeltsin estaba dispuesto a pactar. Por lo tanto, en marzo de 1993 le fue fácil disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones, a las que unió un referéndum sobre un proyecto de nueva Constitución, que otorgaba al presidente poderes muy amplios. El Congreso respondió a este reto emprendiendo un procedimiento de acusación contra el presidente y designando para la presidencia a Alexander Rustkoi, su vicepresidente. Se llegó así, en los primeros días de octubre, al enfrentamiento abierto entre poder legislativo y poder ejecutivo: una multitud de manifestantes intentó apoderarse de la sede de la televisión, mientras que los diputados se encerraban en el Parlamento. También en esta ocasión, Yeltsin demostró rapidez de reflejos: se proclamó el estado de sitio y se dio orden al ejército de disparar contra el palacio de Parlamento, obligando a sus ocupantes a rendirse y entregarse como prisioneros. Así pues, fortalecido por esta victoria, el presidente pudo convocar en diciembre a los electores y obtener la aprobación de una Constitución hecha a su medida. Menos confortantes fueron para él los resultados de las elecciones para el nuevo Parlamento, la *Duma*. Su partido «Opción democrática», consiguió el mayor número de escaños, pero el partido más votado fue el de Vladimir Zhirinovsky, un personaje histriónico que apelaba a un tosco nacionalismo paneslavo, que obtuvo el 23 % de los votos, mientras que los comunistas de Gennadi Ziugánov, que en febrero se habían reconstituido en partido, se alzaron con un 14 %. No obstante, a pesar del fracaso que representó el estallido de la guerra en Chechenia, que costó a Rusia veinticinco mil muertos, de la caída de su popularidad y de sus cada vez más precarias condiciones físicas, Yeltsin logró superar a su antagonista, el comunista Ziugánov, en las elecciones presidenciales de junio-julio de 1996, y ha sido presidente hasta principios del año 2000. Su permanencia en el poder dependió de muchos factores: la relativa estabilización de la economía, o al menos, el freno a su deterioro; el apoyo de los Estados Unidos y de los gobiernos europeos; los préstamos del FMI; pero, sobre todo, la ausencia de una alternativa creíble.

38

El área del Pacífico en los años ochenta y noventa

La historia política de Japón a lo largo de los años ochenta se desarrolló en el signo de la continuidad. Victorioso en las elecciones de junio de 1979 con el 47,9 % de los votos, el Partido Liberal Demócrata esencialmente confirmó sus posiciones en las de diciembre de 1983, con el 45,8 % y obtuvo el mejor resultado de toda su historia en las elecciones para la Cámara Baja de julio de 1986, con el 49,4 %. Una victoria tanto más significativa si se tiene en cuenta que, por decisión de la Corte Suprema, el número de los escaños rurales, donde los liberaldemócratas tenían sus feudos, había sido rebajado y el de los escaños urbanos, aumentado. La otra mitad de los votos se fue a los varios partidos –socialistas, socialdemócratas, comunistas y Komeito– de una posición que –otra señal de continuidad– permanecía dividida y fragmentaria y por tanto no estaba en condiciones de ofrecer una alternativa de gobierno. En efecto, ninguno de estos partidos alcanzaba el 20 % de los votos. Al éxito del Partido Liberal Demócrata contribuyó el prestigio de su presidente, Yasuhiro Nakasone, que desempeñó el cargo de primer ministro durante cinco años, de 1982 a 1987, un período de tiempo poco habitual para un país con una vida parlamentaria crispada y –otro elemento de la continuidad política japonesa– con escándalos políticos recurrentes. Si en los años setenta había estallado el escándalo Lokheed, por el que el ex primer ministro Tanaka fue condenado a cuatro años de reclusión, en 1986 le tocó al escándalo Recruit, en el que se encontraron implicados varios representantes políticos, incluidos el propio Nakasone y el primer ministro que éste había designado para que le sucediera. Otra contribución al mantenimiento de la estabilidad dependía de la atenuación, cuando no la desaparición, de las grandes cuestiones que en el pasado habían apasionado y dividido a la opinión pública, en particular la relativa al tratado con los Estados Unidos y a sus renovaciones. En 1979 el Komeito anunciaba oficialmente

que se adhería al tratado de seguridad y lo mismo hicieron los socialistas al año siguiente.

A la sombra de esta estabilidad, el ciclo económico ascendiente, comenzado en la segunda mitad de los años setenta, pudo proseguir con un ritmo sostenido. Lo atestiguan todos los principales indicadores económicos, en primer lugar el de PIB, cuyo crecimiento anual medio se situó alrededor del 5 % durante toda la década, pero también los de la producción industrial o de las exportaciones.

En 1987 el activo de la balanza comercial llegó a la cifra récord de 101 mil millones de dólares. Pero, como ya hemos podido observar, los datos cuantitativos son sólo relativamente significativos. Lo que caracteriza el desarrollo de la economía japonesa es en realidad su capacidad de reconversión e innovación tecnológica. A este respecto, bastará con recordar algunos datos: a finales de 1988, de los 280.000 ordenadores activos en todo el mundo, 176.000 eran japoneses, 48.000 europeos y 33.000 norteamericanos, y en 1989 Japón se había convertido en el primer exportador en los sectores de la microelectrónica, superando a los Estados Unidos, de los aparatos de telecomunicación, superando a la RFA, de las maquinarias y de la robótica, superando a ambos países. Comparada con la penosa trayectoria de los Estados Unidos y los países europeos, la japonesa, a lo largo de la década, se presenta, pues, especialmente brillante.

El Japón de los años ochenta, con sus trenes de alta velocidad y sus túneles submarinos que unen las islas del archipiélago, no sólo era un país altamente desarrollado, la segunda potencia económica mundial, sino también un país próspero, con la mejor calidad de la vida y con la esperanza de vida más alta del mundo: 76 años para los hombres y 82 para las mujeres, en 1987. Si un habitante de Tokio o de Osaka disponía de una vivienda cuya superficie era mucho más reducida que la de una vivienda de Londres o Nueva York, disponía, por contra, de un sistema de transportes y de servicios más eficiente, podía contar para sus hijos con una escuela también más eficiente (la obligación escolar era de doce años) y sobre todo estaba menos agobiado por el problema de la criminalidad y de la droga; por último, disponía de más tiempo libre. A lo largo de los años ochenta se multiplicaron los bares, los restaurantes, los locales de *karaoke* y cerca de Tokio se abrió en 1983 una *Disneyland* más grande que la de California. Cada vez eran más numerosos los turistas japoneses en el interior y en el exterior del país. El acceso cada vez más elevado de mujeres al mundo del trabajo no cambió sustancialmente sus condiciones de subordinación en el ámbito familiar. Sin embargo, se registran durante la década señales de aumento de la participación femenina en la vida pública. Entre 1984 y 1986, las mujeres de la ciudad de Zushi se hicieron promotoras de un movimiento que tenía una doble motivación, política y ecológica, ya que estaba dirigido a impedir que

una reserva natural de aves se convirtiera en área edificable para la construcción de viviendas de militares norteamericanos, y en 1986 una mujer, Doi Takako, fue elegida para el cargo de secretaria general de partido Socialista. En la vida política japonesa, ello constituyó una novedad absoluta.

El 7 de enero de 1989, tras 64 años de reinado, moría el emperador Hiro Hito. Elevado al trono imperial en un país devastado por el terrible terremoto de 1923, a lo largo de su reinado había conocido la amargura de la derrota y había contemplado las ruinas de Hiroshima y Nagasaki. Ahora dejaba en herencia a su sucesor, su hijo Aki Hito, un país próspero y respetado.

Los años ochenta fueron una década de desarrollo sostenido e ininterrumpido también para los otros estados que habían adoptado el modelo japonés. Las medias anuales de crecimiento de los «cuatro tigres» –Singapur, Hong Kong, Taiwan y Corea de Sur– continuaron rondando el 7,4% y asimismo los de los estados «recién llegados», en particular Tailandia y Malaisia, que se convirtió en el tercer exportador mundial de tecnología microelectrónica.

Pero el caso más relevante era el de Indonesia, un país que a finales de los años setenta contaba 140 millones de habitantes diseminados por el inmenso archipiélago que la constituye y figuraba entre los países con la renta más baja del mundo. Es evidente que, con estas dimensiones y estas bases, el despegue hacia la industrialización y la apertura a los mercados internacionales planteaban problemas mucho más arduos que los que habían tenido que superar ciudades estado como Singapur y Hong Kong o estados más compactos y menos poblados como Corea del Sur, Tailandia o Malaisia. Sin embargo, el desarrollo se produjo y concernió a todos los sectores de la actividad económica. En agricultura, la introducción de las técnicas de la «revolución verde» permitió duplicar las cosechas de arroz –principal alimento del país– en un plazo de quince años. Pero es evidente que el objetivo de la autosuficiencia alimentaria no se hubiera alcanzado si no hubiera disminuido la tasa de incremento demográfico. Con este fin, en 1970 se creó un *Family Planning Cooperation Board*, que, aunque no adoptó las medidas extremas a las que recurrió China, obtuvo igualmente resultados importantes. En los referente al sector industrial, las primeras medidas del «nuevo régimen» del general Suharto, tras su sangrienta instauración (véase cap. 30), consistieron en la promulgación de una ley que favorecía las inversiones extranjeras y la desnacionalización de algunas industrias que habían sido nacionalizadas por Sukarno. Con el paso del tiempo, estas medidas dieron los frutos esperados. A partir de los años setenta, los capitales extranjeros afluyeron en una medida creciente, haciendo posible el desarrollo de una serie de actividades industriales entre las que destaca la petrolífera. Este proceso de rápida transformación de una economía básicamente de subsistencia a una economía de mercado, se produjo bajo el signo de la más desenfrenada es-

peculación. Los que más se aprovecharon de ello fueron los miembros del clan y de la familia del dictador Suharto.

Con todo, la gran novedad de los años ochenta en el área del Pacífico es sin lugar a dudas el ingreso a toda vela de China en el mercado internacional. A partir de 1979 la política de las «cuatro modernizaciones», impulsada por el nuevo liderazgo de Deng Xiaoping, fue por fin operativa. El primer sector afectado fue el campo, donde vivía la inmensa mayoría de la población china. Aunque el estado seguía siendo el propietario de la tierra, cualquier intento de colectivización fue definitivamente abandonado y China volvió a ser un país de medianos y pequeños campesinos, libres de comercializar sus productos y también de contratar mano de obra, a condición de pagar los impuestos y de respetar las cuotas de abastecimiento debidas al estado, a precios por otra parte más remunerativos que los fijados anteriormente. Los resultados de esta auténtica revolución fueron muy alentadores, no sólo en términos de incrementos productivos, sino también en términos de renta *per capita* y mejora del nivel de vida de la población rural.

Por lo que respecta al sector secundario, su reforma se emprendió de manera experimental con la constitución, en las provincias costeras del sur de país, de cinco «zonas económicas especiales» abiertas a las inversiones por parte de los empresarios privados chinos y extranjeros. El experimento tuvo éxito: se calcula, por ejemplo, que la provincia de Kwang Tung registró, a partir de 1979, un índice de crecimiento récord, de un 12,5 % anual y que la población de la ciudad de Shenzen, cerca de Hong Kong –la principal zona especial– pasó en pocos años de cien mil habitantes a más de dos millones. Una parte considerable de los capitales invertidos en estas actividades procedía de los chinos de la emigración, presentes en casi todos los países del Pacífico Sur, donde constituían minorías ricas e influyentes. En Tailandia, por ejemplo, la minoría del 10 % de chinos que allí residían controlaba el 50 % del PIB y en Singapur, como es sabido, eran la etnia dominante. A partir de 1984, por decisión de una comisión especial del Comité Central, el sistema adoptado en las zonas especiales fue parcialmente extendido a la economía china en su conjunto. Aunque continuaba existiendo un importante sector de actividades industriales nacionalizadas, la economía tomaba cada vez más el camino del mercado, situándose a pleno título en los circuitos internacionales. Entre 1980 y 1989 las exportaciones chinas de productos industriales se cuadruplicaron, pasando de nueve mil a treinta y siete millones de dólares, para seguir progresando de forma acelerada a lo largo de los años noventa. Por último, se calcula que la tasa de crecimiento registrada en esta década fue de cerca del 10 %.

Desde luego, existían faltas y limitaciones en este desarrollo tumultuoso. Éstas consistían en primer término en la escasez de personal cualificado, que un sistema escolar todavía inadecuado y claramente inferior a los están-

dares japoneses y surcoreanos no conseguía generar: en 1987 los estudiantes universitarios eran sólo dos millones y la tasa de analfabetismo seguía alta, con un 31 %; en segundo término estaban los daños provocados al medio ambiente por una industrialización salvaje, que colocaba a China en los primeros puestos de la clasificación de los países más contaminantes y contaminados. Pero es evidente que el mayor handicap, también para China, consistía en el incremento de la tasa de natalidad, que en los años sesenta y setenta, tras la hecatombe causada por el «gran salto hacia adelante», había alcanzo un índice del 33-34 por mil. Se perfilaba el peligro de que, a pesar de los progresos realizados, los recursos alimentarios no lograran ya mantener el paso del aumento de la población, peligro tanto más real en cuanto que la superficie cultivable constituía una porción reducida del inmenso país. Para conjurarlo, el gobierno recurrió a medidas draconianas. A partir de 1979 entró en vigor un plan familiar que permitía a cada pareja tener un solo hijo en las ciudades y dos en el campo. También se recurrió a la práctica de la esterilización: veintiún millones de personas, sólo en 1983. Los resultados no faltaron: de 1985 a 1990 la tasa de natalidad bajó hasta tocar en 1985 el 17,8 por mil, una de las más bajas de toda Asia y muy inferior a la de la India. Pero a la larga esto amenazaba con alterar el equilibrio entre los sexos a favor del masculino, a causa de la práctica de recurrir al aborto si de la ecografía resultaba que el bebé iba a ser hembra, y entre generaciones a favor de los ancianos. Además de las limitaciones existían sobre todo unos costes que había que pagar: la aparición de la inflación y del desempleo; los desequilibrios entre las regiones desarrolladas de la costa y las regiones del interior que se habían quedado en una condición de atraso, con el consiguiente fenómeno de la emigración interna de decenas de millones de personas; la difusión de la corrupción. A pesar de todo ello, y teniendo en cuenta las dimensiones del país, el caso chino constituye un *exploit* sin precedentes.

En el umbral de los años noventa el proceso de integración y cooperación económica ya comenzado en las décadas anteriores se había extendido, pues, a toda el área del Pacífico y el volumen de los intercambios efectuados en su interior absorbía una porción cada vez mayor del comercio mundial en su conjunto. Especialmente intensos eran los intercambios entre China y Japón, que en agosto de 1988 estipularon un nuevo tratado comercial, pero también lo eran entre la China continental y Taiwan y los demás países del área. Cualquiera que haya visitado China en estos últimos años, no puede no haberse asombrado por el desarrollo del turismo interasiático.

En la órbita del área del Pacífico giraban también países que por su historia y su composición étnica, no pueden considerarse asiáticos. En primer lugar, es el caso de Australia, cuyas exportaciones hacia los países de Asia

suroriental y oriental pasaron entre 1971 y 1994 del 39 % a 62 % de su volumen total, mientras que las importaciones pasaron del 21 % al 41 %. Entre los estados a orillas del Pacíficos el único que quedó ajeno a este proceso de integración fue la Unión Soviética. Los proyectos con Japón para una explotación conjunta de las grandes riquezas de Siberia, de los que se habló en varias ocasiones, nunca llegaron a concretarse y las relaciones entre los dos países continuaron dominadas por el viejo problema de las islas Kuriles.

Se plantea aquí la cuestión de si, y en qué medida, a esta integración y cooperación económica ha correspondido alguna forma de cooperación política. En efecto, no faltaban en la región focos de posibles conflictos. Entre China, Corea del Sur y Japón existían unas cuestiones pendientes que se remontaban al pasado, próximo o remoto, y que de vez en cuando volvían a aflorar. En junio de 1982, por ejemplo, China presentó a Japón una protesta oficial por la manera en que en los textos escolares se definía la invasión de la que había sido víctima a partir de 1937, y en 1986 protestó nuevamente por la visita del primer ministro japonés Nakasone al templo de Yasukuni, para homenajear a los caídos japoneses a los que dicho templo estaba dedicado. También Corea del Sur tenía motivos de resentimiento para con Japón, donde vivían, en una condición de inferioridad, seiscientos mil de sus ciudadanos deportados allí durante la guerra. Corea de Sur exigía disculpas por el daño y las ofensas que habían padecido, disculpas que efectivamente se pidieron en ocasión de la primera visita a Tokio del primer ministro surcoreano, en septiembre de 1984. Ello no impidió que dos años después los surcoreanos se asociaran a los chinos en la protesta por la visita de Nakasone al templo de Yasukuni. Por último, existían focos de tensión interétnica en el seno de los países. Este era el caso de la parte oriental de la isla de Timor, ex colonia portuguesa que en 1974 Indonesia se había anexionado, y de la posesión francesa de Nueva Caledonia.

Naturalmente, un peso mucho mayor lo tenían las secuelas de los años de la guerra fría y de la guerra de Corea. Pero ya hemos podido constatar cómo, tras la visita de Nixon a China y el reconocimiento de la República Popular por parte de los Estados Unidos, las tensiones se habían suavizado y las relaciones chinas con Norteamérica y Japón se habían normalizado (véase cap. 31). El asunto de la devolución de Hong Kong a China se solucionó en 1984 mediante un acuerdo por el que la ciudad y su territorio volverían a estar bajo soberanía china en 1997, a condición de conservar un estatuto autónomo. En 1987 un acuerdo análogo fue estipulado con Portugal para la ciudad de Macao.

Además, el área del Pacífico seguía siendo una de las regiones menos militarizadas del mundo. También en el transcurso de la década de los ochenta Japón continuó destinando al gasto militar sólo el 1 % de su Producto Interior Bruto. Aunque, gracias al crecimiento vertiginoso del país,

ésta representaba una cifra considerable, no se podía comparar en absoluto con las que invertían para sus arsenales no sólo las dos superpotencias, sino también las demás grandes potencias o los estados mediorientales. China seguía siendo el único estado del área que disponía de la bomba atómica, pero se sumaba a los demás estados de la región en su condena de los tests nucleares efectuados por Francia en el islote de Mururoa, en el archipiélago de Melanesia.

A la luz de todo esto, aunque parecen discutibles las opiniones de Samuel Hungtington, que sostiene que «la industrialización y el consiguiente desarrollo económico han dado vida a lo largo de los años ochenta a un fenómeno que bien se puede definir como 'la afirmación asiática'», una suerte de identidad común de todos los estados de la región, también cabe constatar cómo el área del Pacífico se presenta en los años ochenta como la menos expuesta a los riesgos de la conflictividad entre los estados que forman parte de ella.

Pero sí existían riesgos de desestabilización que se anidaban dentro de cada estado. Un desarrollo tumultuoso como lo había sido el que experimentaron, había inevitablemente generado, en efecto, desequilibrios regionales y tensiones sociales. El control de los unos y de las otras dependía de la disponibilidad y la capacidad de los sistemas políticos para reformarse a sí mismos en el sentido de una mayor apertura a la participación y a alguna forma de democratización. Desde este punto de vista, el único país asiático que parecía ser inmune a los riesgos de desestabilización era Japón. Los acontecimientos que se produjeron en los demás estados mayores durante los ochenta demuestran lo difícil que era, y sigue siendo, el paso del control autoritario a formas de participación democrática.

Pasos hacia adelante en esta dirección se dieron en Corea del Sur, donde en 1987 los militares cedieron el gobierno a los civiles, y en Taiwan, con el fin del monopolio político del Kuomintang y la legalización de la oposición. En las Islas Filipinas, en noviembre de 1985, el dictador Fernando Marcos se vio obligado a abandonar el poder tras la victoria electoral de la candidata de la oposición, Corazón Aquino, la mujer de su mayor adversario político, asesinado dos años antes. En Indonesia el gobierno autoritario y corrupto de Suharto reprimió con contundencia las manifestaciones de protesta de los estudiantes que tuvieron lugar con ocasión de la visita del primer ministro japonés a Yakarta en 1974. Diez años después, los manifestantes musulmanes y cristianos que protestaban contra la decisión de imponerles la adopción y la observancia de la doctrina oficial del régimen –una especie de alteración de los principios del *Pancasila* cortados a la medida del «nuevo orden» instaurado por Suharto– corrieron una suerte peor, ya que docenas de ellos perecieron bajo el fuego de la policía. A pesar de la represión, la disensión continuó difundiéndose. Hacia finales de los años ochen-

ta encontró nuevos estímulos a raíz del desarrollo de los acontecimientos en la Unión Soviética y en los países satélites y se buscaron palabras indonesias para traducir términos como *glasnost* y *solidarnosc*. Como sabemos, deberán pasar muchos años para que Suharto se viera obligado a abandonar el poder y todavía hoy no conocemos la conclusión de la crisis de Indonesia.

En China la primeras manifestaciones significativas de protesta, impulsadas por intelectuales y estudiantes, se produjeron en diciembre de 1986. A raíz de ellas el secretario general del partido, Hu Yaobang, considerado demasiado blando, fue destituido de su cargo. Su muerte, en mayo de 1989, marcó la reanudación de un movimiento de protesta a escala mucho más grande, que fue iniciado por los estudiantes de la Universidad de Pekín y al que se sumaron obreros y ciudadanos de a pie. El movimiento se extendió a otras ciudades del país, especialmente a Shanghai. Durante varias semanas, la plaza de Tienanmen y las calles cercanas fueron escenario de imponentes manifestaciones, hasta que el 4 de junio fueron reprimidas a sangre y fuego. Hay distintas estimaciones del número de víctimas, pero con seguridad éste es de algunos centenares. Asimismo, sigue sin aclararse el desarrollo y la forma de los acontecimientos hasta su trágico epílogo. En efecto, los testimonios de los estudiantes disidentes que se refugiaron en los Estados Unidos, es decir, la principal fuente de la que disponemos, ofrecen versiones discrepantes. Algunos atribuyen toda la responsabilidad de la masacre a las autoridades comunistas, mientras que otros admiten una corresponsabilidad de las franjas más extremistas del movimiento estudiantil, por su negativa a aceptar la mediación que había sido ofrecida. Por otra parte, es sabido que también en el seno del Partido Comunista prevalecieron los elementos más intransigentes. El secretario general, Zao Ziyang, que había acudido a la plaza para dialogar con los manifestantes, fue destituido del cargo y sustituido por Yang Zemin, hombre de confianza de Deng Xiaoping. Recientemente, con ocasión de una visita a los Estados Unidos, el propio primer ministro chino admitió que se cometieron errores.

Durante los años noventa China ha proseguido en su tumultuoso desarrollo económico. Los problemas que planteó la masacre de Tienanmen no sólo siguen en pie, sino que se agravan a medida que el desarrollo genera nuevas contradicciones y nuevos desequilibrios. La salida de esta crisis latente es la democratización y el pluralismo. Pero existe también otra alternativa, la desestabilización y la disgregación. Ha sucedido otras veces en la milenaria historia de China.

39

Los países del Sur en los años ochenta y noventa

39.1. EL SUBCONTINENTE INDIO

A lo largo de los años ochenta, el índice de crecimiento de la economía en la India, calculado alrededor de un 5 %, continuó siendo sostenido, aunque muy inferior al de los «tigres» asiáticos y al de China. Pero seguía siendo elevada también la tasa de crecimiento demográfico, a pesar de las tentativas por parte del gobierno de imponer a una población reacia el uso de prácticas anticonceptivas. La India, pues, era un país cada vez más superpoblado; es más, era un país hacinado. Ello quedó patente de forma dramática cuando, en diciembre de 1984, una nube de gas tóxico, que se había desprendido de una fábrica de la Union Carbide, en Bhopal, causó dos mil víctimas entre los miles de seres humanos que dormían en las chabolas colindantes y ocasionó daños a un número mucho mayor de personas en el área circundante.

En semejante situación de congestión, aumentaban las probabilidades de que las tensiones sociales y étnicas, existentes desde siempre, se agudizaran, y así sucedió. En efecto los años ochenta fueron para India una década de inestabilidad y violencia, que provocaron el asesinato de dos primeros ministros, víctimas de atentados, y la muerte de miles de ciudadanos, víctimas de los enfrentamientos entre las diversas etnias. Los primeros indicios de deterioro se produjeron en la provincia oriental de Assam, a raíz de la inmigración masiva de Bangladesh; pero el epicentro de los conflictos fue la provincia de Panjab, cuya población estaba formada en su mayoría por la etnia sij y cuyo gobierno reivindicaba la plena autonomía de Nueva Delhi. A principios de 1984 un grupo de sijs fundamentalistas, encabezados por Jarnail Singh Bhindranwale, ocuparon el Templo de oro de Amritsar, lugar sagrado de su religión, resueltos a quedarse ahí hasta que sus reivindicaciones fuesen aceptadas. Tras algún titubeo, en junio de 1984 el gobierno de Nue-

va Delhi respondió a las violencias perpetradas por los sijs contra la población hindú con el envío del ejército, que destruyó el templo y mató a todos sus ocupantes. Durante los combates que precedieron y siguieron a la destrucción del templo, fueron asesinados miles de sijs. La venganza de éstos no se hizo esperar: el 31 de octubre de 1984 Indira Gandhi era asesinada cerca de su residencia por dos de sus guardaespaldas de etnia sij. Como represalia, multitudes de fundamentalistas hindúes desataron durante tres días una autentica caza de hombres en Delhi y en otros centros, causando miles de víctimas entre los sij. La espiral de violencia continuaba. Para la sucesión de Indira fue designado su hijo Rajiv, quien, aprovechando la emoción suscitada por el asesinato de su madre, se apresuró a convocar nuevas elecciones, que se saldaron con un auténtico triunfo para el Partido del Congreso I, que obtuvo cuatrocientos de los quinientos escaños de la *Lok Saha*. Fortalecido por este éxito, el nuevo primer ministro intentó aplacar las tensiones étnicas y religiosas, fuera recurriendo a una política de concesiones y conciliación, como en Assam, o perseverando en la política de represión, como en Panjab. Pero el virus de la intolerancia había contagiado al país y no tardaría en manifestarse de nuevo.

En efecto, la popularidad de Rajiv no duró mucho. A su desgaste concurrieron varios factores: un asunto de sobornos de la empresa seca Bofors a personas cercanas al mandatario y que éste intentó tapar; la implicación de la India en la guerra de Ceilán entre la mayoría cingaleses y la minoría tamil; y sobre todo, las eternas y abismales desigualdades sociales. En las elecciones de diciembre de 1989 el Partido del Congreso resultó clamorosamente derrotado y se constituyó un gobierno de coalición presidido por V. P. Singh, el hombre que había denunciado el escándalo de la Bofors y al que Rajiv había obligado a dimitir. Del nuevo gobierno formaban parte los dos partidos comunistas y el Bharatiya Janata Party, una formación política de reciente creación, inspirada en los principios del más intransigente fundamentalismo hindú y antimusulmán, encabezada por L. K. Advani. Éste se hizo promtor de una campaña de movilización cuyo objetivo era la destrucción de la mezquita de Ayodhya, construida por los conquistadores musulmanes Mogul en siglo XVI, para levantar en su lugar un templo hindú dedicado a Rama. Para conjurar el riesgo, muy probable, de una nueva guerra de religión, el primer ministro ordenó la detención de Advani. De ello se derivó la disolución de la coalición gubernamental y la convocatoria de nuevas elecciones. El 21 de mayo de 1991, el día después de la clausura de la primera vuelta electoral, en las cercanías de Madras Rajiv Gandhi caía víctima de un atentado, al parecer por obra de un fundamentalista tamil. Pasados los días de duelo nacional, en junio tuvo lugar la segunda vuelta de las elecciones, que confirmó la clara afirmación del Partido del Congreso, que ya se perfilaba en la primera vuelta. Para presidir el nuevo gobierno fue designa-

do P. V. Narasimha Rao, quien emprendió un nuevo curso de política económica con el objetivo de favorecer una mayor integración de la India en el circuito de los mercados internacionales. Pero la situación estaba lejos de aplacarse y el experimentado liderazgo del Partido del Congreso tendría que afrontar otras difíciles pruebas. El 6 de diciembre de 1992,la mezquita de Ayodha fue demolida por una muchedumbre de fanáticos hindúes y sustituida con un altar en honor de Rama, primera piedra a la espera de la construcción del templo hindú, templo que, por otra parte, nunca llegó a ser construido por la firme oposición del gobierno. Por segunda vez en pocos años, el riesgo de que se repitieran las masacres de 1947 y 1984 había sido conjurado. Pero la chispa de los opuestos fundamentalismos no se había apagado y todavía hoy en día sigue viva.

Bajo el signo del fundamentalismo también se desarrolla la historia de Pakistán en la década de los ochenta. Si se excluye el bienio 1988-1990, cuando fue presidenta de gobierno Benazir Bhutto, la hija del presidente ejecutado por los militares en 1979 (véase cap. 35), las riendas del poder siempre estuvieron en manos de los militares, que lo ejercieron en formas dictatoriales y favorecieron y promovieron la islamización de la sociedad y de sus costumbres. La invasión soviética de Afganistán hizo de Pakistán un área de gran importancia estratégica. En efecto, el país se convirtió no sólo en una tierra de refugio para cientos de miles de prófugos, sino también en punto de paso obligado para los abastecimientos a los muyaidines empeñados en la *yihad*, su natural retaguardia. Ello contribuyó indudablemente a favorecer un proceso de ósmosis, cuando no de coincidencia, entre identidad nacional y fundamentalismo islámico y en consecuencia una mayor implicación del país en el escenario mediorientaI.

Karachi acogió varios congresos islámicos e «islámica» se definía la bomba atómica que Pakistán estaba construyendo.

39.2. LOS PAÍSES DE ORIENTE MEDIO Y DEL MAGREB

En 1980, a consecuencia de la revolución jomeinista y de la interrupción de los abastecimientos por parte de Irán, el precio del petróleo volvió a subir hasta alcanzar la cifra de treinta dólares por barril. Pero fue una llamarada breve: en 1986 había bajado hasta los diez dólares y la cifra total que cobraban los países de la OPEP se había reducido de los 281 mil millones de dólares de 1980 a los 158 de 1983. Quedaban muy lejos las cifras astronómicas de los primeros años setenta.

Los mayores países del área se encontraron por tanto en la necesidad de afrontar los problemas que ya habían conocido en la segunda mitad de los

años setenta: un índice de natalidad entre los más altos del mundo, a pesar de los índices elevadísimos de mortalidad infantil (150 por mil en Argelia y 170 en Egipto); un dramático descenso de la producción *per capita* de los géneros alimentarios, que afectó a gran parte de los países de esta región y, como consecuencia, un creciente endeudamiento. A ello añádase el constante gravamen de los ingentes gastos militares. Sobra decir que las principales víctimas de esta situación deteriorada eran las grandes masa que habían emigrado a la ciudad. Entre 1983 y 1984 Marruecos, Túnez y Sudán fueron escenarios de una serie de tumultos en protesta por el encarecimiento del precio del pan. En octubre de 1988 en Argelia se producían análogos episodios de violencia, que ocasionaron ciento cincuenta muertos y siete mil detenciones. Es en semejante terreno que enraizaron la semilla y la planta del fundamentalismo islámico, que, por su extensión y su vigor, el historiador Samuel Hungtington comparó a la contestación juvenil de los años sesenta. Sin embargo, esta similitud me parece inviable por distintas razones. En primer lugar, porque los jóvenes que protagonizaron el sesenta y ocho europeo y norteamericano eran una minoría en un mundo de ancianos, mientras que en los países islámicos constituían la mayoría de la población; en segundo término, porque mientras que los primeros contestaban los valores de las generaciones que los habían precedido, en nombre de nuevos valores, los fundamentalistas luchaban por volver a valores y costumbres antiguos y por el respeto de la tradición. En este sentido, la otra similitud propuesta por Huntington, con la Reforma protestante, parece más verosímil. También los reformadores de la Edad Media y los anabaptistas partidarios de Thomas Münzer razonaban en términos de «vuelta a los principios» y querían devolver la Iglesia a la pureza de sus orígenes. Pero desde entonces han pasado cinco siglos, incluso para quienes profesen la religión musulmana.

Fuese lo que fuese, de hecho los movimientos fundamentalistas islámicos representan una novedad de gran importancia y no cabe duda de que hayan ejercido una fuerte influencia en el desarrollo de los acontecimientos, no sólo en Oriente Medio. Desde luego, a su desarrollo contribuyeron el ejemplo y la sugestión de la revolución jomeinista y de la resistencia afgana, pero también lo hizo la financiación de Arabia Saudí y de la Organización de la Conferencia Islámica. Una parte de ésta se destinó a la construcción de nuevas mezquitas, pero una parte igualmente considerable se invirtió en escuelas coránicas, universidades, hospitales y en varias actividades económicas, desempeñando así un papel de suplencia respecto a los aparatos nacionales, que no estaban en condiciones de asegurar a la población los servicios de los que carecía por completo. A través de estos canales el mensaje fundamentalista de los *ulema* y de los estudiantes de las escuelas coránicas abría una brecha y se arraigaba entre las grandes masas de los inmigrantes urbanos.

El caso ejemplar fue, como hemos visto, el de Irán, pero no hubo país islámico que de alguna manera no se viese afectado por esta oleada fundamentalista, comenzando por Egipto, donde el 6 de octubre de 1981 el presidente Sadat fue asesinado durante un desfile militar por un comando integrado por elementos procedentes del feudo fundamentalista de Asiut, y donde en el mismo año se produjeron en varias localidades episodios de violencia contra las comunidades coptas. En Siria, en febrero de 1982, grupos fundamentalistas insurgieron en la ciudad de Hamah, pero tuvieron que sufrir la cruel represión del régimen baathista de Assad; las víctimas se contaron por centenares, quizá por millares. En Irak el llamamiento integrista que procedía de Teherán encontró audiencia entre la comunidad chií que vivía en la parte meridional del país y que tenía en el *ulema*, Muhammad Baqir al Sadr, su más prestigioso portavoz. Pero la represión de Saddam Hussein no tardó en abatirse sobre ella; en 1980, Muhammad al Sadr fue ejecutado. En Sudán el jefe del estado Numeyri promulgó en 1983 una serie de decretos con los que se imponía la «observancia» de la *saria*, destrucción de las bebidas alcohólicas y castigos corporales incluidos, pero su experimento de gobierno islámico tuvo una vida breve. Numeyri fue derrocado en 1985, aniquilado por el desastroso deterioro de la situación económica y por la salida del gobierno de los grupos fundamentalistas más intransigentes. En Argelia nacía, en marzo de 1989, el Frente Islámico de Salvación (FIS), que en las elecciones administrativas de junio de 1990 conquistó la mayoría en 32 de los 48 consejos provinciales y hubiese resultado el triunfador de las elecciones políticas de diciembre de 1991–enero de 1992, si éstas no hubiesen sido anuladas por un golpe de estado del ejército. En distintas medidas y en formas diferentes, movimientos fundamentalistas estuvieron presentes y operantes también en los demás países del Magreb. Un fuerte componente fundamentalista existe también en la *intifada* palestina en los territorios árabes ocupados por Israel.

No se ha librado de él ni siquiera la propia Turquía, el más laico de todos los estados de religión musulmana. A lo largo de los años ochenta, las escuelas islámicas se han cuadruplicado y la instrucción religiosa ha sido declarada obligatoria en todas las escuelas públicas. En las elecciones de 1995, el Partido del Bienestar, declaradamente islámico, ha resultado ser el más votado. Un foco islámico, en fin, se ha encendido también en la península balcánica, en Bosnia.

Por otra parte, igual que el nacionalismo panárabe de los años de Nasser, tampoco el fundamentalismo de los años ochenta pudo resolver los contrastes que dividían los varios estados de la región mediorientaI. Ello se pudo constatar en junio de 1982, cuando Israel emprendió la operación «paz en Galilea», invadiendo el Líbano meridional y llegando hasta las puertas de Beirut, con el objetivo de expulsar de allí a los guerrilleros palestinos y en-

tregar el gobierno del país a sus fieles milicias cristianas. Fue durante esta operación cuando se produjo la masacre de palestinos perpetrada por las milicianas cristianas apoyadas por Israel en los campos prófugos de Sabra y Shatila, en septiembre de 1982. La posición que asumieron los diversos estados de la región ante esta agresión, estuvo muy lejos de ser convergente. Mientras que Siria e Irán, además de la OLP, se empeñaron en la resistencia y en la guerrilla, financiando y organizando cada uno su milicia, Egipto, Jordania y Arabia Saudí apostaron sus cartas por la posibilidad de una mediación. Se iniciaba así una partida extremadamente intrincada: al tiempo que proseguían las negociaciones para encontrar una solución de compromiso, con la participación de la ONU y de Estados Unidos, en el terreno martirizado de Líbano continuaban los enfrentamientos. En esta situación de beligerancia y confusión, en 1982 fue enviado a Líbano un contingente internacional de paz, que pronto, sin embargo, tuvo que constatar su propia impotencia para restaurar el orden y en febrero de 1984 se vio obligado a retirarse, después de que un coche bomba había hecho saltar por los aires el cuartel general de los marines norteamericanos y del contingente francés, causando trescientas víctimas. Por fin, en junio de 1985, el gobierno laborista de Simon Peres decidía la retirada de las tropas israelíes, la que, por otra parte, no sirvió para devolver la paz al atormentado país. Durante varios años, hasta su incorporación de hecho a Siria en 1990, Líbano será un campo de entrenamiento para terroristas y escenario de una guerra de todos contra todos.

Mientras tanto se estaba produciendo otro conflicto que oponía a dos de los mayores estados de la región, Irán e Irak. Comenzada en septiembre de 1980, la guerra continuó en fases alternas hasta el agotamiento de las dos partes, que en julio de 1988, aceptando el llamamiento que, con voto unánime, les dirigía el Consejo de Seguridad, firmaron un acuerdo de tregua. Así terminaba una guerra en la que perdieron la vida cuatrocientos mil seres humanos. También ante esta guerra los estados árabes de la región asumieron posiciones y conductas diversas. Arabia Saudí y los pequeños estados del golfo Pérsico se unieron a Egipto y Jordania para apoyar a Irak; por su parte, Siria, Yemen y la Libia del coronel Gadafi se pusieron del lado de Irán. Se constituía así una extraña convergencia entre un estado laico que había reprimido de forma violenta la rebelión fundamentalista de Hama, como era Siria, y una teocracia como el Irán del *ayatolá* Jomeini. Era un indicio más de que los intereses de cada estado acababan primando sobre las afinidades religiosas y culturales.

La guerra entre Irak e Irán estaba recién terminada cuando, el 2 de agosto de 1990, Saddam Hussein ordenó a sus tropas que invadieran el pequeño emirato de Kuwait. Se trataba de un acto de abierta agresión, efectuado además en una parte del mundo que los Estados Unidos consideraban vital para la seguridad de Occidente, pero el dictador irakí probablemente conta-

ba con el apoyo de la Unión Soviética, con la que en 1972 Irak había estipulado un tratado de amistad y que era su principal proveedor de armas, para bloquear una condena y eventuales iniciativas por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Si este era su cálculo, estaba equivocado: por boca de su ministro de Exteriores y del propio Gorbachov, la Unión Soviética se asoció a la condena de la agresión. Con dos resoluciones, en agosto y septiembre de 1990, que vieron el voto contrario únicamente de Cuba y Yemen, y la abstención de China, el Consejo de Seguridad pudo aprobar una medida que autorizaba el uso de la fuerza para restablecer la soberanía de Kuwait. La operación «tormenta del desierto», en la que el contingente norteamericano, predominante, estuvo acompañado por unidades francesas, inglesas, italianas y de algunos estados de la región, se inició el 17 de enero de 1991 y terminó con éxito el 28 de febrero, con la aceptación por parte de Irak de las condiciones establecidas por la ONU.

En las semanas que precedieron el arranque de la operación y en el transcurso de ésta, Sadam Hussein no cesó de apelar a la solidaridad islámica y a la *jihad* contra los infieles imperialistas y sionistas. El llamamiento fue secundado por grandes masas de manifestantes que tomaron las calles de las distintas capitales aclamando a Sadam; pero no lo acogieron los gobiernos. Éstos, en su gran mayoría, incluido el sirio, se sumaron a la condena de la agresión a Kuwait y algunos, en especial Egipto, participaron con contingentes propios en la operación «tormenta del desierto». Las únicas excepciones fueron las de Libia, de Yemen y de la OLP. Una vez más, pues, las consideraciones de carácter económico y político habían tenido más peso que los llamamientos a la unidad árabe y islámica.

Después de la guerra del golfo, la situación de Oriente Medio se presenta más estable. A ello contribuyeron ciertamente los acuerdos de Oslo de agosto-septiembre de 1993, con los que la OLP de Yasser Arafat y el estado de Israel se han reconocido mutuamente y la franja de Gaza y parte de Cisjordania han sido puestos bajo la administración de una Autoridad palestina. Fue un primer paso importante en el camino de un difícil «proceso de paz» que todavía está en marcha. Sin embargo, a raíz de las rivalidades que dividen los varios estados y de las tensiones sociales y religiosas internas de cada uno, la región medioriental sigue siendo un área expuesta al riesgo de la desestabilización.

39.3. EL ÁFRICA SUBSAHARIANA

Si para los países árabes del África septentrional los años ochenta fueron una década difícil, para los del África subsahariana se trató de una década trágica. El proceso de degradación ya comenzado, como hemos visto, en la

década anterior, fue acentuándose cada vez más, como lo atestiguan todos los indicadores de los que disponemos, comenzando por los demográficos.

La tasa de incremento demográfico, a finales de los años ochenta, rondaba el 3 %, situándose entre las más altas del planeta. Así se explica cómo, en tan sólo treinta años, la población del continente en su conjunto haya pasado de 281 millones a 647, es decir, se ha más que duplicado. También es cierto que esta cifra incluye a los países del África septentrional, pero al analizarla constatamos fácilmente que las tasas de natalidad de los países subsaharianos no son inferiores, e incluso a veces son superiores, a las de los países del Magreb, ya de por sí elevadas. Todo esto, a pesar de que el índice de mortalidad infantil se mantuvo elevado y, sobre todo, a pesar de que, incluso prescindiendo del fenómeno recurrente de las carestías, gran parte de la población del África subsahariana vivía y sigue viviendo en condiciones de subalimentación. Según los datos de la ONU de 1992, el Producto Interior Bruto *per capita* habría bajado de un índice de 7 a un índice de 5, tomando como igual a 100 el de los países industrializados, y el consumo de calorías diarias, entre 1960 y 1990, habría bajado de un índice de 70 a uno de 65. Un subcontinente, pues, al mismo tiempo superpoblado y subalimentado. Puede parecer una paradoja, pero es la realidad, la realidad de un área geográfica no ya en vías de desarrollo, sino de subdesarrollo.

Las razones de esta degradación son, naturalmente, muchas y complejas y ya hemos tenido ocasión de mencionarlas. Algunas de ellas tienen su origen en el interior de estos países, como la regresión, a partir de los años setenta, de la producción agrícola a raíz de la sequía, de la destinación de grandes extensiones de superficies cultivables a pastos y otras causas naturales y humanas que, unidas, han contribuido a obligar a África a recurrir de forma masiva a las importaciones y a las ayudas de las organizaciones internacionales para asegurarse el alimento. Otras razones son de origen externo, como la reducción de las inversiones privadas extranjeras y el deterioro, a lo largo de los años ochenta, de los términos de intercambio entre las materias primas, de las que África era exportadora, y las manufacturas de los que era importadora; así pues, unas entradas en disminución se correspondían a unas salidas en aumento. El resultado no podía ser otro que una drástica reducción de los intercambios –siempre según datos de la ONU de 1992, de un 3,8 % del conjunto del comercio mundial en 1970, al 1 % de 1989– y un endeudamiento cada vez mayor. De 1973 a 1987, la suma total de la deuda de los países africanos ha subido de 14 millones de dólares a 125, es decir, se ha multiplicado por diez. En la clasificación de los países deudores, el mayor país africano, Nigeria, figura inmediatamente detrás de los grandes deudores suramericanos.

En semejante contexto económico y social, el proceso de desestabilización y disgregación, ya comenzado en la década anterior, muy difícilmente

podía detenerse y menos aún invertirse, y de hecho no sucedió. Bajo el perfil político, la historia africana de los años ochenta es una sucesión de golpes de estado, atentados, guerras étnicas y tribales. Entre los estados más afectados, me limitaré a recordar a Etiopía, escenario de una guerra sangrienta con la provincia rebelde de Eritrea y de deportaciones masivas; las ex colonias portuguesas, donde seguía rabiando la guerra civil (véase cap. 35); Nigeria, donde el estado de conflictividad entre las tribus del Norte y las de Sur era endémico; Liberia, que tras el asesinato del presidente Doe se precipitó en la guerra civil; Somalia, que tras el derrocamiento de la dictadura de Siad Barre cayó presa de la anarquía. Golpes de estado se produjeron en Burkina Faso y en Burundi, ambos en 1987; y la lista está lejos de ser completa. Aparte, por su atrocidad, cabe recordar el genocidio de cien mil individuos de etnia hutus perpetrado por los gobernantes tutsis de Burundi en 1972; pero no era más que el principio de una masacre que duraría hasta nuestros días y ha causado cientos de miles de víctimas en las dos etnias.

Sin embargo, incluso el cuadro más oscuro contiene unas zonas de luz. En Suráfrica, el 11 de febrero de 1990, Nelson Mandela salía de la cárcel en la que había estado encerrado 28 años y al mismo tiempo volvía a la legalidad, tras treinta años de clandestinidad, el *African National Congress*, del que él era el líder indiscutible. El 21 de marzo se reconocía la independencia de Namibia, que desde 1949 había quedado anexionada a Suráfrica. Eran los primeros pasos en el camino de la abolición del *apartheid*, que será sancionado oficialmente en 1993. Con el *apartheid* caía otro muro de la vergüenza, todavía más espeso que el muro de Berlín. Porque la línea de división entre el racismo y la tolerancia no se identifica con ninguna frontera entre estados o entre sistemas sociales, sino que pasa dentro de la colectividad humana.

39.4. AMÉRICA LATINA

También para América Latina los años ochenta fueron una década de crisis profunda. Los índices de la inflación llegaban a cifras astronómicas –1.500% en Brasil, cerca de 3.000% en Perú, 3.400% en Argentina, en 1989– y la deuda externa aumentaba de forma vertiginosa a medida que los tipos de interés practicados por los bancos acreedores norteamericanos aumentaban y el dólar se reforzaba; en Argentina se pasó de 8,1 mil millones de dólares en 1977 a 53,9 en 1987; en Brasil, de 28,3 a 109,4; en Chile, de 4,9 a 18,7; en México, de 26,6 a 93,7; y en Venezuela, de 9,8 a 29, en estas mismas fechas. En 1982 México, Argentina y Brasil suspendieron los pagos por el servicio de la deuda y obtuvieron de sus acreedores una renegociación de la deuda. A cambio tuvieron que acceder a adoptar las severas medidas de austeridad

que les imponía el Fondo Monetario Internacional. La consecuencia inevitable de esta situación era que los índices del PIB, en la mayoría de los países del subcontinente, eran de signo negativo, así como los de la renta *per capita*, aunque estos últimos tienen escaso valor en una realidad social caracterizada, en su casi totalidad, por un profundo desnivel existente entre las rentas de una minoría privilegiada y las de la gran mayoría de una población de trescientos cincuenta millones de personas.

Es con este telón de fondo que se desenvuelve el hilo de los acontecimientos y que cabe colocar los cambios institucionales y políticos que se produjeron en cada país de subcontinente.

La coyuntura económica y la fortuna no asistieron a México a lo largo de los años ochenta. El descenso del precio del petróleo, que constituía el principal recurso con el que contaban sus gobernantes, y el terremoto devastador de septiembre de 1985, pusieron al país de rodillas. Se comprende por tanto cómo su historia en el transcurso de los años ochenta se presenta como una sucesión de crisis financieras y consiguientes negociaciones con el FMI. Ello conllevó también una revisión radical de las orientaciones de política económica hasta entonces predominantes, en el sentido de una mayor apertura al mercado y en particular de una mayor integración (y dependencia) con la economía del poderoso vecino norteamericano. Mientras numerosas empresas norteamericanas trasladaban sus instalaciones a México, atraídas por el bajo coste de la mano de obra, miles de «peones» mexicanos emigraban, legal o clandestinamente, a los Estados Unidos. En 1986, México se adhirió al GATT y en 1994 se sumará a los Estados Unidos y Canadá en la constitución del *North American Free Trade Association* (NAFTA). Esta apertura hacia el exterior implicó una importante reducción del sector estatal, que en gran parte fue privatizado o clausurado, y la adopción de una serie de medidas de austeridad que supusieron, entre otras cosas, un drástico recorte de los salarios reales.

En semejante contexto un sistema político de hecho monopartidista, como el mexicano, basado en la capacidad de cooptación y de mediación de un partido que se definía al mismo tiempo «revolucionario» e «institucional», ya no estaba en condiciones de aguantar las tensiones y la conflictividad que se producían en la sociedad civil. Por otra parte, en un país donde la revolución era una parte fundamental de la identidad nacional, no era imaginable una solución de tipo autoritario o militar. En el aspecto político, pues, la historia de México en los años ochenta se presenta como una evolución gradual hacia un sistema pluralista y pluripartidista. Las elecciones presidenciales de julio de 1988 significaron la culminación de este proceso. En estas, en efecto, el candidato de Partido Revolucionario Institucional, Carlos Salinas

de Gortari, obtuvo una porcentaje de votos poco superior al de los candidatos de los partidos de oposición de derecha y de izquierda.

Entre los estados latinoamericanos Brasil era el que vio sus desigualdades sociales acentuarse a lo largo de los años ochenta. Las rentas del 10% más rico de la población, que en 1970 sumaban el 46,7% de la renta nacional total, en 1980 había aumentado hasta el 50,9%, mientras que, en el mismo período, las del 50% más pobre habían bajado del 14,9% al 12,6%. En el clima político más sosegado que caracterizó al país tras las elecciones de 1974 (véase cap. 35), la protesta y las reivindicaciones de las clases populares pudieron expresarse con más libertad. En particular, el área industrial de São Paulo fue el escenario de grandes huelgas, a consecuencia de las cuales se fundó en 1980 el Partido de los Trabajadores (PT). Nacía así el primer partido obrero de masas de la historia de Brasil, una formación política que, bajo la conducción de su fundador, el obrero metalúrgico Ignacio «Lula» da Silva, fue extendiendo su consenso y hoy desempeña un papel de primer plano en la vida política brasileña. En el campo también había fermento; en varias localidades se produjeron episodios de ocupaciones de tierras por parte de los campesinos, a veces encabezados por sacerdotes. En las elecciones de 1982, las primeras desde 1965 en las que los gobernadores de los estados fueron elegidos por sufragio universal, el partido de oposición PMDB resultó vencedor en los importantes estados de São Paulo, Minas Gerais y Rio de Janeiro, pero no obtuvo una mayoría suficiente como para modificar a su favor el colegio electoral que tenía que elegir en 1985 al nuevo presidente. Tras la muerte repentina del candidato elegido, Tancredo Neves, a este cargo accedió en 1985 José Sarney, un personaje comprometido con el régimen militar. Igual que su homólogo argentino, éste se encontró muy pronto en la necesidad de afrontar el problema del deterioro de la situación económica y de la inflación creciente e, igual que aquél, se vio obligado a poner en marcha un plan económico plasmado con los criterios de la más rígida austeridad, el llamado plan Cruzado. Con todo, a pesar de que la situación económica seguía inestable, venía estabilizándose la situación política. En octubre de 1988, al final de un debate que no implicó sólo a los ambientes de los profesionales de la política, sino también a amplios sectores de la opinión pública, se aprobó una nueva y avanzada Constitución, en cuyos principios fundamentales figuran el respeto a «los valores sociales del trabajo y de la libre empresa» y el pluralismo político. En el marco de esta Constitución se ha desarrollado hasta hoy en día la vida política brasileña, pero el ambicioso objetivo que ésta se marcaba –«erradicar la pobreza [...] y reducir las desigualdades sociales y regionales», todavía está muy lejos de ser alcanzado. En las elecciones presidenciales de 1989 los partidos tradicionales, apoyándose

ampliamente en el uso de los medios de comunicación, lograron que fuera elegido un personaje que poco después se vería obligado a dimitir por un asunto de corrupción, Fernando Collor de Mello, quien venció por un estrecho margen al candidato del Partido de los Trabajadores, Lula.

En Argentina el camino que eligieron los militares para desviar la atención de la opinión pública de los apremiantes problemas de la inflación desmedida y del deterioro de las condiciones de vida, e intentar así recuperar la credibilidad perdida, fue el de apelar al sentimiento de orgullo nacional. La euforia por la victoria en el campeonato de fútbol de 1978 se había desvanecido rápidamente. Hacia falta, por lo tanto, un éxito militar y para obtenerlo un contingente argentino efectuó en abril de 1982 un desembarque en las Islas Falkland-Malvinas, posesión británica, reivindicando su soberanía. La reacción de Londres no se hizo esperar y en mayo el contingente argentino tuvo que rendirse a las tropas inglesas que a su vez habían desembarcado en el archipiélago (véase cap. 36). La vergonzosa conclusión de la aventura de las Malvinas significó el fin de la junta militar. En octubre de 1983 se celebraron las elecciones generales y el radical Raúl Alfonsín resultó elegido para la presidencia con el 52 % de los votos, contra el 42 % del candidato peronista. Si el país volvía así al gobierno civil y a las reglas de la democracia, no volvió, en cambio, a la prosperidad de la que había gozado en el pasado. La inflación no dejaba de crecer y el gobierno se vio obligado a recurrir al bloqueo de los precios y de las retribuciones y a emitir al mismo tiempo una nueva moneda, el austral. La inflación bajó, pero los salarios también siguieron bajando, y con ellos la popularidad del Partido Radical y del presidente. En las elecciones legislativas de 1987, los votos de los peronistas superaron a los de los radicales y en las presidenciales de mayo de 1989 fue elegido el peronista Carlos Menem. Por primera vez en muchos años, el traspaso de poderes se realizaba al final de un mandato y según las reglas constitucionales y democráticas.

También Uruguay experimentó una evolución análoga a la de Brasil y Argentina. En efecto, tras largas negociaciones entre los varios partidos políticos y el gobierno, se acordó restaurar la Constitución vigente antes del golpe de 1974 y en 1984 se celebraron regulares elecciones legislativas y presidenciales.

En Chile, el referéndum convocado por el mismo Pinochet para confirmar sus poderes hasta 1997 se convirtió en un *boomerang* para sus promotores y en marzo de 1990 el democristiano Patricio Aylwin, candidato único de la oposición, fue elegido presidente. Gobiernos civiles se sucedieron a los militares también en Bolivia y Perú, donde en 1985, por vez primera en la historia del país, ganó las elecciones el Partido Aprista. Finalmente, tam-

bién la más antigua de las dictadura suramericanas, la de Stroressner en Paraguay, fue derrocada en 1989.

Así pues, mientras que a finales de los años setenta dos tercios de la población suramericna vivía oprimida por gobiernos dictatoriales, a finales de los años ochenta ésta vivía en su casi totalidad en estados regidos por sistemas democráticos. El que esta evolución haya podido realizarse en medio de una crónica inestabilidad económica es, desde luego, un indicio del fracaso de los gobiernos militares, pero también se debe al proceso de maduración política de amplios sectores de la opinión pública y a su liberación de los encantamientos del populismo peronista y de la autarquía nacionalista. A este propósito, un hecho nuevo e importante es la creación en 1990 de un área de libre intercambio –el MERCOSUR– que incluye a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay y que en sus primeros años de vida ha tenido resultados alentadores.

Por otro lado, ello no significa que el proceso de democratización se haya consolidado en todas partes o que todos los estados latinoamericanos que en la década anterior se habían visto involucrados en el círculo vicioso entre dictadura y guerrilla maoísta, ahora puedan considerarse libres de él. En particular, no es este el caso de Perú, que tuvo que lidiar con la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso, y de Colombia, cuyos gobiernos, además de los guerrilleros de las FARC y de M19, tienen que enfrentarse también a las poderosas bandas de narcotraficantes del cartel de Medellín.

Por último, otro discurso merecen las pequeñas repúblicas de América central. A lo largo de los años ochenta, esta región había sido escenario de un enfrentamiento entre los movimientos guerrilleros que actuaban en El Salvador y en Guatemala, y que gozaban del apoyo del gobierno sandinista de Nicaragua, y los gobiernos locales, sostenidos y armados por la administración Reagan. Un acuerdo para una solución negociada de un conflicto que había costado miles de vidas pareció alcanzarse en agosto de 1987, cuando, con la mediación y por impulso del llamado grupo de Contadora, del que formaban parte México, Colombia, Panamá y Venezuela, los presidentes de Nicaragua, Costa Rica, Honduras, el Salvador y Guatemala pusieron su firma en un plan de pacificación que preveía como primer punto una tregua en un plazo de tres meses. En aplicación de este plan, en febrero de 1990, se celebraron en Nicaragua elecciones generales que, en contra de las previsiones y las esperanzas del gobierno sandinista, vieron el triunfo de la candidata de la oposición, Violeta Chamorro. La administración de Reagan, que había aceptado con frialdad la iniciativa del grupo de Contadora, se vio así librada del problema de justificar ante un Congreso reacio y una opinión pública perpleja la continuación de las ayudas a la guerrilla antisandinista de la «contra», y con las manos libres.

Así pues, en diciembre de 1990 un cuerpo de expedición norteamericano podía penetrar en Panamá y poner fin a la dictadura del general Norie-

ga, que hasta pocos años antes había sido protegido por los propios Estados Unidos y que ahora se descubría que había sido un narcotraficante. El pleno control sobre el «patio de casa» quedaba así restablecido.

39.5. ALGUNAS BREVES CONSIDERACIONES EN FORMA DE EPÍLOGO

Ya hemos tenido ocasión de observar cómo a lo largo de los años setenta el sistema bipolar comenzó a dar sus primeras señales de hundimiento. En los años que mediaron entre los acuerdos de Bretton Woods y la caída del muro de Berlín y la disgregación de la URSS, estas señales se han multiplicado hasta llegar a provocar la caída de una de las paredes maestras, la que más se tambaleaba. En lugar de la URSS existen, hasta la fecha, una quincena de repúblicas independientes y en lugar de Yugoslavia hay cinco estados, que podrían llegar a siete si Montenegro y Kosovo obtuvieran la independencia. Cuando cae un muro maestro, está claro que el edificio que éste mantenía en pie, ha dejado de existir.

En mundo en el que vivimos, pues, ya no es bipolar, sino que es un mundo más que nunca multipolar. Es más: este último adjetivo es inadecuado y quizá es más oportuno hablar, con Mao, de «un gran desorden bajo el cielo».

No me refiero sólo a los ejemplos mencionados de la disgregación de la Unión Soviética o a la más reciente y todavía en marcha de la ex Yugoslavia, sino a un proceso más general de fragmentación. Pienso, en especial, en el estado de semianarquía en el que se encuentran sumidas regiones enteras de África, del Asia central y caucásica o, en América Latina, Colombia. Me refiero a la proliferación de paraísos fiscales al servicio de la especulación y del blanqueo de dinero sucio y en la de pequeños estados que en otro tiempo se definirían como «de juguete», pero que hoy, al ser pobres de recursos propios, acaban siendo unas zonas francas para el tráfico de droga, armas y similares, en beneficio de las organizaciones criminales internacionales y de un terrorismo que se ha convertido en un instrumento usual de la lucha política. Y por último me refiero –¿por qué no?– a los movimientos secesionistas que afectan a algunos países, incluso europeos. De hecho, todas estas situaciones son el efecto y la manifestación de un fenómeno más general, es decir, de la desaparición de la amenaza de un enfrentamiento apocalíptico entre las dos superpotencias, que ha dado vía libre y posibilidad de desahogarse a una conflictividad difusa y reprimida durante mucho tiempo. Es más: en algunos casos esta nueva situación parece haber devuelto a la guerra una motivación e incluso una dignidad que había perdido, si alguna vez tuvo una. Añádase el vacío dejado por lo que se suele definir como «el fin de las ideologías», vacío que ha sido llenado por el nacimiento y la multiplicación de antiguas

creencias y nuevos fundamentalismos. Hoy en la India gobierna una coalición de la que forman parte los fundamentalistas hindúes y Pakistán se proclama república «islámica». La amenaza de una reanudación del conflicto entre estos dos estados, donde viven más de mil millones de seres humanos y que recientemente han construido una bomba atómica, no puede no constituir un motivo de alarma. En otros lugares, como en Argelia y en el Afganistán de los talibán, la intolerancia fundamentalista ya ha hecho correr ríos de sangre. Y tampoco otras partes del mundo pueden considerarse libres del contagio. ¿Cómo explicar de otra manera la reciente, rabiosa y alarmada reacción de los gobernantes chinos contra la secta de Falun Gong? ¿O la proliferación de nuevas sectas en los países del rico Occidente? En nuestras pantallas televisivas aparecen cada vez con mayor frecuencia ceremonias religiosas y militares. ¡Qué lejano nos parece hoy el optimismo del informe Brandt o de los discursos de Gorbachov!

Y si pasamos de la geografía política a la humana, el cuadro se presenta igualmente más rico en sombras que en luces. Periódicamente, las Naciones Unidas publican un informe sobre el desarrollo humano que contiene, entre otras cosas, una serie de tablas en las que algunos de los indicadores más significativos en términos de «desarrollo humano» se ponen en comparación con los datos correlativos de los países del Norte. El material estadístico que nos ofrecen debe ser manejado con prudencia y evitando generalizaciones apresuradas. Porque los desequilibrios que se observan entre los varios países del Sur son sumamente relevantes. Por poner un ejemplo, los índices relativos a la esperanza de vida y a la mortalidad infantil en 1990 corresponden, para las Islas Barbados, primer país de la lista, ambos a un número superior a 100* –es decir, superiores al índice total de los países de Norte–, los del último país de la lista, Guinea, corresponden, respectivamente, a 58 y 78. Por lo demás, los propios redactores de las estadísticas de la ONU operan una distinción entre los países del Sur del mundo con un alto desarrollo humano (entre ellos algunos de los mayores países sudamericanos, como Uruguay, Chile, Argentina, México y Venezuela), países con desarrollo humano mediano (por ejemplo Brasil, China, Turquía, Siria, Irán y Argelia) y por último países con bajo desarrollo humano (entre ellos, la gran mayoría de los países del África subsahariana, Egipto, la India, Nigeria y Bangladesh).

Sea como fuere, con estas cautelas merece la pena adentrarnos en el análisis de estas tablas para hacer algún comentario. El primero se refiere a aquellos indicadores que ponen de manifiesto una disminución del diferencial

* Todas las cifras consideradas en este párrafo toman como medida el índice de los países del Norte = 100. Por consiguiente, cuanto más pequeñas son estas cifras, tanto mayor es el desnivel con el Norte, y viceversa. El informe a que nos referimos es el de 1992 (*Human Development Report*, Nueva York-Oxford, 1992).

(*narrowing gap*) entre los países del Sur y los del Norte. El dato de la primera columna es el, básico, de la esperanza de vida en el momento del nacimiento, que nos atestigua que, entre 1960 y 1990, el diferencial para el conjunto de los países del Sur ha pasado de un índice de 67 a uno de 84, es decir, se ha reducido de forma significativa respecto al índice de los países del Norte. Naturalmente, aquí también las diferencias entre los distintos países son considerables: se pasa de un índice de 100 para Venezuela y Costa Rica, en 1990, a un índice de 61 de Angola y Etiopía, 57 de Afganistán y 56 de Sierra Leona, en la misma fecha. Una análoga disminución del *gap* se registra también en lo que se refiere a la mortalidad infantil, cuyo índice total pasa de 88 en 1960 a 90 en 1990, y para la alfabetización de los adultos, que sube de 48 a 66. En cambio, es más diferenciado el dato relativo al consumo diario de calorías: si el índice total respecto a los países de Norte también se ha reducido, pasando de 73 a 81, el de los países con menor nivel de desarrollo ha aumentado, pasando de 70 a 65 y el de los países subsaharianos, de 74 a 66. Pero en conjunto el cuadro evidencia una disminución de las distancias.

Sin embargo, existe una segunda tabla en la que se toman en consideración aquellos indicadores que testimonian una ampliación del diferencial entre Norte y Sur (*widening gap*). El principal es, naturalmente, el del Producto Interior Bruto *per capita*. Aquí el deterioro no sólo es evidente, sino dramático: entre 1960 y 1990, el índice total ha pasado de 17 a 15; el de los países menos desarrollados, de 9 a 5; y el del África subsahariana, de 14 a 8. Otros datos contenidos en una tercera tabla confirman esencialmente este distanciamiento. Por cada cien médicos que existían en los países del Norte en 1984, sólo había diez en los del Sur; por cada cien técnicos y científicos en 1985-1989, once; por cada cien mujeres alfabetizadas, cincuenta y cinco; por cada cien radios, diecisiete y por cada cien teléfonos, seis.

Y sin embargo, a pesar de todo ello, el mundo en el que vivimos es cada vez más un mundo interdependiente. Es más: la interdependencia ha alcanzado aquella «fase suprema» que se define corrientemente con los términos de «mundialización», «globalización», «aldea global». Como todos los neologismos, también la «globalización» tiene sus apologistas y sus detractores. Los primeros, al observar el citado informe de las Naciones Unidas, atraerán complacidos vuestra atención sobre la tabla que pone de manifiesto, con evidencia estadística, que las diferencias entre los países desarrollados del Norte y los que están en vías de desarrollo del Sur se han reducido en lo que se refiere a esperanza de vida, alfabetización, consumo de calorías, mortalidad infantil y acceso al agua potable. Los segundos, por contra, atraerán vuestra atención sobre la otra tabla, la que atestigua que estas mismas diferencias se han ampliado en términos de escolarización superior, gasto para la investigación y el desarrollo, número de técnicos y científicos, de teléfonos y radios y, sobre todo, de renta *per capita*. Ambos, tanto los entusiastas

del «progreso» como los catastrofistas, tienen pues, sus razones, pero ambos también se equivocan en parte. Por lo tanto, conformémonos con constatar que cuanto más tiempo viven los hombres, se nutren mejor y aprenden más, tanto más aumentan sus necesidades y sus exigencias de satisfacerlas, y que cuanto más las condiciones básicas de supervivencia tienden a nivelarse, tanto más visibles e intolerables se hacen los desequilibrios y desigualdades de las condiciones de vida, de *status* y de oportunidades.

Prescindiendo de juicios de valor, tanto los optimistas como los pesimistas deben tomar nota de la realidad de la mundialización como de algo que es parte integrante de nuestra cotidianidad. Lo experimentan diariamente los operadores y las abejas industriosas de la aldea global, para quienes la jornada no es el período de tiempo que va del amanecer a la puesta del sol, sino el que media entre la apertura de la Bolsa de Tokio y la clausura de la de Wall Street. Confiemos en su testimonio y evitemos repetir cosas trilladas o hacer consideraciones banales sobre satélites, ordenadores o Internet.

Pero una aldea global no es necesariamente una comunidad idílica donde todos se conocen y se quieren. También puede ser un nido de rivalidades, trampas, venganzas. Para que no lo sea, hace falta que sea gobernado. Vuelve a plantearse, pues, tras el fin de la guerra fría –que, aunque fría, no ha dejado de ser una guerra, con un vencedor y un vencido– aquella aspiración a un nuevo orden internacional que ya se había dejado sentir al final del primero y del segundo conflicto mundial, y con ella vuelve a plantearse el asunto del papel de los Estados Unidos en este nuevo orden. En efecto, es evidente que se trata de un papel y de un concurso fundamentales. Nunca como en este fin de siglo y de milenio, la potencia militar norteamericana ha sido tan aplastante. La guerra del Golfo lo ha demostrado ampliamente. En el aspecto económico, los años noventa, a diferencia de lo que había sucedido durante las dos décadas anteriores, han sido para Estados Unidos una década de desarrollo prácticamente ininterrumpido y las cotizaciones de la Bolsa de Wall Street, tras el gran susto de 1987, han experimentado, y siguen experimentando, un alza constante. Por contra, para los países de la Unión Europea, sumidos en los problemas del desempleo y de la reforma del *welfare state*, y para Japón, los años noventa han sido años de coyuntura fluctuante y de dificultades estructurales, lo que ha contribuido a reforzar el dólar, que más que nunca sigue siendo la moneda de referencia internacional. Un nuevo orden internacional, pues, es algo inconcebible sin los Estados Unidos, y en el mundo después de la guerra fría el antiamericanismo tiene tan poco sentido como el anticomunismo.

El panorama del mundo que hemos someramente esbozado en estas páginas de recapitulación, nos induce, por otra parte, a opinar que no existe ningún país en el mundo, por muy grandes que puedan ser sus recursos económicos y culturales, que esté en condiciones de gobernar, él solo, un plane-

ta marcado por tan profundas desigualdades, un mundo tan complejo y conflictivo como el que habitamos. Ni siquiera con el recurso a la fuerza militar. En efecto, es discutible que las guerras del Golfo y de Kosovo hayan conseguido los resultados políticos que los Estados Unidos y sus aliados se proponían, y es todavía mas discutible que haya reducido y mucho menos puesto fin a los conflictos latentes en Oriente Medio y a las tensiones étnicas de los Balcanes.

Entonces, ¿quién podrá cumplir con aquella función de gobierno mundial que ansiaba Einstein después de Hiroshima y cuya idea de vez en cuando vuelve a aflorar en el debate político? ¿Acaso una Organización de las Naciones Unidas reformada y un Consejo de Seguridad más representativo que el actual? ¿O un directorio y una coalición de grandes potencias, de inspiración rankiana? ¿O, en fin, la de un gobierno mundial no es más que una utopía?

A estos interrogantes el historiador no tiene una respuesta. Sólo puede hacer votos para que, de la reconstrucción que ha intentado de la historia de nuestro siglo, el lector pueda recabar alguna enseñanza.

Esta obra, publicada por Editorial Crítica,
se acabó de imprimir en los talleres de
A & M Gràfic el 10 de noviembre de 2004